



I LEGISLATURA

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO

AÑO 3

México, D. F., a 30 de diciembre de 1999.

No 35

SESION ORDINARIA

PRESIDENTE

C. DIPUTADO RENE BALDOMERO RODRIGUEZ RUIZ

SUMARIO

LISTA DE ASISTENCIA.	Pag. 5
DECLARACION DE QUORUM.	Pag. 5
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.	Pag. 6
ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO, PARA PROPONER AL PLENO LA INTEGRACION DE LA COMISION PARA EL OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA AL MERITO CIUDADANO.	Pag. 8
INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY ORGANICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTA EL DIPUTADO GUILLERMO HERNANDEZ REYEZ, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.	Pag. 9
SOLICITUD DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA QUE SE AMPLIE EL PLAZO QUE TIENE PARA DICTAMINAR LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO QUE LE HA SIDO TURNADA POR EL PLENO.	Pag. 12

Continúa el sumario en la pagina 2.

DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE NOTARIADO, CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY DE NOTARIADO DEL DISTRITO FEDERAL.	Pag. 12
DISCUSION Y EN CASO, APROBACION DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE ATENCION A LA TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS, CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL.	Pag. 72
DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA LOCAL, CON PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS A LA LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN EL DISTRITO FEDERAL.	Pag. 97
DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE ADMINISTRACION Y PROCURACION DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS AL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.	Pag. 142
DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE FOMENTO CULTURAL, CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO URBANISTICO ARQUITECTONICO DEL DISTRITO FEDERAL.	Pag. 148
DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES AL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL AÑO 2000.	Pag. 175
DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN QUE. PRESENTA LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY DE INGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2000.	Pag. 262
DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2000.	Pag. 283
PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA CONSTITUCION DE UNA COMISION ESPECIAL DE FISCALIZACION DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, ENCARGADA DE VIGILAR QUE NO SE DESVIEN RECURSOS PUBLICOS EN EL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2000, QUE PRESENTA EL DIPUTADO ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN.	Pag. 341

ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO RELATIVO A LA CONFORMACION DE LA DIPUTACION PERMANENTE QUE FUNCIONARA DURANTE EL PRIMER PERIODO DE RECESOS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ILEGISLATURA.	Pag. 343
DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN QUE. PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACION PUBLICA LOCAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMATICA, CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL DISTRITO FEDERAL.	Pag. 345
DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DEL ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO, RELATIVO A LA RATIFICACION DEL NOMBRAMIENTO HECHO A FAVOR DEL CIUDADANO JUAN NICASIO GUERRA OCHOA, COMO DELEGADO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA.	Pag. 354
DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DEL ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO, RELATIVO A LA RATIFICACION DEL NOMBRAMIENTO HECHO A FAVOR DEL CIUDADANO VICTOR MANUEL QUINTANA SILVEYRA, COMO DELEGADO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN GUSTAVO A. MADERO.	Pag. 357
RENDICION DE PROTESTA DEL CIUDADANO JUAN NICASIO GUERRA OCHOA, COMO DELEGADO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA.	Pag. 363
RENDICION DE PROTESTA DEL CIUDADANO VICTOR MANUEL QUINTANA SILVEYRA, COMO DELEGADO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN GUSTAVO A. MADERO.	Pag. 363
DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE ADMINISTRACION Y PROCURACION DE JUSTICIA, PARA LA RATIFICACION DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO RAUL ARMIDA REYES, COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.	Pag. 364
DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE ADMINISTRACION Y PROCURACION DE JUSTICIA, PARA LA RATIFICACION DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO ANTONIO CASAS CADENA, COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.	Pag. 369
RENDICION DE PROTESTA DEL CIUDADANO RAUL ARMIDA REYES, COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.	Pag. 372
RENDICION DE PROTESTA DEL CIUDADANO ANTONIO CASAS CADENA, COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.	Pag. 373

Continúa el sumario en la página 4

A las 12:15

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RENE BALDOMERO RODRIGUEZ.- Proceda la secretaría a pasar lista de asistencia a las ciudadanas y ciudadanos diputados.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA YOLANDA TELLO MONDRAGON.- Se va a proceder a pasar lista de asistencia.

(Lista de asistencia)

¿Faltó alguna ciudadana diputada o ciudadano diputado de pasar lista de asistencia?

Señor Presidente, hay una asistencia de 53 diputados. Hay quórum.

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.

Sírvase la secretaría dar lectura al orden del día.

LA C. SECRETARIA.- Sesión ordinaria. 30 de diciembre de 1999.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Acuerdo de la Comisión de Gobierno, para proponer al pleno la integración de la Comisión para el Otorgamiento de la Medalla al Mérito Ciudadano.
4. Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que presenta el diputado Guillermo Hernández Reyes, del Partido de la Revolución Democrática.
5. Solicitud de la Comisión de Seguridad Pública, para que se amplíe el plazo que tiene para dictaminar la propuesta de punto de acuerdo que le ha sido turnada por el pleno.
6. Discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Notariado, con proyecto de decreto de Ley de Notariado del Distrito Federal.
7. Discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Atención a la Tercera Edad, Jubilados y Pensionados, con proyecto de decreto de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal.
8. Discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Administración Pública Local, con

proyecto de decreto de reformas a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal.

9. Discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con proyecto de decreto de reformas al Código Penal del Distrito Federal.

10. Discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con proyecto de decreto de reformas a la Ley del Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia en el Distrito Federal.

11. Discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con proyecto de decreto de reformas a la Ley de Justicia Cívica del Distrito Federal.

12. Discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Fomento Cultural con proyecto de decreto de Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

13. Discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano y Establecimiento de Reservas Territoriales, con proyecto de decreto que modifica los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano en el Distrito Federal, en la Delegación Tlalpan.

14. Discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas, de Administración Pública Local y de Ciencia Tecnología e Informática, con proyecto de decreto de Ley del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.

15. Acuerdo de la Comisión de Gobierno relativo a la Diputación Permanente.

16. Discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas, de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal para el año 2000.

17. Discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2000.

18. Discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas, de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de Presupuesto

de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal del año 2000.

19. Discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Gobierno, para ratificar el nombramiento hecho a favor del ciudadano Juan Nicasio Guerra Ochoa, como Delegado del Distrito Federal en Milpa Alta.

20. Discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Gobierno, para ratificar el nombramiento hecho a favor del ciudadano Víctor Manuel Quintana Silveyra, como Delegado del Distrito Federal en Gustavo A. Madero.

21. Discusión y en su caso aprobación de los dictámenes que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, relativos a la ratificación de Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

22. Clausura del primer período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Primera Legislatura.

Los demás asuntos con los que dé cuenta la secretaria.

Cumplida su instrucción, señor Presidente.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA SARA LYGEIA MURUA HERNANDEZ.- Se solicita a la secretaria dar cuenta a la Asamblea con el acta de la sesión anterior.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, esta secretaria le informa que ha sido repartida el acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, en los términos del artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, por lo que se solicita su autorización para preguntarle al pleno de la Asamblea si es de aprobarse.

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, señora secretaria.

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra y en votación económica se pregunta al pleno de la Asamblea si es de aprobarse el acta de referencia.

Los que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, favor de ponerse de pie.
Aprobada el acta, señora Presidenta.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, I LEGISLATURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE

DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.

**PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
RENE BALDOMERO RODRIGUEZ RUIZ**

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos, del día veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, la presidencia declara abierta la sesión, toda vez que la secretaria certifica una asistencia de 56 ciudadanos diputados y que existe quórum.

Enseguida, la secretaria da lectura al orden del día, y habiéndose repartido el acta de la sesión anterior, en los términos del artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, sin que motive debate y en votación económica, se aprueba.

A continuación la presidencia informa que ha recibido diversas iniciativas de reformas a Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y de Programas Parciales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que remite la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, Licenciada Rosario Robles Berlanga, por instrucciones de la presidencia la secretaria da lectura a los oficios mediante los cuales se remiten dichas iniciativas.

La presidencia resuelve: Túrñense para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Urbano y Establecimiento de Reservas Territoriales.

Enseguida para presentar una iniciativa de Ley del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, la presidencia concede el uso de la palabra al diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del Partido de la Revolución Democrática.

La presidencia resuelve: Túrñese para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, e insértese en el Diario de los Debates de esta Asamblea.

Acto seguido para presentar una iniciativa de decreto de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en relación a la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la presidencia concede el uso de la palabra al diputado Pablo de Anda Márquez, del Partido Acción Nacional.

La presidencia resuelve: Túrñese para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias.

A continuación para presentar una iniciativa de decreto de Ley por la que se crea el Instituto para el Desarrollo Humano y la Salud Mental en el Distrito Federal, la

presidencia concede el uso de la palabra al diputado Pablo de Anda Márquez, del Partido Acción Nacional.

La presidencia resuelve Túrnese para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social, De Desarrollo Social y de Administración Pública Local.

Durante la intervención del diputado Pablo de Anda Márquez, la presidenta pide al público asistente y a los ciudadanos diputados poner atención al orador.

Enseguida la presidencia informa que ha recibido de la Comisión de Atención a la Tercera Edad, Jubilados y Pensionados el dictamen con proyecto de decreto de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, así como de la Comisión de Fomento Cultural, el dictamen con proyecto de decreto de Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, instruyendo a la secretaria proceda a la repartición de los dictámenes de referencia, lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 38 fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Vivienda, con proyecto de Decreto de Ley de Vivienda del Distrito Federal.

Toda vez que se ha dado cumplimiento a lo que establece el artículo 38 fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; sin que motive debate y en votación económica, se dispensa su lectura.

Para fundamentar el dictamen por la Comisión dictaminadora hace uso de la palabra el diputado Rodolfo Pichardo Mendoza.

Puesto a discusión el dictamen, para razonar su voto hacen uso de la palabra hasta por veinte minutos los diputados Arne Sidney Aus Den Ruthen Hagg, del Partido Acción Nacional y Rodolfo Pichardo Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática.

Para alusiones personales hacen uso de la palabra hasta por cinco minutos los diputados Arne Sidney Aus Den Ruthen Hagg, del Partido Acción Nacional, y Rodolfo Pichardo Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática.

Antes de recoger la votación nominal del dictamen en lo general, se pregunta a los ciudadanos diputados si habrán de reservarse algún artículo para su discusión en lo particular.

Acto seguido desde su curul hace uso de la palabra el diputado Rodolfo Pichardo Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática, para reservarse los siguientes artículos: 4, 14, 30, 36, 45, 46, 49 y 50

Enseguida se procede a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados en lo particular. Con el siguiente resultado: 46 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones.

La presidencia resuelve: Aprobado el dictamen que presenta la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto de Ley de Vivienda del Distrito Federal, en lo general y los artículos no reservados en lo particular.

Para referirse a los artículos que se reservó, la presidencia concede el uso de la palabra al diputado Rodolfo Pichardo Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática.

Puestas a discusión las propuestas de modificación a los artículos reservados por el diputado Rodolfo Pichardo Mendoza, no habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaria procede a recoger la votación nominal de los artículos reservados, con el siguiente resultado: 48 votos a favor, 0 en contra y 11 abstenciones.

La presidencia resuelve: Se aprueban las propuestas de modificación a los artículos reservados por el diputado Rodolfo Pichardo Mendoza.

En consecuencia se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto de Ley de Vivienda del Distrito Federal, en lo general y en lo particular con las propuestas aprobadas. Remítase a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, para los efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto de Reformas a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.

En virtud de que dicho dictamen ha sido repartido a las ciudadanas y ciudadanos diputados en los términos del artículo 38, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sin que motive debate y en votación económica, se dispensa su lectura.

Para fundamentar el dictamen por la Comisión dictaminadora hace uso de la palabra el diputado Rodolfo Pichardo Mendoza.

Puesto a discusión el dictamen, para razonar su voto hace uso de la palabra el diputados Arne Sidney Aus Den Ruthen Hagg, del Partido Acción Nacional

Durante la intervención del diputado Arne Sidney Aus Den Ruthen Haag, la presidencia con fundamento en el artículo 36 fracción XI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pide al público asistente guardar el orden y poner atención al orador en turno.

Enseguida desde su curul el diputado Rodolfo Pichardo Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática, hace uso de la palabra para formular una aclaración por parte de la Comisión dictaminadora al dictamen que se encuentra a discusión para efectos de que en las reformas y adiciones a la Ley de Condóminos, se mantengan los artículos 8, 12, 14 y 68 como lo marca la ley actual, lo anterior a fin de evitar alguna confusión que se pudiera presentar, asimismo da lectura al texto del artículo 72, fracción I, manifestando que éstas no entrarían como reservas, sino como aclaraciones.

Acto seguido desde su curul la diputada Ana Luisa Cárdenas Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, hace uso de la palabra para corregir al orador, toda vez que es el artículo 77 fracción I, en lugar del 72 fracción I, al que hizo referencia.

En virtud de que no se presentaron reservas de artículos para su discusión en lo particular, por instrucciones de la presidencia la secretaría procede a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un sólo acto, con el siguiente resultado: 45 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones.

La presidencia resuelve: En consecuencia se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto de Reformas a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, en lo general y en lo particular. Remítase a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, para los efectos constitucionales.

A continuación para presentar una propuesta de punto de acuerdo para solicitar a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, la información relacionada con el proyecto Temazcaltepec y sus diversas alternativas de abastecimiento de agua para la Ciudad de México, así como la promoción del uso racional del agua, hace uso de la tribuna el diputado Pablo de Anda Márquez, del Partido Acción Nacional.

La presidencia resuelve: Túrnese para su análisis y dictamen a la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos.

Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al orden del día de la próxima sesión. Siendo las catorce horas con cincuenta minutos, la presidencia levanta la sesión y cita para los trabajos que tendrán lugar el próximo día 30 de los corrientes a las once horas.

LA C. PRESIDENTA.- *Sírvase la secretaría dar lectura al acuerdo de la Comisión de Gobierno relativo a la propuesta de la Comisión Especial para el Otorgamiento de la Medalla al Mérito Ciudadano del Año 2000.*

LA C. SECRETARIA.-

ACUERDO

Unico.- Se integra la Comisión Especial que tendrá por objeto emitir la convocatoria para proponer a los candidatos a recibir la Medalla al Mérito Ciudadano que esta Asamblea otorgará en el año 2000, así como conocer y estudiar las propuestas de los candidatos que se presenten, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente que se presentará para la aprobación del pleno y las demás facultades que le otorga el Reglamento de la Medalla al Mérito Ciudadano, en los siguientes términos:

Presidente: Diputado Miguel Bortolini Castillo

Vocales: Diputado Rafael López de la Cerda

Diputada Elvira Albarrán Rodríguez

Diputada Margarita Saldaña Hernández

Diputado José Alfonso Rivera Domínguez

Diputado José Luis Benítez Gil

Diputado René Baldomero Rodríguez Ruiz

Dado en la sala de sesiones de la Comisión de Gobierno a los 30 días del mes de diciembre de 1999.

Firman: Diputado Martí Batres Guadarrama, diputado Manuel Aguilera Gómez, diputado Miguel Hernández Labastida, diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, diputado José Narro Céspedes, diputado René Arce Islas, diputada Yolanda Tello Mondragón, diputado Francisco Ortiz Ayala.

Cumplida su instrucción, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- *En virtud de que la propuesta de la Comisión de Gobierno se encuentra suscrita por los integrantes de la misma, consulte la Secretaría en votación económica a la Asamblea si es de aprobarse.*

LA C. SECRETARIA.- *Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta al pleno si es de aprobarse la propuesta de la Comisión de Gobierno.*

Los que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Aprobada, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En los términos del artículo 6 del Reglamento de la Medalla al Mérito Ciudadano de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se designa la Comisión Especial encargada del otorgamiento de la Medalla al Mérito Ciudadano del Año 2000 integrada por los siguientes diputados: Miguel Bortolini, René Baldomero Rodríguez Ruiz, José Luis Benítez Gil, José Alfonso Rivera Domínguez, Margarita Saldaña Hernández, Elvira Albarrán Rodríguez, Rafael López de la Cerda.

Para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Hernández Reyes, del Partido de la Revolución Democrática.

EI C. DIPUTADO GUILLERMO HERNANDEZ REYES.- Con su permiso, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, señor diputado. Antes de que inicie, le solicitamos al público asistente y a los diputados que se encuentran en este recinto, guarden silencio y pongan atención para escuchar al orador.

EL C. DIPUTADO GUILLERMO HERNANDEZ REYES.- Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal; señoras y señores diputados:

El suscrito, diputado Guillermo Hernández Reyes, a nombre de la Comisión de Deporte y Recreación de esta Asamblea, con fundamento en los artículos 122, base primera, fracción V, inciso 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 fracción 16 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 10 fracción I, 11, 17 fracción V, 49 fracción I, 51 y 73 de la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y 10 fracción I, 11, 12, 16, 79, 83 y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito someter ante esta soberanía la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se reforma y adiciona el capítulo cuarto de las comisiones, en su artículo 49 al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con el objeto de integrar a la cultura física a los principios y tareas de la Comisión de Deporte y Recreación permitiendo gestar una mayor integralidad en la construcción de los programas y proyectos que en la esfera del Poder Ejecutivo tenga cabida la iniciativa que se contempla en el primer término el cambio de denominación de la Comisión de Deporte, Juventud y Recreación como se mantiene en el precepto legal referido por el de Comisión de Deporte, Cultura Física y Recreación, atendiendo además a la redistribución de comisiones.

En la actualidad el Gobierno de la Ciudad, mediante la Secretaría de Desarrollo Social y su órgano desconcentrado, Instituto del Deporte, se ha preocupado por impulsar de manera integral la política deportiva en el contexto del desarrollo social y teniendo como antecedentes la consulta sobre el documento marco de la política social llevada a cabo en los meses de mayo a julio de 1998, con la creación de importantes instancias de consulta, como son los consejeros de desarrollo social, el promotor para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad, el de asistencia y prevención de la violencia intrafamiliar y desde luego el de deporte; estos últimos con sus respectivos consejos delegacionales.

Además, las diversas opiniones recibidas en las mesas de trabajo en la primera y segunda semana del deporte de la Comisión de Deporte y Recreación de esta Asamblea Legislativa, nos ha permitido obtener un criterio mucho más amplio en cuanto a la importancia de la actividad física, en la formación integral de las nuevas generaciones. La dramática fragilidad del tejido social en la capital del país, enfrenta una grave reducción en los ingresos económicos y de calidad de vida, también empobrecimiento moral y psicológico que se manifiesta en la destrucción de los núcleos comunitarios y en el deterioro de las relaciones familiares; la miseria material y la crisis de valores son el abono de la desintegración. El embarazo temprano, las adicciones, precarización del trabajo, el ocio improductivo, la soledad, el abandono, la exclusión y la sensación social de incertidumbre e inseguridad, siguen su avance y su más avanzado crecimiento no sólo en nuestra ciudad. Hoy nuestra sociedad es en consecuencia menos armónica, se observan fracturas en las redes y relaciones de solidaridad, hay una pérdida de confianza en instituciones clave como la familia y la escuela y no se diga en el gobierno.

En este sentido, la cultura física es la clave del proceso de reconstrucción del tejido social. La falta de acceso a los beneficios que ofrece la vida urbana, los espacios culturales, recreativos y deportivos, las áreas verdes y los puntos de encuentro en el barrio y la colonia nos hace obligatoria su incorporación al campo de lo institucional, pues la cultura física produce una interacción efectiva entre los sujetos de una comunidad.

El Distrito Federal ha sufrido una profunda transformación en su perfil urbano, un proceso de despoblamiento en las zonas céntricas de la ciudad y un explosivo y crecimiento en la periferia, así como presiones demográficas en algunas delegaciones intermedias. Tan sólo entre 1990 y 1995 las 4 delegaciones del centro de la ciudad: Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc, registraron una disminución de 8.8% en su población.

Por el contrario, en las delegaciones del sur y oriente se dieron aumentos significativos de población como; Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, que registraron incrementos superiores al 20%.

Las colonias populares se desarrollaron ampliamente en la periferia del Distrito Federal; es frecuente encontrar conjuntos que rebasan 250 unidades, que si bien cuentan con equipamiento urbano, mínimamente necesarios para el funcionamiento de la propia comunidad. En las colonias populares, principalmente ubicadas en el entorno del Distrito Federal, es notable su déficit de infraestructura, cultura, recreativa y deportiva, así como de salud y educación, ya que la mayor concentración de la infraestructura se atiende en las delegaciones centrales.

En los últimos años, las sociedad urbana ha mostrado una intensa movilidad y se han ido diluyendo los esquemas de protección comunitaria; las familias han cambiado su inconformación al ser cada vez mayor la proporción de familias nucleares; estos son algunos de los rasgos que hoy en día caracterizan a la ciudad capitalina.

Por ello hemos dado tanto énfasis en trabajar hacia la reconstrucción del tejido social y las reglas de convivencia entre ciudadanos en un marco de corresponsabilidad, gobierno, sociedad.

La dinámica urbana de la ciudad de México, ofrece multiplicidad de oportunidades, estímulo y productos de distinta naturaleza que incluyen desde una oferta televisiva que provoca una tendencia de miles de niños y adultos que se quedan por horas en el televisor presenciando programas sin contenidos; ningún contenido tanto educativo ni cultural e incluso morales, hasta una oferta en aumento de estimulantes que atenta contra la salud y la convivencia social.

Igualmente encontramos grupos que acuden a los últimos avances en materia de tecnología e informática, en tanto que otros no cuentan si quiera con los productos y juguetes más sencillos para la recreación.

En este contexto, el deporte, pero sobre todo la cultura física como elemento formativo permitirá coadyuvar la tarea de reconstrucción del tejido social. A través del ejercicio físico y la práctica del deporte el individuo entra en contacto con su medio natural y social.

Dar formalidad al concepto y promoción de la cultura física, traerá como consecuencia un enriquecimiento en dos vertientes. Por un lado, el individuo aumenta sus capacidades físicas y mentales; por otro, fortalece su relaciones sociales al sentirse a sí mismo miembro de una comunidad o grupo al interactuar con sus semejantes.

Exhorto al ejecutivo local y sus órganos correlacionados en la materia para que juntos impulsen integralmente la cultura física, como pilar del desarrollo humano a través de los planes y programas que diseñen.

En la política social de la ciudad de México, se concibe el deporte como un instrumento central para la construcción de la ciudadanía, en donde se privilegia una oferta de actividades que permitan a cualquier persona un ejercicio físico acorde a su edad, capacidades y sus necesidades, permitiéndole una vida saludable, activa, positiva y constructiva.

Además del aspecto formativo y pedagógico en la actividad física, se requiere que esta comisión con el cambio de denominación de la misma, impulse y permita centrar a discusión y las bases para que la cultura física se entienda como una tradición social, pilar en la construcción de nuestra política orientando hacia acciones que coadyuven gradualmente a modificar actitudes que se expresen en conductas cotidianas positivas y permita reafirmar los valores de identidad, respeto, autoestima, solidaridad, colaboración y cohesión social, no sólo en la medida que los presupuestos disponibles permitan trabajar en acciones encaminadas a la recuperación y el reacondicionamiento de la infraestructura deportiva, procurando promover el desarrollo de acciones conjuntas entre el gobierno central del Distrito Federal, las delegaciones y las organizaciones vecinales; deben ser catalogadas como integrales; Además la promoción de la organización y difusión de actividades deportivas, como en el mantenimiento de los servicios y de los espacios, desde una visión formativa.

Dará mejores resultados en lo familiar, lo socioeconómico y lo deportivo; el deporte y la recreación son actividades vitales para los seres humanos y deben siempre definirse en términos de un contexto social.

Un número importante de actividades deportivas se dan de manera espontánea entre grupos de individuos más o menos homogéneos con el contexto de la vida social y comunitaria.

Por esta razón, nuestro esfuerzo está en sentido de considerar como una formidable palanca de desarrollo de las personas a la práctica del deporte y el ejercicio físico, incorporando su aspecto pedagógico, metodológico en su enseñanza, promoción y vinculación en el escenario social, no sólo el aspecto normativo de los profesionales de escuelas técnico-deportivas y de actividades físicas. Es suficiente, al no compartirse en la ciudadanía.

Se requiere una política social por parte del gobierno, promotora de la cultura física que invite y aliente a las

personas para llevar a cabo cualquier actividad deportiva, de modo competitivo o recreativo. Esta propuesta fortalecería el programa de atención a infantes menores de seis años, a fin de estimular en los niños desde temprana edad, la cultura del deporte.

Con ello se pretende también que los niños y niñas desarrollen actividades que contribuyan tanto a su desarrollo físico y psicológico como social. Aquí está nuestra justificación básica.

Las nuevas generaciones forman un grupo de población de alta prioridad en la política deportiva. Ello ha permitido una elevada participación de la juventud en eventos y torneos selectivos para formar la delegación del Distrito Federal, como sucedió en la Olimpiada Juvenil de 1998, habiendo competido un total de 38 mil jóvenes, de los cuales fueron seleccionados mil 323 atletas, mismos que lograron el primer lugar nacional para el Distrito Federal, tanto en la categoría varonil como femenil y en la olimpiada del presente año, en los eventos selectivos participaron más de 200 mil jóvenes en las justas de selecciones de deportistas.

También se reforzó la actividad que se ofrece a jóvenes y niños en las 138 escuelas técnico-deportivas que se ubican en instalaciones que coordina el área central del gobierno en sus 38 disciplinas, no sin olvidar la importancia de que esta cultura física en el marco de referencia, integre también a todas las ramas del deporte en sus diversas disciplinas.

El gobierno capitalino, con este espíritu inició actividades de enseñanza deportiva especial en 20 escuelas técnico-deportivas y recreativas especiales, que están beneficiando a niños y niñas y jóvenes principalmente.

Como una actividad permanente se lleva a cabo la capacitación de promotores deportivos, instructores, árbitros, jueces y población en general de las 16 delegaciones, a través de la escuela técnico-deportiva en dos modalidades, mediante el desarrollo de conferencias o bien a través de cursos, talleres y seminarios.

El Gobierno de la Ciudad de México se apoya en la promoción, fomento, desarrollo deportivo, en el Consejo del Deporte del Distrito Federal, que es un importante órgano de consulta y concertación de acciones. En el mismo contexto se han instalado y se encuentran operando 13 comités delegacionales del deporte.

El Gobierno del Distrito Federal ya inició esta integración, se han diseñado y elaborado cursos y técnicas de enseñanza y aprendizaje para el deporte, lo cual tiene como objetivo para normar y sistematizar métodos y conocimientos didácticos, evaluación pedagógica y

programas de formación y capacitación para los técnicos, entrenadores y profesores que trabajan frente a grupos deportivos, dentro de las instalaciones del Instituto del Deporte.

Con la reconversión del personal del Gobierno del Distrito Federal, en facilitadores deportivos que puedan enriquecer la oferta en esta materia, en el marco del sistema de servicios comunitarios integrados, la necesidad de impulsar la integración referida, es mayor.

Si bien es evidente que la Ciudad de México tiene grandes problemas por resolver, también encierra una rica historia, tradiciones, cultura, infraestructura urbana y capacidades económicas de resonancia mundial.

Se han dado pasos decisivos en la relación gobierno-sociedad en la práctica administrativa, basada en la honradez, el rendimiento de cuentas y en la lucha contra la pobreza económica y moral de la sociedad, y en este esfuerzo el deporte ha jugado un papel destacado.

Ante este panorama, en el campo legislativo nos corresponde impulsar marcos legales concurrentes con la esfera administrativa. Por consiguiente presento el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo Único.- Se reforma y adiciona el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para quedar como sigue:

Artículo 49.- Las comisiones ordinarias serán las siguientes:

I.- Abasto y Distribución de Alimentos; Administración Pública Local; Administración y Procuración de Justicia; Atención Especial a Grupos Vulnerables; Ciencia, Tecnología e Informática; Deporte, Cultura Física y Recreación; ...

II.- ...

Firman la presente: Diputado Guillermo Hernández Reyes; diputada María de los Angeles Correa de Lucio; diputado Francisco Serna Alvarado; diputado René Rodríguez Ruiz.

LA C. PRESIDENTA.- Túrnese para su análisis y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias.

Sírvase la secretaría dar lectura a la solicitud de la Comisión de Seguridad Pública, para ampliar el plazo que tiene para

dictaminar la propuesta de punto de acuerdo relativa a la Seguridad Pública en el Distrito Federal.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a dar lectura a la solicitud de la Comisión de Seguridad Pública.

México, Distrito Federal, 28 de diciembre de 1999. Diputado René Baldomero Rodríguez, Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Presente.

En sesión celebrada el pasado 25 de noviembre fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Seguridad Pública para su análisis y dictamen la propuesta de acuerdo relativa a la seguridad pública en el Distrito Federal, presentada por el diputado Armando Salinas Torre.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública envió los oficios ST 0128/99 y ST 132/99 de fechas 26 de noviembre y el 15 de diciembre del año en curso respectivamente al diputado Antonio Padierna Luna, Vicepresidente en funciones de Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, proponiéndole fecha para que se reunieran ambas comisiones a efecto de discutir y aprobar el dictamen correspondiente al punto de acuerdo en comento, para que en tiempo y forma fuera presentado ante el pleno de la honorable Asamblea. No obstante ello, la Mesa Directiva de la Comisión de Seguridad Pública no ha obtenido respuesta alguna y por consiguiente no hemos podido sesionar las Comisiones Unidas.

En virtud de lo anterior y de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicitamos a la Mesa Directiva que consulte al pleno se le conceda a la Comisión de Seguridad Pública una prórroga para la entrega del dictamen del punto de acuerdo mencionado. Asimismo, que en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, con fundamento en el citado precepto legal, realice una excitativa a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para que se elabore el dictamen correspondiente.

Atentamente, diputado Armando Salinas Torre, Presidente; diputado Alfonso Rivera Domínguez, Secretario.

Cumplida su instrucción señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En los términos de los artículos 22 y 68 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, proceda la secretaría a preguntar al pleno en votación económica, si se autoriza la ampliación del plazo que solicita la Comisión de Seguridad Pública.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta al pleno de la Asamblea si se autoriza la ampliación del plazo que solicita la Comisión de Seguridad Pública.

Los que estén por que se autorice, favor de manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie.

Se autoriza señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Hágase del conocimiento de la Comisión de Seguridad Pública.

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Notariado con proyecto de decreto de Ley del Notariado del Distrito Federal.

Esta Presidencia informa que ha recibido un oficio de la Comisión de Notariado solicitando que se le dispense el trámite a que se refiere el artículo 38, fracción VI de la Ley de Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sírvasse la secretaría dar lectura a la solicitud de referencia.

LA C. SECRETARIA.- México, Distrito Federal, a 28 de diciembre de 1999.

Diputado René Baldomero Rodríguez Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante el mes de diciembre. Presente.

Por medio del presente le envío el dictamen con proyecto de Ley de Notariado del Distrito Federal, aprobado el día de hoy por la Comisión de Notariado de esta Primera Legislatura, para efecto de su presentación ante el pleno, solicitándole se ponga a consideración del mismo la dispensa del procedimiento a que se refiere el artículo 38, fracción VI de la Ley de Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el objeto de que discuta dicho proyecto en la próxima sesión.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente, diputado Ricardo Molina Teodoro, Presidente.

Cumplida su instrucción, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, proceda la secretaría a preguntar al pleno de la Asamblea, en votación económica, si se dispensa al dictamen de la Comisión de Notariado el trámite a que se refiere el artículo 38, fracción VI de la Ley de Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta al pleno si se dispensa el trámite a que se refiere el artículo 38, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al dictamen de referencia.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Se dispensa el trámite, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Consulte la secretaria, en votación económica, si se dispensa la lectura del mismo y se somete a discusión de inmediato.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura y se somete a discusión de inmediato.

Los que estén por la dispensa de la lectura, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Dispensada la lectura, señora Presidenta.

COMISION DE NOTARIADO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Notariado de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura, se han remitido, para su estudio y dictamen, dos Iniciativas relativas a la Ley del Notariado del Distrito Federal. Se trata de proyectos que fueron presentados, conforme a su orden cronológico, por la Diputada Irma Islas León, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, y suscrita por los integrantes de ese Grupo Parlamentario; y la diversa, presentada por los Diputados Ricardo Molina Teodoro, Hipólito Bravo López y Rigoberto Fidencio Nieto López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. De conformidad con lo establecido por el Artículo 67, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal vigente, toda iniciativa de Ley, presentada por quienes tienen derecho a esa potestad, pasará a Comisión, la cual deberá revisar, estudiar, analizar y reformar, en su caso, la Iniciativa y formular su correspondiente dictamen.

Esta Comisión, conforme a las facultades que le confieren los artículos 122, Apartado C, Base Primera, Fracción V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y artículo 42, Fracción XII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en relación con el procedimiento establecido por el Artículo 84 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; así como por las previsiones contenidas en los Artículos 18, segundo párrafo; 20, 22, 23, 28, 67, 68 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal vigente, se dedicó a la revisión, estudio y análisis de las Iniciativas de mérito y a la elaboración del dictamen correspondiente, tomando en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1.- En fecha 26 de noviembre de 1998, el Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura, turnó a esta Comisión de Notariado, para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Ley del Notariado para el Distrito Federal del Partido de Acción Nacional. Posteriormente, en el mes de enero de 1999, el mismo Grupo Parlamentario hizo llegar a esta Comisión la versión corregida de dicha Iniciativa.

2.- En fecha 30 de abril de 1999, la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, turnó a esta Comisión de Notariado, para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Ley del Notariado para el Distrito Federal presentada por los CC. Diputados Ricardo Molina Teodoro, Hipólito Bravo López y Rigoberto Fidencio Nieto López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

3.- En el lapso de tiempo que media entre las fechas señaladas en los dos párrafos que anteceden, con fecha 16 de abril del año en curso, la Comisión de Notariado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura, reunida en sesión ordinaria de trabajo acordó, respecto de la primera de las Iniciativas listadas y ante el anuncio de la inminente presentación de la segunda de dichas iniciativas, iniciar diversos trabajos previos de estudio y consulta con los sectores interesados, sobre la problemática notarial, con el fin de obtener elementos e insumos necesarios para dictaminar conjuntamente las Iniciativas en cuestión.

4.- Posteriormente, en fecha 23 de noviembre último, la Comisión de Notariado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura, reunida en sesión ordinaria de trabajo acordó, por el voto unánime de sus integrantes presentes, turnar a los integrantes de la Mesa Directiva de esta Comisión las dos Iniciativas de mérito para su estudio y dictamen, tomando en cuenta, además, que de los estudios y consultas realizados se cuentan con un proyecto que sintetiza los contenidos básicos de las dos Iniciativas en estudio, por lo que priva entre los integrantes de la Comisión de Notariado la percepción de que existen ya

condiciones para discutir y, en su caso, aprobar el dictamen conjunto que sobre las dos iniciativas de la especie elabore a la brevedad la Mesa Directiva de la Comisión de Notariado.

5.- Es esa virtud, en fecha 28 de diciembre, reunida en sesión ordinaria de trabajo convocada en tiempo y forma para tal fin, la Comisión de Notariado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura, después de haber analizado estricta y exhaustivamente el proyecto de dictamen conjunto que sobre las Iniciativas citadas fue presentado a consideración de sus integrantes y luego de valorar las observaciones puntuales que sobre dicho proyecto formularon los mismos, aprobó el siguiente dictamen, que hoy sometemos a la consideración del H. Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura, bajo los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de agosto de 1998, reconoció la potestad legislativa exclusiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia de Notariado, según lo previene el inciso h), fracción V, de la Base Primera, Apartado C, de su Artículo 122. El mismo precepto citado previene que dicha potestad legislativa la ejercerá la Asamblea "en los términos del Estatuto de Gobierno", y este último Ordenamiento, por su parte, en su Artículo 36 establece que la función legislativa del Distrito Federal corresponde a la Asamblea Legislativa en las materias que expresamente le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en su Artículo 42, el Estatuto de Gobierno reproduce, en su Fracción XII, el mismo conjunto de materias legislativa reconocidas por el inciso h) del numeral 122 Constitucional citado.

De esta manera se establece el entorno normativo de esta potestad legislativa, que hace posible a esta I Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal asumir el mandato constitucional de legislar en materia del Notariado de la Ciudad de México y sentar las bases para conformar una nueva normatividad para la dación de fe pública y también para que mediante ellas, el acto legislativo otorgue a la sociedad un nuevo Ordenamiento ordinario y común para su Notariado, con el cual la sociedad obtenga mayor certeza y seguridad jurídicas respecto de los actos y documentos que respaldan y protegen sus derechos y su interactuar en el ámbito privado; y desde esta nueva Ley, se establezcan las bases normativas idóneas, mediante las cuales sea posible reconstruir la institucionalidad que merece la actuación profesional del Notariado de la Ciudad; se dignifique su actuación social y el ejercicio mismo de este oficio profesional a cargo de ciudadanos letrados en Derecho.

Este dictamen, en su parte normativa, se refiere al 'Notariado' como una Garantía Institucional de origen constitucional: porque entendiendo al Notariado como garantía institucional es posible sistematizar –desde la Ley y sus reglamentos– un conjunto de normas que se refieren a reglas, pero también a principios, estructuras, procedimientos y funciones, mediante las cuales se organiza, no solamente el régimen jurídico-normativo propio de la dación de fe pública, sino también las garantías sociales que dicho régimen conlleva. Asimismo, a la acción reguladora de las instituciones de Gobierno vinculadas directamente con el ejercicio de la función pública notarial; a la institución profesional y civil que agrupa y concita al conjunto de Notarios como su instancia de representación ante la sociedad, como es el Colegio de Notarios del Distrito Federal, y a otras diversas instituciones auxiliares de la función notarial, como lo son el Archivo General de Notarías, y el Decanato del Notariado del Distrito Federal.

Por otra parte, al concebir al Notariado como una Garantía Institucional sistematizada por la Ley, con carácter de orden e interés público y social, este dictamen en su parte normativa articula diversos presupuestos normativos que se orientan hacia la consolidación de un notariado cuya actuación estará regulada por una Ley caracterizada como de orden e interés público y social.

Al igual que diversos países que han adoptado el 'sistema de notariado latino', la producción legislativa mexicana de esta materia reconoce en el notariado a una institución cuyo carácter –desde el punto de vista de su regulaciones de orden público. Asimismo, que las actuaciones notariales se integran en un conjunto de funciones, procedimientos y estructuras que constituyen en sí mismas un sistema complejo, por ser generadoras de instrumentos que la Ley eleva a la categoría de instrumentos públicos, por provenir el sujeto autorizado por el Estado, quien mediante el otorgamiento de la patente de notario concede a dicho sujeto, por razón de la selección de su persona, la cualidad jurídica de notario.

Segundo.- Los aspectos anteriormente apuntados son tomados en cuenta por las dos Iniciativas sujetas a dictamen, en sus respectivas exposiciones de motivos.

La Iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone lo que se reproduce, en lo conducente: "(...) Por un lado se ha requerido de una institución que garantice la certeza de los actos y de los hechos, para lo cual se ha desarrollado la institución de la fe pública como atributo del Estado y por otro lado ha sido necesario desarrollar instituciones que se encarguen de aplicarla a los casos concretos que se presentan en la vida cotidiana. Una de ellas en nuestro país es el notariado mexicano por el que se enviste al notario de fe pública".

Y más adelante, la Iniciativa en cita define sintéticamente sus propósitos fundamentales, cuando dice: "La presente iniciativa de Ley del Notariado para el Distrito Federal propone reformar integralmente la Ley vigente para darle un mejor orden a su contenido temático, actualizar sus normas, avanzar en materia de simplificación administrativa, impulsar la subsidiariedad, enriquecer y desarrollar su contenido, establecer condiciones para que el notariado pueda brindar un mejor servicio, y mejorar las condiciones de seguridad jurídica para los interesados."

La Iniciativa de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el apartado correlativo de motivos, por su parte, manifiesta que: "(...) respecto de la materia notarial, los ciudadanos de la Ciudad de México, Distrito Federal, nos encontramos con el hecho de que, por primera vez en la historia moderna de las instituciones públicas estatales de gobierno de nuestra Ciudad, existe un Órgano Legislativo local, que goza de la legitimidad y representatividad propia de una Institución pública emergida del Estado de Derecho, que tiene frente a sí la tarea de llevar a cabo —con base a sus facultades legislativas— la revisión profunda del marco jurídico que regula el ejercicio de la dación de fe pública a los actos o hechos realizados por los particulares en su interactuar en sociedad, mediante el ejercicio de la función notarial."

En ulterior apartado, la Iniciativa en cita precisa el sentido de su propuesta diciendo lo siguiente: "(...) salta a la orden de atención del legislador una cuestión que reviste importancia central para los propósitos de esta Iniciativa, que nos impone la nueva realidad normativa descrita, y que consiste en la necesidad de reestructurar las relaciones entre la administración pública y el ejercicio de la función notarial, con el interés de armonizar las necesidades de desarrollo y modernización de la función notarial con la consolidación de las instituciones democráticas de gobierno de la Ciudad y modernización de la Administración Pública local. Este es el sentido de la presente Iniciativa."

De lo antes expuesto, este dictamen colige que el sentido de complementariedad que observan en este punto las Iniciativas en estudio estriba en que, por una parte, mientras la primera Iniciativa a dictaminar acentúa el carácter institucional de la función notarial y la necesidad objetiva de su reforma, en términos de su actualización normativa; la segunda Iniciativa en estudio, de inicio privilegia la nueva realidad legislativa existente hoy en la Ciudad y enfatiza la necesidad de prudente ejercicio de las atribuciones que las reformas constitucionales otorgan al Órgano de Gobierno encargado de ejercer la función legislativa en el ámbito local, respecto de la materia notarial.

Se encuentran así definidos los dos referentes o ejes fundacionales, a partir de los cuales se generan y

encuentran sentido las propuestas normativas reguladoras del Notariado, de la función notarial y de su ejercicio en el ámbito de nuestra Ciudad, que este dictamen pretende actualizar, aplicando un método abierto, comparativo y propositivo, retomando de ambas Iniciativas los elementos que juzga pertinentes para tal finalidad.

Tercero.— *Si bien es común en ambas iniciativas en estudio el interés por reformar el ordenamiento notarial a partir de la caracterización tanto de la función notarial como del Notariado y por una adecuada sistematización normativa de estas nociones que sea diversa respecto de la que prevalece en la Ley vigente; sin demérito de ambos esfuerzos, interesa a este dictamen orientar el tratamiento correcto que merecen ambas categorías normativo-explicativas de la dación de fe pública delegada por el Estado a profesionales del derecho independientes como son los notarios.*

Para ello, se considera oportuno situar al Notariado, desde la perspectiva de su configuración como materia y facultad legislativa limitada al sentido preciso del término; esto es, como contenido particular, materia específica, dentro de un orden de potestades legislativas taxativamente determinado por el precepto constitucional; pero también, en esa misma medida, como materia reservada a la potestad legislativa —constitucionalmente determinada— del Órgano de Gobierno encargado de ejercer la función legislativa en el Distrito Federal.

En efecto, como bien lo ubican ambas iniciativas, desde la reforma Constitucional del 25 de octubre de 1993, por la que se reformó radicalmente el contenido del Artículo 122 de la Carta Magna, para establecer ahí las bases constitucionales que en adelante regirían la vida política institucional del gobierno de esta Ciudad, hasta la reforma al mismo precepto constitucional del 22 de agosto de 1996, en Notariado ha venido apareciendo como materia expresamente conferida a la potestad legislativa de la Asamblea, y por tanto, excluida de ser materia legislativa del Congreso de la Unión.

De ahí, se considera correcto afirmar que el Notariado constituye, junto a otras diversas, no solamente materia exclusiva de la acción legislativa de la Asamblea, sino que además, atendiendo al proceso histórico que da origen y forma jurídica-constitucional, tanto a las potestades legislativas de la Asamblea, las que se encuentran hoy reservadas en el Apartado C, Base Primera, Fracción V, incisos del a) al o), del Artículo 122 Constitucional, como a la conformación misma de los órganos de Gobierno encargados de las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, en el ámbito local, es indudable que la materia que nos ocupa está inscrita en un sistema normativo constitucional instituyente y garante, tanto de Órganos como de funciones, todos relativos a la vida institucional

de la entidad federativa que es la Ciudad de México, Distrito Federal.

Además de ubicarse durante los últimos siete años como materia legislativa y constitucionalmente determinada y reservada, el Notariado y la actividad notarial, por sí mismos, constituyen —como acertadamente señala el proyecto del PAN— “una institución” que garantiza “una plena certeza y seguridad jurídica respecto de los actos jurídicos” que realiza los particulares. Esta institución ha estado presente desde tiempos remotos en la vida nacional. En la modernidad, el Notariado mexicano existe formando parte de la corriente mundial del Derecho Notarial que se ubica bajo la denominación de Notariado Latino; de ahí que cuando la Constitución habla de “notariado”, debe entenderse que se refiere a la expresión mexicana del notariado latino.

Por ello, en este dictamen nos parece que para tratar adecuadamente la Notariado y a la función notarial, debe asumirse desde la ley el rango constitucional de la materia, y reconocer que tanto la materia (el notariado) como la función (notarial) constituyen una garantía institucional de origen constitucional en el derecho mexicano; y así, al hablar de notariado y de función notarial, debe reconocerse que ambas nociones encuentran su sentido y desempeño concreto a partir de su pertenencia al espacio propio de las materias de derecho común que la Norma Suprema tutela, reservándolas a la esfera de acción legislativa propia del Órgano legislativo local.

Cuarto.— Desde La perspectiva apuntada en el considerando anterior, este dictamen retoma, en lo general, la estructura temática que ambas iniciativas en estudio presenta, pero las mejora desde su Título Primero, al reordenar los conceptos propios de la materia; al recuperar, en beneficio de la ley, los principios regulatorios e interpretativos vigentes en la teoría y doctrina jurídicas propias del notariado latino, los que si bien ya existen asumidos por la teoría notarial mexicana, por razones extrajurídicas se habían mantenido alejados del texto legal; al restablecer adecuadamente el régimen de equilibrio, colaboración, complementariedad y esfera de acción propias, que debe prevalecer entre las autoridades competentes de la materia y el órgano colegiado del notariado de la Ciudad, en beneficio de la eficaz y expedita prestación de los servicios notariales para la sociedad demandante de los mismos.

Así, en esta Iniciativa, resultante del estudio de los dos proyectos en dictamen, el Título Primero, “De la Función Notarial y Del Notariado de la Ciudad de México”, se divide en dos Capítulos, cada uno de los cuales se compone de dos secciones.

En el Capítulo I, denominado “El Notariado Como Garantía Institucional”, la sección primera contiene las

disposiciones generales por las que, entre otras, se define el objeto, que es el regular a la función notarial y al Notariado de la Ciudad, así como el carácter de la Ley, determinándolo de orden e interés público y social; atendiendo a la naturaleza compleja que presenta la función notarial en las sociedades contemporáneas en las que se desempeña bajo la tradición jurídica del notariado latino: la acción fehaciente del Estado, en el ámbito de la vida civil de la sociedad, se realiza mediante la función notarial. La naturaleza compleja de ésta estriba en que, por una parte, se trata de una función pública, en cuanto que proviene de los poderes del Estado y de la Ley misma —la que reconoce el carácter público y social de los instrumentos notariales—; por otra parte, el sujeto encargado de desempeñarla es un particular, que en sociedad ejerce la profesión liberal de abogado, y quien —previo cumplimiento de requisitos de Ley— está calificado por el Estado para ejercerla, de manera profesional, imparcial, colegiada y libre.

En los términos de lo previsto por la Constitución, el Estatuto de Gobierno y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, se reconoce la potestad del Jefe de Gobierno del Distrito Federal de otorgar las patentes de Notario y la de la autoridad competente para la aplicación y supervisión del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia notarial, actualmente a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno local.

Se caracteriza el tipo de ejercicio profesional del derecho a cargo del Notario como un oficio jurídico específico, por virtud del cual este sujeto calificado interviene imparcialmente, asesorando y dando forma legal a la voluntad de quienes ante él acuden; conformando la documentación requerida, en lo justo concreto del caso; en el marco de la equidad y legalidad prevista por el Estado Constitucional de Derecho y en consecuencia, sus instrumentos notariales —escrituras, actas, testimonios, copias certificadas y certificaciones— reciben el reconocimiento legal y la fuerza del Estado, y por ende, otorgan la protección, seguridad y certeza jurídicas que reclaman los particulares para sus actos, materializándolos mediante la actividad documentadora realizada por el Notario.

Esta Iniciativa reconoce y define los principios regulatorios e imperativos del ejercicio de la función notarial, en su doble aspecto: en el que atañe a la actividad misma del Notario en el desempeño de su oficio jurídico y al que se refiere al producto de dicha actividad, el que se plasma en los documentos emitidos por el Notario. Así se reconocen los siguientes principios:

a).— El de conservación jurídica, que atañe tanto al fondo como a la forma que deben observar los instrumentos notariales para producir sus efectos adecuados;

b).- El de conservación y matricidad del instrumento notarial;

c).- El de la concepción del Notariado y de la función notarial como garantías institucionales, en razón de los valores, principios y rangos de actuación que esta Ley señala;

d).- El de la preservación del carácter de orden público de la función notarial, según las condiciones y alcances de su intervención y de la regulación de la misma por las autoridades competentes, en los términos que la Ley previene.

Se establece un régimen de responsabilidad compartida entre el Colegio y las autoridades, con objeto de garantizar la prestación del servicio notarial en forma eficaz y expedita para todos los habitantes de la Ciudad. Aquí, como en otros diversos contenidos similares contemplados por esta Iniciativa, priva el criterio de legislar con un sentido de reconocimiento y fomento de relaciones de complementariedad corresponsable que debe existir entre las dos instancias directamente vinculadas con la materia notarial, como lo son las autoridades competentes y el Órgano colegiado del notariado local.

Por todo lo anterior, esta Comisión de Notariado, en ejercicio de las facultades que le confieren los 122, Apartado C, Base Primera, Fracción V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por el Artículo 42, Fracción XII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por el Artículo 84 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y por los numerales 18, segundo párrafo, 20, 22, 23, 28, 67 y 68 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a la consideración del H. Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, el siguiente DICTAMEN con proyecto de Decreto de:

LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL

TÍTULO PRIMERO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL Y DEL NOTARIADO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO I EL NOTARIADO COMO GARANTÍA INSTITUCIONAL

Sección Primera Disposiciones Generales

Artículo 1.- El objeto de esta Ley es regular, con carácter de orden e interés público y social la función notarial y al notariado en el Distrito Federal.

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. "Administración": La Administración Pública del Distrito Federal;

II. "Arancel": El Arancel de notarios para el Distrito Federal;

III. "Archivo": El Archivo General de Notarias, cuyos fines señala esta Ley;

IV. «Archivo Judicial»: El Archivo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal;

V. "Asamblea Legislativa": La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

VI. "Autoridades competentes": La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, por sí, o a través de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos y las direcciones y subdirecciones competentes de ésta, salvo que por el contexto de esta ley deba entenderse adicional o exclusivamente otra autoridad;

VII. "Código Civil": El Código Civil vigente para el Distrito Federal;

VIII. "Código de Procedimientos": El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal;

IX. "Código Penal": El Código Penal para el Distrito Federal;

X. "Colegio": El Colegio de Notarios del Distrito Federal, A.C.;

XI. "Comisión de Honor y Justicia" o "Comisión": La Comisión de Honor y Justicia del Colegio a través de su Junta de Decanos;

XII. "Comisión de Notariado": Comisión de Notariado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

XIII. "Consejo": El Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal, A.C.;

XIV. "Constitución": La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XV. "Esta Ley": La Ley del Notariado para el Distrito Federal;

XVI. "Folio" o "Folios": El folio o folios oficiales para ejercer la función notarial por parte de los Notarios del Distrito Federal. Aquellas hojas que constituyen la papelería oficial, por ser el sustrato -la base material- del instrumento público notarial en términos de esta ley;

XVII. "Función notarial": Es la actividad que el notario realiza conforme a las disposiciones de esta ley. Posee una naturaleza compleja: Es pública, en cuanto proviene de los poderes del Estado y de la Ley, que obran en reconocimiento público de la actividad profesional del Notario y de la documentación notarial al servicio de la sociedad. De otra parte, es autónoma y libre, para el Notario que la ejerce, actuando con fe pública;

XVIII. "Gaceta": La Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal;

XIX. "Ley Orgánica": La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal;

XX. "Notariado": El Notariado del Distrito Federal o Notariado de la Ciudad de México bajo el sistema del Notariado Latino.

XXI. "Registro Público": El Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal;

XXII. «Uteralteridad»: Actitud y procedimiento de asesoría notarial y de conformación del instrumento notarial por parte del Notario, que va más allá de una simple imparcialidad, llevando al Notario a ser verdadero consultor o consejero de cada parte, con atención personal y entrega cuidadosa, de forma tal que se cubran los requisitos de asesoría para cada una de las partes o solicitantes del servicio, sin descuidar los de la contraparte, ni ser parcial contra ella, sino ejerciendo hacia ella la misma actitud.

Artículo 3.- *En el Distrito Federal corresponde al Notariado el ejercicio de la función notarial, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución.*

El Notariado es una garantía institucional que la Constitución establece para la Ciudad de México, a través de la reserva y determinación de facultades de la Asamblea y es tarea de esta regularla y efectuar sobre ella una supervisión legislativa por medio de su Comisión de Notariado.

El Notariado como garantía institucional consiste en el sistema que, en el marco del notariado latino, esta ley organiza la función del notario como un tipo de ejercicio profesional del Derecho y establece las condiciones necesarias para su correcto ejercicio imparcial, calificado, colegiado y libre, en términos de Ley.

Su imparcialidad y probidad debe extenderse a todos los actos en los que intervenga de acuerdo con ésta y con otras leyes.

Artículo 4.- *Corresponde al Jefe de Gobierno la facultad de expedir las patentes de notario y de aspirante a notario, conforme a las disposiciones contenidas en la presente ley.*

Artículo 5.- *A las autoridades competentes del Distrito Federal les corresponde aplicar la presente ley y vigilar su debido cumplimiento.*

Artículo 6.- *Esta Ley regula el tipo de ejercicio profesional del derecho como oficio jurídico consistente en que el Notario, en virtud de su asesoría y conformación imparcial de su documentación en lo justo concreto del caso, en el marco de la equidad y el Estado Constitucional de Derecho y de la legalidad derivada del mismo, reciba por fuerza legal del Estado el reconocimiento público y social de sus instrumentos notariales con las finalidades de protección de la seguridad jurídica de los otorgantes y solicitantes de su actividad documentadora.*

Artículo 7.- *Esta Ley establece como principios regulatorios e interpretativos de la función y documentación notarial:*

I.- El de la conservación jurídica de fondo y forma del instrumento notarial y de su efecto adecuado;

II.- El de la conservación del instrumento notarial y de la matricidad en todo tiempo del mismo;

III.- El de la concepción del Notariado como Garantía Institucional;

IV.- Estar al servicio del bien y la paz jurídicos de la Ciudad y del respeto y cumplimiento del Derecho;

V.- El ejercicio de la actividad notarial, en la justa medida en que se requiera por los prestatarios del servicio, obrando con estricto apego a la legalidad aplicable al caso concreto, de manera imparcial, preventiva, voluntaria y auxiliar de la administración de justicia, respecto de asuntos en que no haya contienda;

VI.- El del cuidado del carácter de orden público de la función y su documentación en virtud del otorgamiento de la cualidad para dar fe, por el Jefe de Gobierno, a su actividad como Notario por la expedición de la patente respectiva, previos exámenes que merezcan tal reconocimiento público y social por acreditar el saber prudencial y la práctica suficientes para dicha función, con la consecuente pertenencia al Colegio y la coadyuvancia de éste a las funciones disciplinarias de vigilancia y sanción por parte de las autoridades, la continuación del archivo del Notario por el Archivo y la calificación y registro de los documentos públicos reconocidos por esta Ley por el Registro Público, tratándose de actos inscribibles.

Artículo 8.- *Es obligación de las autoridades competentes, del Colegio y de los Notarios, que la población reciba el mejor servicio notarial posible.*

Si las autoridades competentes observan deficiencias, lo comunicarán al colegio para que éste instrumente lo necesario para la expedita solución de las mismas y el eficaz cumplimiento de esa obligación. Para ello y para programas especiales, el Colegio podrá celebrar convenios.

Artículo 9.- *La Administración instrumentará las medidas necesarias para facilitar la actividad notarial a fin de que la prestación del servicio se lleve a cabo en función de los principios a que se refiere el artículo 7 de esta Ley.*

Especial apoyo se ofrecerá, tratándose de programas especiales acordados entre la Administración y el Colegio y de aquellos previstos en los artículos 16 al 19 de esta ley.

Artículo 10.- *El Jefe de Gobierno expedirá el decreto de autorización de nuevas notarías, cuando exista la necesidad del crecimiento del servicio y dicha medida no afecte:*

I. La preparación que deben tener los solicitantes de los exámenes de Aspirante y oposición y el de sus respectivos aprobados y triunfadores; y

II. La imparcialidad, la calidad profesional, la autonomía, la independencia y el sustrato material y económico de los notarios.

El decreto, fundado y motivado, deberá prever un examen de oposición por cada notaría, mediando el tiempo conveniente entre cada convocatoria.

El Jefe de Gobierno podrá solicitar la opinión del colegio para los efectos a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

Artículo 11.- *Los notarios son auxiliares en la administración de justicia. La Asamblea, la Administración, el Tribunal y el Colegio coadyuvarán en el desempeño de esta función.*

Sección Segunda

Garantías Sociales de la Función Notarial:

Prestaciones y Servicio

Artículo 12.- *Toda persona tiene Derecho, en términos de esta ley, al servicio profesional del Notario. El notario está obligado a prestar sus servicios profesionales, cuando para ello fuere requerido por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales, siempre y cuando no exista impedimento legal para realizar el documento notarial solicitado, salvo las causas de excusa a que se refieren los artículos 43 y 44 de esta ley. En los programas*

especiales previstos por esta ley participarán todos los notarios.

Artículo 13.- *El notario ejerce su función sin sometimiento al erario y sin sueldo o iguala del Gobierno o de entidades públicas o privadas, ni favoritismo alguno. La fe pública se ejerce en cada caso concreto.*

Artículo 14.- *De conformidad con los postulados del Notariado Latino incorporado al sistema del Notariado local, en cada instrumento y en la asesoría relativa el Notario deberá proceder conforme a los principios jurídicos y deontológicos de su oficio profesional; consiguientemente, no podrá tratar a una parte como su cliente y a la otra no, sino la consideración será personal y profesionalmente competente por igual desde la buena fe y la asesoría imparcial a cada parte o persona que solicite su servicio. La violación a este artículo ameritará queja.*

Artículo 15.- *Los notarios tendrán derecho a obtener de los prestatarios de sus servicios el pago de honorarios, de acuerdo con el arancel, y de los gastos suficientes que se causen o hayan de causarse.*

Con base en estudios económicos, el colegio propondrá el proyecto de arancel justo y proporcionado y la Administración hará las observaciones pertinentes y fundadas y en su caso, lo aprobará. Entre la presentación del proyecto y su publicación mediará un plazo no mayor de quince días hábiles. Pasado ese plazo se entenderá aprobado totalmente o en la parte no objetada con base objetiva.

Artículo 16.- *Las autoridades podrán requerir de los notarios la prestación de sus servicios para atender asuntos de orden público o de interés social. En estos casos las autoridades y el colegio convendrán los honorarios correspondientes.*

Artículo 17.- *Los notarios participarán también, con tarifas reducidas y convenidas por el Colegio con las autoridades correspondientes, en programas de fomento a la vivienda y regularización de la tenencia de la propiedad inmueble.*

Artículo 18.- *Las autoridades y organismos de vivienda del Distrito Federal, así como los de la Federación, cuando éstos intervengan en actos que tengan por objeto algún inmueble ubicado en el Distrito Federal, requerirán los servicios únicamente de notarios de esta entidad para el otorgamiento de las escrituras relativas. En todo caso, recibidas las instrucciones correspondientes por el colegio, éste turnará a sus miembros dichos asuntos por estricto orden y con apego a la equidad.*

Los instrumentos que se autoricen por notario no designado en cumplimiento al orden estricto a que se refiere el párrafo anterior, serán nulos, en los términos de la fracción II del artículo 162 de esta ley.

Para los efectos de este artículo, los notarios respetarán un estricto orden de insaculación, conforme al siguiente procedimiento:

El titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el titular de la Dirección General de Legalidad y Responsabilidades y el Presidente del Consejo del Colegio, llevarán a cabo la insaculación, depositando en una urna el nombre y número de cada notario de la entidad, en funciones al momento de la insaculación y mantendrán el riguroso orden en que se vayan sorteando. De dicha insaculación se levantará acta pormenorizada que será firmada por las personas mencionadas, debiendo el Consejo, hacerla del conocimiento de todos los miembros del colegio, en un plazo que no excederá de cinco días hábiles siguientes a la fecha de su firma.

Cada nuevo notario se incorporará intercalado en el orden establecido por insaculación, ocupando el turno inmediato siguiente que tenga lugar en el momento de su inicio de ejercicio profesional.

Artículo 19.- *Los Notarios estarán obligados a prestar sus servicios en los casos y en los términos que establezcan los ordenamientos electorales. Las autoridades competentes, con la coadyuvancia del Colegio, a través de su Consejo, y con el auxilio en su caso de la Comisión de Honor y Justicia, estarán muy atentas a cualquier irregularidad a fin de que el servicio notarial en esta materia se preste de la mejor forma posible. En su caso, si así lo pidieren las autoridades o los partidos, los Notarios podrán organizar recorridos para dar fe si es menester, conforme al turno que al efecto establezca el Colegio.*

Artículo 20.- *Las autoridades competentes del Gobierno deberán concentrar la información de las operaciones y actos notariales y procesarla bajo sistemas estadísticos y cibernéticos que permitan regular y fijar, conforme a esta Ley, las modalidades administrativas que requiere la prestación eficaz del servicio notarial. La recopilación de dicha información será de carácter formal y estadístico cuidando la autoridad se respete siempre el secreto profesional y la intimidad negocial.*

Artículo 21.- *La autoridad competente formará expedientes individuales de quienes soliciten examen de aspirante, de los aspirantes y de los notarios, en los que se concentrarán todos los antecedentes relevantes para la prestación del buen servicio; elementos de calificación de actuación y detección de irregularidades; avisos, quejas, procedimientos y demás documentos relacionados; y de*

todos aquellos que hayan defraudado, declarado falsamente, suplantado o ejercido indebidamente funciones notariales en el Distrito Federal o que en asuntos relacionados con ellos hayan incurrido en prácticas ilícitas.

Artículo 22.- *El colegio participará en la conformación y recibirá de parte de las autoridades competentes la información a que se refiere el artículo 20; intercambiará impresiones con dichas autoridades para proveer lo necesario para el mejor servicio notarial. Igualmente el colegio recibirá la información y, en su caso, la documentación a que se refiere el artículo anterior, la cual deberá remitir en copia a la Junta de Decanos para que se provea lo necesario para la mejora del servicio notarial en el Distrito Federal y dé su opinión cuando así lo amerite.*

Artículo 23.- *El colegio orientará a los prestatarios del servicio notarial sobre deficiencias de dicho servicio, con especial referencia a grupos sociales vulnerables y a problemas relacionados con el deber de imparcialidad y atención personal del notario.*

Si la intervención del colegio no fue suficiente para la satisfacción de los derechos del prestatario, a solicitud de éste, el colegio turnará de inmediato los antecedentes a la autoridad, para el trámite que corresponde.

Artículo 24.- *Los expedientes a que se refieren estos artículos están sometidos al secreto profesional y a la protección de la intimidad salvo la denuncia o procedimientos correspondientes que conforme a derecho se tengan que hacer para efectos de las responsabilidades a que haya lugar.*

Artículo 25.- *Las personas de que se trate tendrán derecho de pedir se dé a conocer si conforme al artículo 22 se ha formado algún expediente relativo y los términos respectivos.*

CAPÍTULO II DE LA FUNCIÓN NOTARIAL Y DEL NOTARIADO

Sección Primera De la Función Notarial

Artículo 26.- *La función autenticadora del Notario es personal y en todas sus actuaciones de asesoría, instrumentación y juicio debe conducirse conforme a la prudencia jurídica e imparcialmente.*

Artículo 27.- *Siendo la función notarial de orden e interés públicos, corresponde a la Ley y a las instituciones que contempla procurar las condiciones que garanticen la profesionalidad, la independencia, la imparcialidad y autonomía del Notario en el ejercicio de la fe pública de*

que está investido, a fin de que esta última pueda manifestarse libremente, en beneficio de la certeza y seguridad jurídicas que demanda la sociedad y sin más limitaciones ni formalidades que las previstas por la Ley. En consecuencia, las autoridades administrativas y judiciales proveerán lo conducente para hacer efectiva y expedita la independencia funcional del Notariado, auxiliándole de la misma forma, cuando así lo requiera el Notariado, para el eficaz ejercicio de sus funciones.

Artículo 28.- Las autoridades del Distrito Federal deberán auxiliar a los Notarios en el ejercicio normal de sus funciones cuando los actos concretos de dación de fe así lo requieran. Particularmente la policía y demás autoridades que tengan a su cargo el uso de la fuerza pública, deberán prestar ayuda a los Notarios cuando sean requeridos por ellos.

Se aplicarán las penas que correspondan al delito de abuso de autoridad al servidor público que obstaculice o impida a un Notario el ejercicio de sus funciones o no le preste el auxilio que requiera para esos fines, debiendo prestarlos.

Artículo 29.- Esta Ley reconoce y protege el principio de libertad de elección de notario, en beneficio de la imparcialidad en la relación con las partes y de la ética de la función notarial.

Artículo 30.- El ejercicio de la función notarial y la asesoría jurídica que proporcione el Notario debe ser dada como jurista en actitud de uteralteridad en beneficio de las partes y del orden jurídico justo y equitativo de la Ciudad, y por tanto, incompatible con toda relación de sumisión ante favor, poder o dinero, que afecten su independencia formal o materialmente.

Los pactos de cuota litis a resultados judiciales, fuera de los supuestos del arancel, se consideran ilícitos cuando se hagan para pagar honorarios de instrumentos notariales y su comisión comprobada presuntamente implica práctica desleal sancionable para el Notario, quien por principio profesional da fe objetiva sin interés de resultado.

Artículo 31.- El ejercicio de la función notarial es incompatible con toda restricción de la libertad personal, de las facultades de apreciación y de expresión.

Artículo 32.- Igualmente el ejercicio del oficio notarial es incompatible con toda dependencia a empleo, cargo o comisión público o privado, y con el ejercicio de la profesión de abogado en asuntos en que haya contienda. El notario tampoco podrá ser comerciante, ministro de culto o agente económico de cualquier clase en términos de las leyes respectivas.

Artículo 33.- El notario sí podrá:

I. Aceptar y desempeñar cargos académicos y docentes, de dirección de carrera o institución académica, de beneficencia pública o privada, de colaboración ciudadana y los que desempeñe gratuitamente a personas morales con fines no lucrativos;

II. Representar a su cónyuge, ascendientes o descendientes, por consanguinidad o afinidad y hermanos;

III. Ser tutor, curador y albacea;

IV. Desempeñar el cargo de miembro del consejo de administración, comisario o secretario de sociedades o asociaciones;

V. Resolver consultas jurídicas objetivamente y ser consultor jurídico extranjero emitiendo dictámenes objetivos;

VI. Ser árbitro o secretario en juicio arbitral;

VII. Ser mediador jurídico;

VIII. Ser mediador o conciliador;

IX. Patrocinar a los interesados en los procedimientos judiciales o administrativos necesarios para obtener el registro de escrituras;

X. Intervenir, patrocinar y representar a los interesados en los procedimientos judiciales en los que no haya contienda entre particulares, así como en trámites y procedimientos administrativos; dichas funciones no inhabilitan al Notario para autorizar, en su caso, cualquier instrumento relacionado; y

XI. Actividades semejantes que no causen conflicto ni dependencia que afecte su dación de fe y asesoría imparcial.

Artículo 34.- Corresponde a los Notarios del Distrito Federal el ejercicio de funciones notariales en el ámbito territorial de la entidad. Los Notarios del Distrito Federal no podrán ejercer sus funciones ni establecer oficinas fuera de los límites de éste. Los actos que se celebren ante su fe, podrán referirse a cualquier otro lugar, siempre que se dé cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.

Se prohíbe a quienes no son notarios usar en anuncios al público, en oficinas de servicios o comercios, que den la idea que quien los usa o a quien beneficia realiza trámites o funciones notariales sin ser notario, tales como «asesoría notarial», «trámites notariales», «servicios notariales»,

«escrituras notariales», «actas notariales», así como otros términos semejantes referidos a la función notarial y que deban comprenderse como propios de ésta.

Artículo 35.- Se aplicarán las penas previstas por el artículo 250 del Código Penal a quien, careciendo de la Patente de Notario de Distrito Federal expedida en los términos de esta Ley, realizare en el Distrito Federal alguna de las siguientes conductas:

I.- Ostentarse, anunciarse como tal o inducir a la creencia de que es Notario para ejercer o simular ejercer funciones notariales, o ejercerlas de hecho.

II.- Tener oficina notarial, o lugar donde se realicen actividades notariales o meramente de asesoría notarial o de firmas para instrumentos notariales.

III.- Envíe libros de protocolo o folios a firma al Distrito Federal o realice firmas de escrituras o actas en su demarcación.

Artículo 36.- También se aplicarán las penas previstas por el artículo 250 del Código Penal al que sin ser notario, o siendo notario con patente de otra Entidad distinta del Distrito Federal, introduzca a éste o conserve en su poder, por sí o por interpósita persona, libros de protocolo o de folios de otra entidad, con la finalidad de llevar a cabo actos que únicamente pueden realizar notarios del Distrito Federal.

Artículo 37.- El aspirante a notario, el que haya sido notario del Distrito Federal o el notario suspendido en el ejercicio de su función que realice cualquiera de las conductas previstas en los artículos 35 y 36 de esta ley se hará acreedor al doble de la pena establecida por el artículo 250 del Código Penal.

Artículo 38.- El notario que consienta con las conductas descritas por los artículos 35 y 36 de esta ley, se hará acreedor a la sanción prevista en el artículo anterior.

Artículo 39.- Las autoridades competentes procederán a la clausura de las oficinas o lugares en donde se cometa delito en términos de alguno de los supuestos previstos por los artículos 35, 36 y 37 de esta Ley y donde se viole el artículo 40, independientemente de la sanción personal correspondiente.

Artículo 40.- El notario, para el ejercicio de su función, únicamente podrá establecer una oficina, sin que pueda hacerlo al interior de un despacho de abogados u otros profesionales, empresas u oficinas públicas.

Artículo 41.- La función notarial podrá ejercerse en cualquier día, sea hábil o inhábil y a cualquier hora y

lugar. Sin embargo, la notaría podrá cerrarse en días inhábiles y fuera del horario de trabajo señalado.

Cada notario deberá señalar el horario de trabajo de su oficina, anunciarlo al exterior de la misma y lo informará a las autoridades competentes y al colegio, así como los cambios que hiciere al respecto.

Sección Segunda Del Notario

Artículo 42.- Notario es el profesional del Derecho investido de fe pública por el Estado, y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, y conferir autenticidad y certeza jurídicas a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría.

El notario conserva los instrumentos en el protocolo a su cargo, los reproduce y da fe de ellos. Actúa también como auxiliar de la administración de justicia, como consejero, árbitro o asesor internacional, en los términos que señalen las disposiciones legales relativas.

Artículo 43.- El notario podrá excusarse de actuar en días festivos o en horario que no sea el de su oficina, salvo que el requerimiento sea para el otorgamiento de testamento, siempre y cuando a juicio del propio notario las circunstancias del presunto testador hagan que el otorgamiento sea urgente.

También podrá excusarse de actuar cuando los solicitantes del servicio no le aporten los elementos necesarios o no le anticipen los gastos y honorarios correspondientes.

Artículo 44.- El notario también podrá excusarse al momento si circunstancialmente se encuentra atendiendo otro asunto, mas si la persona decide esperarlo se aplicará el principio de obligatoriedad en términos del artículo 12 con las salvedades del artículo anterior, según el orden de atención que le toque.

Artículo 45.- Queda prohibido a los notarios:

I. Actuar con parcialidad en el ejercicio de sus funciones y en todas las demás actividades que esta ley le señala;

II. Dar fe de actos que dentro de los procedimientos legales respectivos corresponda en exclusiva hacerlo a algún servidor público; sin embargo, sin tener en principio ese valor procedimental exclusivo, sí podrán cotejar cualquier tipo de documentos, registros y archivos públicos y privados o respecto a ellos u otros acontecimientos certificar hechos, situaciones o abstenciones que guarden

personas o cosas relacionadas o concomitantes con averiguaciones, procesos o trámites, lo cual tendrá valor como indicio calificado respecto de los mismos, sujeto a juicio de certeza judicial, y sólo será prueba plena con relación a aspectos que no sean parte esencial de dichas facultades públicas, aspectos que deberá precisar en el instrumento indicado;

III. Actuar como notario en instrumentos o asuntos en que tengan interés, disposición a favor, o intervengan por sí, representados por o en representación de terceros, el propio notario, su cónyuge o parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto y segundo grados, respectivamente, o sus asociados o suplentes y los cónyuges o parientes de ellos en los mismos grados o en asuntos en los cuales tenga esta prohibición el o los notarios asociados, o el notario suplente;

IV. Actuar como notario sin rogación de parte, solicitud de interesado o mandamiento judicial, salvo en los casos previstos en esta Ley;

V. Dar fe de actos, hechos o situaciones con respecto a los cuales haya actuado previamente como abogado;

VI. Dar fe de actos, hechos o situaciones sin haberse identificado plenamente como notario;

VII. Dar fe de manera no objetiva o parcial;

VIII. Ejercer sus funciones si el objeto, el motivo—expresado o conocido por el notario—, o el fin del acto es contrario a la ley o a las buenas costumbres; asimismo si el objeto del acto es física o legalmente imposible;

IX. Recibir y conservar en depósito sumas de dinero, valores o documentos que representen numerario con motivo de los actos o hechos en que intervengan, excepto en los siguientes casos:

a) El dinero o cheques destinados al pago de gastos, impuestos, contribuciones o derechos causados por las actas o escrituras, o relacionados con los objetos de dichos instrumentos;

b) Cheques librados a favor de acreedores en pago de adeudos garantizados con hipoteca u otros actos cuya escritura de extinción vaya a ser autorizada por ellos;

c) Documentos mercantiles y numerario en los que intervengan con motivo de protestos; y

d) En los demás casos en que las leyes así lo permitan.

En los casos señalados en esta fracción, el notario, dará el destino que corresponda a cada cantidad recibida, dentro

de los plazos que señalen las disposiciones legales aplicables; en su defecto, tan pronto proceda.

Artículo 46.- El notario que deje de serlo, quedará impedido para intervenir como abogado en los litigios relacionados con la validez o nulidad de los instrumentos otorgados ante su fe o de sus asociados o suplentes que hayan autorizado el instrumento, salvo que se trate de derecho propio para actuar procesalmente.

TÍTULO SEGUNDO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL

CAPÍTULO I De la Carrera Notarial

Sección Primera Disposiciones Generales

Artículo 47.- La carrera notarial es el sistema que organiza los estudios e investigación de las diversas disciplinas jurídicas dirigidos al mejor desempeño de la función notarial y para la difusión y puesta en práctica de sus principios y valores ético-jurídicos en beneficio de la ciudad.

Artículo 48.- Para la carrera notarial se dispondrán medios para hacer accesible la preparación básica para el examen de aspirante al Notariado a profesionales del Derecho, como condición pública de una mejor competencia profesional para el examen de oposición, de la mejora del nivel jurídico y de la calidad personal y social del servicio notarial, en términos de colaboración entre las autoridades y el colegio, respecto a interesados y a la sociedad en general.

Artículo 49.- La preparación notarial y la difusión de la imparcialidad jurídica y de conocimientos en beneficio del medio jurídico está garantizada por esta Ley, y para ello la Carrera Notarial proporciona condiciones de formación teórica y práctica; formación deontológica y personal suficientes para que mediante exámenes públicos por jurados especialmente cualificados, el profesional del Derecho idóneo para la función notarial pueda acceder a la misma en las mejores condiciones de servicio y de igualdad de acceso en bien de la Ciudad y para la evolución positiva del Notariado.

Artículo 50.- La carrera notarial se regirá por los principios y valores que fundamentan el ejercicio de la fe pública, y especialmente por los principios de excelencia, especialización, legitimación, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, sustentabilidad e independencia.

Artículo 51.- Corresponde a la Administración, al colegio y a sus miembros:

I. Desarrollar la carrera notarial, guardar, cumplir y hacer cumplir la realización de sus principios. En dicho desarrollo podrán participar facultades y escuelas de Derecho e instituciones dedicadas e investigación jurídica;

II. Difundir los instrumentos informativos y formativos para el ejercicio imparcial del derecho preventivo y la dictaminación objetiva, en el desarrollo del Estado Constitucional de Derecho.

Artículo 52.- *Son sujetos de la Carrera Notarial:*

I. El Jefe de Gobierno como otorgante de las patentes de notario y de aspirante en términos de ley;

II. El colegio como organizador y estructurador;

III. Los notarios como ejecutores, y en su caso, como destinatarios en los términos de la fracción V de este artículo;

IV. Las demás partícipes señalados en el artículo que antecede, como coadyuvantes;

V. Como destinatarios:

a) Los propios notarios del Distrito Federal;

b) Los aspirantes a notarios del Distrito Federal; y

c) Los solicitantes de examen de aspirante a notario, los licenciados en Derecho, pasantes o estudiantes de Derecho con la pretensión de adquirir los conocimientos y capacitación para aprobar exámenes, triunfar en oposiciones y ejercer funciones notariales.

Artículo 53.- *Colaborarán y recibirán aportaciones y beneficios de la carrera notarial:*

I.- Como aportantes de experiencia para la mejora de la carrera notarial y beneficiarios de servicios;

II. Los abogados, estudiantes y en general, quienes pretendan recibir formación jurídica, bajo la perspectiva de la imparcialidad preventiva;

III.- Las Barras y Colegios de Abogados, por el enriquecimiento de visiones complementarias a otros tipos de ejercicio del Derecho, y;

IV.- Otros profesionistas, universitarios y en general los prestatarios.

V.- Como personas cercanas en virtud del valor de su conocimiento, opinión y por experiencias de la

imparcialidad, de la contienda jurídica y en virtud de la necesaria complementariedad de actividades:

a) Los miembros del Poder Judicial, y

b) Los litigantes y especialistas profesionales del Derecho procesal.

VI.- Como colaboradores en la realización de los fines del régimen de legalidad, los diversos servidores públicos y en especial los relacionados con la función notarial, el Archivo y el Registro;

VII.- Como sujetos beneficiarios de la asesoría imparcial y el cuidado proporcional del notario:

a) Grupos sociales vulnerables, en especial indígenas; emigrantes; personas con discapacidades y los así considerados por las leyes respectivas ;

b) Personas que requieran asesoría protectora.

c) En general, toda persona que ejerza el Derecho al servicio notarial en términos del artículo 12 de esta Ley

Sección Segunda De los Exámenes

Artículo 54.- *Para solicitar el examen de aspirante a notario, el interesado deberá satisfacer los siguientes requisitos:*

I. Ser mexicano por nacimiento, tener veinticinco años cumplidos y no más de sesenta al momento de solicitar el examen;

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos y gozar de facultades físicas y mentales que no impidan el uso de sus capacidades intelectuales para el ejercicio de la función notarial. Gozar de buena reputación personal y honorabilidad profesional y no ser ministro de culto;

III. Ser profesional del Derecho, con título de abogado o licenciado en Derecho y con cédula profesional;

IV. No estar sujeto a proceso, ni haber sido condenado por sentencia ejecutoriada, por delito intencional;

V. Acreditar cuando menos doce meses de práctica notarial ininterrumpida, bajo la dirección y responsabilidad de algún notario del Distrito Federal, pudiendo mediar un lapso de hasta cien días naturales entre la terminación de dicha práctica y la solicitud del examen correspondiente;

VI. Presentar dicha solicitud por escrito a la autoridad competente en el formulario autorizado al efecto por la

misma, marcando copia al colegio, requisitando los datos y acompañando los documentos que el mismo formulario señale;

VII. Expresar su sometimiento a lo inapelable del fallo del jurado, y

VIII. No estar impedido temporalmente por reprobación al momento en que se vaya a efectuar el examen.

Una vez presentada la solicitud y acreditados los requisitos que anteceden, la autoridad, dentro de los quince días naturales siguientes, comunicará al interesado el día, hora y lugar en que se realizará el examen. Entre dicha comunicación y la fecha del examen no podrán mediar más de treinta días naturales.

De la comunicación señalada en el párrafo que antecede se marcará copia al colegio.

Artículo 55.- Para acreditar los requisitos a que se refieren las fracciones I y III del artículo anterior, el interesado deberá exhibir, junto a su solicitud de examen, las constancias documentales públicas respectivas. Para acreditar los requisitos a que se refieren las fracciones II y IV del artículo anterior, deberá el interesado realizar ante autoridad judicial, con citación del colegio para que intervenga según el caso, la información ad perpetuum prevista en el Código de Procedimientos Civiles. El requisito señalado por la fracción V del Artículo anterior, se acreditará con los avisos sellados del inicio y terminación de la práctica en cuestión, que el notario respectivo deberá dar en tiempo, a la autoridad competente, marcando copia al colegio, así como con los oficios de contestación de dichos avisos. Tales prácticas podrán ser constatadas por la autoridad competente y por el colegio. Para acreditar la buena salud y el pleno uso de sus facultades físicas e intelectuales, el candidato deberá exhibir certificado médico expedido por médico o institución autorizada; certificados que podrán ser constatados por la autoridad competente y por el colegio.

Artículo 56.- Cuando una o varias notarías estuvieren vacantes o se hubiere resuelto crear una o más, la autoridad competente publicará convocatoria para que los aspirantes al ejercicio del notariado presenten el examen de oposición correspondiente. Esta convocatoria será publicada una sola vez en la Gaceta y por dos veces consecutivas con intervalos de tres días en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal. Dicha convocatoria deberá contener los siguientes requisitos:

I. Señalar las fechas, horarios y lugar, relativos al inicio y término del periodo de inscripción al examen. En ningún caso el periodo de inscripción excederá de diez días

naturales, contados a partir de la última publicación de la convocatoria;

II. Precisar el día, hora y lugar en que se practicarán las pruebas teóricas y prácticas;

III. Indicar el número y sede de las notarías vacantes o de nueva creación, y

IV. Señalar la obligación de pagar previamente, los derechos que determine el Código Financiero del Distrito Federal vigente.

Artículo 57.- Para obtener la patente de notario, el profesional del Derecho interesado, además de no estar impedido para presentar examen, conforme a la fracción VIII del artículo 60 de esta ley, deberá:

I. Acreditar los requisitos de calidad profesional, práctica y honorabilidad.

Los requisitos a que se refiere esta fracción, se presumen acreditados en términos de la información ad perpetuum a que se refiere el artículo 55 de esta Ley, salvo que posteriormente se demuestren hechos concretos que hicieran dudar de dicha cualidad, para lo cual con la opinión de la Junta de Decanos y la determinación de la autoridad competente, podrá ser requerida una complementación del procedimiento de información ad perpetuum;

II. Tener patente de aspirante registrada; salvo que la patente no hubiera sido expedida por causas imputables a la autoridad, en cuyo caso bastará acreditar la aprobación del examen con la constancia respectiva que emita el jurado;

III. Solicitar la inscripción al examen de oposición, según la convocatoria expedida por la autoridad y expresar su sometimiento a lo inapelable del fallo del jurado;

IV. Efectuar el pago de los derechos que fije el Código Financiero del Distrito Federal vigente;

V. Obtener el primer lugar en el examen de oposición respectivo, en los términos de los artículos 58 y 60 de esta ley;

VI. Rendir la protesta a que se refiere el artículo 66 de esta ley, lo que implica para quien la realiza la aceptación de la patente respectiva, su habilitación para el ejercicio notarial y su pertenencia al Notariado del Distrito Federal.

Artículo 58.- Los exámenes para obtener la patente de aspirante y la de notario, se regirán por las siguientes reglas comunes:

I. El jurado se compondrá por cinco miembros propietarios o sus suplentes respectivos. El suplente actuará a falta del titular;

II. El jurado estará integrado por:

a) Un Presidente nombrado por el Jefe de Gobierno, que será un jurista prestigiado en disciplinas relacionadas con la materia notarial, pudiendo ser notario;

b) Un secretario, designado por el Colegio y que será el notario de menor antigüedad y se encargará de levantar el acta circunstanciada, la que será conservada, foliada en forma progresiva y consecutiva en el Libro de Registro de Exámenes de Aspirante o en su caso en el Libro de Registro de Exámenes de Oposición, y

c) Tres vocales, de los cuales uno será notario designado por el Colegio y los otros dos serán designados por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, de entre una lista de quince notarios propuesta por el Colegio, para el examen de que se trate.

Los miembros que integren el Jurado no podrán ser cónyuges o parientes del sustentante, ni titulares de la notaría en que el sustentante haya realizado su práctica o prestado servicios, tengan o hubieren tenido alguna relación laboral, de negocios o amistosa con el sustentante o con familiares de éste.

III. Tanto el examen de aspirante como el de oposición, consistirán en dos pruebas aplicables a cada sustentante, una práctica y otra teórica;

IV. Los exámenes, tanto en su prueba escrita como la teórica, se efectuarán en la sede del colegio;

V. La prueba práctica consistirá en la redacción de uno o varios instrumentos notariales específicos del examen de aspirante o específicos de examen de oposición; su tema será sorteado de entre veinte formulados por el colegio y serán sometidos por éste, a la aprobación de la autoridad competente.

La prueba práctica, tanto para los aspirantes como para el examen de oposición, serán colocados en sobres cerrados e irán sellados y firmados por el Director General Jurídico y de Estudios Legislativos o por quien éste designe y por el Presidente del Consejo o por un miembro del colegio que aquél designe;

VI. La prueba práctica se desahogará bajo la vigilancia de un representante de la autoridad competente y otro del colegio, quienes no deberán estar en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II de este artículo; pudiendo auxiliarse los sustentantes, si así lo

desean de un mecanógrafo que no sea licenciado en Derecho, ni tenga estudios en esta materia; el sustentante únicamente podrá estar provisto de leyes y libros de consulta necesarios. Cada uno de los vigilantes deberá comunicar por separado o conjuntamente al jurado las irregularidades que hubiere percibido durante el desarrollo de esta prueba, con copia a la autoridad competente. Si a juicio del jurado, dichas irregularidades no impiden la continuación del examen, para esos efectos se tendrán por no hechas y no cuestionarán ni afectarán el resultado del mismo;

VII. Para la prueba práctica, los sustentantes dispondrán de seis horas corridas;

VIII. Además de la resolución del caso mediante la redacción del instrumento o instrumentos respectivos, como parte de la misma prueba escrita, en pliego aparte, el sustentante deberá razonar y sustentar la solución que dio, expresará especialmente las alternativas de solución que tuvo y las razones en pro y en contra de dichas alternativas y las que apoyen su respuesta e indicará los apoyos legales, jurisprudenciales y doctrinales que pudiere invocar;

IX. La prueba teórica será pública y consistirá en preguntas relacionadas con el tipo de examen relativo;

X. El jurado calificará la resolución de la prueba práctica y efectuará ordenadamente la prueba teórica mediante turno de réplicas, empezando por el notario de menor antigüedad y continuando en orden progresivo de antigüedad de los demás, para terminar con la réplica del presidente;

XI. Cada sinodal podrá hacer en su turno las interpelaciones que sean suficientes para forjarse un criterio cierto de la idoneidad, preparación del sustentante y la calidad de su resolución, ateniéndose principalmente a la resolución jurídica del caso y al criterio jurídico del sustentante. Para ello considerará, además del pliego de alternativas, las respuestas del sustentante, tomando en cuenta el conocimiento que tenga del oficio notarial y la prudencia que demuestre, que sirvan al jurado para normar su criterio. En todo caso el o los instrumentos deberán ser válidos;

XII. A continuación, a puerta cerrada, los integrantes del jurado calificarán individualmente cada prueba, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 59, respecto de los aspirantes al notariado y 60, tratándose de los exámenes de oposición;

XIII. El Secretario levantará el acta correspondiente que deberá ser firmada por los integrantes del jurado;

XIV. El resultado del examen será inapelable; no obstante, toda irregularidad podrá ser denunciada por los observadores a la autoridad competente y al decanato;

XV. El presidente comunicará el resultado y pedirá al secretario lea el resultado del examen;

XVI. Además, el secretario del jurado comunicará a la autoridad competente y al colegio, en no más de una cuartilla, la calificación razonada otorgada a cada sustentante, la cual será firmada por todos los miembros del jurado, en un plazo no mayor de setenta y dos horas a partir de la terminación del examen. En un lapso igual desde la recepción de la comunicación correspondiente, una y otro podrán hacer las observaciones que juzguen convenientes para el perfeccionamiento permanente de los exámenes, y en su caso llamar la atención sobre algún aspecto en concreto. Estas comunicaciones serán confidenciales entre el jurado y los informados, y no darán lugar a instancia o medio de defensa alguno para el sustentante.

Artículo 59.- *Además de regirse por lo anterior, el examen para la obtención de la patente de aspirante al ejercicio del notariado será en un acto continuo. El sustentante elegirá uno de los sobres a que se refiere la fracción V del artículo anterior en presencia de los responsables de vigilar el examen. Inmediatamente después el sustentante abrirá el tema de la prueba práctica y a partir de entonces se cronometrará el tiempo de desarrollo de la prueba escrita. Concluida ésta se iniciará la prueba teórica que será pública y en la que una vez instalado el jurado, el examinado procederá a dar lectura al tema y a su trabajo. Esta prueba consistirá en las preguntas que los miembros del jurado harán al sustentante en términos del artículo anterior, con particular insistencia sobre puntos precisos relacionados con el caso jurídico-notarial a que se refiera el tema sorteado, atendiendo a su validez y efectos.*

Los integrantes del jurado calificarán individualmente al sustentante, de lo que resultará una calificación única, aprobatoria, reprobatoria por unanimidad o reprobatoria por mayoría. Si fuere esta última, el sustentante no podrá presentar nueva solicitud para examen sino pasados seis meses, contados a partir del fallo; si es reprobado por unanimidad, el plazo de espera se extenderá a un año.

Artículo 60.- *El examen para obtener la patente de notario se regirá por las siguientes reglas:*

I. Será uno por cada notaría; en él participarán todos los aspirantes que se hayan inscrito y no podrá llevarse a cabo si no hubiere cuando menos tres opositores inscritos;

II. Para la prueba práctica, se reunirán los aspirantes en el colegio, el día y hora señalados en la convocatoria. En presencia de un representante de la autoridad competente y uno del colegio, alguno de los aspirantes elegirá uno de los sobres que guarden los temas, de entre veinte de ellos, debiendo todos los sustentantes desarrollar el que se haya

elegido; asimismo ahí se sorteará el orden de presentación de los sustentantes a la prueba teórica;

III. Al concluirse la prueba práctica, los responsables de la vigilancia de la prueba recogerán los trabajos hechos; los colocarán en sobres que serán cerrados, firmados por ellos y por el correspondiente sustentante, y se depositarán bajo seguro en el colegio;

IV. La prueba teórica será pública; se iniciará en el colegio el día y hora señalados por la convocatoria. Los aspirantes serán examinados sucesivamente de acuerdo al orden de presentación, resultado del sorteo señalado. Los aspirantes que no se presenten oportunamente a la prueba, perderán su turno y tendrán derecho, en su caso, a presentar el examen en una segunda vuelta, respetando el orden establecido;

V. El Aspirante que no se presente a la segunda vuelta se tendrá por desistido;

VI. Reunido el jurado, cada uno de sus miembros interrogará al sustentante exclusivamente y en profundidad sobre cuestiones de Derecho que sean de aplicación al ejercicio de la función notarial, destacando el sentido de la prudencia jurídica y posteriormente si se considera adecuado se formularán cuestionamientos al caso. Una vez concluida la prueba teórica de cada sustentante, este dará lectura ante el jurado a su trabajo práctico, sin poder hacer aclaración, enmienda o corrección;

VII. Para el desahogo del examen teórico deberán celebrarse cuando menos dos sesiones por semana;

VIII. Concluida la prueba teórica de cada sustentante, los miembros del jurado emitirán separadamente y por escrito, la calificación que cada uno de ellos otorgue a las pruebas, práctica y teórica, en escala numérica del 0 al 100 y promediarán los resultados. La suma de los promedios se dividirá entre cinco para obtener la calificación final, cuyo mínimo para aprobar será el de 70 puntos; los que obtengan calificación inferior a 70, pero no inferior a 65 puntos, podrán presentar nuevo examen tan pronto haya una siguiente oposición, siempre y cuando tuviere satisfechos los requisitos previstos en el artículo 57 de esta ley.

Los aspirantes que obtengan una calificación inferior a 65 puntos, no podrán solicitar nuevo examen de oposición, sino pasado un año a partir de su reprobación.

Quienes desistan antes del tiempo máximo de entrega de la prueba práctica, se entenderá que abandonan el examen y podrán presentar nuevo examen, tan pronto haya una siguiente oposición, siempre y cuando tuviere

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 57 de esta ley.

LX. Será triunfador en la oposición para cubrir la notaría respectiva, el sustentante que haya obtenido la calificación aprobatoria más alta.

Artículo 61.- Como labor de supervisión, los Órganos Locales de Gobierno podrán, si lo estiman conveniente, nombrar uno o más observadores del examen, licenciados en Derecho, quienes podrán emitir opinión sobre su perfeccionamiento, sin que esta tenga efecto vinculatorio con el desarrollo y resultado del examen de que se trate. Dicha opinión la harán del conocimiento de la autoridad competente y del colegio y, en su caso a la junta de decanos, a efecto de que se tomen las medidas necesarias para perfeccionar la práctica y desarrollo de los exámenes. Los observadores designados podrán estar presentes en todas las etapas del examen.

Artículo 62.- Concluidos los exámenes, el Jefe de Gobierno expedirá las patentes de aspirante y de notario, a quien haya resultado aprobado y triunfador en el examen respectivo. En todo caso, de cada patente se expedirán dos ejemplares.

Artículo 63.- El Jefe de Gobierno expedirá las patentes a que se refiere el artículo anterior, y tomará la protesta del fiel desempeño de las funciones del notario, a quien haya resultado triunfador en el examen, en un plazo que no excederá de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de celebración del mismo.

Artículo 64.- Las patentes de aspirante y de notario deberán registrarse ante la autoridad competente, en el Registro Público, en el Archivo y en el colegio, previo pago de los derechos que señale el Código Financiero del Distrito Federal vigente. Una vez registrada una patente, uno de sus ejemplares se entregará a la autoridad competente y el otro lo conservará su titular.

Artículo 65.- Los notarios y los decanos son inamovibles de su cargo, salvo los casos previstos en esta ley. Asimismo la patente de los aspirantes es definitiva y permanente.

CAPÍTULO II DE LA ACTUACIÓN NOTARIAL

Sección Primera Del Inicio de la Actuación Notarial

Artículo 66.- Para que la persona que haya obtenido la patente pueda actuar en ejercicio de la función notarial y pertenecer al colegio, deberá rendir protesta ante el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, o ante quien éste último

delegue dicha atribución, en los siguientes términos:

"Protesto, como notario y como miembro del Colegio de Notarios del Distrito Federal, Asociación Civil, guardar y hacer guardar el Derecho, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las Leyes que de ellos emanen, en particular la Ley del Notariado; y desempeñar objetiva, imparcial, leal y patrióticamente, el ejercicio de la fe pública que se me ha conferido, guardando en todo momento el estricto respeto al Estado Constitucional de Derecho y a los valores ético jurídicos que el mismo comporta, y si así no lo hiciere seré responsable, y pido hoy que en cada caso los particulares a quienes debo servir, las autoridades, el colegio y el decanato, así me lo exijan y demanden, conforme a la ley y sus sanciones".

Artículo 67.- Para que el notario del Distrito Federal pueda actuar, debe:

I. Obtener fianza del colegio a favor de la autoridad competente, por la cantidad que resulte de multiplicar por diez mil, el importe del salario mínimo general diario en el Distrito Federal, vigente a la fecha de la constitución de la misma. Sólo que el colegio, por causa justificada, no otorgue la fianza o la retire, el notario deberá obtenerla de compañía legalmente autorizada por el monto señalado. Dicha fianza deberá mantenerse vigente y actualizarse en el mes de enero de cada año, modificándose en la misma forma en que se haya modificado a esa fecha el salario mínimo de referencia. El notario deberá presentar anualmente del colegio o, en su caso, de la compañía legalmente autorizada, el documento que acredite la constitución de la fianza correspondiente ante la autoridad competente. La omisión en que incurra el notario a esta disposición será sancionada por la autoridad administrativa en términos de la presente ley. El contrato de fianza correspondiente se celebrará en todo caso en el concepto de que el fiador no gozará de los beneficios de orden y excusión;

II. Proveerse a su costa de protocolo y sello, registrar el sello y su firma, ante la autoridad competente, el Registro Público, el Archivo y el colegio, previo pago de los derechos que señale el Código Financiero del Distrito Federal;

III. Establecer libremente una oficina para el desempeño de su función dentro del territorio del Distrito Federal e iniciar el ejercicio de sus funciones en un plazo que no excederá de noventa días naturales contados a partir de la fecha en que rinda su protesta;

IV. Dar aviso de lo anterior a las autoridades competentes y al Colegio; señalando con precisión al exterior del inmueble que ocupe, el número de la notaría; su nombre y apellidos; horario de trabajo, días hábiles o si prefiere los

inhábiles; teléfonos y otros datos que permitan al público la expedita comunicación con la notaría a su cargo, y

V. Ser miembro del Colegio.

La autoridad competente publicará la iniciación de funciones de los notarios en la Gaceta sin costo para el notario.

Artículo 68.- La fianza a que se refiere la fracción I del artículo anterior, garantizará ante la autoridad competente, exclusivamente la responsabilidad profesional por la función notarial y se aplicará de la siguiente manera:

I. Por la cantidad que corresponda y en forma preferente, al pago de multas y otras responsabilidades administrativas cuando, ante la negativa del notario, se deba hacer el pago forzoso a las autoridades financieras del Gobierno u otras dependencias oficiales y,

II. En el orden determinado por la autoridad judicial, cuando se deba cubrir a un particular o al fisco, el monto fijado por sentencia firme condenatoria por responsabilidad civil, penal o fiscal en contra del notario. Para tal efecto, el interesado deberá exhibir copia certificada de dicha sentencia ante la autoridad competente.

Sección Segunda

De los elementos notariales: sello de autorizar y protocolo.

A. SELLO DE AUTORIZAR

Artículo 69.- El sello del notario es el medio por el cual éste ejerce su facultad fedataria con la impresión del símbolo del Estado en los documentos que autorice. Cada sello será metálico, tendrá forma circular, con un diámetro de cuatro centímetros, reproducirá en el centro el escudo nacional y deberá tener escrito alrededor de éste, la inscripción "Distrito Federal, México" el nombre y apellidos del notario y su número dentro de los de la Entidad. El número de la notaría deberá grabarse con guarismos y el nombre y apellidos del notario podrán abreviarse. El sello podrá incluir un signo.

El sello expresa el poder autenticador del notario y lo público de su función.

Artículo 70.- El sello se imprimirá en el ángulo superior izquierdo del anverso de cada hoja del libro de registro de cotejos y en cada folio que se vaya a utilizar; deberá imprimirse también cada vez que el notario autorice una escritura, acta, testimonio, certificación y en el libro de registro de cotejos.

Artículo 71.- También se imprimirá dicho sello en documentación relacionada a su actuación como notario:

I. En la papelería oficial o de efectos de trámite; en tratándose de los avisos, informes, solicitudes de informes y liquidaciones dirigidos a cualquier autoridad, y

II. En avisos, cédulas de requerimientos y notificaciones; así como en toda clase de constancias dirigidas a particulares.

Artículo 72.- En caso de pérdida o alteración del sello, el notario, so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, deberá dar aviso en el primer día hábil siguiente al descubrimiento del hecho a la autoridad competente y con el acuse de dicho aviso, levantará acta circunstanciada ante el Ministerio Público. Dentro del mismo término deberá dar también aviso al Archivo, al Registro y al colegio. Cumplido lo anterior, con los acuses respectivos y la constancia que al efecto le expida el Ministerio Público, tramitará ante la autoridad competente la autorización para la reposición, a su costa del sello, el cual registrará en términos del artículo 67 fracción II de esta ley. El nuevo sello contendrá un signo especial que lo diferencie del anterior. La marca especial deberá estar visible en la impresión del sello.

Artículo 73.- Si apareciere el antiguo sello, no podrá ser usado. El notario entregará personalmente y de inmediato dicho sello al Archivo para que ahí en presencia del notario se destruya. De ello se levantará acta por triplicado; un tanto para la autoridad competente, otro para el Archivo y el tercero para el notario.

Artículo 74.- En caso de deterioro o alteración del sello, la autoridad competente autorizará al notario para obtener uno nuevo, sin necesidad de levantar acta ante el Ministerio Público.

En el supuesto del párrafo anterior, el notario deberá presentar el sello en uso y el nuevo que se le haya autorizado, ante el Archivo, en el que se levantará acta por triplicado, en cuyo inicio se imprimirán los dos sellos y se hará constar que se inutilizó el antiguo, mismo que, con uno de los ejemplares del acta quedará en poder del Archivo, para lo cual éste tomará especiales medidas de seguridad, y con los demás ejemplares el notario procederá a registrar su nuevo sello conforme a lo establecido en el artículo 67 fracción II de la presente Ley. El nuevo sello contendrá un signo especial que lo diferencie del anterior. La marca especial deberá estar visible en la impresión del sello.

Artículo 75.- En todos los casos en los que se deje de utilizar definitivamente un sello, se entregará también al

Archivo para que se destruya. De las diligencias de entrega y destrucción se levantará un acta por triplicado. Un tanto de dicha acta quedará depositado en el Archivo, otro en poder del notario, el albacea de su sucesión o el asociado o suplente del Notario fallecido y otro se enviará a la autoridad competente.

B. PROTOCOLO

Artículo 76.- *Protocolo es el conjunto de libros formados por folios numerados y sellados en los que el notario, observando las formalidades que establece la presente Ley, asienta y autoriza las escrituras y actas que se otorguen ante su fe, con sus respectivos apéndices; así como por los libros de registro de cotejos con sus apéndices.*

En sentido amplio es la expresión que se refiere a todos los documentos que obran en el haber de cada notaría. El protocolo es abierto, por cuanto lo forman folios encuadernables con número progresivo de instrumentos y de libros. En sentido estricto es tanto el conjunto de instrumentos públicos fuente original o matriz en los que se hace constar las relaciones jurídicas constituidas por los interesados, bajo la fe notarial; como la colección ordenada cronológicamente de escrituras y actas autorizadas por el Notario y aquellas que no pasaron, y de sus respectivos apéndices, conforme a una periodicidad, procedimiento y formalidades reglados en esta Ley; y que adquiridos a costa del Notario respectivo son conservados permanentemente por él o por su sustituto en términos de esta Ley afectos exclusivamente al fin encomendado y, posteriormente, destinados permanentemente al servicio y matricidad notarial del documento en el Archivo como propiedad del Estado, a partir de la entrega de los mismos a dicha oficina, en uno o más libros, observando para su redacción y conformación de actos y hechos las formalidades y solemnidades previstas por esta Ley, todo lo que constituye materia de garantía institucional de origen constitucional regulada por esta Ley.

Artículo 77.- *Los instrumentos, libros y apéndices que integren el protocolo deberán ser numerados progresivamente. Los folios deberán utilizarse en forma progresiva por ambas caras y los instrumentos que se asienten en ellos se ordenarán en forma sucesiva y cronológica por el Notario, y se encuadernarán en libros que se integrarán por doscientos folios, excepto cuando el Notario deba asentar un instrumento con el cual rebasaría ese número, en cuyo caso deberá dar por terminado el libro sin asentar dicho instrumento, iniciando con éste el libro siguiente.*

Artículo 78.- *El Notario no podrá autorizar acto alguno sin que lo haga constar en los folios que forman el protocolo, salvo los que deban constar en los libros de registro de cotejos. Para lo relativo a la clausura del*

protocolo se procederá conforme a lo previsto por los artículos 203 y 204 de esta Ley.

Artículo 79.- *Todos los folios y los libros que integren el protocolo deberán estar siempre en la notaría, salvo los casos expresamente permitidos por esta Ley, o cuando el Notario recabe firmas fuera de ella, lo cual se hará cuando fuera necesario a juicio del Notario. Cuando hubiere necesidad de sacar los libros o folios de la notaría, lo hará el propio Notario, o bajo su responsabilidad, una persona designada por él.*

Artículo 80.- *Si una autoridad judicial o administrativa competente ordena la inspección del protocolo o de un instrumento, el acto sólo se podrá efectuar en la misma oficina del Notario y en presencia de éste, su suplente o asociado. En el caso de que un libro del protocolo ya se encuentre en el Archivo, la inspección se llevará a cabo en éste, previa citación del respectivo Notario.*

Artículo 81.- *El notario es responsable administrativamente de la conservación y resguardo de los folios y libros que integren su protocolo. En caso de pérdida, extravío o robo de los folios y libros del protocolo de un notario, este o el personal subordinado a su cargo, deberán dar aviso de inmediato a las autoridades competentes, y hacerlo del conocimiento del Ministerio Público, levantando en ambos casos acta circunstanciada, de tal manera que la autoridad administrativa proceda a tomar las medidas pertinentes, y la autoridad ministerial inicie la indagatoria que procede.*

Artículo 82.- *Para integrar el protocolo, el colegio, bajo su responsabilidad, proveerá a cada notario y a costa de éste, de los folios necesarios a que se refiere esta sección, los cuales deberán ir numerados progresivamente. El colegio cuidará que en la fabricación de los folios se tomen las medidas de seguridad más adecuadas. El colegio podrá abstenerse de proveer de folios a un notario, si éste no está al corriente en el pago de las cuotas establecidas por dicho colegio. El colegio informará mensualmente a la autoridad competente de la entrega de folios que efectúe a los notarios, en la forma que para ese efecto determine dicha autoridad.*

Artículo 83.- *Al iniciar la formación de un libro, el notario hará constar la fecha en que se inicia, el número que le corresponda dentro de la serie de los que sucesivamente se hayan abierto en la notaría a su cargo, y la mención de que el libro se formará con los instrumentos autorizados por el notario o por quien legalmente lo substituya en sus funciones de acuerdo con esta ley. La hoja en la que se asiente la razón a que se refiere este artículo no irá foliada y se encuadernará antes del primer folio del libro. El notario asentará su sello y firma y acto continuo dará aviso a la autoridad del inicio indicado con mención del número de folio con que dicho libro se inicia*

Artículo 84.- Cuando con posterioridad a la iniciación de un libro haya cambio de notario, el que va a actuar asentará a continuación del último instrumento extendido, en una hoja adicional, su nombre y apellidos, su firma y su sello. Se procederá de la misma forma cuando se inicie una asociación o una suplencia, y en el caso de que el notario reanude el ejercicio de sus funciones. En todo caso, cualquiera de los movimientos anteriores se comunicará a la autoridad competente, al Archivo y al colegio.

Artículo 85.- Para asentar las escrituras y actas en los folios, deberán utilizarse procedimientos de escritura o impresión que sean firmes, indelebles y legibles. La parte utilizable del folio deberá aprovecharse al máximo posible, no deberán dejarse espacios en blanco y las líneas que se impriman deberán estar a igual distancia unas de otras, salvo cuando se trate de la reproducción de documentos, la que podrá hacerse ya sea transcribiendo a renglón cerrado o reproduciendo su imagen por cualquier medio firme e indeleble, incluyendo fotografías, planos y en general cualquier documento gráfico.

Artículo 86.- La numeración de los instrumentos será progresiva, incluyendo los instrumentos que tengan la mención de "no pasó", los que se encuadernarán junto con los firmados.

Cuando se inutilice un folio, se cruzará con líneas de tinta y se colocará al final del respectivo instrumento.

Artículo 87.- Todo instrumento se iniciará al principio de un folio y si al final del último empleado en el mismo queda espacio, después de las firmas de autorización, éste se empleará para asentar las notas complementarias correspondientes.

Artículo 88.- Si en el último folio donde conste el instrumento no hay espacio para las notas complementarias, se podrán agregar en el folio siguiente al último del instrumento o se pondrá razón de que las notas complementarias se continuarán en hoja por separado, la cual se agregará al apéndice.

Artículo 89.- Toda autorización preventiva o definitiva de los notarios, así como las que efectúe el titular del Archivo en términos del artículo 113 se asentarán sólo en los folios correspondientes del instrumento de que se trate.

Artículo 90.- Dentro de los treinta y cinco días hábiles siguientes a la integración de una decena de libros, el notario deberá asentar en una hoja adicional, que deberá agregarse al final del último libro una razón de cierre en la que se indicará la fecha del asiento, el número de folios utilizados e inutilizados, la cantidad de los instrumentos asentados, y de ellos los autorizados, los pendientes de autorizar y los que no pasaron, y pondrá al calce de la misma su firma y sello.

Artículo 91.- A partir de la fecha en que se asiente la razón a que se refiere el artículo anterior, el notario dispondrá de un plazo máximo de cuatro meses para encuadernar la decena de libros y enviarla al Archivo, el que revisará solamente la exactitud de la razón a que se refiere dicho artículo, debiendo devolver los libros al notario dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de entrega, con la certificación de cierre de Protocolo correspondiente, de lo que el Archivo informará al colegio.

Artículo 92.- Por cada libro, el notario llevará una carpeta denominada apéndice, en la que se coleccionarán los documentos y demás elementos materiales relacionados a que se refieren los instrumentos que formarán parte integrante del protocolo. Los documentos y demás del apéndice se ordenarán por letras o números en legajos, en cuyas carátulas se pondrá el número del instrumento a que se refieran, indicando lo que se agrega.

Artículo 93.- Los expedientes que se protocolicen por mandamiento judicial y los que previamente estén encuadernados, y que se agreguen al apéndice del libro respectivo, se consideran como un solo documento, al igual que los que por su conexidad deban considerarse como tales.

Artículo 94.- El apéndice es accesorio del protocolo y obra en su refuerzo de los juicios y fe documental del Notario relacionado en los instrumentos asentados en los folios. Lo anterior no impide la validez y veracidad de los documentos asentados ni la validez independiente de certificaciones que se hagan con base en ellos. Las carpetas del apéndice deberán quedar encuadernadas en uno o varios volúmenes con indicación del número del libro del protocolo a que corresponden, dentro del plazo a que se refiere el artículo 91 de esta Ley.

Artículo 95.- El notario deberá guardar en la notaría, la decena de libros durante cinco años, contados a partir de la fecha de la certificación de cierre del Archivo a que se refiere el artículo 91 de esta ley. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la expiración de este término, los entregará al citado Archivo junto con sus apéndices para su guarda definitiva, de lo que el notario informará al colegio.

Artículo 96.- Los notarios tendrán obligación de elaborar por duplicado y por cada decena de libros, un índice de todos los instrumentos autorizados o con la razón de "no pasó", en el que se expresará respecto de cada instrumento:

- I. El número progresivo de cada instrumento;
- II. El libro al que pertenece;

III. Su fecha de asiento;

IV. Los números de folios en los que consta;

V. El nombre y apellidos de las personas físicas otorgantes y los nombres y apellidos o, en su caso, denominaciones o razones sociales de sus representados;

VI. La naturaleza del acto o hecho que contiene, y

VII. Los datos de los trámites administrativos que el notario juzgue conveniente asentar.

El índice se formará a medida que los instrumentos se vayan asentando en forma progresiva en los folios.

Al entregarse definitivamente la decena de libros al Archivo, se acompañará un ejemplar de dicho índice y el otro lo conservará el notario.

Artículo 97.- El libro de registro de cotejos es el conjunto de folios encuadernados, con su respectivo apéndice, en el que el Notario anota los registros de los cotejos de los documentos que le presenten para dicho efecto. Cada libro, que constará de doscientos folios, forma parte del protocolo del Notario y, en lo no previsto, le serán aplicables las normas relativas al protocolo. Se regirá por lo siguiente:

I. El Notario hará el cotejo de la copia escrita, fotográfica, fotostática o de cualquier otra clase, teniendo a la vista el documento original o su copia certificada, sin más formalidades que la anotación en un libro que se denominará libro de registro de cotejos. El registro de los cotejos se hará mediante numeración progresiva e ininterrumpida por cada notaría;

II. En la hoja que en cada libro de registro de cotejos corresponda a lo indicado para los libros de folios en el artículo 83 de esta Ley, el Notario, o en su caso su asociado, asentará una razón de apertura en la que indicará su nombre, el número de la notaría a su cargo, la mención de ser libro de registro de cotejos, con indicación del número que le corresponda dentro de los de su clase, la fecha, su sello y firma. Al terminar cada hoja de este libro asentará su firma y su sello. Inmediatamente después del último asiento que tenga cabida en el libro, el Notario asentará una razón de terminación en la que indicará la fecha en que ésta se efectúe, el número de asientos realizados, con indicación en particular del primero y del último, misma que firmará y sellará;

III. Cada registro de cotejo deberá contener el número progresivo que le corresponda, la fecha en que se efectúe, el nombre del solicitante, el señalamiento de si es por sí o por otro, con mención del nombre o denominación de éste

en su caso; el número de documentos exhibidos, el número de copias cotejadas de cada documento con inclusión de la que se agregará al apéndice y un espacio para las observaciones que el notario juzgue oportuno anotar. Entre registro y registro dentro de una misma página se imprimirá una línea de tinta indeleble que abarque todo lo ancho de aquella a fin de distinguir uno del otro y,

IV. El notario certificará con su sello y firma la o las copias cotejadas, haciendo constar en ellas que son fiel reproducción de su original o copia certificada que tuvo a la vista, así como el número y fecha de registro que les corresponda.

Artículo 98.- El notario deberá llevar un apéndice de los libros de registro de cotejos, el cual se formará con una copia cotejada de cada uno de los documentos que se ordenarán en forma progresiva de acuerdo a su número de registro. El notario deberá encuadernar el apéndice de los libros de registro de cotejos, procurando que el grosor de cada libro no exceda los siete centímetros.

Artículo 99.- Los libros de registro de cotejos y sus apéndices se remitirán al Archivo para su guarda a los cinco años, contados a partir de la fecha de su razón de terminación en términos del artículo 91 o, si el notario respectivo así lo prefiere en términos del artículo 95, enviando, previamente a la finalización del término indicado en este artículo un aviso al Archivo.

Sección Tercera

De las Actuaciones y Documentos Notariales

A. ESCRITURAS

Artículo 100.- Escritura es cualquiera de los instrumentos públicos siguientes:

I. El original que el notario asienta en folios, para hacer constar uno o más actos jurídicos y que firmado por los comparecientes, el Notario autoriza con su sello y con su firma;

II. El original integrado por lo siguiente:

a) Por el documento en el que el Notario consigna uno o más actos jurídicos y que deberá llenar las formalidades que este capítulo establece; ser firmado en cada una de sus hojas y al final por los comparecientes y el Notario; llevar el sello de éste en los expresados lugares y agregarse al apéndice con sus anexos. Hará mención de la escritura de la que forma parte y el o los folios en los que se contiene la síntesis a que se refiere el inciso siguiente y,

b) Por la síntesis asentada por el Notario en los folios que correspondan, en la que se señalen los elementos

personales y materiales del o de los actos consignados. Dicha síntesis contendrá el número de hojas de que se compone así como una relación completa de sus anexos, y una vez firmada por los comparecientes será autorizada por el Notario con su sello y firma.

Artículo 101.- Las escrituras se asentarán con letra clara y sin abreviaturas, salvo el caso de transcripción o reproducción. No se usarán guarismos a menos que la misma cantidad aparezca con letra. Los blancos o huecos, si los hubiere, se cubrirán con líneas antes de que la escritura se firme.

Lo que se haya de testar se cruzará con una línea que lo deje legible, salvo que la ley ordene la ilegibilidad. Puede entrerrenglonarse lo corregido o adicionado. Lo testado o entrerrenglonado se salvará con su inserción textual al final de la escritura, con indicación de que lo primero no vale y lo segundo sí vale. Las escrituras se firmarán por los otorgantes y demás comparecientes únicamente al final de lo escrito. Si quedare algún espacio en blanco antes de las firmas, será llenado con líneas. Se prohíben las enmendaduras y raspaduras.

Artículo 102.- El Notario redactará las escrituras en español, sin perjuicio de que pueda asentar palabras en otro idioma, que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte determinados, y observará las reglas siguientes:

I. Expresará en el proemio el lugar y fecha en que se asiente la escritura, su nombre y apellidos, el número de la notaría a su cargo, el acto o actos contenidos y el nombre del o de los otorgantes y el de sus representados y demás comparecientes, en su caso;

II. Indicará la hora en los casos en que la Ley así lo ordene y cuando a su juicio sea pertinente;

III. Consignará los antecedentes y certificará haber tenido a la vista los documentos que se le hubieren presentado para la formación de la escritura;

IV. Si se tratare de inmuebles, examinará el título o los títulos respectivos; relacionará cuando menos el último título de propiedad del bien o del derecho objeto del acto contenido en la escritura y citará los datos de su inscripción en el Registro Público, o señalará, en su caso, que dicha escritura aún no está registrada;

V. En los títulos o documentos presentados o exhibidos al Notario con motivo de la constitución, enajenación, gravamen o liberación de la propiedad de inmuebles o de derechos reales, al margen de la descripción de la finca o fincas o derechos objeto del contrato, o al pie del documento, pondrá el Notario autorizante de la nueva

operación certificación respecto de la transmisión o acto de los referidos de que se trate, con la fecha, su firma y su sello. Cuando fueren varios los bienes o derechos será suficiente con poner una sola nota al pie del documento.

VI. Los documentos exhibidos al Notario para la satisfacción de requisitos administrativos y fiscales, deberán ser relacionados;

VII. Si no le fuese exhibido el documento que contenga los antecedentes en original, el Notario podrá imponerse, por rogación de parte y bajo su responsabilidad y criterio notarial, de la existencia de documentos o de asientos que obren en archivos y registros públicos o privados y que tutelen a su entender la certidumbre o apariencia jurídica necesarias para hacer la escritura. De ello hará mención el instrumento;

VIII. No deberá modificarse en una escritura la descripción de un inmueble, si por una modificación se le agrega un área que no le corresponde conforme a sus antecedentes de propiedad. La adición podrá ser hecha si se funda en una resolución o diligencia judicial, o en una orden o constancia administrativa que provenga de autoridad competente. Por el contrario, cualquier error aritmético material o de transcripción que conste en asientos o instrumentos registrales sí podrá rectificarse mediante escritura, sin los requisitos señalados, teniéndose esto en cuenta para que el Registro haga posteriormente la rectificación correspondiente en términos del Código Civil en el asiento respectivo. En todo caso el Notario asentará expresamente el haber efectuado dicha rectificación por la rogación de parte pudiendo expresar las evidencias que le indujeron a efectuarla;

IX. En las protocolizaciones de actas que se levanten con motivo de reuniones o asambleas, se relacionarán únicamente, sin necesidad de transcribir, o transcribirán los antecedentes que sean necesarios en concepto del Notario para acreditar su legal constitución y existencia, así como la validez y eficacia de los acuerdos respectivos, de conformidad con su régimen legal y estatutos vigentes, según los documentos que se le exhiban al Notario.

En caso de duda judicial está deberá ser sobre la situación jurídica de fondo de existencia o no de dicha acreditación en el plano de los derechos subjetivos y no por diferencias de criterio formales sobre relación o transcripción. En este caso, sobre dichos antecedentes y dicha acreditación, la carga de la prueba corresponde a quien objeta la validez de los actos contenidos en el documento;

X. En caso de urgencia, a juicio del Notario, los interesados podrán liberarlo expresamente en la escritura de tener a la vista alguno de los documentos antecedentes;

XI.- Al citar un instrumento pasado ante otro Notario, expresará el nombre de éste y el número de la notaría a la que corresponde el protocolo en que consta, así como el número y fecha del instrumento de que se trate, y en su caso, su inscripción en el Registro Público;

XII.- Redactará ordenadamente las declaraciones de los comparecientes, las que en todo caso se considerarán hechas bajo protesta de decir verdad. El Notario les enterará de las penas en que incurrirán quienes declaren con falsedad;

XIII.- Consignará el acto en cláusulas redactadas con claridad, concisión y precisión jurídica y de lenguaje, preferentemente sin palabras ni fórmulas inútiles o anticuadas;

XIV.- Designará con precisión las cosas que sean objeto del acto, de tal modo que no puedan confundirse con otras, y si se tratare de bienes inmuebles, determinará su naturaleza, ubicación, colindancias o linderos, y en cuanto fuere posible sus dimensiones y extensión superficial;

XV.- Determinará las renunciaciones de derechos que los otorgantes hagan válidamente conforme a su voluntad manifestada o las consecuencias del acto, y de palabra, subrayando su existencia, explicará a los otorgantes el sentido y efectos jurídicos de las mismas; cuidando proporcionar, en el caso de personas que recientemente hayan cumplido la mayoría de edad, o de cónyuges que por su situación pudieran requerirla, y en general, de grupos sociales vulnerables, una mayor explicitación oral de sus términos y consecuencias, y respondiendo todo cuestionamiento al respecto;

XVI.- Dejará acreditada la personalidad de quien comparezca en representación de otro o en ejercicio de un cargo, por cualquiera de los siguientes medios:

a) Relacionando o insertando los documentos respectivos o bien agregándolos en original o copia cotejada al apéndice haciendo mención de ellos en la escritura, o

b) Mediante certificación, en los términos del artículo 155 Fracción IV de esta Ley.

En dichos supuestos los representantes deberán declarar en la escritura que sus representados son capaces y que la representación que ostentan y por la que actúan está vigente en sus términos. Aquellos que comparecen en el ejercicio de un cargo protestarán la vigencia del mismo;

XVII.- Cuando se presenten documentos redactados en idioma distinto al español, deberán ser traducidos por un perito reconocido como tal por autoridad competente del Distrito Federal. El Notario agregará al apéndice el original o copia cotejada del documento con su respectiva traducción;

XVIII.- Al agregar al apéndice cualquier documento, expresará la letra o el número que le corresponda en el legajo respectivo;

XIX.- Expresará el nombre y apellidos paterno y materno, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, ocupación y domicilio de los otorgantes, y de sus representados, en su caso. Sólo que la mujer casada lo pida, se agregará a su nombre y apellidos, el apellido o apellidos paternos del marido. En el caso de extranjeros pondrá sus nombres y apellidos tal como aparecen en la forma migratoria correspondiente. El domicilio se anotará con mención de la población, el número exterior e interior, en su caso, del inmueble, el nombre de la calle o de cualquier otro dato que precise la dirección hasta donde sea posible. Respecto de cualquier otro compareciente, el Notario hará mención también de las mismas generales, y

XX.- Hará constar bajo su fe:

a) Su conocimiento, en caso de tenerlo o que se aseguró de la identidad de los otorgantes, y que a su juicio tienen capacidad;

b) Que hizo saber a los otorgantes el derecho que tienen de leer personalmente la escritura y de que su contenido les sea explicado por el Notario.

c) Que les fue leída la escritura a los otorgantes y a los testigos e intérpretes, o que ellos la leyeron, manifestaron todos y cada uno su comprensión plena;

d) Que ilustró a los otorgantes acerca del valor, las consecuencias y alcance legales del contenido de la escritura cuando a su juicio así proceda, o de que fue relevado expresamente por ellos de dar esa ilustración, declaración que asentará;

e) Que quien o quienes otorgaron la escritura, mediante la manifestación de su conformidad, así como mediante su firma; en defecto de ésta, por la impresión de su huella digital al haber manifestado no saber o no poder firmar. En sustitución del otorgante que no firme por los supuestos indicados, firmará a su ruego quien aquél elija;

f) La fecha o fechas en que se firme la escritura por los otorgantes o por la persona o personas elegidas por ellos y por los testigos e intérpretes si los hubiere, y

g) Los hechos que el Notario presencie y que guarden relación con el acto que autorice, como la entrega de dinero o de títulos y otros.

Las enajenaciones de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales a partir de la cantidad mencionada en el Código Civil al efecto, así como aquellos

actos que garanticen un crédito por mayor cantidad que la mencionada en los artículos relativos del Código Civil, deberán de constar en escritura ante Notario, salvo los casos de excepción previstos en el mismo.

Artículo 103.- Cuando ante un Notario se vayan a otorgar diversas escrituras, cuyos actos sean respecto de inmuebles con un mismo antecedente de propiedad, por tratarse de predios resultantes de porciones mayores o de unidades sujetas al régimen de propiedad en condominio, se seguirán las reglas establecidas en el artículo anterior, con las excepciones siguientes:

I.- En un primer instrumento, que se llamará de certificación de antecedentes, a solicitud de cualquiera de las partes, el Notario relacionará todos los títulos y demás documentos necesarios para el otorgamiento de dichos actos;

II.- En las escrituras en que se contengan éstos, el Notario no relacionará ya los antecedentes que consten en el instrumento indicado en la fracción anterior, sino sólo se hará mención de su otorgamiento y que conforme al mismo quien dispone puede hacerlo legítimamente; describirá sólo el inmueble materia de la operación y citará el antecedente registral en el que haya quedado inscrita la lotificación en los casos de fraccionamiento, o la constitución del régimen de propiedad en condominio, cuando se trate de actos cuyo objeto sean las unidades del inmueble antecedente; así como los relativos a gravámenes o fideicomisos que se extingan;

III.- Cuando la escritura de lotificación o constitución del régimen de propiedad en condominio se haya otorgado en el protocolo del mismo Notario ante quien se otorguen los actos sucesivos, dicha escritura hará los efectos del instrumento de certificación de antecedentes. Surtirá también esos efectos la escritura en la que por una operación anterior consten en el mismo protocolo los antecedentes de propiedad de un inmueble, y

IV.- Al expedir los testimonios de la escritura donde se contengan los actos sucesivos, el Notario deberá anexarles una certificación que contenga, en lo conducente, la relación de antecedentes que obren en el instrumento de certificación respectivo.

Artículo 104.- El Notario hará constar la identidad de los otorgantes por cualquiera de los medios siguientes:

I.- Por la certificación que haga de que los conoce personalmente en términos del artículo 102, Fracción XX, inciso a), de esta Ley. Para ello bastará que el Notario los reconozca en el momento de hacer la escritura y sepa su nombre y apellidos, sin necesidad de saber de ellos cualquier otra circunstancia general;

II.- Por certificación de identidad con referencia en términos del artículo citado, con base a algún documento oficial con fotografía, en el que aparezca el nombre y apellidos de la persona de quien se trate o el documento de identidad que llegaren a autorizar las autoridades competentes;

III.- Mediante la declaración de dos testigos idóneos, mayores de edad, a su vez identificados por el Notario conforme a alguna de las fracciones anteriores, quien deberá expresarlo así en la escritura. Los testigos en cuanto tales están obligados a asegurar la identidad y capacidad de los otorgantes, y de esto serán previamente advertidos por el Notario; deberán saber el nombre y apellidos de éstos, que no han observado en ellos manifestaciones patentes de incapacidad natural y que no tienen conocimiento de que están sujetos a incapacidad civil; para lo anterior el Notario les informará cuáles son las incapacidades naturales y civiles, salvo que el testigo sea perito en Derecho. Igualmente les informará su carácter de testigos instrumentales y las responsabilidades consiguientes. En substitución del testigo que no supiere o no pudiese firmar, lo hará otra persona que al efecto elija el testigo, imprimiendo éste su huella digital. La certificación y consiguiente fe del Notario siempre prevalecerá sobre la de los testigos en caso de duda suscitada posteriormente salvo evidencia debidamente probada que supere toda duda al respecto. En todo caso, el Notario hará constar en la escritura el medio por el que identificó a los otorgantes. Tratándose de testigos, si alguno no supiere o no pudiese firmar, imprimirá su huella digital y firmará a su ruego la persona que aquél elija.

Artículo 105.- Para que el notario haga constar que los otorgantes tienen capacidad bastará con que no observe en ellos manifestaciones de incapacidad natural y que no tenga noticias de que estén sujetos a incapacidad civil.

Artículo 106.- Si alguno de los otorgantes fuere sordo, leerá la escritura por sí mismo; el Notario le indicará por sí o por intérprete que tiene todo el tiempo que desee para imponerse del contenido de la escritura y que por esta Ley el Notario está a su disposición para contestar sus dudas, previa explicación que se le dará de la forma descrita arriba; si declarare no saber o no poder leer, designará a una persona que la lea y le dé a conocer su contenido. En caso de que hubiere necesidad de un intérprete, éste deberá firmar la escritura como tal identificándose satisfactoriamente en términos de esta Ley y de ser posible acreditará dicha capacidad con documentos o indicios relativos. En todo caso, el Notario hará constar la forma en que los otorgantes sordos manifestaron su rogación o adherencia, otorgaron su voluntad y consentimiento y se impusieron del contenido de la escritura y de sus consecuencias jurídicas.

Artículo 107.- Los comparecientes que no conozcan el idioma español o que declararan ante el notario que su conocimiento del mismo no es suficiente para discernir jurídicamente sus obligaciones, se asistirán por un intérprete nombrado por ellos; en este caso los demás comparecientes tendrán el mismo derecho. Los intérpretes deberán rendir ante el notario protesta de cumplir lealmente su cargo.

Artículo 108.- Antes de que la escritura sea firmada por los otorgantes, éstos podrán pedir que se hagan a ella las adiciones o variaciones que estimen convenientes, en cuyo caso el notario asentará los cambios y hará constar que dio lectura y que explicó, de proceder ello a su juicio, las consecuencias legales de dichos cambios. El notario cuidará, en estos supuestos, que entre la firma y la adición o variación, no queden espacios en blanco.

Artículo 109.- Una vez que la escritura haya sido firmada por todos los otorgantes y demás comparecientes, podrá ser autorizada preventivamente por el notario con la razón "ante mí", su firma y sello, o autorizada definitivamente. Cuando la escritura no sea firmada en el mismo acto por todos los comparecientes, siempre que no se deba firmar en un solo acto por su naturaleza o por disposición legal, el notario irá asentando solamente "ante mí", con su firma a medida que sea firmada por las partes y cuando todos la hayan firmado imprimirá además su sello, con todo lo cual quedará autorizada preventivamente.

Artículo 110.- El Notario deberá autorizar definitivamente la escritura cuando se le haya justificado que se ha cumplido con todos los requisitos legales para ello. La autorización definitiva contendrá la fecha, la firma y el sello del Notario.

Artículo 111.- Cuando la escritura haya sido firmada por todos los comparecientes y no exista impedimento para su autorización definitiva, el Notario podrá asentar ésta de inmediato, sin necesidad de autorización preventiva.

Artículo 112.- El Notario asentará la autorización definitiva en el folio correspondiente acto continuo de haber asentado la nota complementaria en la que se indicare haber quedado satisfecho el último requisito para esa autorización del instrumento de que se trate.

Artículo 113.- En caso de que el cumplimiento de todos los requisitos legales a que alude el artículo anterior tuviere lugar cuando el libro de protocolo o los folios donde conste la escritura relativa, estuvieren depositados en el Archivo, o quedara suficientemente acreditado por el cuerpo de la escritura y los documentos del apéndice dicho cumplimiento, aunque haya sido anterior a su depósito en el Archivo, su titular pondrá al instrumento relativo razón de haberse cumplido con todos los requisitos, la que se

tendrá por autorización definitiva, dejará constancia si el momento del cumplimiento fue anterior a su depósito o en los términos primeramente descritos. Todo testimonio o copia certificada que expida indicará esta circunstancia bajo su certeza y responsabilidad.

Artículo 114.- Las escrituras asentadas en el protocolo por un Notario serán firmadas y autorizadas preventiva o definitivamente por el propio Notario o por sus asociados o suplentes, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

I.- Que la escritura haya sido firmada sólo por alguna o algunas de las partes ante el primer Notario, y aparezca puesta por él, la razón "ante mí" con su firma, y

II.- Que el Notario asociado o suplente exprese el motivo de su intervención y haga suyas las certificaciones que deba contener el instrumento, con la sola excepción de las relativas a la identidad y capacidad de quienes hayan firmado ante el primer Notario y a la lectura del instrumento a éstos. La autorización definitiva será suscrita por quien actúe en ese momento.

Artículo 115.- Quien supla a un Notario que hubiere autorizado preventivamente una escritura y que dejare de estar en funciones por cualquier causa, podrá autorizarla definitivamente con sujeción a lo dispuesto por los dos artículos anteriores.

Artículo 116.- Si quienes deben firmar una escritura no lo hacen a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes al día en que se extendió ésta en el protocolo, el instrumento quedará sin efecto y el Notario le pondrá al pie la razón de "no pasó" y su firma.

Artículo 117.- Si la escritura contuviere varios actos jurídicos y dentro del término que se establece en el artículo anterior se firmare por los otorgantes de uno o de varios de dichos actos y dejare de firmarse por los otorgantes de otro u otros actos, el Notario pondrá la razón "ante mí" en lo concerniente a los actos cuyos otorgantes han firmado, su firma y su sello, e inmediatamente después pondrá la nota "no pasó" sólo respecto del acto no firmado, el cual quedará sin efecto.

Artículo 118.- El Notario que autorice una escritura en la que mencione a otra u otras escrituras anteriores extendidas en su protocolo, que no hayan sido objeto de registro, lo advertirá así al otorgante interesado y cuidará, una vez que haya sido expensado para ello, en su caso, que se haga en aquél la inscripción o inscripciones, así como la anotación o anotaciones correspondientes. Si el libro de que se trate estuviera depositado definitivamente en el Archivo, el Notario comunicará a dicha dependencia lo procedente para que ésta, sin costo alguno, haga la anotación o anotaciones del caso.

Artículo 119.- Cuando se trate de revocación o renuncia de poderes o de mandatos o ello resulte de documentos que contengan acuerdos de órganos de personas morales o agrupaciones o de renunciaciones que les afecten a ellas, y que el Notario protocolizare, este procederá como sigue:

I.- Si el acto revocado o renunciado consta en el protocolo de la Notaría a su cargo y la escritura está aún bajo su guarda, tomará razón de ello en nota complementaria;

II.- Cuando el acto revocado o renunciado conste en protocolo a cargo de otro Notario del Distrito Federal, lo comunicará por escrito a aquél, para que dicho Notario proceda en los términos de la fracción anterior;

III.- Si el libro de protocolo de que se trate, sea de la notaría a su cargo o de otra del Distrito Federal, ya estuviere depositado en definitiva en el Archivo, la comunicación de la revocación o renuncia será hecha al titular de esa dependencia para que éste haga la anotación complementaria indicada; y

IV.- Si el poder o mandato renunciado o revocado constare en protocolo fuera del Distrito Federal, el Notario sólo hará ver al interesado la conveniencia de la anotación indicada y será a cargo de este último procurar dicha anotación.

Artículo 120.- Cuando se revoque, rescinda o modifique un acto contenido en una escritura, se deberá extender una nueva escritura y se realizará la anotación o la comunicación que procedan en los términos previstos en el artículo anterior, para que se haga la anotación correspondiente.

Artículo 121.- Siempre que ante un notario se otorgue un testamento, éste dará aviso al Archivo, dentro de los cinco días hábiles siguientes, en el que expresará la fecha del otorgamiento, el nombre y demás generales del testador, y recabará la constancia correspondiente. En caso de que el testador manifieste en su testamento los nombres de sus padres, se incluirán éstos en el aviso.

Artículo 122.- El Archivo llevará un registro especialmente destinado a asentar las inscripciones relativas a los testamentos con los datos que se mencionan en el artículo anterior y entregará informes únicamente a notarios y a jueces legitimados para hacerlo. A ninguna otra autoridad, así fuera de jerarquía superior, se entregarán informes sobre dichos actos ni los servidores públicos encargados podrán proporcionar datos relativos a persona alguna fuera del supuesto que señala el artículo anterior.

Artículo 123.- Los jueces y los notarios ante quienes se tramite una sucesión, recabarán los informes de los archivos oficiales correspondientes, acerca de si éstos tienen registrados testamentos otorgados por la persona de

cuya sucesión se trate y, en su caso, los datos de otorgamiento de dicho testamento.

Al expedir el informe indicado, los archivos mencionarán en él a qué personas han proporcionado este mismo informe con anterioridad.

Artículo 124.- Cuando en un testamento público abierto se otorguen cláusulas que conforme a las leyes sean irrevocables, el Notario, sin revelar el contenido de dichas cláusulas, hará mención de ello en el aviso a que se refiere el artículo 121, lo cual asentará el Archivo en el registro a que se refiere el artículo 122. El Archivo, al contestar el informe que se solicite, deberá indicar el testamento o testamentos respecto de los cuales tenga asentado que existen dichas cláusulas irrevocables.

B. Actas

Artículo 125.- Acta notarial es el instrumento público original en el que el Notario, a solicitud de parte interesada, relaciona, para hacer constar bajo su fe, uno o varios hechos presenciados por él o que le consten, y que asienta en los folios del protocolo a su cargo con la autorización de su firma y sello.

Artículo 126.- Las disposiciones de esta Ley relativas a las escrituras serán aplicadas a las actas en cuanto sean compatibles con la naturaleza de éstas, o de los hechos materia de las mismas.

Artículo 127.- Cuando se solicite al Notario que dé fe de varios hechos relacionados entre sí, que tengan lugar en diversos sitios o momentos, el Notario los podrá asentar en una sola acta, una vez que todos se hayan realizado, o bien asentarlos en dos o más actas correlacionándolas, en su caso.

Artículo 128.- Entre los hechos por los que el Notario debe asentar un acta, se encuentran los siguientes:

I.- Notificaciones, interpelaciones, requerimientos, protestos y entrega de documentos y otras diligencias en las que el Notario intervenga conforme a otras leyes;

II.- La existencia, identidad, capacidad legal, reconocimiento y puesta de firmas en documentos de personas identificadas por el Notario;

III.- Hechos materiales;

IV.- La existencia de planos, fotografías y otros documentos;

V.- Protocolización de documentos;

VI.- Declaraciones que hagan una o más personas respecto de hechos que les consten, sean propios o de quien solicite la diligencia, y

VII.- En general, toda clase de hechos positivos o negativos, estados y situaciones, sean lícitos o no, que guarden las personas y cosas que puedan ser apreciados objetivamente y relacionados por el Notario.

En todos los casos señalados en las fracciones anteriores, el acta relativa podrá ser levantada por el Notario en las oficinas de la Notaría a su cargo, con posterioridad a que los hechos tuvieron lugar, aún, en su caso, en los dos días siguientes a ello, siempre y cuando con esta dilación no perjudique los derechos de los interesados, o se violen disposiciones legales de orden público.

Artículo 129.- *En las actas a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se observará lo establecido en el mismo, con las salvedades siguientes:*

I.- Bastará mencionar el nombre y apellidos que manifieste tener la persona con quien se realice la actuación del Notario fuera de las oficinas de la Notaría a su cargo, sin necesidad de las demás generales de dicha persona; la negativa de ésta a proporcionar su nombre, apellidos o a identificarse no impedirá esa actuación;

II.- Una vez que se hubiere realizado cualquiera de dichas actuaciones, la persona que haya sido destinataria del objeto de la diligencia efectuada, podrá concurrir a la oficina del Notario dentro de un plazo que no excederá de cinco días hábiles, a partir del siguiente de la fecha del acta relativa, para conocer el contenido de ésta, conformarse con ella y firmarla, o en su caso, hacer por escrito las observaciones que estime convenientes al acta asentada. Dichas manifestaciones se harán constar en documento por separado firmado por el interesado, que el Notario agregará al apéndice, y una copia del mismo se entregará al concurrente. En caso de que dichas manifestaciones no sean presentadas durante el plazo señalado, no surtirán efecto alguno, y

III.- Cuando el Notario expida testimonios o copias certificadas de las actas asentadas con motivo de las actuaciones a que se refiere este artículo, en el transcurso del plazo que tiene el destinatario de las actuaciones para hacer observaciones al acta respectiva, el Notario deberá señalar expresamente esta circunstancia en el propio testimonio o copia certificada de que se trate.

Artículo 130.- *Cuando a la primera busca en el domicilio que le fue señalado por el solicitante de la notificación como del destinatario de la misma, el Notario no encuentre a su buscado, pero cerciorado de ser ese efectivamente su domicilio, en el mismo acto podrá practicar la notificación*

mediante instructivo que entregue a la persona que se encuentre en el lugar o preste sus servicios para el edificio o conjunto del que forme parte el inmueble, en su caso.

Artículo 131.- *Si la notificación no puede practicarse en los términos del artículo que precede, pero cerciorado de que a quien busca tiene su domicilio en el lugar señalado, el Notario podrá practicar la notificación mediante la fijación del instructivo correspondiente en la puerta u otro lugar visible del domicilio del buscado, o bien depositando de ser posible el instructivo en el interior del inmueble indicado, por cualquier acceso.*

Artículo 132.- *Si al ser requerido el Notario para practicar una notificación, el solicitante de la misma le instruye expresamente que la lleve a cabo en el domicilio que al efecto le señala como del notificado, no obstante que al momento de la actuación se le informe al Notario de lo contrario, éste sin su responsabilidad y bajo la del solicitante, practicará el procedimiento formal de notificación que esta Ley regula realizándola en dicho lugar, en los términos de los dos artículos anteriores.*

Artículo 133.- *En los supuestos a que se refieren los tres artículos anteriores, el Notario hará constar en el acta la forma y términos en que notificó y en todo caso el instructivo contendrá una relación del objeto de la notificación.*

Artículo 134.- *Las actas que el Notario levante con motivo de los hechos a que se refieren las fracciones II, V y VI del artículo 128, serán firmadas por quien solicite la intervención del Notario y demás comparecientes. En los supuestos previstos en las demás fracciones del mismo artículo, el Notario podrá autorizar el acta levantada sin necesidad de firma alguna.*

Artículo 135.- *Cuando se trate de reconocimiento o puesta de firmas y de la ratificación de contenido previstos en la fracción II del artículo 128, el Notario hará constar lo sucedido al respecto ante él, así como la identidad de los comparecientes y que éstos tienen capacidad. La firma o su reconocimiento indicados, con su respectiva ratificación de contenido, podrán ser a propósito de cualquier documento redactado en idioma distinto al español, sin necesidad de traducción y sin responsabilidad para el Notario, en el acta respectiva se incluirá la declaración del interesado de que conoce en todos sus términos el contenido del documento y en lo que éste consiste. El Notario deberá abstenerse de intervenir en las actuaciones señaladas en este artículo, cuando el acto que se contenga en el documento exhibido deba constar en escritura por disposición legal o pacto entre las partes; salvo, en este último caso, que todos los sujetos que la hayan acordado o aquellos de los cuales esto dependa jurídicamente estén de acuerdo.*

Artículo 136.- Para la protocolización de un documento, el Notario lo transcribirá en la parte relativa del acta que al efecto se asiente, o lo agregará al apéndice en el legajo marcado con el número del acta y bajo la letra o número que le corresponda.

Artículo 137.- No podrá protocolizarse el documento cuyo contenido sea contrario a las leyes del orden público o a las buenas costumbres. Ni tampoco podrá protocolizarse el documento que contenga algún acto que conforme a las leyes deba constar en escritura o por acuerdo de partes, en término del artículo anterior.

Artículo 138.- Los nombramientos, poderes y facultades, que consten en actas de reuniones legalmente celebradas por órganos de personas morales o comunidades o agrupaciones en general, tendrán efectos aunque no fueren conferidos en escritura por la simple protocolización de dichas actas, siempre que conste la rogación específica de quien haya sido designado delegado para ello en la reunión de que se trate, se cumplan los requisitos específicos para la validez de la asamblea o junta respectiva y el Notario certifique que no tiene indicio alguno de su falsedad. Al instrumento relativo le será aplicable lo establecido en el apartado correspondiente a las escrituras dentro de esta sección.

Artículo 139.- Los instrumentos otorgados en el extranjero, una vez legalizados o apostillados y traducidos, en su caso, por perito, podrán protocolizarse a solicitud de parte interesada sin necesidad de orden judicial.

Artículo 140.- Los poderes otorgados fuera de la República, una vez legalizados o apostillados, y traducidos, en su caso, por perito, deberán protocolizarse para que surtan sus efectos con arreglo a la Ley. Esto no es aplicable a los poderes otorgados ante Cónsules Mexicanos.

Artículo 141.- Para la práctica de cualquier diligencia de las previstas en el artículo 128 de esta Ley, cuando así proceda por la naturaleza de la misma, el Notario deberá identificarse previamente con la persona con quien la entienda y hará saber a ésta el motivo de su presencia en el lugar.

Artículo 142.- Aunque el requirente original deje de tener interés en los hechos para cuya constancia solicitó la intervención del notario, este deberá permanecer en el lugar, y hacer constar los mismos, si otro interesado presente se lo solicita expresamente, y le cubre o acuerdan previamente el pago de los honorarios correspondientes.

C. TESTIMONIOS, COPIAS CERTIFICADAS Y CERTIFICACIONES

Artículo 143.- Testimonio es la copia en la que se transcribe íntegramente una escritura o un acta, y se transcriben, o

se incluyen reproducidos, los documentos anexos que obran en el apéndice, con excepción de los que ya se hayan insertado en el instrumento y que por la fe del Notario y la matricidad de su protocolo tiene el valor de instrumento público.

Artículo 144.- No será necesario insertar en el testimonio los documentos ya mencionados en la escritura, que hayan servido solamente para la satisfacción de requisitos fiscales.

Artículo 145.- Las hojas que integren un testimonio irán numeradas progresivamente y llevarán la rúbrica y el sello del Notario.

Artículo 146.- El Notario podrá expedir sin necesidad de autorización judicial, primero, segundo o ulterior testimonio al autor del acto consignado en el instrumento de que se trate, a cada parte en dicho acto o bien a los beneficiarios en el mismo; también en su caso, a los sucesores o causahabientes de aquéllos.

Artículo 147.- Se podrá expedir testimonio parcial por la supresión del texto de alguno o algunos de los actos consignados, o de alguno o algunos de los documentos que constan en el protocolo, siempre y cuando con ello no se cause perjuicio.

Artículo 148.- Los Notarios al expedir los testimonios deberán tomar las medidas de seguridad que señale el Colegio. Lo mismo harán respecto a aquellas que el Colegio disponga en relación con el protocolo y los folios.

Artículo 149.- Al final de cada testimonio se hará constar si es el primero, segundo o ulterior ordinal; el número que le corresponde de los expedidos al solicitante, el nombre de éste y el título por el que se le expide, así como las páginas de que se compone el testimonio. El notario lo autorizará con su firma y sello.

Artículo 150.- El Notario tramitará el registro de cualquiera de los testimonios que expida ante el Registro Público, cuando el acto sea inscribible y el Notario hubiere sido requerido y expensado para ello, tomando en cuenta al respecto el artículo 16 de esta Ley.

Artículo 151.- Las hojas del testimonio tendrán las mismas dimensiones que las de los folios del protocolo. En la parte superior izquierda del anverso el Notario imprimirá su sello, y las rubricará en el margen derecho de su mismo anverso.

Artículo 152.- Para cualquier expedición, el Notario utilizará un medio indeleble de reproducción o impresión.

Artículo 153.- Expedido un testimonio no podrá testarse ni entrerrenglonarse, aunque se adviertan en él errores de copia o transcripción del instrumento original asentado

en el protocolo. En este caso, se deberá otorgar otro instrumento al que se agregará el testimonio expedido con errores y en el cual el Notario hará constar las enmiendas o rectificaciones que procedan.

Artículo 154.- *Copia certificada es la reproducción total o parcial de una escritura o acta, así como de sus respectivos documentos del apéndice, o sólo de éstos o de alguno o algunos de estos; que el Notario expedirá sólo para lo siguiente:*

I.- Para acompañar declaraciones, manifestaciones o avisos de carácter administrativo o fiscal, si las leyes o reglamentos aplicables disponen que con ellos se exhiban copias certificadas o autorizadas; así como para obtener la inscripción de escrituras en los Registros Públicos, o en cualquier otro caso en los que su presentación sea obligatoria.

II.- Para acompañar informes solicitados por autoridad legalmente facultada para requerirlos, con relación a alguna escritura o acta.

III.- Para remitirlas a la autoridad judicial que ordene dicha expedición.

IV.- Para entregar al otorgante que la solicite, la reproducción de alguno o algunos de los documentos que obren en el apéndice.

Artículo 155.- *Certificación notarial es la relación que hace el Notario de un acto o hecho que obra en su protocolo, en un documento que él mismo expide o en un documento preexistente, así como la afirmación de que una transcripción o reproducción coincide fielmente con su original; comprendiéndose dentro de dichas certificaciones las siguientes:*

I.- Las razones que el Notario asienta en copias al efectuar un cotejo conforme a lo previsto en el artículo 97 de esta Ley.

II.- La razón que el Notario asienta al expedir las copias a que se refiere el artículo anterior. En estos casos la certificación se asentará al final de la transcripción o reproducción, haciendo constar el número y fecha del instrumento del protocolo correspondiente, a no ser que estos datos se reproduzcan al principio de la copia. En el caso a que se refiere la fracción I del artículo anterior, bastará señalar para qué efectos se expide, sin que conste petición de parte, ni se tomará razón de su expedición en parte alguna del protocolo.

III.- La relación sucinta de un acto o hecho, o de uno de sus elementos o circunstancias que consten en su protocolo, que asiente en un documento que al efecto expida a petición

de parte o autoridad facultada para hacerlo, o en un documento preexistente, también a solicitud de parte, lo que hará constar en la propia certificación sin necesidad de tomar razón en nota complementaria.

IV.- La razón de existencia de uno o varios documentos que se le exhiban, para acreditar la personalidad de los otorgantes o interesados en una escritura o acta que el Notario asiente en la reproducción total o parcial, lo que será suficiente para dejar acreditada dicha personalidad; bastando para ello relacionar en la escritura o acta respectiva, el número y fecha de la escritura cuyo testimonio o copia se le exhiba, y el nombre y el número del Notario ante quien se haya otorgado, o la autoridad y procedimiento de que se deriven, en caso de ser copias certificadas expedidas respecto de constancias de algún procedimiento judicial. En los casos a que se refieren las fracciones II y III del artículo anterior, se deberá hacer constar, tanto en nota complementaria como en la razón de certificación respectiva, la autoridad que ordenó el informe o expedición de la copia, del expediente en que ella actúa y el número y fecha del oficio correspondiente. Igualmente, podrá hacer constar en nota complementaria y agregar al apéndice la copia de la comunicación mediante la cual haya sido enviada la copia certificada a la autoridad respectiva. Toda certificación será autorizada por el Notario con su firma y sello.

CAPÍTULO III DE LOS EFECTOS, VALOR Y DE LA PROTECCIÓN DE EFECTOS DEL INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL

Artículo 156.- *En tanto no se declare judicialmente la falsedad o nulidad de un instrumento, registro, testimonio o certificación notariales, estos serán prueba plena de que los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en el instrumento de que se trate, que hicieron las declaraciones que se narran como suyas, así como de la verdad y realidad de los hechos de los que el Notario dio fe tal como los refirió y de que observó las formalidades correspondientes.*

Artículo 157.- *La nulidad de un instrumento o registro notariales sólo podrá hacerse valer por vía de acción y no por vía de excepción, siempre que existan elementos claramente definitorios en contra que ameriten romper, como excepción debidamente comprobada, el principio de prueba plena.*

Artículo 158.- *Las correcciones no salvadas en las escrituras, actas o asientos de registro, se tendrán por no hechas.*

Artículo 159.- *Salvo disposición en contrario, la simple protocolización acreditará la existencia del documento*

objeto de la misma en la fecha de su presentación ante el Notario y la de su conservación posterior. La elevación a escritura pública o la celebración ante Notario como escritura de actos meramente protocolizables tendrán el valor de prueba plena.

Artículo 160.- El cotejo no tendrá más efectos que acreditar la identidad de lo cotejado con el documento exhibido, sin calificar sobre la autenticidad, validez o licitud del documento exhibido en original.

Artículo 161.- Cuando en un instrumento notarial haya diferencia entre las palabras y los guarismos, prevalecerán aquéllas.

Artículo 162.- El instrumento o registro notarial sólo será nulo:

I.- Si el Notario no tiene expedito el ejercicio de sus funciones en el momento de su actuación;

II.- Si no le está permitido por la Ley intervenir en el acto;

III.- Si no le está permitido dar fe del acto o hecho materia de la escritura o del acta por haberlo hecho en contravención de los términos de la fracción II del artículo 45;

III.- Si fuere firmado por las partes o autorizado por el Notario fuera del Distrito Federal;

IV.- Si ha sido redactado en idioma distinto al español;

V.- Si no está firmado por todos los que deben firmarlo según esta Ley, o no contiene la mención exigida a falta de firma;

VI.- Si está autorizado con la firma y sello del Notario cuando debiera tener nota de "no pasó", o cuando el instrumento no esté autorizado con la firma y sello del Notario.

VII.- Si el Notario no se aseguró de la identidad de los otorgantes en términos de esta Ley.

En el caso de la fracción II de este artículo, solamente será nulo el instrumento en lo referente al acto o hecho relativos, pero será válido respecto de los otros actos o hechos que contenga y que no estén en el mismo caso. Fuera de los casos determinados en este artículo, el instrumento o asiento será válido. Cuando se demande la nulidad de un acto jurídico no podrá demandarse al Notario la nulidad de la escritura que lo contiene, si no existe alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores. Sin embargo, cuando se dicte la sentencia que declare la nulidad del acto, una vez firme, el juez enviará oficio al Notario o al Archivo según se trate, para que en nota complementaria se tome razón de ello.

Artículo 163.- El testimonio, copias certificadas y certificaciones serán nulos solamente en los siguientes casos:

I.- Cuando el original correspondiente lo sea;

II.- Si el Notario no se encuentra en ejercicio de sus funciones al expedir la reproducción de que se trate o la expida fuera del Distrito Federal, y

III.- Cuando dicha reproducción no tenga la firma o sello del notario.

Artículo 164.- Cuando se expida un testimonio por Notario, o cuando así corresponda, por el titular del Archivo, se asentará una nota complementaria que contendrá la fecha de expedición, el número de hojas de que conste el testimonio, el número ordinal que corresponda a éste, según los artículos 146 y 149 de esta Ley, así como para quién se expida y a qué título. Las constancias sobre los asientos de inscripción puestas por los registros públicos correspondientes al calce de los testimonios, serán relacionadas o transcritas por el Notario en una nota complementaria del instrumento. En todo caso, las notas complementarias llevarán la rúbrica o media firma del Notario.

Artículo 165.- Se aplicará la pena prevista por el artículo 247 del Código Penal al que:

I.- Interrogado por notario del Distrito Federal, por el colegio en cumplimiento de las atribuciones establecidas por esta ley, o por el Archivo, falte a la verdad;

II.- Hiciere declaraciones falsas ante Notario del Distrito Federal que éste haga constar en un instrumento;

III.- Siendo Notario en ejercicio de sus funciones, a sabiendas, haga constar hechos falsos en un instrumento.

La penalidad prevista se duplicará si quien comete el delito es notario.

CAPÍTULO IV DE LA COMPETENCIA PARA REALIZAR FUNCIONES NOTARIALES EN ASUNTOS EXTRAJUDICIALES Y DE LA TRAMITACIÓN SUCESORIA ANTE NOTARIO

Sección Primera Disposiciones Generales:

Artículo 166.- En los términos de esta ley se consideran asuntos susceptibles de conformación por el Notario mediante el ejercicio de su fe pública, en términos de esta Ley:

I. Todos aquellos actos en los que haya o no controversia judicial, los interesados le soliciten haga constar bajo su fe y asesoría los acuerdos, hechos o situaciones de que se trate;

II. Todos aquellos en los que, exista o no controversia judicial, lleguen los interesados voluntariamente a un acuerdo sobre uno o varios puntos del asunto, o sobre su totalidad, y se encuentren conformes en que el notario haga constar bajo su fe y con su asesoría los acuerdos, hechos o situaciones de que se trate, siempre que se haya solicitado su intervención mediante rogación.

En aquellos asuntos que en términos del Código de Procedimientos Civiles conozcan los jueces, el Notario podrá intervenir en tanto no hubiere menores no emancipados o mayores incapacitados. En forma específica, ejemplificativa y no taxativa, en términos de este capítulo y de esta ley:

I.- En las sucesiones en términos del párrafo anterior y de la sección segunda de este capítulo.

II.- En la celebración y modificación de capitulaciones matrimoniales, disolución y liquidación de sociedad conyugal, y

III.- En las informaciones ad perpetuam, apeos y deslindes y demás diligencias.

Las autorizaciones y habilitaciones especiales de sujetos a quienes falte capacidad jurídica se regirán por lo dispuesto en el Código Civil y en las demás normas correspondientes.

Sección Segunda

Normas Notariales de Tramitación Sucesoria

Artículo 167.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles, las sucesiones en las que no hubiere controversia alguna y cuyos herederos fueren mayores de edad, menores emancipados o personas jurídicas, podrán tramitarse ante Notario. El que se oponga al trámite de una sucesión, o crea tener derechos contra ella, los deducirá conforme lo previene el Código de Procedimientos Civiles. El Juez competente, de estimarlo procedente, lo comunicará al Notario para que, en su caso, a partir de esa comunicación se abstenga de proseguir con la tramitación. La apertura de testamento público cerrado, así como la declaración de ser formal un testamento especial, de los previstos por el Código Civil, se otorgará siempre judicialmente.

Artículo 168.- Si la sucesión fuere testamentaria, la tramitación notarial podrá llevarse a cabo, independientemente de cual hubiere sido el último

domicilio del autor de la sucesión o el lugar de su fallecimiento, siempre y cuando se actualicen las hipótesis previstas en el primer párrafo del artículo anterior. En este caso, deberán obtenerse previamente los informes del Archivo y del archivo judicial, así como de la oficina respectiva del último domicilio del autor de la sucesión, en caso de que hubiere sido fuera del Distrito Federal, a fin de acreditar que el testamento presentado al Notario por todos los herederos, es el último otorgado por el testador.

Artículo 169.- La sucesión intestamentaria podrá tramitarse ante notario si el último domicilio del autor de la sucesión fue el Distrito Federal, o si se encuentran ubicados en la entidad la mayor parte en número o la totalidad de los bienes, una vez que se hubieren obtenido del archivo judicial y del Archivo las constancias de no tener estos depositado testamento o informe de que se haya otorgado alguno, y previa acreditación de los herederos de su entroncamiento con el autor de la sucesión mediante las partidas del Registro Civil correspondientes.

Artículo 170.- Si hubiere testamento se exhibirá el testimonio correspondiente y la copia certificada del acta de defunción del autor de la sucesión; el heredero o herederos instituidos y el albacea designado, si lo hubiere, podrán manifestar expresamente y de común acuerdo ante el notario de su elección:

I.- Su conformidad, de llevar la tramitación ante el citado notario;

II.- Que reconocen la validez del testamento;

III.- Que aceptan la herencia;

IV.- Que reconocen por sí y entre sí sus derechos hereditarios que les sean atribuidos por el testamento, y

V.- Su intención de proceder por común acuerdo.

Artículo 171.- El Notario podrá hacer constar también la aceptación o renuncia del cargo de albacea instituido por el autor del testamento, así como las designaciones de albacea que en su caso hagan todos los herederos de común acuerdo, y la aceptación del cargo. También los acuerdos de los herederos para la constitución en su caso de la caución o el relevo de esa obligación. Una vez aceptado el cargo, el albacea procederá a la formación de inventario y avalúo en términos de Ley.

Artículo 172.- También podrá hacer constar el Notario, en su caso, la renuncia o repudio de sus derechos que formule alguno de los herederos o legatarios.

Artículo 173.- El instrumento de aceptación de herencia podrá otorgarse aún sin la comparecencia de los

legatarios instituidos, siempre que los herederos se obliguen al pago de los legados. No se podrá llevar a cabo la adjudicación de bienes sin que se hubiesen pagado o garantizado los legados.

Artículo 174.- Si no hubiere testamento, los herederos, en el orden de derechos previsto por el Código Civil, comparecerán todos ante Notario en compañía de dos testigos idóneos; exhibirán al Notario copias certificadas del acta de defunción del autor de la sucesión y las que acrediten su entroncamiento; declararán bajo protesta de decir verdad sobre el último domicilio del finado, y que no conocen de la existencia de persona alguna diversa de ellos con derecho a heredar en el mismo grado o en uno preferente al de ellos mismos. El Notario procederá a tomar la declaración de los testigos por separado, en los términos previstos para las diligencias de información testimonial por el artículo 801 del Código de Procedimientos Civiles. Acto seguido, se procederá en los mismos términos previstos por el artículo anterior, para lo relativo a la aceptación o repudio de los derechos hereditarios, el nombramiento de albacea y la constitución o relevo de la caución correspondiente.

Artículo 175.- El Notario está obligado a dar a conocer las declaraciones de los herederos a que se refieren los artículos anteriores, mediante dos publicaciones que se harán en un diario de circulación nacional, de diez en diez días, con la mención del número de la publicación que corresponda.

Artículo 176.- Una vez hechas las publicaciones a que se refiere el artículo anterior, de lo que se dejará constancia en el instrumento, el o los albaceas presentarán al Notario el inventario y avalúos de los bienes que forman el acervo hereditario del autor de la sucesión para que, con la aprobación de todos los coherederos, en su caso, se realice su protocolización.

Artículo 177.- Los herederos y albacea otorgarán las escrituras de partición y adjudicación tal como haya sido ordenado por el autor de la sucesión en su testamento. A falta de éste, conforme a las disposiciones de la Ley de la materia para los intestados, como los propios herederos convengan.

Artículo 178.- En caso de testamento público simplificado, los legatarios instituidos exhibirán al Notario el respectivo testimonio, junto al acta de defunción del testador, los títulos de propiedad y demás documentos del caso. El Notario, antes de redactar el instrumento, procederá a publicar que lleva a cabo el trámite sucesorio, mediante una sola publicación en un diario de los de mayor circulación nacional, en la que incluirá el nombre del testador y de los legatarios; recabará las constancias relativas del Archivo, del archivo judicial y, en su caso, las

propias correspondientes de los archivos del último domicilio del testador, procediendo a solicitar las constancias relativas al último testamento y de los demás registrados o depositados en los archivos de que se trate.

CAPITULO V

SUPLENCIA, ASOCIACIÓN, SEPARACIÓN, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DE FUNCIONES

Sección Primera

Permuta de Notarías, Suplencias y Asociaciones

Artículo 179.- Con la autorización de la autoridad competente, la que recabará opinión del colegio si lo considera conveniente, dos notarios en ejercicio permutarán su respectivo número de notaría y el protocolo en que cada uno actúa, de modo que a partir de la fecha en que se autorice, uno además de ostentar el número del otro actuará en el protocolo en que actuaba éste y viceversa.

Artículo 180.- La autoridad competente, también con la opinión del colegio si lo considera conveniente, podrá autorizar a un notario en ejercicio, el cambio de número de notaría y el protocolo en que actúa por otra notaría que esté vacante, cuando las necesidades del servicio lo permita. En este caso, el notario ostentará el número de la notaría vacante y actuará en el protocolo respectivo, dejando de tener el número de notaría y protocolo que tenía antes de esa autorización.

Artículo 181.- En los supuestos a que se refieren los dos artículos que anteceden la autoridad competente expedirá la o las nuevas patentes en un plazo de treinta días hábiles. Quienes reciban nuevas patentes deberán cambiar su sello y registrarlo en consecuencia, e inutilizar los anteriores en los términos de esta ley.

Artículo 182.- Para suplirse recíprocamente en sus ausencias temporales, en todo tiempo, los notarios celebrarán convenios de suplencia; estos convenios podrán celebrarse hasta por tres de ellos. Mientras subsista un convenio de suplencia, los notarios que lo celebraron podrán suplirse entre sí y no podrán suplir a otro notario, salvo la autorización de las autoridades competentes, cuando en los términos del segundo párrafo de este artículo, se trate de suplir a un notario que haya recién obtenido su patente o esté en los supuestos del artículo 197. Los notarios que inicien el ejercicio de sus funciones, gozarán de un plazo de noventa días naturales para celebrar tales convenios. Si un notario no encontrare suplente o no lo presentare a la autoridad en el plazo señalado, ésta le nombrará uno.

Artículo 183.- Cuando un notario tenga más de un suplente, en los convenios respectivos se determinará el orden para el ejercicio de la suplencia.

Artículo 184.- Cuando ejerzan la suplencia, los notarios suplentes tendrán las mismas funciones de los notarios suplidos respecto a cada instrumento.

Artículo 185.- Cada notario estará a cargo de un solo protocolo. Cada notaría será servida por un notario. Quedan a salvo el caso de asociación, las previsiones para la suplencia, las intervenciones en caso de cesación de funciones y la general del Archivo, a partir de la entrega de los libros correspondientes en el plazo legal.

Artículo 186.- Podrán asociarse hasta tres notarios por el tiempo que estimen conveniente para actuar indistintamente en el mismo protocolo, que será el del notario de mayor antigüedad; al disolverse los convenios de asociación los notarios actuarán en sus respectivos protocolos.

Artículo 187.- Si la disolución fuere por la cesación en funciones del notario más antiguo, en cuyo protocolo actuaban otros notarios asociados, tal protocolo corresponderá al asociado que continúe en funciones con mayor antigüedad, y en él seguirá actuando. Si subsistiera asociación de ese con otros notarios ellos actuarán en el protocolo del más antiguo.

Artículo 188.- La autoridad competente expedirá la o las nuevas patentes en un plazo de treinta días hábiles; hasta entonces, los asociados actuarán en el protocolo más antiguo con su correspondiente sello.

Quienes reciban nuevas patentes deberán cambiar sus sellos e inutilizar los anteriores en los términos de esta ley. Los notarios que hayan celebrado convenios de asociación, no podrán celebrar convenios de suplencia, mientras aquéllos estén en vigor.

Artículo 189.- Las permutas autorizadas, los convenios de suplencia y de asociación, así como sus modificaciones y disolución se inscribirán ante las autoridades a que se refiere el artículo 67, fracción II y ante el colegio, se publicarán por una sola vez en la Gaceta, con cargo a los notarios.

Sección Segunda Separación de Funciones

Artículo 190.- Los notarios podrán separarse del ejercicio de sus funciones hasta por treinta días hábiles renunciables, consecutivos o alternados, cada seis meses, previo aviso que por escrito den a la autoridad competente y al colegio.

Artículo 191.- Los notarios podrán solicitar de la autoridad competente licencia para separarse del ejercicio de sus funciones hasta por el término de un año

renunciable. Para el otorgamiento de la licencia dicha autoridad consultará al colegio.

Artículo 192.- Sin perjuicio de lo de lo dispuesto en el artículo anterior, salvo causa justificada, no se concederá nueva licencia al notario que no hubiere actuado ininterrumpidamente por seis meses a partir del vencimiento de la anterior licencia. Transcurridos los términos de la licencia o aviso a que se refieren los artículos anteriores, el notario deberá reiniciar sus funciones de inmediato.

Artículo 193.- La autoridad competente concederá licencia, por el tiempo que dure en el ejercicio de su cargo, al notario que resulte electo para ocupar un puesto de elección popular o designado para la judicatura o para desempeñar algún empleo, cargo o comisión públicos. El notario formulará la solicitud correspondiente, exhibiendo constancia certificada expedida por la autoridad de que se trate, junto con el convenio de suplencia correspondiente. Si no presentare éste último, la autoridad, en un lapso no mayor de siete días hábiles y previa consulta que de estimarla conveniente haga al colegio, procederá a designar al suplente en los términos previstos por el artículo 182 de esta ley.

Sección Tercera Suspensión y Cesación de Funciones

Artículo 194.- Los notarios sólo podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones por las siguientes causas:

I., Por dictarse en su contra auto de formal prisión por delitos intencionales contra el patrimonio de las personas, hasta en tanto no cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o se le perdone;

II. Por padecer incapacidad física o mental que le impida actuar, en cuyo caso la suspensión durará todo el tiempo que subsista el impedimento;

III. Por así ser sancionado por la autoridad competente y dicha sanción cause estado y

IV. Por las demás que procedieran conforme a las leyes.

Artículo 195.- En el supuesto previsto en la fracción II del artículo anterior, la autoridad competente, en cuanto tenga conocimiento del hecho procederá a abrir investigación administrativa, la que integrará con la visita del inspector a la notaría a requerir información sobre el hecho; con el dictamen médico emitido por dos peritos médicos acreditados por las autoridades de salud del Distrito Federal y por otros tantos designados por el interesado o el colegio, en los que se funde y precise la naturaleza del impedimento, la atención médica que requiere el paciente y el diagnóstico

procedente sobre su rehabilitación, y con la audiencia al interesado y al Colegio, la referida autoridad hará la declaratoria correspondiente.

Artículo 196.- *El Juez que dicte auto de formal prisión contra un aspirante o notario, lo comunicará inmediatamente a la autoridad competente.*

El Ministerio Público y los Jueces, notificarán al colegio la iniciación de cualquier procedimiento contra un notario en el ejercicio de sus funciones. El colegio queda facultado para imponerse de los referidos procedimientos y opinar, en su caso.

Artículo 197.- *Son causas de cesación del ejercicio de la función notarial y del cargo de notario:*

I. Haber sido condenado por delito intencional, por sentencia ejecutoriada, privativa de la libertad;

II. La revocación de la patente, en los casos previstos por esta ley;

III. La renuncia expresa del notario al ejercicio de sus funciones;

IV. Haberse demostrado ante la autoridad competente, que oír para ello la opinión del colegio, que tras haber cumplido ochenta años de edad, y por esta circunstancia, el Notario respectivo no pueda seguir desempeñando sus funciones;

V. Sobrevenir incapacidad física o mental permanente que imposibilite el desempeño de la función;

VI. No iniciar o reiniciar sus funciones en los plazos establecidos por esta Ley;

VII. No desempeñar personalmente las funciones que le competen de la manera que esta Ley previene;

VIII. No constituir o no conservar vigente la fianza, y

IX. Las demás que establezcan las leyes.

Artículo 198.- *Cuando se promueva juicio de interdicción en contra de un notario, el juez lo comunicará a la autoridad competente y notificará la resolución que dicte, dentro de los cinco días siguientes a su fecha. Al causar ejecutoria la sentencia que decreta la interdicción, cesará el ejercicio de la función notarial.*

Artículo 199.- *Los Jueces del Registro Civil o los agentes del Ministerio Público que tengan conocimiento del deceso de un notario lo comunicarán inmediatamente a la autoridad competente.*

Artículo 200.- *En los casos a los que se refieren los artículos 195, 196, 198 y 199, cuando la autoridad competente reciba el aviso o la comunicación respectiva, de inmediato lo comunicará al colegio.*

Artículo 201.- *En los casos de cesación de la función notarial, junto con la declaratoria que al efecto emita la autoridad competente, se procederá a iniciar el procedimiento de clausura temporal del protocolo correspondiente. Para tal efecto, la autoridad ordenará al notario suplente o al asociado, según el caso, la fijación de un aviso visible en la notaría y ordenará una publicación en la Gaceta, con cargo a los notarios señalados.*

Artículo 202.- *Si el notario que cesare en funciones estuviere asociado o tuviere suplente, al que corresponda de ellos se entregará el protocolo para que concluya los asuntos en trámite, y en caso de asociación, para que continúe su ejercicio en el mismo, en los términos de esta ley. Los asociados o suplentes harán constar en el último folio utilizado por quien cesó en funciones, o en el siguiente, la cesación de funciones, la fecha y pondrán su sello y firma.*

Artículo 203.- *Al declararse la cesación de funciones de un notario que no esté asociado ni tenga suplente, se procederá a la clausura temporal de su protocolo por el inspector de notarias designado, con la comparecencia del representante que designe el colegio. El inspector de notarias asentará la razón correspondiente en los términos antes prescritos.*

Artículo 204.- *A la diligencia referida en el artículo anterior comparecerán, en su caso, el notario que haya cesado en sus funciones, su albacea, interventor o sus parientes y un notario designado por el Colegio. Los presentes formarán un inventario de libros de folios, de libros de registro de cotejos, de folios sin utilizar, apéndices, índices y todos los documentos que haya tenido el cesante en su poder para el desempeño de su función, y otro de los diversos bienes que se encuentren en la notaría. Se entregarán los bienes diversos, a quien haya cesado como notario, a su albacea, interventor o parientes, y los libros de folios y demás objetos indispensables para el desarrollo de la función notarial al Archivo. Un tanto de los inventarios y del acta que se levante se entregará a la autoridad competente, otro al Archivo, otro al colegio, uno más al cesante o a su albacea, interventor o familiares. El suplente que deba actuar por el notario que haya cesado en sus funciones, recibirá todos los elementos necesarios indicados para el ejercicio de la función y los conservará por un plazo de noventa días naturales, para el trámite solamente de los asuntos pendientes. Transcurrido dicho plazo se clausurará temporalmente el protocolo del cesante en los términos de este artículo y se entregará al Archivo, mediante inventario.*

Artículo 205.- La autoridad competente cancelará la fianza constituida cuando el notario cesante o sus causahabientes lo soliciten, y hayan transcurrido seis meses, contados a partir de haberse hecho la publicación de tal solicitud en la Gaceta, sin que hubiere reclamación de quien demuestre tener interés legítimo y una vez obtenida la opinión del colegio.

Artículo 206.- El notario que vaya a actuar en el protocolo de una notaría que haya quedado vacante, recibirá del Archivo, por inventario, todos los documentos a que se refiere el artículo 204, que por ley no deban permanecer en el Archivo, para continuar su utilización y trámite. De la entrega se levantará y firmará por cuadruplicado un acta y se entregará un respectivo tanto a la autoridad competente, al colegio y al notario que reciba.

TÍTULO TERCERO DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES, DE LA VIGILANCIA Y DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO Del Régimen de Responsabilidad

Sección Primera De la Vigilancia

Artículo 207.- La autoridad competente vigilará el correcto ejercicio de la función notarial a través de visitas que realizará por medio de inspectores de notarías. Estos deberán cumplir los requisitos a que se refieren los artículos 54, 55 y 57, fracciones I y II de esta ley, a menos que en el caso de esta última fracción sea dispensado por la autoridad competente.

El colegio coadyuvará con la autoridad competente en la vigilancia del ejercicio de la función notarial, cuando dicha autoridad lo requiera.

Artículo 208.- En todo tiempo, los inspectores y demás autoridades deben guardar reserva respecto de los documentos notariales a los que por su función tengan acceso y quedan sujetos a las disposiciones del Código Penal sobre el secreto profesional.

Artículo 209.- Los inspectores de notarías practicarán visitas de inspección y vigilancia a las notarías, previa orden por escrito fundada y motivada, emitida por la autoridad competente, en la que se expresará, el nombre del notario, el tipo de inspección a realizarse, el motivo de la visita, el número de la notaría a visitar, la fecha y la firma de la autoridad que expida dicha orden.

Artículo 210.- La autoridad competente ordenará visitas generales por lo menos una vez al año y especiales cuando procedan. Las visitas se practicarán en el domicilio de la

notaría y se iniciarán en días y horas hábiles, pudiendo continuarse en horas y días inhábiles, a juicio de la autoridad.

Cuando la visita fuere general, se practicará, por lo menos cinco días naturales después de la notificación correspondiente.

Artículo 211.- La notificación previa a la visita, sea ésta general o especial, que practique el inspector autorizado, se hará en días y horas hábiles en el domicilio de la notaría, mediante cédula de notificación que contendrá el nombre y apellidos del notario, el número y domicilio de la notaría, un extracto de la orden de inspección, que expresará el fundamento legal, el motivo de la inspección, fecha, hora, nombre y firma del visitador que la practicará.

El notificador comunicará al colegio la fecha y hora en que habrá de practicar la visita de que se trate, a fin de que éste, si lo estima conveniente, designe un notario que acuda como coadyuvante en la práctica de dicha visita, con el carácter de observador.

Artículo 212.- Al presentarse el inspector que vaya a practicar la visita, se identificará ante el notario. En caso de no estar presente éste, le dejará citatorio en el que se indicará el día y la hora en que se efectuará la visita de inspección; en el supuesto de que el notario no acuda al citatorio, se entenderá la diligencia con su suplente o, en su caso, con su asociado, y en ausencia de éstos, con la persona que esté encargada de la notaría en el momento de la diligencia, a quien se le mostrará la orden escrita que autorice la inspección, con quien el inspector también se identificará.

Artículo 213.- Las visitas especiales se practicarán previa orden de la autoridad competente y tendrán por objeto verificar los hechos denunciados por queja de un prestatario, cuando de lo expuesto por éste se desprenda que en la notaría se cometieron en su daño o perjuicio, hechos o actos que contravengan a la presente ley u otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

La notificación de la visita especial se practicará en la forma prevista por el artículo 211 y la inspección se verificará dentro de las setenta y dos horas hábiles después de notificar al notario y al colegio, para que éste último si lo considera conveniente, designe un notario que auxilie al inspector para la práctica de la visita. La orden de autoridad limitará el objeto de la inspección al contenido de la queja.

Artículo 214.- En las visitas de inspección se observarán las reglas siguientes:

I. Si la visita fuere general, el inspector revisará todo el protocolo, o diversas partes de éste, para cerciorarse del

cumplimiento de la función notarial en sus formalidades, sin que pueda constreñirse a un instrumento;

II. Si la visita fuere especial, se inspeccionará aquella parte del protocolo y demás instrumentos notariales, únicamente en lo relativo a los hechos o actos que motivaron a la autoridad para ordenar dicha visita;

III. En una y otra visitas, el inspector se cerciorará si están empastados los correspondientes apéndices que debieran estarlo y así lo hará constar en el acta respectiva.

Artículo 215.- *Si la visita tiene por objeto un instrumento determinado, se examinará la redacción, sus cláusulas y declaraciones, así como en su caso su situación registral.*

Artículo 216.- *Las diligencias de notificación, visitas, actas, audiencias y todo acto administrativo en general que supervise la función de un notario, se realizarán con la debida reserva y discreción. Las constancias y demás documentos del expediente, se pondrán a la vista del interesado, su representante, o las personas autorizadas del colegio, previa autorización de la autoridad competente. El servidor público que contravenga lo anterior será sujeto de responsabilidad administrativa en los términos de la ley de la materia, sin perjuicio de la aplicación de sanciones penales, cuando en el caso procedan.*

Artículo 217.- *Los notarios estarán obligados a dar las facilidades que requieran los inspectores para que puedan practicar las diligencias que les sean ordenadas. En caso de negativa por parte del notario, el inspector lo hará del inmediato conocimiento de la autoridad competente, quien, previo procedimiento respectivo, impondrá al notario la sanción señalada en el artículo 226 de esta Ley, apercibiéndolo de que en caso de continuar en su negativa se hará acreedor a la sanción contemplada en el artículo 227, según sea la índole de la actitud del notario.*

Artículo 218.- *El inspector contará con un máximo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la orden de inspección, para rendir el resultado de la misma. Hará constar en el acta las irregularidades que observe, consignará los puntos, así como las explicaciones, aclaraciones, y fundamentos que el notario exponga en su defensa. Le hará saber al notario que tiene derecho a designar a dos testigos y, en caso de rebeldía, los designará el inspector bajo su responsabilidad. Si el notario no firma el acta ello no invalidará su contenido y el inspector hará constar la negativa, y entregará una copia al notario.*

Artículo 219.- *Practicadas las diligencias de inspección y levantadas las actas de mérito, el visitador dará cuenta de todo ello a la autoridad administrativa, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha del cierre del acta de inspección.*

Artículo 220.- *El notario podrá manifestar lo que a su derecho convenga en el acta de inspección o en un término no mayor de cinco días hábiles, en escrito por separado, con relación a la queja, anomalía o irregularidad asentada en dicha acta y en su caso podrá dentro de dicho plazo ofrecer y en su caso desahogar las pruebas que guarden relación con los hechos controvertidos.*

Artículo 221.- *Cuando se trate de visitas que deban practicarse a notarios asociados o suplentes, se observarán las mismas disposiciones señaladas en esta sección.*

Sección Segunda **De las Responsabilidades y Sanciones**

Artículo 222.- *Los notarios son responsables por los delitos o faltas que cometan en el ejercicio de su función, en los términos que previenen las leyes penales del fuero común y federales. De la responsabilidad civil en que incurran los notarios en el ejercicio de sus funciones conocerán los Tribunales. De la responsabilidad administrativa en que incurran los notarios por violación a los preceptos de esta ley, conocerán las autoridades competentes. De la responsabilidad colegial conocerá la Junta de Decanos, que estimará si amerita el asunto encausarse a través de la Comisión de Honor y Justicia, y dado el caso, a través del arbitraje correspondiente. De la responsabilidad fiscal en que incurra el notario en ejercicio de sus funciones, conocerán las autoridades tributarias locales o federales, según el caso.*

Cuando se promueva algún juicio por responsabilidad en contra de un notario, el juez admitirá como prueba pericial profesional, si así se ofreciere, la opinión del colegio.

Siempre que se inicie una averiguación previa en la que resulte indiciado un notario como resultado del ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público solicitará opinión del colegio respecto de la misma, fijándole un término prudente para ello, para lo cual el presidente del colegio o el consejero que éste designe podrá imponerse de las actuaciones del caso.

Artículo 223.- *El notario incurrirá en responsabilidad administrativa por violaciones a esta ley o a otras leyes relacionadas con su función pública, y con motivo del ejercicio de la misma, siempre que tales violaciones sean imputables al notario. El notario no tendrá responsabilidad cuando el resultado de sus actuaciones sea por error de opinión jurídica fundada o sea consecuencia de las manifestaciones, declaraciones o instrucciones de los prestatarios, de los concurrentes o partes, o éstos hayan expresado su consentimiento con dicho resultado, sin perjuicio de la legalidad que regula la función notarial.*

Artículo 224.- La autoridad competente sancionará a los notarios por las violaciones en que incurran a los preceptos de esta ley, aplicando las siguientes sanciones:

I. Amonestación por escrito;

II. Multas;

III. Suspensión temporal;

IV. Cesación de funciones.

Estas sanciones se notificarán personalmente al notario responsable y se harán del conocimiento del consejo.

Artículo 225.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior serán aplicables de manera gradual, pudiendo ser acumulativas las multas con cualquiera de las previstas en las fracciones I, III y IV del artículo anterior. Para la aplicación de sanciones la autoridad competente, al motivar su resolución, deberá tomar en cuenta las circunstancias y la gravedad del caso, los perjuicios y daños que directamente se hayan ocasionado, el grado de diligencia del notario para la solución del problema, su antigüedad en el cargo, sus antecedentes profesionales y los servicios prestados por el notario al Gobierno, la sociedad y al notariado. En todo caso, tomará en cuenta la opinión del colegio.

Artículo 226.- Se sancionará al notario con amonestación escrita:

I. Por retraso injustificado imputable al notario en la realización de una actuación o desahogo de un trámite relacionado con un servicio solicitado y expensado por el solicitante, siempre que éste hubiere entregado toda la documentación previa que el notario requiera;

II. Por no dar avisos, no llevar los correspondientes índices de la decena de libros del protocolo, no encuadernar los libros del protocolo y sus apéndices o conservarlos en términos de ley; o no entregar oportunamente los libros del protocolo, libros de registro de cotejos, apéndices e índices al Archivo;

III. Por separarse de sus funciones sin haber dado previo aviso u obtenido licencia, o por no reiniciar funciones oportunamente, en términos de la licencia, o de esta ley y sólo cuando se trate de la primera vez en que incurre en esta falta;

IV. Por negarse a ejercitar sus funciones habiendo sido requerido y expensado en su caso para ello por el prestatario, sin que medie explicación o justificación fundada por parte del notario a dicho solicitante;

V. Por no ejercer sus funciones en actividades de orden público e interés social a solicitud de las autoridades, en los términos previstos por los artículos 16 al 19 de esta ley;

VI. Por no ejercer sus funciones en días y horas hábiles, y excepcionalmente en los inhábiles, en los términos de esta ley;

VII. Por no obtener en tiempo o mantener en vigor la garantía del ejercicio de sus funciones a que se refiere la fracción I del artículo 67 de esta ley, solo y siempre que se trate de la primera vez que el notario comete esta falta.

Artículo 227.- Se sancionará al notario con multa de uno a doce meses de salario mínimo general vigente en el momento del incumplimiento:

I. Por reincidir, en la comisión de alguna de las faltas a que se refiere el artículo anterior, o por no haber constituido o reconstituido la fianza en el plazo de un mes a partir de la aplicación de la sanción a que se refiere la fracción VII del artículo anterior;

II. Por incurrir en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 45, fracciones I, IV, VI, VIII y IX de esta ley;

III. Por realizar cualquier actividad que sea incompatible con el desempeño de sus funciones de notario, de acuerdo a lo previsto por esta Ley;

IV. Por provocar por culpa o dolo, la nulidad de un instrumento o testimonio, siempre que cause daño o perjuicio directos a los prestatarios;

V. Por no ajustarse al arancel o a los convenios legalmente celebrados en materia de honorarios legalmente aplicables, y

VI. Por incurrir en los supuestos a que se refieren los artículos 243, 245 y 246 de esta ley.

Artículo 228.- Se sancionará con suspensión del ejercicio de la función notarial hasta por un año:

I. Por reincidir, en alguno de los supuestos señalados en el artículo anterior o por no haber constituido o reconstituido la fianza a partir de la aplicación de la sanción a que se refiere la fracción I del artículo anterior;

II. Por revelar injustificada y dolosamente datos sobre los cuales deba guardar secreto profesional, cuando por ello se cause directamente daños o perjuicios al ofendido;

III. Por incurrir en alguna de las prohibiciones que señala el artículo 45, fracciones II, III, V y VII;

IV. Por provocar, en una segunda ocasión por culpa o dolo, la nulidad de algún instrumento o testimonio; y

V. Por no desempeñar personalmente sus funciones de la manera que la presente ley dispone.

Artículo 229.- Se sancionará al notario con la cesación del ejercicio de la función notarial y la consecuente revocación de su patente además de los supuestos señalados en el artículo 197 de esta ley, en los siguientes casos:

I. Por incurrir reiteradamente en alguno de los supuestos señalados en el artículo anterior;

II. Cuando en el ejercicio de su función incurra en reiteradas deficiencias administrativas, y las mismas hayan sido oportunamente advertidas al notario por la autoridad competente, siendo aquél omiso en corregirlas;

III. Por falta grave de probidad, o notorias deficiencias o vicios debidamente comprobados en el ejercicio de sus funciones, y

IV. Por permitir la suplantación de su persona, firma o sello.

La resolución por la que un notario sea cesado en sus funciones, será firmada por el Jefe de Gobierno, quien recibirá, tramitará y resolverá el recurso de inconformidad contra su propia resolución.

Sección Tercera

Del Procedimiento de Imposición de Sanciones

Artículo 230.- Para la aplicación de las sanciones previstas en los artículos anteriores, se observará el siguiente procedimiento:

I.- Toda persona con derecho a ello, podrá presentar por escrito ante la autoridad administrativa competente, queja contra el Notario que haya cometido la falta que cause daños o perjuicios en su contra. El quejoso deberá identificarse, asentar sus generales, precisar su queja y exhibir las constancias documentales o señalar los testigos idóneos, o ambos elementos de convicción, junto con un relato o exposición detallada de los hechos o actos motivo de su queja, a fin de justificarla debidamente. Faltando alguno de los requisitos señalados, la autoridad competente prevendrá al ocurante dando un término de tres días para desahogar el requerimiento; vencido dicho término, si el interesado no cumple con el requisito faltante, la autoridad desechará por improcedente la queja presentada.

II.- La autoridad recibirá la queja y la admitirá a trámite si reúne los requisitos referidos en la fracción anterior. Procederá a registrar la queja en el libro de Gobierno que al efecto exista; al abrir el expediente respectivo, ordenará

visita de inspección especial y notificará la queja al Notario de que se trate, así como al Colegio, a los que se les correrá traslado del escrito por el que se presentó la queja.

III.- Desahogada la visita de inspección especial a que se refiere la fracción anterior, la autoridad citará al quejoso, al Notario contra quien se haya instaurado el procedimiento y al Colegio, a una junta de conciliación, la cual solo podrá diferirse una vez. En esta junta se exhortará al quejoso y al Notario a conciliar sus intereses. Desahogada esta junta la autoridad pasará a recibir las pruebas durante un plazo de diez días hábiles. Serán admitidas todas las pruebas que las partes ofrezcan, con excepción de la confesional, y se observará para su desahogo y rendición lo dispuesto a este respecto por el Código de Procedimientos Civiles. Rendidas las pruebas, se procederá a escuchar los alegatos primero del quejoso, quien para tal efecto podrá hacerse asesorar por abogado o persona de su confianza, luego al Notario, así como la opinión del Colegio. Acto seguido, la autoridad citará a las partes para oír la resolución correspondiente, dentro de los siguientes diez días hábiles.

Artículo 231.- Contra las resoluciones emitidas respecto de las quejas contra notarios, procederá el recurso de inconformidad, que deberá interponerse por escrito ante el superior jerárquico de la autoridad sancionadora, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la resolución recurrida.

Artículo 232.- El escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad, se sujetará a los siguientes requisitos:

I.- Expresará el nombre y apellidos del notario, su domicilio y el número de la notaría a su cargo;

II.- Mencionará con precisión la autoridad o funcionario de quien emane la resolución recurrida, indicando con claridad en qué consiste ésta, y citando la fecha y número de los oficios y documentos en que conste la determinación recurrida, así como la fecha en que ésta le hubiere sido notificada;

III.- Hará una exposición sucinta de los motivos de inconformidad y fundamentos legales de la misma;

IV.- Contendrá una relación con las pruebas que pretenda se reciban para justificar los hechos en que se apoye el recurso, cuya admisión, desahogo y valoración serán determinados por la autoridad administrativa correspondiente. Si el escrito de inconformidad fuere oscuro o irregular, la autoridad prevendrá al recurrente para que en un término de tres días lo aclare, corrija o complete, con el apercibimiento de que si no lo cumple dentro del término señalado, el escrito se desechará de plano. Cumplido lo anterior se dará curso al escrito.

A este escrito deberán acompañarse los siguientes documentos:

I. Poder suficiente de quien promueva en representación del recurrente;

II. El que contenga el acto impugnado;

III. La constancia de notificación;

IV. Aquellos en que consten las pruebas ofrecidas, conforme a la fracción IV que antecede. En el caso de pruebas testimoniales y periciales se señalará el nombre y domicilio del testigo y perito, quien será citado para aceptar el encargo, dentro de los cinco días siguientes.

Si los documentos señalados en las fracciones I, II y III que anteceden no se presentan simultáneamente con el escrito por el que se interpone el recurso, se otorgará un plazo de tres días para ello, apercibido el promovente que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto el recurso y si se trata de los documentos señalados en la fracción IV que antecede, se tendrán por no presentadas.

Artículo 233.- *Concluido el término de recepción y desahogo de pruebas, se dictará la resolución correspondiente en un término que no excederá de diez días hábiles, y se notificará de ella al interesado en un plazo máximo de cinco días contados a partir de su firma, así como al colegio.*

Artículo 234.- *Los efectos de la resolución del recurso son:*

I. Tenerlo por no presentado;

II. Revocar el acto impugnado, y

III. Reconocer la validez del acto impugnado.

TÍTULO CUARTO **DE LAS INSTITUCIONES QUE APOYAN LA** **FUNCIÓN NOTARIAL** **Disposiciones Generales**

Artículo 235.- *El Registro Público, el Archivo, el Colegio y el Decanato, son instituciones que apoyan al notariado del Distrito Federal en beneficio de la certitud jurídica que impone el correcto ejercicio de la fe pública.*

CAPÍTULO I **DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS DEL** **DISTRITO FEDERAL**

Artículo 236.- *El Archivo General de Notarías depende de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos.*

Artículo 237.- *El Archivo General de Notarías se constituirá:*

I.- Con los documentos que los notarios del Distrito Federal remitan a éste, según las prevenciones de esta ley;

II.- Con los protocolos, que no sean aquéllos que los notarios puedan conservar en su poder;

III.- Con los sellos de los notarios que deban depositarse o inutilizarse, conforme a las disposiciones de esta ley; y

IV.- Con los expedientes, manuscritos, libros y demás documentos que conforme a esta ley deba mantener en custodia definitiva.

Artículo 238.- *El Consejero Jurídico y de Servicios Legales designará al titular del Archivo, quien ejercerá además de las facultades previstas en otros ordenamientos jurídicos, las siguientes:*

I.- Celebrar, previo acuerdo del titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, convenios para acrecentar, conservar y difundir el acervo documental del Archivo;

II.- Coadyuvar en todo lo concerniente al ejercicio de la función notarial;

III.- Impulsar la investigación para el proceso de codificación de la normatividad notarial;

IV.- Estudiar y proponer métodos de conservación y respaldo, de la documentación e información que tenga relación con la función notarial;

V.- Expedir y reproducir a solicitud de parte interesada los documentos públicos y privados que obren en los acervos en custodia del Archivo, e;

VI.- Certificar la documentación solicitada por autoridades judiciales, administrativas y legislativas, así como por los particulares que acrediten su interés legítimo, y que esté en custodia del Archivo;

VII.- Revisar que los libros cumplan con todos y cada uno de los requisitos previstos en esta ley, para su recepción y custodia definitiva;

VIII.- Certificar la razón de cierre con respecto a la revisión previa a la que se refiere la fracción que antecede;

IX.- Custodiar en definitiva el protocolo que contenga la razón de cierre y que deba tener una antigüedad de cinco años a partir de la fecha de la razón;

X.- Recibir para su inutilización los sellos, que se hayan deteriorado, alterado o aparecido después de su extravío, así como los que no cumplan con los requisitos previstos en esta ley;

XI.- Recibir los expedientes, manuscritos, libros, folios y demás documentos que conforme a esta ley deban entregar los notarios y que deban custodiarse en el Archivo;

XII.- Devolver a los notarios, en los plazos previstos por esta ley, los expedientes, manuscritos, libros, folios y demás documentos que conforme a la misma, no deban custodiarse en definitiva, después de haber sido dictaminados;

XIII.- Regularizar y autorizar en definitiva, los instrumentos que hubieren quedado pendientes de autorización por parte de un notario;

XIV.- Recibir de los notarios, los avisos de testamento para su depósito y custodia definitiva en el Archivo;

XV.- Recibir, para su depósito y custodia los testamentos ológrafos que presenten los particulares;

XVI.- Rendir información a las autoridades judiciales y administrativas competentes, y a los notarios con respecto a los avisos y testamento ológrafos a que se refieren las dos fracciones que anteceden;

XVII.- Dictaminar y calificar las solicitudes presentadas por los particulares, para determinar la procedencia de un trámite;

XVIII.- Realizar anotaciones marginales de acuerdo a la función notarial, prevista en esta ley;

XIX.- Registrar las patentes de aspirante y de notario, así como los convenios de asociación y de suplencia celebrados entre los notarios;

XX.- Recibir las inspecciones judiciales, cuando la ley así lo permita, y

XXI.- Las demás atribuciones que le confieran las leyes.

Artículo 239.- El Archivo es privado tratándose de documentos que no tengan una antigüedad de más de setenta años, de los cuales a solicitud de persona que acredite tener interés jurídico, de autoridades competentes y de notarios, podrán expedirse copias simples o certificadas, previo pago de los derechos que previene el Código Financiero del Distrito Federal.

Artículo 240.- El Archivo es público tratándose de documentos cuya antigüedad sea de más de setenta años:

I. Si a la fecha de la consulta o de la petición de que se trate, la antigüedad del documento tiene más de setenta años y menos de cien, su análisis, consulta y reproducción, serán públicos, previo pago de derechos en los términos del Código Financiero del Distrito Federal;

II. Si a la fecha de la consulta o de la petición de que se trate, la antigüedad del documento tiene más de cien años y menos de ciento cincuenta, los mismos únicamente podrán analizarse y consultarse bajo la supervisión estricta de un historiador designado para tal efecto por el Archivo. Para su reproducción, previo pago de derechos previstos en el Código Financiero del Distrito Federal, se requerirá la autorización del titular del Archivo o del Director General Jurídico y de Estudios Legislativos, la cual se llevará a cabo por un historiador designado por el Archivo, quien deberá cuidar en extremo el uso y manejo del documento de que se trate, y

III. Si a la fecha de la consulta o de la petición de que se trate, la antigüedad del documento tiene más de ciento cincuenta años, los mismos únicamente podrán analizarse y consultarse bajo la supervisión estricta de un historiador designado para tal efecto por el Archivo.

Para su reproducción, se requerirá la autorización del Consejero Jurídico y de Servicios Legales o del Director General Jurídico y de Estudios Legislativos, a través de los acuerdos o convenios respectivos. Esta reproducción sólo se llevará a cabo para fines científicos, docentes y culturales mediante tecnología que garantice el cuidado y la preservación de dichos documentos y a través de instituciones gubernamentales o de Derecho privado, o particulares, peritos en el cuidado extremo de los mismos y en la aplicación de dicha tecnología, con la participación y supervisión de un historiador designado por el Archivo; para esta reproducción se pagarán los derechos señalados en el Código Financiero del Distrito Federal.

Artículo 241.- El titular y los demás empleados del Archivo tendrán la obligación de guardar secreto de la información y trámites relacionados con la documentación que obre en el mismo. El incumplimiento de dicho secreto será sancionado administrativamente en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y penalmente conforme lo prevengan las disposiciones penales aplicables.

Artículo 242.- El sello del Archivo será metálico, tendrá forma circular, con un diámetro de cuatro centímetros, reproducirá en el centro el escudo nacional, abajo del mismo dirá "México" y en su circunferencia "Archivo General de Notarías del Distrito Federal". El segundo y ulteriores sellos deberán incluir un signo que los distinga del anterior.

El sello expresa el poder autenticador del Archivo y en los casos previstos por esta ley, lo público de su función.

Artículo 243.- El Archivo General de Notarías para la aplicación de las sanciones que procedan comunicará oportunamente a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, los casos en que los notarios en el ejercicio de sus funciones no cumplan esta ley o sus reglamentos.

Artículo 244.- La expedición y reproducción de documentos públicos y privados se hará según lo previsto en el artículo 240 de esta ley.

La solicitud de trámite, ingresada por Oficialía de Partes, deberá ir acompañada con documentación que acredite el interés y la personalidad jurídica, en su caso, de quien promueva y tendrá la calificación en un término no mayor a cinco días hábiles, en el cual se informará verbalmente al promovente la procedencia de dicha solicitud y la cuantía del pago de derechos respectivos, pagados éstos, se procederá a la expedición o reproducción de que se trate, en un plazo no mayor de ocho días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al del pago; la entrega de la documentación requerida se hará únicamente al promovente. La improcedencia de la solicitud se comunicará al promovente por oficio.

Artículo 245.- La revisión de los libros de protocolo a que se refieren los artículos 91 y 238, fracción VII de esta ley se realizará en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción de los mismos, disponiendo el notario de ellos, a partir del sexto día. Si el notario no acudiere a recogerlos a más tardar tres días hábiles después de que están a su disponibilidad, se hará del conocimiento de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, para que ésta proceda en los términos del artículo 243 de esta ley.

Artículo 246.- La pérdida, alteración, deterioro, aparición por extravío y la solicitud para inutilización del sello de autorizar, se hará del conocimiento del Archivo conforme a lo dispuesto por los artículos 72, 73, 74 y 238, fracción X, de esta ley.

Si con motivo de las atribuciones que esta ley confiere a la autoridad competente, al momento de que se solicita el registro del sello de autorizar de algún notario, la misma se percata que aquél no reúne las características previstas en el artículo 69 de esta ley, negará el registro a través del levantamiento de un acta circunstanciada y plasmará en una hoja en blanco dicho sello, para comunicarlo de inmediato al Archivo; éste tendrá cuidado de que el sello no registrado no se hubiere utilizado o se utilice en lo futuro por el notario en alguno de sus instrumentos. Si el Archivo llegare a detectar esta irregularidad lo informará

de inmediato a la autoridad competente para que imponga la sanción a que se refiere el artículo 227, fracción VI de esta ley.

Artículo 247.- Si con motivo del ejercicio de la atribución que esta ley confiere al archivo, al momento de expedir algún testimonio o copia certificada de un instrumento que obre en su poder, el titular del Archivo se percata que el instrumento de referencia carece de:

I. Sello al margen superior izquierdo en alguna de las hojas;

II. Sello en la autorización preventiva, o definitiva de la escritura;

III. Firma en la autorización preventiva o definitiva de la escritura;

IV. Media firma o rúbrica en las notas marginales, en su caso;

V. Leyenda "Ante mí";

VI. Salvadura de lo entrerrenglonado o testado;

En estos casos el titular del Archivo expedirá el testimonio o copia certificada solicitados, con la mención en la certificación de tales omisiones, con el señalamiento de tratarse de una escritura irregular y sin prejuzgar sobre las consecuencias legales de las mismas.

Cuando el documento de que se trate, contenga firma ostensiblemente diferente a la del notario que autoriza, se procederá en los mismos términos a que se refiere el párrafo que antecede.

Con independencia de lo anterior, si el interesado consulta al colegio acerca de la posibilidad de regularizar dichas anomalías, éste, bajo su más estricta responsabilidad, coadyuvará con él, ante la instancia competente.

CAPÍTULO II DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 248.- El Colegio de Notarios del Distrito Federal, Asociación Civil, es un medio necesario para el cumplimiento de la garantía institucional del notariado. Por lo anterior, y por desempeñar una función de orden e interés público y social, los notarios del Distrito Federal estarán agrupados en un único Colegio, que es el Colegio de Notarios del Distrito Federal, Asociación Civil, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que ejercerá para el notariado y para las autoridades correspondientes, las facultades de representación,

organización, gestión, intervención, verificación y opinión que esta ley le otorga.

Artículo 249.- El colegio coadyuvará al ordenado y adecuado ejercicio de la función notarial, para lo cual tendrá las facultades y atribuciones siguientes:

I. Vigilar y organizar el ejercicio de la función notarial por sus agremiados, con sujeción a las normas jurídicas y administrativas emitidas por las autoridades competentes y conforme a sus normas internas, con el fin de optimizar la función notarial;

II. Colaborar con los Órganos de Gobierno del Distrito Federal y con los Poderes de la Unión, en todo lo relativo a la preservación y vigencia del Estado de Derecho y leyes relacionadas con la función notarial;

III. Colaborar con las autoridades competentes y con la Asamblea Legislativa, actuando como órgano de opinión y de consulta, en todo lo relativo a la función notarial, así como coordinar la intervención de los notarios en todos los instrumentos que se requieran en los programas y planes de la Administración;

IV. Colaborar con las autoridades y organismos de vivienda de la Federación y del Distrito Federal, principalmente en programas de vivienda;

V. Representar y defender al notariado del Distrito Federal y sus intereses profesionales, patrimoniales y morales, así como a cualquiera de sus miembros en particular, cuando éste lo solicite y siempre que ello se funde en lo que el colegio considere razonadamente injusto e improcedente. El interés general prevalecerá sobre el del notariado y el de éste, sobre el de un notario en particular;

VI. Promover y difundir una cultura jurídica de asistencia, prevención y actuación notarial, en beneficio de los valores jurídicos tutelados por esta Ley y de la preservación y vigencia de la ética en la función notarial;

VII. Formular y proponer a las autoridades competentes estudios relativos a proyectos de leyes, reglamentos y sus reformas y adiciones.

VIII. Estudiar y resolver las consultas que sobre la interpretación de leyes les formulen autoridades y notarios en asuntos relacionados con la función notarial;

IX. Formar y tener al día informaciones sobre solicitudes de los exámenes de aspirante y de oposición al notariado;

X. Intervenir en los procedimientos para acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser aspirante o notario;

XI. Intervenir en la preparación y desarrollo de exámenes de aspirante y de notario para someterlo a la consideración y, en su caso, aprobación de la autoridad competente;

XII. Organizar y llevar a cabo cursos, conferencias y seminarios, así como hacer publicaciones, sostener bibliotecas y proporcionar al público en general y a sus agremiados, medios para el desarrollo de la carrera notarial y para el mejor desempeño de la función notarial;

XIII. Proveer a los notarios de los folios que integren su respectivo protocolo. Para cumplir dicha responsabilidad el colegio elegirá la calidad del papel, medios de seguridad e indelebilidad del mismo, y las condiciones con las cuales reciba los folios encargados de quien los produzca, procurando que sean las más adecuadas para el instrumento notarial, informando de ello a la autoridad competente;

XIV. Tomar las medidas que estime necesarias en el manejo de los protocolos de los notarios, para garantizar su adecuada conservación y la autenticidad de los instrumentos, registros, apéndices y demás elementos que los integren, informando de ello a la autoridad competente;

XV. Colaborar y ser órgano auxiliar con posibilidad de participar en visitas a las instituciones relacionadas con la dación de fe pública;

XVI. Proporcionar capacitación y cursos de formación y especialización a servidores públicos que en el desempeño de sus funciones se relacionen con la función notarial;

XVII. Impulsar la investigación y el estudio de la función notarial;

XVIII. Otorgar la fianza que en términos del artículo 67 de esta ley deben ofrecer los Notarios en garantía de la responsabilidad por el ejercicio de su función, para lo cual establecerá y administrará un fondo de garantía;

XIX. Proponer, para la aprobación de la autoridad competente, el arancel de notarios en términos de esta ley y sus actualizaciones;

XX. Determinar las cuotas ordinarias y extraordinarias que deban pagar los notarios para la constitución, mantenimiento e incremento del fondo de garantía que cubre la responsabilidad por el ejercicio de la función notarial, y para cubrir los gastos de administración y funcionamiento del propio colegio;

XXI. Establecer y administrar fondos de previsión, de ayuda y de ahorro entre sus agremiados;

XXII. Coadyuvar con el Archivo, en el control, conservación y custodia de su acervo;

XXIII. Organizar las actividades notariales de guardia, consultoría y las demás tendientes al beneficio de la población de la entidad, en particular a los sectores más vulnerables;

XXIV. Celebrar con las autoridades, convenios para la creación de sistemas y formas para el desempeño de la función notarial en programas especiales;

XXV. Intervenir como mediador y conciliador, sobre la actividad de los agremiados, en caso de conflictos de éstos con terceros y rendir opinión a las autoridades competentes;

XXVI. Actuar como administrador de arbitraje, árbitro, conciliador y mediador para la solución de controversias entre particulares; para tal efecto podrá designar, de entre sus agremiados, a quienes realicen tales funciones;

XXVII. Coadyuvar con las autoridades competentes en la vigilancia del exacto cumplimiento de esta ley;

XXVIII. Vigilar la disciplina de sus asociados en el ejercicio de sus funciones, y aplicar medidas disciplinarias y sanciones a los mismos, de conformidad con su normatividad interna;

XXIX. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios o convenientes para el logro de sus fines sociales y profesionales;

XXX. Fomentar el desarrollo del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado, como órgano del colegio, con autonomía propia, de su biblioteca y publicaciones, así como los convenios con el Archivo para hacer un fondo común para la investigación jurídica, en los términos de esta ley;

XXXI. Organizar por riguroso turno las guardias para días festivos;

XXXII. Organizar y vigilar el cumplimiento de los turnos de operaciones que indica esta ley;

XXXIII. Recibir los avisos, realizar internamente los registros y desempeñar las funciones que directamente le atribuya esta ley.

XXXIV. Las demás que prevenga esta ley y demás disposiciones relativas, así como las que prevengan los estatutos del Colegio.

Artículo 250.- La Asamblea de notarios será el órgano supremo de decisiones fundamentales del colegio; a ella se le atribuye acordar, ratificar o rectificar lo que

corresponda para la marcha y desarrollo del Colegio; en ella todos los notarios tendrán voz y voto, de acuerdo con sus estatutos. Para que se considere legalmente reunida y válidas sus decisiones, tratándose de enajenación de bienes inmuebles, deberá estar presente el sesenta por ciento de sus asociados. Las convocatorias para las asambleas deberán hacerse por acuerdo del consejo, mediante circular dirigida al domicilio de cada notaría, o una sola publicación en un diario de los de mayor circulación en el Distrito Federal; en ella se contendrán el orden del día y el lugar y la hora de su realización.

Los bienes del archivo histórico del Colegio son inalienables.

Artículo 251.- El Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal será el órgano permanente de administración ordinaria y representación del colegio para ejercer en su nombre las facultades que esta ley otorga al Colegio, salvo las que expresamente reserve a la Asamblea del Colegio; tendrá la firma social por el número par de integrantes que elija la Asamblea, la mitad de ellos en los años noes y la otra en los pares y se regirá por sus estatutos. Los consejeros ejercerán su cargo por dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.

Artículo 252.- Cada Notario en su ejercicio deberá guardar el secreto profesional respecto de los asuntos que se le encomienden y estará sujeto a las penas que respecto al secreto profesional prevé el Código Penal, pudiendo el juez aumentarlas en una mitad, según sea la gravedad del asunto. La calificación que en su caso se dé por la Comisión de Honor y Justicia o por el arbitraje encomendado por la Junta de Decanos podrá ser un elemento que valore el juez respectivo al efecto.

Artículo 253.- En relación con el Colegio y el Notariado, son obligaciones de los Notarios, las siguientes:

I.- Desempeñar los cargos y las comisiones que les sean asignadas por los órganos del Colegio de Notarios;

II.- Ser parte del jurado o vigilante en exámenes de Aspirante o de Oposición;

III. Asumir el carácter de Notario visitador y coadyuvante de los inspectores de Notarías, cuando fuere designado para ello;

IV.- Cumplir con las guardias, la consultoría gratuita y demás actividades notariales tendientes al beneficio de la población del Distrito Federal que organice y convenga el Colegio y les asignen sus órganos o sus comisiones;

V.- Pagar las siguientes cuotas que fije la Asamblea del Colegio:

a).- Las cuotas para constituir, mantener e incrementar el fondo de garantía de la responsabilidad por el ejercicio de la función notarial previsto por esta Ley, salvo que el Colegio no conceda la fianza, en cuyo caso la obligación del Notario cesará en cuanto a este concepto.

b).- Las cuotas ordinarias para cubrir los gastos de administración y funcionamiento del propio Colegio.

c).- Las cuotas extraordinarias para cubrir los gastos por la realización de actividades gremiales y demás erogaciones previstas en el presupuesto anual de gastos. Las cuotas pagadas por los Notarios no son recuperables;

VI.- Asistir personalmente a las asambleas, teniendo en ellas voz y voto;

VII.- Desempeñar su función sin práctica ni competencia desleales y con el mayor apego al afán de servicio a quienes le requieran su intervención; y

VIII.- La demás que establezcan las leyes y los estatutos internos del Colegio.

Artículo 254.- El fondo de garantía de la responsabilidad por el ejercicio de la función notarial, al que se refieren la fracción I del artículo 67 y el artículo 68 de esta Ley, será permanente, y se constituirá con las cuotas a cargo de cada Notario y con los rendimientos de su inversión en valores de renta fija. En ningún caso este fondo tendrá un destino distinto al señalado por esta Ley.

La fianza que el Colegio otorgue se regirá en todo lo no previsto por el Código Civil, con la única excepción de que el Colegio no requiere tener bienes raíces para responder de las obligaciones que garantice. En todo caso, las aportaciones que realicen los Notarios para constituir, mantener e incrementar los fondos de previsión, ayuda y ahorro que establezca el Colegio, quedarán afectas al pago que por responsabilidad realice el propio Colegio, con cargo a la fianza otorgada por este en términos del artículo 67 fracción I de la presente Ley.

Artículo 255.- El colegio podrá solicitar a la autoridad competente, ordene la visita a un notario y que la misma se practique por un inspector de notarías, la que deberá practicarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la solicitud. Un notario designado por el propio colegio, podrá acompañar al inspector. Pasado dicho plazo, si la autoridad no llevó acabo la visita solicitada, el colegio podrá entrevistar al notario de que se trate en la oficina de éste.

Estas visitas se regirán en lo conducente, por los artículos 207 al 221 de esta ley. Si de las visitas se llegan a detectar

irregularidades y conductas que en opinión del Colegio, deban ser sancionadas en los términos de la presente Ley, el Colegio lo hará del conocimiento de las autoridades competentes, las que procederán en términos del artículo 223 de esta Ley. Si en opinión del colegio hubiere elementos suficientes para suponer la posible responsabilidad del notario y la autoridad no inicia el procedimiento correspondiente, cesará la obligación de afianzar del colegio, en cuyo caso el notario deberá caucionar su gestión mediante fianza otorgada por institución afianzadora autorizada por la ley.

CAPÍTULO III DEL DECANATO DEL NOTARIADO DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 256.- El Decanato del Notariado del Distrito Federal se forma por el grupo de expresidentes del Colegio de Notarios, estén o no en funciones.

Artículo 257.- El Decanato se podrá reunir en todo tiempo sin necesidad de convocatoria formal previa, bastará que estén reunidos la mayoría de sus miembros para que pueda funcionar válidamente y sus resoluciones se tomarán por la mayoría de votos de los presentes. Para el quórum de reuniones sujetas a convocatoria, es necesaria la mayoría simple.

Artículo 258.- Para el ejercicio de sus funciones, la Junta de Decanos podrá designar comisiones de todo tipo, incluida la de Honor y Justicia, formadas por uno o más de sus miembros o Notarios en ejercicio, designados al efecto.

Artículo 259.- Las funciones del Decanato, que se desempeñarán de manera honorífica, serán las siguientes:

I.- Asistir cuando sea citado por el Consejo a sus sesiones o a las asambleas del Colegio;

II. Solicitar del Colegio intervenir en la instrucción de procedimientos en relación con la actuación de los Notarios que se estime transgreden las obligaciones que la Ley y la reglamentación colegial les imponen o las normas éticas aplicables y emitir opinión.

III.- Emitir opiniones respecto de los asuntos de importancia que le sean consultados por el Colegio.

IV.- Tener, por iniciativa propia, derecho de opinión ante el Consejo o la Asamblea, en asuntos generales o particulares de transcendencia para el Colegio.

V.- Ser árbitro para la solución de quejas o demandas que los solicitantes del servicio presenten en contra de Notarios, cuando ambos lo convengan, o en su caso designar para ellos árbitros Notarios en ejercicio.

VI.- Ser tribunal de arbitraje de ejercicio profesional completo o, en su caso, designar árbitros para ello, los que deberán ser Notarios en ejercicio. Los Notarios, en todo tiempo, podrán voluntariamente someter el ejercicio completo de su función al arbitraje del Decanato. En este caso, la notaría sometida al arbitraje del Decanato exhibirá en lugar visible al público la constancia relativa. Las personas que tengan alguna queja o reclamación contra un Notario podrán libremente elegir si optan acudir a los tribunales correspondientes o al arbitraje conforme a este artículo. Tratándose de quejas a las autoridades, podrán también elegir si someten la cuestión a este arbitraje e, inclusive sometiéndose a él, dar parte a las autoridades competentes, si así es su voluntad.

VII.- Recibir opinión de los observadores y hacer recomendaciones respecto de los exámenes de Aspirante y Notario.

VIII.- Hacer recomendaciones en caso de denuncias o quejas respecto de un Notario.

IX.- Formular al Colegio una propuesta de código deontológico de la profesión notarial o, en su caso, una declaración de los principios relativos que deban guiar su ejercicio y un decálogo sobre estas cuestiones. La formulación o aprobación de dicho código no es condición para el ejercicio de las facultades previstas para el Decanato o sus comisiones.

Artículo 260.- El Decanato, para el ejercicio de sus funciones, queda facultado para tener acceso a archivos y documentos de toda clase del Colegio y de los Notarios sujetos a sus procedimientos de Honor y Justicia o de arbitraje.

Artículo 261.- El Decanato designará y removerá a los integrantes de una Comisión de Honor formada por un número impar de sus miembros, quienes deberán ser notarios y designará y removerá al presidente de dicha Comisión.

Artículo 262.- La Comisión de Honor y Justicia deberá, a solicitud de parte o bien cuando lo estime conveniente, investigar la conducta y actuación de un Notario, sea en casos concretos, o en relación con su actuación notarial, para verificar si ésta se desarrolla cumpliendo con todas las disposiciones legales aplicables y con la ética profesional.

Artículo 263.- La Comisión de Honor y Justicia citará las veces que sea necesario o conveniente al Notario cuya conducta se investigue, y éste o cualquier otro Notario que al efecto sean citados estarán obligados a concurrir a las citas, salvo causa grave, y a exhibir ante la Comisión de Honor y Justicia la documentación que obre en poder

del Notario, quien además podrá, si lo cree conveniente, exhibir toda clase de pruebas instrumentales o de cualquier naturaleza para justificar su actuación.

Artículo 264.- La Comisión de Honor y Justicia deberá considerar las pruebas y documentos exhibidos y analizarlas en conciencia de equidad. Si considera que le son suficientes para ilustrar su resolución, emitirá esta por mayoría de votos con la decisión que estime conveniente, la cual someterá al Consejo del Colegio y a la autoridad que proceda. Esta resolución será inapelable.

Artículo 265.- La resolución que emita la Comisión de Honor y Justicia no generará responsabilidad civil o penal de ninguna especie a cargo de sus integrantes.

Artículo 266.- El designado al Decanato o a una de sus comisiones estará obligado a aceptar su nombramiento y a desempeñar su encargo con el mayor celo y celeridad posibles.

Artículo 267.- La Junta de Decanos podrá emitir, por mayoría de sus miembros, normas procesales o de otro tipo para efectos del cumplimiento de su encargo. Recibirá igualmente las opiniones a que se refiere el artículo 23 de esta Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Esta ley entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Se abroga la Ley del Notariado para el Distrito Federal publicada en el Diario Oficial del Distrito Federal, el 8 de enero de 1980 y sus específicas reformas correspondientes y se derogan las disposiciones que se opongán a esta ley.

TERCERO.- El Decreto de presupuesto de egreso del Distrito Federal para el año 2001 y subsecuentes deberán considerar específicamente una partida anual, a fin de dotar los elementos necesarios para el acervo documental y la adecuada preservación del Archivo de Notarías.

CUARTO.- Se respetarán los derechos adquiridos y todos los asuntos y trámites iniciados durante la vigencia de la Ley del Notariado que se abroga serán válidos hasta la etapa procedimental y de gestión en que se encuentren a la entrada en vigor de esta ley, pero si ésta establece gestiones y procedimientos adicionales o diversos, se estará a lo que la misma señala y deberán cumplirse en sus términos.

QUINTO.- El colegio tendrá un plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor de esta ley para

adecuar sus estatutos a las disposiciones contenidas en esta ley. Lo anterior sin perjuicio de los efectos que esta ley produce directamente, por su mismo carácter legal.

SEXTO.- *Con salvedad de lo dispuesto en el artículo primero transitorio, el inicio del afianzamiento, que por mandato de esta ley corresponde al colegio, se realizará a partir del día siguiente de la publicación de la misma en la Gaceta.*

SÉPTIMO.- *Con salvedad de lo dispuesto en el artículo primero transitorio de esta ley, el procedimiento de insaculación a que se refiere el artículo 18 de la misma, se llevará a cabo dentro de los tres primeros meses del año 2000.*

OCTAVO.- *Los folios de Protocolo Especial que preveía la reforma a la Ley del Notariado publicada en el Diario Oficial de 6 de enero de 1994, no utilizados a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley en cada Notaría, se deberán utilizar por el Notario respectivo o por el suplente o asociado que le corresponda bajo las siguientes condiciones:*

I.- El Notario relativo dará aviso al Colegio de cuántos folios sin usar del protocolo especial se encuentran en la Notaría.

II.- Al iniciarse la vigencia de la Ley, el Notario utilizará en primer término los mencionados folios del protocolo especial, para lo cual en una hoja no foliada asentará que a partir de esa fecha utilizará los mencionados folios y el número de los que dispone para ello, y

III.- Cuando utilice el último de dichos folios, también en una hoja no foliada asentará razón de ello y que a partir de esa fecha inicia o procederá a utilizar los folios del protocolo ordinario, cuya utilización estará suspendida hasta ese momento.

NOVENO.- *En tanto no se emitan por la Junta de Decanos las reglas a que se refiere el artículo 260, se aplicarán a las cuestiones de arbitraje las reglas que esta elija de entre las siguientes: las de la Corte Internacional de Arbitraje Comercial de París; las de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial; las de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México o las reglas de la Comisión de Derecho Mercantil Internacional de las Naciones Unidas.*

DECIMO.- *Para fijar los montos y porcentajes que se apliquen a los cobros de honorarios por la función notarial en los casos concretos se establecerá, con las siguientes condiciones y procedimiento, un primer arancel que:*

I.- Deberá ser formulado por el Colegio, el cual hará estudios suficientes y razonables de carácter económico y actuarial para fijar una propuesta de arancel. Dicha propuesta del

Colegio deberá ser formulada y entregada a las autoridades dentro de un plazo de dos meses, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley;

II.- Tendrá que ser justo y proporcionado para la serie de servicios que se prestan, los solicitantes que los requieren y las funciones que desarrolle el notario; deberá ser suficiente para garantizar la independencia, equilibrio y la adecuada y permanente prestación del servicio;

III.- En su regulación se deberán distinguir distintos supuestos, tomando en cuenta en forma especial los de servicio social y de atención a asuntos de orden público así como a grupos sociales vulnerables;

IV.- Contendrá previsiones respecto de la prestación organizada por el Colegio a solicitud de las autoridades correspondientes de campañas de regularización de la tenencia de la tierra y testamentos para las clases populares;

V.- Tomará en cuenta el servicio de asesoría específica de que se trate, así como la dificultad y riesgo del mismo;

VI.- Deberá cubrir los aspectos principales de la función notarial, determinando cuales servicios se encuentran fuera de arancel; esto nunca podrá aplicarse a los casos y supuestos a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo.

DECIMO PRIMERO.- *El Colegio entregará a la Consejería Jurídica la formulación del arancel conjuntamente con los estudios que se hayan efectuado. Las autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal revisarán el arancel respectivo, y el Archivo dará su opinión, pudiendo aprobarlo la Consejería Jurídica, a través de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, si lo considera adecuado. Si en virtud de estudios serios y fundados, suficientes y razonables de carácter económico y actuarial se encontraren supuestos que deban ser corregidos por parte de las autoridades, estas lo harán con citación previa al Colegio para que manifieste su opinión, y presente en su caso alternativas, dentro de un mes de plazo fatal adicional a partir de que se haya dado tal citación. Al terminar este último plazo, los aspectos sobre los cuales no hubiere hecho correcciones la autoridad se entenderán aprobados, y el arancel será publicado por las autoridades con las modificaciones que haya sufrido, o bien éstas se reservarán por la autoridad, para publicarse posteriormente en un término de un mes. El arancel propuesto por el Colegio comenzará a regir a partir de su aprobación y será de observancia obligatoria para todos los notarios del Distrito Federal; lo mismo se aplicará a las modificaciones que se propongan con base a estudios del tipo descrito.*

DECIMO SEGUNDO.- *Se abroga el "Acuerdo del Ciudadano Jefe del Departamento del Distrito Federal*

por el que se crea el Consejo Consultivo del Archivo General de Notarías”.

DECIMO TERCERO. - *Los notarios que hayan obtenido la patente antes de la entrada en vigor de esta ley son inamovibles.*

Por la Comisión de Notariado, firman: Diputado Ricardo Molina Teodoro; diputado Hipólito Bravo López; diputado Rigoberto Nieto López.

LA C. PRESIDENTA. - Para fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra, por la comisión, al diputado Ricardo Molina Teodoro.

EL C. DIPUTADO RICARDO MOLINA TEODORO. Muchas gracias, señora Presidenta. Con su permiso.

Honorable Asamblea.

Ciudadanos que nos acompañan en esta sesión:

En esta fecha acudo ante esta representación ciudadana a presentar el producto del esfuerzo del trabajo conjunto de los integrantes de la Comisión de Notariado que me honro en presidir.

Este proyecto de Ley del Notariado para el Distrito Federal que sometemos a la consideración de este pleno para su discusión y en su caso aprobación recoge efectivamente no sólo el consenso de quienes como legisladores e integrantes de la Comisión de Notariado nos dimos a la tarea de estudiar, investigar, analizar, consensar a los sectores interesados, a los notarios, a los servidores públicos directamente vinculados con la vigilancia de la función notarial, a grupos de profesionistas del derecho, incluso a los solicitantes de los servicios notariales, quienes nos transmitieron sus reclamos o inquietudes por el mejoramiento de la función notarial. También se plasman en este proyecto de ley las experiencias acumuladas a lo largo del presente siglo, desde los diversos cuerpos normativos que han regulado en esta Ciudad de México a su notariado.

Interesados en cumplir con el encargo de la comisión, que nos fue encomendada y sin ser peritos en la materia notarial, pero sí responsables de sacar adelante un proyecto de nueva Ley de Notariado para esta ciudad, es que nos dimos a la tarea de organizar a un equipo de trabajo que valorara lo común de las dos iniciativas de ley que sobre la materia presentaron en su oportunidad compañeros diputados pertenecientes a los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, primero, y posteriormente del Partido de la Revolución Democrática.

Así, una vez que la Comisión de Notariado tuvo en su mesa de trabajo ambos proyectos, desde el mes de mayo de este

año que termina, nos dimos a la tarea de buscar de entre los dos proyectos, tanto los puntos de coincidencia, como los de discrepancia, de tal manera que pudiéramos llegar a elaborar las propuestas que significaran el justo medio de ambas alternativas con el interés de llegar a producir el resultado que la sintetizara, que es este proyecto y ello en un marco de consulta a los sectores a que me he referido anteriormente, de tal manera que el proyecto de ley que tienen en sus manos expresa fielmente todo este esfuerzo descrito en estas breves palabras.

Este dictamen en su parte normativa se refiere al notariado como una garantía institucional de origen constitucional, porque entendiendo al notariado como garantía institucional es posible sistematizar, desde la ley y sus reglamentos, un conjunto de normas que se refieren a reglas, pero también a principios estructurales, procedimientos y funciones mediante los cuales se organiza no solamente el régimen jurídico-normativo propio de la dación de fe pública, sino también las garantías sociales que dicho régimen conlleva.

Asimismo, a la acción reguladora de las instituciones de gobierno vinculadas directamente con el ejercicio de la función pública notarial, a la institución profesional y civil que agrupa y concita al conjunto de notarios como su instancia de representación ante la sociedad, como es el Colegio de Notarios del Distrito Federal y a otras diversas instituciones auxiliares de la función notarial, como lo son el Archivo General de Notarías y el Decanato del Notariado del Distrito Federal

Por otra parte, al concebir al notariado como una garantía institucional sistematizada por la ley, con carácter de orden e interés público y social, este dictamen en su parte normativa articula diversos presupuestos normativos que se orientan hacia la consolidación de un notariado cuya actuación estará regulada por una ley caracterizada como de orden e interés público y social.

Al igual que diversos países que han adoptado el sistema de notariado latino, la producción legislativa mexicana de esta materia reconoce en el notariado a una institución cuyo carácter desde el punto de vista de su regulación es de orden público, asimismo que las actuaciones notariales se integran en un conjunto de funciones, procedimientos y estructuras que constituyen en sí mismas un sistema complejo por ser generadoras de instrumentos que la ley eleva a la categoría de instrumentos públicos, por provenir del sujeto autorizado por el estado, quien mediante el otorgamiento de la patente de notario concede a dicho sujeto por razón de la selección de su persona, la cualidad jurídica de notario.

Los aspectos anteriormente apuntados son tomados en cuenta por las dos iniciativas sujetas a dictamen en sus respectivas exposiciones de motivos. La iniciativa del grupo

parlamentario del Partido Acción Nacional propone lo que se reproduce en lo conducente; por un lado se ha requerido de una institución que garantice la certeza de los actos y de los hechos para lo cual se ha desarrollado la institución de fe pública como atributo del estado y por otro lado ha sido necesario desarrollar instituciones que se encarguen de aplicarla a los casos concretos que se presentan en la vida cotidiana; una de ellas en nuestro país es el notariado mexicano por el que se enviste al notario de fe pública y más adelante la iniciativa en sita define sintéticamente sus propósitos fundamentales cuando dice: "La presente iniciativa de Ley del Notariado para el Distrito Federal propone reformar integralmente la ley vigente para darle un mejor orden a su contenido temático, actualizar sus normas, avanzar en materia de simplificación administrativa, impulsar la subsidiariedad, enriquecer y desarrollar su contenido, establecer condiciones para que el notariado pueda brindar un mejor servicio y mejorar las condiciones de seguridad jurídica para los interesados.

La iniciativa de los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el apartado correlativo de motivos, por su parte manifiesta que respecto de la materia notarial, los ciudadanos de la Ciudad de México, Distrito Federal nos encontramos con el hecho de que por primera vez en la historia moderna de las instituciones públicas estatales de gobierno de nuestra ciudad existe un órgano legislativo local que goza de la legitimidad y representatividad propia de una institución pública emergida del estado de derecho que tiene frente a sí la tarea de llevar a cabo, con base en sus facultades legislativas, la revisión profunda del marco jurídico que regula el ejercicio de la dación de fe pública a los actos o hechos realizados por los particulares en su interactuar en sociedad mediante el ejercicio de la función notarial.

En ulterior apartado la iniciativa en sita precisa el sentido de su propuesta diciendo lo siguiente: Salta a la orden de atención del legislador una cuestión que reviste importancia central para los propósitos de esta iniciativa que nos impone la nueva realidad normativa descrita y que consiste en la necesidad de reestructurar las relaciones entre la Administración Pública y el ejercicio de la función notarial, con el interés de armonizar las necesidades de desarrollo y modernización de la función notarial, con la consolidación de las instituciones democráticas del Gobierno de la Ciudad y la modernización de la Administración Pública local. Este es el sentido de la presente iniciativa.

De lo antes expuesto, este dictamen colige que el sentido de complementariedad que observan en este punto las iniciativas en estudio estriba en que, por una parte, mientras la primera iniciativa a dictaminar acentúa el carácter interinstitucional de la función notarial y la necesidad objetiva de su reforma, en términos de su actualización normativa; la segunda iniciativa en estudio, de inicio

privilegia la nueva realidad legislativa existente hoy en la ciudad y enfatiza la necesidad del prudente ejercicio de las atribuciones que las reformas constitucionales otorgan al órgano de gobierno encargado de ejercer la función legislativa en el ámbito local respecto de la materia notarial.

Se encuentran así definidos los dos referentes o ejes fundacionales, a partir de los cuales se generan y encuentran sentido las propuestas normativas reguladoras del notariado, de la función notarial y de su ejercicio en el ámbito de nuestra ciudad, que este dictamen pretende actualizar aplicando un método abierto, comparativo y propositivo, retomando de ambas iniciativas los elementos que juzga pertinentes para tal finalidad.

Si bien es común en ambas iniciativas en estudio el interés por reformar el ordenamiento notarial a partir de la caracterización tanto de la función notarial como del notariado y por una adecuada sistematización normativa de estas nociones que sea diverso respecto de la que prevalece en la ley vigente. Sin demérito de ambos esfuerzos, interesa a este dictamen orientar el tratamiento correcto que merecen ambas categorías normativo explicativas de la dación de fe pública delegada por el Estado a profesionales del Derecho independientes como son los notarios.

Para ello se considera como oportuno situar al notariado desde la perspectiva de su configuración como materia y facultad legislativa limitada al sentido preciso del término, esto es, como contenido particular materia específica dentro de un orden de potestades legislativas taxativamente determinado por el precepto constitucional; pero también en esa misma medida como materia reservada a la potestad legislativa constitucionalmente determinada del órgano de gobierno encargado de ejercer la función legislativa en el Distrito Federal.

En efecto, como bien lo ubican ambas iniciativas desde la reforma constitucional del 25 de octubre de 1993 por la que se reformó radicalmente el contenido del artículo 122 de la Carta Magna para establecer ahí las bases constitucionales que en adelante regirían la vida política institucional del gobierno de esta ciudad, hasta la reforma al mismo precepto constitucional del 22 de agosto de 1996, el notariado ha venido apareciendo como materia expresamente conferida a la potestad legislativa de la Asamblea y por tanto excluida de ser materia legislativa del Congreso de la Unión.

De ahí, se considera correcto afirmar que el notariado constituye, junto a otras diversas, no solamente materia exclusiva de la acción legislativa de la Asamblea, sino que además, atendiendo al proceso histórico que da origen y forma jurídica constitucional tanto a las potestades legislativas de la Asamblea, las que se encuentran hoy reservadas en el apartado C, base primera, fracción V, incisos del a) al o) del artículo 122 constitucional, como a la

conformación misma de los órganos de gobierno encargados de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial en el ámbito local.

Es indudable que la materia que nos ocupa está inscrita en un sistema normativo constitucional instituyente y garante tanto de órganos como de funciones, todos relativos a la vida institucional de la entidad federativa que es la Ciudad de México, Distrito Federal.

Además de ubicarse durante los últimos 7 años como materia legislativa constitucionalmente determinada y reservada, el notariado y la actividad notarial por sí mismo constituyen, como acertadamente señala el proyecto del PAN, una institución que garantiza una plena certeza y seguridad jurídica respecto de los actos jurídicos que realizan los particulares.

Esta institución ha estado presente desde tiempos remotos en la vida nacional. En la modernidad el notariado mexicano existe formando parte de la corriente mundial del derecho notarial que se ubica bajo la denominación de notariado latino; de ahí que cuando la Constitución habla de notariado, debe entenderse que se refiere a la expresión mexicana del notariado latino.

LA C. PRESIDENTA.- Me permite, señor diputado.

Se solicita los diputados presentes y a los compañeros de los medios de comunicación si pueden ayudarnos a poner orden en esta sala y si nos hicieran el favor de poner orden en el pasillo central y escuchar al orador.

Muchas gracias.

Adelante, señor diputado.

EL C. DIPUTADO RICARDO MOLINA TEODORO.- Gracias, señora Presidenta.

Por ello, en este dictamen nos parece que para tratar adecuadamente al notariado y a la función notarial, debe asumirse desde la ley el régimen constitucional de la materia y reconocer que tanto la materia, el notariado, como la función notarial, constituyen una garantía institucional de origen constitucional en el derecho mexicano y así al hablar de notariado y de función notarial, debe reconocerse que ambas nociones encuentran su sentido y desempeño concreto a partir de su pertenencia, al espacio propios de las materias de derecho común que la norma suprema tutela, reservándolas a la esfera de la acción legislativa del órgano legislativo local.

Desde la perspectiva apuntada en el considerando anterior, este dictamen retoma en lo general la estructura temática que ambas iniciativas en estudio presentan, pero las mejora

desde su Título I, al reordenar los conceptos propios de la materia, al recuperar en beneficio de la ley los principios regulatorios e interpretativos vigentes en la teoría y doctrina jurídicas propias del notariado latino; los que si bien ya existen asumidos por la teoría notarial mexicana para extrajurídicas, se habían mantenido alejados del texto legal, al restablecer adecuadamente el régimen de equilibrio, colaboración complementariedad y esfera de acciones propias que debe prevalecer entre las autoridades competentes de la materia y el Organismo Colegiado del Notariado de la Ciudad en beneficio de la eficaz y expedita prestación de los servicios notariales para la sociedad demandante de los mismos.

Compañeras y compañeros: En la Comisión de Notariado creemos que esta Ley, es una ley que está a la altura de las mejores leyes de notariado del mundo entero, propia de nuestra ciudad, propia de la dinámica de una ciudad como la nuestra, propia de un siglo y de un milenio que en dos días habremos de empezar a vivir.

Por su atención, muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión el dictamen en lo general. Se abre el registro de oradores.

¿Oradores en contra?

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

Antes de proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general, se pregunta a los ciudadanos diputados si habrán de reservarse algún artículo para ser discutido en lo particular.

EL C. DIP. RICARDO MOLINA TEODORO (Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Sí, señor diputado.

EL C. DIP. RICARDO MOLINA TEODORO.- (Desde su curul).- Gracias, señora Presidenta.

Mire, queremos reservarnos el Artículo 2º en sus fracciones 16, 17, 22, artículo 7º en su fracción V, artículo 26, artículo 76, artículo 58 fracción IV, artículo 232 fracción I y el artículo Tercero Transitorio.

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Escobedo.

EL C. DIPUTADO JOSE EDUARDO ESCOBEDO MIRAMONTES (Desde su curul).- Gracias, Presidenta.

Le doy la lista de los artículos reservados: 2 fracción XVII y XX, 3 y 7 fracción III y IV, 15, 18, 36, 52 fracción II, 53, 55, 58,

67 fracción I y V, 82, 165, 213, 223, 227 fracción IV, 238 fracción I, 248, 252, 256 a 267, Tercero Transitorio, Noveno Transitorio, Décimo Transitorio fracción VI y Décimo Segundo Transitorio.

Le pido, señora Presidenta, que cuando autorice usted el uso de la palabra para hacer los razonamientos correspondientes, mi compañero Alfonso Rivera argumentaría el caso del artículo 248.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor diputado.

En consecuencia, proceda la secretaría a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados en lo particular.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados en lo particular.

Se solicita a los ciudadanos diputados, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior que al emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz, recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones. Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Islas León, en pro.

Arne Aus Den Ruthen, en pro.

Hiroishi Suzuki, en pro.

Hernández Labastida Miguel, en pro.

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Armando Salinas Torre, en pro.

Manuel Minjares, en pro.

Manuel Aguilera, en pro.

Levín Coppel, en pro.

De Garay, en pro.

Ortiz Haro, a favor.

Escobedo, a favor.

Luna Parra, a favor.

Rivera Domínguez, a favor.

Alejandro Vázquez, en pro.

Jesús Toledano, en pro.

Martínez Parra, a favor.

Cárdenas Pérez, en pro.

Eliab Mendoza, a favor.

Ricardo Martínez, en pro.

Francisco Chiguil, en pro.

Márquez Franco, en pro.

Juan González, a favor.

Miguel Angel Peláez, a favor.

Ernesto Chávez, a favor.

José Luis Benítez, en pro.

Esveida Bravo, a favor.

Castellanos Cortés, a favor.

René Arce, a favor.

Virginia Jaramillo Flores, en pro.

García Rocha, a favor.

Alfredo Hernández, a favor.

Francisco Ortiz, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

David Sánchez, a favor.

Ricardo Molina, a favor.

Hipólito Bravo, en pro.

Rodríguez Ruíz, en pro.

José Narro Céspedes, en pro.

Antonio Padierna, a favor.

Pichardo Mendoza, en el mismo sentido que el diputado Ricardo Molina.

Hidalgo, a favor.

Ignacio Ruiz, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Rafael López de la Cerda, a favor.

Vicente Cuéllar, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Serna Alvarado, a favor.

Angeles Correa, a favor.

Sevilla Díaz, a favor.

Miguel Bortolini, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Jesús Galván, en pro.

Roberto Rico, en pro.

Margarita Saldaña, en pro.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 58 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.

Cumplida su instrucción.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Notariado con proyecto de decreto de Ley de Notariado del Distrito Federal,

en lo general y los artículos no reservados en lo particular. Para su discusión en lo particular, han sido reservados los siguientes artículos por el diputado Ricardo Molina Teodoro: Artículo 2, fracciones XVI, XVII y XXII; artículo 7, fracción V; artículo 26, artículo 76, artículo 232, fracción I; artículo 58, fracción IV, y Tercero Transitorio.

En consecuencia y para referirse a los artículos reservados, se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Molina Teodoro.

EL C. DIPUTADO RICARDO MOLINA TEODORO.- Gracias, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, señor diputado.

EL C. DIPUTADO RICARDO MOLINA TEODORO.- Con su permiso.

Compañeros, estas reservas no obedecen a modificaciones de fondo que vengamos a proponer aquí a esta tribuna, simplemente queremos que para una mejor ubicación de algunas fracciones del artículo 2, se vayan al artículo respectivo que le corresponde a estas definiciones que se contienen en ese artículo 2.

Respecto de las fracciones XIV, XVII y XXII del artículo 2 de la ley, éstas se refieren a las definiciones de nociones tales como folios, función notarial y uteralteridad, respectivamente; se trata de nociones que si bien pueden incluirse en los respectivos artículos que tratan de esa materia, con lo que, más bien se trata de nociones que bien pueden incluirse en los respectivos artículos que tratan de esas materias, con lo que no solamente mantendrían su fuerza explicativa, sino que además enriquecerían las normas a las que se refieren.

Por lo mismo solicitamos que se supriman del artículo 2, estas fracciones, y que se haga una reordenación de las que subsisten en este artículo.

Por ello se propone que la fracción XVI del artículo 2, que se refiere a la noción de folios, se integre como tercer párrafo del artículo 76, para quedar como sigue: "Artículo 76, tercer párrafo: Los folios que forman el protocolo son aquellas hojas que constituyen la papelería oficial que el notario usa para ejercer la función notarial, son el sustrato o base material del instrumento público notarial en términos de esta ley".

Respecto de la fracción XVII, del artículo 2, que se refiere a la noción de función notarial, creemos que esta definición se ubica mejor en el artículo 26, que se refiere precisamente a la función notarial, en donde se ubicaría como un segundo párrafo, de la siguiente manera: "Artículo 26, segundo párrafo: La función notarial es la actividad que el notario realiza conforme a las disposiciones de esta ley. Posee una

naturaleza compleja, es pública en cuanto proviene de los poderes del estado y de la ley que obran en reconocimiento público de la actividad profesional del notario y de la documentación notarial al servicio de la sociedad, de otra parte es autónoma y libre para el notario que la ejerce, actuando con fe pública”.

En relación con la fracción XXII del artículo 2, en esta fracción se contiene una definición relativa al término uteralteridad. Creo oportuno y pertinente aclarar que este vocablo en realidad es un neologismo, esto es una expresión nueva a la que se atribuye un sentido jurídico que viene perfectamente al caso cuando se trata de definir la actitud que debe observar el notario, cuando en ejercicio de sus funciones interviene asesorando o aconsejando a las partes que ante él acuden a encaminar la resolución del negocio jurídico que les interesa resolver conforme a derecho.

En la fracción en sita, está perfectamente definido el sentido jurídico de la uteralteridad, pero para su mejor inclusión en el cuerpo de la ley, nos parece que debe incluirse como uno de los principios regulatorios e interpretativos de la función y documentación notarial, consignados en el artículo 7 de la ley, específicamente en la fracción V, como su segundo párrafo, para quedar como sigue:

Artículo 7º, segundo párrafo: “La uteralteridad es la actitud y procedimiento de asesoría notarial y de conformación del instrumento notarial que va más allá de una simple imparcialidad, llevando al Notario a ser un verdadero consultor o consejero de cada parte, con atención personal y entrega cuidadosa, de forma tal que se cubran los requisitos de asesoría y consejo para cada una de las partes o solicitantes del servicio, sin descuidar los de la contraparte ni ser parcial contra ellas, sino ejerciendo hacia ellas la misma actitud basada en lo justo concreto del caso de que se trate”.

En el artículo 58, fracción IV. El artículo 58 se refiere a las reglas comunes, a los exámenes para obtener la patente de aspirante o de Notario y en la fracción IV actualmente se dice que los exámenes, tanto en su prueba escrita como la teórica, se efectuarán en la sede del Colegio. Lo que se propone y esto en base a los acuerdos que se tomaron en el grupo de trabajo, es que se modifique la fracción IV de este artículo 58 para quedar de la siguiente manera: “Los exámenes, tanto en su prueba escrita como la teórica, se efectuarán en la sede designada por la autoridad competente”.

Artículo 232, fracción I. El artículo 232 se refiere al recurso de inconformidad que podrá interponer un Notario como resultado de una resolución que emita la autoridad competente, con motivo de una queja presentada contra un Notario. Proponemos variar el texto de la fracción I de dicho numeral que actualmente dice: “Fracción I. Expresará el nombre y apellidos del Notario, su domicilio y el número de

la notaría a su cargo”; para que quede de la siguiente manera: “Artículo 232, fracción I. Expresará el nombre completo y domicilio del promovente, en su caso, el número de la notaría a su cargo y de su patente de Notario”.

Finalmente proponemos modificar el artículo Tercero Transitorio, suprimiendo de este artículo la frase “Archivo de Notarías”, que se encuentra al final de su texto, en virtud de que en las definiciones que se asientan en el artículo 2º ya viene definido lo que es el Archivo General de Notarías y únicamente queda como archivo. Para quedar este artículo Tercero Transitorio de la siguiente manera: “El decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el año 2001 y subsecuentes, deberán considerar específicamente una partida anual, a fin de dotar los elementos necesarios para el acervo documental y la adecuada preservación del archivo”.

Por su atención, muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Están a discusión las propuestas de modificación a los artículos reservados por el diputado Ricardo Molina Teodoro. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra?

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos que fueron reservados por el diputado Ricardo Molina Teodoro.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas por los artículos reservados por el diputado Ricardo Molina Teodoro.

Se solicita a los ciudadanos diputados, en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión “en pro” o “en contra”.

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones. Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Islas León, en pro.

Arne Aus Den Ruthen, en pro.

Hiroishi Suzuki, en pro.

Hernández Labastida Miguel, en pro.

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Manuel Aguilera, abstención.

Levín Coppel, abstención.

Ortiz Haro, abstención.

De Garay, abstención.

Escobedo, abstención.

Rivera Domínguez, abstención.

Jesús Toledano, en pro.

Ricardo Martínez, en pro.

Martínez Parra, a favor.

Eliab Mendoza, a favor.

Ricardo Molina, a favor.

Miguel Angel Peláez, a favor.

José Luis Benítez, en pro.

Castellanos Cortés, en pro.

García Rocha, a favor.

Virginia Jaramillo Flores, en pro.

Alfredo Hernández, en el mismo sentido que el diputado Ricardo Molina.

David Sánchez, a favor.

Miguel Bortolini, en el mismo sentido que el diputado Molina.

Rigoberto Nieto, a favor.

Márquez Franco, en pro.

Hipólito Bravo, en pro.

Juan González, a favor.

A favor, Martínez Enríquez.

Pichardo Mendoza, en el mismo sentido que el diputado Ricardo Molina.

René Baldomero, apoyando las propuestas del diputado Ricardo Molina, en pro.

Cárdenas Pérez, en pro.

Narro Céspedes José, a favor.

René Arce, a favor.

Ernesto Chávez, a favor.

Francisco Chiguil, a favor.

Batres, a favor.

Roberto Rico, a favor.

Hidalgo, a favor.

Antonio Padierna, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Vicente Cuéllar, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Serna Alvarado, a favor.

Sevilla Díaz, a favor.

Angeles Correa, a favor.

Rafael López de la Cerda, a favor.

Ignacio Ruiz, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Manuel Minjares, en pro.

Esveida Bravo, a favor.

Alejandro Vázquez, abstención.

Jesús Galván, en pro.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Luna Parra, abstención.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto? Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 49 votos a favor, 0 votos en contra, 8 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- Por lo tanto, se aprueba la propuesta de modificación a los artículos reservados por el diputado Ricardo Molina Teodoro.

En consecuencia y para referirse a los artículo 2º fracción XVII y XX, 3º, 7º fracción III y IV, 15, 18, 36, 52 fracción II, 53, 55, 58, 67 fracciones I y V, 82, 165, 213, 223, 227 fracción IV, 238 fracción I, 248, 252, 256, 267 y los Transitorios Tercero, Noveno, Décimo y Doceavo, se concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Escobedo Miramontes.

EL C. DIPUTADO EDUARDO ESCOBEDO MIRAMONTES.- Gracias, Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados:

Tengo entendido que el día de hoy en este recinto nos acompañan diversos notarios públicos del Distrito Federal con motivo de la discusión de la Ley del Notariado del Distrito Federal dictaminada por la comisión de la materia de esta Asamblea Legislativa.

El grupo parlamentario del PRI no quiere dejar pasar la ocasión para darles una cordial bienvenida a los señores notarios y miembros del Colegio de Notarios del Distrito Federal.

Compañeras y compañeros:

Nos hemos reservado algunos artículos en los cuales voy a hacer comentarios en función de porqué no coincidimos con la redacción de los diversos artículos que están planteados en el dictamen que se presenta a la consideración del pleno.

Hacemos un reconocimiento igualmente a la comisión que recogió en su oportunidad puntualmente, en muchos de los casos planteados, observaciones que se hicieron por diputados, incluyendo el de la voz, a los diferentes proyectos que hubo en esta ardua tarea de construir una nueva Ley del Notariado del Distrito Federal. Sin embargo, debería yo comentar que nos hemos reservado estos artículos a los que he dado lectura, entre los cuales y aparentan ser muchos, puesto que estamos incluyendo todos los que

comprenden el 256 al 267, que son los artículos que regulan la figura del decanato del Colegio de Notarios del Distrito Federal, por la sencilla razón de que nos parece que éste es un asunto que es propio, exclusivo de los señores notarios del Distrito Federal, agrupados en el colegio correspondiente en donde por la vía de los estatutos de la asociación civil determinen las figuras internas que existan al interior, en este caso del colegio respectivo. No creemos que sea un punto en donde el legislador obligue a señalar cómo se va a conformar un decanato y por lo tanto que todos los expresidentes formarán parte del mismo, dado que repito, hay una total libertad y variación que podría ser los señores notarios del Distrito Federal en los estatutos respectivos de la asociación civil.

Igualmente nos hemos reservado, por ejemplo, en los artículos 2 y 7, en el 2, la fracción XVII y la fracción XX, porque también no coincidimos con los señalamientos o con las redacciones que están establecidas en estos conceptos o nociones que nos parecen no propios de un ordenamiento legal, cuando aquí se señala que la función notarial posee una naturaleza compleja, es pública en cuanto proviene de los poderes del estado y de la ley, es decir, como si los poderes del estado tuvieran una fuente diferente de origen que no fuera la de la ley.

Hemos reservado igualmente, el artículo 7º, que tiene que ver con el artículo 3º, cuando se define que el notariado es una garantía institucional que la Constitución establece. No estamos tampoco de acuerdo con este concepto, nos parece que el notariado es una materia que establece el 122 Constitucional, que es competencia de la Asamblea Legislativa regularla por la vía de un ordenamiento formal y materialmente legislativo y que la Constitución instituye garantías sociales individuales, instituye poderes públicos, los dota de atribuciones, pero no viene a constituir ninguna garantía institucional en este sentido.

Hemos igualmente reservado el artículo 10, que tiene referencia al decreto por el cual el Jefe de Gobierno autorice la creación de nuevas notarías, porque nos parece que las condicionantes que se están estableciendo al Gobierno del Distrito Federal son inadmisibles. La actual ley señala con precisión que el Jefe de Gobierno, en aquel entonces el Jefe del Departamento del Distrito Federal, podía autorizar la creación de nuevas notarías en atención a las necesidades del servicio notarial, y aquí en este artículo 10 se incorporan verdaderas condicionantes que van dirigidas a la autoridad que tiene por principio la responsabilidad de la función y que la delega en particulares por la vía del otorgamiento de la patente correspondiente.

El señalamiento de que no se afecte la preparación que deben tener los solicitantes o el señalamiento de que no se afecte la autonomía, son cuestiones, repito, muy subjetivas que condicionan de manera innecesaria a la autoridad que debe

de operar, debe de ejecutar las disposiciones de esta Ley del Notariado.

En el artículo 15, pensamos igualmente que no debiera de quedar el señalamiento de esa positiva ficta que se establece a cargo del gobierno para que contados determinados días en que el Consejo del Colegio de Notarios le proporciona el proyecto de arancel respectivo, automáticamente opere la aprobación si no se hacen observaciones en un término como es el que se está señalando en este artículo 15, concretamente de 15 días hábiles.

Me parece que la autoridad, en este espíritu de colaboración que hay entre la autoridad rectora, el Jefe de Gobierno, la Consejería Jurídica, la Dirección General Jurídica de Estudios Legislativos y los notarios del Distrito Federal pueden intercambiar una serie de opiniones con el objeto de poder llegar a los proyectos de aranceles que tengan el mayor consenso posible, repito, sin llegar al extremo de sujetar a la autoridad a que opere con cargo a ella una positiva ficta de que automáticamente se entienda aprobado un proyecto si no hace observaciones en 15 días.

En el artículo 18, pensamos nosotros que se impone una obligación a la federación al señalarse que: "Las autoridades y organismos de vivienda del Distrito Federal, así como los de la Federación cuando éstos intervengan en actos que tengan por objeto algún inmueble ubicado en el Distrito Federal..." y sigue la redacción, nos parece que esto va a en contra de lo que dispone el artículo 45 del Estatuto de Gobierno; el artículo 45 del Estatuto de Gobierno, que es un ordenamiento de jerarquía superior, claramente determina que las leyes de la Asamblea solamente pueden imponer obligaciones, atribuciones, facultades a autoridades, órganos locales del Distrito Federal. De ninguna manera a la federación se le pueden imponer disposiciones y menos cuando hay una Ley General de Bienes Nacionales que contempla la figura del notario, del patrimonio inmobiliario federal.

Nos hemos reservado igualmente el artículo 36 que hace referencia al ilícito penal del artículo 250 del Código Penal precisamente por la vinculación que tiene con este artículo 18 en cuanto a la imposición de una obligación a la Federación y por lo tanto la afectación que pueda tener respecto de un notario del patrimonio inmobiliario federal. De la misma forma nos hemos reservado el artículo 52, fracción II, disintimos de que se señale que el Colegio de Notarios es el organizador de la carrera notarial y por lo tanto solamente quede para la autoridad, en la fracción I, el que el Jefe de Gobierno, es decir, el Gobierno del Distrito Federal solamente tiene el carácter de otorgante de las patentes de notario. Bueno, por principio de cuentas esto es inexacto, porque la propia fracción II al decir que el Colegio como es organizador de la carrera notarial se está contradiciendo del mismo contenido de la ley.

El Legislativo, este órgano legislativo que es la Asamblea, está organizando la carrera notarial, está señalando cómo se integra el jurado, está señalando los requisitos para ser aspirante, para participar en los exámenes de oposición y el ejecutivo tiene toda una infraestructura, conforme a la cual también viene a organizar, en la medida de la competencia de la ley, la carrera notarial.

Por lo tanto, es inexacto como queda redactado aquí, que el único organizador de la carrera notarial sea el Colegio de Notarios del Distrito Federal.

El artículo 53, queremos entender cuál es el sentido de las disposiciones, nos parece loable; pero si a las normas jurídicas no se les dan precisión y contenidos ciertos, no dejan de ser disposiciones declarativas, que no tienen efectos.

Dice el artículo 53.- "Colaborarán y recibirán aportaciones y beneficios de la carrera notarial: 1.- Como aportantes de experiencia para la mejora de la carrera notarial y beneficiarios de servicios" Ya la fracción II dice quiénes: Los abogados, estudiantes; la fracción III: Las Barras y Colegios de Abogados; la fracción IV: Otros profesionistas; esta fracción I es incomprensible. Y si no señalamos aquí, incluso a los miembros del Poder Judicial que se señala en la fracción V, inciso a), cuando no hay Poder Judicial en el Distrito Federal, de acuerdo con el 122 el Tribunal Superior de Justicia y los juzgados son órganos de carácter local. Repito, si no se les da precisión, simple y sencillamente no sabemos, vía la disposición imperativa que se está poniendo aquí, en qué términos es esa colaboración que se les está imponiendo a todas estas personas, a estas agrupaciones, a estas Barras de Abogados o con qué alcances van a ser esas colaboraciones.

Estamos igualmente reservando el artículo 55, respecto a la información a perpetua, que un aspirante tiene que llevar ante un juzgado para el objeto de poder presentar la documentación correspondiente; porque nos parece que ya en otros artículos está claro que el Colegio de Notarios va a recibir información y copia de la documentación que presente un aspirante y por lo tanto no se entiende aquí, no se dice para qué efectos será la participación en este caso del Colegio en el procedimiento de información a perpetua. Dice: "El interesado deberá realizar ante autoridad judicial concitación del Colegio para que intervenga según el caso"

El artículo 58 nos parece uno de los más delicados. Tuve la oportunidad de ver varias redacciones que se han hecho o se intentaron hacer a este artículo, en el cual en un principio se había propuesto, si no mal recuerdo, que el jurado para los exámenes de aspirante y de oposición fueran integrados mayoritariamente por los señores notarios y de una manera residual, tres a dos, por parte de funcionarios del Gobierno del Distrito Federal.

En una versión todavía de hace algunos días había un señalamiento en donde se enfatizaba que habría tres vocales designados por el Colegio de Notarios. Ahora tenemos una variación, que entiendo que será ya la definitiva, desde luego entiendo que esto difícilmente podrá dar marcha atrás, pero nosotros no queremos dejar de hacer el señalamiento de que conforme a esta estructuración lo que se está haciendo es dándole a la asociación civil, Colegio de Notarios, toda la facultad para integrar mayoritariamente el Jurado Calificador y por lo tanto se deja solamente al Jefe de Gobierno otorgamiento automático de la petente conforme al resultado que haya dispuesto ese jurado.

Es decir, en lugar de la fórmula que existe actualmente de tres servidores públicos de gobierno y de dos señores notarios, se invierte para que entonces sea un presidente de jurado designado por el Jefe de Gobierno, pero que puede ser un notario, un secretario que va a actuar por parte del jurado o como jurado, que es un notario, un vocal que también es notario y dos vocales, los cuales serán designados con la Consejería Jurídica de una lista de 15 que le proporcione el Colegio de Notarios.

Yo francamente considero que no debe de admitirse esta disposición. Entiendo, lo platicamos varias veces con los miembros de la comisión, con algunos miembros de la comisión, cuál es el sentido, cuál es el propósito que figura aquí, pero de ninguna manera podríamos estar de acuerdo para que una función de la autoridad sea asumida prácticamente por particulares y más cuando en este caso estamos hablando de una asociación civil, un ente de carácter privado y de ninguna manera un ente que está fungiendo como autoridad para estos efectos.

Nos hemos reservado igualmente el artículo 67 en la fracción I y en la fracción V. Cuando tuve la oportunidad de platicar con el actual, todavía Presidente del Colegio de Notarios, mi buen amigo Mario Pérez Salinas, hacía unas reflexiones en relación al propósito de que operaron una fianza de carácter global para los señores notarios del Distrito Federal.

Nosotros no estaríamos de ninguna manera en contra de eso. Lo que hemos nosotros sostenido, es que la redacción que se da en el 67 la fracción I, es otra cosa. Tan es así que la interpretación con compañeros de la comisión han surgido diferentes interpretaciones sobre esta redacción. Aquí lo que dice es que quien otorga la fianza es el Colegio de Notarios y nosotros pensamos que no puede hacerlo, que no estamos en el caso de una fianza accidental en los términos del Código Civil, que estamos en el caso de una fianza de carácter permanente y que la redacción debería de orientarse a que el Colegio tramitará ante institución autorizada, afianzadora, una póliza de fianza con el objeto de poder hacer la globalización correspondiente, pero que

no aparezca aquí que quien está otorgando la fianza como institución o pareciera que como institución afianzadora, es el Colegio de Notarios del Distrito Federal.

Nos hemos reservado la fracción V que tiene que ver con el artículo 248. A lo largo de actividades profesionales de varios de los diputados del grupo parlamentario del PRI, hemos tenido la oportunidad de conocer a gente destacada del gremio notarial, de interrelacionarnos activamente con el Colegio de Notarios del Distrito Federal y sin lugar a dudas diría que es una de las instituciones más profesionales, más serias, siempre con una actitud de apoyo y de colaboración con las autoridades de Gobierno del Distrito Federal; pero el señalamiento que se hace en esta fracción V y en el artículo 248 respecto a que habrá un único Colegio de Notarios y así lo dice el 248: "Por lo anterior y por desempeñar una función en orden de interés público y social, los notarios del Distrito federal estarán agrupados en un único colegio". Bueno, nos parece que esto se coloca ya en una situación que contraría la Constitución, contraría a las interpretaciones que ha hecho ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Voy a dar lectura solamente a ésta, que desde luego es aplicable al caso, estamos hablando del derecho de asociación del 9 Constitucional, estamos hablando también del ejercicio de profesión del artículo 5 Constitucional, hay una ley reglamentaria del 5 expedida por el Congreso de la Unión. Esa ley señala que el Notario es un profesionista y voy a dar lectura a este señalamiento de la Suprema Corte. "La libertad de asociación consagrada por el artículo 9 Constitucional, es el derecho de que gozan los particulares, tanto personas físicas como personas jurídico colectivas, para crear un nuevo ente jurídico que tendrá personalidad propia y distinta de los asociados.

Si la libertad de asociación establecida por el artículo 9 de la Constitución es un derecho de los gobernados, la esfera de protección derivada de la garantía constitucional de que se trata, puede operar en 3 posibles direcciones.

- 1.- Derecho de asociarse formando una organización o incorporándose a una ya existente.
- 2.- Derecho a permanecer en la asociación o renunciar a ella; y
- 3.- Derecho de no asociarse.

Correlativamente la autoridad no podrá prohibir que el particular se asocie, no podrá restringir su derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella, ni tampoco podrá obligarlo a asociarse.

Insisto, el colegio tiene toda una tradición jurídica en esta ciudad, tiene toda una tradición y una probada experiencia y capacidad en términos de profesionalismo, de seriedad,

pero si me parece que el señalamiento al que se llega aquí va en contra de esta interpretación y más aún cuando por ejemplo se señala que no se va a poder proveer de folios a los notarios que no estén al corriente en el pago de las correspondientes cuotas al Colegio de Notarios del Distrito Federal, lo cual en última instancia redundaría también en perjuicio de la propia función notarial.

Nos hemos igualmente reservado el artículo 82, por la razón que ya expuse, dice: "El Colegio podrá abstenerse de proveer de folios a un notario si este no está al corriente en el pago de las cuotas establecidas por dicho colegio".

Nos hemos reservado igualmente el artículo 165, disposición que señala que: "Se aplicará la pena prevista por el artículo 247 del Código Penal, al que, fracción I, interrogado por el Colegio", lo cual nos parece que bueno de ninguna manera va acorde con lo que es el rubro del ilícito penal que contempla el Código de la materia; este rubro se refiere a falsedad en declaraciones judiciales y en informes dado a una autoridad y en este caso, repito que el colegio no es una autoridad.

Igualmente nos hemos reservado lo que dispone el artículo 213. Pensamos que la distinción entre visitas de carácter ordinarias y visitas de carácter especial tiene una razón de ser, y en todo caso estamos aquí hablando ya prácticamente de las visitas de una misma naturaleza, es decir con 72 horas de anticipación hay que avisar que se va a hacer una visita sorpresa, para efecto de ver el funcionamiento de una notaría, y nosotros no estaríamos de acuerdo, sino que estaríamos de acuerdo en mantener la distinción que se hace en la ley vigente.

Igualmente nos hemos reservado el artículo 223, que dice: "El notario incurrirá en responsabilidad administrativa por violaciones a esta ley o a otras leyes relacionadas con su función pública y con motivo del ejercicio de la misma, siempre que tales violaciones sean imputables al notario".

Aquí es una reflexión que queremos nosotros compartir con el pleno, en el sentido de si el notario también tiene o no tiene una responsabilidad por lo que sucede en la notaría. Pareciera ser que la redacción pudiera ir encaminada a que si hay una violación, hay un hecho que cause un perjuicio a un prestatario y éste no es un acto de carácter propio del notario, aún habiendo sucedido en la notaría correspondiente por un empleo de la notaría, por un empleado del notario, ahí no habría ningún tipo de responsabilidad y bueno nos parece que sería un asunto que ameritaría una mayor reflexión.

En el caso del artículo 238, fracción I, simplemente es una cuestión de precisión. No nos parece adecuado que, dice: "El Consejero Jurídico y de Servicios Legales designará al titular del archivo, quien ejercerá, además de las facultades

previstas en estos ordenamientos, las siguientes: fracción I, celebrar previo acuerdo del titular de la Dirección General Jurídica; cuando la Dirección General Jurídica es una unidad administrativa que depende de la Consejería, estamos sujetando al titular de la Consejería a que haya antes un previo acuerdo de un subordinado como es el Director General Jurídico y de Estudios Legislativos.

Estamos igualmente reservando el artículo 248 por las razones a las que ya he me referido, que es el asunto de la colegiación única y obligatoria, y respecto de los Transitorios, estaríamos haciendo los comentarios siguientes.

En cuanto al Tercero Transitorio, no nos parece que sea una disposición transitoria. Es una disposición permanente, y por lo tanto debería de figurar en todo caso en los artículos sustantivos de la ley, no en un transitorio que solamente, como su nombre lo indica, tiene un determinado plazo de vigencia. Claramente se está aquí señalando que a partir del 2001 habrá que incorporar en el Presupuesto de Egresos del Gobierno de la Ciudad una partida destinada a la conservación, mejoramiento, en este caso del Archivo General de Notarías.

Bueno, pues eso no tiene nada de transitorio. Es una disposición ciento por ciento permanente.

En el caso del Noveno Transitorio, nuestra oposición es al asunto de la Junta de Decanos, que insisto, es un asunto que debería de quedar en el resorte autónomo, libre, de los señores Notarios del Distrito Federal y no de parte del Legislativo de la Ciudad de México.

En el caso del artículo Décimo fracción VI, nos parece también que hay que hacer una reflexión en relación a que en este primer proyecto de arancel no se hace un señalamiento y debo de decirlo, respecto al procedimiento de las anteriores modificaciones del arancel. Se pone una disposición transitoria para un primer proyecto de arancel, en el sustantivo correspondiente no se hace y en la fracción VI se deja un espacio para el efecto de señalar que el arancel contemple aspectos principales de la función notarial, determinando cuáles servicios se encuentran fuera del arancel. En arancel debe ser integrado o no debe ser integrado. Creo que también son de las reflexiones que tienen que formularse.

Finalmente, termino con el Décimo Segundo Transitorio, en donde no me parece propio que la Asamblea Legislativa abrogue un instrumento jurídico que no fue emanado por la propia Asamblea. Si aplicamos analógicamente el 72 de la Constitución, solamente un instrumento puede ser abrogado por la propia fuente de origen que lo expidió en su momento y aquí en el Décimo Segundo la Asamblea Legislativa, que es legislativa, que no es ejecutiva, dice que se abroga el

acuerdo del ciudadano Jefe del Departamento del Distrito Federal por el que se crea el Consejo Consultivo del Archivo General de Notarías, bueno, pues eso déjenselo al Jefe de Gobierno, que lo derogue de acuerdo con las disposiciones que se opongan por parte de los sustantivos de esta ley o en su caso que haga la reformulación adecuada si quiere conservar un esquema de consultoría para el mejoramiento del Archivo General de Notarías del Distrito Federal.

Le agradezco mucho ciudadana Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Están a discusión las propuestas de modificación a los artículos reservados por el diputado Eduardo Escobedo Miramontes.

Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra?

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos que fueron reservados por el diputado Eduardo Escobedo Miramontes.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas por los artículos reservados por el diputado Eduardo Escobedo Miramontes.

Se solicita a los ciudadanos diputados, en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones. Comenzamos de derecha a izquierda:

(Votación Nominal)

Islas León, en contra.

Margarita Saldaña, en contra.

Hiroishi Suzuki, en contra.

Hernández Labastida Miguel, en contra.

Pablo Jaime Jiménez, en contra.

Armando Salinas Torre, en contra.

Manuel Aguilera, en contra del texto del dictamen.

Escobedo, en los artículos reservados, en contra del texto del dictamen.

De Garay y Arenas Fernando, en contra del texto del dictamen en los artículos reservados.

Luna Parra, en el mismo sentido que el diputado Escobedo.

Rivera Domínguez, en el mismo sentido que el diputado Aguilera.

Alejandro Vázquez, en el mismo sentido que el diputado Aguilera.

Ortiz Haro, en el mismo sentido que el diputado Escobedo.

Jesús Toledano, en el mismo sentido que el diputado Manuel Aguilera.

Martínez Parra, en contra.

Ricardo Molina, en contra de las propuestas del diputado Escobedo.

Ricardo Martínez, en contra.

Eliab Mendoza, en contra.

Ernesto Chávez, en el mismo sentido que del diputado Ricardo Molina.

Miguel Angel Peláez, en contra.

José Luis Benítez, en contra del texto del dictamen.

Esveida Bravo, en contra del texto.

Castellanos Cortés, en contra.

Martí Batres, en el mismo sentido que el diputado Ricardo Molina.

René Arce, en contra de las propuestas del diputado Escobedo y a favor del dictamen.

Alfredo Hernández, en el mismo sentido que el diputado Ricardo Molina.

García Rocha, en el mismo sentido que el diputado Ricardo Molina.

Ortiz Ayala, en contra de las propuestas hechas por el diputado Escobedo.

Miguel Bortolini, a favor del dictamen y en apoyo al diputado Molina.

Hidalgo, a favor.

Ignacio Ruíz, en contra de las propuestas hechas por el diputado Escobedo.

Márquez Franco, en contra de las propuestas del diputado Escobedo.

Hipólito Bravo, en el mismo sentido que la diputada Lucerito del Pilar Márquez.

Juan González, en contra de las propuestas del diputado Escobedo.

Daniel Martínez, en el mismo sentido que Juan González.

Pichardo Mendoza, en el mismo sentido que el diputado Ricardo Molina.

Virginia Jaramillo, en contra de las propuestas, si así se les pueden llamar, del diputado Escobedo y en pro del dictamen.

David Sánchez Camacho, en el mismo sentido que la diputada Virginia Jaramillo.

Antonio Padierna, en el mismo sentido que la diputada Virginia Jaramillo.

Roberto Rico, en el mismo sentido que la diputada Virginia Jaramillo.

Vicente Cuéllar, en el mismo sentido que el diputado Ricardo Molina.

Guillermo Hernández, en el mismo sentido que el diputado Ricardo Molina.

Albarrán Rodríguez, en contra de las propuestas hechas por el diputado Escobedo.

Rigoberto Nieto, en el mismo sentido que la diputada Elvira Albarrán.

Verónica Moreno, en el mismo sentido que Ricardo Molina.

Martínez Rojo, en el mismo sentido que el diputado Ricardo Molina.

Soto Camacho, en el mismo sentido que el diputado Ricardo Molina.

Javier Serna, a favor del dictamen.

Rafael López de la Cerda, en contra de las propuestas.

Sevilla Díaz, a favor de las propuestas del diputado Eduardo Escobedo.

Angeles Correa, en el mismo sentido que el diputado Ricardo Molina.

Octavio West, en contra del texto de los artículos reservados.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Francisco Chiguil, en el mismo sentido que el diputado Molina.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto? Levín Coppel, en contra.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto? Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, en contra.

Sara Murúa, en el mismo sentido que el diputado Ricardo Molina.

LA C. SECRETARIA. Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente:

13 votos a favor de las propuestas emitidas por el diputado Escobedo.

43 votos en contra de las propuestas; 0 abstenciones.

Cumplida su instrucción, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Se desechan las propuestas presentadas.

En consecuencia se aprueban los artículos reservados en los términos del dictamen.

EL C. DIPUTADO MANUEL AGUILERA GOMEZ (Desde su curul)- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Con qué objeto, señor diputado?

EL C. DIPUTADO MANUEL AGUILERA GOMEZ (Desde su curul)- Con todo respeto, señora Presidenta, entramos al mundo de las confusiones. No se puede votar a favor o en contra de unas propuestas inexistentes. El diputado Escobedo reservó los artículos para comentarlos y no registró propuesta alguna por escrito, en los términos que manda el Reglamento y por lo tanto no había razón para

llevar a cabo esta singular votación que ya se dio y que lo único que probó es que hubo la confusión generalizada; simplemente para el anecdotario de esta Asamblea.

Muchas gracias, señora diputada.

LA C. PRESIDENTA.- De nada, señor diputado. En ese sentido fue la votación.

En consecuencia, se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Notariado con proyecto de decreto de Ley de Notariado del Distrito Federal, en lo general y en lo particular con las propuestas aprobadas.

Remítase a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, para los efectos constitucionales conducentes.

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Atención a la Tercera Edad, Jubilados y Pensionados con proyecto de decreto de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal.

EL C. DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA (Desde su curul).- Señora Presidenta

LA C. PRESIDENTA.- Sí, señor diputado. ¿Con qué objeto, señor diputado?

EL C. DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA (Desde su curul).- Solamente, señora Presidenta, para que en lo sucesivo usted pueda pedirles a los diputados que sean rigurosos al momento de subir a la tribuna, porque si algún diputado dice que tiene reservas para el dictamen, debe presentar las reservas correspondientes y no entretenernos con otro tipo de intervenciones para confundir a la Asamblea.

Gracias, señora Presidenta.

EL C. DIPUTADO EDUARDO ESCOBEDO MIRAMONTES (Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Con qué objeto, señor diputado?

EL C. DIPUTADO EDUARDO ESCOBEDO MIRAMONTES (Desde su curul).- Para que quede registrado en el Diario de los Debates y en el acta circunstanciada de esta sesión, la ignorancia del compañero Batres. No hay ningún artículo en el Reglamento que cuando se determina la reserva por parte de un diputado obligue a hacer propuestas. Se reservan precisamente para votar en contra. Si el diputado Batres estudiara un poquito, se daría cuenta de ello.

EL C. DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA (Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Batres ¿con qué objeto?

EL C. DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA (Desde su curul).- Señora Presidenta: De cualquier manera le reitero mi pronunciamiento en el sentido, para que también quede registrado en el Diario de los Debates, de este entretenimiento artificial de parte de el legislador que me antecedió en el uso de la palabra, que dijo que iba a proponer pero que no propuso nada. Que conste simplemente para saber en lo sucesivo de qué tamaño es el cumplimiento de sus pretensiones en el trabajo legislativo.

Por lo demás, el diputado puede pedir la palabra para decir lo que quiera, ya los demás juzgaremos lo que diga, pero claro que nos damos cuenta cuando nos propone un estratagema, simplemente para desorientar o perder el tiempo.

Gracias, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor diputado.

EL C. DIPUTADO EDUARDO ESCOBEDO MIRAMONTES (Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Señor diputado Eduardo Escobedo.

Sólo le solicito a los diputados que no se haga diálogo.

EL C. DIPUTADO EDUARDO ESCOBEDO MIRAMONTES (Desde su curul).- Le agradezco mucho.

También para que quede rematado y en el Diario de los Debates, esta acentuada ignorancia del diputado: Es un ejemplo de intolerancia el que ahora se cuestione que un diputado pida la palabra para exponer en base a qué argumento se están reservando los artículos correspondientes.

Insisto, no hay un artículo que obligue a que cuando se reserve se hagan propuestas y aquí el compañero diputado debería primero leer la ley, dada su responsabilidad como Presidente de la Comisión de Gobierno.

EL C. DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA (Desde su curul).- Señora Presidenta. Solamente con el propósito de señalar que el diputado no debe enojarse. Ya desde hace dos años hemos oído la pretensión de que conoce muy bien los reglamentos y las leyes de la ciudad y los reglamentos de la Asamblea. Sin embargo, lo que hemos visto ahora es que ha pedido la palabra sin un sentido específico. En lo sucesivo sabremos que la pedirá para no proponer nada.

Gracias, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor diputado.

Se les recuerda a los señores diputados, que estamos en el siguiente punto, por lo que daremos continuidad a ello.

El siguiente punto del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Atención a la Tercera Edad, Jubilados y Pensionados, con proyecto de decreto de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal.

Le damos la bienvenida al público asistente que vino a presenciar la aprobación de esta ley.

En virtud de que dicho dictamen ha sido repartido a las ciudadanas y ciudadanos diputados, en los términos del artículo 38, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consulte la secretaría en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se somete a discusión de inmediato.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura y se somete a discusión de inmediato.

Los que estén porque se dispense la lectura, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Dispensada la lectura, señora Presidenta.

COMISION DE ATENCION A LA TERCERA EDAD, PENSIONADOS Y JUBILADOS

H. orables Asamblea:

A la Comisión de Atención a la Tercera Edad, Pensionados y Jubilados, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las Iniciativas de Ley de Protección a los Adultos Mayores del Distrito Federal, de Integración, Asistencia y Promoción de los Derechos de los Adultos Mayores en el Distrito Federal; y de Integración Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal; presentadas respectivamente por los Diputados Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; María Angélica Luna Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y; David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Base Primera, fracción V, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

42, fracción XIII y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción I, 11, 17, fracción V; 49, 50, 57, 84 fracción I y 86 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 18, 22 y 23 del Reglamento para el Gobierno Interno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es competente y está facultada, para analizar el contenido de las Iniciativas, a efecto de elaborar el correspondiente dictamen, que en este acto se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 4 de Noviembre de 1998, en Sesión del Pleno de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, presentó la Iniciativa de Ley de Protección a los Adultos Mayores del Distrito Federal. En apego al trámite correspondiente, la Secretaria de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, turnó la referida Iniciativa a esta Comisión dictaminadora para su análisis y dictamen.

2. Con fecha 1º de Diciembre de 1998, en Sesión del Pleno de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Diputada María Angélica Luna Parra, presentó la Iniciativa de Ley de Integración, Asistencia y Promoción de los Derechos de los Adultos Mayores en el Distrito Federal. En apego al trámite correspondiente, la Secretaria de la Mesa Directiva de esta misma Asamblea Legislativa, turnó dicha Iniciativa a esta Comisión dictaminadora para su análisis y dictamen.

3. Con fecha 4 de Febrero del presente año, los integrantes de esta Comisión se reunieron para la aprobación de la calendarización de las actividades tendientes a elaborar el dictamen de las Iniciativas de Ley que les fueron turnadas.

4. Con fecha 16 de Agosto del año en curso, en Sesión de la Comisión de Gobierno de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Diputado David Sánchez Camacho, presentó la Iniciativa de Ley de Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal. En apego a trámite correspondiente, la Presidencia de la Comisión de Gobierno de esta Asamblea Legislativa, turnó la Iniciativa en cita a esta Comisión para la aprobación y discusión de su dictamen. Esta Iniciativa fue incorporada a los trabajos de análisis y dictamen aprobados para las otras Iniciativas.

5. De acuerdo con la exposición de motivos de las tres Iniciativas, el objeto primordial que cada una de ellas consiste en establecer las bases legales en beneficio de las Personas Adultas Mayores de sesenta años o más de edad, que residan o transiten por el Distrito Federal,

promoviendo su desarrollo y derechos en materia de previsión social, salud, empleo, cultura, recreación, transporte, educación, protección al consumo, subsidios, pago de derechos, asistencia social y trato preferencial; a efecto de que la población de Personas Adultas Mayores puedan hacer exigibles de las autoridades el respeto irrestricto de los beneficios que les otorga la Ley de la materia.

6. La Comisión de Atención a la Tercera Edad, Pensionados y Jubilados, se abocó a analizar, valorar y cotejar los textos de cada una de las Iniciativas que le fueron turnadas, a fin de presentar un proyecto de dictamen, que contenga en un solo documento los aspectos de mayor relevancia y aplicabilidad de las propuestas de los CC. Diputados.

Con base en los antecedentes que preceden, esta Comisión dictaminadora, expone las siguientes:

CONSIDERANDOS

De acuerdo a los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), existen en nuestro país 6 millones 200 mil personas que cuentan con sesenta años o más de edad, de las cuales 651, 126 viven en el Distrito Federal; de estas últimas, 270, 558 son hombres y 380, 568 son mujeres.

De acuerdo a los avances en la medicina y sus correspondientes disminuciones en las tasas de natalidad y mortalidad, se ha logrado una mayor esperanza de vida, de acuerdo a estadísticas y proyecciones de las instituciones mencionadas se establece que en 1930 la esperanza de vida era de 36 años, para 1995 era de 73.6 años, considerando que para el año 2000 será de 75.3 y para el año 2010 será de hasta 83.7 años; por lo que la población de personas adultas mayores a nivel nacional será de poco mas de 7 millones para el año 2000 y para el 2010 rebasará los 10 millones.

Resulta verdaderamente lamentable el descuido que ha tenido el Gobierno y la Sociedad con relación al cuidado y respeto que se le debe brindar a las personas adultas mayores, mediante los diversos programas de seguridad y asistencia social por parte del primero y de la solidaridad de la segunda. Uno de los sectores sobre quien ha recaído con mas fuerza la perversidad del actual mundo globalizado es precisamente el de las personas adultas mayores, toda vez que la hegemonía de las fuerzas de mercado, del poder y del individualismo marcan las pautas para que los espacios de integración social, política y económica de las personas adultas mayores se estrechen cada vez mas, llevándolas a vivir una realidad de olvido y omisión.

Resulta importante tomar en consideración que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante su Resolución 46/91 asumió "Los Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad", exhortando a los Gobiernos de los países miembros a incorporarlos a sus programas, entre los cuales destacan los relativos a la participación, cuidado, acceso a servicios básicos, acceso a un desarrollo personal, cultura, recreación, educación, espiritualidad, dignidad y seguridad.

Las cifras establecidas por especialistas nos dicen que el setenta y dos por ciento de la población de personas adultas mayores que vive en la capital del país se encuentra inactiva y su única fuente de manutención, es la paupérrima pensión que reciben o el apoyo de algún familiar, hecho este, que las ubica en una situación vulnerable en el aspecto económico y que les obliga a ser dependientes o bien, dedicarse a actividades de sobrevivencia en la economía informal o en los casos extremos en la mendicidad e indigencia; siendo que un gran porcentaje de ese sector mantiene su capacidad, sus facultades y su deseo de participar en los roles sociales productivos y creativos, por lo que resulta de vital importancia rescatar toda la experiencia de su vida y aprovechar la sabiduría que el tiempo les ha dejado y fortalecer así la gran cadena generacional y responder con justicia a los esfuerzos que han realizado en su vida para combatir la exclusión.

La Ciudad de México, es un lugar que para muchos mexicanos ha sido un centro de reunión y confluencia de personas de todos los rincones del país, que comparten un espacio vital en el que se han tejido origen y destino de muchas familias. Es una ciudad compleja y agresiva, que si no se hace un esfuerzo adicional, las dificultades que implica la convivencia de muchos millones de personas, las crisis económicas y sociales pueden generar estados de exclusión, olvido y abandono, que hace que las personas adultas mayores que aquí habitan caigan en situaciones de extrema marginalidad.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé garantías individuales como un conjunto de derechos, elementales e inherentes, a la persona humana, que la protege sin distinción de nacionalidad, edad, sexo, raza, creencia religiosa o política.

Sin embargo, es necesario contar con un cuerpo legal que busque generar una cultura de respeto e integración de la persona adulta mayor, que evite su abandono, haciendo explícitos sus derechos humanos y ciudadanos, así como los compromisos de la Sociedad y las Autoridades.

A continuación se detallará en contenido de la misma que se encuentra integrada por Siete Títulos, Quince Capítulos, Cincuenta Artículos Permanentes y Cuatro Transitorios.

En el Título Primero, denominado "Disposiciones Generales", se establecen claramente los objetivos y características esenciales de la Ley; los sujetos a quienes van encaminadas las disposiciones y su ámbito territorial de aplicación; estableciéndose como objetivo principal, el propiciar una mejor calidad de vida para las personas de sesenta años de edad en adelante, que residan o transiten por el Distrito Federal, reconociendo, garantizando y promoviendo sus derechos, estimulando su valoración y reincorporación social, a través de una cultura de permanente respeto y continuo reconocimiento.

En el Título Segundo, al que se denominó "Principios y Derechos", se establece de manera genérica los derechos que otorga la Ley a las personas adultas mayores que residen o transitan en el territorio del Distrito Federal, así como los principios que regirán la observación y aplicación del propio cuerpo legal.

En el Título Tercero denominado "De las obligaciones de la familia", se establece claramente que la familia deberá cumplir su función social procurando la permanencia del adulto mayor dentro de su entorno, proveyéndole de todos los elementos materiales y afectivos para su subsistencia.

El Título Cuarto se denominó "De las Facultades y Obligaciones de las Autoridades", en el cual se establecen específicamente acciones para el Jefe de Gobierno, las Secretarías de Gobierno, de Salud, de Desarrollo Social, de Turismo y para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, en las que también tienen participación la familia de las personas adultas mayores y la Sociedad Organizada.

El Título Quinto se denominó "Del Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores", se establece la creación de este consejo cuya función será la de un órgano honorario de consulta, asesoría y evaluación de acciones de concertación, coordinación, planeación y promoción necesarias para favorecer la plena integración y desarrollo de las personas adultas mayores.

En el Título Sexto denominado "De las Acciones de Gobierno y Servicios", se establece claramente que la Administración Pública del Distrito Federal, establecerá programas en los que las personas adultas mayores se vean beneficiadas en el uso del transporte público del Distrito Federal, en la protección a la economía y en el otorgamiento de una atención preferencial que agilice los trámites y procedimientos administrativos en los que formen parte.

En el Título Séptimo, al que se denominó "De la Asistencia Social", se establece claramente la obligación de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal para promover e instrumentar políticas de asistencia social para

las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo.

Con base en las consideraciones y razonamientos expuestos, esta Comisión Dictaminadora emite las siguientes:

CONCLUSIONES

1. Es de aprobarse la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, misma que se encuentra enriquecida con los aspectos de mayor relevancia que contenían las tres Iniciativas de Ley que fueron turnadas a esta Comisión para su análisis y dictamen, teniendo como objeto establecer las bases legales que benefician a la población de personas adultas mayores, de sesenta años o más de edad, que radique o transite por la ciudad capital, promoviendo su desarrollo e integración social, así como sus derechos en materia de salud, asistencia social, empleo, cultura, recreación, transporte, turismo, protección a la economía, descuentos, subsidios y pago de servicios, así como la inclusión de programas y acciones en beneficio de la población adulta mayor en las políticas gubernamentales.

2. Es de aprobarse la creación del Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que servirá como órgano honorario de consulta, asesoría y evaluación, de todas y cada una de las acciones que se inicien con el propósito de beneficiar a la población de personas adultas mayores.

3. No son de aprobarse las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y de la Procuraduría Social del Distrito Federal, propuestas en la Iniciativa de la Diputada Angélica Luna Parra.

Como resultado de los razonamientos expuestos en el presente dictamen, esta Comisión de Atención a la Tercera Edad, Pensionados y Jubilados, considera que la integración de las Iniciativas originales representa el instrumento idóneo para establecer las bases legales que benefician a las personas adultas mayores que residan o transiten en el Distrito Federal, por lo que se permite someter a la consideración del Pleno de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el siguiente:

DECRETO DE INICIATIVA QUE CREA LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL.

Artículo Único.- Se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, para quedar como sigue:

**LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES
EN EL DISTRITO FEDERAL**

TITULO PRIMERO

**CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en el Distrito Federal. Tiene por objeto proteger y reconocer los derechos de las personas de sesenta años de edad en adelante, sin distinción alguna, para propiciarles una mejor calidad de vida y su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural.

Artículo 2.- Toda persona de sesenta años de edad en adelante, sin distinción alguna, gozará de los beneficios de esta ley sin perjuicio de los contenidos en otras disposiciones.

La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley, estará a cargo de:

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

II. Las Secretarías y demás Dependencias que integran la Administración Pública, así como las Delegaciones, Organos Desconcentrados y Entidades Paraestatales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción;

III. La familia de la persona adulta mayor ; y

IV. Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, cualquiera que sea su forma o denominación.

Los sectores público, social y privado, en términos de lo dispuesto por este artículo, celebrarán los convenios o acuerdos de colaboración entre sí, y con las instancias federales correspondientes que realicen alguna o varias actividades que constituyen los objetivos de esta ley.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Personas Adultas Mayores.- Aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o de paso en el Distrito Federal; contemplándose en diferentes condiciones:

a) Independiente: aquella persona apta para desarrollar actividades físicas y mentales sin ayuda permanente parcial.

b) Semidependiente: aquella a la que sus condiciones físicas y mentales aún le permiten valerse por sí misma, aunque con ayuda permanente parcial.

c) Dependiente absoluto: aquella con una enfermedad crónica o degenerativa por la que requiera ayuda permanente total o canalización a alguna institución de asistencia.

d) En situación de riesgo o desamparo.- aquellas que por problemas de salud, abandono, carencia de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales o desastres naturales, requieren de asistencia y protección del Gobierno del Distrito Federal y de la Sociedad Organizada.

II. Asistencia Social.- Al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental.

III. Delegaciones.- Organos político-administrativos de las Demarcaciones Territoriales en el Distrito Federal;

IV. Consejo.- El Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores;

V. Ley.- La presente Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal;

VI. Geriatria.- El servicio brindado para la atención de la salud de las personas adultas mayores;

VII. Gerontología.- Servicio otorgado por personas dedicadas al estudio del envejecimiento desde una perspectiva biopsicosocial; y

VIII. Integración social.- El conjunto de acciones que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y la Sociedad organizada, encaminadas a modificar y superar las circunstancias que impidan a las personas adultas mayores su desarrollo integral.

**TITULO SEGUNDO
PRINCIPIOS Y DERECHOS**

**CAPITULO I
DE LOS PRINCIPIOS**

Artículo 4.- Son principios rectores en la observación y aplicación de esta ley:

I.- Autonomía y autorrealización: Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas adultas mayores tendientes a fortalecer su independencia personal, su capacidad de decisión y su desarrollo personal;

II.- Participación: En todos los casos de la vida pública, y en especial en lo relativo a los aspectos que les atañen directamente deberán ser consultados y tomados en cuenta y se promoverá su presencia e intervención;

III.- Equidad: Consistente en el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, situación económica, raza, credo, religión o cualquier otra circunstancia;

IV.- Corresponsabilidad: Para la consecución del objeto de esta Ley, se promoverá la concurrencia de los sectores público y social y en especial de las familias con una actitud de responsabilidad compartida; y

V.- Atención diferenciada: Es aquel que obliga a los órganos locales de Gobierno del Distrito Federal a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores.

CAPITULO II DE LOS DERECHOS

Artículo 5.- *De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas adultas mayores los siguientes derechos:*

A). De la integridad y dignidad:

I. A la vida, con calidad, siendo obligación de la familia, de los órganos locales de Gobierno del Distrito Federal y de la sociedad, garantizar a las personas adultas mayores, su sobrevivencia así como el acceso a los mecanismos necesarios para ello;

II. A la no discriminación, por lo que la observancia a sus derechos se hará sin distinción alguna;

III. A una vida libre de violencia;

IV. A ser respetados en su persona, en su integridad física, psicoemocional y sexual;

V. A ser protegidos contra toda forma de explotación;

VI. A recibir protección por parte de su familia, órganos locales de Gobierno y sociedad;

VII. A gozar de oportunidades, en atención a las condiciones a que se refiere la fracción I, del artículo 3 de la ley, para mejorar progresivamente las capacidades que les faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad, respetando en todo momento su heterogeneidad; y

VIII. A vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerza libremente sus derechos.

B). De la certeza jurídica y familia:

I. A vivir en el seno de una familia, o a mantener relaciones personales y contacto directo con ella aún en el caso de estar separados, salvo si ello es contrario a sus intereses;

II. A expresar su opinión libremente, conocer sus derechos y a participar en el ámbito familiar y comunitario, así como en todo procedimiento administrativo o judicial, que afecte sus esferas personal, familiar y social;

III. A recibir un trato digno y apropiado cuando sean víctimas, o ellos mismos cometan cualquier tipo de ilícito o infracción;

IV. A recibir el apoyo de los órganos locales de Gobierno en lo relativo al ejercicio y respeto de sus derechos a través de las instituciones creadas para tal efecto como son: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de las Procuradurías competentes y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y

V. A contar con asesoría jurídica gratuita y contar con un representante legal cuando lo considere necesario, poniendo especial cuidado en la protección de su patrimonio personal y familiar.

C). De la salud y alimentación:

I. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales, para su atención integral;

II. A tener acceso a los servicios de salud, en los términos del párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional, con el objeto de que gocen cabalmente de bienestar físico, mental, psicoemocional y sexual; para obtener mejoramiento en su calidad de vida y la prolongación de ésta; y

III. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal.

D). De la educación, recreación, información y participación :

I. De asociarse y reunirse;

II. A recibir información sobre las instituciones que prestan servicios para su atención integral;

III. A recibir educación conforme lo señala el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

IV. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad.

E) Del trabajo:

I. A gozar de oportunidades igualitarias de acceso al trabajo o de otras posibilidades de obtener un ingreso propio, así como a recibir una capacitación adecuada.

F) De la Asistencia Social:

I. A ser sujetos de programas de asistencia social cuando se encuentren en situación de riesgo o desamparo, que garanticen su atención integral.

TITULO TERCERO

CAPITULO UNICO DE LAS OBLIGACIONES DE LA FAMILIA

Artículo 6.- *La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social, por tanto de manera constante y permanente deberá hacerse cargo de cada una de las personas adultas mayores que formen parte de ella, conociendo sus necesidades, proporcionándoles los elementos necesarios para su atención integral.*

Artículo 7.- *El lugar ideal para que la persona adulta mayor permanezca es su hogar; y sólo en caso de enfermedad, decisión personal o causas de fuerza mayor, podrá solicitar su ingreso en alguna institución asistencial pública o privada dedicada al cuidado de personas adultas mayores.*

Artículo 8.- *La familia tendrá las siguientes obligaciones:*

I. Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código Civil;

II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor participe activamente, y promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de apoyo;

III. Conocer los derechos de las personas adultas mayores, previstos en la presente ley, así como los que se encuentran contemplados en nuestra Constitución y demás ordenamientos para su debida observancia; y

IV. Evitar que alguno de sus integrantes, cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia o actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos.

Artículo 9.- *La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, deberá tomar las medidas de prevención o provisión para que la familia participe en la atención de las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo.*

TITULO CUARTO DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES

CAPITULO I DEL JEFE DE GOBIERNO

Artículo 10.- *Corresponde al Jefe de Gobierno en relación a las personas adultas mayores:*

I. Realizar, promover y alentar los programas de asistencia, protección, provisión, prevención, participación y atención;

II. Concertar con la Federación, Estados y Municipios, los convenios que se requieran, para la realización de programas de defensa y representación jurídica, protección, provisión, prevención, participación y atención;

III. Concertar la participación de los sectores social y privado en la planeación y ejecución de programas;

IV. Coordinar las acciones y promover medidas de financiamiento para la creación y funcionamiento de instituciones y servicios para garantizar sus derechos;

V. Fomentar e impulsar la atención integral;

VI. Promover, fomentar, difundir y defender el ejercicio de sus derechos, así como las obligaciones de los responsables de estos;

VII. Fomentar y promocionar la estabilidad y el bienestar familiar;

VIII. Implementar, en coordinación con las instancias competentes, las medidas de seguridad pública y de protección civil en los centros educativos, culturales y recreativos; así como acciones preventivas con la participación de la comunidad;

IX. Presidir el Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores;

X. Crear los mecanismos o instancias correspondientes para el cumplimiento de esta Ley; y

XI. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos.

CAPITULO II DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Artículo 11.- *La Secretaría de Gobierno deberá:*

I. Implementar los programas necesarios, a efecto de promover el empleo para las personas adultas mayores, tanto en el sector público como privado, atendiendo a su profesión u oficio, y a su experiencia y conocimientos teóricos y prácticos, sin mas restricciones que su limitación física o mental;

II. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico deberá impulsar programas de autoempleo para las personas adultas mayores, de acuerdo a su profesión u oficio, a través de apoyos financieros, de capacitación y la creación de redes de producción, distribución y comercialización; y

III. Proporcionar asesoría jurídica y representación legal a las personas adultas mayores, a través de personal capacitado a fin de garantizar su integridad y evitar cualquier acto de discriminación, respetando en todo momento su heterogeneidad.

CAPITULO III DE LA SECRETARIA DE SALUD

Artículo 12.- *Corresponde a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables:*

I. Garantizar el acceso a la atención médica en las clínicas y hospitales con una orientación especializada para las personas adultas mayores;

II. Proporcionarles una cartilla médica de autocuidado, que será utilizada indistintamente en las instituciones públicas y privadas; en la cual se especificará el estado general de salud, enfermedades crónicas, tipo de sangre, medicamentos administrados, reacciones secundarias e implementos para aplicarlos, tipo de dieta suministrada, consultas médicas y asistencias a grupos de autocuidado;

III. En coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, implementará programas con el objeto de proporcionar los medicamentos que necesiten para mantener un buen estado de salud;

IV. Fomentar la creación de redes de atención en materia de asistencia médica, cuidados y rehabilitación, a través

de la capacitación y sensibilización sobre la problemática específica de los adultos mayores; y

V. Fomentar la creación y capacitación de auxiliares de adultos mayores, que los atenderán en:

a) Primeros auxilios;

b) Terapias de rehabilitación;

c) Asistirlos para que ingieran sus alimentos y medicamentos;

d) Movilización;

e) Atención personalizada en caso de encontrarse postrados.

Se entenderá por atención médica al conjunto de servicios integrales para la prevención, tratamiento, curación y rehabilitación que se proporcionan a las personas adultas mayores en todos los niveles, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

Artículo 13.- *La Secretaría de Salud del Distrito Federal, implementará programas y concertará convenios con las instituciones de salud del Gobierno Federal y las de iniciativa privada, a fin de que las personas adultas mayores puedan tener acceso a los servicios de atención médica que proporcione el Sistema de Salud.*

Artículo 14.- *Las instituciones públicas, privadas y sociales, que otorguen atención médica, deberán contar con personal que posea vocación, capacidad y conocimientos en el cuidado de las personas adultas mayores.*

CAPITULO IV DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Artículo 15.- *La Secretaría de Desarrollo Social, deberá coordinar e implementar las acciones que se requieran, para promover la integración social de las personas adultas mayores y para brindarles los servicios de asistencia social y atención integral a los que se refiere esta Ley.*

Artículo 16.- *La Secretaría de Desarrollo Social, implementará las acciones pertinentes para garantizar la cobertura en materia alimentaria para las personas adultas mayores, impulsando la participación comunitaria para la dotación de alimentos nutricionalmente balanceados para las personas adultas mayores.*

Con objeto de ampliar los mecanismos de información a la población a fin de que conozcan alternativas alimentarias para las personas adultas mayores deberá:

I. Organizar campañas de orientación e información nutricional de acuerdo a las condiciones físicas de las personas adultas mayores;

II. Publicar materiales de orientación nutricional y campañas de difusión en medios masivos de comunicación; y

III. Establecer convenios específicos de colaboración con instituciones y organismos públicos, sociales y privados que brinden orientación alimentaria a las personas adultas mayores.

Artículo 17.- *La Secretaría de Desarrollo Social, promoverá la coordinación con las instituciones federales y locales de salud y educación, para implementar programas de sensibilización y capacitación con objeto de favorecer la convivencia familiar con las personas adultas mayores, para que esta sea armónica.*

Artículo 18.- *La Secretaría de Desarrollo Social y las Delegaciones, promoverán la coordinación con la Federación y con las instituciones educativas, para la implementación de políticas y programas de educación y capacitación para las personas adultas mayores.*

Artículo 19.- *La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con las Delegaciones, implementará programas de estímulos e incentivos a las personas adultas mayores que estudien.*

Artículo 20.- *La Secretaría de Desarrollo Social, implementará programas, a efecto de crear y difundir entre la población en general y en la familia, la cultura de dignificación, respeto e integración a la sociedad, de las personas adultas mayores.*

Artículo 21.- *Corresponderá al Instituto de Cultura del Distrito Federal, estimular a las personas adultas mayores a la creación y al goce de la cultura y facilitará el acceso a la expresión a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos comunitarios, nacionales e internacionales.*

Artículo 22.- *El Instituto de Cultura del Distrito Federal, promoverá ante las instancias correspondientes que en los eventos culturales organizados en el Distrito Federal se propicie la accesibilidad y la gratuidad o descuentos especiales, previa acreditación de edad a través de una identificación personal.*

Artículo 23.- *El Instituto de Cultura del Distrito Federal, diseñará programas culturales para efectuar concursos en los que participen exclusivamente personas adultas mayores, otorgando a los ganadores los reconocimientos y premios correspondientes.*

Artículo 24.- *Las personas adultas mayores tienen derecho a participar de manera activa, en las festividades cívicas y tradicionales que se celebren en su comunidad; en todo caso promoviéndose que ellas sean las transmisoras del valor y significado histórico de las costumbres, efemérides y de los actos que se celebren.*

Artículo 25.- *En todo momento, la persona adulta mayor tiene la libre opción de integrarse a las actividades implementadas para la población en general, o a las específicas para ellos.*

CAPITULO V DE LA SECRETARIA DE TURISMO

Artículo 26.- *La Secretaría de Turismo del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, promoverán actividades de recreación y turísticas diseñadas para personas adultas mayores.*

Para tal efecto se realizarán acciones respectivas a fin de que en parques, jardines, kioscos, plazas públicas, teatros al aire libre y demás lugares públicos destinados a la recreación se cuente con los espacios y actividades que faciliten la integración de las personas adultas mayores.

Artículo 27.- *Para garantizar este derecho a la recreación y turismo, la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, difundirá permanentemente a través de los medios masivos de comunicación, las actividades, que se realizan a favor de las personas adultas mayores.*

CAPITULO VI DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 28.- *Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, en materia de personas adultas mayores:*

I. Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia y orientación jurídica, en especial aquellos que se refieren a la seguridad de su patrimonio, en materia de alimentos y testamentaria;

II. Realizar programas de prevención y protección para las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo, para incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos en instituciones adecuadas;

III. Coadyuvar con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la atención y tratamiento de las personas adultas mayores víctimas de cualquier delito;

IV. Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores;

V. Promover, mediante la vía conciliatoria, la solución a la problemática familiar, cuando no se trate de delitos tipificados por el Código Penal o infracciones previstas en la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar;

VI. Recibir quejas, denuncias e informes, sobre la violación de los derechos de las personas adultas mayores, haciéndolo del conocimiento de las autoridades competentes y de ser procedente ejercitar las acciones legales correspondientes;

VII. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando sea procedente, cualquier caso de maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación, y en general cualquier acto que perjudique a las personas adultas mayores;

VIII. Procurar que las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo, cuente con un lugar donde vivir, que cubra sus necesidades básicas;

IX. Vigilar que las instituciones presten el cuidado y atención adecuada, a las personas adultas mayores respetando sus derechos, a través de mecanismos de seguimiento y supervisión, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social;

X. Establecer programas de apoyo a las familias para que la falta de recursos no sea causa de separación de las personas adultas mayores; y

XI. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos.

TITULO QUINTO

CAPITULO UNICO

DEL CONSEJO ASESOR PARA LA INTEGRACION, ASISTENCIA, PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Artículo 29.- Se crea el Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, como un órgano honorario de consulta, asesoría y evaluación de acciones de concertación, coordinación, planeación y promoción necesarias para favorecer la plena integración y desarrollo de las personas adultas mayores.

Artículo 30.- El Consejo estará integrado por el titular de:

I. La Jefatura de Gobierno, quien fungirá como presidente del Consejo;

II. La Secretaría de Desarrollo Social, quien fungirá como Secretario Técnico;

III. La Secretaría de Gobierno;

IV. La Secretaría de Salud;

V. La Procuraduría Social;

VI. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal; y por

VII. Dos Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de las Comisiones relacionadas con la materia;

El Consejo invitará a formar parte del mismo a nueve representantes de organizaciones sociales, privadas o ciudadanos que se hayan destacado por su trabajo y estudio en la materia, quienes podrán coordinar los grupos de trabajo del Consejo.

El Consejo podrá invitar a que asistan a las sesiones que celebre, a representantes de otras instancias locales, federales e internacionales, así como académicos, especialistas o empresarios encargados de desarrollar programas, actividades o investigaciones relacionadas con la población de personas adultas mayores.

Los servidores públicos a que se refieren las fracciones I a VI de este artículo nombrarán un suplente.

Artículo 31.- El Consejo tendrá las siguientes funciones:

I. Propiciar la colaboración y participación de instituciones públicas y privadas en acciones que la Administración Pública emprenda para la atención integral de las personas adultas mayores;

II. Proponer la realización de estudios que contribuyan a mejorar la planeación y programación de las medidas y acciones para elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores;

III. Participar en la evaluación de programas para la población de personas adultas mayores, así como proponer a las instituciones encargadas de dichos programas, los lineamientos y mecanismos para su ejecución;

IV. Fomentar la elaboración, publicación y distribución de material informativo para dar a conocer la situación de la población de personas adultas mayores en el Distrito Federal, alternativas de participación, solución de problemas y mejora de servicios y programas;

V. Proponer la participación ciudadana en actividades y proyectos dirigidos a la plena integración de las personas adultas mayores en la vida económica, política, social y cultural.

VI. Proponer mecanismos de concertación y de coordinación en materia de desarrollo social;

VII. Elaborar un informe anual que se remitirá a las Comisiones correspondientes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su conocimiento; y

VIII. Las demás funciones señaladas por el Jefe de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Social.

Artículo 32.- Para el mejor desempeño de sus funciones, el Consejo deberá organizar grupos de trabajo, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social.

Artículo 33.- Al Presidente del Consejo le corresponde:

I. Representar al Consejo ante las distintas autoridades e instituciones públicas y privadas;

II. Presidir las reuniones del Consejo;

III. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones;

IV. Dictar las políticas necesarias para mejorar la operación del Consejo; y

V. Someter a consideración del Consejo, los estudios, propuestas y opiniones que emitan los grupos de trabajo.

Artículo 34.- Al Secretario Técnico del Consejo le corresponde:

I. Coordinar las actividades del Consejo y de los grupos de trabajo;

II. Convocar a sesiones a los integrantes del Consejo;

III. Formular la orden del día para las sesiones del Consejo;

IV. Someter a consideración del Consejo los programas de trabajo del mismo;

V. Difundir y dar seguimiento a las resoluciones y trabajo del Consejo;

VI. Suplir al Presidente del Consejo en casos de ausencia.

VII. Proporcionar asesoría técnica al Consejo;

VIII. Pasar lista a los miembros integrantes del Consejo;

IX. Levantar las actas de cada una de las sesiones del Consejo y registrarlas con su firma;

X. Llevar el control de la agenda;

XI. Entregar actas de sesiones, programas de trabajo, orden del día y documentación necesaria para las sesiones de trabajo;

XII. Leer el acta de la sesión anterior; y

XIII. Realizar los trabajos que le encomiende el Presidente del Consejo.

Artículo 35.- La integración de los grupos de trabajo, sus atribuciones y las sesiones del Consejo, serán definidas en el reglamento que al efecto se expida.

Artículo 36.- Deberán formarse Consejos de Personas Adultas Mayores en cada Demarcación Territorial para fomentar la participación de la población, y dar a conocer las necesidades y demandas de las personas adultas mayores.

TITULO SEXTO

DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO Y SERVICIOS

CAPITULO I

DEL TRANSPORTE

Artículo 37.- La Administración Pública del Distrito Federal, a través de los órganos competentes, establecerá programas en los que las personas adultas mayores se vean beneficiadas en el uso del transporte público del Distrito Federal, que se ajusten a las necesidades de las personas adultas mayores;

Artículo 38.- Las personas adultas mayores, tendrán derecho a obtener tarifas preferenciales o exenciones de pago al hacer uso del servicio público de transporte, de conformidad con las disposiciones aplicables de la materia.

Artículo 39.- La Secretaría de Transportes y Vialidad promoverá la celebración de convenios de colaboración con los concesionarios para que las unidades de transporte público se ajusten a las necesidades de las personas adultas mayores y se cumpla con lo establecido en el artículo anterior.

CAPITULO II

DE LA PROTECCION A LA ECONOMIA, DESCUENTOS, SUBSIDIOS Y PAGO DE SERVICIOS

Artículo 40.- La Administración Pública del Distrito Federal, a través de sus órganos correspondientes,

implementará programas de protección a la economía para la población de personas adultas mayores, de tal manera que éstas se vean beneficiadas al adquirir algún bien o utilizar algún servicio y se encuentren debidamente informadas para hacer valer este derecho.

Artículo 41.- La Administración Pública del Distrito Federal, a través de las dependencias competentes, promoverá la celebración de convenios con la iniciativa privada a fin de que se instrumenten campañas de promociones y descuentos en bienes y servicios que beneficien a las personas adultas mayores.

Artículo 42.- La Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, deberá promover e instrumentar descuentos en el pago de derechos por los servicios que otorga, cuando el usuario de los mismos sea una persona adulta mayor. Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, dar a conocer dentro del primer mes de cada año el monto de los descuentos y los requisitos a cubrir.

CAPITULO III DE LA ATENCION PREFERENCIAL

Artículo 43.- Será obligación de las Secretarías y demás dependencias que integran la Administración Pública, así como las Delegaciones, Organos Desconcentrados y Entidades Paraestatales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción, vigilar y garantizar la defensa de los derechos de las personas adultas mayores otorgándoles una atención preferencial que agilice los tramites y procedimientos administrativos a realizar.

Artículo 44.- La Secretaría de Desarrollo Económico promoverá la celebración de convenios de concertación con la iniciativa privada, a fin de que la atención preferencial para las personas adultas mayores, también sea proporcionado en instituciones bancarias, tiendas de autoservicio y otras empresas mercantiles.

TITULO SEPTIMO CAPITULO UNICO DE LA ASISTENCIA SOCIAL

Artículo 45.- Toda persona que tenga conocimiento de que una persona adulta mayor se encuentre en situación de riesgo o desamparo podrá pedir la intervención de las autoridades competentes para que se apliquen de inmediato las medidas necesarias para su protección y atención.

Artículo 46.- La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia en el Distrito Federal, promoverá e instrumentará políticas de asistencia social para las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo.

Artículo 47.- Cuando una institución pública, privada o social, se haga cargo total de una persona adulta mayor, deberá:

- I. Proporcionar atención integral;
- II. Otorgar cuidado para su salud física y mental;
- III. Fomentar actividades y diversiones que sean de su interés;
- IV. Llevar un registro de ingresos y egresos;
- V. Llevar el seguimiento, evolución y evaluación de los casos atendidos;
- VI. Llevar un expediente personal minucioso;
- VII. Expedir copia del expediente en caso de que sea solicitado por sus familiares o cualquier otra institución que por cualquier causa continúe su atención, con objeto de darle seguimiento a su cuidado; y
- VIII. Registrar los nombres, domicilios, números telefónicos y lugares de trabajo de sus familiares.

Artículo 48.- En todo momento las Instituciones públicas, privadas y sociales deberán garantizar y observar el total e irrestricto respeto a los derechos de las personas adultas mayores que esta ley les consagra.

Artículo 49.- Todas las instituciones públicas, privadas y sociales que presten asistencia a las personas adultas mayores, deberán contar con personal que posea vocación, capacidad y conocimientos orientados a la atención de éstas.

Artículo 50.- Toda contravención a lo establecido en la presente ley, por las instituciones de asistencia privada, será hecha del conocimiento de la Junta de Asistencia Privada, a efecto de que actúe en consecuencia.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango, que contravengan lo establecido en la presente ley.

TERCERO: *El Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, deberá constituirse en un lapso no mayor de noventa días naturales, a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.*

CUARTO: *Por ser de interés general y para su mayor difusión, publíquese en el Diario Oficial de la Federación.*

Por la Comisión de Atención a la Tercera Edad, Jubilados y Pensionados, firman: Diputada Sara Isabel Castellanos Cortés; diputado David Sánchez Camacho; diputada Virginia Jaramillo Flores; diputada María Angélica Luna Parra; diputado Miguel Hernández Labastida; diputado Guillermo Hernández Reyes.

LA C. PRESIDENTA.- Para fundamentar el dictamen, así como para presentar propuestas de modificación al dictamen de referencia a nombre de la Comisión, se le concede el uso de la palabra a la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés.

LA C. DIPUTADA SARA ISABEL CASTELLANOS CORTES.- Con su venia, señora Presidenta.

Compañeros diputados y diputadas; público en general: Considero importante comentar a ustedes, que en lo personal conocer las estadísticas y estimaciones que diversos organismos han realizado respecto de las personas adultas mayores, mismas que dan a conocer que debido al aumento en la esperanza de vida, este sector aumenta día con día. Esta situación despertó en mí, como parte de este órgano legislativo, una gran preocupación de que no existiera en el mismo una comisión que se abocara a la atención exclusiva de este noble sector social, por lo que pugué por la creación de la Comisión de Atención a la Tercera Edad, Pensionados y Jubilados, que por primera vez existe en este órgano y que tengo el honor de presidir.

Esta Comisión de Atención a la Tercera Edad, Pensionados y Jubilados recibió para su análisis y dictamen 3 iniciativas de ley: una de ellas la presentó la diputada Angélica Luna Parra, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional; otra el diputado David Sánchez Camacho, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática; y una más la de la voz.

Estas iniciativas presentan como objetivo fundamental el de que se establezcan las bases legales que beneficiaran a las personas adultas mayores de 60 años o más de edad que residan o transiten en el Distrito Federal, promoviendo su desarrollo y sus derechos, procurando con ello generar una cultura de permanente respeto y continuo reconocimiento que estimule su valoración y facilite su reincorporación social.

Asimismo, quisiera pedir autorización a la Presidencia para que al terminar la lectura de la exposición de motivos pueda dar lectura a algunas reservas que hemos realizado en forma conjunta los integrantes de la comisión y que me han pedido que sea yo misma quien lo plantee.

Doy lectura a la exposición de motivos que sustenta el siguiente dictamen.

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo a los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Consejo Nacional de Población, existen en nuestro país 6 millones 200 mil personas que cuentan con 60 años o más de edad, de las cuales 651,126 viven en el Distrito Federal; de estas últimas, 270,558 son hombres y 380,568 son mujeres.

De acuerdo a los avances en la medicina y sus correspondientes disminuciones en las tasas de natalidad y mortalidad, se ha logrado una mayor esperanza de vida. De acuerdo a estadísticas y proyecciones de las instituciones mencionadas, se establece que en 1930 la esperanza de vida era de 66 años; en 1995 era de 73.6 años. Considerando que para el año 2000 será de 77.3 y para el año 2010 será hasta del 83.7 años; por lo que la población de personas adultas mayores a nivel nacional será de poco más o menos de 7 millones para el año 2000 y para el 2010 rebasará los 10 millones.

Resulta verdaderamente lamentable el descuido que ha tenido el gobierno y la sociedad con relación al cuidado y respeto que se le debe brindar a las personas adultas mayores, mediante los diversos programas de seguridad y asistencia social por parte del primero y de la solidaridad de la segunda.

Uno de los sectores sobre quien ha recaído con más fuerza la percibida del actual mundo globalizado, es precisamente el de las personas adultas mayores; toda vez que la hegemonía de las fuerzas de mercado del poder y del individualismo marcan las pautas para que los espacios de integración social, política y económica de las personas adultas mayores se estrechen cada vez más, llevándolas a vivir a una realidad de olvido y omisión.

Resulta importante tomar en consideración que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante su resolución 46/91 asumió los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad, exhortando a los gobiernos de los países miembros a incorporarlos a sus programas, entre los cuales destacan los relativos a la participación, cuidado, acceso a servicios básicos, acceso a un desarrollo personal, cultura, recreación, educación, espiritualidad, dignidad y seguridad.

Las cifras establecidas por especialistas nos dicen que el 72% de la población de personas adultas mayores que viven en la capital del país, se encuentran inactivas y su única fuente de manutención es la paupérrima pensión que reciben o el apoyo de algún familiar; hecho éste que las ubica en una situación vulnerable en el aspecto económico y que les obligue a ser dependientes o bien dedicarse a actividades de sobrevivencia en la economía informal o en los casos extremos en la mendicidad o indigencia, siendo que un gran porcentaje de este sector mantiene su capacidad, sus facultades y su deseo de participar en los roles sociales productivos y creativos; por lo que resulta de vital importancia rescatar toda la experiencia de su vida y aprovechar la sabiduría que el tiempo les ha dejado y fortalecer así la gran cadena generacional y responder con justicia a los esfuerzos que han realizado en su vida para combatir la exclusión.

La Ciudad de México es un lugar que para muchos mexicanos ha sido un centro de reunión y confluencia de personas de todos los rincones del país que comparten un espacio vital y del que se han tejido origen y destino de muchas familias; es una ciudad compleja y agresiva, que si no se hace un esfuerzo adicional, las dificultades que implica la convivencia de muchos millones de personas, las crisis económicas y sociales pueden generar estados de exclusión, olvido y abandono, que hace que las personas adultas mayores que aquí habitan caigan en situaciones de extrema marginalidad.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé garantías individuales, como un conjunto de derechos elementales e inherentes a la persona humana que la protege sin distinción de nacionalidad, edad, sexo, raza, creencia religiosa o política.

Sin embargo, es necesario contar con un cuerpo legal que busque generar una cultura de respeto e integración de la persona adulta mayor que evite su abandono haciendo explícito sus derechos humanos y ciudadanos, así como los compromisos de la sociedad y las autoridades.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a la Tercera Edad, Pensionados y Jubilados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Primera Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado C, base primera, fracción V inciso I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción XIII y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I; 11, 17 fracción V; 49, 50, 57, 84 fracción I y 86 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 18, 22 y 23 del Reglamento para el Gobierno Interno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someten a la aprobación del pleno de esta Asamblea la iniciativa de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, la cual firman el presente dictamen, la

Comisión de Atención a la Tercera Edad, Pensionados y Jubilados: la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, el diputado David Sánchez Camacho, la diputada Virginia Jaramillo Flores, la diputada María Angélica Luna Parra, el diputado Miguel Angel Hernández Labastida y el diputado Guillermo Hernández Reyes.

A continuación, daré lectura a las reservas al dictamen de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, que en forma conjunta presentamos todos los miembros de la Comisión de Atención a la Tercera Edad, Pensionados y Jubilados.

Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva: Por este medio, los integrantes de la Comisión de Atención a la Tercera Edad, Pensionados y Jubilados, solicitamos a usted tome en cuenta nuestra reserva a los artículos 1, 2 y 3 fracciones II y VIII, 4, 5 primer párrafo, inciso a), fracción I inciso b), fracción V, VII, X. La denominación de los capítulos I, II, III y IV del título cuarto, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 fracción I; la denominación del capítulo II del Título Sexto, 43, 45, 49 y Transitorio Tercero del dictamen de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, a los cuales formulamos propuestas de modificación y adición, para ser considerados por el pleno de esta soberanía, para quedar en el decreto de ley de la siguiente manera: Al artículo 1 se le adiciona "y reconocer los derechos de", para quedar como sigue: Artículo 1.- "Esta ley es de orden público, de interés social y de observancia general en el Distrito Federal, tiene por objeto proteger y reconocer los derechos de las personas de 60 años de edad en adelante, sin distinción alguna, para propiciarles una mejor calidad de vida y su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural".

En el artículo 2 se elimina "por el simple hecho de encontrarse físicamente dentro de esta circunscripción territorial" y se adiciona, como segundo y tercer párrafo el contenido del artículo 10 del dictamen, para quedar como sigue: Artículo 2.- "Toda persona de 60 años de edad en adelante, sin distinción alguna, gozará de los beneficios de esta ley, sin perjuicio de los contenidos en otras disposiciones, la responsabilidad de vigilancia seguimiento y aplicación de esta ley, estará a cargo de: I.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal. II.- La Secretaría y demás dependencias que integran la Administración Pública, así como las delegaciones, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del Distrito Federal, en el ámbito de su respectivas competencias y jurisdicciones".

III.- La familia de la persona adulta mayor.

IV.- Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, cualquiera que sea su forma o denominación.

Los sectores público, social y privado, en términos de lo dispuesto por este artículo, celebrarán los convenios o acuerdos de colaboración entre sí y con las instancias federales correspondientes que realicen alguna o varias actividades que constituyen los objetivos de esta ley.

En el artículo 3, en la fracción II, se cambia el contenido del concepto de asistencia social.

En la fracción VIII se sustituye el concepto de atención integral, por el de integración social, para quedar como sigue: Artículo 3.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I.- Persona adulta mayores aquellas que cuentan con 60 años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o de paso en el Distrito Federal, contemplándose en diferentes condiciones:

a) Independiente, aquella persona apta para desarrollar actividades físicas y mentales sin ayuda permanente parcial.

b) Semidependiente, aquella a la que sus condiciones físicas y mentales aún le permitan valerse por sí misma, aunque con ayuda permanente parcial.

c) Dependiente absoluto, aquella con una enfermedad crónica o degenerativa por la que requiera ayuda permanente total o canalización a alguna institución de asistencia.

d) En situación de riesgo o desamparo, aquellas que por problemas de salud, abandono, carencia de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales o desastres naturales, requieren de asistencia y protección del gobierno del Distrito Federal y de la sociedad organizada.

II.- Asistencia social, al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental.

III.- Delegaciones, órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales en el Distrito Federal.

IV.- Consejo, el consejo asesor para la integración, asistencia, promoción y defensa de los derechos de las personas adultas mayores.

V.- Ley, la presente Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal.

VI.- Geriatria, el servicio brindado para la atención de la salud de las personas adultas mayores.

VII.- Gerontología, servicio otorgado por personas dedicadas al estudio del envejecimiento, desde una perspectiva biosicosocial, y

VIII.- Integración social, el conjunto de acciones que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y la sociedad organizada, encaminada a modificar y superar las circunstancias que impidan a las personas adultas mayores su desarrollo integral".

En el artículo 4, se modifican los principios rectores, eliminando la palabra "interpretación, así como los principios de dignidad, cuidado y no discriminación". Se adiciona el principio "de atención diferenciada, según sus etapas, características y circunstancias que define los principios", para quedar como sigue:

"Artículo 4, son principios rectores la observación y aplicación de esta ley:

I.- Autonomía y autorrealización. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas adultas mayores tendientes a fortalecer su independencia personal, su capacidad de decisión y su desarrollo personal.

II.- Participación en todos los casos de la vida pública y en especial en lo relativo a los aspectos que la atañen directamente, deberán ser consultados y tomados en cuenta y se promoverá su presencia e intervención.

III.- Equidad. Consistente en el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, situación económica, raza, credo, religión o cualquier otra circunstancia.

IV.- Corresponsabilidad. Para la consecución del objeto de esta ley, se promoverá la concurrencia de los sectores públicos y social y en especial de las familias, con una actitud de responsabilidad compartida; y

V.- Atención diferenciada. Es aquél que obliga a los órganos locales de Gobierno del Distrito Federal a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores.

En el artículo 5º, en el primer párrafo se elimina: "y no limitativa", es la palabra que se corrige, reestructurándose la redacción. En el inciso a), en la fracción I, se cambia "ellos" por "ello". En el inciso b), en la fracción V, se modifica

su contenido para quedar como sigue: Artículo 5°. De manera enunciativa esta ley reconoce a las personas adultas mayores con los siguientes derechos: a) De la Integridad y Dignidad.

I.- A la vida con calidad, siendo obligación de la familia, de los órganos locales de Gobierno del Distrito Federal y de la sociedad, garantizar a las personas adultas mayores su sobrevivencia, así como el acceso a los mecanismos necesarios para ello.

II.- A la no discriminación, por lo que la observancia a sus derechos se hará sin distinción alguna.

III.- A una vida libre de violencia.

IV.- A ser respetados en su persona, en su integridad física, psicoemocional y sexual.

V.- A ser protegidos contra toda forma de explotación.

VI.- A recibir protección por parte de su familia, órganos locales de gobierno y sociedad.

VII.- A gozar de oportunidades en atención a las condiciones a que se refiere la fracción I del artículo 3 de la ley, para mejorar progresivamente las capacidades que les faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad, respetando en todo momento su heterogeneidad; y

VIII.- A vivir en entornos seguros, dignos y decorosos que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerza libremente sus derechos.

b) De la Certeza Jurídica y Familiar.

I.- A vivir en el seno de una familia o a mantener relaciones personales y contacto directo con ella, aún en el caso de estar separados, salvo si ello es contrario a sus intereses.

II.- A expresar su opinión libremente, conocer sus derechos y a participar en el ámbito familiar y comunitario, así como en todo procedimiento administrativo o judicial que afecte sus esferas personal, familiar y social.

III.- A recibir un trato digno y apropiado cuando sean víctimas o ellos mismos cometan cualquier tipo de ilícito o infracción.

IV.- A recibir el apoyo de los órganos locales de gobierno en lo relativo al ejercicio y respeto de sus derechos a través de las instituciones creadas para tal efecto como son: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia del

Distrito Federal, de las Procuradurías competentes y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y

V.- A contar con asesoría jurídica gratuita y con un representante legal cuando lo considere necesario, poniendo especial cuidado en la protección de su patrimonio personal y familiar.

c) De la Salud y Alimentación.

I.- A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimento, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral.

II.- A tener acceso a los servicios de salud, en los términos del párrafo cuarto del artículo 4° Constitucional, con el objeto de que gocen cabalmente de bienestar físico, mental, psicoemocional y sexual, para obtener mejoramiento en su calidad de vida y la prolongación de ésta; y

III°.- A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal.

d) De la Educación, Recreación, Información y Participación.

I.- De asociarse y reunirse.

II.- A recibir información sobre las instituciones que prestan servicios para su atención integral.

III.- A recibir educación conforme lo señala el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

IV.- A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad.

e) Del Trabajo.

I.- A gozar de oportunidades igualitarias de acceso al trabajo o de otras posibilidades de obtener un ingreso propio, así como a recibir una capacitación adecuada.

f) De la Asistencia Social.

I.- A ser sujetos de programas de asistencia social cuando se encuentren en situación de riesgo o desamparo que garantice su atención integral.

Al artículo 7 se le adiciona "decisión personal y solicitar su ingreso" y se elimina "ingresar", para quedar como sigue. Artículo 7.- "El lugar ideal para que la persona adulta mayor permanezca en su hogar y sólo en caso de enfermedad, decisión personal o causa de fuerza mayor,

podrá solicitar su ingreso en alguna institución asistencial, pública o privada, dedicada al cuidado de personas adultas mayores”.

El artículo 10 pasó a ser los párrafos segundo y tercero del artículo 2, al cual ya se hizo referencia.

La denominación del Capítulo I, del Título IV sufre modificación para quedar como sigue. En el Capítulo I, del Jefe de Gobierno, se adiciona un nuevo artículo 10 para quedar como sigue. Artículo 10.- “Corresponde al Jefe de Gobierno, en relación a las personas adultas mayores:

I.- Realizar, promover y alentar los programas de asistencia, protección, provisión, prevención, participación y atención.

II.- Concertar con la Federación, Estados y Municipios los convenios que se requieran para la realización de programas de defensa y representación jurídica, protección, provisión, prevención, participación y atención.

III.- Concertar la participación de los sectores sociales y privado en la planeación y ejecución de programas.

IV.- Coordinar las acciones y promover medidas de financiamiento para la creación y funcionamiento de instituciones y servicios para garantizar sus derechos.

V.- Fomentar e impulsar la atención integral.

VI.- Promover, fomentar, difundir y defender el ejercicio de sus derechos, así como las obligaciones de los responsables de estos.

VII.- Fomentar y promocionar la estabilidad y el bienestar familiar.

VIII Implementar, en coordinación con las instancias competentes, las medidas de seguridad pública y de protección civil en los centros educativos, culturales y recreativos, así como acciones preventivas con la participación de la comunidad.

IX.- Presidir el Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

X.- Crear los mecanismos o instancias correspondientes para el cumplimiento de esta ley.

XI.- Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos.”

El Capítulo II del Título IV pasa a ser el Capítulo III del propio título, modificándose el orden progresivo de los artículos y algunos de estos sufren modificaciones en cuanto a su ubicación y contenido, como a continuación se detalla.

El artículo 14 pasa a ser el primer párrafo del artículo 12 y el artículo 11 pasa a ser el segundo párrafo del propio artículo 12, respetándose en ambos casos su contenido.

El artículo 12 del dictamen se elimina.

En el artículo 13 se cambia “acuerdos de coordinación”, por “convenio”. Se eliminan las palabras “convenio”, “libre”, todos, incluyendo las instituciones de seguridad social, aún cuando no sean derechohabientes de las mismas.

El artículo 15 pasa a ser el artículo 14, respetándose su contenido para quedar como sigue:

Capítulo Tercero de la Secretaría de Salud.

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

I.- Garantizar el acceso a la atención médica en las clínicas y hospitales con una orientación especializada para las personas adultas mayores.

II.- Proporcionarles una cartilla médica de autocuidado que será utilizada indistintamente en las instituciones públicas y privadas en la cual se especificará el estado general de salud, enfermedades crónicas, tipo de sangre, medicamentos administrados, reacciones secundarias e implementos para aplicarlo, tipo de dieta suministrado, consultas médicas y asistencia a grupos de autocuidado.

III.- En coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, implementará programas con el objeto de proporcionar los medicamentos que necesiten para mantener un buen estado de salud.

IV.- Fomentar la creación de redes de atención en materia de asistencia médica, cuidados y rehabilitación a través de la capacitación y sensibilización sobre la problemática específica de las personas adultas mayores.

V.- Fomentar la creación y capacitación de auxiliares de personas adultas mayores que los atenderán en:

a) Primeros auxilios.

b) Terapias de rehabilitación.

c) Asistirlos para que ingieran sus alimentos y medicamentos.

d) Movilización.

e) Atención personalizada en caso de encontrarse postrados.

Se entenderá por atención médica al conjunto de servicios integrales para la prevención, tratamiento, curación y rehabilitación que se proporcionan a las personas mayores en todos los niveles, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

Artículo 13. La Secretaría de Salud del Distrito Federal implementará programas y concertará convenios con las instituciones de salud del Gobierno Federal y las iniciativas privadas, a fin de que las personas adultas mayores puedan tener acceso a los servicios de atención médica que proporcione el Sistema de Salud.

Artículo 14. Las instituciones públicas, privadas y sociales que otorguen atención médica deberán contar con personal que posea vocación, capacidad y conocimiento en el cuidado de las personas adultas mayores.

El Capítulo Tercero del Título Cuarto pasa a ser el Capítulo Cuarto del propio título, modificándose el orden progresivo de los artículos, y algunos de estos sufren modificaciones de contenido y ubicación, como a continuación se detalla: Se adiciona un artículo, correspondiéndole el número 15 en el orden progresivo.

Al artículo 17 se le adiciona "promoverá", se sustituye "implementarán", por; "para implementar", se sustituye "e impartirá cursos de capacitación en gerontología", con objeto de que la convivencia familiar sea armónica", por sensibilización y capacitación", con objeto de favorecer la convivencia familiar con las personas adultas mayores, para que ésta sea armónica.

En el artículo 18 se modifica su contenido en forma íntegra. En el artículo 19 se modifica su contenido en forma íntegra. El artículo 20 del dictamen se elimina.

El artículo 21 pasa a ser artículo 25, respetando su contenido.

El artículo 22 se le elimina "en coordinación con el Instituto de la Cultura del Distrito Federal", pasando a ser el artículo 20.

El artículo 23 se modifica su contenido en forma íntegra, pasando a ser el artículo 21.

El artículo 24 se sustituye por los órganos de gobierno "de, por, en, él", se sustituye "la entrada sea gratuita para las personas adultas mayores", por "se propicie la accesibilidad y la gratuidad o descuentos especiales", pasando a ser el artículo 22.

El artículo 25 pasa a ser el artículo 23, respetando su contenido.

El artículo 26 pasa a ser artículo 24, respetando su contenido, para quedar como sigue:

Capítulo Cuarto de la Secretaría de Desarrollo social.

Artículo 15. La Secretaría de Desarrollo Social deberá coordinar e implementar las acciones que se requieran para promover la integración social de las personas adultas mayores y para brindarles los servicios de asistencia social y atención integral a los que se refiere esta ley.

En el artículo 16, la Secretaría de Desarrollo Social implementará las acciones pertinentes para garantizar la cobertura en materia alimentaria para las personas adultas mayores, impulsando la participación comunitaria para la dotación de alimentos nutricionalmente balanceados para las personas adultas mayores.

Con objeto de ampliar los mecanismos de información a la población a fin de que conozcan alternativas alimentarias para las personas adultas mayores, deberá:

I.- Organizar campañas de orientación e información nutricional de acuerdo a las condiciones físicas de las personas adultas mayores.

II.- Publicar materiales de orientación nutricional y campañas de difusión en medios masivos de comunicación; y

III.- Establecer convenios específicos de colaboración con instituciones y organismos públicos, sociales y privados que brinden orientación alimentaria a las personas adultas mayores.

Artículo 17.- La Secretaría de Desarrollo Social promoverá la coordinación con las instituciones federales y locales de salud y educación para implementar programas de sensibilización y capacitación, con objeto de favorecer la convivencia familiar con las personas adultas mayores para que ésta sea armónica.

En el artículo 18, la Secretaría de Desarrollo Social y las delegaciones promoverán la coordinación con la federación y con las instituciones educativas para la implementación de políticas y programas de educación y capacitación para las personas adultas mayores.

Artículo 19.- La Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con las delegaciones, implementará programas de estímulos e incentivos a las personas adultas mayores que estudien.

Artículo 20.- La Secretaría de Desarrollo Social implementará programas a efecto de crear y difundir entre la población en general y en la familia la cultura de dignificación, respeto e integración a la sociedad de las personas adultas mayores.

Artículo 21.- Corresponderá al Instituto de Cultura del Distrito Federal estimular a las personas adultas mayores a la creación y al goce de la cultura y facilitará el acceso a la expresión a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos comunitarios nacionales e internacionales.

Artículo 22.- El Instituto de Cultura de Distrito Federal promoverá ante las instancias correspondientes que en los eventos culturales organizados en el Distrito Federal se propicie la accesibilidad y la gratuidad o descuentos especiales, previa acreditación de edad a través de una identificación personal.

Artículo 23.- El Instituto de Cultura del Distrito Federal diseñará programas culturales para efectuar concursos en los que participen exclusivamente personas adultas mayores, otorgando a los ganadores los reconocimientos y premios correspondientes.

Artículo 24.- Las personas adultas mayores tienen derecho a participar de manera activa en las festividades cívicas y tradicionales que se celebren en su comunidad, en todo caso promoviéndose que ellas sean las transmisoras del valor y significado histórico de las costumbres, efemérides y de los actos que se celebren.

Artículo 25.- En todo momento la persona adulta mayor tiene la libre opción de integrarse a las actividades implementadas para la población en general o a las específicas para ellos.

El Capítulo IV, del Título IV pasa a ser el Capítulo II del propio Título, se encuentra integrado por el artículo 27 del dictamen, pasa a ser el artículo 11, para quedar como sigue:

Capítulo II, de la Secretaría de Gobierno.

Artículo 11.- La Secretaría de Gobierno deberá:

I.- Implementar los programas necesarios a efecto de promover el empleo para las personas adultas mayores, tanto en el sector público, como privado, atendiendo su profesión u oficio y a su experiencia y conocimientos teóricos y prácticos, sin más restricciones que su limitación física o mental.

II.- En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico deberá impulsar programas de autoempleo para las personas adultas mayores, de acuerdo a su profesión u oficio, a través de apoyos financieros, de capacitación y la creación de redes de producción, distribución y comercialización.

III.- Proporcionar asesoría jurídica y representación legal a las personas adultas mayores a través de personal capacitado, a fin de garantizar su integridad y evitar cualquier acto de discriminación, respetando en todo momento su heterogeneidad.

En el artículo 28 se modifica: "La Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación la Secretaría de Turismo del Distrito Federal", por: "La Secretaría de Turismo del Distrito Federal en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social", pasando a ser el artículo 26 para quedar como sigue:

Artículo 26.- La Secretaría de Turismo del Distrito Federal en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social promoverán actividades de recreación y turísticas diseñadas para personas adultas mayores.

Para tal efecto, se realizarán acciones respectivas, a fin de que en parques, jardines, kioscos, plazas públicas, teatros al aire libre y demás lugares públicos destinados a la recreación, se cuente con los espacios de actividades que faciliten la integración de las personas adultas mayores.

El artículo 29 del dictamen se elimina.

En el artículo 31, en la fracción I, se le adiciona en especial aquellos que se refieren a la seguridad de su patrimonio, en materia de alimentos y testamentaria, pasando a ser el artículo 28 para quedar como sigue:

Artículo 28.- Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal en materia de personas adultas mayores:

I.- Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia y orientación jurídica, en especial aquellos que se refieren a la seguridad de su patrimonio, en materia de alimentos y testamentaria.

II.- Realizar programas de prevención y protección para las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo, para incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos en instituciones adecuadas.

III.- Coadyuvar con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la atención y tratamiento de las personas adultas mayores víctimas de cualquier delito.

IV.- Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores.

V.- Promover mediante la vía conciliatoria la solución a la problemática familiar, cuando no se trate de delitos tipificados por el Código Penal o infracciones previstas en la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.

VI.- Recibir quejas, denuncias e informes sobre la violación de los derechos de las personas adultas mayores, haciendo del conocimiento de las autoridades competentes y de ser procedente ejercitar las acciones legales correspondientes.

VII.- Denunciar ante las autoridades competentes cuando sea procedente, cualquier caso de maltrato, lesiones, abuso físico o síquico sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación y en general, cualquier acto que perjudique a las personas adultas mayores.

VIII.- Procurar que las personas adultas mayores, en situación de riesgo o desamparo, cuente con un lugar dónde vivir, que cubra sus necesidades básicas.

IX.- Vigilar que las instituciones presten el cuidado y atención adecuada a las personas adultas mayores, respetando sus derechos a través de mecanismos de seguimiento y supervisión, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social.

X.- Establecer programas de apoyo a las familias, para que la falta de recursos no sea causa de separación de las personas adultas mayores, y

XI.- Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos.

El Capítulo II del Título VI se modifica su denominación, sustituyendo "consumo" por "a la economía", adicionando la palabra "descuento", para quedar como sigue: Capítulo II de la Protección a la Economía, Descuentos, Subsidios y Pago de Servicios.

En el artículo 43 se sustituye la palabra "consumo" por "a la economía", pasando a ser el artículo 40 para quedar como sigue: Artículo 40.- La Administración Pública del Distrito Federal, a través de sus órganos correspondientes, implementará programas de protección a la economía para la población de personas adultas mayores, de tal manera que éstas se vean beneficiadas al adquirir algún bien o a utilizar algún servicio y se encuentren debidamente informadas para hacer valer este derecho.

Al artículo 45 se le adiciona "de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables", pasa a ser el artículo 42 para quedar como sigue: Artículo 42.- La Administración

Pública del Distrito Federal de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, deberá promover e instrumentar descuentos en el pago de derechos por los servicios que otorga, cuando el usuario de los mismos, sea una persona adulta mayor. Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal dar a conocer dentro del primer mes de cada año, el monto de los descuentos y los requisitos a cubrir.

Al artículo 49 se le adiciona "en coordinación con el sistema para el desarrollo integral de la familia en el Distrito Federal", pasa a ser el artículo 46 para quedar como sigue:

Artículo 46.- La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, promoverá e instrumentará políticas de asistencia social, para las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo.

El artículo Tercero Transitorio pasa a ser el Cuarto Transitorio, adicionándose nuevo contenido para el artículo Tercero Transitorio para quedar como sigue: Tercero.- El Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, deberá constituirse en un lapso no mayor de 90 días naturales, a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley.

Pido a la Presidencia que en un solo acto sea votada esta ley, tanto en lo general como en lo particular, las reservas presentadas en la presentación del dictamen, para lo cual hago entrega a la Presidencia de las mismas.

EL C. PRESIDENTE RENE BALDOMERO RODRIGUEZ RUIZ.- Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular con las propuestas presentadas por la diputada Sara Isabel Castellanos. Se abre el registro de oradores.

¿Oradores en contra?

¿Algún ciudadano diputado o diputada, desea razonar su voto? Sí diputado.

EL C. DIPUTADO DAVID SANCHEZ CAMACHO (Desde su curul).- Señor Presidente, para razonar mi voto.

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado David Sánchez Camacho, para razonar su voto.

EL C. DIPUTADO DAVID SANCHEZ CAMACHO.- Con su permiso, señor Presidente.

Le quiero dar una gran bienvenida a las personas adultas mayores que aquí nos acompañan.

Compañeras y compañeros diputados; señoras y señores:

La aprobación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, es un esfuerzo más impulsado por los diputados del Partido de la Revolución Democrática en esta Asamblea Legislativa.

Asimismo, es la culminación de los trabajos iniciados con el foro "El Adulto y la Adulta Mayor en el Distrito Federal, por una Sociedad Integral en el Siglo XXI", convocado por la fracción del Partido de la Revolución Democrática, del primero al cuatro de julio de 1998, en este recinto legislativo.

Transcurrió un poco más de un año de trabajo, reuniones y consultas continuas con diversos actores sociales, para presentar a este órgano legislativo el nueve de agosto de 1999 la iniciativa de Ley de Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, y la exposición de motivos que justificó la necesidad de legislar en materia de adultos mayores.

Cabe mencionar, cabe señalar que la iniciativa que presenté hace un año está siendo distribuida por el Partido de la Revolución Democrática en toda la República Mexicana, para que los congresos locales aprueben su propia ley en favor de los adultos mayores.

En la exposición de motivos de nuestra iniciativa de ley subrayé, como lo hago ahora, que se deben combatir los efectos de las crisis política, económica y social que produce el modelo económico neoliberal que aplica el Gobierno Federal, subordinan los modelos de política social, excluyendo sobre todo a millones de mexicanas y mexicanos adultos mayores.

Al mismo tiempo, la transformación de la pirámide poblacional implica cambios radicales en la vida familiar y social, a nivel nacional y no se ha reflexionado de manera profunda la actual situación demográfica de México, resultado del rápido crecimiento de la población, observado hasta los años 60 y su gradual disminución a partir de entonces.

Asimismo, al fenómeno, al crecimiento demográfico combinado con el aumento en el promedio de vida ha propiciado un paulatino proceso de envejecimiento de la población, lo cual ha aumentado la longevidad de los habitantes, ya que el promedio de vida para el hombre es de 71 años y de 75.5 para la mujer, el que seguirá aumentando hasta ser por las mujeres de 82 y para los hombres de 76 años.

El aumento de la esperanza de vida y la situación socioeconómica prevaleciente ha ocasionado la aparición de hogares monoparlantes y familias monoparentales, perdón, y familias trigeneracionales; actualmente más de 30% de los hogares son sostenidos por mayores de 65 años.

Los adultos mayores se han convertido en las cabezas de estos hogares, llegando a cumplir dobles jornadas de trabajo, que van desde la aportación de un ingreso, el cuidado de los niños y jóvenes, así como de labores domésticas, perfilándose así la nueva familia del próximo milenio, conviviendo bajo el mismo techo en condiciones no siempre óptimas.

Sin embargo, el proceso de globalización económica en la mayoría de los casos hace olvidar que las personas de edad han sido constructoras de la modernidad en nuestro país; han formado y consolidado los avances económicos y sociales y han contribuido en los inicios de este proceso de transición democrática en lo que estamos aprendiendo a convivir con la pluralidad y la alternancia.

Los problemas a los que se enfrentan las personas adultas mayores, desde luego se agudizan ante la ausencia de una política social integral que valore la experiencia y capacidad y madurez de estas personas; la permanente y cruenta crisis económica que ha dejado el neoliberalismo en la mayoría de las familias mexicanas y el predominio de preceptos individualistas, muchas veces asociados a valores comerciales, han provocado en nuestra sociedad la carencia de una actitud sensible y racional frente al proceso de envejecimiento.

La Ciudad de México es compleja y agresiva, en la que si no se hace un esfuerzo adicional, las dificultades que las crisis económicas y sociales pueden llevarnos a estados de exclusión, olvido y abandono, que hacen que los grupos vulnerables que aquí habitan caigan en situaciones de marginalidad extrema.

Por ello es indispensable proveer el marco normativo de una legislación que permita prevenir cualquier situación que los ubique precisamente en condiciones de desventaja social.

Por otra parte, es primordial la divulgación de la presente ley entre las personas adultas mayores y la ciudadanía en general, para que las conozcan y las hagan efectivas. Consideramos que aún cuando su aplicación es de competencia directa de las autoridades capitalinas, su contenido tiene un valor social para la nación en su conjunto.

La ley que vamos a aprobar precisamente requiere de un presupuesto destinado al diseño y ejecución de las políticas públicas dirigidas a este sector. Hoy, como diputados de esta Asamblea Legislativa, tenemos la oportunidad de aprobar esta ley y estamos seguros que la ciudadanía reaccionará positivamente a ello e impulsará instituciones que tengan una vocación orientada a la reducción de las desigualdades y la construcción de una convivencia en la tolerancia y la inclusión democrática, porque ningún orden

social garantizará el permanente respeto y defensa de los derechos de las personas adultas mayores como un orden social justo y democrático.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias señor diputado.

Para el mismo objeto de razonar su voto, se concede el uso de la palabra a la diputada Virginia Jaramillo.

LA C. DIPUTADA VIRGINIA JARAMILLO FLORES.-
Con su permiso señor Presidente.

El sector más olvidado de nuestra sociedad es el de los adultos mayores. Es por ello que en esta Asamblea Legislativa nos dimos a la tarea los diferentes partidos políticos para elaborar una ley que garantice sus derechos y su plena integración a la sociedad.

Se considera como población adulta mayor a hombres y mujeres de 60 años o más de edad. Las iniciativas de ley para proteger a las personas adultas mayores, el reconocimiento de autoridades, legisladores y especialistas, constituyen el marco que sirvió para elaborar esta ley, para garantizar una vida digna mejor.

A manera de ejemplo mencionaré algunos datos importantes. 6 millones 200 mil mexicanos son adultos mayores; dentro de un año alrededor de otros 400 mil serán adultos mayores; en el año 2000 esta población rebasará los 7 millones y llegará a los 10 millones en el año 2010. La mitad de los que serán personas adultas mayores dentro de 2 años, carecen de seguridad social; sólo el 18% recibe una pensión, de los cuales el 90% de los casos es del salario mínimo, en contraste a las oprobiosas pensiones que reciben algunos altos funcionarios del Gobierno Federal, como es el caso de los señores Gurría y Oscar Espinosa, quienes por dignidad deben renunciar a sus pensiones y a sus altos puestos.

En el caso de las mujeres, el 42% son viudas. 1.9 millones de personas adultas mayores padecen de alguna discapacidad. 62% de los adultos mayores son inactivos laboralmente. La gerontología, que procura desde diversas disciplinas un desarrollo de la vejez con calidad de vida, tiene en México únicamente 210 profesionales. 651,126 adultos mayores viven en el Distrito Federal, de estos, 270,558 son hombres y 380,568 son mujeres.

La problemática de las personas adultas mayores tienen fundamentalmente estas causas: ausencia de una cultura de la vejez, falta de un trato digno, elevadas tasas de morbilidad, situación económica precaria, desempleo y falta de participación en actividades productivas, falta de apoyo para los adultos mayores y sus familias, que fomenten su participación en la dinámica familiar y social; bajo nivel de

escolaridad, estilos de vida poco saludables, es decir, mala nutrición, automedicación, adicciones y sedentarismo, presencia relativamente mayor de población femenina que requiere programas especiales, accidentes y lesiones en el hogar y en la vía pública, maltrato físico y psicológico, aumento constante de la incidencia de suicidios, malas condiciones de vivienda.

Según el censo poblacional de 1990, las principales causas de enfermedad y muerte son las siguientes: enfermedades del corazón, tumores malignos, diabetes melitus, enfermedades cerebro-vasculares, neumonía e influenza, bronquitis crónica, enfisema y asma, deficiencias de la nutrición, accidentes en la vía pública y el hogar; además de éstas las principales patologías son: osteoartritis, trastornos visuales y auditivos, conflicto familiar, que son causas de múltiples patologías que se suman a un estado de pérdida de rol social y soledad.

El diagnóstico en términos de salud implica considerar la prevalencia de estados de incapacidad, situación que es difícil de estimar en nuestro país, mucho más en el Distrito Federal, ya que no existe un sistema de información que las registre en forma periódica.

La Encuesta de las Necesidades de los Ancianos en la Comunidad (ENAC) mostró que 6% de los adultos mayores de 60 años son parcialmente dependientes y 2% totalmente dependientes para realizar actividades de la vida diaria y cotidiana. Esta dependencia aumenta en los grupos entre 80 y 90 años, 40% tienen al menos una incapacidad, por lo general en el área motora.

La Encuesta Nacional Sobre la Sociodemografía del Envejecimiento (ENSE) realizada por CONAPO, muestra cómo la frecuencia de la incapacidad se incrementa por encima de los 80 años y en mayor grado de la población en el caso de las mujeres; hasta el 25% de las personas de 80 años se encuentran confinadas en su domicilio y el 3% no puede salir de la cama sin ayuda.

La evolución de la atención de la salud de las personas adultas mayores se ha enfocado más al tratamiento de enfermedades, subestimando la identificación de factores de riesgo, los medios de orientación educativa para la promoción de la salud y otras actividades por medio de las cuales se disminuya o limiten los daños a la salud como la protección específica, por lo que se hace necesario que las acciones propuestas tengan un carácter eminentemente preventivo, además siendo de vital importancia el involucrar a las personas adultas mayores en su autocuidado, identificar señales de enfermedad con oportunidad y hacer participe a la familia, la comunidad y las instituciones en la protección de la salud.

Mi voto en pro de esta iniciativa con proyecto de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, lo voy a otorgar en virtud de los nobles objetivos

que contiene este planteamiento, de los cuales destacaré sólo algunos:

- Incidir en los niveles de bienestar de las personas adultas mayores en relación a las necesidades específicas, a los fenómenos y procesos de exclusión social e inequidad.

- Determinar espacios de convivencia y procedimiento de participación de las personas adultas mayores en todos los ámbitos de la vida de la ciudad.

- Coordinar las propuestas que propicien los problemas sociales de las personas adultas mayores como grupo en la familia y en la comunidad.

- Promover la autogestión y la autoayuda en la realización de acciones concretas de beneficio social, familiar e individual.

- Conformar redes integrales de servicios y apoyos como los mecanismos fundamentales que sustentan la atención y la participación de este grupo.

- Promover la creación de una cultura de la vejez.

- Rescatar la experiencia de las personas adultas mayores e inducir su participación como promotores de desarrollo, y

- Fomentar la permanencia de las personas adultas mayores en un entorno familiar y social, potenciando su autonomía y autosuficiencia.

Por ello, habremos logrado y habremos avanzado en el compromiso que tenemos con este sector, que tantos años hemos olvidado. Esta iniciativa de ley pretende recuperar y recoger su dignidad, que muchas veces se nos ha olvidado.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- También para razonar su voto, por el Partido Revolucionario Institucional, se concede el uso de la palabra a la diputada María Angélica Luna Parra y Trejo Lerdo.

LA C. DIPUTADA MARIA ANGELICA LUNA PARRA Y TREJO LERDO.- Con su permiso, señor Presidente.

Quiero, antes que nada, saludar con afecto a todas las personas adultas mayores que hoy nos acompañan y que se han distinguido por luchar para que se definan sus derechos y se realicen de manera permanente, políticas públicas que beneficien a todos aquellos adultos mayores que insisten en seguir siendo parte activa, creativa y participativa de la sociedad en que vivimos y para que aquellos que ya no pueden valerse por sí mismos o viven

situaciones de desventaja social, reciban la atención que se merezcan por parte del Gobierno del Distrito Federal, su familia y la sociedad.

A todos ustedes nuestro cariño y muy en especial a dos luchadoras sociales que están aquí con nosotros, nuestra compañera exasambleísta, Martha Guerra, bienvenida y Ana María Sarquis, bienvenida y gracias por su lucha permanente.

Nos parece muy importante destacar una vez más que al hacer la propuesta que hicimos de una ley que contemplara los derechos de las personas adultas mayores y al aprobarlo el día de hoy, queremos decir como partido y ratificar que estamos convencidos de que cada uno de ustedes, cada una de las personas que llegan a la conocida tercera edad merecen una vida digna, de respeto y aceptación. Por ello, esta ley de los derechos de los adultos mayores dentro de sus principios y directrices establece las bases para apoyar el desarrollo integral de las personas de 60 y más años de edad que quieren seguir siendo partícipes, productivas y creativas y para establecer las políticas públicas que promuevan sus derechos sociales, señalando acciones referentes al desarrollo y bienestar social, salud, educación, trabajo, previsión social, vivienda, urbanismo, justicia, cultura y deporte.

Con la aprobación de esta ley se cumple un importante ciclo en la Ciudad de México, que contará ya con tres pilares sólidos que propicien la construcción de una sociedad incluyente, de una sociedad de encuentro que base sus normas de convivencia en el respeto a cada una de las personas y a cada uno de los grupos y en la consideración especial para quienes viven situaciones o circunstancias que los hacen más vulnerables y que los sitúan en desventaja frente a los demás sectores.

Con la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños y con la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores, nos acercamos ya a una ciudad más humana.

El reconocer que existen estos grupos de la sociedad ha sido una de las imperiosas necesidades de las luchas sociales de fin de siglo y ha obligado a realizar estrategias específicas que derriben las barreras de la exclusión, que abran oportunidades, que realicen acciones de las llamadas afirmativas para hacer viable la integración de estos grupos sin olvidar las específicas de protección que implican garantizar la sobrevivencia digna.

A esos tres pilares se han añadido visiones específicas, como la de equidad y género, que nos ha llevado a revisar a profundidad las situaciones sociales, los ordenamientos jurídicos que fueron y fueron reflejados en modificaciones en el Código Penal y de Procedimientos Penales y que

estarán sin dudas incorporadas en el nuevo Código Civil que aspiramos dejar a esta ciudad en el próximo período de sesiones.

En la búsqueda de una ciudad más humana hemos logrado contar con una de las leyes más avanzadas para atender y combatir la violencia familiar que incluso ha inspirado a que existan leyes similares ya en más de 12 estados de la República.

Con mucho orgullo quiero decir que mi partido, el PRI, ha sido promotor activo de todas estas propuestas, para lograr un marco jurídico que propicie la construcción de una nueva sociedad; ha sido vigilante de su observancia y hoy nos sentimos muy satisfechos de aprobar la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores que pone en blanco y negro una nueva filosofía de respeto, de consideración, de apertura a su participación para que en la Ciudad de México en el Distrito Federal no se desaproveche su experiencia; no se desaproveche su energía; no se desaproveche su voluntad para mantenerse como seres productivos a sus familias, productivos a la sociedad; productivos a retribuirle a México las oportunidades que ellos recibieron; productivos para seguir construyendo un futuro para las nuevas generaciones.

Quiero destacar que la iniciativa presentada por mi partido fue enviada, a través del Consejo Político Nacional, de una comisión específica para asuntos de la tercera edad y de la discapacidad, a todos los Estados de la República y que en muchos de ellos como son Veracruz, Morelos, Chihuahua, Zacatecas, compañeros diputados priistas ya realizaron consultas y ya están presentando una propuesta de ley que plasma los derechos y aspiraciones de este importante sector.

Debemos de reconocer que en el afán de consenso y de que esta ley fuera ya aprobada, dejamos fuera algunas de las propuestas que realizamos en la iniciativa original de ley y algunas otras que fueron enriqueciéndose con la participación, con las ideas, con el entusiasmo de muchos de ustedes. Pero a todos queremos decirles que hoy hemos construido ya una importante base, un primer piso para la nueva relación de la ciudad con la tercera edad, que establece la obligatoriedad de políticas públicas basadas en el reconocimiento de su dignidad, de sus derechos y no sólo a tratarlos como sujetos de atención o de asistencia.

Tendremos juntos que observar y vigilar su cumplimiento y volver a insistir en construir ese segundo piso, avanzando en instrumentos, en mecanismos de crédito especialmente para vivienda y para mantenimiento de vivienda; en reformas al concepto del trabajo productivo, de las reformas de participación y de la integración. Pero terminamos este año, terminamos el siglo, terminamos el milenio con un andamiaje sólido que evitará para siempre que en esta ciudad se olvide que las niñas y los niños tienen derechos, que las personas

con discapacidad tienen derechos, que los adultos mayores tienen derechos, que las mujeres tienen derechos y que cada ser humano miembro de una sociedad debe de estar presente con las mismas oportunidades, con las mismas responsabilidades, con las mismas responsabilidades, sólo así estaremos construyendo una ciudad más humana y una sociedad de respeto para todos, una sociedad de encuentro, una sociedad más armónica y democrática.

Por su atención, muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Para razonar su voto, por el Partido Acción Nacional, se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Hernández Labastida.

EL C. DIPUTADO RAMON MIGUEL HERNANDEZ LABASTIDA.- Como único adulto mayor de esta comisión deseo manifestar que los adultos mayores no somos estorbo, no estamos inactivos, no somos inhábiles; somos, como lo son las mujeres, los niños, las niñas o las personas con discapacidad, personas humanas.

Y pese a que todos los derechos de la persona humana están circunscritos dentro de los 27 artículos, primeros artículos de la Constitución donde están las garantías individuales, y a pese a que también se ha firmado en la Carta de Derechos Universales los derechos de las personas mayores, es conveniente señalar que así como ya aquí legislamos en materia de algunos grupos vulnerables, también interpusimos una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, y ojalá que con este beneplácito que estamos señalando y sintiendo en estos momentos, todos los partidos políticos presionáramos al Congreso de la Unión para que saque la iniciativa en beneficio de las personas de la tercera edad.

Sabemos que somos experiencia en acción; no queremos ser considerados muebles, ni estorbos, somos personas y lo único que vamos a seguir peleando es que se considere la posición de cada quien, respetando a la persona humana, reconociendo la calidad y la antigüedad que tenga.

Esperamos que así como ya se ha anunciado aquí, mandemos, enviemos este proyecto y esta iniciativa y esta ley que aprobemos a los Congresos Locales e insistamos ante el Congreso de la Unión legislar al respecto.

Por eso, me congratulo y estamos de acuerdo en votar a favor con las propuestas señaladas por la Presidenta de la comisión, Sarita Castellanos.

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, proceda la secretaría a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto, con las modificaciones propuestas por la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés a nombre de todos los miembros de la comisión dictaminadora.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto, con las modificaciones...

EL C. DIPUTADO ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN (Desde su curul).- Señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- ¿Con qué objeto, señor diputado?

EL C. DIPUTADO ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN (Desde su curul).- Para el mismo tema, para razonar mi voto.

EL C. PRESIDENTE.- Ruego a la secretaría nos permita, a efecto de conceder la oportunidad de expresar sus razonamientos al diputado Alejandro Rojas Díaz Durán.

EL C. DIPUTADO ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN.- Gracias, diputado Presidente.

Un saludo afectuoso a mis amigos y amigas, adultos mayores que tenemos muchos años de compartir luchas. Gracias por estar aquí, que esta es su casa, sin importar el signo partidario; es obvio que entre ustedes y nosotros hay una cercanía que ningún partido podrá separar. Hay afectos, hay mucha comprensión y cariño y además grandes recuerdos por las luchas que hemos dado juntos.

Vengo a razonar el voto en favor de esta iniciativa, a la cual hay que felicitar a ustedes mismas, a ustedes que han promovido que esta Asamblea se ocupe de tan importante tema, a las diputadas y diputados que hicieron posible la atención para que este proyecto de decreto de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal sean consideradas ya como una vertiente importante de atención que debemos tener los ciudadanos en la capital.

Pero también quiero razonar con ustedes, fundamentalmente con ustedes, la injusticia de tantos años que hoy sufren y que muchos que seremos adultos mayores en esta ciudad y en este país, vamos a tener que enfrentar en el futuro y que su lucha sea ejemplo para que no suceda lo que sucede con ustedes hoy.

Por ejemplo, en la Segunda Asamblea propusimos y no quisieron que se aprobara, que los Bancos abrieran ventanillas especiales para ustedes, para cobrar sus pensiones, sus jubilaciones, porque los tienen horas y horas haciendo filas a la intemperie y los banqueros que son beneficiados por los fondos del IPAB ahora y obviamente que ellos tienen grandes beneficios, no tienen atenciones para ustedes.

Yo sí quisiera que diéramos una lucha juntos para que por ejemplo quien cobrara esas pensiones y jubilaciones tuvieran los Bancos la obligación de tener ventanillas especiales para todos ustedes; yo creo que eso es importantísimo.

En segundo lugar, reflexionar con ustedes, y quiero pedir por anticipado la disculpa de muchos de mis amigos, porque me voy a referir al PRI, pero no quiero dejar pasar por alto algo que nuestro compañero de partido, el diputado Marcelo Ebrard descubrió, que fueron las pensiones ilegales de un ex Regente, Oscar Espinosa Villarreal, que se jubiló a la mitad de la edad de muchos de ustedes, que hoy goza de los privilegios que ustedes nunca van a gozar, ni gozaron en su vida; que el que maneja los dineros del pueblo, nuestros dineros, tiene una jubilación insultante para este país.

Yo quisiera que ustedes hicieran una reflexión que aunque siendo priistas le exijan al Secretario de Hacienda que devuelva la ilegal pensión y los dineros y el usufructo de toda esa pensión jubilatoria que no merece, a las arcas del pueblo.

Creo que un funcionario que recibe y que se autojubilaba no tiene calidad moral para manejar los dineros del pueblo de México. El Secretario de Hacienda no tiene autoridad política ni moral para venimos a decir que su jubilación es legal y que un ex-Regente de la ciudad haya buscado también ser jubilado por un sistema inequitativo de pensiones.

Creo que hay que hacer justicia. Uno, que devuelvan las pensiones estos señores, porque es insultante para nosotros y, segundo, que obviamente no fue suficiente lo que se aprobó en la Cámara de Diputados para el aumento de las pensiones a jubilados de todos ustedes, que la lucha tiene que continuar para que el año que entra la mejoría de sus pensiones sea sustantiva, porque no es posible que en nuestro país le canalicemos millones de dólares a los banqueros y a su rescate y no rescatemos lo más importante que tiene el pueblo de México, que es precisamente su gente y que han dado la vida por el país con su trabajo durante tantos años y no sea posible que el gobierno no le restituya la dignidad que ustedes merecen vivir, los años de vida que junto con nosotros, espero que sean muchos, pasen en esta ciudad. No es posible que el gobierno desatienda tan importante sector, tantos millones de personas adultas que merecen vivir con dignidad.

No son migajas las que ustedes van a lograr aquí; vamos a hacer un compromiso para que haya una lucha posterior y que el año que entra, empezando, primero el Secretario de Hacienda devuelva las pensiones, porque además se las dona a fundaciones de familiares, igual que el ex-Regente Espinosa Villarreal. La fundación a la cual dona el ex-Regente Espinosa Villarreal su pensión, es una fundación, para que ustedes sepan, que preside su mamá, que es una venerable señora. Eso no es posible, eso es insultante. Yo les quiero preguntar a mis compañeros diputados del PRI si van a pedir también la jubilación para ellos, no es posible.

Hagamos una reflexión, creo que debe ser de los propósitos del año nuevo de que ustedes, junto con nosotros,

luchemos para que tengamos funcionarios dignos, para que ya no se autojubilén.

La única incógnita que todavía tengo, es que el Presidente Zedillo trabajó en el Banco de México. Quiero saber si ya se jubiló. Es el dato que nos falta, y no es broma. Le quiero preguntar desde aquí al Presidente Ernesto Zedillo si él está jubilado del Banco de México, porque si está jubilado del Banco de México, entonces no tendría ninguna calidad política ni moral para vernos de frente a todos los mexicanos. Espero su respuesta, y si no se ha jubilado, reconoceré en esta misma tribuna que efectivamente el Presidente de la República es un hombre honesto en esa materia, pero si él se jubiló anticipadamente, entonces estará cometiendo un grave, gravísimo delito moral contra la sociedad mexicana. Por tanto, mi voto es por ustedes. Por tanto mi voto es a favor de este dictamen. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la secretaría a culminar la instrucción recibida, en el sentido de recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto, con las modificaciones propuestas por la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés a nombre de la comisión dictaminadora.

Se solicita a los ciudadanos diputados, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 de Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea. La de la voz, recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Islas León, en pro.

Margarita Saldaña, en pro.

Hernández Labastida Miguel, en pro.

René Arce, en pro.

Jesús Galván, en pro.

Manuel Aguilera, en pro.

Levín Coppel, en pro.

De Garay, en pro.

Luna Parra, en pro.

Rivera Domínguez, a favor.

Alejandro Vázquez, en pro.

Ortiz Haro, a favor.

Jesús Toledano, a favor.

West, a favor.

Guillermina Martínez, a favor.

Cárdenas Pérez, en pro.

Eliab Mendoza, a favor.

Ricardo Molina, a favor.

Ernesto Chávez, por supuesto que a favor.

Miguel Angel Peláez, a favor.

José Luis Benítez, en pro.

Esveida Bravo, a favor.

Castellanos Cortés, con mucho honor, además muy satisfecha de que hayamos logrado esta promesa que teníamos pendientes para ustedes, en pro.

Ricardo Martínez, en pro.

Miguel Bortolini, muy, muy a favor.

Martí Batres, a favor.

García Rocha, a favor.

Alfredo Hernández, a favor.

Francisco Ortiz, a favor.

Roberto Rico, a favor.

David Sánchez, a favor.

Javier Hidalgo, claro que a favor.

Rigoberto Nieto López, a favor.

Márquez Franco, en pro.

Ignacio Ruiz, a favor.

Hipólito Bravo, en pro.

Juan González, a favor.

Esteban Daniel Martínez, a favor.

Pichardo Mendoza, a favor.

Sara Murúa, en pro.

Alejandro Rojas, a favor.

Narro Céspedes José, a favor.

Francisco Chiguil, en pro.

Virginia Jaramillo Flores, a favor de que Gurría y Espinosa renuncien a sus pensiones y a sus puestos y en pro del dictamen.

Antonio Padierna, en el mismo sentido que la diputada Virginia Jaramillo.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Angeles Correa, a favor.

Rafael López de la Cerda, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Armando Salinas Torre, en pro.

Rodríguez Ruiz René, desde luego sí, a favor.

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 54 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.

Cumplida su instrucción.

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Atención a la Tercera Edad, Jubilados y Pensionados, con proyecto de decreto de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, en lo general y en lo particular con las modificaciones propuestas.

Remítase a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Administración Pública Local, con proyecto de decreto de reformas a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.

En virtud de que dicho dictamen ha sido repartido a las ciudadanas y ciudadanos diputados en los términos del artículo 38, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consulte la secretaría en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se somete a discusión de inmediato.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura y se somete a discusión de inmediato.

Los que estén por que se dispense la lectura, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Dispensada la lectura señor Presidente.

COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA LOCAL

Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal:

Proyecto de dictamen de las iniciativas de Reformas y Adiciones a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, presentadas por las Diputadas y Diputados SARA ISABEL CASTELLANOS CORTES, ESVEIDA BRAVO MARTINEZ y JOSE LUIS BENITEZ GIL; integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Y por la Diputada ANA LUISA CÁRDENAS PÉREZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Pleno de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura; mismas que se acordaron enviar a la Comisión de Administración Pública Local, para su estudio y análisis.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso j) y I),

Decimotercero Transitorio del Decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996; 36, 38, 40, 42, fracciones XIV y XVI 45, 46 fracción I, 48 y 49 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1º, 7º, 10 fracción I, 11, 13, fracción I, 49, 50 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial el 24 de mayo de 1999; y 67, 116, 117, y 118 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 13 de septiembre de 1999; esta Comisión de Administración Pública Local es competente para conocer de las iniciativas que se analizan bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En fecha 15 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se presentó ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, la Iniciativa de Reformas a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, en materia de videojuegos; misma que fue presentada por las Diputadas y Diputados Sara Isabel Castellanos Cortes, Esveida Bravo Martínez y José Luis Benítez Gil, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Dicha iniciativa, pretende dar una regulación a esta actividad, así como delimitar su funcionamiento, y sobre todo, restringir el contenido que en éstos se presenta.

En su exposición de motivos la iniciativa señala, que el tema de videojuegos aparece como un factor de progreso encaminado a la diversión y al entretenimiento; asimismo, que... "Los videojuegos son un problema, pero aun así son utilizados por la gente", resaltando que el problema principal no es en sí el videojuego, sino la forma en que estos se utilizan y las interpretaciones que se le da a su contenido, considerando su utilidad como entretenimiento y como un negocio lícito y económicamente viable, asimismo tampoco se puede negar su necesaria regulación, en cuanto su funcionamiento y contenido". (sic)

Se menciona que existen opiniones encontradas sobre los efectos que pueden generar en el usuario los videojuegos, opiniones que van a favor y en contra, al señalar que en muchas ocasiones los problemas no son el uso en sí, sino, la conjugación de factores de índole familiar o social.

Se resalta que: "...La realidad y el avance globales parecen estar rebasándonos, el Internet y la misma televisión transmiten cada vez con mayor frecuencia programas e imágenes con alto contenido de violencia...", por ello, se estima necesaria su regulación para evitar la clandestinidad.

Se dice que como consecuencia de la grave crisis económica, el alto índice de desempleo, y la falta de ingresos, gran parte de los mexicanos se han visto obligados a establecer pequeños comercios como medio de subsistencia, y según datos estadísticos de la iniciativa, de un promedio de "...diez mil locales de videojuegos en el Distrito Federal, el 80% se encuentran en el interior de farmacias, papelerías, tiendas de abarrotes u otros y el 70 % de estos se ubican a menos de 500 metros de los centros educativos..."

Plantea que con una regulación específica y clara disminuirá los efectos negativos en esta actividad, sin afectar de manera severa la economía de quienes se dedican a este negocio. Asimismo, se propone impedir el contenido de pornografía y erotismo y detener el avance de los juegos violentos.

La iniciativa que se menciona propone lo siguiente:

· Una adición al artículo 3º, en el concepto de establecimiento mercantil, y agregar a éste artículo términos como: interés público, máquina o maquinita, simuladores y videojuegos o juegos de vídeo.

· Adicionar nuevas atribuciones a la Secretaría de Gobierno y Delegaciones, en materia de videojuegos, tales como: la suspensión temporal o clausura de actividades de los establecimientos dedicados a este giro; la verificación coordinada para vigilar el cumplimiento de la clasificación de videojuegos; la elaboración de padrones y registros de los establecimientos con giro de videojuegos.

· La creación de un capítulo III "de los establecimientos mercantiles que prestan el servicio de videojuegos". Donde se divida en dos grupos los videojuegos; uno como tipo A, B y/o C y dos como tipo D; asimismo, especificar según su letra y su contenido, si son ofensivos, poco agresivos, violentos y altamente violentos, y reducir la distancia del negocio que explota la actividad de videojuegos a 300 metros de distancia de un centro de educación básica.

· Incluir un capítulo IV "del contenido de los videojuegos". Tal clasificación va de las letras A, B, C a la D, y de simples deportes, carreras de autos y seres animados, hasta peleas y competencias, pero que en ningún momento, muestren actos sexuales ni de erotismo. Esta clasificación la podrá hacer el proveedor de videojuegos o los dueños de los establecimientos.

· Regresar el giro de videojuegos como complementario, en farmacias, misceláneas, tiendas de abarrotes, papelería o similares hasta con 3 juegos, conforme la clasificación ya mencionada y sujetarlo a una autorización anual, susceptible de renovarse.

· *Adecuaciones a diversos artículos de la ley que hagan posible la instrumentación de las reformas antes señaladas.*

2.- El 15 de abril de mil novecientos noventa y nueve, ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, I Legislatura, la Diputada Ana Luisa Cárdenas Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa de Nueva Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal. En su exposición de motivos señala la necesidad de expedir un ordenamiento claro, preciso y justo, toda vez que la Ley actual, publicada en el mes de mayo de 1996, contiene disposiciones que han generado una crisis tendiente a evitar el fortalecimiento del sector económico en los establecimientos mercantiles que lo integran.

De igual manera expone, que la serie de requisitos legales, a reunir por los gobernados que pretenden abrir un negocio en el Distrito Federal, anula definitivamente los programas gubernamentales de simplificación y desregulación administrativa, ello, aunado a la falta de difusión que existe para realizar trámites, pues aún con la Ventanilla Única en las delegaciones, y la de gestión en organismos empresariales, que dan a conocer a los interesados los diversos requisitos, resulta necesario extender la información a programas de radio y televisión. Así, todo particular que pretenda abrir un establecimiento, conocerá el ámbito en que va a incurrir, igualmente se pretende que el titular del establecimiento, esté informado de los cambios y políticas en el rubro. Por ello se considera necesario, dejar claro a los particulares qué tipo de documentos y requisitos son indispensable para tramitar la apertura de un giro mercantil, así como cuales de éstos, se deben presentar a la delegación; por otro lado, qué documentos son expedidos por autoridades distintas a la misma. No es igual la tramitación para una declaración de apertura que para una licencia de funcionamiento, ni la serie de declaraciones y manifestaciones que el solicitante debe cumplir, tal es caso del cumplimiento a las normas de protección civil, construcción, bomberos, salud, etc.. En ese sentido se debe plasmar en la ley la simplificación y desregulación administrativa.

La iniciativa en comento propone lo siguiente:

· *Modificar el artículo 3º, redefiniendo conceptos para adecuar el marco jurídico actual, como el caso de los "Enseres en la vía pública", "Giro principal", "Declaración de Apertura"; "Licencia de Funcionamiento"; Secretaría de Gobierno"; "Delegación"; Ventanilla Única o de Gestión"; entre otros. Con ello, se busca dar claridad a diversos conceptos y términos usados en la Ley, y concretar las facultades de la Delegación como autoridad competente para autorizar el funcionamiento de un negocio, siempre y cuando, se hayan*

reunido los requisitos que para tal efecto se solicitan, mismos que no son totalmente expedidos por la delegación, sino por distintas instancias.

· *Incluir a los giros que tienen la actividad de estacionamiento de uso público, como establecimientos mercantiles, sujetos a la obtención de una licencia de funcionamiento, toda vez que éstos prestan un servicio permanente en locales ubicados en un inmueble y a través de personas físicas o morales; asimismo, con base en la definición de establecimiento mercantil que contiene la actual ley.*

· *Reclasificar y disminuir las multas, a fin de hacerlas justas y equitativas, basándose en la realidad actual. Considera que no es lo mismo un establecimiento que presenta impacto social (aquél que puede alterar el orden y la seguridad pública, o afectar la armonía de la comunidad), a uno que no lo tiene; por lo que evidentemente las normas y requisitos son distintos, en ese sentido, las sanciones también se justifican, pues no es la misma sanción para un comercio de abarrotes o una lonchería, que para un supermercado o restaurante donde se venden vinos y licores.*

· *Precisar los procedimientos que contempla la ley actual, en su relación con otras normas, como el caso de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, mismas que contienen las formalidades propias de los procedimientos. Este criterio se propone, en virtud de que los procedimientos que contemplan dichos ordenamientos son iguales a los que establece la actual Ley, y a fin de evitar interpretaciones distintas de éstos, de igual forma, en la idea de legislar una Ley simple y concreta.*

· *Reclasificar las causales de multa, clausura y revocación de las declaraciones de apertura, licencias de funcionamiento y autorizaciones, por ejemplo: la adición de una fracción al artículo 81 de su iniciativa (supuestos de clausura), para el caso de haber obtenido cualquiera de los documentos para funcionar, mediante la exhibición o declaración de documentos o datos falsos.*

· *Adicionar un capítulo específico para el retiro de sellos de clausura, ya que su ausencia genera problemas, tanto para particulares como para autoridades. Con esto, se daría certidumbre jurídica al particular en el procedimiento.*

La propuesta de iniciativa busca que los trámites sean más sencillos para el particular; que la actitud de la ventanilla única sea más cordial hacia el ciudadano, quien lo último que desea es realizar una serie de trámites para que al final le digan que "no puede dedicarse a la actividad que pretende". Con esta Iniciativa se busca que el Gobierno de la Ciudad junto con sus áreas respectivas

realice una cruzada de actualización en sus padrones de establecimientos mercantiles, que permita contar con una información clara, para de esta forma, incentivar el comercio, sector importante en la vida económica de la Ciudad, a quien se le debe garantizar una actividad mercantil debidamente establecida y regulada.

3.- Por acuerdo del 15 de diciembre de 1998 y 15 de abril del presente año, la Mesa Directiva del Pleno de esta H. Asamblea Legislativa, I Legislatura, ordenó enviar ambas iniciativas a la Comisión de Administración Pública Local, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

4.- Con fecha 24 de junio de 1999, la Comisión de Administración Pública Local se reunió con funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática (CANIETI); la Coordinadora de Organizaciones de Operadores de Videojuego Equipos de Diversión y Entretenimiento A. C. (COVIJA); la Unión de Padres de Familia del Distrito Federal; especialistas de Neurología Pediátrica; y especialistas en materia de videojuegos, a fin de comentar el proyecto de iniciativa de Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, en materia de videojuegos, presentada por las diputadas y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México.

5.- Con fecha 23 de diciembre de 1999, se recibieron comentarios por la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México en relación a estas Iniciativas.

6.- Con fecha 27 de diciembre de 1999, se reunieron los integrantes de la Comisión de Administración Pública Local, a efecto de dictaminar en forma conjunta las iniciativas presentadas, hacer las modificaciones basadas en su estudio y análisis, así como realizar las adecuaciones pertinentes, para emitir una Ley integral, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- *Que en la Ciudad de México, considerada como una de las más grandes del mundo, se generan diversas actividades mercantiles que dan vida a nuestra economía y sociedad, donde sus necesidades diariamente se ven satisfechas por uno de los sectores más importantes como es el comercial, que comprende a toda una gama de establecimientos mercantiles donde se ponen al alcance de la población, los bienes y servicios complementarios para que esta Capital subsista. Que este sector tiene una importancia fundamental dentro de la economía interna de nuestra Ciudad, pues genera empleos e impuestos y cubre necesidades elementales como el abasto y la diversión. Por ello, es de considerar su relevancia, así*

como la necesidad de otorgar incentivos a las personas que se dedican a este sector, a fin de que no vean en peligro sus inversiones.

Que resulta importante para el análisis y estudio de estas iniciativas, recordar como se han venido regulando los establecimientos mercantiles desde hace algunas décadas. Donde primeramente existieron ordenamientos dispersos que regulaban a los negocios, dependiendo de su actividad principal, como el caso del Reglamento en materia de expendios del pulque, aguamiel o tlachique no embotellado; el de cafés cantantes o cabaret; el de salón de baile; el de carnes; el de expendios de bebidas alcohólicas, etcétera. Que en 1981 aparece el primer Reglamento General para Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, que contempla de manera conjunta la reglamentación de todos los establecimientos mercantiles y espectáculos públicos, al señalar los requisitos y especificaciones para que éstos pudieran funcionar; asimismo es de mencionar, que algunos comercios funcionaban sólo con el sello del padrón de la delegación. Que para 1989 el nuevo Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, incluyó la figura de la declaración de apertura, y es en 1996, con la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, cuando de manera más específica se regula en una ley a los establecimientos mercantiles, dividiendo lo relacionado a espectáculos públicos en otra Ley.

Que la evolución de la normatividad en esta materia, no es mas que el reflejo de una sociedad que se actualiza y que pretende, llevar a cabo una actividad comercial bajo condiciones confiables, que permita brindar un mejor servicio. Que para su logro, los propietarios de negocios deben contar con incentivos que den seguridad para iniciar actividades comerciales en esta Ciudad. Lo que implica, contar con una regulación menos rígida, eliminando de la actual Ley, una serie de disposiciones que sólo han fomentado la corrupción y la falta de oportunidades para su debido crecimiento; así como eliminar disposiciones innecesarias; establecer los requisitos mínimos para que de forma eficiente los negocios otorguen un buen servicio, sin que esto implique, olvidar que son sujetos de requisitos y obligaciones, y en el afán de preservar el orden e interés público y de evitar que su funcionamiento altere la paz social.

SEGUNDO.- *Que para la emisión de un dictamen conjunto de las iniciativas de Reformas a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, en materia de videojuegos, presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, y de la Iniciativa de Nueva Ley para el Funcionamiento de Establecimientos*

Mercantiles en el Distrito Federal, presentada por la Diputada Ana Luisa Cárdenas Pérez, fue necesaria la intervención del Gobierno Central del Distrito Federal, a fin de consultar aspectos trascendentes derivados del estudio y análisis de las mismas, para dar sustento a este proyecto de dictamen.

Fue el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico, con quien se comentó el universo de negocios que se ven implicados en esta Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, pues según sus estadísticas hay 304,658 empresas en la Ciudad, de las cuales 290,909 son de micro industria; 11,591, pequeña industria; 1421 mediana; y 737 gran industria. Asimismo, fueron valiosos sus comentarios y sugerencias en materia de acomodadores y estacionamientos, y en general, sobre toda la ley. Su preocupación por otorgar incentivos al sector económico de esta Ciudad, se tradujo en proponer la eliminación de requisitos innecesarios a quienes pretendan abrir algún establecimiento mercantil, es decir, impulsar la desregulación administrativa.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda comentó la necesidad de respetar los usos de suelo, así como la revisión de los Planes Parciales de Desarrollo, dada la invasión del comercio en áreas consideradas como habitacionales en la tabla de usos; por otro lado, la ausencia de actividades clasificadas en esta tabla, que implica no poder otorgar al particular el documento que le permita dedicarse a determinado negocio, ya sea porque no existe o porque se encuentra restringido.

La Secretaría de Transporte y Vialidad exteriorizó su beneplácito por la propuesta de incluir como establecimiento mercantil en la Ley, a los estacionamientos de uso público. Debido a la doble regulación que se presenta en estos giros y que muchas veces se confunde, pues por un lado el estacionamiento es un local donde se presta un servicio, pero que no se encuentra como tal en la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal; por otro, cubre requisitos para su apertura contemplados en esa ley. En ese sentido, la Asamblea Legislativa debe ejercer su facultad reguladora en la materia de estacionamientos y delimitar las diversas normas que a ella se refieren, tomando en cuenta la emisión de la Ley de Transporte y del Reglamento Interior de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambos para el Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial de esta entidad el 19 de mayo y 11 de agosto 1999, respectivamente. Asimismo, señaló la disposición del Ejecutivo de emitir en su oportunidad, la reglamentación o acuerdos necesarios para la debida aplicación de ley, una vez que ésta sea publicada.

A través de la Secretaría se tuvieron reuniones con empresas dedicadas al giro de estacionamientos como "Ranver Estacionamientos" y "Renta Parking". Estas

empresas comentaron que el giro de estacionamientos por sí mismo, no altera el orden social ni la seguridad pública, sino que es la ausencia de éstos, lo que origina problemas ambientales y de seguridad pública; que no se debe limitar la inversión en estacionamientos con precios fijados respecto a otro giro comercial; que no se deben fomentar subsidios en los precios, pues distorsionan los costos de los bienes y servicios; que el congestionamiento vehicular se fomenta al no combatirlo, por lo que una menor regulación para abrir nuevos espacios, acompañado de una mayor ocupación de los existentes, daría como resultado la baja en los precios por este servicio; que la regulación que se emita debe garantizar un servicio satisfactorio al usuario, debiendo incluir, requisitos de apertura más sencillos.

Los Subdelegados Jurídicos y de Gobierno de las 16 delegaciones Políticas del Distrito Federal, mencionaron los problemas que enfrentan a diario en la aplicación de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, especialmente con los giros irregulares que vienen funcionando a través de documentos apócrifos, y con aquellos que abusan de los recursos legales como el juicio de nulidad y de amparo, para realizar actividades al margen de la ley, debido a que la autoridad carece de instrumentos legales para hacerla efectiva, concretamente en los procedimientos y términos. Señalaron su preocupación sobre reducir el tiempo para contestar la solicitud de Licencia de Funcionamiento, que actualmente es de 7 días, y que en la iniciativa de la Diputada Ana Luisa Cárdenas Pérez se reduce a 5 días hábiles; esto, debido a que el plazo propuesto no es suficiente para el trámite interno, por razones de tiempo y personal, lo que provocaría el mal uso de la afirmativa ficta, y por consecuencia, los negocios que no cumplen cabalmente con sus requisitos pueden funcionar en perjuicio de la ciudadanía.

Por otro lado, fueron interesantes los comentarios de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, así como de algunas cámaras, entre ellas, la CANIETI (Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática); la COVIJA (Coordinadora de Organizaciones de Operadores de Videojuego Equipos de Diversión y Entretenimiento A. C.); la Unión de Padres de Familia del Distrito Federal; y especialistas en la materia de videojuegos, durante la reunión celebrada el 24 de junio de 1999 ante esta Comisión que dictamina. Los funcionarios, representantes y especialistas, aportaron valiosas ideas y propuestas.

La Secretaría de Gobierno comentó: que no hay una regulación lo suficientemente clara y coercitiva para los negocios dedicados al giro de videojuegos, toda vez que funcionan anárquicamente tanto en su operación como en su contenido; por ello, se debe concertar un régimen

fiscal en el Código Financiero, y ampliar el padrón de contribuyentes donde se incluya a estos negocios; asimismo, propuso elaborar un Reglamento que garantice el cumplimiento de la ley, y la concertación de un programa de ordenamiento de los establecimientos que tienen como actividad videojuegos, ello, con la participación de los sectores involucrados en la norma; igualmente, se refirió al interés del gobierno para garantizar el cumplimiento de la ley y los derechos de terceros. La CANIETI propuso: emitir una ley clara, que permita a estos negocios regularizarse; así como autorizar el giro complementario de videojuegos en los establecimientos mercantiles como misceláneas, farmacias, papelerías, boneterías y similares, hasta con cinco máquinas. La COVIJA señaló: que al haberse suprimido en los establecimientos mercantiles el giro complementario de videojuegos, no sólo se eliminó una forma de entretenimiento, sino, se desempleó a 100,000 personas dedicadas a esta actividad, quienes prestaban servicios técnicos y profesionales. La Unión de Padres de Familia del Distrito Federal, exteriorizó su responsabilidad y preocupación por la seguridad física y salud mental de sus hijos, principalmente niños y adolescentes; pidió que se regularicen aquellos negocios dedicados a videojuegos y que se sancione a los que no cumplan la ley, sobre todo, en la clasificación y contenido de los videojuegos, y prohibir los de contenido sexual como semidesnudos, desnudos o con sentido erótico y aquellos que exalten la violencia; por otro lado, propuso que la dimensión de letras en anuncios de videojuegos sea mínima de 10 por 10 cm., que la iluminación sea suficiente en áreas ocupadas para esta actividad, que se haga efectiva la ley cuando se permita el acceso a menores de 12 años no acompañados de un adulto a estos negocios; finalmente, considerar a 200 metros la distancia de estos giros de los centros escolares y una clasificación de los títulos de videojuegos, así como las edades aptas para usarlos. La Sociedad Mexicana de Neurología manifestó: que el uso de videojuegos, principalmente por los niños, tiene las siguientes ventajas: aprendizaje de colores, ejercitación de la memoria, aprendizaje para reaccionar y toma de decisiones en el momento; que al jugar se estimula estas áreas de desarrollo, así como la coordinación ojo mano; que los padres deben participar en la educación de los hijos, tratándose de videojuegos; en cuanto a la idea de que los videojuegos generan ataques de epilepsia, comentó que éstos pueden ser generados por cualquier estímulo luminoso que reciba la persona, desde la luz del sol, hasta los reflejos que desprenden los televisores, a esto se denominó, epilepsia fotosensible, la que llegan a tener niños enfermos ante cualquier estímulo luminoso y por consecuencia, convulsionar; también explicó que la violencia, a propósito de videojuegos, puede generarse en cualquier parte, desde la familia, hasta las calles y en los medios de comunicación, como el televisor, por ello, se debe enseñar a los niños lo que es bueno y lo que es malo, para que éstos, tomen sus decisiones y controlen sus

impulsos; en cuanto al hecho de que los videojuegos pueden generar adicción, señala que el problema fundamental es el motivo por el cual se forma el hábito, ya que éste, se da cuando la persona se siente demasiado sola, abandonada, o existen trastornos en la dinámica familiar. Especialistas en videojuegos manifestaron la complejidad del tema, por un lado la afectación a un sector económico, y por otro, las implicaciones de gestión y políticas públicas que generan las "maquinitas" en los establecimientos mercantiles, problema que requiere la intervención del gobierno, pues también repercute en la salud, educación, adicciones y valores sociales; se exteriorizó la preocupación por el contenido de violencia en videojuegos, que en algunos casos, genera habilidad y destreza para que los niños aprendan a tirar, o actitudes xenofóbicas (placer por desmembrar al enemigo), se puso como ejemplo, un estudio realizado donde la influencia de los videojuegos en jóvenes de 13 a 17 años en acciones de disparar es de 56%, esto también tiene que ver con la violencia en la televisión y en el cine; finalmente, se comentó que México no tiene estudios científicos hasta el momento, de la influencia que generan los videojuegos, pero que sin embargo, sí constituyen un problema serio que se debe regular.

Igualmente la Cámara Nacional de Comercio, envió comentarios sobre la iniciativa presentada por el Partido Verde Ecologista de México, los cuales se enfocaron a los conceptos que se mencionan en el artículo 3º de ésta, así como a evitar la duplicidad en la ley; la homologación de la distancia que debe existir entre un centro escolar y un establecimiento que vende bebidas alcohólicas; evitar mas trámites para los negocios con giro complementario, atendiendo a la simplificación y desregulación administrativa.

TERCERO. - Que dentro del sector comercial, se encuentra una diversidad de actividades, que por su naturaleza son consideradas de impacto social, y otras que no, donde las primeras alteran el orden y la seguridad pública, o bien, afectan la armonía de la comunidad, siendo en particular los establecimientos mercantiles que tienen como actividad principal la explotación de máquinas de videojuegos; el cual, crece a la par con el avance tecnológico, creando nuevos y sofisticados juegos, como los de agilidad y destreza mental y los de contenido agresivo, donde existe la participación de dos o más seres animados o con características antropomórficas, que tienen que competir para tratar de alcanzar el triunfo, que en ocasiones, se obtiene con la muerte y desmembramiento del cuerpo de quien ha sido derrotado; así como aquellos donde el principal objetivo es contemplar fotografías o imágenes de mujeres u hombres semidesnudos o desnudos con sentido erótico. Asimismo, en este entretenimiento, se considera que "los usuarios en su mayoría son niñas, niños o jóvenes", lo que implica, una falta de protección a la

niñez, olvidando, que la finalidad de toda ley, es la de proteger a la sociedad en general; por lo que resulta de gran relevancia la propuesta de modificaciones en materia de videojuegos que presenta el Partido Verde Ecologista de México, en cuanto a establecer los parámetros y especificaciones que puntualicen y clasifiquen el contenido de los videojuegos, tomando como base y límite para su uso, la edad del usuario, a fin de prevenir que los menores de edad puedan crecer con una falsa apreciación de la realidad o, en casos extremos, con trastornos en la personalidad. Ante este caso, se debe cuidar el bienestar psíquico de los menores a través de una regulación cuidadosa, sin menoscabar a los prestadores de este servicio.

CUARTO.- Una vez analizadas las iniciativas que dan origen al presente dictamen, se desprende que ambas resultan valiosas en sus propuestas, el tema de videojuegos, no hay discusión en cuanto a su trascendencia, ya que efectivamente han rebasado a la norma y a la sociedad, pues hoy en día no se conciben las funciones de ciertos negocios, u oficinas públicas sin el uso de la cibernética. Sin embargo, uno de los mayores problemas se genera en aquellos videojuegos que se ofertan en establecimientos mercantiles (al público), pero no en aquellos que se obtienen para uso particular, independientemente de su contenido. Otro aspecto son las empresas dedicadas a esta actividad, las que adquieren los videojuegos y aparatos por importación, sobre todo de Estados Unidos, Canadá y Taiwan, éstos, entran al país como productos de computación, sujetos a términos comerciales de carácter federal, incluso, internacional. De ahí que se considere el tema de videojuegos y su contenido, como un tópico que debe regularse en un ordenamiento muy concreto. Por ejemplo, el estado de Baja California tiene una "Ley para el Control de la Explotación de Aparatos Mecánicos, Electromecánicos y Musicales para el Municipio de Ensenada B.C.", que operen con monedas, fichas, tarjetas o cualquier otro medio de cobro, cuya finalidad sea la diversión o entretenimiento del público. El artículo 2º del Reglamento de esta Ley (Aprobado el 16 de febrero de 1995, en la Sala de Cabildo del XIV Ayuntamiento, Ensenada, Baja California) clasifica por sus características específicas a los aparatos, concretamente la fracción VI letra a) que a la letra dice: "...Aparatos electrónicos que funcionan con controles manuales, marcadores, con o sin pantallas de vídeo. (Ataris, Nintendos, Segas, Videojuegos, Pinballs, Virtuals, etc)...; asimismo, considera a los juegos de salón como el billar, domino y naipes, y a los deportivos como boliche, futbolito etc.; a los juegos electromecánicos para menores de 6 años ... que fomenten el desarrollo psico-motriz de los niños como los carruseles, motos, carritos, resbaladillas etc.; finalmente a los aparatos musicales como pianolas y sinfonolas.

Los sujetos al cumplimiento de este reglamento son las personas físicas y morales propietarias, arrendatarios o que trabajen a comisión los aparatos que se mencionan en el artículo 2º, y dedicadas directamente a ofrecer esparcimiento público; la normatividad considera a este negocio como giro principal y complementario; los permisos otorgados a favor de un titular no se pueden enajenar, transferir o arrendar; se requiere permiso de la autoridad para cambio de domicilio, incremento y cambio del número de aparatos; prohíbe la extrema violencia, la entrada de menores de 8 años no acompañados de un adulto. Por lo demás, establece las mismas obligaciones que debe observar un establecimiento mercantil.

De lo anterior se desprende, que para regular debidamente la actividad de videojuegos, aparatos electrónicos, electromecánicos y similares, se deben establecer disposiciones concretas, apoyadas en estudios científicos donde se consideren pros y contras, así como el universo de establecimientos que hay en la Ciudad.

Con base en lo antes señalado, y con apoyo en el considerando segundo de este dictamen, es de aprobarse la inclusión en este proyecto de iniciativa de Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal, las siguientes propuestas de la iniciativa del Partido Verde Ecologista de México:

- La adición al artículo de conceptos, concretamente el de establecimiento mercantil, tal y como se presenta en el artículo 2 del presente dictamen.
- La clasificación y contenido de videojuegos, en términos de los artículos 33, 34 y 35 de este dictamen, considerando que esto da la pauta para regularizar a este tipo de comercios.
- Distancia. La modificación al artículo 27 fracción VII de su Iniciativa, como se presenta en el artículo 33 fracción I de este Dictamen, sobre la distancia que debe existir entre un negocio con el giro de videojuegos y un Centro de Educación Básica.

Sin embargo la creación de un capítulo III, sobre "los establecimientos mercantiles que prestan el servicio de videojuegos", y de un capítulo IV, "Del contenido de los videojuegos"; implica la creación de una normatividad dirigida a una actividad determinada, lo que daría lugar a que todas las actividades cuenten con un capítulo específico; no obstante, la propuesta resulta valiosa al establecer una clasificación en materia de videos. Por ello, el contenido del artículo 27 y 31 de la iniciativa en comento se propone ubicar en el capítulo de "Disposiciones Complementarias", específicamente en los artículos que han quedado citados.

Además de ubicar lo relativo a la clasificación y contenido de los videojuegos, en este dictamen se propone adicionar para su perfecta interpretación, las edades de los menores que podrán hacer uso de los videojuegos dependiendo del contenido de éstos. Se considera para ello que la propuesta únicamente refiere a los menores de doce años, quienes tienen impedido el acceso a los videojuegos tipo "D", entendiéndose que estos menores pueden utilizar los juegos clasificados como "A", "B" y "C", sin restricción alguna; y por otro lado, se entiende que los menores de 13 a 17 años pueden hacer uso de los clasificados como "A", "B", "C" y "D", sin ninguna restricción. En consecuencia se modifica el texto de la propuesta para crear una relación entre el tipo de juego y las edades de los menores, de la siguiente forma: los clasificados con la letra "A", pueden ser usados por gente de cualquier edad; los de letra "B", por mayores de 13; los de letra "C", por mayores de 15 años; y los de letra "D", por mayores de 17 años. Con esto, se precisa a cual juego pueden tener acceso los usuarios de videojuegos, en atención de su edad; por tal motivo, se considera parcialmente procedente la propuesta.

Asimismo, se desechan las siguientes propuestas:

- La adición de los términos máquina, maquinita, juegos y videojuegos o juegos de video, toda vez que esto implicaría establecer definiciones de los diversos giros y actividades que contempla la ley, aspectos que pueden ser sujetos de un reglamento.

- Considerar como giro complementario la actividad de videojuegos en farmacias, misceláneas, tienda de abarrotes, papelerías o similares. En virtud de que este giro no resulta complementario y mucho menos, compatible con las actividades que desarrollan los establecimientos mercantiles citados.

- Adicionar nuevas atribuciones a la Secretaría de Gobierno y Delegaciones, en materia de videojuegos, ya que se consideran innecesarias y repetitivas en la ley, así como contradictorias con otros ordenamientos, toda vez que de aprobarse, generarían duda, además de invadir atribuciones que ya están otorgadas a dependencias de la administración pública.

- Adicionar nuevas atribuciones a la Secretaría de Gobierno y Delegaciones, mismas que por disposición de la Ley Orgánica de la Administración Pública Local, su respectivo reglamento, y la actual Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, corresponden a los órganos políticos administrativos, concretamente, la de pretender que la Secretaría de Gobierno sea la encargada de llevar un "Registro de los Videojuegos permitidos para operar en el Distrito Federal, con su respectiva clasificación"; así como el otorgar a la ésta Secretaría, la atribución que ya tienen conferida las

Delegaciones para ordenar visitas de verificación a los establecimientos mercantiles, independientemente de que tengan o no la actividad de explotación de máquinas de videojuegos. Propuestas a todas luces, contrarias al criterio de desconcentración de atribuciones para los diferentes órganos político administrativos en el Distrito Federal; que son más próximos a los ciudadanos y por ende, los que pueden dar una respuesta inmediata a sus demandas. Tal y como se desprende de los artículos 5 y 6 de la actual Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, que establecen las atribuciones de la Secretaría de Gobierno y de la Delegaciones Políticas.

De la misma forma resulta improcedente la adición que se propone al artículo 5º fracción V, de la Ley vigente, al dar atribuciones a la Secretaría de Gobierno para ordenar la suspensión temporal o clausura de actividades en los establecimientos mercantiles que operan con máquinas de videojuegos, toda vez que la facultad de fijar estas sanciones (clausura) se encuentra en el artículo 6º, fracción VI, como una atribución de las Delegaciones, y que a la letra dice: " aplicar las sanciones previstas en la Ley "; por lo que respecta a la facultad de ordenar la suspensión temporal, esta atribución ya esta conferida a la Secretaría de Gobierno en el artículo 5º fracción IV, que a la letra dice: "...Ordenar la suspensión de actividades en los establecimientos mercantiles que operen algunos de los giros que requieran Licencia de funcionamiento en fechas u horas determinadas..."

En el mismo sentido nos referimos a las fracciones VI, VII y VIII del artículo 5º de la misma Ley, toda vez que en la primera fracción, se señala la facultad que tiene la Secretaría de Gobierno, para coordinarse con las distintas delegaciones del Distrito Federal, por tanto, resulta repetitiva e improcedente su adición. Igualmente la fracción VII, donde se señala que la Secretaría de Gobierno puede consultar a los proveedores, dueños, o a quien haya participado en la clasificación de los videojuegos, para cerciorarse de que esta clasificación se encuentra apegada a los criterios de la Ley, en virtud de que al establecer ésta una clasificación, es innecesaria cualquier consulta, pues sólo un tribunal administrativo o judicial puede decir el derecho en caso de controversias en la Ley; por otro lado, son los dueños de los establecimientos mercantiles, con actividad de videojuegos, los que deben ajustarse al contenido de lo dispuesto en el artículo 34 de la iniciativa en comento y en caso de no cumplir, las autoridades delegacionales tienen implícita la facultad de imponer las sanciones que éste ordenamiento contempla. Finalmente, es repetitiva la propuesta señalada en la fracción VIII, consistente en llevar un registro de videojuegos permitidos para operar en el Distrito Federal con su respectiva clasificación, debido a que corresponde a las delegaciones del Distrito Federal, la atribución de

tener un padrón actualizado acorde a sus funciones y necesidades.

Respecto a la adición que se propone al artículo 6º fracción IV de la Ley vigente, para que las delegaciones incluyan en sus padrones el número de establecimientos que presten el servicio de videojuegos, así como la cantidad de máquinas que operen en cada uno de ellos, resulta improcedente, ya que las autoridades delegacionales, tienen plena autonomía de elegir la forma de elaborar sus padrones, según crean o consideren más convenientes a sus necesidades y objetivos. Por otro lado, corre igual suerte la propuesta de una nueva fracción V a este artículo, donde se otorgaría la atribución de llevar a cabo verificaciones en los establecimientos mercantiles que operen videojuegos, para cerciorarse de que estos, se encuentren debidamente clasificados, debido a que esta facultad se tiene conferida en la fracción VI del mismo artículo que a la letra dice: ... "Instruir a los verificadores responsables de vigilar el cumplimiento a lo dispuesto por la Ley..."; por tanto, es repetitiva la propuesta y por ende, improcedente la adición.

· Adecuaciones a diversos artículos como se desprende de los artículos Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Sexto de su iniciativa, por considerarse improcedentes, toda vez que al no ser viable la propuesta de los artículos Primero, Segundo y Tercero, relacionados con las atribuciones que se pretenden otorgar en materia de videojuegos a la Secretaría de Gobierno y a las Delegaciones políticas, por consecuencia lógica corren su misma suerte.

Ahora bien, concretamente sobre las reformas que se mencionan en el artículo Décimo Primero de la iniciativa en cuestión, resulta improcedente considerar el giro de videojuegos como actividad complementaria, en virtud de que la propia ley define a este giro de la siguiente manera: "La actividad o actividades compatibles al giro principal, que se desarrollen en un establecimiento mercantil con el objeto de prestar un servicio integral"; entendiendo la actividad compatible, como aquella que puede coexistir con la principal; por otro lado, el servicio integral es aquel cuya actividad complementa un todo en el servicio. Asimismo, la actividad complementaria tendría que ser una que se asemeje a la principal y, que no cause trastornos dentro del establecimiento, siendo que la actividad de videojuegos no es compatible al giro de farmacia, abarrotes, miscelánea, papelería y similares; en consecuencia, es improcedente la propuesta de reformas a la Ley en estudio para tener el giro de videojuegos como complementario. Esto, dado su impacto social y regulación específica, ya que tal actividad no puede ser llevada a cabo en los establecimientos mercantiles que por su especial naturaleza, no tienen las condiciones propicias para su prestación.

Aunado a lo anterior, resulta improcedente la propuesta del artículo Décimo Tercero que plantea la iniciativa en estudio, respecto a otorgar a los establecimientos mercantiles con giro complementario de videojuegos "autorización" para funcionar por un término mayor de 365 días, susceptible de renovación, toda vez que al no proceder este giro como complementario en términos de lo propuesto, por consecuencia no procede lo accesorio.

QUINTO.- En cuanto al análisis realizado a la iniciativa de Nueva Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, presentada por la Diputada Ana Luisa Cárdenas Pérez, son de aprobarse en este proyecto de dictamen, las siguientes propuestas:

· La modificación al artículo 3º de conceptos, en términos del numeral 2º, fracciones I, III, IV, V, VI, VII, X, XIII, XVI, XVII, XIX y XX del presente dictamen.

Al modificar la redacción de las fracciones numeradas, se pretende que las autoridades, y destinatarios de la ley, cuenten con un ordenamiento mas claro y preciso de los términos que han presentado problemas de interpretación.

La modificación al artículo 10, 9 de este dictamen, sobre las obligaciones en general de los titulares de los establecimientos mercantiles, en sus modificaciones las fracciones, I, II, III, XI, XVI y XVII, con base en lo siguiente.

- Fracción I, del artículo 10 de la Ley vigente, únicamente se refiere a destinar el local a la actividad autorizada, sin contar para ello, que la propia ley señala la posibilidad de que los establecimientos mercantiles puedan tener otra actividad, es decir, un giro complementario; en consecuencia, resulta trascendente incluir en este proyecto de dictamen, que el titular deba destinar el establecimiento mercantil a la actividad autorizada, así como a la actividad complementaria que el mismo ordenamiento contempla.

- Fracción II del artículo en estudio, señala la obligación de los titulares de los establecimientos mercantiles, de tener a la vista del público en general, la documentación que la autoridad haya entregado para acreditar su legal funcionamiento. Sobre este punto, la iniciativa de la Diputada Ana Luisa Cárdenas Pérez, propone, que la documentación a la vista sea en original o copia fotostática. Dicha propuesta se considera parcialmente procedente, en cuanto a que debe ser vigente y en original, no así en copia fotostática, toda vez que éste último documento, no otorga ninguna seguridad a los particulares que entran a un establecimiento mercantil; caso contrario, una documentación vigente, en original o certificada, da certeza de estar ante un giro regular y que ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos para su funcionamiento.

- Fracción III, del artículo 10, que obliga al titular del negocio a revalidar anualmente la licencia de funcionamiento, se considera oportuna su inclusión, en virtud de que esta obligación esta dispersa en el articulado de la Ley actual, precisamente en el artículo 23, por lo que al incluirse en el artículo 9 de este proyecto de dictamen, se considera que da congruencia y orden a la ley, haciendo más efectiva su localización y por ende su cumplimiento.

- Fracciones XI, XVI y XVII, del artículo en comento, se propone modificarlas únicamente en redacción para su fácil entendimiento, lo cual se considera viable, a fin de evitar complejidad y problemas a las autoridades administrativas en su aplicación e interpretación; por lo tanto, se otorga mayor claridad y seguridad.

· Adicionar en la Ley, a los giros con actividad principal de estacionamiento de uso público, como establecimientos mercantiles, tal y como se desprende de este dictamen en los siguientes artículos:

a) 5º, fracciones IV y V. Esta adición se basa en el análisis del concepto de "Establecimiento Mercantil" que contempla la Ley vigente y que a la letra dice: ... "El inmueble en donde una persona física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, alquiler o prestación de bienes o servicios, en forma permanente"; entendiendo, que el giro dedicado al estacionamiento de uso público encuadra en el concepto mencionado.

Por otro lado, se considera significativo para la elaboración de este dictamen, valorar, como los giros prestadores del servicio de estacionamiento de uso público, desarrollan una actividad importante en nuestra comunidad, ya que en forma directa, ayudan a evitar congestiones en la vía pública al realizar el resguardo de los vehículos, evitando que se estacionen en zonas prohibidas o en doble y hasta triple fila. Para evitar estas irregularidades, resulta necesario crear incentivos a través de una Ley clara y precisa, que otorgue facilidades a los negocios con este tipo de actividad, sin eximirlos de observar íntegramente la normatividad para su debido funcionamiento.

En este orden de ideas, cabe señalar la facultad que tiene conferida esta H. Asamblea Legislativa del D. F. para legislar en esta materia, que se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 122 Base Primera, fracción V, letras j) y l); en relación con las reformas aprobadas el 25 de diciembre del año próximo pasado a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Este último ordenamiento señala en su artículo 31 fracción V, sobre la Secretaría de Transporte y Vialidad, lo siguiente:

... "Establecer con base en los estudios pertinentes, las normas generales para que las Delegaciones puedan determinar la ubicación construcción y el funcionamiento y tarifas de los estacionamientos públicos en su demarcación territorial, así como vigilar el cumplimiento de dicha normatividad"; asimismo, el artículo 39 de dicho ordenamiento, establece las atribuciones de los órganos político administrativos en materia de estacionamientos como a continuación se menciona:

... "XXIX: Autorizar, con base en las normas que al efecto expida la Secretaría de Transporte y Vialidad y una vez, realizados los estudios pertinentes la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que aplicaran para los estacionamientos públicos de su jurisdicción"; y

"... XXX: Ejercer las funciones de vigilancia y verificación administrativa sobre el funcionamiento y la observación de las tarifas en los estacionamientos públicos establecidos en su jurisdicción, así como aplicar las sanciones respectivas".

Por lo anterior, la adición de las fracciones al artículo 5 del presente dictamen, se retoma en términos de los ordenamientos ya descritos, a fin de hacer congruente la normatividad, procedimientos y trámites que se requieren para su funcionamiento, los giros con actividad de estacionamiento de uso público; asimismo, con el objeto de regular a este tipo de negocios e incentivar en la Ciudad de México su desarrollo.

b) 10 y 11. Como consecuencia de esta adición en materia de estacionamientos de uso público, y con la finalidad de hacer más integral, clara y congruente la normatividad para el funcionamiento de estos establecimientos mercantiles, es de importancia, considerar las reformas que tuvo el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en materia de Acomodadores de Vehículos, debido a la relación que guardan entre sí, estacionamientos y acomodadores. Dicho ordenamiento cita en el artículo 117, fracción XI lo siguiente:

... "117.- Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Gobierno"

Fracción XI.- Autorizar en el ámbito de su competencia, el funcionamiento del servicio de acomodadores de vehículos en los giros mercantiles a que se refiere la fracción anterior"...

Por lo antes mencionado, y toda vez que las autoridades delegacionales cuentan con atribuciones para autorizar el funcionamiento de los acomodadores de vehículos en los establecimientos mercantiles, se propone en este proyecto de dictamen de Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal,

incluir las disposiciones que se deben observar para la prestación de este tipo de servicio, por ejemplo, el portar uniforme y tener licencia e identificación que acredite a los acomodadores.

No obstante lo mencionado, resulta necesario que el Ejecutivo Local, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y su Reglamento respectivo, emita los reglamentos necesarios o modifique los existentes, así como los acuerdos que den mayor congruencia a la propuesta en comento, para precisar en el Reglamento de Estacionamientos los aspectos que se regulan en este proyecto de dictamen.

· La de adicionar una fracción "IX" al artículo 16 de su propuesta, que se refiere a la obtención de licencia de funcionamiento para los giros con actividad de estacionamiento de uso público.

La adición descrita obedece a la preocupación de la ciudadanía, por la serie de problemas que genera el estacionamiento de vehículos en la vía pública en doble y hasta triple fila, así como los problemas ambientales y de seguridad también desprenden. Asimismo, en cuanto a los trámites que deben realizar los estacionamientos de uso público para su legal funcionamiento, conviene analizar la propuesta de la iniciativa de sujetarlos a la obtención de una licencia de funcionamiento; y no a la declaración de apertura que contempla el actual Reglamento de Estacionamientos Públicos. Propuesta que en principio, resulta procedente, pues no existe argumento alguno, para no considerar a este tipo de giro como de impacto social y si, por el contrario, la existencia de este giro ocasiona diversos congestionamientos y caos vial, aunado a la dualidad de tramites que deben realizar, y que son considerados por lado, en la Ley de Establecimientos Mercantiles y por, en el Reglamento de Estacionamientos Públicos del Distrito Federal. Asimismo conviene analizar que actualmente la declaración de apertura que se otorga a estos negocios tiene la peculiaridad de ser revalidada anualmente constituyendo de esta manera una excepción a la regla dentro de los giros que funcionan mediante este documento; por otra parte la licencia de funcionamiento es el único documento que de conformidad con la ley, debe ser revalidado anualmente, de ahí que se proponga sujetar a estos giros a la licencia de funcionamiento.

· La adición al artículo 18 de una fracción VIII y al último párrafo del numeral 19 de su iniciativa. Ambas adiciones, referentes a la "Licencia de Funcionamiento" que deberán tramitar los establecimientos mercantiles con giro de estacionamiento de uso público. Tal y como se desprende del artículo de este dictamen.

Con relación a esta propuesta, el artículo 41 del presente dictamen se refiere a la póliza de seguro vigente que deben tener quienes presten el servicio de estacionamiento, en virtud de ser una garantía para los usuarios del servicio, de que sus vehículos serán custodiados debidamente.

A su vez el artículo 60, considera las actividades complementarias, que se pueden desarrollar en los establecimientos mercantiles con giro de estacionamiento de uso público, tales como dulcería, regalos, lotería, lavado y encerado de automóviles, taquería, tortería, cerrajería y nevería, excepto el giro de lotería. Lo anterior, con el fin de que estos comercios tengan mejores incentivos al prestar un servicio más integral a la ciudadanía.

· Modificar los artículos 78, 79, 80 y 81 de la actual Ley, para reducir las multas y reconsiderar la gravedad, quedando como artículos 74, 76, y 77, del presente dictamen, considerando para ello, que las multas contenidas en la Ley vigente, de 3 a 400 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, son excesivas para aquellos negocios cuyo capital invertido es inferior a las multas aplicables por las autoridades administrativas, provocando muchas veces, el cierre de varios negocios, en tal virtud se propone un mínimo y máximo de 15 a 300 días de salario.

Lo anterior, debido a que el sector que comprende a los establecimientos mercantiles, es fuente importante para la economía interna de esta entidad, generador por su actividad, de empleos e impuestos; caso contrario, la disminución de negocios genera desempleo y reducción en el pago de impuestos y derechos para el Gobierno del Distrito Federal. De ahí la relevancia de esta propuesta que se analiza, ya que su inclusión en este proyecto de dictamen, incentiva al sector comercial. Por ejemplo, se reconsidera el caso de no tener a la vista la documentación legal para funcionar, donde la multa es la misma para el propietario que carece de ella. En este caso, es importante regular, la falta de Licencia de Funcionamiento, donde actualmente no se contempla la multa económica, sino únicamente la clausura del negocio, contrariamente a los establecimientos mercantiles que requieran de Declaración de Apertura, que además de hacerse acreedores a una clausura, se ven sancionados con multa económica.

· Modificar las causales de clausura y de revocación, ubicadas en los artículos 78 y 85 del presente dictamen, éstas por considerarse de perjuicio excesivo hacia los propietarios de los establecimientos mercantiles. Asimismo se realizan modificaciones en general, que no impliquen una afectación al orden o a la paz social.

Se eliminan causales que se consideran excesivas en perjuicio del propietario del negocio; por ejemplo, la falta de constancia de uso de suelo, actualmente es motivo de

clausura, debido a que ésta, es requisito indispensable para obtener la documentación legal para funcionar; por otro lado, es expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y no por la Delegación, autoridad que impone la clausura.

Igualmente, se agrega en el capítulo IV "Procedimiento para la revocación de oficio" a la Declaración de Apertura que actualmente no esta contemplada, pues la ley sólo señala a la licencia de funcionamiento, permisos y autorizaciones; asimismo, se suprime la causal de falta de revalidación de la Licencia de Funcionamiento; pues si bien es cierto que la falta de revalidación de la licencia es una violación a la ley, también es cierto que no es lo mismo carecer de ésta, toda vez que en el primer caso el documento esta expedido pero no actualizado, y lo único que se requiere para cumplir con la ley es pagar la multa y los derechos por haberse omitido la revalidación dentro del periodo que la misma norma establece; caso contrario es no contar con este documento, pues a todas luces se viola la ley en perjuicio de la autoridad que no recibe los créditos a su favor, y contra la ciudadanía que muchas veces se ve afectada por el funcionamiento de éstos negocios, y finalmente, se afecta al comercio legalmente establecido.

Se incluye como causal de revocación la obtención del documento correspondiente para funcionar, mediante la exhibición de documentos y datos falsos, o emitidos con dolo o mala fe. Esta, dada la problemática que actualmente se presenta con aquellos giros que de forma dolosa vienen funcionando con documentos apócrifos, violando a todas luces la Ley y que por consecuencia, afectan al comercio legalmente establecido.

· Adicionar en el Título Sexto, de "Verificación, Medidas de Seguridad, Sanciones y Recursos", un Capítulo III, denominado "del retiro de sello de clausura", en términos de los artículos 82, 83 y 84 de este dictamen, y en virtud de que en la actual ley, no se contempla esta disposición, cuya ausencia genera incertidumbre a los particulares, quienes se ven afectados por determinaciones de las autoridades administrativas.

Con esta adición se otorga seguridad jurídica a los particulares, pues al no existir una disposición que regulé el procedimiento para retirar sellos de un establecimiento clausurado, se genera discrecionalidad en las autoridades que aplican criterios distintos para su levantamiento y caen muchas veces, en exceso y arbitrariedad; por lo que el particular que ha cumplido con los requisitos legales para el funcionamiento de su negocio, opta por cerrarlo, disminuyendo de esta manera las fuentes de empleo en la Ciudad.

· Modificar el procedimiento a seguir para la revocación de oficio de la Licencia de Funcionamiento, Declaración

de Apertura, Autorización y Permiso, con el fin de unificarlo, como se desprende de los artículos 85 al 93 de este dictamen.

Esta propuesta se considera oportuna, toda vez que la ley vigente contempla en diversos artículos los procedimientos para revocar estos documentos, así, su inclusión pretende dar mayor homogeneidad a la norma, evitando repetitividad en artículos y en el procedimiento.

· Modificar los artículos 72, 73 y 74 de la actual ley, para quedar sólo como artículo 70 del presente dictamen, relacionado a las visitas de verificación. Esta modificación se incluye, al considerar que existe normatividad concreta para el procedimiento concreto de verificación, como la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; documentos que describen las formas y términos para llevar a cabo estas verificaciones.

Cabe señalar, que diversas leyes en el Distrito Federal remiten a los ordenamientos referidos, otras, establecen este procedimiento, tal y como lo regula esa normatividad, la que muchas veces se confunde en su interpretación, toda vez que esta entidad carece hasta el momento de un código que unifique todos los procedimientos a seguir ante la autoridad administrativa, el cual ha sido presentado para su análisis y discusión ante este H. Asamblea; no obstante, en espera del mismo, se propone remitir el procedimiento que se sigue en esta norma, a la ley y reglamento que han sido mencionados.

· Modificar el artículo 98 y 99 de la actual ley, sobre las notificaciones, para quedar sólo como un artículo 95 en este dictamen. Dicha modificación se propone, por considerar que las notificaciones realizadas a particulares en el cumplimiento de esta ley, se practican en los mismos términos que dispone la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, por ello se pretenden evitar la doble regulación de éstas en la ley, y a su vez, tener una ley más concreta en la materia.

Por otro lado, se desechan las siguientes propuestas:

· La modificación al artículo 9 párrafo segundo de su iniciativa, respecto a los formatos de solicitud que deben contenerse en el manual de trámites y servicios al público, esto en la idea de que el reglamento de la Ley deberá precisar el tipo de formato que se usará para los trámites en Materia de Establecimientos Mercantiles.

· La modificación al artículo 24 para reducir el tiempo de contestación de licencia de funcionamiento de 7 a 5 días hábiles, tomando en cuenta los argumentos hechos valer por autoridades delegacionales consultadas, sobre la carencia del personal para realizar este trabajo, así como

la lentitud con que se actúa, afectando el tiempo para su desarrollo, lo que generaría un mal uso de la afirmativa ficta, en perjuicio del gobierno de la Ciudad.

· La adición al artículo 39, 40 y 42 de su iniciativa, sobre el cumplimiento de diversas disposiciones de los giros con actividad de estacionamientos de uso público, en virtud de que éstas se consideran materia de reglamentación, mismas que deben ser emitidas por el ejecutivo local, a través de reglamentos, acuerdos y circulares que hagan efectivo, el cumplimiento de la ley.

SEXTO.- Que derivado del estudio y análisis de las iniciativas en comento, resultó necesario adecuar ciertos artículos para dar coherencia al presente dictamen, y en su momento, efectividad a la ley, se propone adicionar y modificar los siguientes artículos:

· Artículo 2º, fracción:

XV) Reglamento: El Reglamento de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal.

Artículo 9º, fracción XII) "Prohibir en el interior de los establecimientos mercantiles las conductas que tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución o drogadicción, y en general aquellas que pudieran constituir una infracción administrativa o delito; así como dar aviso a la autoridad competente, si esta se realizan en la zona exterior inmediatamente adyacente del local.

XIX) se agrega la siguiente redacción... "dentro del establecimiento mercantil o en la parte exterior inmediatamente adyacente al mismo".

Motivación: Derivado de la preocupación de autoridades y vecinos por el funcionamiento de ciertos giros, cuyas actividades son las de "entretenimiento" y "variedades", en centros nocturnos, bares, cantinas etc., se desprende la necesidad de separarlos de aquellos que suelen presentar una posible afectación a la armonía y paz social, toda vez que los señalados anteriormente, además de poder afectar la armonía y paz social, también generan conflictos en la comunidad por el desarrollo de sus actividades. Esto, aunado a la inexistencia de definiciones para determinadas conductas, como es el caso de aquellas que tiendan a favorecer o tolerar la prostitución; por ello, resulta necesario que se determine de manera concreta cuales serán esas conductas, a fin de que la autoridad tenga elementos suficientes para aplicar la Ley. En este sentido, se debe tomar en cuenta que la Ley no puede contemplar situaciones casuísticas, éstas, deben ser precisas y concretas; asimismo, resulta conveniente involucrar al titular del establecimiento mercantil para que guarde el orden público de la comunidad, a través de la vigilancia

tanto en el interior como en el exterior del negocio, en el supuesto de que se lleguen a presentar estas conductas, o cualquier otra que afecte la armonía o paz social.

Artículo 9

Fracción X) párrafo segundo: adicionar a los miembros de la "Marina Armada";

Fracción XI) se modifica su redacción y se señala que las medicinas y utensilios necesarios serán para la atención de urgencias médicas;

Fracción XVII) Se propone complementar la fracción adicionando el término "u objetos";

Artículo 18, fracción X) "En el caso de los establecimientos mercantiles contemplados en las fracciones II y III del Artículo 16 de esta Ley, la Delegación deberá realizar consulta hacia los vecinos.

Para efectos de la consulta vecinal, se observará el procedimiento que para el caso establece la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

Motivo: Como ha quedado señalado en párrafos anteriores, es reiterada la preocupación de aquellos vecinos a través de sus demandas por el inicio de actividades de los establecimientos mercantiles denominados "giros negros", ya que se ven afectados en su tranquilidad y seguridad. Asimismo, la impotencia de no contar con instrumentos que les permitan expresar su parecer sobre el funcionamiento de éstos, constituye una preocupación que debe ser tomada en cuenta en este proyecto de dictamen, donde se establezca una base que de pie a la solución de estas demandas sociales.

Con esa finalidad, se propone que los establecimientos mercantiles señalados en el Artículo 16 fracciones II y III, además de cumplir con los requisitos de la Ley, sean sujetos de consulta vecinal, misma que deberá realizar la delegación, con base en los mecanismos que determine la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Con esta adición se pretende generar una corresponsabilidad entre, autoridad y vecinos para el funcionamiento de estos negocios, sin que esto pueda implicar una violación a la garantía constitucional de libre ocupación.

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Administración Pública Local, una vez que ha estudiado y analizado las iniciativas ya descritas y considerando para ello todos y cada uno de los comentarios, propuestas y sugerencias de las Diputadas y Diputados y de las autoridades consultadas para la elaboración del presente proyecto, pone a consideración del Pleno de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal el siguiente:

DICTAMEN

UNICO.- Son de aprobarse, en lo conducente, las iniciativas de Reformas y Adiciones a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, en materia de videojuegos y la Iniciativa de Nueva Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, presentadas por los C.C. Diputados, Sara Isabel Castellanos Cortes, Esveida Bravo Martínez y José Luis Benítez Gil, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y por la Diputada Ana Luisa Cárdenas Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, con las adiciones y modificaciones pertinentes para quedar como sigue:

**LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN EL
DISTRITO FEDERAL.**

TITULO PRIMERO

**DE LAS DISPOSICIONES GENERALES,
COMPETENCIA Y ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES EN GENERAL**

**CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES.**

ART. 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés público, y tienen por objeto determinar mecanismos claros que faciliten la apertura, funcionamiento, regulación y verificación de los establecimientos mercantiles en el Distrito Federal.

No será objeto de regulación de la presente Ley, los locales destinados a la industria en todas sus especificaciones, ni los estacionamientos de uso privado.

Para efectos de esta Ley, son supletorias la Ley de Procedimiento Administrativo y el Reglamento de Verificación Administrativa, ambos del Distrito Federal.

ART. 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I) **Administración Pública:** La que se deriva de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y que por sus atribuciones interviene en la aplicación de la Ley;

II) **Autorización:** El acto administrativo que emite la Delegación para que una persona física o moral pueda desarrollar por una sola ocasión o periodo determinado, alguno de los giros que requieren Licencia de Funcionamiento;

III) **Declaración de Apertura:** Acto administrativo, por el cual la autoridad registra la manifestación que hacen las personas físicas o morales que inician actividades de los establecimientos mercantiles;

IV) **Delegación:** Organismo desconcentrado de la administración pública del Distrito Federal, también conocido como Demarcación Territorial;

V) **Enseres en vía pública:** Son aquellos objetos, como sombrillas, mesas, sillas o cualquier instalación desmontable colocados en la vía pública para la prestación del servicio propio que otorga el establecimiento mercantil;

VI) **Establecimiento mercantil:** El local ubicado en un inmueble en donde una persona física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, alquiler o prestación de bienes o servicios, en forma temporal o permanente;

VII) **Giro complementario:** La actividad o actividades compatibles al giro principal, que se desarrollen en un establecimiento mercantil con el objeto de prestar un servicio integral;

VIII) **Giro mercantil:** La actividad o actividades permitidas en su uso de suelo y que se registren o autoricen para desarrollarse en los establecimientos mercantiles;

IX) **Giro principal:** Es la actividad o actividades predominantes, autorizadas en la Licencia de Funcionamiento, manifestadas en la Declaración de Apertura;

X) **Impacto social:** La actividad que por su naturaleza puede alterar el orden y la seguridad pública, o afectar la armonía de la comunidad;

XI) **Ley:** La Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal;

XII) **Licencia de Funcionamiento:** El acto administrativo que emite la Delegación, por el cual autoriza a una persona física o moral a desarrollar actividades comerciales;

XIII) **Permiso:** El acto administrativo que emite la Delegación, para que una persona física o moral pueda ocupar y colocar en la vía pública enseres o instalaciones del establecimiento mercantil, de conformidad a lo establecido en la Ley;

XIV) **Reglamento:** el Reglamento de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal;

XV) Secretaría de Gobierno: Organismo Central del Gobierno del Distrito Federal, que actúa a través de la Dirección General de Gobierno;

XVI) Titulares: Las personas físicas o morales que obtengan Licencia de Funcionamiento, Autorización, Permiso o Declaración de Apertura;

XVII) Traspaso: La transmisión que el Titular de una Licencia de Funcionamiento o Declaración de Apertura, haga de los derechos consignados a su favor a otra persona física o moral, siempre y cuando no se modifique la ubicación del establecimiento y el giro mercantil que la misma ampare;

XVIII) Ventanilla de gestión: Organismo administrativo, donde se gestionan los trámites relacionados a la regulación del funcionamiento de los establecimientos mercantiles, y que están instaladas en los organismos empresariales; y

XIX) Ventanilla única: Organismo dependiente de la Delegación, donde se gestionan los trámites concernientes al funcionamiento de los establecimientos mercantiles, instaladas en las diferentes Delegaciones del Distrito Federal.

ART. 3.- Están obligados a observar y cumplir las disposiciones de la presente Ley, los titulares, así como los Servidores Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal.

CAPITULO II DE LA COMPETENCIA

ART. 4.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno:

I) Coordinar, supervisar y evaluar el debido cumplimiento de las facultades y obligaciones conferidas a la Delegación en la Ley;

II) Fijar los horarios de funcionamiento de los establecimientos mercantiles; que serán de carácter general, sin que puedan autorizarse horarios especiales;

III) Instruir a la Delegación que lleve a cabo visitas de verificación, en los términos de la Ley; y

IV) Ordenar la suspensión de actividades en los establecimientos mercantiles que operen alguno de los giros que requieran Licencia de Funcionamiento en fechas u horas determinadas, con el objeto de vigilar que no se alteren el orden y la seguridad pública.

En los supuestos señalados por las fracciones II y IV, se expedirá previo acuerdo que deberá publicarse en la

Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en diarios de amplia circulación en el Distrito Federal.

ART. 5.- Son atribuciones de la Delegación:

I) Expedir Licencias de Funcionamiento, Permisos y Autorizaciones en los términos de la Ley;

I) Llevar el registro de las Declaraciones de Apertura de los establecimientos mercantiles;

II) Registrar el aviso de suspensión y cese de actividades de los establecimientos mercantiles, asimismo informar a la Tesorería del Distrito Federal sobre estos avisos;

III) Autorizar las tarifas que se aplicarán en los Estacionamientos de Uso Público con base en las normas que expida la Secretaría de Transporte y Vialidad;

IV) Autorizar el funcionamiento del Servicio de Acomodadores de Vehículos, con que cuentan los establecimientos mercantiles;

V) Elaborar y mantener actualizado el padrón de los establecimientos mercantiles que operen en sus demarcaciones;

VI) Instruir a los verificadores responsables de vigilar el cumplimiento a lo dispuesto por la Ley, que lleven a cabo las verificaciones, aseguramiento y visitas a que haya lugar, de conformidad con la Ley, la de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y sus disposiciones reglamentarias;

VII) Aplicar las sanciones previstas en la Ley; y

VIII) Las demás que les señalen la Ley y otras disposiciones aplicables.

ART. 6.- Son facultades de los titulares de las Ventanillas únicas y la de gestión, orientar, recibir, integrar, gestionar y entregar la documentación y respuesta correspondiente, de los siguientes trámites:

I) Autoirización y revalidación de las Licencias de Funcionamiento, así como la tramitación de los traspasos;

II) Registro de la Declaración de Apertura y tramitación de los traspasos;

III) Registro del aviso de suspensión y cese de actividades de los establecimientos mercantiles;

IV) Entrega de Permisos y Autorizaciones; y

V) Las demás que establezca la Ley.

ART. 7.- El titular de la Ventanilla de gestión deberá informar y remitir diariamente a la Delegación, vía la Ventanilla única, la documentación que reciban sobre los trámites materia de sus facultades.

ART. 8.- Los titulares de las Ventanillas únicas y las de gestión proporcionarán gratuitamente a los interesados, la solicitud de expedición de Licencia de Funcionamiento, Autorización, Permisos y la solicitud de Declaración de Apertura.

El formato de solicitud deberá ser el que determine la Administración Pública y su contenido lo suficientemente claro para su fácil llenado. La Delegación, a través de las Ventanillas únicas y de gestión, estará obligada a brindar la asesoría y orientación que al respecto solicite el interesado.

En ningún caso se podrá negar la recepción de documentos o solicitudes que cumplan con los requisitos del trámite solicitado, mismas que serán canalizadas al área correspondiente para que esta determine lo conducente. Su recepción no implica la autorización del trámite.

CAPITULO III DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN GENERAL

ART. 9.- Los Titulares, tienen las siguientes obligaciones:

I) Destinar exclusivamente el local para el giro a que se refiere la Licencia de Funcionamiento o la Autorización otorgada; o bien, los manifestados en la Declaración de Apertura, acorde a su autorización de uso de suelo, así como los giros complementarios dispuestos en esta Ley;

II) Tener a la vista del público en general, el original o copia certificada de la documentación vigente que acredite su legal funcionamiento;

III) Revalidar anualmente la Licencia de Funcionamiento;

IV) Exhibir en un lugar visible al público y con caracteres legibles el horario en el que se prestarán los servicios ofrecidos;

V) Permitir el acceso al establecimiento mercantil del personal autorizado por la Delegación para realizar las funciones de verificación que establece esta Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y sus disposiciones reglamentarias;

VI) Observar el horario general que para los establecimientos mercantiles fije la Secretaría de Gobierno,

así como evitar que los clientes permanezcan en su interior después del horario autorizado;

VII) Cumplir las restricciones al horario o suspensión de actividades que en fechas y horas determinadas fije la Secretaría de Gobierno;

VIII) Prohibir la venta de cualquier tipo de bebidas alcohólicas a los menores de edad, aun cuando consuman alimentos;

IX) Abstenerse de utilizar la vía pública para la prestación de los servicios o realización de las actividades propias del giro mercantil de que se trate, salvo aquellos casos en que lo autorice expresamente la Ley;

X) Permitir a toda persona que solicite el servicio, sin discriminación alguna, el acceso al establecimiento mercantil de que se trate, salvo los casos de personas en evidente estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes, o que porten armas, así como a los menores de edad, en términos de la fracción VI del artículo 78 de la Ley, en cuyos casos se deberán negar los servicios solicitados.

Cuando se trate de integrantes de corporaciones policiacas que se encuentren cumpliendo una comisión legalmente ordenada, podrán tener acceso únicamente el tiempo necesario para llevar a cabo dicha comisión. Asimismo se impedirá el acceso a miembros del Ejército, Fuerza Aérea, Marina Armada y de Cuerpos Policiacos cuando pretendan hacer uso de los servicios al coqueo, estando uniformados o armados;

XI) Contar con un botiquín equipado con medicinas y utensilios necesarios; en caso de reunir a más de 100 personas, contar con el personal capacitado por las instituciones correspondientes, para la atención de urgencias medicas;

XII) Prohibir en el interior de los establecimientos mercantiles las conductas que tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución o drogadicción, y en general aquellas que pudieran constituir una infracción administrativa o delito; así como dar aviso a la autoridad competente, si estas se realizan en la zona exterior inmediatamente adyacente del local.

XIII) Prohibir que se crucen apuestas en el interior de los establecimientos mercantiles, excepto en los casos en que se cuente con la aprobación correspondiente de la Secretaría de Gobernación;

XIV) Abstenerse de elaborar y vender bebidas con ingredientes o aditivos que no cuenten con registro sanitario de conformidad con la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios; y demás disposiciones aplicables;

XV) Abstenerse de retener a las personas dentro del establecimiento mercantil;

XVI) Dar aviso por escrito a la Delegación dentro de los siguientes 5 días hábiles, de la suspensión temporal o cierre definitivo del establecimiento mercantil, indicando la causa que la motive, así como el tiempo probable que dure dicha suspensión;

XVII) Abstenerse de colocar estructuras, dispositivos u objetos que dificulten la entrada o salida de las personas o vehículos;

XVIII) Vigilar que se conserve la seguridad de los asistentes y de los empleados dentro del establecimiento mercantil, así como coadyuvar a que con su funcionamiento no se altere el orden público de las zonas inmediatas al mismo;

XIX) Dar aviso a las autoridades competentes, en caso de que se altere el orden y la seguridad dentro del establecimiento mercantil o en la parte exterior inmediatamente adyacente del mismo; y

XX) Las demás que les señalen otros ordenamientos.

ART. 10.- Cuando la normatividad de construcciones y de protección civil así lo exijan, el establecimiento mercantil deberá disponer para el público asistente, de un servicio de estacionamiento, de no contar el negocio con estacionamiento en el mismo local, podrán adoptar las siguientes modalidades:

I) Prestar directamente el servicio de acomodadores de vehículos;

II) Adquirir un inmueble que se destine para ese fin;

III) Celebrar contrato de arrendamiento de un inmueble para ser destinado como estacionamiento particular; y

IV) Celebrar contrato con un tercero para la prestación del servicio de estacionamiento.

El Titular deberá vigilar que los automóviles recibidos sean estacionados en lugares adecuados para ese fin, y que en ningún caso sean dejados en la vía pública.

Asimismo, se deberá contratar un seguro que garantice robo total, daños a terceros y responsabilidad civil, para el efecto de cubrir a los usuarios los daños que sufran sus vehículos, persona y la de terceros, durante el tiempo de su resguardo.

Art. 11.- El servicio de acomodadores de vehículos, deberá ser operado de preferencia por personal del mismo establecimiento mercantil o, en su defecto, por un tercero. En este último caso, el titular del establecimiento, será obligado

solidario por cualquier tipo de responsabilidad en que pudiera incurrir la empresa acomodadora de vehículos con motivo de la prestación de sus servicios, o del desempeño de sus empleados.

El personal encargado de prestar el servicio a que se refieren el párrafo anterior, deberá contar con licencia de manejo vigente, uniforme e identificación que lo acredite como acomodador, en términos de las disposiciones normativas de la materia.

El servicio de acomodadores de vehículos podrá prestarse previa obtención de la autorización que se establezca en el Reglamento de Estacionamiento para el Distrito Federal.

Su operación y funcionamiento se regirán en los términos que señale el Reglamento antes mencionado.

ART. 12.- Los establecimientos mercantiles que funcionen como restaurantes, cafeterías y bares, podrán colocar en la vía pública, previo permiso y pago de los derechos que establezca el Código Financiero del Distrito Federal, enseres necesarios para la prestación del servicio consignado en su Declaración de Apertura o en su Licencia de Funcionamiento.

ART. 13.- La colocación de los enseres o instalaciones a que se refiere el artículo anterior, únicamente se autorizarán cuando reúnan las siguientes condiciones:

I) Que sean contiguas al establecimiento mercantil y desmontables;

II) Que se coloquen únicamente en el horario que establezca la Secretaría de Gobierno;

III) Que se deje una anchura libre de por lo menos 1.50 metros entre los enseres o instalaciones y la guarnición de la banqueta, para el paso de peatones;

IV) Que no ocupen la superficie de rodamiento para la circulación vehicular;

V) Que no afecte el entorno e imagen urbana;

VI) Que los enseres o instalaciones no se utilicen para preparar o elaborar bebidas o alimentos; y

VII) Que no se instalen en zonas preponderantemente destinadas al uso habitacional y de oficinas.

Se declara de interés público el retiro de estos enseres o instalaciones, cuando su colocación viole lo dispuesto por la Ley.

ART. 14.- Los interesados en obtener de la Delegación el permiso a que se refiere el artículo 12 de la Ley, deberán

presentar ante la Ventanilla única o la de gestión la solicitud correspondiente acompañada de los siguientes datos y documentos:

I) Nombre, razón social o denominación del establecimiento mercantil, y domicilio para oír y recibir notificaciones;

II) Copia de la Licencia de Funcionamiento vigente o de la Declaración de Apertura, según sea el caso; y

III) Proyecto y croquis de colocación de enseres, en el que se expliquen las condiciones en que se instalarán u operarán, en su caso, a efecto de certificar que se cumple con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley.

La Delegación, una vez que reciba la solicitud, acompañada de los documentos y cumplidos los requisitos a que se refiere el presente artículo, deberá dentro de un plazo de 7 días hábiles, entregar el permiso, previo pago de los derechos correspondientes.

ART. 15.- El permiso para la ocupación o colocación en la vía pública de los enseres o instalaciones que menciona el artículo 12 de la Ley, no podrá exceder de 180 días naturales, mismo que podrá ser renovado, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

En caso de vencimiento del permiso, el Titular estará obligado a retirar los enseres o instalaciones por su propia cuenta. En caso contrario, la Delegación retirará las que ocupen la vía pública, corriendo a cargo del particular los gastos de ejecución de los trabajos, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

Cuando se viole alguna de las obligaciones consignadas en el artículo 13 de la Ley, la Delegación procederá a la revocación de oficio del Permiso, conforme lo señalado en el Capítulo IV del Título Sexto de esta Ley.

Todo Permiso que expida la Delegación para la ocupación de la vía pública, no crea ningún derecho real o posesorio y se entenderá condicionado a la observancia de la Ley, aún cuando no se exprese.

TITULO SEGUNDO

DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES QUE REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ART. 16.- Dado su impacto social, única y exclusivamente requerirán Licencia de Funcionamiento los establecimientos mercantiles que desarrollen alguno de los siguientes giros mercantiles:

I) Venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, que contenga una graduación alcohólica mayor de 14° G. L.;

II) Venta de bebidas alcohólicas al coqueo, que contengan una graduación alcohólica mayor de 2° G.L.;

III) Prestación del servicio de diversión, entretenimiento o eventos, en el que se incluya la prestación de la actuación de interpretes, orquestas, conjuntos musicales, música grabada o vídeo grabaciones, pista de baile, o venta de bebidas alcohólicas al coqueo;

IV) Prestación del servicio de alojamiento;

V) Prestación del servicio de baños públicos, masajes y gimnasios;

VI) Juegos mecánicos, electromecánicos, electrónicos y de vídeo para que el público los utilice dentro del establecimiento mercantil;

VII) Billares para que el público los utilice dentro del establecimiento mercantil;

VIII) Prestación de manera permanente de eventos artísticos, culturales, musicales, deportivos y/o cinematográficos, en locales con aforo para mas de 100 personas;

IX) Estacionamientos de uso público;

X) Prestación del servicio de reparaciones mecánicas, hojalatería, pintura, eléctricas, electromecánicas, de lavado y/o engrasado de vehículos automotores terrestres en locales que rebasen una superficie de 100 metros cuadrados;

XI) La prestación de los servicios a que se refiere la fracción III anterior, y que adicionalmente los condicionen a la adquisición de una membresía que otorgue a los consumidores que los deseen, la calidad de miembro del mismo; y

XII) Los salones de fiestas infantiles.

ART. 17.- Quedan exceptuados de la obtención de Licencia de Funcionamiento los servicios de alojamiento prestados por hostales, hospitales, clínicas médicas, asilos, conventos, internados y seminarios.

Para los casos antes indicados sólo requerirán de la presentación de su Declaración de Apertura para desarrollar sus actividades.

CAPITULO II

DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ART. 18.- Los interesados en obtener de la Delegación las Licencias de Funcionamiento correspondientes para la

operación de los giros mercantiles a que se refiere el artículo 16, deberán presentar ante la Ventanilla única o la de gestión, la solicitud correspondiente con los siguientes datos y documentos:

I) Nombre, domicilio para oír o recibir notificaciones, registro federal de contribuyentes y nacionalidad;

II) Si el solicitante es extranjero deberá presentar la autorización expedida por parte de la Secretaría de Gobernación, en la cual se le permita llevar a cabo la actividad de que se trate;

III) Si es persona moral, su representante legal acompañara copia certificada de la escritura constitutiva con registro en trámite o debidamente registrada, y el documento con el que acredite su personalidad, así como copia de una identificación oficial vigente, con fotografía;

IV) Ubicación del local donde pretende establecerse el giro mercantil;

V) Clase de giro mercantil que se pretende ejercer, y razón social o denominación del mismo;

VI) Certificado de zonificación para uso específico, o certificado de zonificación para usos del suelo permitidos, o certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, en su caso, con la que acredite que el giro mercantil que pretende operar esta permitido en el lugar de que se trate.

El uso del suelo que se deberá acreditar es el correspondiente al giro principal, de conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y sus disposiciones reglamentarias;

VII) Visto bueno de seguridad y operación expedido por un Director Responsable de Obra en los casos de edificaciones construidas con anterioridad a agosto de 1993; o la autorización de ocupación otorgada por la Delegación correspondiente, en los demás casos;

VIII) El número o rango de cajones, y clasificación, en los términos del Reglamento de Estacionamiento Públicos del Distrito Federal, y demás disposiciones jurídicas y administrativas cuando el giro se trate de estacionamiento de uso público;

IX) En caso de los establecimientos mercantiles a que se refiere la fracción XI del artículo 16 de la Ley además deberán:

a) Acreditar una inversión mínima de 100 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; y

b) Contar con un mínimo de 1000 metros cuadrados de áreas para prestar los servicios; y

X) En el caso de los establecimientos mercantiles contemplados en las fracciones II y III del artículo 16 de esta Ley, la Delegación deberá realizar consulta hacia los vecinos.

Para efectos de la consulta vecinal, se observará el procedimiento que para el caso establece la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

ART. 19.- Recibida la solicitud acompañada de todos los documentos y cumplidos todos los requisitos a que se refiere el artículo anterior, la Delegación en un plazo máximo de 7 días hábiles, y previo pago de los derechos que establezca el Código Financiero del Distrito Federal, deberá expedir la Licencia de Funcionamiento correspondiente, excepto en los casos de licencias de funcionamiento consideradas en las fracciones II y III del artículo 16 de esta Ley, donde el plazo máximo será de 15 días hábiles contados a partir del día en que se lleve a cabo la consulta vecinal.

La Delegación podrá dentro del plazo señalado, realizar visitas o cotejos para verificar que las manifestaciones y documentos de las solicitudes respectivas es verídico, de conformidad con lo que establezca la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y sus disposiciones reglamentarias.

En la Licencia de Funcionamiento se hará constar en forma clara el giro mercantil que se autoriza ejercer, atendiendo lo señalado en el artículo 16 de la Ley, y conforme la actividad permitida en el uso de suelo.

Tratándose de estacionamientos de uso público, la Delegación, en el momento de entregar la Licencia de Funcionamiento, proporcionara la cartulina de la tarifa autorizada.

ART. 20.- En caso de que transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior no exista respuesta de la autoridad competente a la solicitud, se entenderá que ha operado la afirmativa ficta en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

ART. 21.- Cuando a la solicitud no se acompañen todos los documentos, no se satisfagan los requisitos a que se refiere el artículo 18 de la Ley, o en la visita a que se refiere el artículo 19 de la Ley, se acredite que no se cumplieron las condiciones manifestadas en la solicitud respectiva, la Delegación deberá proceder a prevenir por escrito y por una sola vez al interesado para que subsane la irregularidad, en los términos señalados por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

Se entenderá que el plazo señalado en el artículo 19 de la Ley, comenzará a correr hasta que se desahogue la prevención o se emita la resolución correspondiente.

ART. 22.- *La Licencia de Funcionamiento deberá revalidarse cada año en los términos que para tal efecto, establece el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.*

Una vez recibida la documentación en la Ventanilla única o de gestión, la Delegación tendrá por revalidada la Licencia de Funcionamiento original.

ART. 23.- *Cuando se realice el traspaso de algún establecimiento mercantil, el adquirente deberá solicitar, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado, la expedición de la Licencia de Funcionamiento a su nombre, presentando al efecto únicamente los siguientes documentos:*

I) El documento traslativo de dominio;

II) La Licencia de Funcionamiento original y vigente o copia de ésta, debidamente certificada ante fedatario público;

III) En caso de personas morales el documento con que su representante acredite su personalidad; y

IV) Si el solicitante es extranjero deberá presentar la autorización expedida por la Secretaría de Gobernación, en la cual se le permita llevar a cabo la actividad de que se trate.

ART. 24.- *La Delegación, una vez que haya recibido la solicitud y documentación respectiva a través de la Ventanilla única, procederá en un plazo de 5 días hábiles a emitir la Licencia de Funcionamiento.*

El pago de derechos que establece el Código Financiero del Distrito Federal se realizará previo a la expedición de la Licencia de Funcionamiento a nombre del nuevo titular.

En caso de que transcurrido dicho plazo, no existiera respuesta de la autoridad operará la afirmativa ficta, y se entenderá que el traspaso ha sido aprobado para el nuevo titular, por lo que deberá expedirse la Licencia de Funcionamiento correspondiente, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

CAPITULO III

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ART. 25.- *En los establecimientos mercantiles con licencia para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado estará prohibido que las mismas se consuman en su interior.*

ART. 26.- *Las Licencias de Funcionamiento que se otorguen a los restaurantes para vender bebidas alcohólicas al coqueo con una graduación mayor a 14° G.L., establecerán que su venta será exclusivamente acompañada de alimentos.*

ART. 27.- *Cuando en algún establecimiento mercantil con Licencia de Funcionamiento para expender bebidas alcohólicas al coqueo, se autorice su venta sin necesidad de consumir alimentos, el servicio se deberá prestar en una o más áreas delimitadas mediante desniveles, muros, cancelas o mamparas, construidas de tal forma que se eviten molestias a los demás concurrentes.*

ART. 28.- *En los establecimientos mercantiles con Licencia de Funcionamiento para operar el giro mercantil a que se refiere la fracción III del artículo 16, se deberá proporcionar a los clientes, la lista de precios correspondientes a las bebidas y alimentos que se ofrecen, en la carta o menú.*

Sus titulares serán responsables de vigilar que la asignación de una mesa o el ingreso del público asistente no se condicione al pago de un consumo mínimo, y que no se exija el consumo constante de alimentos y/o bebidas, para poder permanecer en el establecimiento.

Los establecimientos mercantiles que opten por la modalidad de condicionar la prestación de sus servicios a la adquisición de una membresía, a que se refiere la fracción XI del artículo 16, y que no cuenten con la Licencia de Funcionamiento para esos efectos, no podrán condicionar o negar el acceso o uso de sus instalaciones y servicios a quien lo solicite.

Los titulares deberán permitir el acceso a las instalaciones a todo usuario que lo solicite, respetando el orden de llegada de aquellos a menos de que se trate de respetar el derecho de apartado o de membresía cuando el establecimiento cuente con dicho servicio.

ART. 29.- *Los establecimientos mercantiles en los que se preste el servicio de alojamiento y se ejerza algún giro complementario, deberá contar con locales que formen parte de la construcción destinada al giro principal, separados por muros, cancelas, mamparas o desniveles construidos o instalados de modo que eviten molestias a los huéspedes en sus habitaciones.*

ART. 30.- *En los establecimientos mercantiles que presten el servicio de alojamiento, se deberán cumplir las siguientes disposiciones:*

I) Exhibir en lugar visible para el público y con caracteres legibles, la tarifa de hospedaje, horario de vencimiento del servicio, la tarifa de los giros complementarios

autorizados, y el aviso de que cuenta con caja de seguridad para la guarda de valores;

II) Llevar el control de llegadas y salidas de huéspedes con anotación en libros, tarjetas de registro o sistema computarizado, en los que incluya nombre, ocupación, origen, procedencia y lugar de residencia;

III) Colocar en cada una de las habitaciones, en un lugar visible, un ejemplar del reglamento interno del establecimiento mercantil sobre la prestación de los servicios;

IV) Solicitar en caso de urgencia, los servicios médicos para la atención de los huéspedes e informar a la autoridad sanitaria cuando se trate de enfermedades contagiosas;

V) Garantizar la seguridad de los valores que se entreguen para su guarda en la caja del establecimiento mercantil, para lo cual deberán contratar un seguro que garantice los valores depositados; y

VI) Mantener limpios camas, ropa de cama, pisos, muebles, servicios sanitarios y las instalaciones en general.

ART. 31.- En los establecimientos mercantiles con Licencia de Funcionamiento para ejercer el giro mercantil a que se refiere la fracción V del artículo 16, se tendrán las siguientes obligaciones:

I) Impedir el uso de los servicios a personas que presenten síntomas evidentes de enfermedades contagiosas;

II) Abstenerse de expender bebidas alcohólicas en el interior del establecimiento mercantil;

III) Contar con áreas de vestidores, casilleros y sanitarios para los usuarios, así como extremar las medidas de higiene y aseo en todo el establecimiento mercantil;

IV) Tener a disposición del público cajas de seguridad en buen estado, y contratar un seguro para garantizar la custodia de valores depositados en las mismas;

V) Tener a la vista del público recomendaciones para el uso racional del agua; y

VI) Exhibir en el establecimiento y a la vista del público asistente, los documentos que certifiquen la capacitación del personal para efectuar masajes y en el caso de los gimnasios, contar con la debida acreditación de instructores de aeróbics, pesas o del servicio que ahí se preste, debiendo contar, además, con programas permanentes de mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de los usuarios.

ART. 32.- Las áreas de vestidores para el servicio de baño colectivo deberán estar por separado para hombres y mujeres y atendidos por empleados del mismo sexo.

ART. 33.- Los establecimientos mercantiles en los que se preste el servicio de juegos mecánicos, electromecánicos, electrónicos y de vídeo, funcionarán sujetándose a las siguientes disposiciones:

I) No instalarse a menos de 300 metros lineales de la entrada del local, al de algún centro escolar de educación básica;

II) Cuando operen en locales cerrados, deberán tener entre sí, una distancia de 50 centímetros para que el usuario los utilice cómodamente, y se garantice su seguridad;

III) En los casos de juegos electromecánicos, los aparatos que se instalen en circos, ferias, kermesses y eventos similares, deberán contar con los dispositivos de seguridad que establecen las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción y de Protección Civil para el Distrito Federal y, requerirán para su funcionamiento que se otorgue y acompañe a la solicitud la Licencia de Funcionamiento o Autorización respectiva, la responsiva de un ingeniero mecánico registrado como responsable en instalaciones, en los términos de lo dispuesto en este ordenamiento.

Los juegos electromecánicos deberán someterse a pruebas de resistencia por lo menos cada 3 meses, a fin de asegurar su funcionamiento adecuado; y

IV) En aquellos donde se preste el servicio de juegos de vídeo, se observará lo siguiente:

a) Contar con una clasificación que los identifique y estar separados en dos grupos: uno con videojuegos tipo A y/o B y/o C, y otro de tipo D. Cada videojuego deberá tener visiblemente la letra que le corresponda, la que deberá ser de por lo menos 15 centímetros de alto y de ancho y de un color determinado;

b) Colocar dentro del local, visible al público, un anuncio de por lo menos un metro cuadrado y con letra de 5 centímetros de alto y de ancho, en el que se especifiquen los tipos y clasificación, conforme a lo siguiente: tipo A.- inofensivo, para todas las edades, B.- poco agresivo, para uso de mayores de 13 años, C.- violento, para uso de mayores de 15 años, y D.- altamente violento, para uso de mayores de 17 años;

c) Mantener perfectamente iluminadas las áreas donde estén instalados los juegos, evitando la utilización de sistemas de iluminación opaca u oscura que pudieran generar trastornos en la salud de los usuarios; y

d) Tener agrupados, en áreas específicas, los juegos de acuerdo a las edades para las que son aptos.

ART. 34.- La clasificación de videojuegos a que se refiere la fracción IV, inciso a) del artículo anterior será la siguiente:

I) Se consideran tipo A:

a) Los deportes, excepto el box, luchas y todos aquellos deportes cuyo principal objetivo es golpearse, derribarse o herirse físicamente;

b) Las carreras de automóviles, motocicletas o cualquier vehículo, siempre y cuando no se muestren gráficas con sangre o personas accidentadas; y

c) Aquellos videojuegos que muestren seres ficticios que tengan que ir alcanzando objetivos en un ambiente de fantasía sin matar de manera gráfica a otros seres;

II) Se considera tipo "B":

a) Aquellos que muestren seres animados que no sean humanos y que no presenten peleas, golpes, ni derramamiento de sangre o líquido que haga creer que se trata de sangre, aún cuando no sea roja; y

b) Los que presenten persecuciones espaciales, terrestres, aéreas o marítimas con o sin derribamiento de objetivos sin vida, o que tengan vida pero que de ninguna forma representen un ser humano;

I) Se consideran tipo "C":

a) Aquellos deportes excluidos del tipo "A";

b) Aquellos en donde presenten seres animados, incluido humanos que tengan que derribarse, luchar o eliminar al contrincante utilizando la fuerza física y/o armas, pero siempre y cuando no haya imágenes o gráficas donde se muestren cuerpos desmembrados, mutilados, o derramamiento de sangre; y

c) Aquellos juegos interactivos y simuladores que no excedan estos criterios de clasificación en cuanto a su contenido; y

II) Se consideran tipo "D":

a) Aquellos en los que hay peleas, competencias o persecuciones con el uso de armas, violencia y derramamiento de sangre e incluso mutilaciones o desmembramientos; y

b) Aquellos juegos interactivos y simuladores que sean excluidos del tipo "C".

En ningún tipo de clasificación antes señalada, se podrá mostrar imágenes de actos sexuales, desnudos, semidesnudos, ni eróticos.

Cualquier juego de video que exceda estos criterios de clasificación estará prohibido para operar en el Distrito Federal; en el caso de que algún videojuego pudiera encuadrar en dos tipos o existiera confusión respecto a que clasificación le corresponde, se optará siempre por la letra que alfabéticamente vaya después.

ART. 35.- Es obligación del titular del establecimiento que preste el servicio de videojuegos, cuidar que los usuarios hagan uso de estos, conforme la clasificación descrita.

ART. 36.- En los establecimientos mercantiles con Licencia de Funcionamiento para prestar el servicio de billares, se permitirá el acceso a personas mayores de dieciséis años de edad, siempre y cuando se encuentren acompañados de un adulto.

ART. 37.- Los establecimientos mercantiles con autorización para ejercer el giro mercantil a que se refiere la fracción VIII del artículo 16, deberán:

I) Presentar únicamente eventos del tipo señalado en la Licencia de Funcionamiento respectiva;

II) Contar con la autorización correspondiente para la prestación de servicios o presentación de eventos diferentes a los autorizados en su Licencia de Funcionamiento; y

III) Respetar el aforo que tengan autorizado.

Cuando en los establecimientos mercantiles a que se refiere el presente artículo se desee expendir bebidas alcohólicas al coqueo, se deberá solicitar la Licencia de Funcionamiento correspondiente, y observar las siguientes bases:

a) Se deberá impedir que los asistentes introduzcan bebidas alcohólicas al interior de la sala; y

b) Las bebidas alcohólicas sólo podrán venderse en los recesos entre funciones y durante los intermedios.

ART. 38.- Se prohíbe en la vía pública, la presentación de los eventos artísticos, culturales, musicales, deportivos y/o cinematográficos a que se refiere la fracción VIII del artículo 16 de la Ley, excepto que a juicio de la Delegación, el evento revista un especial interés social o tenga por objeto resguardar las tradiciones; en cuyo caso y previo a la expedición de la autorización respectiva, la Delegación fijará las condiciones mínimas que se deberán cumplir a

efecto de garantizar que no se altere el orden público y la seguridad de los asistentes.

ART. 39.- Los titulares de los establecimientos mercantiles a que se refiere la fracción VIII del artículo 16, deberán informar a la Delegación correspondientes, el programa que pretendan presentar con indicación de las fechas, horarios y precios del boleto de acceso.

Para la presentación de los eventos propios de los establecimientos mercantiles de acuerdo con su Licencia de Funcionamiento, no se requerirá autorización de la Delegación, sino que bastará con la notificación que se haga al remitir el programa a que se refiere el párrafo anterior.

ART. 40.- La apertura, funcionamiento, vigilancia y clasificación de los establecimientos mercantiles dedicados al servicio de estacionamiento de uso público se regirá, en lo conducente, por las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y lo que establezca el Reglamento de Estacionamientos Públicos para el Distrito Federal.

ART. 41.- Los Establecimientos mercantiles que presten el servicio de estacionamiento de uso público, deberán contar con póliza de seguro vigente que garantice robo total, daños a tercero y responsabilidad civil, para el efecto de cubrir a los usuarios los daños que sufran en sus vehículos, en su persona, o en la de terceros durante el tiempo de su resguardo.

ART. 42.- En los establecimientos mercantiles donde se presten los servicios a los que se refiere la fracción X del artículo 16 de la ley, o que cuenten con la Declaración de Apertura para dichas actividades, deberán observar lo siguiente:

I) Contar con áreas para la ubicación de herramientas y refacciones, así como para almacenar gasolina, aguarrás, pintura, thinner, grasa y demás líquidos o sustancias que se utilicen en la prestación de los servicios;

II) Abstenerse de arrojar los líquidos residuales en las alcantarillas, sujetándose a las disposiciones que para el tratamiento de dichas sustancias señalen las autoridades competentes;

III) Las áreas de reparación de los establecimientos mercantiles que cuenten con Licencia de Funcionamiento, deberán estar separadas unas de otras, para que los diferentes servicios se presten en lugares determinados; y

IV) En el caso de los talleres que cuenten con Licencia de Funcionamiento, deberá contar con un seguro contra robo y daños a terceros, que cubra cualquier daño que se pudiera ocasionar a los vehículos dados en custodia para su reparación.

TITULO TERCERO DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES QUE REQUIEREN DE DECLARACION DE APERTURA

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 43.- Los establecimientos mercantiles cuyas actividades no estén considerados dentro de los giros que señala el artículo 16, están obligados a presentar su aviso de declaración de apertura para que se les registre.

CAPITULO II DE LA DECLARACION DE APERTURA

ART. 44.- La Declaración de Apertura de los establecimientos mercantiles, se tramitará en el formato de aviso que al efecto proporcionen las Ventanillas Única o la de gestión, y el interesado estará obligado a manifestar bajo protesta de decir verdad, los siguientes datos:

I) Nombre, domicilio, registro federal de contribuyentes y nacionalidad;

II) En caso de ser extranjero, la documentación que acredite su legal estancia en el país, así como la autorización por parte de la Secretaria de Gobernación;

III) En caso de ser personas morales, su representante deberá señalar los datos de la escritura constitutiva, de su inscripción en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio y del documento que acredite su representación;

IV) Ubicación del establecimiento mercantil del que se avisa la Declaración de Apertura;

V) Giro mercantil y razón social o denominación del establecimiento mercantil; y

VI) Los datos del documento por el que se ostenta la calidad jurídica de propietario o poseedor del inmueble.

ART. 45.- El interesado estará obligado a acompañar al formato de Declaración de Apertura como único documento para acreditar el uso de suelo permitido, según sea el caso:

I) Certificación de zonificación para uso específico; o

II) Certificación de zonificación para usos del suelo permitidos; o

III) Certificación de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos.

ART. 46.- La Delegación no podrá requerir que se anexe documento alguno con motivo de la presentación de la Declaración de Apertura, salvo lo señalado en los artículos 44 y 45 de este ordenamiento.

ART. 47.- La Declaración de Apertura se presentará ante la Delegación, a través de las Ventanillas Única o la de gestión, la que se devolverá al interesado una vez sellada en forma inmediata.

ART. 48.- Los Titulares que hubieran obtenido su Declaración de Apertura, tendrán la obligación de notificar a la Delegación dentro del término de 10 días hábiles, cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:

I) Traspaso del establecimiento mercantil de que se trate;

II) Modificación del domicilio del establecimiento mercantil, con motivo del cambio de nomenclatura del lugar en que se ubique; y

III) Cambio de giro mercantil a que se dedica.

ART. 49.- Para el traspaso que señala la fracción I, del artículo anterior, el interesado deberá acompañar a la solicitud, copia certificada del documento traslativo de dominio y el original de la Declaración de Apertura anterior.

ART. 50.- El cambio de giro mercantil, se podrá efectuar siempre y cuando se cumplan los requisitos que para cada giro establece la Ley.

ART. 51.- La Declaración de Apertura autoriza al Titular a ejercer exclusivamente el giro principal, y aquellos que se le señalen en la Ley como giros complementarios.

TITULO CUARTO DE LOS GIROS COMPLEMENTARIOS

CAPITULO UNICO

ART. 52.- El establecimiento mercantil que cuente con la Licencia de Funcionamiento respectiva o haya presentado su Declaración de Apertura, podrá tener sin necesidad de obtener otra Licencia de Funcionamiento o presentar una nueva Declaración de Apertura, los giros complementarios que expresamente señala este capítulo.

ART. 53.- El establecimiento mercantil con licencia para expendier bebidas alcohólicas en envase cerrado podrá vender abarrotes y comestibles en general.

ART. 54.- En el establecimiento mercantil cuyo giro principal sea la venta de bebidas alcohólicas al copeo, se podrá ofrecer complementariamente al público lo siguiente:

I) Venta de alimentos preparados;

II) Ejecución de música viva, grabada o videograbada, sin permitir el baile; y

III) Servicio o alquiler de juegos de salón y de mesa, excepto billares, que si requerirán de autorización expresa mediante la obtención de la Licencia de Funcionamiento respectiva.

ART. 55.- En el establecimiento mercantil cuyo giro principal sea la prestación del servicio de diversión, entretenimiento o eventos, y cuenten con la Licencia de Funcionamiento respectiva, podrán tener como giro complementario lo siguiente:

I) Presentación de la actuación de intérpretes, artistas y en general, de variedades;

II) Música viva, interpretada por orquestas o conjuntos musicales, grabada o videograbada;

III) Pista de baile;

IV) Venta de bebidas alcohólicas al copeo; y

V) Alimentos preparados para su consumo en el interior.

ART. 56.- En el establecimiento mercantil con Licencia de Funcionamiento que tenga como giro principal la prestación del servicio de alojamiento, se podrán prestar como giro complementario los siguientes:

I) Cuando cuenten hasta con 50 cuartos, venta de alimentos preparados y bebidas alcohólicas al copeo en los cuartos;

II) Cuando cuenten con más de 50 y hasta 100 cuartos:

a) Venta de alimentos preparados;

b) Venta de bebidas alcohólicas al copeo;

c) Música viva, grabada o videograbada, con la participación de hasta 4 intérpretes y sin permitir el baile a los asistentes;

d) Servicio de lavandería, planchaduría y/o tintorería;

e) Peluquería y estética; y

f) Agencia de viajes; y

III) Cuando cuenten con más de 100 cuartos:

a) Prestación del servicio de diversión, entretenimiento o eventos, en los términos del artículo 55;

b) Alquiler de salones para convenciones o eventos sociales, artísticos o culturales;

c) Alberca, instalaciones deportivas, juegos de salón y billares;

d) Renta de autos;

e) Zona comercial; y

f) Los señalados en los incisos d), e) y f) de la fracción anterior.

ART. 57.- *En el establecimiento mercantil cuyo giro principal sea la prestación del servicio de baños públicos, gimnasio o masajes, se podrá tener como giro complementario lo siguiente:*

I) Venta de alimentos preparados, bebidas no alcohólicas y dulcería;

II) Peluquerías y estéticas;

III) Venta de artículos de baño; y

IV) Alberca pública.

ART. 58.- *En el establecimiento mercantil cuyo giro principal sea el de juegos mecánicos, electromecánicos, electrónicos y de vídeo, se podrá tener como giro complementario la venta de bebidas no alcohólicas y dulcería.*

Además se podrá tener como giro complementario el de alimentos preparados, tratándose de establecimientos mercantiles que cuenten con un número mayor de 40 juegos mecánicos y electromecánicos y una superficie mayor a los 10000 metros cuadrados destinados para dichos juegos. En este último caso, el establecimiento mercantil deberá destinar como máximo el 10% de su superficie total para habilitar con instalaciones adecuadas para el consumo de los alimentos que expendan el propio establecimiento y aquellos que lleven consigo los usuarios del servicio.

ART. 59.- *El establecimiento mercantil cuyo giro principal sea el de billar, podrá tener como giros complementarios los siguientes:*

I) Venta de alimentos preparados, bebidas no alcohólicas y dulcería; y

II) Servicio o alquiler de juegos de salón y de mesa.

ART. 60.- *En el establecimiento mercantil cuyo giro principal sea el de Estacionamiento de Uso Público, se podrán tener como giro complementario, siempre y cuando no exceda del 10 % de la superficie del mismo, los siguientes:*

I) Dulcerías y regalos;

II) Jugos y licuados;

III) Lavado y encerado de automóviles;

IV) Taquerías;

V) Torterías;

VI) Cerrajería; y

VII) Neverías.

Para efectos de este giro, no se podrá expender bebidas alcohólicas.

ART. 61.- *En el establecimientos mercantiles cuyo giro principal sea el de presentación de eventos artísticos, culturales, musicales y/o cinematográficos, se podrán tener como giro complementario la venta de alimentos preparados, bebidas no alcohólicas y dulcería.*

ART. 62.- *En el establecimiento mercantil cuyo giro principal sea la presentación de eventos deportivos, tales como plazas de toros, lienzos charros, estadios, arenas de box y lucha libre y similares, sólo podrán tener como giro complementario la venta de alimentos preparados, de cerveza en envase abierto, servicio de cafetería y dulcería.*

La venta de cerveza deberá realizarse en envase de cartón, plástico o de cualquier otro material similar, quedando expresamente prohibida su venta en envase de vidrio o metálico.

ART. 63.- *En los establecimientos mercantiles con giro principal para la venta de alimentos preparados se podrá tener como giro complementario, la venta de bebidas alcohólicas al copeo que no excedan de 14° G.L., siempre y cuando se consuman exclusivamente con los alimentos, y la presentación de música grabada, o música viva ejecutada hasta por 4 intérpretes y sin permitir el baile a los asistentes.*

En los establecimientos mercantiles a que se refiere el párrafo anterior, que hubieran obtenido Licencia de Funcionamiento para expender bebidas alcohólicas al copeo, la venta de las mismas se deberá limitar a su consumo con los alimentos.

ART. 64.- En el establecimiento mercantil cuyo giro principal, sea de farmacia, miscelánea, tienda de abarrotes, papelería o similares, que no tengan un área para desarrollar su actividad mayor a 120 metros cuadrados, se podrá tener como giro complementario hasta dos juegos mecánicos, electromecánicos, ó electrónicos, siempre y cuando se cumpla lo dispuesto en la fracción I del artículo 33 de la Ley.

El establecimiento mercantil que funcione con Declaración de Apertura, en ningún caso podrá contar con giro complementario de prestación del servicio de juegos de video.

En el establecimiento mercantil cuyo giro principal sea el de miscelánea, venta de abarrotes, comestibles o similares, se podrán expender bebidas alcohólicas en envase cerrado con una graduación menor a los 14° G.L., siempre y cuando se encuentren ubicados a una distancia mayor de 200 metros lineales, de algún centro escolar de educación básica, contados desde la entrada principal del local con el de la escuela.

TITULO QUINTO DE LAS AUTORIZACIONES

CAPITULO I DE LAS AUTORIZACIONES PARA OPERAR POR UNA SOLA OCASIÓN O POR UN PERIODO DETERMINADO, ALGUNA DE LOS GIROS MERCANTILES SUJETOS AL REQUISITO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

ART. 65.- Para la operación de alguno de los giros mercantiles a que se refiere el artículo 16 del presente ordenamiento, por una sola ocasión o por un periodo determinado de tiempo, se requerirá de la autorización de la Delegación correspondiente.

ART. 66.- Previa autorización expedida por la Delegación, la cerveza en envase abierto o pulque sin envasar, podrán venderse en el interior de ferias, romerías, kermesses, festejos populares y otros lugares en que se presenten eventos similares.

La venta de dichos productos deberá efectuarse en envase de cartón, plástico o de cualquier otro material similar, quedando expresamente prohibida su venta en envase de vidrio, barro o metálico y a menores de edad.

No se podrá otorgar autorización para la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública.

ART. 67.- Quedan prohibidos los bailes en la vía pública, a excepción de aquellos que a juicio de la Delegación, el evento revista un especial interés social; en este caso, previo

a la expedición de la autorización respectiva, la propia Delegación fijará las condiciones mínimas que se deberán cumplir a efecto de garantizar que no se altere el orden público y la seguridad de los asistentes.

CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENCION DE AUTORIZACIONES

ART. 68.- Para el otorgamiento de la Autorización para operar en una sola ocasión, por un periodo determinado de tiempo, o por un solo evento, un giro mercantil que requiera Licencia de Funcionamiento, se deberá formular solicitud por escrito con los datos que se mencionan en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 18 del presente ordenamiento.

El periodo de funcionamiento a que se refiere el párrafo anterior no podrá exceder de 15 días naturales.

ART. 69.- Para los efectos de la Autorización para vender cerveza o pulque en envase abierto en eventos, a que se refiere el artículo 66, el interesado deberá presentar cuando menos con 5 días hábiles anteriores a la fecha de su celebración, solicitud por escrito ante la propia Delegación, con los siguientes datos:

- I) Nombre, domicilio y firma del organizador responsable;
- II) Clase de festividad o evento;
- III) Ubicación del lugar donde se realizará;
- IV) Fecha y hora de iniciación y terminación del mismo; y
- V) Autorización, en su caso, de la Secretaría de Gobernación.

La Delegación analizará la solicitud de la Autorización y la otorgará, si procede, en un plazo que no exceda de 3 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud, y previo pago de derechos que en su caso establezca el Código Financiero del Distrito Federal. En caso de que transcurrido dicho plazo no exista respuesta de la autoridad competente, se entenderá que la solicitud ha sido aprobada en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

TITULO SEXTO VERIFICACIÓN, MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y RECURSO

CAPITULO I DE LA VERIFICACIÓN

ART. 70.- La Delegación vigilará que los establecimientos mercantiles cumplan con las obligaciones contenidas en

la presente Ley, para lo cual podrá realizar verificaciones, conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y los Reglamentos Respectivos, y aplicará las sanciones que se establecen en este ordenamiento, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables.

CAPITULO II

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES

ART. 71.- La contravención a las disposiciones de la Ley dará lugar al aseguramiento de las bebidas alcohólicas, imposición de sanciones económicas, clausura de los establecimientos mercantiles, y la revocación de las Licencias de Funcionamiento, de las Declaraciones de Apertura, Permisos, o Autorización, según corresponda en los términos del presente capítulo.

Para el debido cumplimiento de este capítulo, se observará la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal en lo conducente.

ART. 72.- Para establecer las sanciones, la Delegación fundará y motivará sus resoluciones, considerando para su individualización, los elementos señalados en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

Las sanciones económicas deberán establecerse entre el mínimo y máximo establecido, así como el salario mínimo general vigente en el momento de cometerse la violación a esta Ley.

En caso de no haber realizado la revalidación de la Licencia de Funcionamiento en años anteriores, la autoridad sancionará esta omisión, tomando en cuenta el salario mínimo general vigente del año en que no se llevo acabo dicha revalidación.

ART. 73.- Cuando se detecte que en alguno de los eventos a que se refiere el artículo 66 de la Ley, se expenden bebidas alcohólicas sin la autorización respectiva, la Delegación procederá a levantar un inventario.

La autoridad, dictará las medidas de seguridad, conforme lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y los correspondientes Reglamentos.

ART. 74.- Se sancionará con el equivalente de 15 a 50 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el incumplimiento de las obligaciones contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 9 fracciones II, XI y XVI; 28 párrafo primero y segundo; 30 fracciones I, II y III; 31 fracción V; 42 fracciones I y IV; y 48, fracción II, de la Ley.

ART. 75.- Se sancionará con el equivalente de 51 a 150 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el incumplimiento de las obligaciones contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 9 fracciones IV, XIII, XV, XVII, XVIII, y XIX; 23; 27; 28 párrafo tercero; 29; 30 fracción IV; 31 fracciones II, IV y VI; 32; 33 fracción II; 39; 40, fracciones I y II; 48, fracciones I y III; 64; 68 último párrafo; y 69 de la Ley.

ART. 76.- Se sancionará con el equivalente de 151 a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el incumplimiento de las obligaciones contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 9 fracciones I, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV; 13; 16; 25; 26; 28 último párrafo; 30 fracción V; 31 fracciones I y III; 33 fracciones I, III y IV; 36; 37, fracciones I, II, III, e incisos a) y b); 38; 42 fracciones II y III; 43; 62; 66; y 67, de la Ley.

ART. 77.- Cualquier otra violación a la presente Ley, a las demás disposiciones o acuerdos que con base en ella se expidan, en los que se encuentre prevista una sanción que no este en la presente Ley, se impondrá multa de 50 a 200 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

En los casos de reincidencia, se aplicará hasta el doble de la sanción originalmente impuesta, sin exceder del doble del máximo, y para el caso de reincidir nuevamente se sancionará además con la revocación de la Licencia de Funcionamiento, de la Declaración de Apertura, o de la Autorización y la clausura del establecimiento mercantil.

ART. 78.- Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se refiere el presente Capítulo, la Delegación deberá clausurar los eventos o los establecimientos mercantiles, en los siguientes casos:

I) Por carecer de Licencia de Funcionamiento o Autorización para la operación de los giros que lo requieren, o bien, que las Licencias, no hayan sido revalidadas;

II) Cuando se haya revocado la Autorización, la Declaración de Apertura o la Licencia de Funcionamiento;

III) Por realizar actividades sin haber tramitado la Declaración de Apertura;

IV) Cuando no se acate el horario autorizado para el giro mercantil, y no se cumpla con las restricciones al horario o suspensiones de actividades en fechas determinadas por la Secretaria de Gobierno, en su caso;

V) Por realizar actividades diferentes a las declaradas en la Licencia de Funcionamiento, Declaración de Apertura o en las Autorizaciones;

VI) Cuando se expendan bebidas alcohólicas a los menores de edad o se permita su acceso a los establecimientos mercantiles cuyo giro principal sea alguno de los señalados en las fracciones II y III del artículo 16 de la Ley, excepto en los casos de restaurantes con Licencia de Funcionamiento para la venta de bebidas alcohólicas, donde podrán entrar menores, sin consumir bebidas alcohólicas;

VII) Cuando se realicen o permitan conductas que promuevan, favorezcan o toleren la prostitución o drogadicción y cuando utilicen a menores en espectáculos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales.

Para los efectos de esta fracción, quedarán comprendidos como parte del establecimiento mercantil, aquellas accesorias, bodegas o espacios anexos al mismo que sean o hallan sido utilizados para lo que establece esta fracción;

VIII) Por haber obtenido la Licencia de Funcionamiento, la Declaración de Apertura, o la Autorización, mediante la exhibición y/o declaración de documentos o datos falsos;

IX) Cuando se manifiesten datos falsos en el aviso de revalidación de Licencia de Funcionamiento o cuando se hayan detectado en verificación, modificaciones a las condiciones de funcionamiento del establecimiento mercantil por el que se otorgó la Licencia de Funcionamiento original; y

X) Cuando con motivo de la operación de algún giro mercantil, se ponga en peligro el orden público, la salubridad y la protección civil.

Cuando exista oposición a la ejecución de la clausura, la Delegación podrá hacer uso de la fuerza pública, en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

ART. 79.- El estado de clausura, impuesto con motivo de alguna de las causales señaladas en las fracciones I, II, III, V, VII, VIII, IX, y X del artículo anterior, será permanente. Podrá ser levantado sólo cuando haya cesado la falta o violación que hubiera dado lugar a su imposición.

ART. 80.- Procederá el estado de clausura por 15 días, independientemente del pago de las multas derivadas de las violaciones a la Ley, en los casos de las fracciones IV y VI, del artículo 78 de la Ley.

ART. 81.- Procederá la clausura inmediata, únicamente en los casos de las fracciones I, VII, y X del artículo 78 de la Ley.

CAPITULO III DEL RETIRO DE SELLOS DE CLAUSURA

ART. 82.- Procederá el retiro de sellos de clausura previo pago de la sanción correspondiente, y cuando dependiendo de la causa que la haya originado, se cumpla con alguno de los siguientes supuestos:

I) Exhibir los documentos, motivo de la imposición de la clausura;

II) Exhibir la carta compromiso de cierre definitivo de actividades comerciales;

III) Haber concluido el término de clausura impuesto por la autoridad

La autoridad tendrá la facultad de corroborar el cumplimiento de los compromisos contraídos por parte del titular del establecimiento, así como de imponer nuevamente la clausura en el caso de incumplimiento.

ART. 83.- El titular del establecimiento mercantil clausurado, promoverá por escrito, la solicitud de retiro de sellos ante la autoridad que emitió el acto, esta contará con un término de 48 horas, contado a partir de la presentación de la solicitud para emitir su acuerdo, mismo que será ejecutado en forma inmediata.

En caso de que exista impedimento por parte de la autoridad para autorizar el retiro de sellos, emitirá un acuerdo fundado y motivado, exponiendo las razones por las cuales es improcedente el retiro, mismo que notificará al interesado dentro de las siguientes 48 horas.

ART. 84.- Para el retiro de sellos de clausura, el verificador entregará al titular del establecimiento copia legible de la orden de levantamiento y del acta circunstanciada que se levante ante dos testigos, en la que constará su ejecución

CAPITULO IV PROCEDIMIENTO PARA LA REVOCACIÓN DE OFICIO

ART. 85.- Son causas de revocación de oficio de las Licencias de Funcionamiento, de las Declaraciones de Apertura, de Permisos y de las Autorizaciones, las siguientes:

I) Realizar actividades diferentes de las autorizadas en la Licencia de Funcionamiento, Declaración de Apertura o Autorización;

II) Cuando se permita el acceso de menores de edad a los establecimientos mercantiles en los que se expendan

bebidas alcohólicas al copeo, a que se refieren las fracciones II y III del artículo 16 de la Ley, salvo el caso de aquellos cuyo giro principal sea la venta de alimentos preparados;

III) Realizar o permitir conductas que promuevan, favorezca o toleren la prostitución o drogadicción, así como la utilización de menores en espectáculos de exhibicionismo corporal lascivos o sexuales;

IV) Cuando con motivo de la operación del establecimiento mercantil se pongan en peligro la seguridad, salud u orden público;

V) No iniciar actividades sin causa justificada en un plazo de 120 días naturales a partir de la fecha de expedición de la Licencia de Funcionamiento o de la Declaración de Apertura;

VI) Suspender sin causa justificada las actividades contempladas en la Licencia de Funcionamiento o de la Declaración de Apertura por un lapso de 120 días naturales;

VII) Cuando se haya expedido la Licencia de Funcionamiento, la Declaración de Apertura, la Autorización o el Permiso, en base a documentos falsos, o emitidos con dolo o mala fe; y

VIII) Cuando se haya expedido la Licencia de Funcionamiento, la Declaración de Apertura la Autorización o el Permiso en contravención al texto expreso de alguna disposición de la Ley

ART. 86.- En los casos no previstos en el artículo anterior, la Delegación no podrá revocar de oficio la Licencia de Funcionamiento, la Declaración de Apertura, la Autorización o Permiso, y tendrá que interponer para su anulación el procedimiento de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

ART. 87.- El procedimiento de revocación de oficio de las Licencias de Funcionamiento, de las Declaraciones de Apertura, de las Autorizaciones y de Permisos, se iniciará cuando la Delegación detecte por medio de visita de verificación ordinaria o extraordinaria, o análisis documental, que el Titular ha incurrido en alguna de las causales que establece el artículo 85 de la Ley, citando al Titular mediante notificación personal, en la que se le hagan saber las causas que han originado la instauración del procedimiento, otorgándole un término de dos días hábiles para que por escrito presente sus objeciones y pruebas.

En la cédula de notificación se expresará el lugar, día y hora en que se verificará la audiencia de pruebas y alegatos.

ART. 88.- Son admisibles todas las pruebas, a excepción de la confesional de la autoridad, las cuales deberán relacionarse directamente con las causas que originan el procedimiento. El oferente estará obligado a presentar a los testigos que proponga, que no podrán exceder de dos y, en caso de no hacerlo, se tendrá por desierta dicha prueba.

ART. 89.- En la audiencia a que se refiere los artículos anteriores, se desahogarán las pruebas ofrecidas y una vez concluido el desahogo, el Titular alegará lo que a su derecho convenga.

ART. 90.- Concluido el desahogo de pruebas y formulados los alegatos, en su caso, la Delegación, procederá en un término de tres días hábiles a dictar la resolución que corresponda, debidamente motivada y fundada, misma que notificará personalmente al interesado, dentro de las 24 horas siguientes. En caso de que proceda la revocación, se emitirá la orden de clausura del establecimiento, misma que se ejecutará en forma inmediata.

ART. 91.- En todos los casos se entenderá la ejecución de la clausura del establecimiento mercantil con quien se encuentre presente.

ART. 92.- La Delegación notificará a la Tesorería, para los efectos legales procedentes, las resoluciones que revoquen las Licencias, las Declaraciones de apertura, Autorizaciones o Permisos.

ART. 93.- La Delegación tendrá en todo momento la facultad de corroborar que el estado de clausura impuesto a cualquier establecimiento mercantil subsista.

Cuando se detecte por medio de verificación ocular o queja, que el local clausurado no tiene sellos, se ordenará por oficio se repongan estos, y se dará parte a la autoridad correspondiente.

CAPITULO V DE LAS NOTIFICACIONES

ART. 94.- Las notificaciones a las que alude la Ley, se realizarán conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

CAPITULO VI DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ART. 95.- Los Titulares afectados por actos y/o resoluciones de la autoridad, podrán a su elección interponer el recurso

de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, o intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- El Reglamento de esta Ley, deberá expedirse en un término de 90 días naturales a partir de la publicación del presente decreto.

TERCERO.- En los procedimientos administrativos para obtener las Licencias de Funcionamiento, Autorizaciones y Permisos, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la presente Ley, el interesado podrá optar por su continuación conforme al procedimiento vigente durante su iniciación o por la aplicación de esta Ley.

CUARTO.- Los Estacionamientos de Uso Público que funcionen con la Declaración de Apertura a que se refiere el Reglamento de Estacionamientos del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 1991, realizarán la revalidación en los términos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativo del Distrito Federal.

QUINTO.- La administración pública del Distrito Federal, deberán expedir las normas reglamentarias en materia de Estacionamientos, Acomodadores, Videojuegos y verificación a que se refiere esta Ley, en un término de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

SEXTO.- Se derogan todas y cada una de las disposiciones que se opongan a la aplicación de la presente Ley.

SÉPTIMO.- Para su debida observancia y aplicación, publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Por la Comisión de Administración Pública Local, firman: Diputado Fernando Pérez Noriega; diputada Ana Luisa Cárdenas Pérez; diputada María de los Angeles Correa de Lucio; diputado Juan González Romero; diputada Lucerito del Pilar Márquez Franco; diputado Ricardo Molina Teodoro; diputada Sara Lygeia Murúa Hernández; diputado Armando Salinas Torre.

EL C. PRESIDENTE.- Para fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra, por la comisión, a la diputada Ana Luisa Cárdenas.

LA C. DIPUTADA ANA LUISA CARDENAS PEREZ.- Con su permiso señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal:

El sector comercial tiene una importancia fundamental en la economía de la ciudad; se generan impuestos y se cubren necesidades de bienes, servicios, de abasto y entretenimiento.

Es de destacar que el Distrito Federal, según estadísticas de la Secretaría de Desarrollo Económico, existen 304,658 comercios que atienden las necesidades de casi 20 millones de personas del Distrito Federal y de las zonas conurbadas. Esto nos da una idea de la trascendencia que tiene ese sector y de la necesidad de proveer a la ciudad de una normatividad lo suficientemente clara y precisa, que permita el desarrollo de los establecimientos mercantiles.

La actividad que lleva a cabo este sector se ha venido regulando en ordenamientos dispersos desde la década pasada. Se contó en su momento con un Reglamento General para Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos en 1981 y de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal en 1989. Fue hasta 1996, con la actual Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, en el marco de las nuevas atribuciones de esta Asamblea Legislativa, cuando se establecen en un ordenamiento concreto disposiciones en torno a los establecimientos mercantiles y por separado a los espectáculos públicos.

La evolución normativa en esta materia no es más que el reflejo de una sociedad que se actualiza y que pretende llevar a cabo una actividad comercial bajo condiciones confiables, que permita brindar un mejor servicio; para lograrlo, el sector comercial debe contener incentivos que le den seguridad jurídica para iniciar actividades comerciales, también contar con una regulación menos rígida, eliminar de la actual ley una serie de disposiciones que sólo han fomentado la corrupción y la falta de oportunidades para su debido crecimiento; suprimir disposiciones innecesarias, establecer requisitos mínimos para que de forma eficiente los negocios otorguen un buen servicio a la ciudadanía, sin que esto implique olvidar que son sujetos de requisitos y obligaciones; y en el afán de preservar el orden, el interés público y de evitar que su funcionamiento altere la paz social, el espíritu de esta iniciativa busca reflejar estas necesidades.

Durante la elaboración de esta ley y de su respectivo dictamen fueron valiosos los comentarios del Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Secretaría de Transporte y Vialidad, de la Consejería Jurídica, de las delegaciones políticas y de las Cámaras de Comercio, como la CANACO,

la CANIETI y otros organismos; por supuesto que los comentarios aportados por ustedes, compañeros de esta Asamblea, han sido valiosos en la elaboración de este dictamen.

Resaltan en esta iniciativa las siguientes adiciones y modificaciones:

Primero.- La inclusión de los giros con actividad principal de estacionamientos de uso público como establecimiento mercantil, toda vez que en la actual Ley de Establecimientos Mercantiles no son considerados, sin embargo la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y su respectivo reglamento consideran y le dan atribuciones a las delegaciones políticas para su regulación en cuanto a tarifas y funcionamiento.

Igualmente se consideran en esta iniciativa cuáles serán las actividades complementarias que podrán desarrollarse en los estacionamientos de uso público.

Segundo.- Destacan las modificaciones al artículo 9º, fracción XII, que señala prohibir en el interior de los establecimientos mercantiles conductas que tiendan a alentar, favorecer o tolerar prostitución o drogadicción y en general aquellas que pudieran constituir una infracción administrativa o delito, así como dar aviso a las autoridades competentes si éstas se realizan en la zona exterior inmediatamente adyacente al local y la posibilidad de que se ejecuten clausuras inmediatas en caso de que estas conductas antes señaladas sean detectadas por las autoridades correspondientes en flagrancia.

Lo anterior derivado de la preocupación de autoridades y vecinos por el funcionamiento de ciertos giros cuyas actividades de entretenimiento y variedad, como centros nocturnos, bares y cantinas, pueden presentar una posible afectación a la armonía y paz social y en su momento generen conflictos en la comunidad o el desarrollo de sus actividades.

En este sentido, se plantea la corresponsabilidad de los titulares de los establecimientos mercantiles que hoy están en operación hacia su comunidad, con el simple aviso a las autoridades de en dónde se puedan generar estas conductas.

Tercero.- Se modifica el artículo 18, fracción X, en relación con el artículo 9º, atendiendo a la reiterada preocupación de los ciudadanos, que a través de sus demandas y por el inicio de actividades de los establecimientos mercantiles denominados giros negros se ven afectados en su tranquilidad y seguridad, al carecer de instrumentos que les permitan expresar su opinión sobre el funcionamiento de estos negocios.

Esta iniciativa señala que los giros con venta de bebidas alcohólicas al coqueo de más de dos grados y de diversión, entretenimiento y eventos cuenten, además de los requisitos indispensables para funcionar, con una consulta vecinal en los términos de la Ley de Participación Ciudadana.

Cuarto.- La clasificación y contenido de los videojuegos atendiendo a la preocupación de los padres de familia en cuanto al alto contenido de violencia y a la falta de control, y se propone como algo innovador que para el acceso se tenga que considerar la edad de los usuarios y el tipo de videojuego del que podrán hacer uso, prohibiendo cualquier clasificación con contenido erótico, sexual o desnudos.

Quinto. La deducción de las multas que establece la ley y la reconsideración de su gravedad, considerando para ello que las multas contenidas en la ley vigente va de 3 a 400 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, son excesivas para aquellos negocios cuyo capital invertido es inferior a las multas aplicables por las autoridades administrativas provocando el cierre en estos establecimientos. En tal virtud se propone un mínimo de 15 y un máximo de 30 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

También se propone la modificación de las causales de clausura y de revocación, por considerar que son de perjuicio hacia los propietarios de los establecimientos, se suprime la causal de falta de revalidación de la licencia de funcionamiento.

Es importante resaltar que se incluye como causal de revocación la obtención del documento correspondiente para funcionar mediante la exhibición de documentos o datos falsos o emitidos con dolo o mala fe, esto dada la problemática que actualmente se presenta con aquellos giros que de forma dolosa vienen funcionando con documentos apócrifos, violando a todas luces la ley. Con la finalidad de apoyar a ese sector, la iniciativa plantea suprimir la causal de falta de revalidación de la licencia de funcionamiento y se le considera causa de multa.

También se adiciona a la declaración de apertura en el capítulo correspondiente para la revocación de oficio, ya que actualmente no estaba contemplada.

También se adiciona un capítulo del retiro de sellos de clausura en virtud de que en la actual ley no se contempla esta disposición, cuya ausencia genera incertidumbre entre los propietarios, quienes se ven afectados por determinaciones de las autoridades administrativas, con esta adición se otorga la seguridad jurídica a los propietarios.

Se modifica el procedimiento a seguir para la revocación de oficio de la licencia de funcionamiento, declaración de apertura, autorización y permiso y en general se modifican y adicionan artículos que harán posible observar de una forma más eficaz esta ley.

El compromiso de esta legislatura hacia los diversos sectores se traduce en esta iniciativa, con ello esta Asamblea cumple con la ciudad para todas y para todos.

Gracias por su atención.

Señor Presidente, quiero solicitarle que para efectos de hacer modificaciones a una serie de artículos en su redacción, pido autorización para que me permita de una vez leer las reservas, a nombre de la comisión.

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, compañera diputada.

LA C. DIPUTADA ANA LUISA CARDENAS PEREZ.-

Artículo 1º último párrafo, dice:

“Para efectos de esta ley son supletorias la Ley de Procedimiento Administrativo y el Reglamento de Verificación Administrativa, ambos del Distrito Federal”. Debe decir: “Para efectos de esta ley son supletorias la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y los reglamentos respectivos”.

Artículo 6, fracción I. Dice: “Autorización y revalidación de las licencias de funcionamiento, así como la tramitación de los traspasos”. Debe decir: “autorización y revalidación de las licencias de funcionamiento, así como la tramitación de los traspasos”.

Artículo 11, tercer párrafo. Dice: “El servicio de acomodadores de vehículos podrá prestarse previa obtención de la autorización que se establezca en el Reglamento de Estacionamientos para el Distrito Federal”. Debe decir: “El servicio de acomodadores de vehículos podrá prestarse previa obtención de la autorización que se establezca en el Reglamento de Estacionamientos Públicos en el Distrito Federal”.

Artículo 18, fracción VIII. Dice: “El número o rango de cajones y clasificación en los términos del Reglamento de Estacionamientos Públicos del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas y administrativas, cuando el giro se trate de estacionamiento de uso público. Debe decir: “El número o rango de cajones y clasificación en los términos del Reglamento de Estacionamientos Públicos del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas y administrativas, cuando el giro se trate de estacionamientos de uso público”.

Artículo 19, segundo párrafo. Dice: “La delegación podrá dentro del plazo señalado realizar visitas o cotejos para

verificar que las manifestaciones y documentos de las solicitudes respectivas es verídico, de conformidad con lo que establezca la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y sus disposiciones reglamentarias”.

Debe decir: “La delegación podrá, dentro de los plazos señalados, realizar visitas o cotejos para verificar que las manifestaciones y documentos de las solicitudes respectivas es verídico, de conformidad con lo que establezca la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y sus disposiciones reglamentarias”.

Artículo 21, segundo párrafo, dice: “Se entenderá que en el plazo señalado en el artículo 19 de la ley comenzará a correr hasta que se desahogue la prevención o se emita la resolución correspondiente”. Debe decir: “Se entenderá que los plazos señalados en el artículo 19 de la ley comenzarán a correr hasta que se desahogue la prevención o se emita la resolución correspondiente”.

Artículo 33, fracción IV, inciso b, primer renglón, dice: “Colocar dentro del local visible al público”. Debe decir: “Colocar dentro del local visible al público”.

Y de ahí, señor Presidente, en el artículo 56, fracción II, inciso c) dice: “Música viva, grabada o videograbada, con la participación de hasta 4 intérpretes y sin permitir el baile a los asistentes”. Debe decir: “Música grabada, videograbada, viva, con la participación de hasta 4 intérpretes y sin permitir el baile a los asistentes”.

Artículo 70, dice: “La delegación vigilará que los establecimientos mercantiles cumplan con las obligaciones contenidas en la presente ley, para lo cual podrá realizar verificaciones conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y los reglamentos respectivos y aplicará las sanciones que se establecen en este ordenamiento, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables”. Debe decir: “La delegación vigilará que los establecimientos mercantiles cumplan con las obligaciones contenidas en la presente ley, para lo cual podrán realizar verificaciones conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y los reglamentos respectivos y aplicará las sanciones que se establecen en este ordenamiento, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables”. Se suprimen las R mayúsculas por R minúsculas.

Artículo 72: “Para establecer las sanciones la delegación fundará”. Debe decir: “Para establecer las sanciones la delegación fundamentará”.

Artículo 85, fracción IV, dice: “Cuando con motivo de la operación del establecimiento mercantil se ponga en peligro la seguridad, salud u orden público”. Debe decir: “Cuando con motivo de la operación del establecimiento

mercantil se ponga en peligro el orden público, la salubridad y la protección civil”.

Artículo 12, dice: “Los establecimientos mercantiles que funcionen como restaurantes, cafeterías y bares podrán colocar en la vía pública, previo permiso y pago de derechos que establezca el Código Financiero del Distrito Federal, enseres necesarios para la prestación del servicio consignado en su declaración de apertura o en su licencia de funcionamiento”. Debe decir: “Los establecimientos mercantiles que funcionen como restaurantes y cafeterías podrán colocar en la vía pública, previo permiso y pago de derechos que establezca el Código Financiero del Distrito Federal, enseres necesarios para la prestación del servicio consignado en su declaración de apertura y en su licencia de funcionamiento”.

Son todas las reservas, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA SARA LYGEIA MURUA HERNANDEZ.- En consecuencia proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular, en un solo acto, con las propuestas presentadas por la diputada Ana Luisa Cárdenas.

EL C. DIPUTADO JOSE ALFONSO RIVERA DOMINGUEZ (Desde su curul).- Señora Presidenta

LA C. PRESIDENTA.- ¿Sí, diputado Rivera?

EL C. DIPUTADO JOSE ALFONSO RIVERA DOMINGUEZ (Desde su curul).- Sólo para pedirle que inscriba usted que nos reservamos el artículo 16 y el 18, por favor.

LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia le otorga el uso de la palabra al diputado Alfonso Rivera para que se refiera a los artículos 16 y 18 reservados.

EL C. DIPUTADO JOSE ALFONSO RIVERA DOMINGUEZ (Desde su curul).- Por qué no votamos primero y después hago uso de la palabra.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, proceda la secretaría a recoger la votación nominal del dictamen en lo general, con las propuestas presentadas por la diputada Ana Luisa Cárdenas.

EL C. DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE (Desde su curul).- Señora Presidenta, pido la palabra para razonar mi voto.

Se le concede el uso de la palabra al diputado Armando Salinas Torre para razonar su voto.

EL C. DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE.- Con su venia, diputada Presidenta.

Acudo a esta tribuna a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con el ánimo de reconocer, cuando así se debe de hacer, un trabajo legislativo que puede ser motivo de orgullo para quienes colaboraron en este proceso tratando de esta ley, que se considera de trascendencia fundamentalmente por dos cosas:

1.- Porque se tuvo la visión de hacer una revisión integral a un ordenamiento que regula, que ordena el funcionamiento de los establecimientos mercantiles en el Distrito Federal. Como antecedente de ello está una serie de reformas, de iniciativas, de documentos que existían en esta Asamblea y que da testimonio del proceso legislativo en la Comisión de Administración Pública Local que cuando de lo que se trata es de que aflore la razón y en este caso concreto con el faro rector de tratar de hacer más ágil la aplicación de una ley cotidiana, de algo que todos los días se vive en la ciudad y que de lo que se trata es de combatir la corrupción; porque esta misma ley curiosamente era la que era un argumento para generar corruptelas en estos términos.

Por mi conducto el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional reconoce a quienes presentaron estas reformas, a la generosidad para poder debatir en distintas instancias y al seno de la comisión, a la diputada Ana Luisa Cárdenas, al poder entrar a detalle a las propuestas de la Cámara Nacional de Comercio en el Distrito Federal y de muchas otras organizaciones que creemos, sin que nadie pueda llevarse el atributo de poder decir que todo lo que planteó se contempla en esta ley, también es cierto que todos debemos de reconocer que parte de la razón la tenían las distintas interlocuciones que se dieron en torno a la discusión de lo que hoy presentan como dictamen para ser aprobado eventualmente como ley.

Un argumento, creo que un elemento importante probablemente no sea simple y sencillamente exento de una revisión posterior y cuando su operatividad la dé; es un principio democrático que recoge esta ley, que se trata de que la ciudadanía sea corresponsable o no simplemente vigilante o mas bien padecer los efectos de cuando esta ley se maneja por corrupción, que es la participación de la ciudadanía a través de las consultas públicas, que para ello se tendrán que dar según algunos preceptos y algunos condicionamientos que marca esta propia ley, pero siempre respetando la Ley de Participación Ciudadana.

Valga entonces esta breve intervención por parte mi conducto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para decir que nuestro voto será en pro del dictamen y que reconocemos, cuando así se quiere hacer, que las cosas se pueden hacer respetando la ley, dando ejemplo de un proceso parlamentario y en aras del bienestar por el que todos debemos de estar sentados aquí.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Antes de proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general, le pregunto a los ciudadanos diputados, si habrán de reservarse algún artículo, para ser discutido en lo particular. Si diputada.

LAC.DIPUTADA ANA LUISA CARDENAS PEREZ (Desde su curul).- Si compañera diputada. Ya las entregué a la mesa, pero para efectos de la versión estenográfica, es el artículo 1, último párrafo; artículo 6 fracción I; artículo 11 tercer párrafo; artículo 18 fracción VIII; artículo 19 segundo párrafo; artículo 21 segundo párrafo; artículo 33 fracción IV inciso b); artículo 70, artículo 72, artículo 85 fracción IV y el artículo 12.

Le solicito me dispense la lectura, ya la he leído y le he entregado a usted el documento.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputada. ¿Algún otro diputado?

Diputado Alfonso Rivera, ¿qué artículos?

EL C. DIPUTADO ALFONSO RIVERA DOMINGUEZ (Desde su curul).- Si Presidenta. El artículo 16 fracción II y II bis y el artículo 18 fracción X.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, proceda la secretaría a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados en lo particular.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados en lo particular.

Se solicita a los ciudadanos diputados de conformidad con el artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior que al emitir su voto, lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz, recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Islas León, en pro.

Armando Salinas Torre, en pro.

Jesús Galván, en pro.

Hernández Labastida Miguel, en pro.

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Rivera Domínguez, a favor.

Levín Coppel, en pro.

De Garay, a favor.

Luna Parra, a favor.

Jesús Toledano, en pro.

Martínez Parra, a favor.

Cárdenas Pérez, en pro.

Eliab Mendoza, a favor.

Ricardo Martínez, en pro.

Francisco Chiguil, en pro.

Ricardo Molina, a favor.

Miguel Angel Peláez, a favor.

Márquez Franco, en pro.

José Luis Benitez, en pro.

Castellanos Cortés, en pro.

Batres Guadarrama, a favor.

Miguel Bortolini, a favor.

Alfredo Hernández, a favor.

Roberto Rico, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

Hipólito Bravo, en pro.

Juan González, a favor.

A favor, Martínez Enríquez.

Pichardo Mendoza, a favor.

García Rocha, a favor.

Narro Céspedes José, a favor.

Ernesto Chávez, a favor.

Javier Hidalgo, a favor.

Virginia Jaramillo Flores, en pro.

Ignacio Ruiz, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Angeles Correa, a favor.

David Sánchez, a favor.

Javier Serna, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Alejandro Rojas, a favor.

Antonio Padierna, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 45 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.

Cumplida su instrucción.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Administración Pública Local con proyecto de decreto de reformas a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, en lo general y los artículos no reservados en lo particular.

Para su discusión en lo particular han sido reservados los siguientes artículos: Artículo 1, último párrafo; artículo 6, fracción I; artículo 11, tercer párrafo; artículo 18, fracción VIII; artículo 19, segundo párrafo; artículo 21, segundo párrafo; artículo 33, fracción IV, inciso B); artículo 70, artículo 72, artículo 85, fracción IV, y artículo 12.

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de los artículos reservados por la diputada Ana Luisa Cárdenas Pérez, con las propuestas formuladas a nombre de la Comisión.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos reservados por la diputada Ana Luisa Cárdenas Pérez, a nombre de la comisión.

Se solicita a los ciudadanos diputados, en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión “en pro” o “en contra”.

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda:

(Votación nominal)

Armando Salinas Torre, en pro.

Islas León, en pro.

Hernández Labastida Miguel, en pro.

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Levín Coppel, en pro.

De Garay, en pro.

Luna Parra, a favor.

Jesús Toledano, en pro.

Martínez Parra, a favor.

Cárdenas Pérez, en pro.

Eliab Mendoza, a favor.

Ricardo Martínez, en pro.

Francisco Chiguil, en pro.

Ricardo Molina, a favor.

Miguel Angel Peláez, a favor.

Ernesto Chávez, a favor.

Márquez Franco, a favor.

José Luis Benitez, en pro.

Castellanos Cortés, a favor.

Arne Aus Den Ruthen, en pro.

Batres Guadarrama, a favor.

Alfredo Hernández, a favor.

Roberto Rico, a favor.

David Sánchez, a favor.

Hipólito Bravo, en pro.

Juan González, a favor.

Daniel Martínez, a favor.

Pichardo Mendoza, a favor.

Narro Céspedes José, a favor.

Rodríguez Ruiz René, en pro.

Virginia Jaramillo Flores, en pro.

García Rocha, en pro.

Ignacio Ruiz, a favor.

Antonio Padierna, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Angeles Correa, a favor.

Javier Sema, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Javier Hidalgo, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Rivera Domínguez, a favor.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 44 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- Por lo tanto, se aprueba la propuesta de modificación a los artículos reservados por la diputada Ana Luisa Cárdenas Pérez.

En consecuencia y para referirse a los artículos 16, fracción II bis y artículo 18, fracción X, se le concede el uso de la palabra al diputado Alfonso Rivera.

EL C. DIPUTADO JOSE ALFONSO RIVERA DOMINGUEZ.- Con su permiso señora Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados:

Es una propuesta para que la fracción II del artículo 16 diga de la siguiente manera: "Venta con alimentos de bebidas alcohólicas al copeo que contengan una graduación alcohólica mayor de 2 grados Gay Lusac", y añadir un bis a la fracción II para que diga así: "Venta exclusiva de bebidas alcohólicas al copeo que contengan una graduación alcohólica mayor de 2 grados Gay Lusac".

Por lo que se refiere al artículo 18, el texto que se propone para la fracción X es el siguiente: "En el caso de los establecimientos mercantiles contemplados en las fracciones II bis y III del artículo 16 de esta ley, la delegación deberá realizar consulta hacia los vecinos. Para efectos de esta consulta vecinal se observará el procedimiento que para el caso establece la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y para los efectos de este artículo, los resultados de la consulta vecinal tendrán carácter vinculatorio".

Lo dejo en la secretaría debidamente firmado, en los términos del artículo 102, fracción IV del Reglamento.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión las propuestas de modificación a los artículos reservados por el diputado Alfonso Rivera.

Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra?

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos que fueron reservados por el diputado Alfonso Rivera.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas por los artículos reservados por el diputado Alfonso Rivera Domínguez.

Se solicita a los ciudadanos diputados, en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión “en pro” o “en contra”.

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea. La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Arne Aus Den Ruthen, en pro.

Hernández Labastida Miguel, en pro.

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Manuel Minjares, en pro.

Rivera Domínguez, a favor.

Levín Coppel, en pro.

De Garay, a favor.

Luna Parra, a favor.

Jesús Toledano, en pro.

Martínez Parra, en el mismo sentido que el diputado Arne.

Cárdenas Pérez, en pro.

Eliab Mendoza, a favor.

Ricardo Martínez, en pro.

Francisco Chiguil, en pro.

Ricardo Molina, en pro.

Miguel Angel Peláez, a favor.

Márquez Franco, en pro.

Ernesto Chávez, a favor.

José Luis Benítez, en pro.

Castellanos Cortés, en pro.

Narro Céspedes José, en pro.

Hidalgo Ponce Javier, en el mismo sentido que el diputado Arne.

Armando Salinas Torre, en pro.

Miguel Bortolini, a favor.

Ignacio Ruiz, a favor.

Batres, a favor.

Alfredo Hernández, a favor.

Roberto Rico, a favor.

David Sánchez, a favor.

Juan González, a favor.

Martínez Enríquez, a favor.

Pichardo Mendoza, a favor.

Virginia Jaramillo, en pro.

García Rocha, en pro.

Antonio Padierna, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Angeles Correa, a favor.

Javier Serna, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Ortiz Haro, a favor.

Alejandro Vázquez, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Rafael López de la Cerda, a favor.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 46 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- Por lo tanto, se aprueba la propuesta de modificación a los artículos reservados por el diputado Alfonso Rivera.

En consecuencia, se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Administración Pública Local con proyecto de decreto de reformas a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, en lo general y en lo particular, con las propuestas aprobadas. Remítase a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal para los efectos constitucionales conducentes.

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con proyecto de decreto de reformas al Código Penal del Distrito Federal, respecto a la iniciativa presentada por el diputado Ernesto Chávez Contreras.

Esta Presidencia informa que ha recibido un oficio de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia solicitando se le dispense el trámite a que se refiere el artículo 38, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sírvase la secretaría dar lectura a la solicitud de referencia.

LA C. SECRETARIA.- México, Distrito Federal, 30 de diciembre de 1999.

Diputado René Baldomero Rodríguez Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presente.

Por acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se ha determinado en sesión de trabajo el día 30 de diciembre del año en curso, solicitar a usted se otorgue dispensa al término al que se refiere el artículo 38, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, con la intención de estar en posibilidad de discutir y en su caso aprobar la iniciativa de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en la sesión del pleno del día 30 de diciembre del año en curso.

Atentamente, por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: Diputado Antonio Padierna Luna, diputado Ricardo Molina Teodoro, diputada Angeles Correa de Lucio, diputada Yolanda Tello Mondragón.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, proceda la secretaría a preguntar al pleno de la Asamblea, en votación económica, si se dispensa al dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el trámite a que se refiere el artículo 38, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta al pleno si se dispensa el trámite a que se refiere el artículo 38, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al dictamen de referencia.

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Se dispensa el trámite.

LA C. PRESIDENTA.- Consulte la secretaría en votación económica, si se dispensa la lectura del mismo y se somete a discusión de inmediato.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura y se somete a discusión de inmediato. Los que estén porque se dispense la lectura, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

EL C. DIPUTADO MANUEL AGUILERA GOMEZ (Desde su curul).- Señora Presidente

LA C. PRESIDENTA.- Sí, señor diputado, ¿con qué objeto?

EL C. DIPUTADO MANUEL AGUILERA GOMEZ (Desde su curul).- Le ruego a usted fuera tan gentil de informarme en qué parte del orden del día está considerada esta iniciativa.

LA C. PRESIDENTA.- Es el punto número 9, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con proyecto de decreto de reformas al Código Penal del Distrito Federal.

EL C. DIPUTADO MANUEL AGUILERA GOMEZ (Desde su curul).- Gracias.

LA C. PRESIDENTA.- De nada, señor diputado. Continúe la secretaría.

LA C. SECRETARIA.- Los que estén porque se dispense la lectura sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Dispensada la lectura, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión el dictamen en lo general. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra? ¿Oradores en contra?

Diputado Armando Salinas y el diputado Alfonso Rivera.

¿Oradores en pro?

Diputado Ernesto Chávez.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al diputado Armando Salinas Torre, para hablar en contra del dictamen.

EL C. DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE.- Con su venia, diputada Presidenta.

Como parte de la consolidación de las facultades de nuestro órgano legislativo, nuestro órgano de gobierno, se le otorgó la atribución constitucional de legislar en materia penal al Distrito Federal. Por tanto, desde el primero de enero del presente año este órgano legislativo está en aptitud de emitir un Código Penal para el Distrito Federal de acuerdo con las necesidades de la población, el avance de la dogmática penal y la política criminal. Sin embargo, veo que los diputados de la mayoría han insistido en comportarse por debajo del nivel, tanto de los retos de la problemática de nuestra ciudad, como por debajo de un proyecto democrático profundo y de largo alcance, conformándose con propuestas parciales y de corto alcance, así como de una finalidad meramente electorera, y a esto me voy a referir.

Si bien es cierto, hoy se nos dice, miren nada más el nivel: que hace unos minutos se nos acaba de entregar un dictamen al cual aquí aprobaron se dispensara la distribución que marca la ley de 48 horas, pero no obstante ello también dispensaron su lectura, como si todo mundo estuviera en el conocimiento de lo que dice este dictamen. Como muestra del porqué de manera responsable no se puede estar a favor. Déjenme decirles, seguí con mucha puntualidad cuando el diputado Ernesto Chávez presentó una iniciativa de lo que

él consideraba, cuando menos sustentado por su firma, se debía de hacer en materia electoral en el Código Penal, es decir, dejar a la brevedad posible una disección entre lo que era estrictamente federal considerado como delito y lo que era estrictamente local como tal.

Yo recuerdo que en cuanto al artículo 408 bis en su iniciativa, en sus argumentos, en las pláticas que se tuvo con él, se proponía derogarlo y el dictamen lo retoma y le amplía facultades.

Señores, con todo respeto, hace unos minutos me tocó subir a esta tribuna a reconocer el trabajo de una comisión legislativa donde se había respetado los espacios, los términos y los tiempos para poder, con argumentos, tratar de llegar y llegar a un consenso en el que todo mundo reconociera en el otro parte de la razón y se pensara en la ciudad, y hoy al más burdo estilo de otros tiempos, que creíamos superados, se reparte un dictamen donde se toca el capítulo de delitos electorales en el Código Penal, se dispensa su distribución, que yo no encuentro otra razón para hacerlo más que el que no se puedan enterar quienes no pudieran estar de acuerdo o quisieran hacer un seguimiento puntual, y más aún, se dispensa su lectura; o sea, que tenemos 3 minutos para poder decir, de un documento de 12 páginas, si se está a favor y por qué, y ningún, ningún representante popular responsable, por respeto a la ciudadanía, puede aventarse un proceso tan rápido como este.

Miren, nada más de lo que se lee someramente, ya dije el artículo 408 que, insisto, yo seguí muy puntualmente la iniciativa, la iniciativa no contemplaba como tal lo que aquí se dictamina. Voy a permitirme leerlo.

"Se pondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por 6 años a quien habiendo sido electo diputado en el Distrito Federal no se presente sin causa justificada, a juicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a protestar su cargo. Igual sanción se aplicará a los jefes delegacionales electos que sin causa justificada, a juicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no se presenten a desempeñar su cargo".

Esto ya estaba superado, se había solicitado su derogación como tal y aquí se pone. Quieren que le entremos nosotros a lo técnico que debe de ser, quién te dice la causa justificada o no; si es delito lo que pueda hacer un órgano colegiado para decir justificada sin que estén los razonamientos. El derecho penal es de estricta aplicación y si no se dice cuándo se entenderá causa justificada para la Asamblea, pues estamos haciendo nosotros, señores, vulnerable en un tema completamente que debería de fortalecerse desde el ánimo de certeza a la ciudadanía, que una Asamblea Legislativa diga: para mí no fue a juicio justificable, por lo tanto es un

delito, y la sanción no es ni pecuniaria ni de privación de la libertad como lo sostiene el derecho penal, sino de privar de derechos políticos que va mucho más allá, y habría que entrarle al debate si es estrictamente constitucional o no a que un órgano local pueda privar de los derechos políticos, cuáles son ellos, estamos hablando de los que consagra la Constitución o no. De ese tamaño son las incongruencias.

Más aún, miren, dentro de estos breves minutos, yo les pediría a los que tuvieron la precaución de entregarles una copia del dictamen, que aquí se dispuso su lectura y su distribución, vean el Segundo Transitorio, dice: "Para los procesos electorales -cito- locales a celebrarse en el año 2000 y hasta en tanto no se expidan los insumos propios para el Distrito Federal -fijense nada más-, por padrón electoral, lista nominal y credencial para votar con fotografía, se considerarán los insumos relativos al Registro Federal de Electores de acuerdo al convenio respectivo que se celebre con el Instituto Federal Electoral".

Señores, esto es materia del Código Electoral, no es materia del Código Penal; esto es estrictamente una materia electoral específica y especializada. Aquí estamos dando elementos para que un juzgador pueda decir cuándo es delito y cuándo no. Que esto enriquece los elementos del tipo, que esto enriquece el cuerpo del delito.

No podemos con toda responsabilidad decir esto vaya a favor y, miren, ni siquiera se trata de entrar a un debate de en favor o en contra.

Hoy estamos aquí convocados por un orden del día de 22 puntos más los que dé cuenta la secretaría. Aquí está enlistado en el número 9, precisión que hizo la Presidenta a pregunta expresa del diputado Aguilera, para un dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y resulta que nos repartieron dos; o sea, resulta que como ya estamos discutiendo éste, ya no podemos discutir el otro, porque aquí se nos citó y se aprobó el orden del día con un dictamen, no con dos; ya ésta es la materia de esta sesión hoy en materia de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Si bien es cierto que el otro dictamen que se nos plantea era de algo que cuando menos los medios de comunicación habían dado cuenta de qué se trataba por parte del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en el fondo pudiera haber mucho más coincidencias que en la forma, por la nobleza, por dedicarse a un grupo vulnerable, por algo en lo que esta Asamblea creo se ha distinguido en que sea un tema de coincidencia y de eso da cuenta hace unos minutos una ley que se acaba de aprobar; no, se decide dentro de esta baraja de dos, que la mayoría había apuntado un dictamen a discutir y dijo: no, mejor éste. ¿Cuál es el temor de que se pueda hablar con los partidos políticos, con los representantes populares, con los grupos

parlamentarios representados en esta Asamblea de lo que quieren incorporar como delitos en el Código Penal?

Por qué no, si a una iniciativa que, insisto, puntualmente di seguimiento, en quien tengo estima como al diputado Ernesto Chávez y tuvo la cortesía de decirme desde que se presentó la iniciativa del por qué el proponía que se derogara, insisto, este artículo 408. Hoy, sin que se hubiera distribuido, sin que se hubiera avisado cuál de tantas iniciativas que están por dictaminarse en esa comisión en materia de Código Penal era la que nos iban a proponer y minutos antes nos dicen que son las del capítulo referente a los delitos electorales en el Código Penal, señores, si no por voluntad política, por decencia de bien nacidos, por respeto a las personas que no opinan igual, por respeto a este recinto y a lo que hemos tratado de construir, no se vale, no se tiene a nadie, no hay porqué aguantar una grosería de este tamaño; no solamente en tanto a cuanto representante popular, sino como a simple persona, el que te digas por qué si o por qué no un dictamen que vulnera lo más importante del derecho, que es el motivo del porqué puedes ser privado de tu libertad.

Miren, a manera de tratar de ilustrar, del que la problemática no es, lo que quiero venir a decir a esta tribuna a nombre de mi partido, no es de generar una confusión, no se trata de organizar un debate para ver quién gana o quién pierde, sino tratar de tocar sus conciencias, de que es inadmisibles, de que con estas prisas y con estas inexactitudes y errores de tanta trascendencia, insistan en que este trámite siga adelante.

Se discutió en la Comisión de Legislación Penal la pertinencia de contemplar a los procesos de participación ciudadana como eventualmente un delito, que no fuese estrictamente las elecciones constitucionales o mandatadas por la Ley Electoral, sino a todo ejemplo de proceso de participación ciudadana, aquí hay una ley específica para ella, en la que se llegan a elecciones y una voluntad de voto directo, universal, secreto, cuantificable y donde las conductas podrían ser similares cuando se trata de vulnerar la voluntad de la ciudad para tratar de transgredir y ese principio de conducta no está contemplado en este dictamen; insisto, no está aquí contemplado como delito, se habla de elecciones, pero no de la Ley de Participación Ciudadana, siendo la conducta similar, si no es que idéntica.

Los delitos electorales siempre han sido materia de discusión, de argumentación de disenso y de consenso en una mesa de reforma política donde se le da certeza a la ciudadanía a través de los partidos políticos de qué es el grado de avance en el que se puede dar.

Se busca que sea incluyente, se busca de que en lo que se está de acuerdo se ponga en una ley, y en lo que sabíamos que era delito y quienes hemos estado y generaciones nos

han antecedido desde la oposición sabiendo que eran delitos ese tipo de marrullerías y de cosas que se venían haciendo, logramos que fueran reconocidos como delitos electorales, y en eso, compañeros de la mayoría, gente que ustedes no conocieron, pero que desde las tesis que ustedes hoy tratan de sostener, dan testimonio ejemplar de estas luchas; lo que querían era la transparencia, la coincidencia. Lo que querían era que hubiera un consenso y que se avanzara por México en ello, y hoy nos reparten dos dictámenes, para ver cuál de los dos se les ocurre poner a consideración, porque el orden del día solamente habla de uno y nos dicen que sea éste.

La trascendencia del tema, lo importante de hablar de delitos electorales, más que por partidos, vean ustedes nada más, la trascendencia que pudiera ser: no solamente se vulnera un principio que habíamos buscado desde la oposición, que era sentarse en una mesa de reforma política y ahí construir los consensos suficientes para que se dijera qué era delito y qué no; costó mucho; que poca memoria tienen aquellos que no reconocen en generaciones anteriores el tratar de que a un sistema en un país, reconociera que había muchas actividades que se tenían que sacar de la práctica y se tenían que considerar como delito y es por ello que algo contempla el Código Electoral, y es por ello que se logró considerar una fiscalía de asuntos de delitos electorales a nivel federal.

Ese fue el antecedente de esta ciudad y para el Distrito Federal, y hoy unos minutillos antes, porque no importa, tenemos la mayoría y la fuerza, deciden de 2 dictámenes que se distribuya uno, solicitan la dispensa de que no se dé con 48 horas, que se dispense su lectura y se diga, ¿alguien quiere razonar su voto? O perdón, hablar en contra y en pro.

No se vale señores, por lo que representa, no por ustedes mismos, por lo que han dejado testimonio quienes les ha antecedido en las tesis, miren nada más el nivel de riesgo por las imprecisiones que trae este dictamen, que insisto, no es igual a la iniciativa. La iniciativa era mucho más bondadosa, con mucha mayor visión democrática y con mucho mayor respeto.

Se habla, insisto, en el artículo 405 en la fracción VIII, "instale, abra o cierre dolosamente una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, la instale en un lugar distinto al legalmente señalado o impida su instalación". Probablemente, para quienes hemos vivido las elecciones, un proceso electoral, creo que son todos los que estamos aquí, tengan alguna fundamentación, pero en ningún motivo del dictamen se habla del qué sustenta esto.

Al mismo tiempo hemos buscado que la ciudadanía participe, para que vigile, lleve a cabo, sancione y dé certeza a las elecciones y de ahí la ciudadanización de los institutos electorales, y ahí el debate que se dio para en general del

Distrito Federal y hoy, ¡fíjense nada más! Ante un presidente de casilla, en cualquiera de las elecciones del Distrito Federal, insisto, nada más en las elecciones, porque aquí sí se vale hacer marrullería y media en materia de participación ciudadana y ahí no es delito. Aquí se les olvidó que también ese proceso democrático era parte de la fracción penal.

Aquel que instale, con el libre albedrío que le pueda dar tratar de dar certeza, cuando los partidos políticos, los habíamos opinado que fuese mediante la insaculación, una directiva de una casilla, la que decidiera en un momento dándole aviso, ahora no lo pueden, nadie lo podrá hacer, porque ya es motivo de iniciar una averiguación, y no es limitativa la querrela a los partidos, es cualquier ciudadano. Si yo veo que hay una casilla afuera de donde el periódico me dijo que era, que era la lista oficial, yo presento una denuncia y por lo pronto le tienen que fijar el inicio de una averiguación previa de la cual los partidos tendremos que estar pendientes de ella.

Señores, hubiera querido razonar el por qué el voto del Partido Acción Nacional, pero insisto, ofende a la verdad, altera el respeto a la dignidad y sobre todo es completamente bajo y soez tratar de pedirles a los demás diputados, a todos nosotros, que con unos minutillos se reparta un dictamen con la trascendencia que es, primero, el derecho penal y, segundo, la repercusión que se tiene en la vida política de la ciudad ante la falta de certeza.

Si el temor era que nos sentásemos los diputados que con responsabilidad haríamos un esfuerzo en que esto quedara bien, algo querrán legislar y no será con el aval de Acción Nacional.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Chávez Contreras, para hablar en pro del dictamen.

EL C. DIPUTADO ERNESTO CHAVEZ CONTRERAS.- Con su permiso.

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, señor diputado.

EL C. DIPUTADO ERNESTO CHAVEZ CONTRERAS.- A mi me parece que algo en lo que estamos todos seguramente de acuerdo, es que una legislación más clara que garantice los derechos de los ciudadanos y la transparencia de los recursos económicos del padrón electoral, y que cierre toda posibilidad de trampa, pues eso nos va a favorecer a todos los ciudadanos en general y desde luego a los partidos políticos que siempre hemos luchado por la democracia en esta ciudad y en este país, pues desde luego que nos va a dar mayor certidumbre.

Ya se refería el diputado que me antecedió, a las prácticas que tenían en el pasado quienes hegemónicamente y que

tienen, hegemonicamente nos gobernaron durante muchísimos años.

Yo creo que uno de los pilares para la construcción de la cultura democrática en nuestro país es precisamente contar con una legislación electoral que no deje posibilidades a ese tipo de trampas del pasado.

En la historia moderna, desde luego, los partidos hegemónicos se han perpetuado en el poder precisamente porque la competencia electoral o no existía o carecía de legitimidad dentro de las leyes, había muchos resquicios.

Ahora, digo, gracias a los imperativos de los ciudadanos y a las exigencias democráticas, las elecciones son cada vez más transparentes, con más seguridad para los electores, con mecanismos legales que protegen a la ciudadanía en ese ejercicio; las elecciones limpias, digo, seguramente ahí no hay diferencia, es la base fundamental para la democracia en cualquier parte del mundo.

Por eso hay que hacer ajustes continuos a las leyes para asegurar la vigencia estricta, la vigilancia estricta, su actividad plena durante todo el proceso electoral. Tenemos, digo, las experiencias anteriores.

Yo creo que la propuesta es buena, la propuesta es legítima, la propuesta da certidumbre y desde luego algunos señalamientos que hizo el compañero que me antecedió, pues bueno tal vez valdría la pena que le echaran un ojo a la ley en la materia federal, que la mayoría de los asuntos se mantienen en los mismos términos, con algunas excepciones, que bueno se trata de desfederalizar para aterrizar en lo local, en la Ley Electoral Local, algunos asuntos.

Y en el del 408, el 408, compañero Armando, el 408 desde luego que seguramente en la comisión consideraron que era importante mantenerlo porque así está en la Ley Federal. Yo creo que eso hay que revisarlo. Yo creo que es importante, muy importante que en algunos de los puntos en donde tengamos divergencias, pues podamos hacer con espíritu comprometido los ajustes necesarios.

Yo creo que no hay que desgarrarse las vestiduras; yo creo que hay que hacer las cosas bien, y yo creo también que las podemos hacer si no contaminamos la intención que yo tuve desde el principio al presentar esta iniciativa.

Es importante que no querramos confundir a la opinión pública y a los ciudadanos de que la iniciativa se hace de mala fe, al contrario, se hace de muy buena fe y se hace con la intención de acabar con los vicios del pasado en el manejo discrecional de los recursos para compra de conciencias, como recientemente lo vimos en la Cámara de Diputados, donde si se tiene dinero se pretende comprar no nada más el voto, sino la conciencia y otras cosas.

Entonces la ley tiene la pretensión de que en el futuro, en esta ciudad, en el Distrito Federal que ya hoy cuenta con un Código Electoral, órganos electorales propios, que en un marco de reforma política representan un avance muy importante, la existencia del Instituto Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Distrito Federal, significan la desfederalización y autonomía electoral del Distrito Federal, con todo un aspecto que había quedado pendiente, que es el de los delitos electorales, pues yo creo que la reforma del Código Penal que hora nos proponemos, que estamos discutiendo, en cuanto a delitos electorales, tiene como sentido garantizarle a los ciudadanos una mayor certidumbre y transparencia y legalidad.

Esto es lo que nos proponemos desde el Partido de la Revolución Democrática y desde luego, yo creo compañeras y compañeros que es un compromiso de todas las mujeres y los hombres que luchamos por la democracia en esta ciudad y en este país.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Rivera, para hablar en contra del dictamen.

EL C. DIPUTADO JOSE ALFONSO RIVERA DOMINGUEZ.- Con su permiso compañera Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados:

No nos sorprenden ya este tipo de acontecimientos, porque desafortunadamente esta Asamblea Legislativa pasará a la historia más por sus yerros que por sus aciertos. ¿Cómo podemos calificar lo que hoy estamos viviendo? Desapego a la ley, falta de seriedad, marrullería.

Estamos aprobando o se pretende aprobar y discutir reformas al Código Penal, pero basta leer el Segundo Transitorio y yo quisiera que alguien venga y me diga qué tiene que ver esto que voy a leer con la materia penal: "Para los procesos electorales locales a celebrarse en el año 2000 y hasta en tanto no se expidan los insumos propios para el Distrito Federal, por padrón electoral, lista nominal y credencial para votar con fotografía, se considerarán los insumos relativos del Registro Federal de Electores, de acuerdo al convenio respectivo que se celebre con el Instituto Federal Electoral".

¿Qué tiene que ver esto con la materia penal? Díganme nada más qué tiene que ver esto con el Código Penal.

Pero no sólo eso, hay imprecisiones muy graves. El artículo 408 dice, por ejemplo: "Se impondrá", aunque está mal escrito, dice "se mpondrá", "sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por 6 años a quien habiendo sido electo diputado en el Distrito Federal" y no dice si es

diputado federal o diputado local. ¿Puede este Código Penal del Distrito Federal sancionar la elección de un diputado federal? Y acuérdense ustedes que el principio jurídico dice que donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir. Aquí dice: "El diputado electo en el Distrito Federal" Puede ser un diputado federal ¿Y le puede ser aplicable esto? Claro que no.

Establece sanciones francamente absurdas, que ya no quisiera señalar por obvio de tiempo.

Yo les pediría a los compañeros diputados un poco de seriedad, de madurez y de respeto a esta Asamblea para que devolvamos este dictamen a comisiones, que se discuta de nuevo, que se reflexione, que se analice y que se presente uno que no tenga estas imprecisiones tan graves.

Y si de verdad son ustedes tan celosos de que no se cometan delitos electorales, pues por qué no vamos a presentar una denuncia contra el ahora candidato Cuauhtémoc Cárdenas, que andaba en campaña utilizando los fondos públicos de la ciudad, traía los vehículos, las escoltas, los radios, los boletos de avión, todo con cargo al erario del Distrito Federal y ya era candidato; si hay tanto celo porque se respete la ley y no se cometan ese tipo de delitos vamos empezando por ahí.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- En los términos del artículo 86 del Reglamento para el Gobierno Interior, consulte la secretaría en votación económica a la Asamblea si se autoriza continuar los trabajos de esta sesión hasta agotar el orden del día.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se autoriza continuar la sesión hasta agotar el orden del día.

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de pie.

Los que estén por la negativa, favor de ponerse de pie.

Se autoriza continuar la sesión, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, para hablar en pro del dictamen.

EL C. DIPUTADO JAVIER ARIEL HIDALGO PONCE.- Miren, compañeros, aquí quien actúa con falta de seriedad es quien toma con poca seriedad a la Asamblea.

Hay comisiones de trabajo que marca la propia Ley Orgánica de la Asamblea, comisiones de trabajo en las que tenemos que participar todos los partidos, comisiones de trabajo para las que fuimos electos en este pleno diputados de los

partidos políticos. Quién puede decirse sorprendido cuando dejan de asistir a las reuniones de comisiones.

Y yo digo, a pesar de la voz chillona que hoy le vimos a Salinas Torre, que no entiendo si es por inseguridad, porque sabe que no tiene razón o tal vez tenga algún problema en la garganta, pero lo que es realmente sorprendente es esa capacidad de cinismo, de no reconocerse como responsables de una falta.

Aquí en la comisión debió haber estado la diputada Irma Islas León, es la Secretaria, ahora sí que por capricho ya no pertenece, bueno pues que se asuman a las consecuencias de no participar en los trabajos colegiados de este órgano, estamos en una institución, no en el kinder, compañeros, donde digan: "yo ya me salgo, yo ya me llevo mis canicas y me voy a otro lado". Perdoneme, diputado Salinas, eso es irresponsabilidad... lo digo para que hable usted ahorita.

LA C. PRESIDENTA.- Que no se haga diálogo, señores diputados.

EL C. DIPUTADO JAVIER ARIEL HIDALGO PONCE.- Entonces, hablando seriamente, necesitamos actuar seriamente y están las comisiones y habría que estar en ellas, está cumpliéndose toda la norma de la propia Asamblea, no se está violentando absolutamente nada, que nada se llame a sorpresa porque la comisión encargada de este dictamen convocó en tiempo y forma, está entregando el dictamen como lo marca la propia norma.

Ahora, de los contenidos, no nos vayamos por las ramas, no nos vayamos por las ramas, vamos al fondo del asunto, a la propuesta de fondo de este dictamen, lo que hoy nos traería a aprobarlo o no, no es esto que comenta el diputado Salinas, no es el artículo 408, que efectivamente no tiene la iniciativa que presentó Ernesto Chávez, que conocimos aquí todos en la tribuna, no estaba incluido, es un artículo que por cierto aparece en el Código Penal Federal, es un artículo que el propio diputado Armando Salinas aprobó cuando se aprobó el Código Penal para el Distrito Federal, vean qué poca seriedad, que no le pone ni seriedad a sus votos, votaron en contra.

(Desorden en el recinto)

LA C. PRESIDENTA.- Que no se haga diálogo, señores diputados.

EL C. DIPUTADO JAVIER ARIEL HIDALGO PONCE.- Y éste que existe en el Código Federal, no es algo nuevo, pero realmente y lo digo con toda franqueza, no es el problema que nos trae aquí a esta tribuna a proponer aprobar esta ley.

El punto en cuestión es el que se refiere a los fondos de campaña, es el que se refiere en el artículo 406, en donde

marca con mucha claridad: "quien exceda los recursos de campaña". Esta es la sanción que nosotros tenemos que cuidar. "quien exceda en el tope autorizado por el Instituto Electoral para gastos de campaña y ese exceso hubiere sido determinado por resolución firme de la autoridad electoral competente". Esto es lo que está detrás, ¿verdad? Es que ya no queremos que pase lo que pasó en Tabasco. O yo le preguntaría a nuestros compañeros panistas si estarían de acuerdo que eso no se sancione, que haya otros Robertos Madrazos, que haya una competencia inequitativa donde vengan recursos, no sabemos de dónde, y conste que lo digo con elementos de este año. Hoy Labastida todavía no ha demostrado de dónde sacó el dinero, de dónde salieron esos más de 500 millones de pesos en su campaña interna, no lo ha dicho, no ha dicho si fue del narcotráfico, si fue del erario público o de dónde salió ese dinero, o fue apoyo de grandes empresarios beneficiados del Fobaproa; hoy necesitamos que se sancione, no queremos ser lavadero de dinero sucio en las elecciones no queremos que aquí el narcotráfico lave sus culpas apoyando campañas, generando compromisos al futuro y que evidentemente meta al país en una situación muy complicada de inmoralidad, como se vio en otros países como en Colombia, eso es lo que no queremos; queremos que si la ley, el Código Electoral define una cantidad a gastarse en las campañas, ésa sea, y no pase lo de Roberto Madrazo, que quedó muy claro que había excedido los topes de campaña y no hay elementos para sancionar. Aquí en el Distrito Federal no estamos en esa idea, que compita en condiciones de equidad.

Por eso lo que hoy yo vengo a plantear es, compañeras y compañeros, que revisemos este código, que aprobemos este código; por parte de la fracción del PRD no habría inconveniente en revisar, pedir un receso de 5, 10 minutos en revisar lo que tenga que revisarse con respecto a otros artículos que se están haciendo en este dictamen, pero el contenido, lo que busca esta iniciativa que presentó el diputado Ernesto Chávez es que en esta ciudad, por lo menos en esta ciudad se meta a la cárcel a quien exceda los gastos de campaña, y que obviamente esto lo logremos hacer a nivel nacional, y estoy seguro de que si hubiera hecho, el Código Electoral y el Código Penal Federal tendría estos artículos, habría ya mucha gente de un partido que todos conocemos, en la cárcel; cosa que han eludido hasta el momento.

Por eso hago un llamado a nuestros compañeros del Partido Verde, a nuestros compañeros del Partido del Trabajo, a nuestros compañeros del Partido Acción Nacional y en conciencia a los priistas, que nos sumemos a esta iniciativa, que votemos a favor, que en la Ciudad de México sí se castigue con cárcel a quien exceda los montos de campaña, que eso le cueste la cárcel.

Muchas gracias.

LA C. DIPUTADA IRMA ISLAS LEON (Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Si, diputada Irma Islas, ¿con qué objeto?

LA C. DIPUTADA IRMA ISLAS LEON (Desde su curul).- Para el mismo tema, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión el dictamen, señora diputada.

LA C. DIPUTADA IRMA ISLAS LEON (Desde su curul).- Para hechos.

LA C. PRESIDENTA.- Para hechos, se le concede el uso de la palabra a la diputada Irma Islas León, hasta por 5 minutos.

LA C. DIPUTADA IRMA ISLAS LEON.- Gracias, señora Presidenta.

Efectivamente, se notó a leguas que el diputado Javier Hidalgo acaba de recibir el dictamen y no le dio tiempo ni de leerlo.

Yo quisiera primero que nada hacer hincapié que mi partido se ha distinguido por ser uno de los promotores principales a nivel federal y en esta Asamblea para que se tipifiquen este tipo de conductas; sin embargo, las cosas hay que hacerlas bien.

Quiero decirles que con esta reforma que pretenden aprobar se está haciendo un retroceso a los avances que se tienen en el Código Penal a nivel federal. Por ejemplo, al derogar la fracción I del artículo 401 se está librando de toda responsabilidad penal a los funcionarios y empleados de la Administración Pública del Distrito Federal y delegacionales. Qué casualidad que ahora que se es gobierno los funcionarios de la Administración Pública del Distrito Federal no pueden ser sujetos de cometer delitos electorales.

La gran modificación que pretenden hacer en la fracción V del artículo 401 es incluir la frase "boletas electorales en calidad de documentos públicos electorales". Para quienes estamos de alguna manera empapados en materia electoral o hemos dado seguimiento a la reforma electoral sabemos que las boletas electorales se incluyen en los paquetes electorales y si ya está antes "paquetes electorales y expedientes de casilla", para qué innecesariamente adicional la palabra boletas electorales.

Pero llama la atención otras conductas que dejan de tipificar; por ejemplo, al derogarse los artículos 409 y 410 se está quitando como delito una conducta grave que es el prestar o dar, proporcionar información o documentación falsa al

Registro de Electores del Distrito Federal. Que si bien estos dos artículos se refieren al Registro Nacional de Electores y en realidad, como lo dijo aquí el diputado Ernesto Chávez, se quiere, con su término que han puesto de moda, desfederalizarlo, pues debe seguir como conducta penal el proporcionar o dar documentación e información falsa al Registro de Electores del Distrito Federal. Sabemos que esta práctica es común y, sin embargo, la están despenalizando.

Por otro lado, llama la atención el artículo 408, cómo es posible que con una reforma política a medias del Distrito Federal en donde lo que se intentó fue que los jefes delegacionales tengan su autonomía y no tengan ninguna injerencia en ninguno de los órganos de gobierno, cómo ahora esta Asamblea Legislativa va a poder calificar o va a poder decir si es justificada o no a su juicio la inasistencia del jefe delegacional y por lo tanto le van a imponer una sanción de suspensión de sus derechos. Creo que aquí nos estamos excediendo.

En el artículo 411, por ejemplo, y es un error grave de redacción, actualmente el Código dice "que se impondrá multa y sanción a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro de Electores".

Aquí sin darse cuenta repiten dos veces falsifique con proponiendo: "A quien por cualquier medio falsifique, altere o participe en la falsificación", o sea quién participa en la falsificación de falsificar registro de electores del Distrito Federal, ni siquiera se dieron cuenta en la redacción del 411; inexplicablemente porque a todo lo largo de la exposición de motivos no se dice el porqué se está aumentando la pena de prisión en este delito de 7 a 8 años.

Todavía algo más grave es lo que se refiere a los artículos 412 y 413, que también inexplicablemente la exposición de motivos ni se refiere a esos dos artículos, ni se dice el porqué se está quitando la frase que establecen estos dos artículos de que en la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional. Habría que ver la exposición de motivos de la Cámara de Diputados al momento de tipificar los actuales delitos electorales por que ahí sí se estableció que no tendrán beneficio de libertad provisional y ahora nosotros estamos haciendo que dejen de ser delitos graves y que entonces sí se goce con el beneficio de la libertad provisional.

Yo creo que si realmente, como lo dijo el diputado Chávez, lo que se quiere es una legislación que garantice, que dé transparencia, que sea más accesible; creo que sí habría que revisarla y creo que ni 5, ni 10 minutos, ni un receso es suficiente.

Yo propongo que este dictamen se regrese a comisión y en todo caso por la urgencia del asunto bien se puede convocar

a un periodo extraordinario de sesiones para ver este único tema.

Finalmente, el artículo Segundo Transitorio llama la atención, porque además de no ser materia de un Código Penal, ya es el artículo Décimo Primero Transitorio del actual Código Electoral, que además es más completo; ese es una copia mala de ese Décimo Primero Transitorio del Código Electoral.

Muchas gracias.

EL C. DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA (Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Con qué objeto, señor diputado?

EL C. DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA (Desde su curul).- Señora Presidenta, quisiera solicitarle pudiera abrirse un receso de 15 minutos, con el objeto de ponderar las opiniones que se han vertido por parte de diversos diputados respecto del tema.

A las 17:20 horas

LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia, con fundamento en el artículo 36 fracción II decreta un receso de 15 minutos, a fin de que los grupos parlamentarios lleguen a un acuerdo.

(Receso)

A las 18:30 horas

LA C. PRESIDENTA.- Se levanta el receso y se continúa con la sesión.

Se le concede el uso de la palabra al diputado Martí Batres, Presidente de la Comisión de Gobierno.

EL C. DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA.- Compañeras y compañeros legisladores:

El tema que hemos discutido antes de este receso, tiene que ver con uno de los asuntos más delicados, de mayor importancia y de mayor interés, sobre todo en relación con los procesos de cambio que se han vivido en la ciudad y en el país.

Consideramos que entonces la mejor discusión que puede darse en la Asamblea, en torno al tema de los delitos electorales, es aquella que involucre a todos en la misma y en la resolución que emerja de ella.

Por lo tanto, quiero proponer que este punto podamos posponerlo para un periodo extraordinario y que podamos

articular un grupo de trabajo en relación a este tema de los delitos electorales.

Consideramos que es importante hacer esta propuesta, también en virtud de la disposición que hemos escuchado hace unos minutos de las fracciones parlamentarias del PAN, del PRI, del Partido Verde y del PT, para darle esta salida y tener una discusión más fuerte, más amplia y un resultado más contundente en torno a este tema. Esa es la propuesta que queremos hacer.

LA C. PRESIDENTA.- Tome nota la secretaría.

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Fomento Cultural, con proyecto de decreto. Perdón. Proceda la secretaría a consultar en votación económica si es de aprobarse o desecharse la propuesta presentada.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a las señoras y señores diputados si están a favor o en contra de la propuesta sometida a su consideración.

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de pie.

Los que estén por la negativa, favor de ponerse de pie.

Aprobada la propuesta, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- El siguiente punto del orden del día, es la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con proyecto de decreto de reformas al Código Penal del Distrito Federal.

Esta Presidencia informa que ha recibido un oficio de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, solicitando se le dispense el trámite a que se refiere el artículo 38 fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sírvasse la secretaría a dar lectura a la solicitud de referencia.

LA C. SECRETARIA.- Diputado René Baldomero Rodríguez Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Presente.

Por acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se ha determinado en sesión de trabajo del día 30 de diciembre del año en curso, solicitar a usted se otorgue la dispensa al término en que se refiere el artículo 38 fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la intención de estar en posibilidad de discutir y en su caso aprobar la iniciativa de reformas al artículo 335 del Código Penal para el Distrito Federal, en la sesión del pleno del día 30 de diciembre del año en curso.

Por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia: diputado Antonio Padierna Luna, diputado Ricardo Molina Teodoro, diputada Angeles Correa de Lucio, diputada Yolanda Tello Mondragón, diputado Alfredo Hernández Raigosa.

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la secretaría a dar lectura al dictamen de referencia.

LA C. SECRETARIA.-

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

Honorable Asamblea.

A la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de esta honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de reformas al Código Penal para el Distrito Federal presentada por la diputada Yolanda Tello Mondragón, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta comisión, de conformidad con el artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto, mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996 y con las facultades que le confieren los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo Sexto Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1997, 40 y 42, fracción XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10ª fracción I; 48, fracción I; 85, 86, 87 y 88 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como 18, 20, 22, 23, 67 y 68 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se abocó al estudio de la citada iniciativa bajo los siguientes

ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria del pleno de la honorable Asamblea, celebrada el 21 de diciembre de 1999, la diputada Yolanda Tello Mondragón presentó la iniciativa de reformas al Código Penal para el Distrito Federal.

2.- Por oficio de la fecha 21 de diciembre, el Presidente de la Mesa Directiva de esta Asamblea Legislativa, se ordenó remitir la iniciativa antes mencionada a esta comisión, para la elaboración del dictamen correspondiente.

3.- A efecto de estudiar y analizar la iniciativa mencionada, esta Comisión de Administración y Procuración de Justicia sesionó el día 30 de diciembre del presente año, acordando el dictamen que ahora se somete a la consideración de este pleno, bajo los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero.- Con fecha 01 de octubre de 1999 entró en vigor en la capital del país el nuevo Código Penal para el Distrito Federal, el cual tiene como finalidad regular las conductas delictivas de la población del orden local; el cual el nuevo gobierno democrático se ha dado a la tarea de crear las leyes y ordenamientos que la ciudadanía de esta capital necesita, de tal suerte que conforme se incrementa la población y desarrollo urbano, es mayor también el número de los índices delictivos y mayor la inseguridad que se vive en la ciudad.

Por esta razón, el Gobierno del Distrito Federal, característico siempre de otorgar a sus gobernados la satisfacción de sus necesidades y atendiendo siempre a la población más desprotegida, no cesa en su lucha contra la delincuencia, combatiendo siempre el autoritarismo y la impunidad de aquellos que quieren estar por encima de la ley.

Segundo.- Las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Política contemplan efectivamente que todos los individuos tienen derecho a una vida digna, que les permita tener el sustento necesario para su manutención, lo cual se reflejará en su desarrollo económico, intelectual y laboral; además estas garantías individuales no hacen ninguna distinción respecto de la edad, religión, estado civil, color o sexo, para que los ciudadanos puedan gozar de estos derechos.

Por esta razón que al no hacer nuestra Constitución Política distinción alguna respecto de la condición en que se encuentre un individuo, consideramos apropiado el hecho de que ningún ordenamiento lo haga, dando así mayor certeza jurídica a los ciudadanos de esta capital.

Tercero.- Durante la última década, el número de personas mayores de 60 años se ha incrementado considerablemente en la población del Distrito Federal, lo cual ha implicado la creación de institutos encargados de ofrecer los servicios necesarios a este sector de la población, el cual en su mayoría son personas que se encuentran como jubilados, pensionados, comerciantes e indigentes, tal es el caso del Instituto Nacional de la Senectud, INSEN.

El Código Civil vigente para el Distrito Federal efectivamente en su Libro I de las Personas, Título I de las Personas Físicas y en su artículo 22, contempla el hecho de que la capacidad jurídica de las personas, la cual se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero

no hace referencia a una edad específica, por lo cual se pierde este derecho.

Desafortunadamente para las personas de la tercera edad son cada vez menos las oportunidades que tienen para continuar con un modo satisfactorio de vida; la sociedad mexicana ha perdido aquellos valores que se inculcaban hacia los mayores, como es el respeto o las preferencias, por citar un ejemplo, las personas pensionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, llegan a percibir cantidades muy bajas mensualmente por este concepto, el cual no es suficiente para su manutención ni la de su familia, así también cuando el anciano sufre de alguna incapacidad física o mental, éste se vuelve una carga para la familia, ya que tiene que proporcionarle los recursos económicos y humanos necesarios para su rehabilitación y en muchas ocasiones no se logra este objetivo.

Cuarto.- El Código Civil vigente contempla en su Capítulo II, artículo 301, la obligación de dar alimentos, siendo también de forma recíproca; esta obligación es derivada del derecho a la vida que tiene cualquier ser humano, siendo también una obligación de carácter social, moral y jurídico.

El artículo 304 del Código Civil contempla la obligación de los hijos, de proporcionar alimentos a los padres o a la falta de estos, sus descendientes más próximos en grado. Las características de reciprocidad a que éste artículo se refiere surgen precisamente de la importancia que tiene esta obligación para la subsistencia del acreedor alimentista y de que en ella se refleja la claridad y solidaridad de los deudores frente a la necesidad de aquél.

En este contexto, es fácil comprender por quién está obligado frente a una persona a proporcionarle en determinada etapa de su vida los satisfactores básicos de sus necesidades; en otro momento cuando por su edad o circunstancias especiales no se valga por sí mismo podrá exigir, de aquél con quien estuvo obligado, a su vez a darlos. Desafortunadamente para estos casos si es un anciano el que requiere de los alimentos, deberá iniciar un juicio civil para obligar a sus hijos o parientes a que le proporcionen el satisfactor que requiere. La cuestión sería aquí: ¿quién proporcionará los alimentos necesarios a las personas que lo necesitan mientras se resuelve el juicio?

El Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 335 contempla dentro del delito de abandono de personas a los niños incapaces de cuidarse por sí mismos o a las personas enfermas, pero no contempla dentro de éste a los ancianos, los cuales en muchas ocasiones también se encuentran en un total desamparo buscando ellos mismos la forma de satisfacer sus necesidades para su subsistencia.

Quinto.- Por esta razón, consideramos apropiado el hecho de que se contempla la modificación al artículo 335 del Código Penal, incluyendo en éste a las personas de la tercera edad, pues con esto se obligará a los parientes más cercanos de estos al cuidado y manutención de sus progenitores, además de quedar establecido en los dos ordenamientos más importantes que regulan la conducta del hombre en sociedad, como son el Código Civil, que por un lado contempla la obligación que proporciona el sustento a quien lo necesita, y el Código Penal, que sanciona a quien no cumpla con esta obligación, obteniendo como resultado el que existan menos ancianos pidiendo limosna, menor población en los asilos, menos ancianos trabajando para sus hijos, etcétera, logrando con esto la dignificación de los ancianos como seres humanos, garantizando así su seguridad social y económica y no considerándolos como objetos inservibles que se pueden desechar.

Por las condiciones y exposiciones anteriormente vertidas y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como por lo establecido en el artículo 10, fracción XX y XXI, 53 y 57 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia somete a la consideración del pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el siguiente dictamen:

UNICO.- Es de aprobarse la iniciativa de decreto por la cual se reforma el artículo 335 del Código Penal para el Distrito Federal, presentada por la diputada Yolanda Tello Mondragón, integrante del Partido de la Revolución Democrática, para quedar como sigue:

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 335 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 335.- Al que abandone a un niño o adulto incapaz de cuidarse a sí mismo, a un adulto mayor o a una persona enferma, teniendo la obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión si no resultare daño alguno, privándolo además de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuera ascendiente o tutor del ofendido.

Por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, firman: Diputado Antonio Padierna Luna; diputada Angeles Correa de Lucio; diputada Yolanda Tello Mondragón; diputado Alfredo Hernández Raigosa; diputado Ricardo Molina Teodoro.

Cumplida su instrucción, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Para fundamentar el dictamen se concede el uso de la palabra por la comisión, a la diputada Yolanda Tello Mondragón.

LA C. DIPUTADA YOLANDA TELLO MONDRAGON.- Compañeras y compañeros diputados.

Es importante señalar que las personas adultas mayores frecuentemente quedan marginadas de los beneficios del desarrollo, no obstante que el derecho al desarrollo es una de las premisas reconocidas universalmente. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, señala la importancia del desarrollo como un factor que contribuye al progreso duradero y que requiere de políticas eficaces así como de relaciones económicas equitativas.

Hoy en día sólo una pequeña parte de la población mayor de sesenta años está en condiciones de jubilarse y recibir el pago de una pensión digna. Otro tanto se encuentra en condiciones de retirarse sin acceso a una pensión, y aún más, una considerable cantidad de mexicanos en edad avanzada sigue trabajando.

Esta situación afecta tanto a hombres como mujeres. El impacto psicológico que causa el retiro del trabajo significa alguna de las veces ser considerado como un estorbo para los demás, no tener nada que hacer, aburrirse y devaluarse como individuo. La situación se agrava en el caso de las mujeres en los casos de viudez, puesto que la mayoría depende económicamente de su cónyuge y se ve en la necesidad de buscar la forma de allegarse de los recursos necesarios para poder sobrevivir.

La vejez como última etapa de la vida, no siempre llega de la mejor forma.

El concepto de vejez esta parcialmente determinado por factores biológicos, físicos y psicológicos. En nuestra sociedad esto corresponde más a un juicio social que un juicio biológico. En algunos sectores existe la idea de que la vejez es una etapa caracterizada por la decadencia física y mental, por otro lado, la globalización ha proyectado desafortunadamente sobre los ancianos unas imágenes de capacidad, de estorbo, de inutilidad social, de personas con un conocimiento obsoleto que son rebasadas por la modernidad.

Todo lo anterior nos debe hacer conscientes de que las personas adultas mayores no son un pequeño grupo marginal de la sociedad, sino que son parte muy significativa de la misma y que es necesario investigar, planear y educar para poder ofrecerles todos los servicios y comodidades que merecen.

Cabe señalar que los problemas del anciano no solo dependen de él, muchos de sus sufrimientos, están determinados por las actitudes y las conductas de las personas que lo rodean, así como de aquellos con quienes se relacionan y conviven, la problemática de la

desintegración familiar, la ausencia de una cultura de respeto son consecuencia de su olvido. Aunado a lo anterior, nuestra legislación penal ha excluido a los ancianos para la configuración del delito de abandono de personas, por lo cual dejar abandonado en estos momentos a un anciano, no constituye delito.

Por tal motivo compañeras y compañeros la de la voz los exhorta a pronunciarse a favor de la propuesta de reforma al artículo 335 del Código Penal del Distrito Federal para poder subsanar la omisión de esta al excluir a las personas adultas mayores para que se configure el delito de abandono de personas de las mismas.

Creo que el dictamen ha sido más que suficiente en la exposición, nada más quisiera solicitar que por este medio pudiéramos aprobar positivamente este artículo que tiene bondades significativas para los compañeros hombres y mujeres, adultos mayores, así como hicimos la iniciativa y como se aprobó aquí una iniciativa, pues nada más para ser congruentes con ese artículo.

Muchas gracias, espero su voto afirmativo.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular, en un sólo acto.

Se abre el registro de oradores.

¿Oradores en contra?

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

Se le concede el uso de la palabra al diputado Armando Salinas Torre para razonar su voto, hasta por 20 minutos.

EL C. DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE.- Con su venia, diputada Presidenta.

En reiteradas ocasiones hemos denunciado la falta de una política criminal que responda a un modelo de estado social y democrático de derecho, reflejado en sus diversas variantes. Sólo mencionaré dos ejemplos.

No existe un proyecto integral de seguridad pública, no existe una propuesta integral de legislación penal, sin ello no podemos hablar de una política criminal.

Una vez más estamos frente a una reforma parcial a la legislación penal por la cual se pretende solucionar un problema particular, la de las personas adultas, mayores, abandonadas.

Además de violentar las prácticas parlamentarias democráticas esenciales, como es la distribución de los

dictámenes en forma anticipada a su discusión, misma que ha sido promovida por la oposición con la finalidad de conocer en forma anticipada los asuntos que se discutirán ante el pleno y tener la oportunidad de exponer los razonamientos que sirven como único medio de defensa ante una mayoría que por sí sola puede tomar las decisiones, la disposición que permite la dispensa de la distribución en forma anticipada, se entendería sin perjuicio del espíritu que inspira dicho precepto, es decir...

(Desorden en el recinto)

LA C. PRESIDENTA.- ¿Me permite, señor diputado?

Se les solicita a los diputados asistentes y al público en general, pongamos atención al orador.

Continúe, señor diputado.

EL C. DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE.- Gracias. La disposición que permite la dispensa de la distribución en forma anticipada, se entendería sin perjuicio del espíritu que inspira dicho precepto, es decir, conocer la propuesta a efecto de estar en aptitud de debatir la misma. Dicha dispensa, entenderla en forma contraria, atentaría a un proyecto democrático. Sin embargo, parece ser que una vez más lo anterior no importa, entratándose del derecho penal, a muchos diputados de la mayoría.

Modificar la legislación penal es hablar del corchete que cierra en ese espacio todo el Estado de Derecho. Si la base y fundamentación de nuestro país, de nuestra identidad y de nuestro actuar como sociedad lo da la Constitución Política, son los códigos penales los que acotan y los que tienen en repercusión el actuar de una sociedad.

En cuanto al fondo de la propuesta planteada, el grupo parlamentario de Acción Nacional siempre ha propuesto apoyar y no en esta legislatura, sino desde siempre, a los grupos que por sus circunstancias y características particulares se encuentren en situación de vulnerabilidad.

El pasado 25 de marzo presentamos la iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal para que en atención a las características de la persona con discapacidad intelectual se estableciera un procedimiento que garantizara el respeto a sus derechos fundamentales. Dicha propuesta formaba parte del proyecto integral que se preparaba en la Comisión Especial para la Legislación Penal del Distrito Federal.

A pesar de que han pasado más de 9 meses para aprobar dicha iniciativa a favor de uno de los grupos vulnerables de la población en el Distrito Federal, no ha sido del interés de los diputados, aparentemente de la mayoría, aprobar dicha iniciativa, y no solamente ésta, también hay una específica

del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, una reforma específica al Código Penal planteando la vulnerabilidad de una parte que puede afectar a la sociedad, pero ésa no era urgente ni era importante; la discapacidad intelectual no ameritó el dictaminar una parte del Código Penal y sí el tema que hoy ocupa el contenido de este dictamen. ¿Por qué?, es una pregunta que creo que queda en el aire y que diputados de la mayoría tendrían que responder.

Como podemos observar, se evidencia que no existe un proyecto integral de reforma penal que responda a las necesidades de una población, sino que sólo se trata de propuestas parciales; tampoco se tiene interés, un interés genuino de apoyar a los grupos vulnerables de esta ciudad. Es decir, esta iniciativa que más que presentada por un grupo parlamentario o por un diputado, que en este caso quien la presentó ha dejado testimonio de la preocupación de este tema, fue de algún modo alguna preocupación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que avizoró, que detectó un problema específico en el Código Penal para la operatividad en la protección de este sector de la población que requería esta modificación. Qué bueno, eso se celebra; y qué malo que no tengamos la voluntad suficiente de la visión de tener de manera palpable la revisión en cuanto a grupos vulnerables se refiere. De otra manera, habrá que buscar el camino de que sea a través de los medios de comunicación, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos a quien habrá que presentarle la iniciativa de Acción Nacional en materia de defensa por las personas con discapacidad intelectual, para que entonces la mayoría pueda hacerla suya y presentarla en esta Asamblea y dictaminarla.

El grupo parlamentario del PAN votará a favor de la reforma porque está convencido que el bien jurídico tutelado en este artículo requiere de una protección del ordenamiento penal, sin que ello quiera decir, sin que ello quiera decir que sea la forma idónea para garantizar que las personas adultas mayores sean abandonadas. Es decir, la amenaza de la sanción penal no inhibe a la persona para evitar dicha conducta; pudiese llegarlo hacer, pero no lo inhibe, por el solo hecho de ser contemplado por el Código Penal; si no gran parte de esa denuncia de la reforma penal integral que hemos manifestado no tendría razón de revisarse, mucho de lo ahí contemplado es letra muerta. No queremos que este artículo que hoy se propone pase a ser una de las tantas frases que contempla la legislación penal.

Proponemos que se refuercen los sistemas de protección y atención especial a dicho grupo social vulnerable. No se puede estar en contra cuando es una necesidad identificada, plena y con el humanismo que requiere como sociedad; menos hoy que esta Asamblea ha aprobado la ley sobre la materia también de este artículo.

Acción Nacional votará a favor del dictamen puesto a consideración.

LA C. PRESIDENTA.- Se concede el uso de la palabra al diputado José Narro Céspedes, para razonar su voto, hasta por 20 minutos.

EL C. DIPUTADO JOSE NARRO CESPEDES.- Con su permiso, Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados: Queremos comentar que este punto se había estado tratando en la Comisión de Código Civil, que había consideraciones importantes sobre este tema, que prácticamente ahora se plasman en modificaciones al Código Penal.

En este sentido, creo que, aunque con sus limitaciones que implican en darle un tratamiento integral al problemas de los grupos vulnerables que requerimos, aparte de buscar de que jurídicamente este tipo de valores, de bienes, estén salvaguardados; también construyamos estrategias en el terreno de la política económica, en la política de apoyo asistencial a este tipo de sectores de la población, que son los más vulnerables de nuestra sociedad.

Hay que señalar que últimamente también a través de los medios de comunicación se han presentado casos importantes y se han dado a conocer de abandonos, de niños abandonados y también vemos cómo se incrementa notablemente en estos tiempos de crisis y de la pérdida de valores éticos y morales el abandono de las personas mayores o de la tercera edad; los vemos deambulando por las calles, sin alternativas y abandonados por sus familias.

Ante todo esto, queremos comentar, teniendo claro que la propuesta es limitativa y que no incluye un planteamiento integral y global. A pesar de ello, creemos que es positiva la iniciativa que se ha tomado y el planteamiento que ahora se pone a disposición y a votación y a consideración de esta Asamblea Legislativa.

Por eso queremos precisar que como fracción parlamentaria del Partido del Trabajo estamos de acuerdo en lo general con la propuesta que se está haciendo; considerando que el esfuerzo aún es insuficiente y que necesitamos buscar para este tipo de problemas estrategias y alternativas integrales.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, proceda la secretaría a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general, en lo particular en un solo acto.

Se solicita a los ciudadanos diputados, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión “en pro” o “en contra”.

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Islas León, en pro.

Hiroishi Suzuki, en pro.

Armando Salinas Torre, en pro.

Jesús Galván, en pro.

Margarita Saldaña, en pro.

Hernández Labastida Miguel, en pro.

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Arne Aus Den Ruthen, en pro.

Manuel Minjares, en pro.

Manuel Aguilera, en pro.

Sevilla Díaz, en pro.

Levín Coppel, en pro.

Luna Parra, a favor.

Alejandro Vázquez, en pro.

Ortiz Haro, a favor.

Jesús Toledano, en pro.

Martínez Parra, en pro.

Cárdenas Pérez, a favor.

David Sánchez, a favor.

Ricardo Molina, a favor.

Francisco Chiguil, en pro.

Daniel Martínez, a favor.

Ernesto Chávez, a favor.

Roberto Rico, a favor.

Miguel Angel Peláez, a favor.

José Luis Benitez, en pro.

Esveida Bravo, a favor.

Castellanos Cortés, a favor.

De Garay, a favor.

René Arce, a favor.

Angeles Correa, a favor.

García Rocha, a favor.

Alfredo Hernández, a favor.

Márquez Franco, en pro.

Eliab Mendoza, a favor.

Ignacio Ruiz, a favor.

Miguel Bortolini, a favor.

Jaramillo Flores Virginia, en pro.

Hipólito Bravo, en pro.

Martí Batres, a favor.

Pichardo Mendoza, en el mismo sentido del diputado Ignacio Ruiz.

Alejandro Rojas, a favor.

Narro Céspedes José, a favor.

West, a favor.

Martínez Atala, a favor.

Antonio Padierna, a favor.

Vicente Cuéllar, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Javier Serna, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva:
Por favor el micrófono para el diputado Rivera:

Rivera Domínguez, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana diputada o diputado de emitir su voto?

El micrófono para el diputado Ortiz Ayala:

Ortiz Ayala, a favor.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 58 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.

Cumplida su instrucción.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con proyecto de decreto de reformas al Código Penal del Distrito Federal, en lo general y en lo particular.

Remítase a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, para los efectos constitucionales conducentes.

El siguiente punto del orden del día, es la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Fomento Cultural, con proyecto de decreto de Ley de

Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico, Arquitectónico del Distrito Federal.

En virtud, de que dicho dictamen ha sido repartido a las ciudadanas y ciudadanos diputados, en los términos del artículo 38 fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consulte la Secretaría en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se somete a discusión de inmediato.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura y se somete a discusión de inmediato.

Los que estén por que se dispense la lectura, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Dispensada la lectura señora presidenta.

COMISION DE FOMENTO CULTURAL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Fomento Cultural se turnó por el Presidente de la Mesa Directiva, para su análisis y dictamen, la Iniciativa de Decreto de LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO URBANISTICO ARQUITECTONICO DEL DISTRITO FEDERAL, presentada por el Dip. Jesús Galván Muñoz del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De conformidad con los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, incisos j) y l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 38, 40 y 42 fracciones XIV y XVI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10 fracción I, 45, 48, 49, 50, 59, 84 fracción I, 85 párrafo primero de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 18, 20, 22, 23, 66 fracción I y 68 del Reglamento para el Gobierno Interior de Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Fomento Cultural resulta competente para conocer de las propuestas antes mencionadas.

Por lo anterior, esta Comisión de Fomento Cultural somete al pleno el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El Dip. Jesús Galván Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó el 30 de abril del presente año, a esta H. Asamblea Legislativa, la iniciativa de decreto de LEY DE

SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO URBANISTICO ARQUITECTONICO DEL DISTRITO FEDERAL.

2.- El Presidente de la Mesa Directiva ordenó turnar a esta Comisión de Fomento Cultural la iniciativa de referencia para la elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Esta Comisión de Fomento Cultural, sesionó con esta fecha para emitir el dictamen, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Con fundamento en el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, incisos j) y l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 fracciones XIV y XV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultades para legislar en las materias de Desarrollo Urbano y de Fomento Cultural, mismas que constituyen el objeto primordial de la legislación propuesta.

SEGUNDA.- Los Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuentan con la facultad de presentar iniciativas ante la misma de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122, Apartado C, Base Primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

TERCERA.- Aún y cuando esta Comisión dictaminadora hizo, en uso de sus atribuciones, algunas modificaciones a la iniciativa, es de resaltarse que todas sus virtudes se conservan, mismas que podemos enumerar genericamente las siguientes:

1.- Resulta una legislación inédita cuya intención es que exista una política pública de carácter local, de salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico que dan identidad a esta Ciudad que pertenece a todos, pero que pocos asumen como responsabilidad su defensa y protección.

2.- Crea instancias de participación y corresponsabilidad de la sociedad, tal y como un Consejo de Salvaguarda y la posibilidad de que se establezcan en cada Delegación Juntas de Salvaguarda.

3.- Se establece la creación de un Registro Público de los bienes inmuebles afectos al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico y un Centro de Información del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

4.- Se considera la implementación de programas de difusión de los bienes afectos; la obligación de sus propietarios de conservarlos y que en ausencia de é ello la autoridad podrá tomar las medidas necesarias para

garantizarlo y en última instancia podrán expropiarse por causa de utilidad pública.

5.- Finalmente debemos resaltar de esta Ley, que uno de sus propósitos medulares es el de implementar mecanismos para el disfrute colectivo de dichos bienes y su conservación.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Fomento Cultural ha estudiado y dictaminado la iniciativa de conformidad con lo dispuesto por los artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, incisos j) y l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 38, 40 y 42 fracciones XIV y XVI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10 fracción I, 45, 48, 49, 50, 59, 84 fracción I, 85 párrafo primero de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 18, 20, 22, 23, 66 fracción I y 68 del Reglamento para el Gobierno Interior de Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a consideración del pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal el siguiente dictamen con proyecto de

LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO URBANISTICO ARQUITECTONICO DEL DISTRITO FEDERAL.***TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES.******CAPÍTULO UNICO***

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social, y tienen por objeto la salvaguarda de los bienes inmuebles que sean declarados afectos al Patrimonio Arquitectónico Urbanístico del Distrito Federal, de conformidad con los procedimientos que se contienen en esta Legislación.

Artículo 2. La salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal corresponde a las autoridades e instituciones públicas y privadas, y en general a todos los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio de aquél, según los siguientes principios:

I. La subordinación, en lo político, de la actividad individual, social y del Estado, a la realización del bien común;

II. El reconocimiento de la preeminencia del interés colectivo sobre los intereses parciales y la ordenación y jerarquización de estos en el interés del Distrito Federal;

III. Revitalizar su Patrimonio Urbanístico Arquitectónico y su imagen urbana, como medio para mejorar las condiciones de vida de los habitantes;

IV. Conservar y acrecentar el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal con sus valores como Patrimonio Cultural y como testimonio histórico universal;

V. Rescatar la importancia del conocimiento técnico e histórico necesario para intervenir el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico dada su función social y su relevancia como testimonio histórico y elemento de identidad local y nacional;

VI. Promover las condiciones que propicien, dentro de un régimen de libertad, el acceso, respeto y disfrute efectivo del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal a la población universal;

VII. Fomentar la conservación de documentos que sirvan para construir el conocimiento histórico del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico;

Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Patrimonio Cultural: El conjunto de expresiones y rasgos tangibles e intangibles que reflejan como un grupo humano vive, piensa, siente y se relaciona con su medio natural, que tienen uno o varios valores desde el punto de vista de la historia, la estética, la ciencia y la tecnología, que pueden ser aprehendidos, aprovechados y disfrutados por otras generaciones, y que lo caracterizan, relacionan y diferencian de otros grupos.

II. Monumento cultural: la obra del hombre, tangible o intangible, o de la naturaleza en función del significado que éste le da, en que se refleja su pensamiento, sentimiento, forma de vida y modo de relacionarse con su medio, en que se reconocen uno o varios valores singulares desde el punto de vista de la historia, de estética, la ciencia o de la tecnología que la han hecho y hacen meritoria de ser legada a las generaciones futuras;

III. Salvaguarda: la identificación, declaratoria, catalogación, protección, conservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, revitalización y puesta en valor del patrimonio natural, urbanístico y arquitectónico;

IV. Medio: es el marco natural o construido que influye en la percepción estática o dinámica de los monumentos arquitectónicos, urbanísticos, espacios abiertos y las zonas de patrimonio urbanístico arquitectónico o se vincula a ellos de manera inmediata en el espacio o por lazos sensoriales, sociales, económicos o culturales;

V. Armonía: Disposición ordenada, agradable o congruente de los elementos o partes de una obra artística;

VI. Asentamiento humano: El establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran;

VII. Conservación: La acción tendiente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo sus valores históricos y culturales, a través de obras de mantenimiento, restauración, revitalización y puesta en valor;

VIII. Desarrollo urbano: Proceso de estudios, planeación, regulación y obras para la conservación, mejoramiento y crecimiento sustentable de los asentamientos humanos del Distrito Federal;

IX. Destinos: Los fines actuales a los que se prevea dedicar determinados predios o edificios de dominio público en un asentamiento humano;

X. Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y realizar actividades de interés colectivo en espacios públicos;

XI. Espacio abierto: Es el medio físico, libre de una cubierta material, proyectado y construido por el hombre con algún fin específico;

XII. Imagen urbana: La impresión sensorial que producen las características físicas, arquitectónicas urbanísticas, del medio natural y de los habitantes de un asentamiento humano o una parte de él;

XIII. Infraestructura urbana: Las obras necesarias para hacer la instalación de las redes de organización y distribución de servicios urbanos;

XIV. Integración arquitectónica: La acción de colocar un elemento arquitectónico, atendiendo las relaciones armónicas de forma, proporción, orden, ritmo, carácter, materiales, color, textura y estilo con los elementos que lo circundan;

XV. Integración urbana: La acción de construir un inmueble, instalación, espacio abierto o elemento de equipamiento urbano atendiendo al aspecto, carácter o tipología de la zona de su ubicación;

XVI. Liberación: Retiro de elementos que sin mérito histórico o artístico hayan sido agregados a un monumento o zona de patrimonio arquitectónico y/o urbanístico;

XVII. Macizo: Todo paramento cerrado en su totalidad constituido por elementos naturales o constructivos;

XVIII. Mantenimiento: Conjunto de trabajos superficiales pero indispensables que se realizan periódicamente para conservar un bien inmueble en óptimas condiciones y que en nada modifican su forma o esencia espacial;

XLX. Mobiliario urbano: Cualquier elemento ubicado en el espacio público con fines de servicio u ornamentales;

XX. Nomenclatura: Los nombres que a lo largo del tiempo hayan tenido o tengan las calles, plazas, plazuelas y demás espacios abiertos de un asentamiento humano y la numeración de sus edificios y predios;

XXI. Obra de intervención: Cualquier trabajo que se realiza a un edificio o espacio abierto para modificarlo;

XXII. Obra nueva: Toda edificación que se erija en el momento actual en un espacio, sea provisional o permanente;

XXIII. Orden: Condición lógica, armoniosa o inteligible que tiene una disposición cuando cada elemento de un grupo está adecuadamente dispuesto con relación a los demás y a su propia finalidad;

XXIV. Ordenamiento territorial: Determinación de la distribución equilibrada y sustentable de los usos de suelo en función de las actividades y el bienestar de la población;

XXV. Planeación urbana: La creación de un sistema o método para plantear y resolver los problemas de una ciudad a través de estrategias materializables en obras definidas que se desprenden de estudios en los que deben intervenir especialistas de las diversas disciplinas;

XXVI. Prospección: Exploración superficial, sin remoción de terreno, dirigida al estudio, investigación o examen de datos sobre restos de generaciones anteriores que se encuentran enterrados en el suelo;

XXVII. Publicidad: Anuncios que aporten información por medios sensoriales, colocados en o hacia la vía pública con fines propagandísticos;

XXVIII. Puesta en valor :Labor de concientizar a la población de la importancia que tienen los monumentos, espacios abiertos y Zonas de Patrimonio urbanístico y arquitectónico en la reconstrucción del conocimiento de su historia y por ende en la formación de su integridad;

XXIX. Reintegración: La acción de ubicar en su sitio original aquellos elementos que se encuentren fuera de él;

XXX. Reparación: Las acciones que tienen por objeto corregir algunas deficiencia estructural, funcional o estética de un monumento o Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, generada por deterioro natural o inducido, con el criterio de ponerlo como estaba en la etapa anterior al daño sufrido;

XXXI. Restauración: Conjunto de obras de carácter interdisciplinario que se realizan en un monumento, espacio abierto monumental o Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico con algún deterioro natural o inducido, basadas en un proceso de estudio para restituirle sus valores, protegerlo como fuente de conocimiento y para garantizar su permanencia para las generaciones futuras;

XXXII. Restaurador: Un especialista acreditado en técnicas de conservación, con un profundo conocimiento de los sistemas constructivos de diversas épocas y una amplia visión de conjunto para dirigir los estudios necesarios con el fin de realizar un proyecto de salvaguarda de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico;

XXXIII. Revitalización: Acciones que se llevan a cabo para que un monumento, espacio abierto o Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico es un estado de deterioro importante, de ruina o abandono sea habilitado para ser utilizado en condiciones adecuadas que garanticen su rentabilidad y la permanencia de sus valores;

XXXIV. Señalización: Anuncios que aporten información por medios sensoriales, colocados en o hacia la vía pública con fines de servicio;

XXXV. Servicios urbanos: Las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad competente o concesionadas por ésta para satisfacer necesidades colectivas en centros de población;

XXXVI. Sustentabilidad: Capacidad de recursos que tiene el medio ambiente para proveer a un asentamiento humano de los satisfactores naturales necesarios para su supervivencia y la realización de sus actividades urbanas y económicas, en el contexto de la región en la que se encuentra, sin romper el equilibrio entre ambos;

XXXVII. Trazo urbano: Diseño de la distribución de terrenos destinados a lotes, vialidades y espacios abiertos de un asentamiento humano;

XXXVIII. Turista: Visitante que viaja por placer, desplazándose temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual, que utilice alguno de los servicios turísticos a que se refiere la Ley de Turismo del Distrito

Federal, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de Población;

XXXIX. Unidad: Estado o cualidad de las cosas entre cuyas partes hay un acuerdo, como la ordenación de los elementos de una obra de arte, que constituye un conjunto armónico o fomenta una singularidad de efecto;

XL. Usos: los fines actuales a los que se prevea dedicar determinados predios o edificios de dominio privado en un asentamiento humano;

XLI. Vano. Todo hueco o vacío que se ubica sobre un macizo;

XLII. Vialidad: Espacio destinado al desplazamiento de vehículos o peatones;

XLIII. Visitante: La persona que se desplaza para conocer físicamente un monumento, espacio abierto monumental o Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Artículo 4. *En esta Ley se utilizarán las siguientes referencias:*

I. Catálogo: Catálogo de las Zonas, Monumentos y Espacios Abiertos Monumentales Afectos al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;

II. Centro de Información: Centro de Información del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;

III. Código Civil: Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal;

IV. Consejo de Salvaguarda: Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;

V. Delegaciones: Delegaciones del Distrito Federal;

VI. Gaceta: Gaceta Oficial del Distrito Federal;

VII. Ley Federal: Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas;

VIII. Monumento: Monumento urbanístico o arquitectónico;

IX. Organismo correspondiente: Autoridad designada por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal para asumir la responsabilidad de los trabajos de salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;

X. Patrimonio Urbanístico Arquitectónico: Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;

XI. Programa: Programa de salvaguarda de una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico;

XII. Programa Delegacional: Programa de salvaguarda de las zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico que se encuentran en una Delegación;

XIII. Programa General: Programa de salvaguarda de todas las zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;

XIV. Programa General Operativo: Programa operativo de salvaguarda de todas las zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;

XV. Programa operativo: Programa operativo de salvaguarda de una zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico;

XVI. Registro Público: Registro Público del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal; y

XVII. Reglamentación de Salvaguarda: Reglamento de salvaguarda de una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico.

TÍTULO SEGUNDO DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO DEL DISTRITO FEDERAL.

CAPÍTULO I DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN

Artículo 5. *En el Distrito Federal el Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico tiene como ámbito de protección:*

I. Las zonas, los espacios abiertos monumentales y los monumentos del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de importancia para el Distrito Federal, que se determinan expresamente en esta Ley y los que sean declarados en los términos de la misma y su reglamento; y

II. Las zonas, los espacios abiertos monumentales y los monumentos del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de importancia para las Delegaciones del Distrito Federal, que se determinan expresamente en esta Ley y los que sean declarados en los términos de la misma y su reglamento.

Artículo 6. *Pueden ser declarados bienes inmuebles afectos al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico no solo grandes creaciones sino también obras modestas que hayan adquirido con el tiempo una significación cultural.*

CAPÍTULO II

DE LAS ZONAS DE PATRIMONIO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 7. Una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal es un área definida y delimitada, representativa de la cultura y evolución de un grupo humano, conformada por arquitectura y espacios abiertos en una unidad continua o dispersa, tanto en un medio urbano como rural, cuya cohesión y valores son reconocidos desde el punto de vista histórico, estético, tecnológico, científico y sociocultural, que la hacen meritoria de ser legada a las generaciones futuras.

Artículo 8. Las zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, según su origen, pueden ser:

I. Centro Histórico: Origen del asentamiento de una población;

II. Barrio antiguo: Conjunto arquitectónico y de espacios abiertos con características particulares que forma parte de un asentamiento humano o que se relaciona con él desde su origen o desde una fecha cercana a éste;

III. Colonia: Conjunto arquitectónico y de espacios abiertos creado para fomentar la expansión de la Ciudad de México; y

IV. Conjunto histórico: Es un sistema de monumentos y espacios abiertos, continuos o dispersos, que forman una unidad por estar relacionados de origen.

Artículo 9. Serán consideradas Zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal las siguientes, así como las que sean declaradas en los términos de esta Ley:

I. Colonias: Juárez, Santa María la Ribera, Roma, Hipódromo, Condesa, Pedregal, Las Lomas;

II. Centros Históricos: Santa Fe, Cuajimalpa, Mixcoac, Tacubaya, San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac, Mexicalzingo;

III. Conjuntos Históricos: Ciudad Universitaria.

CAPÍTULO III

DE LOS ESPACIOS ABIERTOS MONUMENTALES Y LOS MONUMENTOS URBANÍSTICOS.

Artículo 10. Un espacio abierto monumental es un medio físico definido en suelo urbano, libre de una cubierta material, delimitado, proyectado y construido por el hombre con algún fin específico, en el que se reconocen

uno o varios valores desde el punto de vista histórico, artístico, estético, tecnológico, científico y sociocultural que lo hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras.

Artículo 11. Los espacios abiertos monumentales, según sus características y usos de origen, pueden ser:

I. Acequia: Zanja por donde se conducen aguas para regar y para otros fines;

II. Atrio: Espacio abierto destinado a uso religioso generalmente adosado a un templo;

III. Calle: Vialidad con una tradición histórica y características de traza e imagen urbana singulares;

IV. Canal: Cauce artificial por donde se conduce agua para darle salida o para diversos usos entre los que figura la circulación vehicular entre Chinampas;

V. Chinampas: Sistema de terrenos artificiales de origen y tradición mesoamericana en la Cuenca de México, separados entre sí por canales de agua, en un medio lacustre de poca profundidad, destinados al cultivo de especies vegetales con fines productivos y de habitación;

VI. Deportivos al aire libre: Espacios abiertos destinados a la realización de actividades deportivas;

VII. Huerto: Espacio abierto donde se cultivan legumbres, hortalizas y árboles frutales con fines productivos;

VIII. Jardín botánico: Espacio abierto destinado a la exhibición y conservación de una colección de especies vegetales;

IX. Jardín: Espacio abierto generalmente cercado de carácter privado donde se cultivan especies vegetales con fines de ornamentación;

X. Panteón: Espacio abierto destinado a enterrar a los muertos;

XI. Parque urbano: Espacio abierto jardinado, de carácter público, en donde se realizan actividades recreativas y culturales cuyo objetivo es elevar la calidad de vida de los habitantes del asentamiento humano en que se ubica;

XII. Parque zoológico: Espacio abierto destinado a la exhibición de una colección de especies animales;

XIII. Paseo: Espacio abierto jardinado destinado al desplazamiento de peatones y vehículos, que por sus

características pueden aprovechar los habitantes de un asentamiento humano para fines recreativos, culturales y religiosos y que por ello se considere meritoria de ser legado a generaciones futuras;

XIV. Plaza: Espacio abierto en suelo urbano, jardinado o no, del dominio público destinado a expresiones cívicas, actividades recreativas, culturales, sociales y políticas de los habitantes de un asentamiento humano;

XV. Vivero: Espacio destinado a la reproducción y cultivo de especies vegetales ornamentales y forestales.

Artículo 12. Serán considerados espacios abiertos monumentales del Distrito Federal los siguientes, así como los que sean declarados en los términos de esta Ley:

I. Calles: Arcos de Belén-Chapultepec, Florencia, Palmas, Vértiz, Campeche, División del Norte, Cumbres de Maltrata;

II. Jardines: Jardín Centenario, Campus de Ciudad Universitaria;

III. Panteones: Jardín, de los Remedios, de San Lorenzo Tezonco, Civil de Dolores, Francés de la Piedad, Español, San José, Xoco, el Calvario, San Isidro, Santa Lucía, Santa Apolonia, Monte Sinaí, Israelita;

IV. Parques urbanos: Chapultepec, Alameda Central, Alameda de Santa María, Felipe Xicotécatl, Miguel Alemán, Revolución, San Lorenzo, Tlacoquemécatl, Francisco Villa (de los Venados), San Martín (México), España, Luis G. Urbina (Hundido), Bosque de Tlalpan, Las Américas, Lira;

V. Paseos: Reforma, Bucareli, Horacio (Paseo de los Cedros), Tlalpan, Tacuba, Mazatlán, Durango, Insurgentes, Oaxaca, Veracruz, Amsterdam, Miguel Ángel de Quevedo, Los Misterios, Guadalupe, Paseo del Pedregal;

VI. Plazas: de la Constitución, de la República, de Santa Catarina, de la Ciudadela, de Santa María Nonoalco, de las Tres Culturas, Santo Domingo, Tolsá, Loreto;

VII. Viveros: Viveros de Coyoacán.

Artículo 13. Un monumento urbanístico es un elemento natural o fabricado, ubicado en un espacio abierto de un asentamiento humano, en el que se reconocen uno o varios valores singulares desde el punto de vista histórico, artístico, estético, tecnológico, científico y sociocultural que lo hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras.

Artículo 14. Los monumentos urbanísticos, según sus características, pueden ser:

I. Individuos vegetales, arbóreas, arbustivas, herbáceas o cubresuelos;

II. Esculturas ornamentales y conmemorativas; y

III. Elementos de mobiliario urbano o tipologías de los mismos.

Artículo 15. Serán considerados monumentos urbanísticos del Distrito Federal:

*I. Las especies de ahuehuetes *Taxodium mucronatum*, sauces *Salix humboldtiana*, ahuejotes *Salix bonplandiana*, fresnos *Fraxinus undhei*, cedros *Cupressus lindleyi*; y*

II. Los que se enlistan a continuación:

a) Esculturas ornamentales o conmemorativas: El Caballito, las que se encuentran a lo largo del Paseo de la Reforma, Alvaro Obregón, y Miguel Ángel de Quevedo; y

b) Elementos de mobiliario urbano o tipologías de los mismos: las bancas de cantera en el Paseo de la Reforma y aquéllos que sean declarados en los términos de esta Ley.

III. Aquéllos que sean declarados en los términos de esta Ley.

CAPÍTULO IV DE LOS MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS.

Artículo 16. Un monumento arquitectónico es un bien inmueble o parte de él, edificado por el hombre para realizar en su espacio interno diversas actividades, en que se reconocen uno o varios valores singulares desde el punto de vista de la historia, de la estética, de la tecnología, de su funcionalidad y por su importancia sociocultural, que lo hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras.

Artículo 17. Los monumentos arquitectónicos, según el género de su origen, pueden ser:

I. Conmemorativo;

II. De habitación: Multifamiliar, unifamiliar, asilo, casa de cuna, recogimiento, casas de asistencia y similares;

III. De comercio, abasto y almacenamiento: Centro comercial, tienda de servicios, tienda departamental, mercado, bodega, rastro, alhóndiga, tiendas de especialidades y similares;

IV. De educación, recreación y cultura: Colegio, escuela, academia, universidad, instituto, biblioteca, archivo, museo, galería, casa de cultura, club, cine, sala de concierto, teatro, auditorio, foro, templo, estadio, plaza de toros, frontón, hipódromo, billar y similares;

V. De oficinas: Bancarias, gubernamental, empresariales, despachos y similares;

VI. De comunicaciones: De correo, telégrafo, teléfono, ferrocarril y similares;

VII. De salud: Temazcal, baño, hospital, clínica, deportivo, laboratorio, consultorio, botica, gabinete radiológico y similares;

VIII. De industria y producción: Fábrica, hacienda, taller, molino, nixtamal y similares;

IX. De servicios: Hotel, posada, restaurante, fonda, cafetería, cantina, pulquería, cervecería y similares;

X. Militar: Fuerte, garita, y similares;

XI. Centros penitenciarios: Cárcel y similares;

XII. De infraestructura: Estaciones de tren, de tranvía, acueductos, fuentes, lavaderos de caballos, embarcaderos y similares;

XIII. Mixto: Habitación-comercio, habitación-oficina, convento y similares;

XIV. Vernáculo: Aquella edificación que por su importancia sociocultural, sea producto de la expresión y participación de una comunidad, aplicando conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos consuetudinariamente en cuanto a las tecnologías constructivas, el uso de materiales propios del lugar, y la concepción espacial y formal estrechamente ligada con su contexto y medio ambiente, en respuesta a sus necesidades, valores, tradiciones, economía y forma de vida.

Artículo 18. No podrá ser declarada monumento, espacio abierto monumental o zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico la obra de un autor vivo o que tenga menos de 40 años de ejecución, salvo que se trate del complemento contemporáneo de un proyecto original anterior a este límite temporal.

Artículo 19. En torno a cada monumento, espacio abierto y zona de patrimonio urbanístico arquitectónico habrá una vigilancia especial por parte de la autoridad responsable, para salvaguardar las características y valores del patrimonio que rodea.

TÍTULO TERCERO DE LAS AUTORIDADES, ORGANOS DE APOYO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAPÍTULO I DE LAS AUTORIDADES.

Artículo 20. La aplicación de esta Ley corresponderá esencialmente a las siguientes autoridades:

- I. Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
- II. Secretaría de Desarrollo Social;
- III. El Instituto de Cultura de la Ciudad de México; y
- IV. El Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Artículo 21. Son deberes y atribuciones fundamentales del Gobierno del Distrito Federal, garantizar la conservación del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, así como promover el enriquecimiento del mismo, fomentando y tutelando el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él.

Artículo 22. Corresponden al Jefe de Gobierno las siguientes facultades:

- I. Presidir el Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Cultural del Distrito Federal;
- II. Coordinar las acciones tendientes a la salvaguarda y difusión de los bienes que conforman el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;
- III. Dirigir la administración de los bienes que integran el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, en la esfera de su competencia;
- IV. Emitir y publicar los programas de salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal a que se refiere el Título Quinto de esta Ley;
- V. Expedir las declaratorias correspondientes a Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, Espacio Abierto Monumental, Monumento Arquitectónico y Monumento Urbanístico, según el caso;
- VI. Ejercitar las facultades en materia de desarrollo urbano que le correspondan, en los términos de la legislación aplicable, con el objeto de proteger cualquiera de los bienes adscritos al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;
- VII. Emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para la protección del Patrimonio Cultural del Distrito Federal, en el ámbito de sus facultades;

VIII. Celebrar convenios y acuerdos de coordinación con la Federación y los municipios de la zona conurbada, y de concertación con los sectores social y privado con el fin de apoyar los objetivos que se definan en los diversos programas de salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Artículo 23. *La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, estará encargada de establecer todas las medidas necesarias a efecto de que, dentro del marco de su competencia, se proteja el valor cultural de los bienes y zonas señaladas en la presente Ley.*

Artículo 24. *Serán facultades del Secretario de Desarrollo Social las siguientes:*

I. Dirigir, en coordinación con las autoridades delegacionales todas las acciones necesarias para la salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico;

II. Actuar como órgano de enlace entre las autoridades del Distrito Federal y de las demás entidades federativas, en las acciones de salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico;

III. Promover acciones de información relacionadas con la autorización de proyectos de restauración, y la ejecución y supervisión de obras de intervención en monumentos y espacios abiertos monumentales que les corresponda realizar;

IV. Representar al Gobierno del Distrito Federal ante las autoridades culturales federales o de cualquier otra entidad federativa, en asuntos relacionados con la salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de conformidad con las disposiciones aplicables;

V. Fungir como Secretario Técnico del Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Cultural del Distrito Federal;

VI. Ejercer todas aquellas atribuciones que le sean conferidas por esta Ley, su reglamento o la demás legislación aplicable.

Artículo 25. *Corresponden al Instituto de Cultura de la Ciudad de México las siguientes facultades y obligaciones:*

I. Difundir y promocionar ante la comunidad la existencia, alcances y logros de la presente Ley;

II. Estructurar, organizar y operar el Centro de Información del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, en los términos del Título Cuarto de la Ley y su reglamento;

III. Fomentar la comunicación entre los diversos centros de estudios en materia de conservación;

IV. Fomentar la investigación científica y técnica sobre la salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;

V. Difundir de la información cultural, técnica y científica sobre el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;

VI. Promover el establecimiento de centros de instrucción en las técnicas de construcción artesanal necesarias para los trabajos de restauración del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;

VII. Proponer al pleno del Consejo de Salvaguarda el reglamento interior del Centro de Información del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico.

VIII. Promover el conocimiento del Distrito Federal, de su historia, de su naturaleza geográfica, urbanística y cívica;

IX. Estimular las expresiones culturales relacionadas con el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;

X. Fomentar la creación de patronatos que aporten recursos para hacer más amplias las labores de salvaguarda y difusión del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Distrito Federal;

XI. Promover la creación de diversas opciones de financiamiento público y privado, que permitan fortalecer el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal y su difusión;

XII. Elaborar e instrumentar los Programas de Puesta en Valor del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, en los términos del Título Octavo de esta Ley, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Distrito Federal; y

XIII. Las demás que le confiera esta Ley y la legislación aplicable. demás legislación aplicable.

Artículo 26. *El Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, estará conformado por:*

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien lo presidirá;

II. El Secretario de Desarrollo Social, quien fungirá como Secretario Técnico;

III. El Director General del Instituto de Cultura de la Ciudad de México;

IV. El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;

V. El Secretario de Turismo del Distrito Federal;

VI. Los cronistas oficiales de la Ciudad de México; y

VII. Cinco ciudadanos, hombres y mujeres, que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad en materias relacionadas con el objeto de la presente Ley y que no ocupen ningún cargo, comisión o empleo como servidor público.

El cargo de miembro del Consejo tendrá carácter honorario, y por las funciones conferidas no se dará ninguna retribución económica.

Asimismo, a las sesiones del Consejo se invitará a representantes de Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, quienes participarán con voz pero sin voto en las resoluciones del Consejo.

Artículo 27. *Los miembros del Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, a que se refiere la fracción VII del artículo 26 de esta Ley serán nombrados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y aprobados, en su caso, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.*

Artículo 28. *El Consejo sesionará, cuando menos, una vez cada tres meses, en la fecha que se indique en la convocatoria respectiva, que será expedida por el Presidente del mismo.*

Para sesionar es necesario que asista la mayoría simple de los integrantes. El Consejo celebrará sesiones ordinarias trimestrales y las extraordinarias que sean necesarias, para resolver los asuntos de su competencia.

Artículo 29. *El Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal tendrá las siguientes facultades:*

I. Establecer los lineamientos generales de las políticas públicas del Gobierno del Distrito Federal, para la salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de esta entidad;

II. Deliberar respecto a la pertinencia de que el Jefe de Gobierno declare algún bien inmueble afecto al patrimonio urbanístico arquitectónico del Distrito Federal;

III. Participar en la elaboración y reformas al Reglamento de esta Ley;

IV. Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados con la salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico del Distrito Federal.

V. Las demás que expresamente le señale esta Ley.

Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate.

Artículo 30. *De conformidad con el artículo 67, fracción XXVIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, podrá declarar la expropiación de un bien inmueble cuando se considere que sólo de esta forma se asegura su protección y conservación.*

Artículo 31. *Cuando el propietario, poseedor o responsable de un monumento o espacio abierto monumental no ejecute las obras necesarias para su conservación, dentro del plazo que al efecto se fije, la autoridad correspondiente podrá ordenar la ejecución de las obras de intervención necesarias.*

Artículo 32. *En cada Delegación podrá establecerse una Junta de Salvaguarda que hará las veces de Órgano Consultivo para la defensa del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.*

El Reglamento de la Ley señalará las atribuciones y configuración de cada una de las Juntas de Salvaguarda, respetando siempre las necesidades específicas de cada Delegación.

Los Comités Vecinales participarán en las Juntas, en la proporción que les conceda el Reglamento y con las facultades que les otorga la Ley de la materia.

CAPÍTULO II DE LOS ORGANOS DE APOYO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Artículo 33. *Las autoridades deberán, estimular la fundación de agrupaciones voluntarias de salvaguarda y de asociaciones de carácter no lucrativo, así como fomentar la institución de reconocimientos honoríficos o pecuniarios, para que se reconozcan y alienten las obras ejemplares de salvaguarda en todos sus aspectos.*

CAPÍTULO III DE LA COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y ORGANOS DE APOYO.

Artículo 34. *Las autoridades en materia de salvaguarda deberán mantener una relación de cooperación constante con los órganos de apoyo, los organismos de representación ciudadana que establece la legislación correspondiente y los particulares en general, con el objeto de poder llevar a cabo proyectos*

comunes que sean patrocinados por la comunidad en su conjunto

TÍTULO CUARTO DE LA DECLARATORIA Y REGISTRO DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO.

CAPÍTULO I DEL REGISTRO PÚBLICO, CATÁLOGOS Y DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO.

Artículo 35. Dentro del Registro Público de la Propiedad, habrá una sección que contará con una base de datos electrónica que se denominará Registro Público del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, cuya organización y funcionamiento se determinarán por vía reglamentaria. En él se inscribirán las declaratorias y registros de zonas, espacios abiertos monumentales y monumentos del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico y los actos jurídicos relacionados con los mismos según la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 36. En el Instituto de Cultura de la Ciudad de México, se instituirá un Centro de Información del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, cuya organización y funcionamiento se determinarán por vía reglamentaria. En él estará disponible, en forma digital, impresa y vía internet, una base de datos para consulta pública, con toda la información en forma ordenada y actualizada sobre:

I. Las zonas, espacios abiertos monumentales y monumentos del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico con la información que sobre ellos que se vaya recopilando en el proceso de su salvaguarda, incluyendo la contenida en el Registro Público;

II. Las iniciativas de declaratoria en proceso;

III. Los bienes inmuebles, espacios abiertos y zonas extraídos del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico;

IV. La legislación y reglamentación de salvaguarda para todos los ámbitos del Patrimonio Cultural;

V. Los programas de salvaguarda con sus reglamentaciones;

VI. El padrón de Directores Responsables de Obras de Conservación que podrán avalar las iniciativas de declaratoria y los proyectos de intervención;

VII. El padrón de especialistas en las diversas disciplinas relacionadas con la conservación y restauración de monumentos y arquitectura de paisaje que pueden ofrecer

su asesoría o servicios para la intervención del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico;

VIII. El padrón de asociaciones civiles, patronatos, fondos y fideicomisos creados con el objeto de contribuir con la salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico; y

IX. Los programas de turismo y difusión del patrimonio.

La actualización de la base de datos y de los catálogos se organizará conforme al Reglamento.

Artículo 37. El Centro de Información se coordinará con los encargados de realizar una labor similar en el ámbito estatal, federal y mundial, a fin de intercambiar los datos de sus respectivas declaratorias.

Artículo 38. A los bienes declarados de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico o determinados tales por esta Ley se les expedirá, por el Registro Público de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, un Título oficial que los identifique, en el que se reflejarán todos los actos jurídicos e intervenciones de obra que sobre ellos se realicen. La forma y contenido de este Título se establecerán en el Reglamento.

Artículo 39. En un plazo no mayor de cuarenta y cinco días inmediatos a la publicación de la declaratoria en la Gaceta, al propietario o responsable del inmueble declarado monumento o espacio abierto monumental, deberá entregarse el Título oficial mencionado en el artículo anterior, junto con la información referente a:

I. La legislación, reglamentación y, en caso de pertenecer a una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, la reglamentación de salvaguarda que es aplicable al inmueble;

II. Las recomendaciones técnicas para su conservación;

III. Los beneficios de fomento a la salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal a que tiene derecho;

IV. El domicilio y teléfonos del Centro de Información; y
La demás información que se considere relevante.

Artículo 40. A los propietarios, poseedores o responsables de los bienes, que sin ser monumentos o espacios abiertos monumentales, conformen una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, se les notificará de ello por escrito anexándoles la información referente a la reglamentación que les es aplicable según su programa parcial de salvaguarda.

Artículo 41. El Centro de Información será responsable de la elaboración, actualización y publicación, del

Catálogo de las Zonas, Espacios Abiertos Monumentales y Monumentos Afectos al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, en los términos que se establezcan en el Reglamento. Dicho Catálogo será accesible al público en general.

CAPÍTULO II DE LAS DECLARATORIAS.

Artículo 42. *Para que las medidas de salvaguarda que prevé esta Ley puedan ser aplicadas, se requiere que el bien inmueble, espacio abierto o zona que deba ser objeto de las mismas, sea declarado afecto al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico por Ley o por decreto del Jefe de Gobierno, de conformidad con el procedimiento establecido en esta Ley.*

Artículo 43. *Para considerar si un bien es susceptible de ser declarado Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, éste deberá reunir los requisitos establecidos en el Título Segundo esta Ley.*

Artículo 44. *Las zonas, los espacios abiertos monumentales y los monumentos del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico determinados por esta Ley deberán ser inventariados y realizadas las recomendaciones de su conservación, inscritos en el Registro Público del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico y en el Centro de Información, e incluidos en el Catálogo.*

Artículo 45. *La declaratoria mediante decreto requerirá la tramitación y aprobación de su iniciativa por las autoridades competentes según lo dispuesto por esta Ley y su reglamento. Esta iniciativa se podrá hacer de oficio o a petición de parte.*

Artículo 46. *Para la declaratoria de oficio, la iniciativa deberá ser elaborada por el Consejo de Salvaguarda.*

Artículo 47. *A petición de parte, cualquier persona podrá elaborar y presentar una iniciativa ante el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con copia de traslado para el propietario del inmueble o espacio abierto de que se trate.*

Artículo 48. *La iniciativa para que un bien inmueble sea declarado monumento arquitectónico o urbanístico, espacio abierto monumental o zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, deberá llenar los siguientes requisitos:*

I. El nombre con que se conoce;

II. Su ubicación;

III. En caso de tratarse de una zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, la propuesta de su delimitación, en texto y en planos;

IV. La delimitación de su zona de protección en texto y en planos;

V. Su clasificación según su temporalidad de origen;

VI. Sus tipologías según las establecidas en el Título Segundo de esta Ley;

VII. Su descripción en texto incluyendo datos sobre su estado de deterioro y fotografías;

VIII. La justificación y fundamento legal de la propuesta;

IX. La definición y listado de sus partes integrantes, pertenencias y accesorios relevantes.

En ningún caso se dará curso a iniciativa alguna que no cumpla con los requisitos a que se refiere este artículo.

Artículo 49. *A partir de que la iniciativa sea recibida, si no es de las elaboradas por el propio Consejo de Salvaguarda, se turnará al mismo para los efectos a que se refiere el artículo 29 fracción II de esta Ley.*

Artículo 50. *Los propietarios, responsables o poseedores de tales bienes, están obligados a permitir y facilitar su inspección por parte de los organismos competentes, y su estudio a los investigadores y especialistas debidamente acreditados e identificados según el reglamento, previa solicitud razonada de éstos, para preparar iniciativas o, en su caso, emitir opiniones y las recomendaciones de conservación.*

Artículo 51. *Presentada la iniciativa de una declaratoria ante el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se dispondrá la apertura de un período de información pública con duración de treinta días hábiles, difundido en la Gaceta y en uno de los diarios de mayor circulación en el Distrito Federal, para recibir opiniones por escrito de personas interesadas y de la autoridad responsable. En este periodo, el propietario que considere que su inmueble no cumple con los requisitos para ser adscrito al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, podrá presentar las pruebas necesarias para demostrarlo, según el reglamento.*

Artículo 52. *El Consejo de Salvaguarda, para el caso de que la iniciativa no sea propia, emitirá su opinión en el plazo máximo de sesenta días hábiles a partir de la fecha en que se haya presentado la iniciativa, si las características de la zona o bien inmueble que se propone en la misma cumplen con lo establecido en esta Ley, según*

la información en ella presentada y la recogida de la consulta pública.

Artículo 53. En caso de que, según la opinión del Consejo de Salvaguarda, el bien o zona motivo de la iniciativa no sea meritorio de ser declarado afecto al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, se dará aviso al interesado.

Artículo 54. Una iniciativa rechazada no podrá ser presentada de nuevo en un plazo menor de tres años a partir de la fecha en que se haya emitido la opinión del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, previa opinión del Consejo de Salvaguarda.

Artículo 55. Si la opinión resulta favorable, en el caso de un bien inmueble o espacio abierto, el Consejo de Salvaguarda formulará las recomendaciones técnicas para su adecuada conservación, las cuales se integrarán en un solo documento con la iniciativa para ser turnado al Jefe de Gobierno para la expedición del decreto de declaratoria y su publicación en la Gaceta, a partir de lo cual entrará en vigor de manera definitiva.

Artículo 56. La autoridad competente deberá notificar el resultado de la opinión a quien haya presentado una iniciativa, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que se haya tomado la resolución.

Artículo 57. Una vez publicada la declaratoria en la Gaceta, se turnará al Centro de Información para que el monumento, espacio abierto monumental o zona sea dado de alta en la base de datos e, incluido en el Catálogo. Asimismo, se inscribirá en el Registro Público del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico.

Artículo 58. Los bienes afectos al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico deberán ostentar un emblema que facilite su identificación según lo establecido en el Reglamento, especificando su ámbito de protección.

Artículo 59. En caso de que, a través del avance del conocimiento por medio de la investigación, se generara información complementaria o diferente a la establecida en las declaratorias sobre las zonas, espacios abiertos monumentales y monumentos del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, dicha información se deberá anexar a su Título oficial en el Registro y a su expediente en el Centro de Información, una vez ratificada por El Consejo de Salvaguarda.

Si a través de esta información se demostrara que la zona, espacio abierto monumental o monumento del que

trata, carece de los valores que en esta Ley se establecen, se podrá tramitar una iniciativa para su exclusión.

Artículo 60. Una zona o bien inmueble adscrito al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico solo podrá ser excluido de éste cuando el monumento, espacio abierto monumental o zona deje de existir o cuando haya perdido los valores por los cuales fue declarado.

Artículo 61. Para que una zona, espacio abierto monumental o monumento deje de ser afecto al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, se requiere de una iniciativa que lo solicite de oficio o a petición de parte, bajo el mismo procedimiento que para su declaratoria.

El decreto se inscribirá en el Registro Público y se dará de baja en el Catálogo. En la base de datos del Centro de Información se registrará como zona, espacio abierto o bien inmueble excluido del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal y se formará un catálogo especial impreso y accesible al público en el Centro de Información, como testimonio de su memoria. En el caso de que el monumento, espacio abierto monumental o zona deje de existir, se colocará una placa conmemorativa en el sitio donde se ubicaba.

Artículo 62. Los bienes inmuebles o zonas declarados total o parcialmente, que tengan cien años o más no podrán dejar de ser afectos al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, salvo que dejen de existir.

Artículo 63. La adscripción al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de un bien inmueble o espacio abierto monumental tendrá los siguientes efectos:

I. Solo podrá ser gravado u objeto de actos de traslación de dominio, previo aviso por escrito a las autoridades correspondientes según el Reglamento;

II. Solo podrá ser restaurado o intervenido en cualquier forma, previa autorización del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, previa opinión del Consejo de Salvaguarda;

III. En ningún supuesto se procederá a su demolición o remoción definitiva;

IV. Deberá ser inscrito en los registros que se prevén en este mismo Título;

V. Tendrá derecho a los estímulos que emita el Jefe de Gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Deberá garantizarse, por vía reglamentaria, su accesibilidad al público.

**CAPITULO III
DEL DOMINIO, LA POSESIÓN Y LA
RESPONSABILIDAD DEL PATRIMONIO
URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO.**

Artículo 64. La declaratoria que se haga de monumentos, espacios abiertos monumentales y zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, podrá recaer tanto en bienes inmuebles de dominio público como en los de dominio particular, sin afectar la titularidad de su propiedad.

Artículo 65. Los monumentos y espacios abiertos monumentales del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, ya sean de dominio público o privado, deberán ser conservados, mantenidos en buen estado, restaurados en su caso y custodiados por sus propietarios, poseedores y responsables, de acuerdo a los términos de esta Ley, y los acuerdos técnicos emitidos por la autoridad correspondiente que les resulten aplicables. Si se trata de un bien que forma parte de una zona, deberá atenderse también a las disposiciones de salvaguarda de la misma.

Artículo 66. Cuando un propietario, poseedor o responsable de un bien afecto al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico no ejecute las acciones previstas en el artículo anterior, la autoridad competente, podrá ordenar su ejecución forzosa, previo procedimiento que se apegue a lo que dispone la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

Cuando el propietario o poseedor demuestre fehacientemente que no cuenta con las condiciones económicas para cumplir la orden, la autoridad podrá optar, a su entera discreción, por cualquiera de las siguientes opciones:

I. Ordenar su ejecución subsidiaria constituyendo un crédito fiscal a cargo del infractor; dicho crédito deberá inscribirse en el Registro;

II. Proponer al Jefe de Gobierno la tramitación de su adquisición o expropiación, de conformidad con la Ley de la materia, para garantizar su salvaguarda.

Artículo 67. Los propietarios que deseen realizar un acto traslativo de dominio sobre monumentos o espacios abiertos monumentales deberán dar aviso a la autoridad del propósito de la enajenación, precio y condiciones en que se proponga realizar la misma, para tramitar la autorización correspondiente. Dicha autoridad podrá hacer uso del derecho del tanto, obligándose al pago del precio convenido en un periodo no superior a dos ejercicios fiscales.

Artículo 68. En la escritura pública de los actos traslativos de dominio de monumentos y espacios abiertos monumentales deberá constar la referencia de su declaratoria. Se deberá notificar de la operación al

Registro Público, en un plazo no mayor de 30 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de la misma. El Registro Público dará aviso de la operación celebrada a las autoridades correspondientes, en un plazo de treinta días contados a partir del aviso definitivo.

En el Registro Público no se inscribirá documento alguno por el que se transmita la propiedad o cualquier otro derecho real sobre los bienes a que hace referencia este artículo sin que se acredite haber cumplido cuantos requisitos en esta Ley se recogen.

Artículo 69. Las enajenaciones que se hagan en contravención a lo que se dispone en este capítulo serán nulas de pleno derecho y el adquirente será responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe, independientemente de las responsabilidades que recaigan sobre el empleado o empleados públicos que concurran a la enajenación o la hayan autorizado.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá reivindicar en todo tiempo los monumentos y espacios abiertos monumentales que se enajenen aunque hayan pasado a poder de terceras personas, sea quien fuere su propietario.

Artículo 70. El Jefe de Gobierno puede conceder el uso sin fines de lucro de los monumentos o espacios abiertos monumentales bajo su dominio a las delegaciones, asociaciones o particulares, los cuales quedarán sujetos a las disposiciones de esta Ley y a la normatividad aplicable. En cualquier tiempo en que el interesado no cumpla las disposiciones aplicables se dará por terminado el acuerdo correspondiente.

**TÍTULO QUINTO
DE LA PLANEACIÓN DE SALVAGUARDA Y LOS
PROYECTOS Y OBRAS DE INTERVENCIÓN DEL
PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO.**

**CAPÍTULO I
DE LOS PROGRAMAS DE SALVAGUARDA Y SUS
REGLAMENTOS.**

Artículo 71. Un Programa de Salvaguarda es el proyecto ordenado de actividades que establece la identificación, declaratoria, catalogación, protección, conservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, revitalización y puesta en valor del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, en la planeación urbana, el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, según sus condiciones particulares.

Artículo 72. La salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:

- I. El Programa General de Salvaguarda;*
- II. Los Programas Delegacionales de Salvaguarda;*
- III. Los Programas Parciales de Salvaguarda; y*

Los Programas Operativos de Salvaguarda de cada uno de los anteriores.

Artículo 73. *El Programa General de Salvaguarda abarcará todas las Zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, los espacios abiertos monumentales y los monumentos arquitectónicos y urbanísticos del Distrito Federal, para la planeación integral de su salvaguarda a largo plazo.*

Artículo 74. *El Programa Delegacional de Salvaguarda abarcará todas las Zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, los espacios abiertos monumentales y los monumentos arquitectónicos y urbanísticos contenidos en una Delegación política del Distrito Federal, con sus respectivas zonas de protección, para la planeación integral de su salvaguarda a largo plazo.*

Artículo 75. *Un Programa Parcial de Salvaguarda es el específico de una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, según sus condiciones particulares, para la planeación integral de su salvaguarda a largo plazo, según lo establecido en esta Ley.*

Artículo 76. *Una reglamentación de salvaguarda es un conjunto de ordenamientos jurídicos que regulan las obras de intervención en una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico específica y su zona de protección, de conformidad con esta Ley. La reglamentación de salvaguarda forma parte del programa parcial de salvaguarda de la zona, que se debe integrar al programa de desarrollo urbano delegacional al que corresponda.*

Artículo 77. *La realización y puesta en vigor de los programas y reglamentos de salvaguarda debe tener como objetivos primordiales:*

I. Que la población goce, integre a su vida cotidiana, aproveche y valore el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico;

II. Lograr una relación de armonía y orden entre las zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, espacios abiertos monumentales y monumentos, y todo lo que conforma el resto del asentamiento humano, para mejorar la calidad de vida de la población; y

Tener claridad en las acciones específicas a realizar y el orden en que conviene hacerlo, según prioridades definidas.

Artículo 78. *Los Programas Operativos de Salvaguarda son los instrumentos de materialización de los Programas de Salvaguarda, en que se establece la asignación de recursos del presupuesto de egresos del Distrito Federal para cada ejercicio fiscal, según las prioridades establecidas en los Programas de Salvaguarda General, Delegacionales y Parciales.*

Artículo 79. *Los programas parciales deberán elaborarse a partir de análisis rigurosos de las zonas declaradas, contemplando etapas de realización en el espacio y en el tiempo, según prioridades claramente definidas. Los programas parciales deberán incluir:*

I. El nombre con que se conoce la zona;

II. La delimitación, temporalidad de origen y tipología de la zona, según las establecidas en esta Ley;

III. La fundamentación y motivación con los antecedentes y razonamientos que justifiquen su elaboración;

IV. El inventario y ubicación de todos los bienes inmuebles y espacios abiertos que la componen por predio, con su nomenclatura y numeración oficial, usos y destinos del suelo, temporalidad de origen constructivo de cada uno, estado de conservación, niveles de protección, prioridad y tipo de intervención que requieren, importancia, niveles de construcción, coeficientes de ocupación del suelo y coeficientes de utilización del suelo;

V. La ubicación y descripción tipológica, según lo establecido en esta Ley, de cada espacio abierto monumental, con sus elementos naturales y de mobiliario urbano, que, como elemento aislado, forme o pueda formar parte del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico y que por ello tendrá, dentro de la zona, una protección especial, con la información descrita en la fracción anterior;

VI. La ubicación y descripción tipológica, según lo establecido en esta Ley de cada monumento que, como elemento aislado, forme o pueda formar parte del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico y que por ello tendrá, dentro de la zona, una protección especial, con la información descrita en la fracción IV;

VII. Los proyectos de los monumentos y espacios abiertos monumentales del dominio público cuya realización corresponda al Gobierno del Distrito Federal;

VIII. Los estudios multidisciplinarios en que se fundamenten los trabajos de salvaguarda;

IX. La delimitación, descripción e inventario de los elementos de su zona de protección;

X. Las condiciones generales de instalación de las redes de suministro y de los servicios necesarios para la vida urbana o rural, recogidas en el levantamiento correspondiente;

XI. El Estudio de vialidades en cuanto a su evolución histórica y funcionamiento actual, necesidades de estacionamientos para la adecuada circulación y posibilidades de mejoramiento;

XII. Las modalidades de financiamiento necesarias para lograr la revitalización de la zona y su medio, según la magnitud de las inversiones y las etapas de ejecución del programa hasta ultimar los trabajos de salvaguarda;

XIII. Estudio y determinación de usos, destinos y descripción de las actividades que en los monumentos arquitectónicos y espacios abiertos monumentales podrán desarrollarse según sus características;

XIV. El proyecto de salvaguarda;

XV. La reglamentación de salvaguarda a que debe quedar sometida la Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico y su zona de protección, especialmente en cuanto los trabajos de mantenimiento, restauración y mejoramiento, imagen urbana, publicidad, señalización, instalaciones, condiciones que regirán las nuevas construcciones, usos y destinos permitidos.

Artículo 80. *La información contenida en el programa parcial, servirá para la elaboración de los programas operativos de salvaguarda.*

Artículo 81. *Los propietarios de monumentos, espacios abiertos monumentales, e inmuebles ubicados en Zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, deberán, con la aprobación del Consejo de Salvaguarda, establecer programas para la realización de trabajos de conservación de carácter permanentes.*

Artículo 82. *La declaratoria de una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, determinará la obligación para el Gobierno del Distrito Federal, a través del organismo correspondiente, de redactar su respectivo Programa de Salvaguarda, dentro de los siguientes 180 días naturales contados a partir de su publicación en la Gaceta. El programa deberá cumplir, desde luego, las exigencias establecidas en esta Ley.*

Para cumplir con esta tarea, podrá auxiliarse de especialistas e instituciones de prestigio

Artículo 83. *La elaboración, aprobación e inscripción de los Programas General, Delegacionales y parciales,*

así como sus modificaciones, se sujetarán al siguiente procedimiento:

I. El Gobierno del Distrito Federal, a través del organismo correspondiente, publicará el aviso inicial del proceso de elaboración del programa o de sus modificaciones en la Gaceta y en un diario de los mayor circulación en el Distrito Federal, por una vez;

II. El organismo correspondiente procederá a elaborar el programa o sus modificaciones;

III. Una vez integrado el proyecto, el organismo publicará por una vez el aviso de que se inicia la consulta pública en los medios señalados en la fracción I, según lo establecido en el Reglamento;

IV. Terminado el plazo de consulta pública, el organismo correspondiente incorporará al proyecto las observaciones que considere procedentes;

V. Concluida la etapa anterior, remitirá el programa al Consejo de Salvaguarda para su opinión.

VI. Si la opinión del Consejo de Salvaguarda fuere favorable y no tuviere observaciones lo deberá remitir al Jefe de Gobierno para su publicación en la Gaceta y en un periódico de mayor difusión;

VII. Una vez publicado el programa, se inscribirá en el Registro de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico y en la base de datos del Centro de Información;

VIII. Si el Consejo de Salvaguarda tuviere observaciones, lo devolverá al organismo correspondiente para la realización de los ajustes procedentes, quien nuevamente lo remitirá al Consejo de Salvaguarda, continuando el trámite a que se refieren las fracciones VI y VII;

IX. El programa surtirá efectos a los treinta días de su publicación.

Los términos en que se lleve a cabo el procedimiento anterior estarán determinados en el reglamento de esta Ley.

Artículo 84. *Los Programas de Salvaguarda deberán integrarse a los programas generales, delegacionales y parciales, en su caso, de Desarrollo Urbano, Ambientales, Desarrollo Económico, Desarrollo Turístico y Fomento Económico, y al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal.*

Artículo 85. *Cuando la delimitación de una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico o su zona de protección incluya predios que correspondan a*

Delegaciones diferentes, su programa parcial de salvaguarda se incluirá en todos los Delegacionales de que forme parte.

Artículo 86. *Cuando en una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico o su zona de protección se incluyan predios de otra entidad federativa, El Jefe de Gobierno del Distrito Federal promoverá la realización de convenios de coordinación con las autoridades respectivas para la elaboración y ejecución de los Programas de Salvaguarda.*

Artículo 87. *El Programa de Salvaguarda de una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, podrá permitir integraciones urbanas, sólo en caso de que impliquen una mejora de su relación con su medio o eviten los usos degradantes en la misma.*

Artículo 88. *La conservación de una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico implica la preservación de su traza urbana, sus espacios abiertos con los elementos que los conforman y arquitectura, así como de su imagen urbana y las características de su medio ambiente. Se autorizarán excepcionalmente las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la conservación general del carácter de la Zona.*

Artículo 89. *Cuando en una zona haya arquitectura y espacios abiertos de varios periodos diferentes, la salvaguarda deberá hacerse teniendo en cuenta las manifestaciones de todos esos periodos de acuerdo con sus valores.*

Artículo 90. *Se prohíbe la realización de toda obra que altere los valores que justifican la declaratoria de un monumento, espacio abierto monumental o Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, o que perturbe su contemplación.*

Artículo 91. *La colocación de cualquier clase de señalización y publicidad en espacios abiertos monumentales y monumentos será sometida a una autorización especial de la autoridad responsable previa opinión del Consejo, y en Zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, según su reglamentación específica de salvaguarda.*

Artículo 92. *Los usos y destinos de los bienes declarados monumentos o espacios abiertos monumentales, quedarán subordinados a que no se pongan en peligro los valores que ameritan su conservación. Se buscará, en lo posible, que sean compatibles con los usos y destinos originales y con el carácter, vocación y estructura de los monumentos o espacios abiertos monumentales. Cualquier cambio de uso o destino deberá ser autorizado por la autoridad*

correspondiente, previa opinión del Consejo de Salvaguarda e inscrito en el Registro Público y en la base de datos del Centro de Información, según las disposiciones de esta Ley.

Artículo 93. *Los monumentos, espacios abiertos monumentales y Zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico se registrarán con su nombre actual consignando sus nomenclaturas anteriores, en su caso.*

CAPITULO II DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y AUTORIZACIONES.

Artículo 94. *Quienes realicen obras de intervención procurarán, por todos los medios de la técnica, la conservación, consolidación y mejora del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico.*

Artículo 95. *En el periodo comprendido entre la presentación de una iniciativa de declaratoria y la entrada en vigor de un Programa de Salvaguarda, el otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas para intervenir inmuebles o espacios abiertos incluidos en la iniciativa, necesitará una autorización especial de la autoridad correspondiente, previa opinión del Consejo de Salvaguarda con el fin de proteger los bienes afectados. En ningún caso se permitirán alienaciones nuevas, alteraciones en los inmuebles, espacios abiertos o en la traza urbana.*

Artículo 96. *Las obras que se realicen al amparo de licencias contrarias al Programa aprobado, o sin ninguna licencia, serán ilegales, y la autoridad competente podrá ordenar las obras de liberación o reintegración necesarias con cargo al organismo que hubiera otorgado la licencia en cuestión, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación de responsabilidades de funcionarios públicos y las faltas administrativas a las que haya lugar.*

Artículo 97. *Un inmueble declarado monumento arquitectónico o urbanístico es inseparable de su entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor, y en todo caso, conforme al procedimiento previsto en el reglamento.*

Artículo 98. *Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, deberá ser autorizada el organismo correspondiente.*

Artículo 99. *Si la autoridad competente considera como ruina un inmueble por su estado de deterioro extremo, y existiera urgencia y peligro inminente de que se pierda,*

deberá ordenar las medidas necesarias para evitar daños a las personas. Las obras que en este caso, por razón de fuerza mayor, hubieran de realizarse no darán lugar a actos de demolición que no sean estrictamente necesarios para la conservación del inmueble y requerirán la opinión del Consejo de Salvaguarda, debiéndose prever, además, en su caso, la reposición de los elementos retirados.

Artículo 100. *Las obras de mantenimiento son de carácter obligatorio para los propietarios, poseedores y responsables de los monumentos y espacios abiertos monumentales.*

Artículo 101. *Para conseguir la autorización necesaria a efecto de obtener la licencia de construcción, para realizar obras de intervención de un monumento o de un espacio abierto monumental de los descritos en las fracciones II y III del artículo 14 de esta Ley, se deberá presentar ante el Consejo de Salvaguarda correspondiente, el proyecto firmado por un director responsable de obra de conservación y los corresponsables que señale el reglamento en su caso, acompañado de lo siguiente:*

I. La solicitud en la forma oficial correspondiente;

II. El levantamiento del estado actual del monumento o espacio abierto monumental, con todos los elementos que lo componen, y de sus deterioros;

III. El uso o destino que se propone para el inmueble o espacio abierto;

IV. El proyecto de liberación, consolidación, reintegración, integración y adecuación que se propone hacer en el mismo;

V. La memoria descriptiva;

VI. Los estudios históricos y técnicos que fundamentan el proyecto; y

VII. El catálogo de conceptos.

Esta información se entregará como se establece en el reglamento, en forma digital e impresa, en la Delegación correspondiente, quien la remitirá al Consejo de Salvaguarda quien será el encargado de revisar el material para emitir una opinión en un plazo no mayor de quince días hábiles. Asimismo, se hará entrega de la misma en el Centro de Información, donde se integrará al expediente del monumento o espacio abierto monumental en cuestión.

Artículo 102. *En el caso de intervención de espacios abiertos monumentales, monumentos arquitectónicos y monumentos urbanísticos de mobiliario urbano del dominio público, la Autoridad responsable queda*

igualmente obligada a cumplir los requisitos establecidos en el artículo anterior.

Artículo 103. *Los monumentos urbanísticos descritos en la fracción I del Artículo 14 de esta Ley deben ser motivo de cuidados especiales por parte de sus propietarios, según las recomendaciones técnicas del Consejo de Salvaguarda.*

Artículo 104. *Los monumentos urbanísticos mencionados en la fracción I del artículo 14 de esta Ley, solamente podrán ser sustituidos por elementos de la misma especie en caso de haber muerto, estar en peligro de muerte inminente o por haberse perdido en algún siniestro.*

Artículo 105. *La obra de sustitución de un monumento urbanístico de los mencionados en la fracción I del artículo 14, igualmente se deberá llevar a cabo con la dirección de un arquitecto de paisaje y la asesoría de un biólogo.*

Artículo 106. *Si un Proyecto de Restauración no cumple con lo establecido para garantizar la conservación del monumento o espacio abierto monumental, la autoridad correspondiente negará la autorización y lo notificará al interesado, según lo establecido en el reglamento. La notificación deberá contener las observaciones que fundamentan la negación de la autorización, para la posible corrección del proyecto.*

Artículo 107. *El Consejo de Salvaguarda será responsable de hacer llegar al Centro de Información copia de traslado de la negativa o afirmativa de la autorización, según el caso, para darlo de alta en la base de datos e integrarlo en el expediente correspondiente.*

Artículo 108. *Todas las obras de intervención deberán quedar debidamente documentadas en una bitácora de obra en formato digital, según lo establecido en el reglamento, que se entregará, terminada la obra, en el Centro de Información para su integración a la base de datos en el expediente del monumento o espacio abierto monumental intervenido.*

Artículo 109. *En las obras de intervención, tanto de arquitectura como de espacios abiertos, deberán cuidarse las soluciones formales y espaciales, traza, escala, relaciones entre los volúmenes, proporciones entre macizos y vanos, uso de materiales y técnicas constructivas, especies arbóreas originales en su caso, los paisajes e hitos visuales, unidad, ritmos, uso del color, su relación con el medio y todos los demás aspectos que determinan su carácter.*

Artículo 110. *Las diversas aportaciones de todas las épocas en la edificación de un monumento arquitectónico deberán ser respetadas, puesto que la unidad de estilo no es un fin a conseguir en una obra de restauración. Cuando un*

edificio presente varios estilos superpuestos, la eliminación de elementos de uno en particular no se justificará más que excepcionalmente, y bajo la condición de que estén en un estado de importante deterioro o que al retirarlos por no ser de interés, el conjunto incremente su valor.

Artículo 111. Director Responsable de Obra de Conservación, es el restaurador que se hace responsable de la observancia de esta Ley, su reglamento, las recomendaciones técnicas emitidas por el Consejo de Salvaguarda y, en su caso, la reglamentación de salvaguarda en las obras para las que se otorgue la responsiva. La calidad de director responsable de obra de conservación se adquiere según lo establecido en el reglamento.

TÍTULO SEXTO

DE LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DEL DISTRITO FEDERAL.

CAPÍTULO UNICO

Artículo 112. El Gobierno del Distrito Federal tiene la obligación de difundir la importancia que tienen el conocimiento, comprensión, asimilación y puesta en valor del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, en la formación de la identidad local, en la que se fundamenta el desarrollo cultural de los habitantes del Distrito Federal.

Artículo 113. El Instituto de Cultura de la Ciudad de México es el órgano facultado para establecer y ejecutar los Programas de Puesta en Valor del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal y para promover la creación de diversas opciones de financiamiento público y privado, para llevarlos a cabo.

Artículo 114. Para efectos de colaborar con el cumplimiento de las facultades descritas en el artículo anterior, el secretario técnico del Consejo de Salvaguarda del Distrito Federal se integrará al Consejo Directivo del Instituto de Cultura.

Artículo 115. Los programas de Puesta en Valor deberán difundir, de manera clara y completa, las ventajas no solamente estéticas y culturales, sino también sociales y económicas que puede ofrecer una política bien llevada de salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, mostrando siempre la función que éste debe tener en la vida contemporánea.

Artículo 116. El Instituto de Cultura podrá apoyarse en academias, órganos colegiados, asociaciones de profesionales o artesanos, relacionados con la

conservación del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, para la realización de los Programas de Puesta en Valor en el Distrito Federal.

Asimismo, podrá proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal la celebración de convenios con los gobiernos de otras entidades federativas y con el Gobierno Federal, para que la difusión del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal pueda tener una cobertura nacional e incluso internacional.

Los propietarios, poseedores y responsables de bienes del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico deberán prestar su colaboración en la ejecución de los Programas de Puesta en Valor.

Artículo 117. Los Programas de Puesta en Valor deberán actualizarse cada tres años y serán elaborados por el Instituto de Cultura de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo anterior.

Artículo 118. La información básica para la elaboración de los Programas de Puesta en Valor estará disponible, en el Centro de Información. Deberá complementarse con documentación bibliográfica y de archivos, y las aportaciones de investigadores y expertos.

Artículo 119. Los Programas para la Puesta en Valor del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal son los instrumentos de planeación para:

I. Estructurar y organizar adecuadamente la difusión del conocimiento del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico y de su importancia, tanto para la cultura de los habitantes del Distrito Federal y los de México como para la cultura universal, a través de la educación, el acceso a la información y a los bienes adscritos a él;

II. Difundir y promocionar ante la comunidad la existencia, alcances y objetivos de la presente Ley y su reglamento, y la importancia de su cumplimiento para lograr la salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;

III. Difundir la importancia que tiene el conocimiento técnico e histórico en la intervención de los bienes del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, debido al interés que revisten como testimonios históricos y elementos de identidad local y nacional;

IV. Fomentar el respeto y cuidados que este patrimonio merece; y

V. Instrumentar las acciones para favorecer la participación ciudadana en la salvaguarda, puesta en

valor y divulgación del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Artículo 120. Según el público al cual se dirijan, los Programas de Puesta en Valor del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, podrán ser:

I. Para la población en general;

II. Para la infancia: Campañas diseñadas para cada grado escolar según las características de aprendizaje de cada edad;

III. Para la juventud: Campañas diseñadas para que el mundo de la investigación sobre el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, la difusión del mismo a nivel educativo o turístico, la especialización en disciplinas necesarias para su salvaguarda, y el aprendizaje de técnicas artesanales indispensables para la restauración de monumentos y espacios abiertos monumentales, sean considerados por los jóvenes del Distrito Federal como opciones para ganarse la vida de una manera digna y útil para toda la sociedad;

IV. Para turistas y visitantes: Programas destinados a facilitar el acceso de los ciudadanos y extranjeros a los bienes del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, por medio de recorridos guiados preparados para diferentes niveles de interés y especialización, con la información escrita, gráfica y electrónica conveniente según el caso; La Secretaría de Turismo del Distrito Federal deberá de incluir el capítulo correspondiente en los Programas de Desarrollo Turístico del Distrito Federal;

V. Para guías de turistas: Programas destinados a preparar a los guías que darán sus servicios en los monumentos, espacios abiertos monumentales y zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico. Estos programas estarán disponibles en el Instituto de Cultura para los estudiantes de escuelas y Universidades en que se cursen las carreras de turismo, arquitectura e historia del arte.

Para especialistas: Programas de difusión de los avances científicos y tecnológicos en las diversas disciplinas relacionadas con la conservación, a través de publicaciones y la realización de Congresos y ferias.

Artículo 121. Para la realización de los Programas de Puesta en Valor mencionados en la fracción I del Artículo anterior, el Instituto de Cultura:

I. Estimulará las expresiones culturales relacionadas con el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, especialmente a través de las bellas artes y la artesanía;

II. Fomentará la edición e impresión de libros, revistas, folletos y posters; videos, discos ópticos interactivos, programas de televisión y radio;

III. Organizará campañas específicas con el sector educativo, las Juntas de Salvaguarda y las Casas de Cultura de todas las Demarcaciones Políticas; y

IV. Promoverá la organización de festivales, ferias, exposiciones, conferencias y similares.

Artículo 122. Para llevar a cabo los programas mencionados en la fracción IV del artículo 124, en el caso de monumentos y espacios abiertos monumentales del dominio privado, en el reglamento de la Ley se fijarán las bases para su visita pública, en días y horas previamente señalados.

En el caso de monumentos y espacios abiertos monumentales del dominio público, el órgano correspondiente podrá fijar cuotas de acceso y los precios de los servicios de guías de turistas que en ellos se presten. Los recursos que se recauden, se aplicarán primordialmente al cuidado y conservación de los mismos.

Artículo 123. El Instituto de Cultura fomentará los trabajos, las investigaciones y los estudios sistemáticos sobre:

I. Los aspectos de funcionamiento urbano en las Zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico y en su zona de protección;

II. Las interconexiones entre salvaguarda, urbanismo y planificación del territorio;

III. Los métodos de conservación aplicables a los bienes afectos al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico;

IV. La alteración de los materiales de construcción;

V. La aplicación de las técnicas modernas al trabajo de conservación;

VI. Las técnicas artesanales indispensables para la conservación.

Artículo 124. El Instituto de Cultura promoverá cursos sobre técnicas especializadas en el conocimiento de los métodos y sistemas constructivos artesanales utilizados a lo largo de la historia en la edificación. Esto con la finalidad de tener personal preparado para intervenir los monumentos y espacios abiertos monumentales del Distrito Federal.

Artículo 125. La reproducción gráfica o artesanal de monumentos y espacios abiertos monumentales, se llevará a cabo, bajo la responsabilidad del reproductor.

**TÍTULO SÉPTIMO
DEL FOMENTO Y ESTÍMULOS
PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO
URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO
DEL DISTRITO FEDERAL.**

CAPÍTULO UNICO.

Artículo 126. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con la Ley de Ingresos del Distrito Federal de cada año, emitirá acuerdos de facilidades administrativas y estímulos fiscales, para la conservación de los inmuebles declarados Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

**TÍTULO OCTAVO
DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES.**

CAPÍTULO UNICO.

Artículo 127. Las sanciones que se establecen en el presente Título, serán impuestas por la autoridad administrativa, de acuerdo a las facultades que para tal efecto determine el reglamento.

Artículo 128. Sin perjuicio de que se generen otro tipo de responsabilidades por las conductas descritas, se hará acreedor a una multa de hasta trescientos días de salario mínimo vigente quien incurra en las siguientes conductas:

I. Destruya o deteriore intencionalmente o por negligencia un bien del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico;

II. Realice cualquier tipo de obra en un monumento o espacio abierto monumental, sin sujetarse a la autorización respectiva;

III. Impida la inspección de un monumento o espacio abierto monumental sin causa justificada;

IV. Altere o modifique las autorizaciones y licencias expedidas por la autoridad de la materia;

V. No se sujete a las disposiciones específicas de salvaguarda que la autoridad dicte para un bien concreto;

VI. Fije, sin permiso de la autoridad, publicidad o señalización en monumento o espacio abierto monumental;

VII. Establezca cualquier giro mercantil en un monumento o espacio abierto monumental, sin las autorizaciones que señalan las Leyes;

VIII. Ignore los avisos para la realización de obras de restauración con carácter de urgentes.

En todo caso, el infractor deberá reparar el daño causado al monumento o espacio abierto monumental. Cuando el daño sea de imposible reparación, según lo determinen al menos dos especialistas en la materia, el infractor podrá ser obligado a solventar, en todo o en parte, los gastos correspondientes a la salvaguarda de otro bien del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico.

Artículo 129. Cuando el infractor sea un director responsable de obra de conservación o un perito en la materia debidamente registrado, podrá ser inhabilitado como tal en forma temporal o definitiva.

Artículo 130. Los funcionarios públicos que valiéndose de su cargo se benefician indebidamente de un bien adscrito al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, además de las sanciones que impone el presente Título, quedarán sujetos a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor a los noventa días siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Segundo. El Registro Público del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal a que se refiere el artículo 35 y el Centro de Información del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico establecido en el artículo 36, empezarán a operar conforme lo permitan las disposiciones presupuestales.

Tercero. Las disposiciones reglamentarias de la presente Ley deberán expedirse dentro de los ciento ochenta días contados a partir de su entrada en vigor.

Cuarto. El Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal a que se refiere el artículo 26 de esta Ley, se integrará a más tardar a los 30 días siguientes a la entrada en vigor del Reglamento.

Quinto. Se abrogan todas las disposiciones del Distrito Federal que se opongan al presente ordenamiento.

Por la Comisión de Fomento Cultural, firman: Diputado Miguel Bortolini Castillo; diputada Margarita Saldaña

Hernández; diputado Francisco Ortiz Ayala; diputado Eliab Mendoza Gallegos; diputado Ignacio Ruiz López; diputado Miguel Angel Peláez Gerardo.

LA C. PRESIDENTA.- Para fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Galván Muñoz.

EL C. DIPUTADO JESUS GALVAN MUÑOZ.- Con su permiso, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, señor diputado.

EL C. DIPUTADO JESUS GALVAN MUÑOZ.- Para fundamentar el dictamen que hoy se presenta a discusión, me permito comentar muy sucintamente algunas de las ideas que fueron presentadas en la exposición de motivos de la iniciativa que hoy se presenta a su consideración.

En este tenor, comienzo afirmando que el reflejo más claro del alma de los pueblos son precisamente sus ciudades, con su traza, infraestructura, edificios, monumentos, plazas, parques y jardines, donde el hombre plasma fielmente su saber científico, tecnológico y su identidad sociocultural, proyectando además su actitud frente al pasado y al porvenir.

Cabe aseverar también que las ciudades moldean el alma de los hombres que en ellas viven, irradiando su visión de sí mismos y del mundo. Si es cierto, como lo es, el azar como factor en la edificación, mantenimiento y desarrollo de las ciudades, no debe jugar un papel preponderante, de lo contrario su influencia sería devastadora para la memoria urbana colectiva, para el orden y para la libertad.

La ignorancia, el vandalismo, la especulación inmobiliaria y la barbarie, han ocasionado la degradación de nuestra Ciudad de los Palacios.

En la antigüedad, y aún en nuestros días, la arquitectura representa resguardo contra la intemperie, seguridad, comodidad, intimidad, belleza, solaz, en fin, dentro de las formas materiales que nos rodean se significan muchos de los elementos esenciales de nuestra crónica personal.

Por esta razón, la presente iniciativa tiene como principal objetivo lograr que exista una política pública de carácter local, de salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico, imponiendo responsabilidades para su defensa y protección.

En la actualidad, las legislaciones de vanguardia y los tratados internacionales sobre la materia de los que México forma parte, consideran al patrimonio arquitectónico como un elemento fundamental del devenir histórico.

Por ende, la nueva ley no podía circunscribirse a las tareas de conservación y restauración, sino que también establece las bases para difundir, acrecentar y aprovechar este legado.

El Título I del proyecto, comienza por presentar el patrimonio urbanístico arquitectónico, como objeto de la ley, definido indirectamente como un conjunto de expresiones tangibles de la arquitectura y urbanismo del Distrito Federal, que refleja rasgos de la forma de vida, pensamiento, sentimiento y relación con el medio natural de los hombres que las crearon, otorgándoles un valor que las hace meritorias de ser legadas a las generaciones futuras.

Asimismo, se describen las acciones que comprende el proceso de salvaguarda, necesario para garantizar su permanencia para la posteridad; se definen los términos para comprender este proceso y se exponen los principios, según los cuales debe llevarse a cabo.

En el Título II, se establece la conformación del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal y se definen los criterios de su clasificación, para efectos de poder salvaguardar en una forma clara y ordenada, elementos aislados o conjuntos de ellos, diferenciados entre sí, según sus características y origen.

Reviste una especial importancia el capítulo correspondiente a los espacios abiertos monumentales y los monumentos urbanísticos, mismos que no cuentan actualmente con ninguna protección legal como tales, y que tienen un gran valor no sólo histórico, sino sociocultural; se trata de rescatar la antigua tradición prehispánica de apreciar la calidad de vida a cielo abierto en los asentamientos humanos. Estos preceptos se incluyen en la conceptualización de las zonas de patrimonio urbanístico arquitectónico.

En el Título III se propone la creación de un Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico para todo el Distrito Federal y de una Junta de Salvaguarda para cada delegación, así como la posibilidad de celebrar convenios y acuerdos de coordinación con la Federación y municipios, con el fin de apoyar los diversos programas de salvaguarda, señalando de igual manera a las autoridades competentes para la aplicación de la ley, que pueden coordinarse con la ciudadanía para lograr, mediante un esfuerzo conjunto, la salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico.

Dentro del Título IV se contempla la instauración de una sección especial del Registro Público de la Propiedad, en la cual se deberán inscribir las declaraciones de zonas, espacios abiertos monumentales y monumentos y, en general, todos los actos jurídicos que sobre ellos se realicen.

De acuerdo a las tendencias internacionales en la materia, se propone la creación de un centro de información del patrimonio urbanístico arquitectónico del Distrito Federal, que dependerá administrativamente del Instituto de Cultura. En este centro se instrumentará una base de datos disponible para consulta pública, con información ordenada y

actualizada; se describe a detalle el proceso para realizar las declaratorias de bienes inmuebles y espacios abiertos, para que puedan quedar debidamente adscritos al patrimonio urbanístico arquitectónico; de igual manera se pormenorizan las consecuencias que esto conlleva para sus propietarios, poseedores y responsables.

Para conseguir el objeto de esta ley resulta indispensable prever una planeación ordenada, por ello en el Título V se regulan los principios básicos que deberán ser observados en todo proyecto de obras e intervención de los bienes adscritos al patrimonio.

Siguiendo la misma secuencia lógica, se definen los diversos programas de salvaguarda que se deberán instrumentar, con la información que deberán contener, el proceso de hacerlos vigentes y los objetivos que se persiguen, según el territorio que abarquen.

Posteriormente, dentro del Título VI, se establece que el Instituto de Cultura será el responsable de la puesta en valor de conjunto de los bienes que integran el patrimonio. El Título VII señala los estímulos económicos destinados a favorecer la salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico del Distrito Federal y, por último, el Título VIII se refiere a las sanciones que serán aplicadas a quienes contravengan esta ley.

Por lo anteriormente expuesto, apelando a la necesidad de conservar parte de la historia que nos identifica como mexicanos, recogiendo los lineamientos generales, vanguardistas contenidos en los tratados internacionales y respetando escrupulosamente los principios rectores de la histórica tradición mexicana en materia de planeación, restauración y salvaguarda del patrimonio urbanístico, arquitectónico, solicito pues, estimadas diputadas y estimados diputados, el apoyo de su voto para aprobar el presente dictamen, que aprueba la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Finalmente, quiero agradecer públicamente a todos los diputados y a todos los señores asesores que apoyaron esta iniciativa y que la enriquecieron con un sinnúmero de aportaciones.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión el dictamen en lo general. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra?

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

Antes de proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general, se pregunta a los ciudadanos diputados si habrán de reservarse algún artículo para ser discutido en lo particular.

Diputada Margarita Saldaña.

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ (Desde su curul).- Sí, señora Presidenta.

Quiero reservar los artículos 1, 9, 12 fracción II y VI, 15 fracción II, 17 fracción IV, VI y X, 27, 30, 63, 122 y 128.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, proceda la secretaría a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados.

LA C. DIPUTADA VERONICA DOLORES MORENO RAMIREZ (Desde su curul).- Señora Presidenta, quisiera reservar algunos artículos.

El artículo 12, fracción III y fracción IV; el artículo 15, fracción II, inciso a), por favor.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señora diputada.

En consecuencia, proceda la secretaría a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados en lo particular.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados en lo particular.

Se solicita a los ciudadanos diputados, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda:

(Votación nominal)

Islas León, en pro.

Hiroishi Suzuki, en pro.

Arne Aus Den Ruthen, en pro.

Hernández Labastida Miguel, en pro.

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Manuel Minjares, en pro.

Margarita Saldaña, en pro.
Manuel Aguilera, en pro.
Levin Coppel, en pro.
Rivera Domínguez, en pro.
Luna Parra, a favor.
Alejandro Vázquez, en pro.
Octavio West, a favor.
Ortiz Haro, a favor.
Jesús Toledano, a favor.
Martínez Parra, a favor.
Cárdenas Pérez, en pro.
Ricardo Martínez, en pro.
Alfredo Hernández, a favor.
Ricardo Molina, a favor.
Ernesto Chávez, a favor.
José Luis Benitez, en pro.
Esveida Bravo, a favor.
Castellanos Cortés, a favor.
René Arce, a favor.
Angeles Correa, a favor.
Batres, a favor.
Francisco Ortiz, a favor.
David Sánchez, a favor.
Ignacio Ruiz, a favor.
Miguel Bortolini, a favor.
Márquez Franco, en pro.
Eliab Mendoza, a favor.
Hipólito Bravo, en pro.

Daniel Martínez, a favor.

Pichardo Mendoza, en el mismo sentido del diputado Galván, aunque en las reservas se haga otro dictamen.

José Narro Céspedes, a favor.

Alejandro Rojas, a favor.

Miguel Angel Peláez, a favor.

García Rocha, a favor.

Vicente Cuéllar, a favor.

Roberto Rico, a favor en lo general.

Guillermo Hernández, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Sevilla Díaz, en pro.

Javier Serna, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Jesús Galván, en pro.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la mesa directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente:

54 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones. Cumplida su instrucción.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Fomento Cultural con proyecto de decreto de Ley de Salvaguarda del

Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, en lo general y los artículos no reservados en lo particular.

Para su discusión en lo particular han sido reservados los siguientes artículos: Artículo 1º, artículo 9, artículo 12, fracción II; artículo 12, fracción VI; artículo 15, fracción II; artículo 17, fracción IV; artículo 17, fracción VI; artículo 17, fracción X; artículo 27, artículo 30, artículo 63, artículo 122, artículo 128; y artículo 12, fracciones III y IV; artículo 15, fracción II, inciso a).

En consecuencia y para referirse a los artículos reservados, se concede el uso de la palabra a la diputada Margarita Saldaña.

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ.- Con su permiso, señora Presidenta.

Quiero comentar los siguientes artículos, voy a ir mencionando cada una de las propuestas que estamos haciendo para la modificación de la Ley de Salvaguarda.

En el artículo 1 estamos proponiendo adicionar un segundo párrafo que diga: "Los bienes de la federación a que se refiere el artículo 96 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal no están sujetos a la ley y se regirán por lo dispuesto por las normas jurídicas federales que resulten aplicables".

Al artículo 9 proponemos suprimir la frase tercera por ser propiedad de un organismo público federal descentralizado.

Al artículo 12, fracción II estamos proponiendo suprimir "el Campus de la Ciudad Universitaria".

En el artículo 12, fracción VI estamos proponiendo suprimir "la especificación de las plazas" y decir "plazas: las que se declaren conforme a las disposiciones de esta ley, exceptuando las de jurisdicción federal".

Para el artículo 15, fracción II, inciso a) sugerimos suprimir "la especificación de las esculturas ornamentales o conmemorativas" y dice "esculturas ornamentales y conmemorativas y las que sean objeto de declaratoria de acuerdo a las disposiciones de esta ley, exceptuando las de propiedad federal, conforme a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas".

Al artículo 17, fracción IV proponemos que diga: "De educación, recreación y cultura, exceptuando los de jurisdicción federal, colegios, escuelas", que continúe el artículo como está en este momento.

En el artículo 17, fracción VI proponemos suprimir "de correo, telégrafo".

Al artículo 17, fracción X pedimos que se suprima completa y adecuar el orden de las fracciones.

Al artículo 27 proponemos que diga: "El carácter de miembro del Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal a que se refiere la fracción VII del artículo 26 de esta ley será otorgado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y aprobado, en su caso, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal".

Al artículo 30 estamos proponiendo que diga: "De conformidad con el artículo 67, fracción XXVIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá declarar la expropiación de un bien inmueble en los términos de las causas de utilidad pública que dispongan las leyes".

Al artículo 63 proponemos que debe decir en su fracción II: "Sólo podrá ser restaurado previa autorización del Jefe de Gobierno del Distrito Federal o de la autoridad que éste faculte, previa opinión del Consejo de Salvaguarda".

En el artículo 122 proponemos que debe decir: "Para llevar a cabo los programas mencionados en la fracción IV del artículo 120 en caso de monumentos y espacios abiertos monumentales del dominio privado. En el reglamento de la ley se fijarán las bases para su visita pública en días y horas previamente señalados".

Finalmente, al artículo 128 a la fracción V proponemos que diga de la siguiente forma: "No se sujete a las disposiciones específicas de salvaguarda que la autoridad dicte para un bien concreto, salvo el caso contemplado en el segundo párrafo del artículo 66 de esta ley"

Estas propuestas que estamos haciendo creemos que vienen a mejorar la ley que se nos ha propuesto de la salvaguarda.

Señora Presidenta, le quiero hacer entrega de las mismas.

También quiero mencionar que parte de estas propuestas fueron hechas por el diputado Eduardo Escobedo del Partido Revolucionario Institucional.

Gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Están a discusión las propuestas de modificación a los artículos reservados por la diputada Margarita Saldaña. Se abre el registro de oradores.

¿Oradores en contra?

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos que fueron reservados por la diputada Margarita Saldaña.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos reservados por la diputada Margarita Saldaña.

Se solicita a los ciudadanos diputados en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Margarita Saldaña, en pro de las propuestas hechas.

Hernández Labastida Miguel, en pro.

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Levín Coppel, a favor.

Rivera Domínguez, igual que el diputado Oscar Levín.

Alejandro Vázquez, en el mismo sentido que el diputado Levín.

Ortiz Haro, a favor.

De Garay, a favor.

Luna Parra, a favor.

Jesús Toledano, a favor.

Cárdenas Pérez, en pro.

Ricardo Martínez, a favor.

Francisco Chiguil, en pro.

Roberto Rico, en pro.

Ernesto Chávez, a favor.

Miguel Angel Peláez, a favor.

José Luis Benítez, en pro.

Esveida Bravo, a favor.

Castellanos Cortés, a favor.

Martínez Parra, a favor.

García Rocha, a favor.

Márquez Franco, en pro.

René Arce, a favor.

Alfredo Hernández, a favor.

Francisco Ortiz, a favor.

David Sánchez, a favor.

Virginia Jaramillo Flores, en pro.

Eliab Mendoza, a favor.

Hipólito Bravo, en el mismo sentido que la diputada Jaramillo.

Juan González, a favor.

Martínez Enríquez, a favor.

Pichardo Mendoza, a favor.

Vicente Cuéllar, a favor.

Alejandro Rojas, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

Ricardo Molina, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Rodríguez Ruiz, en pro.

Soto Camacho, a favor.

Javier Serna, en pro.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Narro Céspedes José, a favor.

Batres, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Si falté yo: Angeles Correa, a favor.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 47 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- Por lo tanto, se aprueba la propuesta de modificación a los artículos reservados por la diputada Margarita Saldaña.

En consecuencia y para referirse a los artículos 12 fracción III y IV; artículo 15 fracción II inciso a), se concede el uso de la palabra a la diputada Verónica Moreno Ramírez.

LA C. DIPUTADA VERONICA DOLORES MORENO RAMIREZ.- Con su permiso señora Presidenta.

Quiero hacer algunas inclusiones a la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico del Distrito Federal, que era necesario para rescatar específicamente los espacios culturales tradicionales y el mobiliario que corresponde a la tradición de nuestra ciudad.

En ese sentido en el artículo 12 fracción III, solicito se incluya en la parte final "pueblo de Atzacolco, pueblo antiguo". En el mismo artículo 12 fracción IV en lo que es "parques urbanos", solicito se incluya "María del Carmen Industrial, Parque Nacional del Tepeyac, Parque Nacional Cerro de la Estrella y Parque de los Cocodrilos" y retiraría el artículo 15 fracción II; solamente quiero para las versiones estenográficas, que pudiese quedar en virtud que acaba de darse una votación fundamental que era importante señalar los ornamentos que existen en esta ciudad y que a veces se encuentran abandonados, como es el caso de la Cruz Atrial de Santiago Apóstol del pueblo de Atzacolco que data del siglo XVI, es una de las cruces que llegaron a América, es la única que tenemos en México y está completamente abandonada y deteriorada. Tendremos que hacer un llamado al gobierno específicamente para que se restaure y se recupere este espacio.

El Acueducto de Guadalupe, que ese es parte de los espacios correspondientes que se tendrán que recuperar; la fuente del parque María Luisa, en la Cabeza de Juárez; Arcos de San Francisco Tlaltenco.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Esta a discusión las propuestas de modificación a los artículos reservados por la diputada Verónica Moreno. Se abre el registro de oradores. Oradores en contra.

¿Algún ciudadano diputado, desea razonar su voto?

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos que fueron reservados por la diputada Verónica Moreno Ramírez.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos reservados por la diputada Verónica Moreno Ramírez.

Se solicita a los ciudadanos diputados en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Manuel Minjares, en pro.

Margarita Saldaña, en pro.

Jesús Galván, en pro.

Hernández Labastida Miguel, en pro.

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Manuel Aguilera, en pro.

Levin Coppel, en pro.

Rivera Domínguez, en pro.

Alejandro Vázquez, en pro.

Ortiz Haro, a favor.

Luna Parra, a favor.

Jesús Toledano, en pro.

Cárdenas Pérez, en pro.
Ricardo Martínez, en pro.
Francisco Chiguil, en pro.
Ernesto Chávez, a favor.
Miguel Angel Peláez, a favor.
José Luis Benitez, en pro.
Esveida Bravo, en pro.
Castellanos Cortés, a favor.
Hiroishi Suzuki, en pro.
Armando Salinas Torre, en pro.
Márquez Franco, en pro.
De Garay, a favor.
Arce, a favor.
Alfredo Hernández, a favor.
David Sánchez, a favor.
Virginia Jaramillo, en pro.
Eliab Mendoza, a favor.
Hipólito Bravo, en el mismo sentido que Eliab Mendoza.
Juan González, a favor.
Martínez Enríquez, a favor.
Pichardo Mendoza, a favor.
Rodríguez Ruiz, en pro.
Narro Céspedes José, a favor.
Angeles Correa, a favor.
Roberto Rico, a favor.
Ricardo Molina, a favor.
Francisco Ortiz, a favor.
Martínez Parra, a favor.

Vicente Cuéllar, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Octavio West, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Javier Serna, en pro.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva:

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 51 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- Por lo tanto se aprueba la propuesta de modificación al artículo 12, fracción III y IV, reservado por la diputada Verónica Moreno.

En consecuencia, se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Fomento Cultural con proyecto de decreto de Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, en lo general y en lo particular, con las propuestas aprobadas.

Remítase a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal para los efectos constitucionales conducentes.

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal, para el año 2000.

Esta Presidencia informa que ha recibido un oficio de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública solicitando se les dispense el trámite a que se refiere al artículo 38, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal. Sírvase la secretaría dar lectura a la solicitud de referencia.

LA C. SECRETARIA.- Diputado René Baldomero Rodríguez Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presente.
Estimado diputado:

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública solicitamos al pleno, a través de usted, la dispensa de lo establecido en el primer párrafo del artículo 38, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se incorpore para su análisis, discusión y en su caso aprobación en el orden del día del 30 de diciembre el dictamen de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones al Código Financiero del Distrito Federal.

Atentamente, por la Comisión de Hacienda, diputado Francisco Chiguil Figueroa, Presidente; diputado Miguel Ángel Peláez Gerardo, Vicepresidente; diputado Miguel Bortolini Castillo, Secretario.

Cumplida su instrucción, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, proceda la secretaría a preguntar al pleno de la Asamblea, en votación económica, si se dispensa al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública el trámite a que se refiere al artículo 38, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta al pleno si se dispensa el trámite a que se refiere al artículo 38, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al dictamen de referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Se dispensa el trámite.

LA C. PRESIDENTA.- Consulte la secretaría, en votación económica, si se dispensa la lectura del mismo y se somete a discusión de inmediato.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura y se somete a discusión de inmediato.

Los que estén porque se dispense la lectura, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Dispensada la lectura, señora Presidenta.

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública se turnó para su estudio y dictamen la INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, enviada a esta Asamblea Legislativa por la Jefa de Gobierno del Distrito Federal.

Con fundamento en los artículos 122, Apartado C, Base Primera, Fracción V, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracciones II y IX, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracciones I y III, 11, 48, 84, fracción II, y 85 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 18, 19, 22, 23, 61, 66, fracción II y 67 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, estas Comisiones Unidas someten a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal fue presentada a esta Soberanía por la Jefa de Gobierno el 30 de noviembre de 1999, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II, inciso c, de la Base Segunda, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 67 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

II. La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen correspondientes a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, el día 2 de diciembre de 1999.

III. Estas Comisiones procedieron al análisis del paquete financiero y en especial de la iniciativa referida, así como de la información obtenida en la comparecencia del Secretario de Finanzas del Distrito Federal, y las reuniones con el Tesorero del Distrito Federal, el Subsecretario de Egresos y el Procurador Fiscal del Distrito Federal, que acudieron a esta Asamblea a explicar el alcance y contenido normativo de las propuestas de reformas contenidas en la iniciativa.

IV. Estas Comisiones Unidas con los antecedentes, argumentos, opiniones y propuestas de sus integrantes

elaboraron el presente Dictamen, el cual se somete a la consideración de esta Honorable Legislatura, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La iniciativa de la Jefa de Gobierno en análisis tiene como objetivo fundamental dar plena vigencia al mandato previsto en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal, pues estas Comisiones que dictaminan aprecian la propuesta de incorporar al Código Financiero del Distrito Federal disposiciones de alto contenido social para que sea proporcional y equitativa la contribución que los habitantes de esta Ciudad hagan a la hacienda pública.

SEGUNDA.- Las Comisiones que dictaminan estiman que la propuesta es acorde a los principios del derecho fiscal, por ello consideran procedente la incorporación en el Código Financiero del Distrito Federal de los beneficios que se otorgaban vía subsidios para pensionados, jubilados, viudas y huérfanos, personas de la tercera edad sin ingresos fijos y escasos recursos, discapacitados, para sectores de la población en condiciones de rezago social y de extrema pobreza; se consideran también a las mujeres abandonadas, madres solteras sin ingresos fijos y de escasos recursos, así como el apoyo a programas de mejoramiento de condiciones ambientales, programas para el desarrollo familiar, cultura y del deporte, y a programas especiales.

Por esa razón, las Comisiones Dictaminadoras aprecian la propuesta de ayuda para viviendas de interés social y popular, por lo que los apoyos para esta clase de viviendas se incluyen en el Código Financiero del Distrito Federal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional, que ordena que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, y que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios, para alcanzar tal objetivo y recoge los conceptos de vivienda de interés social y de interés popular contemplados en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Al respecto, estas Comisiones estiman que la propuesta contiene un error de referencia que es necesario subsanar, ya que al establecer el porcentaje de reducción para las viviendas de interés social y popular en 80% y 100% respectivamente, a que se refiere el artículo 265 V, se está favoreciendo más a las que se ubican en un rango de mayor valor, debiendo otorgarse dichas reducciones en sentido inverso, es decir, 100% para la vivienda de interés social y 80% para la de interés popular.

Sobre el tema de reducciones, es conveniente complementar la propuesta de la Jefa de Gobierno contenida en el artículo 265 Y, con objeto de especificar

que la reducción a que tengan derecho los contribuyentes será aplicable tanto a las contribuciones como a los accesorios de las mismas, en atención al principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, con lo que se dará seguridad jurídica a los contribuyentes. Al mismo tiempo, se considera necesario modificar la redacción a fin de ampliar el ejercicio de este derecho por parte de los contribuyentes y obtener sus beneficios, incluso en el caso de que las contribuciones ya hayan sido cubiertas.

Por otra parte, también se estima adecuado incorporar al citado Código el contenido de los subsidios para monumentos históricos y artísticos, nuevos desarrollos inmobiliarios en el Centro Histórico de la Ciudad de México, perímetros A y B, a favor de empresas de nueva creación que creen empleos productivos y de empresas recicladoras.

TERCERA.- En opinión de estas Dictaminadoras no procede la propuesta contenida en la iniciativa tendiente a establecer en este Código el valor que debe constituir el patrimonio familiar, ya que corresponde señalar éste en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal.

Estas Comisiones estiman procedente recoger los beneficios que año con año se han otorgado a las Instituciones de Asistencia Privada e integrarlos al Código Financiero del Distrito Federal, de tal manera que se logre más eficacia y rapidez en la ayuda que se otorga a dichas Instituciones dedicadas a cumplir con la protección y amparo a la indigencia, a la labor de auxilio al prójimo, a procurar consuelo y bienestar a los necesitados de ayuda, a quienes no pueden valerse por sí mismos o no han sido favorecidos por la fortuna o han sido víctimas de la desgracia. Con lo anterior, se evita que las ayudas de carácter social queden sujetas a los vaivenes o decisiones del titular en turno de la Jefatura de Gobierno.

Además, se da cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 27, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce que las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria.

Dichos cambios hacen realidad lo establecido en el artículo 4º de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, que ordena que las instituciones en cuestión se consideran de utilidad pública y gozarán de las exenciones, estímulos, subsidios y facilidades administrativas que les confieran las leyes.

CUARTA. Se estiman adecuados los ajustes propuestos para contar con un sistema tributario más flexible y realista, que no entorpezca la acción del Gobierno y que permita al contribuyente cumplir con sus obligaciones impositivas, por lo que se considera necesario que se otorguen las facilidades y simplificaciones administrativas que a continuación se detallan:

- Se da mayor alcance a la figura jurídica de la afirmativa ficta, cuando las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales no sean resueltas por la autoridad en un plazo no mayor de cuatro meses, con la salvedad de que la misma no se configurará si la petición se presenta ante la autoridad incompetente, o si no se reúnen los requisitos previstos por la normatividad.

- Por lo que hace al pago de contribuciones se prorroga el plazo para el día siguiente hábil cuando el último día sea viernes, y con el objeto de proporcionar mayores facilidades a los contribuyentes, resulta conveniente precisar que se autorizan como medios de pago las tarjetas no bancarias así como las tarjetas de débito y los cheques a la cuenta personal del contribuyente.

- Se otorga el beneficio de la reducción por pronto pago en el Código y no así en la Ley de Ingresos, con lo que se estima que se incentivará el pago anticipado del impuesto predial.

- Como un beneficio adicional, estas Comisiones consideran adecuado que la Secretaría de Finanzas reduzca el monto de los créditos fiscales, en forma individual, y a petición por escrito de los contribuyentes cuando:

· El adeudo fiscal sea exorbitante, ruinoso o confiscatorio.

· El crédito fiscal derive por causas no imputables al contribuyente.

· El contribuyente realice actividades de beneficio social.

· Se haya presentado dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales.

· El crédito fiscal se haya incrementado por muerte del sujeto pasivo o por errores o dilación de la autoridad.

· Se regularice la propiedad inmobiliaria.

No obstante, se consideró necesario modificar la redacción de la propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, a fin de que esta disposición sea obligatoria para los casos previstos y no una facultad discrecional.

- En relación con la visita domiciliaria o revisión de gabinete, los visitadores en primer lugar revisarán y, en su caso, determinarán las contribuciones omitidas en el último ejercicio fiscal de doce meses en que el contribuyente debió haber pagado las contribuciones y presentado las declaraciones correspondientes. Sólo para el caso de que se encuentren irregularidades se procederá a comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales vinculadas a años anteriores.

- Se establece un plazo que no excederá de 6 días hábiles, para que la autoridad ponga los bienes autorizados a disposición del adquirente, lo que redundará en una mayor seguridad jurídica en beneficio de este último.

- Se considera inconveniente por estas Dictaminadoras la ampliación del plazo que actualmente se establece para realizar la devolución de cantidades pagadas indebidamente, dado que las autoridades deben eficientar su actuación y no procede incrementar términos o plazos en beneficio exclusivo de éstas.

- La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales, podrá acreditarse con la constancia de inscripción en el registro de representantes legales, que en su caso lleven las autoridades fiscales.

- Se elimina la limitante relativa a que la compensación proceda, tratándose del Impuesto Predial y Derechos por el Suministro de Agua, sólo en los casos que se refieran al mismo inmueble y a la misma toma. No obstante, se considera necesario modificar la propuesta de la Jefa de Gobierno a efecto de que la compensación siga siendo una opción que pueda o no ejercitar el contribuyente y que no debe sujetarse a la autorización de la autoridad.

- Se especifica como forma de garantía, además de la fianza, el depósito de dinero, sustituyendo de la propuesta el término "y" por "o" para mayor precisión, de tal manera que se entienda que se puede garantizar con una u otra forma.

QUINTA. Estas Comisiones Unidas estiman la importancia de suprimir normas que ahoguen, asfixien o agobien al sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, que lo tengan en constante zozobra ante la demasiada rigidez o severidad de las leyes fiscales, que en lugar de brindarle seguridad jurídica, lo ubican en un régimen de incertidumbre legal y a merced de los agentes fiscales. Por lo que esta Asamblea en su afán de remover todos los obstáculos jurídicos que se oponen al engrandecimiento, prosperidad y tranquilidad de los habitantes de esta gran Ciudad, estima procedente que

se establezcan disposiciones que limitan la acción agobiante del fisco.

De esta manera, para impedir posibles abusos de parte de los agentes fiscales, se recoge en la ley la práctica de entregarle al visitado la carta de derechos y deberes del contribuyente, conjuntamente con la orden de visita.

Por seguridad jurídica del visitado, estas Legisladoras estiman conveniente eliminar la discrecionalidad en el ejercicio de la facultad de la autoridad fiscal para concluir las visitas domiciliarias, cuando se presente el aviso para dictaminar. Igualmente, reducir el término de 8 a 6 meses para que la autoridad pueda realizar una visita domiciliaria, y sólo para el caso de que se complique ésta, puede gozar de otro periodo de 6 meses. En este último caso se consideró apropiado adicionar a la Iniciativa de la Jefa de Gobierno la mención "sin dar el aviso correspondiente" al supuesto de que el contribuyente cambie de domicilio, dado que si da el aviso correspondiente no tiene por qué ampliarse el plazo de la auditoría legal.

En materia de las revisiones de escritorio o de gabinete, es adecuada la propuesta de precisar que los hechos u omisiones consignados en las actas u oficio de observaciones deban servir como motivación de la resolución que determine el crédito fiscal a cargo del contribuyente. De igual forma, es de aprobarse el establecimiento de un plazo a partir de la notificación del oficio de observaciones para que el contribuyente desvirtúe los hechos u omisiones observados, mismo que en opinión de estas Dictaminadoras debe establecerse en 20 días y no en 15 como se establece en la propuesta.

Es de considerarse, asimismo, la adición contenida en la Iniciativa en comentario, a efecto de que para brindar una mayor certeza jurídica al contribuyente visitado al que no se le encontró irregularidad alguna en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sea obligatorio para la autoridad fiscal comunicar por escrito a éste de esa situación. Al mismo tiempo, las Comisiones Unidas determinaron precisar aún más esta obligación, estableciendo el término de 5 días hábiles para que la autoridad cumpla con esta disposición, una vez que no conozca la comisión de alguna irregularidad.

En cuanto al dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales, sólo los propietarios de inmuebles de uso diferente al habitacional estarán obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y se incrementa en un 100% el valor catastral de los inmuebles sujetos a dictamen.

Estas Dictaminadoras consideran apropiado que se determinen como contribuciones sujetas a dictamen, sólo las relativas al impuesto predial, derechos por el suministro de agua, impuesto sobre nóminas e impuesto

por la prestación de servicios de hospedaje, así como establecer un plazo de 6 meses para la revisión del dictamen.

En cuanto a las molestias a los contribuyentes por la realización de visitas domiciliarias o de gabinete en forma repetitiva, se estima procedente lo señalado en el artículo 71-A de la iniciativa. Sin embargo, estas Comisiones consideran que debe precisarse con mayor claridad el límite en el ejercicio de las facultades de comprobación, a fin de que las autoridades fiscales no puedan realizar más de 2 visitas domiciliarias o de gabinete en el mismo ejercicio fiscal, respecto de los mismos conceptos y contribuyente, situación que es conveniente corregir en la redacción de dicho artículo, ya que se menciona que las autoridades fiscales no podrán realizar tres o más visitas, debiendo precisarse que no podrán ser más de dos.

Es procedente la propuesta de que cuando de la revisión de las actas de visita se observe que el procedimiento de fiscalización no se ajustó a las normas aplicables, la autoridad fiscal sólo podrá reponer éste por una sola vez, con lo que se brinda mayor certeza jurídica al contribuyente, si bien se consideró apropiado reubicar la adición al artículo 86 como añadido del 83, donde corresponde por tratarse ahí las reglas para llevar a cabo la visita domiciliaria.

Con el objeto de otorgar una facilidad administrativa a los contribuyentes a quienes se haya iniciado una visita domiciliaria por parte de la autoridad fiscal, es procedente señalar como derecho de los mismos el autocorregir su situación fiscal. Estas Comisiones consideraron necesario modificar la propuesta enviada por la Jefa de Gobierno para que no haya limitante alguna en el ejercicio de este derecho de los contribuyentes.

SEXTA.- Respecto a las adecuaciones en materia de contribuciones, en opinión de estas Comisiones Unidas son procedentes las modificaciones propuestas, en virtud de que no se incrementan las contribuciones, sino que sólo se actualizan, con lo que se da cumplimiento a lo ordenado por el artículo 31 del Código Financiero del Distrito Federal.

Es procedente, por lo tanto, precisar qué elementos no forman parte de la base gravable en el caso del impuesto sobre nóminas, pues con ello se dará mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y a la vez evitará el temor y zozobra que infunden las leyes fiscales, al permitir a los particulares el goce de los productos de su trabajo. En relación a esto, estas Comisiones consideran necesario corregir las referencias de "Prestaciones" al Sistema de Ahorro para el Retiro por la de "Aportaciones" y la de "Gastos por pago de marcha funeral" por la de "Gastos funerarios".

En el mismo sentido, y para el caso del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, estas Dictaminadoras consideran conveniente incluir los hostales como parte de los servicios considerados como de hospedaje, en atención a lo establecido en la Ley de Turismo vigente.

En cuanto a la actualización de los créditos fiscales, estas Comisiones Unidas estiman acertada la propuesta contenida en la iniciativa en estudio al tomar en consideración que el importe histórico no refleja la incidencia de los cambios de precios que se hubieren efectuado, lo cual evitará el daño sensible a la Hacienda Pública del Distrito Federal, de ver disminuidos sus ingresos por el impacto de los índices inflacionarios. De ahí que sea importante aplicar el mismo procedimiento que se prevé para la materia federal, previsto en el Código Fiscal de la Federación, determinado a través del cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor que publica el Banco de México.

En este sentido es oportuno, en opinión de estas Legisladoras, establecer recíprocamente el beneficio del contribuyente, incorporando la actualización de las devoluciones a cargo del Distrito Federal, mediante el mismo procedimiento.

En relación con el rubro de derechos, se estima que son procedentes las modificaciones propuestas, en virtud de que algunos derechos se integran al Código Financiero por mandato expreso de otras disposiciones jurídicas, otros más son derivados de nuevos servicios que actualmente ya puede prestar el Gobierno del Distrito Federal y otros más se reforman atendiendo al costo del servicio.

Sobre el particular, estas Comisiones Dictaminadoras estiman conveniente complementar la reforma propuesta por la Jefa de Gobierno precisando la denominación de los Derechos a que se refiere el artículo 253 del Código Financiero, conforme con lo que prevé la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en el artículo 12, fracción II, con lo cual la Sección Décima Cuarta del Capítulo IX del Título Tercero, Libro Primero del Código se identificará como "De los Derechos de Registro de Modificaciones a los Programas Parciales o Delegacionales de Desarrollo Urbano". Igualmente, es necesario incluir la modificación del artículo 253 para el efecto de sustituir la referencia a Programa Parcial de Desarrollo Urbano Delegacional por programas parciales o delegacionales de desarrollo urbano, asimismo, para precisar que la cuota del 4 al millar a que se refiere el artículo que nos ocupa se aplique únicamente sobre el valor de la superficie del inmueble cuyo uso haya sido modificado y no sobre todo el valor del inmueble, como se realiza actualmente.

En el mismo sentido, estas Dictaminadoras estiman conveniente agregar a la propuesta de la Jefa de Gobierno, en el artículo 263, la expresión y otros prestadores del

servicio, en virtud de que existen otros prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, además de los concesionarios y permisionarios que hacen uso de los Centros de Transferencia Modal. Del mismo modo, y considerando que el gasto para el Gobierno del Distrito Federal para recaudar la cuota de \$1.00 por acceso, propuesta en la iniciativa, sería superior a lo que se recaudaría por los derechos por el uso de los Centros de Transferencia Modal, estas Legisladoras estiman que debe modificarse, con el propósito de que la cuota mensual sea de \$90.00 y no de \$1.00 por acceso.

En cuanto a las cuotas de los aprovechamientos por el uso o explotación de las vías y áreas públicas, es procedente reducir el monto de las mismas para el comercio ambulante, y además incluirlas en el Código, con lo que participa plenamente esta Honorable Asamblea, ya que actualmente su determinación está a cargo de la Secretaría de Finanzas.

Las Comisiones aprueban la modificación propuesta en el sentido de que los ciegos no paguen los mencionados aprovechamientos, con el objeto de incrementar su nivel de vida, con la única limitante, en opinión de estas Dictaminadoras, de que sean ellos los que personalmente usen o exploten las vías o áreas públicas.

Respecto de los contratos de arrendamiento inmobiliario cuya contraprestación se realiza en moneda extranjera, es de aprobarse el establecimiento del tipo de cambio que se debe considerar para efectos de la base renta del Impuesto Predial.

SÉPTIMA.- Respecto a las modificaciones que se proponen en el renglón de presupuesto y cuenta pública y órganos autónomos, estas Comisiones Unidas están de acuerdo en que sobre la materia se consideren las nuevas disposiciones, que implican mejoras técnicas que se quieren poner en marcha dentro la complejidad programática-presupuestal, para una evolución gradual pero firme, de los cambios presupuestarios que son necesarios.

Se consideran correctas las modificaciones que se proponen sobre esa materia, debido a que debe tenerse presente que el Presupuesto es un documento que contiene el cálculo de egresos con base en los ingresos estimados para cada periodo fiscal y que sistemáticamente debe integrar el titular de la Jefatura de Gobierno y someterlo a esta Honorable Asamblea Legislativa. Pero es innegable que la normatividad aplicable al respecto no puede quedar estática, sino que los instrumentos jurídicos constantemente se deben ajustar en atención a la importancia de la regulación del manejo del patrimonio público de la Ciudad y sus efectos en las diversas ramas de la actividad económica.

En virtud de la problemática de contar en tiempo con la cantidad autorizada de endeudamiento, se propone que el proyecto de egresos contenga el monto propuesto del

mismo, ya que no hay que olvidar que el Presupuesto de Egresos es una estimación de ingresos y gastos para un ejercicio fiscal, por lo que la cifra de endeudamiento puede ser definida en forma posterior en atención a la determinación del Congreso de la Unión.

En congruencia con lo señalado en el párrafo anterior, estas Comisiones Unidas estiman procedente que sea el Jefe de Gobierno quien, en caso de una eventual disminución de recursos crediticios, por razones de interés social o económico, realice los cambios técnicos al Decreto de Presupuesto de Egresos.

Por otra parte, no se consideró apropiada la propuesta de que dejen de tener fin específico los derechos de supervisión de obras, debido a que los recursos recaudados por este concepto sufragan los gastos de la Contraloría y se podría mermar la capacidad de respuesta de esta dependencia.

En el mismo sentido, no se estima conveniente regular las cuentas para el registro presupuestal de los remanentes de financiamiento titulado y las disponibilidades de financiamiento no titulado, dado que se estaría contraviniendo lo dispuesto en los actuales artículos 320 y 321.

Respecto de la contabilidad gubernamental, es acertado precisar la obligación de las entidades de la Administración Pública del Distrito Federal de remitir a la Secretaría de Finanzas sus catálogos de cuentas, instructivo de manejo de cuentas y guía contabilizadora al cierre del primer trimestre del ejercicio presupuestal.

Asimismo, es acertado regular presupuestal y contablemente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y al Instituto y Tribunal Electoral del Distrito Federal y establecer claramente las normas aplicables al manejo y control del presupuesto de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Sin embargo, en opinión de estas Dictaminadoras estos órganos, además de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, deben ser considerados autónomos en su manejo presupuestal, tanto para la elaboración de su presupuesto de egresos, como en la administración y ejercicio de sus recursos, por lo que se establecen modificaciones a la Iniciativa en los artículos 321, 385, 386, 391, 416, 417 A, 435, 437, 438, 439, 454, 481 y 483. Además, no se consideran las reformas enviadas por la Jefa de Gobierno a los artículos 384 B, 415 A, 415 B, 418 y 455 y se hace necesario reformar los artículos 392, 393 C y 393 D, así como derogar el artículo 385 A, no contemplados en la iniciativa.

Estas Dictaminadoras no estiman procedente la modificación para adicionar la mención a las actividades

institucionales, con la finalidad de que cuando alguna disposición del Código Financiero, haga referencia a «metas» se entienda también este vocablo como «actividades institucionales», en virtud de que se consideró inapropiado que la normatividad presupuestaria tome estas denominaciones como idénticas.

En este mismo sentido, es improcedente la reforma para ampliar el plazo para la entrega de la información sobre el monto y características de la deuda pública y para la radicación de los documentos de pago, a que están obligados las dependencias, órganos desconcentrado y entidades, dado que se considera que la administración pública debe eficientar su labor.

OCTAVA.- En el capítulo de la lucha contra la evasión y la corrupción, estas Comisiones conscientes de que esos fenómenos son una plaga con sus múltiples facetas y sus diferentes protagonistas, están de acuerdo en que es necesario poner un freno, para que no sigan proliferando, en virtud de sus numerosas conexiones y consabidas repercusiones. Para contrarrestar las conductas delictivas en ese rubro es procedente el que se sancionen severamente las acciones indebidas de los servidores públicos consistentes, entre otras, en intimidar con amenazas o engaños al visitado para obtener beneficios personales.

Por tal motivo, es procedente que se aumente la penalidad de los delitos que conforme al Código Financiero del Distrito Federal se consideran graves, para evitar que se obtenga la libertad bajo fianza.

Como el Fisco no tiene como finalidad la existencia de controversias fiscales interminables, para el caso de que en el transcurso de la averiguación previa se paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios se garanticen a satisfacción de la autoridad fiscal, se podrá otorgar el desistimiento por parte de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal.

Estas Comisiones Unidas estiman procedente que se señale como infracción la interconexión indebida entre las tomas de agua potable y agua residual tratada, sin perjuicio de la aplicación de sanciones previstas por la Ley de Salud para el Distrito Federal, asimismo, que se establezcan sanciones para los notificadores o actuarios que hubiesen practicado notificaciones en forma ilegal.

Los valuadores se deben señalar como responsables solidarios, en relación con los servicios profesionales por los que hayan sido contratados, vinculados a las contribuciones establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal, cuando por errores provocan perjuicio no sólo a la Hacienda Pública local, sino también a los contribuyentes que confían en su leal saber y entender. No obstante, estas Dictaminadoras no consideraron

procedente la propuesta de señalar a los contadores como responsables solidarios.

NOVENA.- *En la dinámica y transformación de las instituciones políticas y administrativas de la Ciudad de México no escapa a estas Comisiones Dictaminadoras que la ciudadanía en el año próximo designará en elección popular a los Jefes Delegacionales, acorde a las reformas del capítulo II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en las que se hace referencia a los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal.*

Por ello, estas Dictaminadoras estiman conveniente que se incorpore en el Código Financiero lo señalado en el nuevo texto del artículo 112 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en cuanto a que el Jefe de Gobierno deberá proponer a la Asamblea Legislativa asignaciones presupuestales para que las Delegaciones cumplan con el ejercicio de las actividades a su cargo, considerando los criterios de población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano. Se considera, no obstante, necesario incorporar un nuevo artículo, a fin de que se contemple la facultad de los Jefes Delegacionales de proponer al Jefe de Gobierno los proyectos de Programa Operativo y de Presupuesto, establecida en el Estatuto.

DÉCIMA.- *Las Dictaminadoras que suscriben estiman conveniente la propuesta de que sea la Secretaría de Finanzas, a nombre del Jefe de Gobierno, quien celebre convenios de colaboración administrativa con los Estados y Municipios, ya que ello dará agilidad administrativa a acciones relacionadas con las materias de verificación, determinación y recaudación de contribuciones locales, para lograr el mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales, mismas que tienen su fundamento en el artículo 67, fracciones XXV y XXVII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.*

DECIMAPRIMERA.- *Por lo que hace al artículo Tercero transitorio, estas Comisiones que dictaminan consideran necesario eliminar su texto, debido a que no se sometió a consideración de esta Soberanía la modificación al artículo 318 del ordenamiento tributario, por lo que en consecuencia los artículos Cuarto a Séptimo se recorren en su orden para pasar a ser Tercero a Sexto, según corresponda, pero con las siguientes modificaciones a los nuevos Cuarto y Quinto.*

El Cuarto transitorio, Quinto en la Iniciativa, se modifica para referirse a todos los órganos autónomos y no sólo a la Asamblea y al Tribunal, y se corrige la referencia al artículo que contiene las disposiciones presupuestarias que les corresponde atender.

El Quinto transitorio, Sexto en la Iniciativa, se modifica para que a las delegaciones les sea aplicable lo señalado para las dependencias, órganos desconcentrados y

entidades del 1º de octubre del año 2000 hasta el término de ese año, y para que envíen oportunamente sus proyectos de presupuesto para el año 2001 al Jefe de Gobierno.

DECIMASEGUNDA.- *Finalmente, en opinión de estas Dictaminadoras es necesario modificar la propuesta de la Jefa de Gobierno contenida en el segundo párrafo del artículo 182 del Código Financiero, con objeto de otorgar un beneficio a los contribuyentes del Impuesto sobre Tenencia o Uso de vehículos para que durante el mes de enero no transcurra el plazo para el pago de dicho impuesto. Lo anterior evitará empeorar la situación económica de las personas, que de por sí en enero se ve mermada, y por otra parte, la modificación será congruente con la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, en días pasados, a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, consistente en cambiar el periodo de pago de dicho impuesto para que éste sea del 1 de febrero al 30 de abril, con lo cual se evitará, además, la problemática administrativa que implica tener distintos plazos para el cobro de este impuesto.*

DECIMATERCERA.- *Por lo expuesto, estas Comisiones Unidas estiman la procedencia de la iniciativa de reformas propuesta por la Jefa de Gobierno, y someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen con proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, y en consecuencia:*

RESUELVEN

UNICO.- *Se aprueba el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, en los siguientes términos:*

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL

ARTICULO PRIMERO.- *Se REFORMAN: los artículos 17, fracción V; 24, fracción I; 46, fracción I, y en la cantidad; 48, párrafos primero, segundo y tercero; 50 A, párrafo primero; 51, párrafo tercero, 56, fracciones VI y IX; 59, párrafo primero; 61, párrafo primero; 62, párrafos primero y tercero; 64, fracción I Bis; 71, fracción XI; 76, fracción VII; 81, párrafo primero, fracción I, párrafos primero y segundo, y fracción II; 82, fracción II, inciso b); 83, fracciones III, segundo párrafo y VII; 83 A, párrafo primero; 85; 87, último párrafo; 98 A, segundo párrafo; 100, en sus cuotas; 109, fracción IX; 127, último párrafo, y en la cantidad; 136, último párrafo; 147, párrafo primero; 149, fracción II, párrafo primero, y en las cantidades; 152, en sus cuotas; 153, segundo párrafo; 156, en sus cuotas; 157, fracciones I, párrafo primero, VII y XIV; 160, fracciones*

I y IV; 161, párrafo séptimo; 165, segundo párrafo; 182, segundo párrafo, y en las cuotas; 186 A, segundo párrafo; 191, párrafo primero; 192, párrafos primero y segundo; 193, párrafo primero; 196, en sus tarifas; 197, en sus cuotas; 198, fracción I, párrafo tercero, fracción IV, segundo párrafo, fracción V, inciso b), y en la cantidad; 202, en sus cuotas; 203, en sus cuotas; 204 B, en sus cuotas; 206, en sus cuotas; 207, en sus cuotas; 207 A, en sus cuotas; 209, en su cuota; 210, en su cuota; 211, en sus cuotas; 211 Bis, en sus cuotas; 212, en sus cuotas; 212 A, y en las cuotas; 213, fracción II, párrafo primero, y en las cuotas; 214, en sus cuotas; 215, fracción III, y en las cuotas; 216, en sus cuotas; 217, en sus cuotas; 218, en su cuota; 219, en su cuota; 220, en su cuota; 221, en sus cuotas; 222, en sus cuotas; 223, en sus cuotas; 224, en sus cuotas; 225, en sus cuotas; 226, en sus cuotas; 227, en su cuota; 228, en sus cuotas; 229, en su cuota; 231, fracción III, y en las cuotas; 232, en sus cuotas; 233, en sus cuotas; 234, en sus cuotas; 235, fracciones III, IV y VIII, y en las cuotas; 236, párrafo primero, fracciones I, incisos a) y c), VIII y XIV, y en las cuotas; 237, fracción VI, y en las cuotas; 238, fracción VI, y en las cuotas; 238 A, párrafo primero, fracción X, y en las cuotas; 239; 240, en sus cuotas; 241, fracción VIII Bis, y en las cuotas; 242, párrafo primero, y en la cuota; 243, en su cuota; 244, en su cuota; 245, en su cuota; 246, en sus cuotas; 247, en su cuota; 248, en sus cuotas; 249, en sus cuotas; la denominación de la Sección Décima Cuarta, Capítulo IX, Título Tercero, Libro Primero; 253, párrafo primero; 251, párrafo primero; 254, párrafo primero, y en las cuotas; 255; 256, en sus cuotas; 256 A, fracciones I, II, III y IV, y en las cuotas; 256 B, fracciones I y II, incisos a), b), c), d), y las cuotas; 257, párrafo primero; 261, y en la cuota; 262, en sus cuotas; la denominación de la Sección Tercera, Capítulo X, Título Tercero, Libro Primero; 263, párrafo primero; 264, párrafo tercero; 267 A; 295, fracción I; 296, fracción II; 297; 298, segundo párrafo; 308, segundo párrafo; 310; 321, segundo párrafo; 335; 344, fracción I; 378, fracción VI; la denominación de la Sección Tercera, Capítulo II, Título Segundo, Libro Tercero; 385; 386; 391, fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX; 392; 393 C; 393 D; la denominación de la Sección Tercera, Capítulo II, Título Tercero, Libro Tercero; 416; 428; 435, segundo párrafo; 437; 438; 439, párrafo segundo; 451; 454; 467, fracciones III y IV; 472, fracción I, inciso a); 481, párrafo segundo; 483, párrafo segundo; 485, último párrafo; 485 A; 502, en sus cantidades; 503, en sus cantidades; 504, fracción VIII, y en las cantidades; 505, en sus cantidades; 505 A, en sus cantidades; 509, en sus cantidades; 510, en sus cantidades; 511, en sus cantidades; 512, en sus cantidades; 513, fracciones VII y VIII, y en las cantidades; 514, en sus cantidades; 524; 525, fracción IV; 531 A, párrafo primero, y fracción III; 531 B, párrafo primero; 531 C; 533, en su cantidad; 540, párrafo primero; 543, segundo párrafo; Sexto Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal el 31 de diciembre de 1998; se ADICIONAN: los artículos 2º, con fracciones VI, VII y XVII, recorriéndose a VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI, las actuales VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV; 50 B; 56 con una fracción XVI, recorriéndose a XVII la actual XVI; 57, con un párrafo cuarto, pasando a ser quinto, sexto, séptimo, octavo, y noveno, los actuales párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo, y octavo; 61, con un último párrafo; 62, con párrafos cuarto y quinto; 63, con un inciso g) en la fracción II, recorriéndose a h) el actual g); 67 A; 71, con un último párrafo; 71 A; 76, con una fracción VIII, recorriéndose a IX la actual VIII; 83, con un segundo párrafo e incisos a), b), c) y d) en la fracción VII y con una fracción IX; 84 A, con un cuarto párrafo; 85, con párrafos segundo y tercero; 85 A; 87, con una fracción IV; 94 B; 109, con un último párrafo; 148, con un párrafo cuarto, recorriéndose a quinto, sexto y séptimo, los actuales cuarto, quinto y sexto; 153, con fracciones I, II y III en el segundo párrafo; 178 A; 186 C, con un último párrafo; 200, con una fracción VII; 215, con un segundo párrafo en la fracción VI; 235, fracción IV, con incisos a) y b); 236, con un inciso c) en la fracción I, con numerales 1 a 6, recorriéndose a d) el actual c), y una fracción I Bis, con numerales 1 y 2; 236 A; 242, párrafo primero, con fracciones I y II, y con un párrafo segundo, recorriéndose a tercero el actual segundo; 255 A; 256, con una fracción VI Bis, y un penúltimo párrafo; 256 A, con las fracciones V, VI y VII; 256 B, con un inciso i) en la fracción I, e incisos e) y f) en la fracción II; 263, con un segundo párrafo; Libro Primero, Título Tercero, con un Capítulo XI, denominado "De las Reducciones", con artículos 265 A al 265 Y; 321, con un segundo párrafo, recorriéndose a tercero el actual segundo; 344, fracción I, con incisos a) y b); 378, con una fracción VII, recorriéndose a VIII la actual VII; 386, con un segundo párrafo; Libro Tercero, Título Tercero, Capítulo II, con una Sección Tercera denominada "Del ejercicio presupuestal de los órganos político-administrativos", con los artículos 415 A y 415 B, recorriéndose a Secciones Cuarta y Quinta las actuales Tercera y Cuarta; 417 A; 422, con un último párrafo; 466, con fracciones V y VI; 467, con una fracción V; 513, con una fracción IX; 513 A; 518 A; 525, con fracciones V, VI y VII; 539, con un segundo párrafo, recorriéndose a tercero y cuarto, los actuales segundo y tercero; 550, con una fracción V; se DEROGAN: los artículos 196, último párrafo; 212 B; 213, fracción III; 236, fracción I, inciso c), numeral 3 Bis; 238 A, fracciones I y IV; 256 B, fracción I, inciso h); 263, fracciones I, II, III y IV; 385 A; para quedar como sigue:

ARTICULO 2.-

I. a V. ...

VI. Tribunal Contencioso: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal;

VII. Autoridades Electorales: El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral del Distrito Federal;

VIII. Dependencias: Los órganos administrativos del sector central del Distrito Federal;

IX. Organos Desconcentrados: Las Delegaciones y los que con este carácter se establezcan conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y su Reglamento, que integran la Administración Pública Desconcentrada;

X. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del Sector Paraestatal del Distrito Federal;

XI. Secretaría: La Secretaría de Finanzas;

XII. Tesorería: La Tesorería del Distrito Federal;

XIII. Sector: El agrupamiento de entidades coordinado por la Secretaría que en cada caso designe el Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

XIV. Coordinadoras de Sector: Las Dependencias que en cada caso se designen para coordinar un agrupamiento de entidades;

XV. Entidades Coordinadas: Las que se designen formando parte de un sector determinado;

XVI. Programa: El Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Federal, y

XVII. Vivienda de interés social o popular: Las determinadas con tal carácter por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

ARTICULO 17.- ...

I. a IV. ...

V. La Comisión de Aguas del Distrito Federal, la que en materia de Derechos por el Suministro de Agua y Descarga a la Red de Drenaje, contará con las facultades y obligaciones a que se refieren los artículos 16, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 57, 61, 71, fracciones II, III, IV, V, IX, X, XI, XII y XIV; 76, 77, 81, 85, 99, 101, 103, 104, 119, 196, 197, 198, 264, 265, 502, 504, 505, 506, 507, 513 y 514 y demás aplicables del presente ordenamiento, y

V.

ARTICULO 24.-

I. Impuestos. Son los que deben pagar las personas físicas y morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista en este Código, y que sean distintas a las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo;

II. a IV. ...

ARTICULO 46.- ...

I. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución y el crédito fiscal exceda de \$50,000.00;

II. Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades, si dichas facilidades se conceden individualmente y siempre que el crédito fiscal tenga un monto superior a \$53,627.00;

III. a IV.

ARTICULO 48.- El pago de un crédito fiscal podrá hacerse en efectivo, con cheque de caja o certificado, o en especie en los casos que así lo establezca este Código y demás leyes aplicables.

Los cheques no certificados de cuentas personales de los contribuyentes, las transferencias de fondos de dichas cuentas a las de la Tesorería a través de medios bancarios y las tarjetas de crédito, bancarias y no bancarias y las tarjetas de débito, únicamente se aceptarán para realizar el pago cuando lo autorice la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos que se señalen en las reglas de carácter general que para tal efecto expida, mismas que deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para la aceptación de otros instrumentos de pago, será necesaria la autorización que en cada caso emita la Secretaría.

Los pagos con cheque se recibirán salvo buen cobro. Se aceptarán también cheques distintos a la cuenta personal del contribuyente siempre y cuando el librador se identifique previamente a satisfacción de la autoridad.

.....

ARTICULO 50 A.- Los particulares podrán acudir ante las autoridades fiscales dentro de un plazo de seis días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de las resoluciones a que se refieren los artículos 81, 502, fracciones I y II, 504, 505 y 506 de este Código, así como en los casos en que la autoridad fiscal determine mediante reglas de carácter general, a efecto de hacer las aclaraciones que consideren pertinentes, debiendo la autoridad, resolver en un plazo de seis días contados a partir de que quede debidamente integrado el expediente.

.....

ARTICULO 50 B.- Los créditos fiscales, así como los montos de las devoluciones a cargo del Distrito Federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo

de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México conforme a la legislación aplicable, del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado Índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo.

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado.

La actualización no se efectuará por fracciones de mes.

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización.

ARTICULO 51.- ...

Los recargos se calcularán sobre el total del crédito fiscal previamente actualizado en términos del artículo 50 B de este Código, excluyendo los propios recargos y cualquier otro accesorio.

.....

ARTICULO 56.-

I. a V.

VI. Los representantes legales y mandatarios, incluyendo a los albaceas, por los créditos fiscales que dejen de pagar sus representados o mandantes, en relación con las operaciones en que aquéllos intervengan, hasta por el monto de dichos créditos;

VI. a VIII.

IX. Los adquirentes de bienes inmuebles, cuando los enajenantes no hayan pagado las contribuciones o lo hayan hecho en cantidad menor a lo señalado en este Código, sin que la responsabilidad exceda del valor del inmueble. En el caso de inmuebles bajo el régimen de propiedad en condominio, la responsabilidad solidaria del adquirente de los derechos de una unidad de propiedad exclusiva, será proporcional al porcentaje indiviso que le corresponda a esa unidad, en relación al total del inmueble condominal.

X. a XV. ...

XVI. Los valuadores, en relación a los avalúos que hayan emitido, siempre que con base en los mismos se hayan

determinado contribuciones de manera incorrecta, en perjuicio del Distrito Federal;

XVII. Las demás personas físicas o morales que señale este código y las leyes aplicables.

....

ARTICULO 57.-

No se causarán intereses durante el tiempo que transcurra de la fecha en que la autoridad notifique al solicitante que el cheque por el importe de la devolución se encuentra a su disposición en las oficinas de la autoridad fiscal al día en que lo recoja.

....

ARTICULO 59.- Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio o por retención a tercero, siempre que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios. Si las cantidades que tengan a su favor los contribuyentes no derivan de la misma contribución, por la cual están obligados a efectuar el pago, sólo se podrán compensar en los casos y cumpliendo los requisitos que la Secretaría establezca mediante reglas de carácter general.

.....

ARTICULO 61.- La Secretaría podrá condonar las multas por infracción a las disposiciones fiscales y administrativas, inclusive las determinadas por el propio contribuyente para lo cual apreciará discrecionalmente las circunstancias del caso y los motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción. La solicitud de condonación de multas en los términos de este artículo, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría al respecto no podrán ser impugnadas por los medios de defensa que establece este Código.

La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, si así se pide y se garantiza el interés fiscal. Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación.

Para los efectos de este artículo se entiende por multa firme aquella que no haya sido controvertida por algún medio de defensa o hubiere transcurrido el término legal para interponerlo, cuando el contribuyente se desista de la instancia promovida, o se dictó resolución o sentencia declarando la validez de la multa.

ARTICULO 62.- Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de hasta cuatro meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución expresa, se considerará como resolución afirmativa ficta, que significa decisión favorable a los derechos e intereses legítimos de los peticionarios, por el silencio de las autoridades competentes.

....

No operará la resolución afirmativa ficta tratándose de la autorización de exenciones de créditos fiscales, la prescripción o condonación de créditos fiscales, el otorgamiento de subsidios y la devolución de cantidades pagadas indebidamente.

Tampoco se configura la resolución afirmativa ficta, cuando la petición se hubiere presentado ante autoridad incompetente o los particulares interesados no hayan reunido los requisitos que señalen las normas jurídicas aplicables.

En los casos en que no opere la afirmativa ficta, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior al plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que esta se dicte.

ARTICULO 63.-

I.

II.

a). a f).

g). Autocorregir su situación fiscal, una vez iniciada la visita domiciliaria por parte de la autoridad fiscal, siempre y cuando no se haya determinado crédito fiscal alguno, y.

h). Las demás que este Código establezca.

ARTICULO 64.-

I.

I BIS. Las que en el año calendario inmediato anterior, hayan contado con inmuebles, de uso diferente al habitacional, cuyo valor catastral por cada uno, sea superior a \$2'990,748.00.

II. a III.

ARTICULO 67 A.- Los contribuyentes que estén obligados a dictaminarse, así como los que opten por dictaminar el

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, deben hacerlo por los conceptos de impuesto predial, derechos por el suministro de agua, impuesto sobre nóminas e impuesto por la prestación de servicios de hospedaje.

Lo establecido en este artículo, no es limitante para que los contribuyentes dictaminen otras obligaciones fiscales a su cargo.

ARTICULO 71.-

I. a X.

XI. Recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones en materia fiscal.

XII. a XVI.

La Secretaría en representación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, podrá celebrar convenios de colaboración administrativa con los Estados y municipios, en las materias de verificación, determinación y recaudación de las contribuciones.

ARTICULO 71 A.- Las autoridades fiscales no podrán realizar más de dos visitas domiciliarias o de gabinete en un ejercicio fiscal, respecto de las mismas contribuciones e idéntico sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria.

ARTICULO 76.-

I. a VI.

VII. No lleven el registro cronológico de medición a que se refiere la fracción V, del artículo 200 de este Código, para determinar el consumo de agua, lo lleven incompleto, equivocado o con errores;

VIII. Se lleven a cabo instalaciones hidráulicas, así como derivaciones de agua, sin la autorización respectiva, o cuando se realicen modificaciones o manipulaciones a los ramales de las tuberías de distribución, y

IX. Existan circunstancias que impidan u obstaculicen la lectura, verificación e instalación de aparatos medidores, así como la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. La determinación presuntiva a que se refiere este artículo, procederá independientemente de los recargos y sanciones a que haya lugar.

ARTICULO 81.- Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, la autoridad fiscal exigirá la

presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo en forma simultánea o sucesiva a realizar uno o varios de los actos siguientes:

I. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones, ya sea provisional o del ejercicio, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente o responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual a la contribución que se hubiera determinado en la última o cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate, o a la que resulte para dichos períodos de la determinación formulada por la autoridad, según corresponda, cuando haya omitido presentar oportunamente alguna declaración subsecuente para el pago de contribuciones propias o retenidas. Esta cantidad a pagar tendrá el carácter de pago provisional y no libera a los obligados de presentar la declaración omitida.

Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la propia autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente, con carácter provisional, una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida.

...

II. Embargar precautoriamente los bienes o la negociación cuando el contribuyente haya omitido presentar declaraciones en los últimos tres años o cuando no atienda tres requerimientos de la autoridad en los términos de la fracción III de este artículo. El embargo quedará sin efecto cuando el contribuyente cumpla con el requerimiento o dos meses después de practicado, cuando las autoridades fiscales, no obstante el incumplimiento, no inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, y

III.

ARTICULO 82.-

I. ...

II.

a).

b). Si al presentarse los visitadores al lugar en donde debe practicarse la visita no estuviera el visitado o su representante legal, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, para que el mencionado visitado o su representante legal los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden, así

como la carta de derechos del contribuyente; si no lo hicieran, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado.

.....

ARTICULO 83.-

I. a II.

III.

En la última acta parcial que al efecto se levante, se hará mención expresa de tal circunstancia, teniendo el contribuyente un plazo de veinte días contados a partir de su levantamiento para presentar documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones consignados. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado se ampliará el plazo hasta por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.

....

IV a VI

VII. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita domiciliaria o la revisión de la documentación que se realice en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de que se notifique la orden de visita o el requerimiento respectivo. Cuando las autoridades no cierren el acta final de visita o no concluyan la revisión, en el plazo mencionado, se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos los actos realizados durante la visita o revisión.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior, podrá ampliarse por un periodo igual, siempre que el oficio mediante el cual se notifique la prórroga correspondiente haya sido expedido, por la autoridad fiscal que ordenó la visita o la revisión, cuando se presente alguno de los supuestos siguientes:

a). La autoridad fiscal solicite de los servidores públicos del Distrito Federal o fedatarios, informes y datos que posean con motivo de sus funciones;

b). Se practiquen avalúos a bienes inmuebles;

c). Cuando el inmueble cuente con dos o más cuentas o tomas, y

d). El contribuyente cambie de domicilio fiscal, sin dar el aviso correspondiente, durante el desarrollo de la visita o la revisión;

VIII. Cuando el contribuyente corrija su situación fiscal de acuerdo a los resultados de la visita domiciliaria, deberán elaborarse las declaraciones correspondientes, que contengan la firma del interesado o su representante legal, y

IX.- Cuando de la revisión de las actas de visita que se hayan levantado y demás documentación vinculada a éstas, se observe que el procedimiento de fiscalización no se hubiese ajustado a las normas aplicables, lo que pudiera provocar la invalidación de la determinación del crédito fiscal que en su caso se realizara, la autoridad podrá por una sola vez reponer el procedimiento de oficio.

Lo señalado en la fracción anterior es sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir los visitadores.

ARTICULO 83 A.- Las visitas domiciliarias ordenadas por las autoridades fiscales, deberán concluirse anticipadamente, cuando el contribuyente haya presentado ante la Tesorería, antes del inicio de la visita, aviso para dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, siempre que dicho aviso se haya presentado en el plazo y cumpliendo los requisitos establecidos en este Código. La conclusión anticipada de la visita, sólo será en relación a las contribuciones y periodo a dictaminar.

...

ARTICULO 85.- Cuando con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales conozcan de la comisión de una o varias infracciones que originen la omisión total o parcial en el pago de las contribuciones establecidas en este Código, procederán a determinar el crédito fiscal que resulte a cargo del contribuyente, motivando la resolución con base en los hechos u omisiones consignadas en las actas u oficio de observaciones que al efecto se hayan levantado.

Dicha resolución deberá emitirse dentro de 90 días contados a partir del día siguiente al levantamiento del acta final, o del día siguiente al vencimiento del plazo previsto por la fracción V del artículo 84, de este Código, según corresponda.

En el caso de que concluida la visita domiciliaria, y una vez que la autoridad fiscal no conozca de la comisión de alguna infracción que origine la omisión total o parcial en el pago de las contribuciones establecidas en este Código, ésta comunicará por escrito al contribuyente esa situación, dentro de los cinco días hábiles siguientes.

ARTICULO 85 A.- Durante el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales, se revisarán en primer lugar las contribuciones causadas en el último ejercicio de doce meses, así como las correspondientes al

periodo transcurrido entre la fecha de terminación de dicho ejercicio y el momento en que se ejerzan las citadas facultades.

Cuando el contribuyente dictamine el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para efectos de este artículo, el último ejercicio fiscal será aquel de doce meses por el que se haya presentado el último dictamen, salvo que hayan transcurrido cuando menos doce meses desde que se presentó dicho dictamen sin presentarse otro, ya que en este caso la determinación abarcará los meses posteriores a la presentación del último dictamen.

Al comprobarse que durante el periodo a que se refieren los párrafos anteriores, se omitió la presentación de alguna declaración, el pago de contribuciones o se detectó alguna irregularidad, se podrán determinar en el mismo acto o con posterioridad, contribuciones omitidas correspondientes a ejercicios anteriores, sin más limitación que lo dispuesto en el artículo 89 de este Código.

ARTICULO 87.- ...

I. a III. ...

IV. No deberán transcurrir más de seis meses, de la fecha del último desahogo de información por parte del Contador Público o del propio contribuyente, a la fecha en que se formule el oficio de observaciones. El plazo de seis meses será por cada ejercicio revisado.

Respecto de la revisión efectuada, las autoridades fiscales deberán notificar el oficio de observaciones, contando el contribuyente con un plazo de 20 días a partir de la fecha en que surta efectos dicha notificación, para desvirtuar los hechos u omisiones observadas.

ARTICULO 94 B.- Tratándose de créditos fiscales determinados por las autoridades fiscales, el Secretario de Finanzas o el Procurador Fiscal del Distrito Federal, deberán disminuir el monto del crédito fiscal, cuando medie petición del contribuyente, y opere indistintamente alguno de los siguientes supuestos:

I. El adeudo fiscal sea exorbitante, ruinoso, confiscatorio o excesivo;

II. El crédito fiscal derive por causas no imputables directamente al contribuyente;

III. El contribuyente haya presentado dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales;

IV. Cuando el crédito fiscal se haya incrementado por muerte del sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, o bien, por errores o dilación de las autoridades fiscales;

V. Cuando el pago del crédito fiscal, implique la regularización de la propiedad inmobiliaria del contribuyente, y

VI. Cuando el contribuyente realice actividades de beneficio social, y no tenga derecho a alguna reducción de las contempladas en este Código.

Lo previsto en este artículo no constituye instancia, ni interrumpe ni suspende los plazos para que los particulares puedan interponer los medios de defensa. Las resoluciones que se emitan por la autoridad fiscal no podrán ser impugnadas por los contribuyentes.

ARTICULO 98 A.-

La revisión anterior, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la autoridad fiscal al respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes.

ARTICULO 100.- ...

I. ...

II.- ...

Cuando en el caso de las fracciones anteriores, los porcentajes señalados sean inferiores a \$115.00, se cobrará esta cantidad en lugar del 6% y 2% del crédito.

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias, podrán exceder de \$20,439.00.

...

ARTICULO 109.-

I. a XII.- ...

Los bienes señalados en la fracción IV del presente artículo podrán ser embargados, siempre y cuando así lo señale el deudor o la persona con la que entienda la diligencia de embargo.

ARTICULO 127.- ...

Cuando el valor de los bienes muebles o inmuebles exceda de \$315,783.00 la convocatoria se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en uno de los periódicos de mayor circulación, dos veces con intermedio de siete días. La última publicación de la convocatoria se hará cuando menos diez días antes de la fecha del remate.

ARTICULO 136.- ...

Una vez adjudicados los bienes al adquirente, la autoridad los deberá poner a su disposición en un plazo que no exceda de seis días hábiles, que se contarán a partir de la fecha de adjudicación, y el adquirente deberá retirarlos en el momento en que la autoridad los ponga a su disposición, en caso de no hacerlo se causarán derechos por el almacenaje a partir del día siguiente. Cuando el monto del derecho por el almacenaje sea igual o superior al valor en que se adjudicaron los bienes, éstos se aplicarán a cubrir los adeudos que se hayan generado por este concepto.

ARTICULO 147.- Se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución durante la tramitación de los recursos administrativos o juicios contencioso administrativos, cuando lo solicite el interesado y garantice el crédito fiscal impugnado y los posibles recargos, en alguna de las formas señaladas por el artículo 41 de este Código. En estos casos el plazo para garantizar el interés fiscal será de cinco meses siguientes a partir de la fecha en que se interponga cualquiera de los referidos medios de defensa, debiendo el interesado acreditar ante la autoridad fiscal que lo interpuso dentro de los quince días siguientes a esa fecha.

...

ARTICULO 148.- ...

En el caso de los inmuebles que hayan sido declarados exentos del impuesto predial, conforme a lo dispuesto en el artículo 155 de este Código, se debe acompañar a la declaración del impuesto, la resolución emitida por la autoridad competente, en la que se haya declarado expresamente que el bien de que se trate se encuentra exento.

...

ARTICULO 149.- ...

I.-....

II. Cuando los contribuyentes otorguen el uso o goce temporal de un inmueble, inclusive para la instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad, deberán calcular el impuesto con base en el valor catastral más alto que resulte entre el determinado conforme a la fracción anterior y el que se determine de acuerdo al total de las contraprestaciones por dicho uso o goce temporal. Si las contraprestaciones fueron fijadas en moneda diferente a la nacional, dicho valor se determinará considerando el tipo de cambio promedio de la moneda

extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en los días que corresponda al bimestre de que se trate.

...

La cantidad que resulte conforme al párrafo anterior se multiplicará por el factor 0.42979 cuando el uso del inmueble sea distinto al habitacional y por el factor 0.25479 cuando el uso sea habitacional, y el resultado será el impuesto a pagar. En el caso de inmuebles con usos habitacionales y no habitacionales, se aplicará a la cantidad resultante conforme al párrafo anterior, el factor que corresponda a cada uso, considerando para ello la parte proporcional determinada en base a las contraprestaciones fijadas para cada uno de ellos, las cantidades respectivas se sumarán y el resultado así obtenido será el impuesto a pagar.

...

ARTICULO 152.- ...

I. TARIFA.

Los contribuyentes cuyos inmuebles tengan un valor catastral que se ubique en los rangos marcados con las literales «B» o «C», y los que se encuentren marcados con la literal «D» con valor hasta de \$58,202.10, pagarán la cantidad que resulte de sumar a la cuota de \$26.00, la que se obtenga de multiplicar por 0.02256% la diferencia entre el valor catastral del propio inmueble y la cantidad señalada como límite inferior del mencionado rango «B».

2.- ...

III.- ...

RANGOS DE VALOR DE SUELO POR m2 FACTOR

DESDE	HASTA	
\$0.05	\$62.00	1.0
62.05	124.80	2.0
124.85	En adelante	3.0

...

Rango	Límite Inferior de Valor Catastral de un Inmueble	Límite Superior de Valor Catastral de un Inmueble	Cuota Fija	Porcentaje Para Aplicarse Sobre el Excedente del Límite Inferior
A	\$ 0.05	\$ 12,461.45	\$ 34.15	0.27521
B	12,461.50	24,922.90	68.44	0.45767
C	24,922.95	49,845.80	125.48	0.63470
D	49,845.85	74,768.70	283.66	0.70480
E	74,768.75	99,691.60	459.32	0.82292
F	99,691.65	124,614.50	664.42	0.96273
G	124,614.55	149,537.40	904.36	0.99893
H	149,537.45	174,460.30	1,153.31	1.09334
I	174,460.35	199,383.20	1,425.31	1.13945
J	199,383.25	224,306.10	1,709.79	1.17468
K	224,306.15	249,229.00	2,002.56	1.21083
L	249,229.05	274,151.90	2,304.33	1.24375
M	274,151.95	299,074.80	2,614.30	1.28253
N	299,074.85	498,458.00	2,933.94	1.31492
O	498,458.05	697,841.20	5,555.68	1.31492
P	697,841.25	897,224.40	8,177.40	1.31820
Q	897,224.45	1,196,299.20	10,805.67	1.35034
R	1,196,299.25	1,495,374.00	14,844.19	1.35036
S	1,495,374.05	EN ADELANTE	18,882.79	1.35036

II.- ...

1. Los contribuyentes con inmuebles cuyo valor catastral se encuentre dentro del rango "A" de la tarifa citada pagarán una cuota fija de \$22.00.

a). a h). ...

IV.- ...

ARTICULO 153.- ...

Cuando los contribuyentes cumplan con la obligación de pagar el impuesto predial en forma anticipada, tendrán derecho a una reducción, en los términos siguientes:

I. Del 8%, cuando se efectúe el pago de los seis bimestres, el último día del mes de enero del año que se cubra;

II. Del 6%, cuando se efectúe el pago de los seis bimestres, el último día del mes de febrero del año que se cubra, y

III. Del 1%, cuando se efectúe el pago del impuesto predial durante el primer mes de cada bimestre. Este porcentaje de reducción, también se otorgará por los bimestres que se paguen por anticipado.

ARTICULO 156.- ...

...

RANGO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	CUOTA FIJA	FACTOR PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DE LIMITE INFERIOR
A	0.10	53,425.00	87.78	
B	53,425.10	85,480.00	88.39	0.02767
C	85,480.10	128,220.00	975.33	0.02850
D	128,220.10	256,440.00	2,194.49	0.02851
E	256,440.10	641,100.00	5,851.96	0.03232
F	641,100.10	1'282,200.00	18,287.38	0.03992
G	1'282,200.10	EN ADELANTE	43,889.71	0.03765

ARTICULO 157.-

I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que se realicen al constituir la sociedad conyugal siempre que sean inmuebles propiedad de los cónyuges y la copropiedad siempre que los propietarios sean beneficiarios de programas de vivienda de interés social o popular.

...

II.- a VI.

VII. Transmisión de usufructo o de nuda propiedad, así como la extinción del usufructo que no se hubiere constituido como vitalicio;

VIII.- a XIII.

XIV. La adjudicación judicial o administrativa y la cesión de dichos derechos, cuando se formalicen en escritura pública.

ARTICULO 160.-

I. Cuando se adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En el caso de usufructo que no haya sido constituido como vitalicio, cuando se extinga;

II. a III.

IV. A la fecha en que cause ejecutoria la sentencia de la prescripción positiva, a la de la resolución correspondiente, en el caso de información de dominio, y a la de la formalización en escritura pública, tratándose de la adjudicación judicial o administrativa y de la cesión de dichos derechos.

V.- a VII.

ARTICULO 161.- ...

En ambos supuestos, no se exigirá al notario público documentación adicional y en las escrituras respectivas no se requerirá la manifestación a que se refiere este artículo.

...

ARTICULO 165.- ...

Tratándose de espectáculos públicos, propios del objeto de museos y parques de diversiones, así como de espectáculos teatrales y circenses, la tasa será del 6%.

ARTICULO 178 A.- *No se causará el impuesto sobre nóminas, por las erogaciones que se realicen por concepto de:*

I. Instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo;

II. Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro;

III. Gastos funerarios;

IV. Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro;

V. Aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;

VI. Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

VII. Aportaciones del patrón al Fondo de Pensiones;

VIII. Gastos de representación y viáticos;

IX. Alimentación, habitación y despensas onerosas;

X. Intereses subsidiados en créditos al personal;

XI. Primas por seguros obligatorios por disposición de Ley, en cuya vigencia de la póliza no se otorguen préstamos a los trabajadores por parte de la aseguradora, y

XII. Prestaciones de previsión social regulares y permanentes que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo.

Para que los conceptos mencionados en este precepto, se excluyan como integrantes de la base del impuesto sobre nóminas, deberán estar registrados en la contabilidad del contribuyente, si fuera el caso.

ARTICULO 182.- ...

I.- ...

CILINDRAJE	CUOTA PESOS
Hasta 4	\$151.00
DE 6	452.00
DE 8 O MAS	564.00

II. En el caso de vehículos importados al país, de año o modelo posterior a 1964, pagarán una cuota de \$1,028.00, los demás pagarán conforme a la cuota señalada en la fracción anterior.

...

III. En caso de motocicletas, se pagará una cuota de \$188.00.

IV. En el caso de vehículos destinados al transporte público de pasajeros, se pagará una cuota de \$469.00.

V. En el caso de vehículos destinados al transporte de carga, se pagará una cuota de \$92.00 por cada tonelada de capacidad de carga o de arrastre.

El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se pagará mediante declaración en la forma oficial aprobada, durante los meses de febrero, marzo y abril conjuntamente con los derechos por servicio de control vehicular. Cuando se tramite el alta en el Distrito Federal de un vehículo matriculado en otra entidad federativa o por la Federación y ésta se realice en el segundo, tercero o cuarto trimestre del año, se cubrirá el 75%, 50% o 25% de las cuotas señaladas en este artículo, respectivamente.

...

ARTICULO 186 A.- ...

Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, la prestación de alojamiento o albergue temporal de personas a cambio de una contraprestación, dentro de los que quedan comprendidos los servicios prestados por hoteles, hostales, moteles, campamentos, paraderos de casas rodantes, tiempo compartido y departamentos amueblados, siempre que en este último caso la contraprestación que se hubiese percibido, no se hubiese tomado en consideración para efectos de la fracción II del artículo 149 de este Código.

...

ARTICULO 186 C.- ...

Los contribuyentes del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, deberán formular declaraciones hasta en tanto no presenten el aviso de baja al padrón.

ARTICULO 191.- Las contribuciones de mejoras se causarán al ponerse en servicio las obras.

...

ARTICULO 192.- Las autoridades del Distrito Federal, que realicen la obra, publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, las características fundamentales del proyecto de obra.

En la publicación a que se refiere el párrafo anterior, se incluirá el tipo y costo estimado de la obra, el lugar o lugares en que habrá de realizarse y la zona o zonas de beneficio correspondientes.

...

ARTICULO 193.- Las contribuciones de mejoras se pagarán, en un plazo de seis bimestres, en cantidades iguales y sucesivas.

...

ARTICULO 196.-...

I.-...

a). ...

TARIFA

b). ...

CONSUMO EN M3 LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	TARIFA CUOTA MINIMA	CUOTA ADICIONAL POR METRO CUBICO EXCEDENTE DEL LIMITE INFERIOR
00.0	10.0	\$ 11.50	\$ 0.00
10.1	20.0	11.50	1.36
20.1	30.0	25.06	1.58
30.1	50.0	46.60	2.76
50.1	70.0	101.80	3.53
70.1	90.0	172.27	4.51
90.1	120.0	262.37	8.97
120.1	180.0	531.33	11.34
180.1	240.0	1,211.70	16.29
240.1	420.0	2,189.15	18.76
420.1	660.0	5,565.41	21.86
660.1	960.0	10,811.97	23.62
960.1	1,500.0	17,897.34	27.17
1,500.1	EN ADELANTE	32,567.36	28.96

TARIFA

...

CONSUMO EN M3 LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	TARIFA CUOTA BASE	CUOTA ADICIONAL POR METRO CUBICO EXCEDENTE DEL LIMITE INFERIOR
00.0	10.0	\$ 63.42	\$ 0.00
10.1	20.0	126.77	0.00
20.1	30.0	190.18	0.00
30.1	60.0	190.18	9.42
60.1	90.0	472.83	12.25
90.1	120.0	840.34	15.08
120.1	240.0	1,292.70	17.90
240.1	420.0	3,440.80	20.73
420.1	660.0	7,172.35	23.56
660.1	960.0	12,826.91	26.53
960.1	1,500.0	20,785.12	29.71
1,500.1	EN ADELANTE	36,829.11	30.48

II.-...

a). ...

TARIFA

Tipo de colonia catastral en que se ubique el inmueble y esté instalada una toma de agua.	Cuota bimestral expresada en pesos.
0.....	\$ 15.76
1.....	23.66
2, 3 y 8.....	47.33
4, 5 y 7.....	202.04
6.....	473.39
Los inmuebles ubicados en las colonias tipo 6 y 7 que tengan un valor catastral que corresponda al rango marcado con la literal "M" a la "S" de la tarifa establecida en la fracción I del artículo 152 de este Código.	1,104.58

...

b). ...

TARIFA

DIAMETRO DE LA TOMA EN MILIMETROS	CUOTA BIMESTRAL EXPRESADA EN PESOS
13	\$ 596.61
MAS DE 13 A 15	3,997.89
MAS DE 15 A 19	6,541.49
MAS DE 19 A 26	12,718.99
MAS DE 26 A 32	19,624.94
MAS DE 32 A 39	28,710.42
MAS DE 39 A 51	50,879.02
MAS DE 51 A 64	76,317.12
MAS DE 64 A 76	109,025.16
MAS DE 76 A 102	221,683.57
MAS DE 102 A 150	479,708.93
MAS DE 150 A 200	850,396.05
MAS DE 200 A 250	1,330,104.98
MAS DE 250 A 300	1,915,205.39
MAS DE 300 EN ADELANTE	2,031,500.70

...

Se deroga.

ARTICULO 197.-...

I.-...

a). De tomas de válvula de tipo cuello de garza \$17.00 por m3

b). Cuando se surta en camiones cisternas para su comercialización incluyendo transporte en el Distrito Federal \$47.00 por m3

II.- Agua residual..... \$1.00 por m3

III.- a IV.....

ARTICULO 198.-...

I.- ...

La Comisión de Aguas del Distrito Federal deberá establecer la determinación de los derechos por suministro de agua por anticipado, siempre y cuando no exista servicio medido en la colonia catastral y no rebase el año fiscal del ejercicio, emitiéndose para tal efecto una boleta que incluya los diferentes periodos bimestrales. Se podrá realizar el pago total o parcial dentro de los 30 días naturales siguientes al término de cada bimestre.

Cuando la autoridad fiscal compruebe que varias familias habitan un apartamento o vivienda cuyo valor catastral conforme a lo previsto en el artículo 149, fracción I, de este Código, sea hasta de \$50,000.00, podrá autorizar a solicitud de los contribuyentes que el consumo que les corresponda sea dividido entre el número de familias que habiten el apartamento o vivienda y al volumen de consumo por familia se le aplique la tarifa, emitiéndose una boleta por cada familia.

II. a III. ...

IV.-.....

Tratándose de inmuebles que cuenten con más de una toma y número de cuenta, o cuando dos o más tomas alimenten el mismo sistema hidráulico o a inmuebles colindantes de un mismo usuario, se aplicará la tarifa correspondiente a la suma de los consumos de dichas tomas. Los

contribuyentes al determinar, declarar y pagar sus consumos de agua, o la autoridad al emitir las boletas, aplicarán el procedimiento anterior; una vez obtenido el monto del derecho a pagar, éste será prorrateado entre el número de tomas que sirvieron para la sumatoria de consumos, de acuerdo a los m3 de consumo de cada una.

V.-....

a). ...

b). Cuando no existan medidores individuales y se cuente con medidor en toma general o tomas generales, el consumo será dividido entre el número de departamentos, viviendas o locales que se encuentren habitados u ocupados, al volumen de consumo así determinado se le aplicará la tarifa que corresponda según el uso que proceda y se emitirá una boleta por cada apartamento, vivienda o local, sin que lo anterior se considere como una excepción a lo dispuesto por la fracción I del artículo 200 de este Código.

c). a d). ...

VI.- a VII.

ARTICULO 200.- ...

I.- a VI. ...

VII. El solicitante de una licencia de construcción de obra nueva que cuente con toma de agua y no cuente con medidor, previamente a la obtención de la licencia, deberá pagar el medidor, aditamentos e instalaciones conforme a los presupuestos que al efecto elabore la Comisión de Aguas del Distrito Federal.

ARTICULO 202.- ...

I.- Por la verificación del informe preventivo de impacto ambiental \$1,119.00

II.- ...

a). En su modalidad general \$1,303.00

b). En su modalidad intermedia \$2,603.00

III.- Por la evaluación del estudio de riesgo ambiental \$3,569.00

IV.- Por el dictamen técnico sobre daños ambientales o lesiones, daños y perjuicios ocasionados a personas, por

infracciones a la Ley o al Reglamento de la materia \$2,282.00

ARTICULO 203.- ...

I.- Vehículos con motor a gasolina \$87.00

II.- Vehículos con motor a diesel \$258.00

III.- Por la reposición del certificado o de la calcomanía de verificación vehicular, relativos a la emisión de contaminantes \$43.00

ARTICULO 204 B.- ...

I. ...

1.- Cuando el inmueble sea destinado a casa habitación, hasta los primeros 50 m2 de construcción \$3,098.00

Por cada metro cuadrado que exceda del límite señalado, se pagará la cuota de \$62.00

2.- En el caso de los inmuebles destinados a casa habitación que tengan zonas para estacionamiento de vehículos, por éstas se pagarán hasta los primeros 500 m2 de construcción \$3,098.00

Por cada metro cuadrado que exceda del límite señalado, se pagará la cuota de \$6.00

3.- Tratándose de inmuebles cuyo destino sea distinto al habitacional, hasta los primeros 50 m2 de construcción \$6,196.00

Por cada metro cuadrado que exceda del límite señalado, se pagará una cuota de \$121.00

4.- En el caso de que los inmuebles cuyo destino sea distinto al habitacional, tengan zonas para estacionamiento de vehículos, por éstas se pagará hasta los primeros 500 m2 de construcción, la cantidad de \$6,196.00

Por cada metro cuadrado que exceda del límite señalado, se pagará una cuota de \$12.00

5.- a 6. ...

II.- ...

III.-

<i>Diámetro de entrada de la toma actual en milímetros</i>	<i>Diámetro de entrada de la toma solicitada en milímetros</i>	<i>Diferencia de caudal proporcionada en metros cúbicos</i>	<i>Cuota a pagar en \$ Pesos</i>
13	19	4.16	46,877.00
13	25	13.88	156,400.00
13	32	25.00	281,704.00
13	38	39.58	445,993.00
13	51	72.91	821,559.00
13	64	118.05	1,330,202.00
13	76	169.47	1,909,606.00
13	102	310.51	3,589,008.00
19	25	9.72	109,525.00
19	32	20.84	234,828.00
19	38	35.42	399,116.00
19	51	68.75	774,683.00
19	64	113.89	1,283,325.00
19	76	165.31	1,862,729.00
19	102	314.35	3,542,132.00
25	32	11.12	125,302.00
25	38	25.70	289,590.00
25	51	56.03	631,352.00
25	64	104.17	1,173,800.00
25	76	155.59	1,753,205.00
25	102	304.63	3,432,605.00
32	38	14.58	164,288.00
32	51	47.91	539,855.00
32	64	93.05	1,048,487.00
32	76	144.47	1,627,901.00
32	102	293.51	3,307,303.00
38	51	33.33	375,568.00
38	64	78.47	884,209.00
38	76	129.89	1,463,619.00
38	102	278.93	3,143,016.00
51	64	45.14	508,640.00
51	76	96.56	1,088,048.00
51	102	245.60	2,767,449.00
64	76	51.42	579,407.00
64	102	200.46	2,258,807.00
76	102	149.04	1,679,401.00

...

ARTICULO 206.- ...

I.- ...

a). Hasta 5 niveles, por m2 de construcción \$13.00

b). Más de 5 niveles, por m2 de construcción \$22.00

...

II.- ...

a). Hasta 3 niveles, por m2 de construcción \$28.00

b). Más de 3 niveles, por m2 de construcción \$51.00

...

ARTICULO 207.- ...

I.- ...

a). Hasta 2.50 metros de altura, por m2 o fracción \$9.00

b). Por altura excedente a que se refiere el inciso anterior, por m2 o fracción \$4.00

II.- ...

a). ...

1.- Hasta 2.50 metros de altura, por metro lineal o fracción \$9.00

2.- Por la altura excedente a que se refiere el numeral anterior, por m2 o fracción \$4.00

b). Por tapial ocupando banquetas en túnel elevado, sobre la superficie ocupada, por día \$4.00 m2

c). Por andamios o cualquier otra forma de usar la vía pública, sobre la superficie ocupada, por día \$6.00 m2

III.- Excavaciones y rellenos, por cada licencia \$224.00 m2

III.- Bis. Obras, modificaciones, reparaciones, rotura del pavimento, cortes en las banquetas y guarniciones para la ejecución de obras o instalaciones subterráneas, por m2 de vía pública afectada \$63.00

IV.- Demoliciones por la superficie cubierta, computando cada piso o planta \$6.00 m2

V.- Cambio de techos en habitación \$6.00 m2

VI.- ...

ARTICULO 207 A.- ...

I.- ...

a). Proyectos de vivienda de más de diez mil metros cuadrados de construcción \$22.00 m2

b). Proyectos que incluyen oficinas, comercios, industrias, servicios o equipamiento, por más de cinco mil metros cuadrados de construcción \$51.00 m2

II.- Licencia de condominio \$6.00 m2

...

ARTICULO 209.- Las personas físicas o morales que exploten yacimientos de materiales pétreos ubicados en el Distrito Federal, están obligadas al pago de derechos por la expedición de licencias y su prórroga, conforme a una cuota de \$2.00 por cada metro cúbico de explotación autorizada.

ARTICULO 210.- Por la verificación anual del cumplimiento de los requisitos que en el Distrito Federal exijan las disposiciones jurídicas correspondientes, tratándose de giros y establecimientos mercantiles que para su funcionamiento requieran de licencia y no tengan venta de bebidas alcohólicas; así como en la celebración de espectáculos públicos, musicales, deportivos, taurinos, teatrales y cinematográficos, que no tengan venta de bebidas alcohólicas, y en el caso de estacionamientos públicos, se pagarán derechos conforme a una cuota de \$1,554.00.

ARTICULO 211.- ...

I.- Por la expedición de la licencia de funcionamiento \$18,790.00

II.- Por la revalidación y verificación anual de la licencia \$3,947.00

III.- Por la expedición de autorización y su verificación, para la venta de bebidas alcohólicas \$9,394.00

...

ARTICULO 211 Bis.- ...

I.- Por la expedición de la licencia de funcionamiento \$1,826.00

II.- Por la revalidación y verificación anual \$394.00

ARTICULO 212.- ...

I.- Por la expedición o reposición de la placa de control de uso y ocupación de inmueble \$495.00

II.- Por la evaluación y registro de aspirantes a directores responsables de obra o corresponsables, por la primera evaluación \$899.00

Por las subsiguientes \$453.00

ARTICULO 212 A.- Por la expedición de licencias y permisos de anuncios, así como por su revalidación, conforme a lo establecido en el Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal, y en las demás disposiciones

jurídicas correspondientes, con excepción de los anuncios que no requieran licencia y los de televisión, radio, periódicos y revistas, se pagarán derechos, cualquiera que sea sus fines, el lugar en que se fijen o instalen, el procedimiento para su colocación y los materiales, estructuras, soportes y sistemas de iluminación utilizados en su construcción, de acuerdo a las cuotas que a continuación se establecen:

I. Licencia para fijar, instalar, distribuir, ubicar o modificar los siguientes anuncios:

a). En azotea, autosoportados, en saliente, volados o colgantes, en marquesina o adosados y en lonas o materiales similares, cuando requieran responsiva del Director Responsable de Obra y/o Corresponsable:

1.- Por el otorgamiento de licencia, por cada año de vigencia \$1,104.00

2.- Por su revalidación \$958.00

3.- Por el retiro del anuncio \$7,896.00

b). De proyección óptica:

1.- Por el otorgamiento de licencia, por cada año de vigencia \$1,104.00

2.- Por su revalidación \$958.00

3.- Por el retiro del anuncio \$7,896.00

c). Electrónicos:

Por el otorgamiento de licencia, por cada año de vigencia \$6,789.00

2.- Por su revalidación \$5,889.00

3.- Por el retiro del anuncio \$15,789.00

d). De neón:

1.- Por el otorgamiento de licencia, por cada año de vigencia \$5,092.00

2.- Por su revalidación \$4,417.00

3.- Por el retiro del anuncio \$11,841.75

e). En mobiliario urbano:

1.- Por el otorgamiento de licencia, por cada año de vigencia \$474.00

2.- Por su revalidación \$411.00

3.- Por el retiro del anuncio \$7,896.00

f). En mantas de 3.60 y hasta 5.60 metros de longitud por 90 centímetros y hasta 2.40 metros de altura:

1.- Por el otorgamiento de licencia, por cada año de vigencia \$474.00

2.- Por su revalidación \$411.00

3.- Por el retiro del anuncio \$7,896.00

g). En banderolas de 3.60 y hasta 5.60 metros de altura por 90 centímetros y hasta 1.80 metros de longitud:

1.- Por el otorgamiento de licencia, por cada año de vigencia \$379.00

2.- Por su revalidación \$329.00

3.- Por el retiro del anuncio \$6,317.00

h). Anuncios que se vayan a instalar en inmuebles considerados como monumentos o colindantes a monumentos o en zona de monumentos con valor arqueológico, artístico o histórico:

1.- Por el otorgamiento de licencia, por cada año de vigencia \$7,746.00

2.- Por su revalidación \$6,719.00

3.- Por el retiro del anuncio \$18,015.00

i). Pintados sobre la superficie de los muros ciegos laterales de las edificaciones que se contemplan en la fracción I del artículo 14 del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal:

1.- Por el otorgamiento de licencia, por cada año de vigencia \$1,104.00

2.- Por su revalidación \$958.00

3.- Por el retiro del anuncio \$7,896.00

II. Permiso para fijar, instalar, distribuir, ubicar o modificar los siguientes anuncios, hasta por 120 días:

a). Adosados con una dimensión de 1.80 hasta 3.60 metros de longitud por 90 centímetros de altura y cuyo peso sea hasta de 50 kilogramos:

1.- Por el otorgamiento de permiso	\$1,189.00
2.- Por su revalidación	\$1,031.00
3.- Por el retiro del anuncio	\$7,896.00
b). Pintados sobre la superficie de las edificaciones con una dimensión de 1.80 hasta 3.60 metros de longitud por 90 centímetros de altura:	
1.- Por el otorgamiento de permiso	\$160.00
2.- Por su revalidación	\$137.00
3.- Por el retiro del anuncio	\$7,896.00
c). En saliente, volados o colgantes, siempre que la altura de su estructura de soporte sea de hasta 2.50 metros del nivel de banqueta a su parte inferior y su carátula no exceda de 45 centímetros de longitud por 45 centímetros de altura y un espesor de 20 centímetros:	
1.- Por el otorgamiento de permiso	\$1,104.00
2.- Por su revalidación	\$958.00
3.- Por el retiro del anuncio	\$7,896.00
d). Autosoportados, con una altura de hasta 2.50 metros del nivel de banqueta a su parte inferior; en estos casos la carátula no debe exceder de 90 centímetros de longitud por 1.20 metros de altura y un espesor de 20 centímetros:	
1.- Por el otorgamiento de permiso	\$1,473.00
2.- Por su revalidación	\$1,278.00
3.- Por el retiro del anuncio	\$7,896.00
e). En marquesinas, con dimensión de hasta 3.60 metros de longitud por 90 centímetros de altura y un espesor de 20 centímetros y cuyo peso sea de hasta 50 kg.:	
1.- Por el otorgamiento de permiso	\$1,164.00
2.- Por su revalidación	\$981.00
3.- Por el retiro del anuncio	\$7,896.00
III.- Por el otorgamiento de permiso para fijar, instalar, distribuir, ubicar o modificar los siguientes anuncios, por 90 días:	
a). Mantas con una dimensión de 1.80 hasta 3.60 metros de longitud por 90 centímetros de altura	
	\$118.00

Por el retiro del anuncio	\$1,206.00
b). Banderolas con una dimensión de 1.80 hasta 3.60 metros de altura por 90 centímetros de longitud	
	\$95.00
Por el retiro del anuncio	\$965.00
c). En objetos inflables	
	\$380.00
Por el retiro del anuncio	\$7,896.00
IV.- Anuncios en vehículos del servicio de transporte:	
a). Por el otorgamiento de permiso publicitario hasta por 120 días naturales, por cada anuncio:	
1.- Sobre laterales, posteriores o toldos	
	\$237.00
Por el retiro del anuncio	\$720.00
2.- En laterales punta a punta	
	\$316.00
Por el retiro del anuncio	\$950.00
3.- Interiores	
	\$32.00
Por el retiro del anuncio	\$100.00
4.- Integrales	
	\$948.00
Por el retiro del anuncio	\$2,850.00
5.- Monitores de audio y video	
	\$1,104.00
Por el retiro del anuncio	\$3,320.00
6.- Pantallas con iluminación o electrónicas	
	\$316.00
Por el retiro del anuncio	\$950.00
7.- Adheribles en superficies laminadas de las dovelas	
	\$120.00
Por el retiro del anuncio	\$360.00
8.- Por anuncios que no se encuentren considerados dentro de las especificaciones contenidas en el Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal	
	\$620.00
Por el retiro del anuncio	\$1,860.00
V.- Anuncio en vehículos de servicio público de transporte de carga, hasta por 120 días naturales, por cada anuncio:	
a). Por el otorgamiento de permiso publicitario sobre laterales	
	\$474.00

Por el retiro del anuncio \$1,420.00

b). Por el otorgamiento de permiso publicitario, por anuncio distinto al colocado sobre laterales \$1,240.00

Por el retiro del anuncio \$3,720.00

Estos derechos deberán pagarse previamente a la expedición de la licencia o permiso respectivo, mediante declaración del contribuyente en la forma oficial aprobada.

ARTICULO 212 B.- Se Deroga.

ARTICULO 213.- Por cada inscripción, anotación o cancelación de inscripción que practique el Registro Público correspondiente, se causará una cuota de \$675.00, con las excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en los demás artículos de esta Sección.

I.- Se causará una cuota de \$6,764.00

a). a c). ...

II. Cuando los actos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción anterior no tengan valor determinado o éste sea menor al monto establecido para las viviendas de interés social en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la cuota a pagar será la señalada en el primer párrafo de este artículo. Si el valor de los actos a inscribir es de hasta dos veces el monto señalado en la referida Ley, la cuota a que se refiere el primer párrafo de este artículo aumentará en dos tantos por cada 25% adicional. En el caso de actos relacionados con bienes muebles, en que su valor sea de hasta 4.5 veces el referido monto establecido para la vivienda de interés social, la cuota prevista en el primer párrafo de este artículo se aumentará en un 30% por cada 10% adicional.

...

III. Se deroga.

...

ARTICULO 214.- Por la devolución de documentos como resultado de la calificación, ya sea que se deniegue el asiento por causas insubsanables, o cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en la suspensión, se pagarán \$207.00.

En los casos de devolución de documentos a solicitud del interesado, se pagará por concepto de derechos la cantidad de \$113.00.

...

ARTICULO 215.- ...

I.- Certificado de libertad o existencia de gravámenes, hasta por un período de 20 años \$216.00

Por cada período de cinco años o fracción que exceda de ese lapso \$145.00

II.- Informes o constancias solicitados por autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipios u organismos de ellos \$423.00

III.- Certificados de no propiedad de bienes inmuebles por cada período de cinco años a la fecha de la expedición \$54.00

IV.- Certificado de no inscripción de un bien inmueble, por cada período de cinco años a partir del año de 1871 \$145.00

V.- Por cada informe respecto al registro o depósito de testamentos que se rindan a solicitud de jueces, notarios o partes interesadas \$563.00

VI.- Por cada certificación de los asientos registrales de un folio, de una partida de los libros o de un contrato privado archivado en el libro de legajos \$563.00

En el caso de que la certificación a que se refiere esta fracción, exceda de 50 hojas, se cobrará por cada hoja adicional \$5.00

...

ARTICULO 216.- ...

I.- Por poderes, adición o sustitución de los mismos \$309.00

II.- Por revocación o renuncia de poderes, por cada una \$113.00

ARTICULO 217.- ...

I.- Fianzas, contrafianzas u obligaciones solidarias con el fiador, para el sólo efecto de comprobar la solvencia del fiador, contrafiador u obligado solidario \$423.00

II.- Sustitución de acreedor o deudor o reconocimiento de adeudo \$423.00

III.- División de crédito, en cualquier caso y por cada inmueble, con excepción de lo previsto por la siguiente fracción \$145.00

IV.- Por la individualización de gravámenes a que se refiere el artículo 2912 del Código Civil, se pagará, por la primera, la cuota que corresponda a la tarifa prevista en

el artículo 213 fracción I de este Código, y por cada anotación subsecuente se pagará \$675.00

V.- Por la anotación de embargo de varios bienes, se pagará por el primero la cuota que corresponda a la tarifa prevista en el artículo 213 fracción I de este Código, y por cada anotación en folio que se derive de la misma orden judicial, se pagará \$675.00

VI.- Por la cancelación de hipoteca \$675.00

ARTICULO 218.- Por el registro de rectificaciones relativas a inscripciones principales, cuando se refieran a modificaciones de plazo, intereses, garantías, datos equivocados o cualesquiera otras que no constituyan novación del contrato, se pagará por concepto de derechos la cantidad de \$199.00.

ARTICULO 219.- Por la ratificación de firmas ante el registrador, se pagarán por concepto de derechos \$29.00 por cada firma.

ARTICULO 220.- Por el registro de cada acto correspondiente al cumplimiento de la condición, cancelación de la reserva de dominio o consolidación de la propiedad, en cada caso \$282.00.

ARTICULO 221.- ...

I.- Patrimonio familiar \$282.00

II.- Por la cancelación del patrimonio familiar \$282.00

III.- Acta de matrimonio y capitulaciones matrimoniales \$282.00

IV.- Documentos o resoluciones judiciales relativas a las sucesiones, independientemente de los derechos que se causen por el registro de la transmisión de los bienes hereditarios \$675.00

ARTICULO 222.- ...

I.- Actos, contratos, convenios o resoluciones judiciales o administrativas por los que se constituya un fraccionamiento, se lotifique, relotifique, divida o subdivida un inmueble, por cada lote \$423.00

II.- Fusión, por cada lote \$423.00

III.- Constitución de régimen de propiedad en condominio o sus modificaciones, por cada unidad \$423.00

ARTICULO 223.- ...

I.- Matrícula de comerciante persona física \$423.00

II.- Constitución o aumento de capital o inscripción de créditos, de sociedades mercantiles comprendidas en la Ley Federal de Fomento a la Microindustria \$282.00

III.- De corresponsalia mercantil, por su registro o cancelación \$423.00

ARTICULO 224.- ...

I.- Fideicomisos de garantía que no incluyan inmuebles, por cada inscripción \$675.00

II.- Por la cesión de derechos hereditarios o fideicomisarios que no incluyan inmuebles \$675.00

ARTICULO 225.- ...

I.- ...

a). Si fueren hechos en los locales de las oficinas respectivas, en horas hábiles \$423.00

b). Si fueren hechos en los locales de las oficinas respectivas, en horas inhábiles. \$620.00

c). Si fueren hechos fuera de los locales de las oficinas respectivas, en horas hábiles \$842.00

d). Si fueren hechos fuera de los locales de las oficinas respectivas, en horas inhábiles \$1,269.00

II.- ...

a). Si se hace dentro de días y horas hábiles \$199.00

b). Si se hace en días y horas inhábiles \$394.00

ARTICULO 226.- ...

I.- Acceso a la información de datos respecto de antecedentes registrales de un inmueble, persona moral o bien mueble, por cada folio o por cada dos partidas de antecedentes en libros \$29.00

II.- De la búsqueda de antecedentes registrales omitidos o equivocados en un documento \$126.00

III.- De la búsqueda de antecedentes registrales mediante la utilización de sistemas digitalizados, por cada folio, partida registral, imagen registral digitalizada o microficha \$126.00

IV.- De la búsqueda de antecedentes registrales con la utilización de medios electrónicos, respecto de condominios o fraccionamientos o programas de regularización ... \$564.00

V.- Por la expedición de copias simples de registro de antecedentes, se pagará por la primera hoja \$41.00 y \$2.00 adicionales por cada hoja subsecuente.

VI.- Por cada búsqueda de datos en el Boletín Registral \$137.00

VII.- Por conexión y servicio de vinculación remota al Sistema Integral de Informática Registral del Registro Público de la Propiedad, se pagará una cuota anual de \$13,152.00

ARTICULO 227.- Por la integración de jurado para examen de oposición para el ejercicio notarial, o bien por el examen para aspirante de notario, se pagará una cuota de \$1,415.00 por derecho de examen respectivo.

ARTICULO 228.- ...

I.- Por la autorización de cada 200 folios \$282.00

II.- Por la revisión y la certificación de la razón de cierre, por libro \$566.00

ARTICULO 229.- Por los servicios de registro de patentes, sello, firma y convenio de notarios y corredores públicos, que preste el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, según corresponda, se pagará una cuota de \$1,127.00 por cada uno de los rubros citados.

ARTICULO 231.- ...

I.- Por las certificaciones relativas a constancias o documentos que obren en los apéndices del protocolo, por cada página \$59.00

II.- Cualquier anotación marginal en un protocolo .. \$29.00

III.- Registro de avisos de testamentos públicos abiertos, cerrados o simplificados \$29.00

ARTICULO 232.- ...

I.- Inscripción de matrimonios \$29.00

II.- Inscripción de tutela, adopción, estado de interdicción, declaración de ausencia o presunción de muerte ... \$100.00

III.- Inscripción de actas de divorcio \$100.00

IV.- Expedición de constancia de los actos de estado civil o de los mexicanos en el extranjero \$505.00

V.- Por el divorcio a que se refiere el artículo 272 del Código Civil para el Distrito Federal \$1,012.00

VI.-Expedición de copias certificadas \$21.00

VII.- Búsqueda de datos en el Registro \$29.00

VIII.- Por otras inscripciones \$100.00

ARTICULO 233.- ...

I.- De cambio de régimen patrimonial en el matrimonio \$1,012.00

II.- De rectificación de actas \$246.00

III.- De actas de defunción de personas fallecidas fuera del Distrito Federal o en el extranjero \$100.00

ARTICULO 234.- ...

I.- Por el registro de nacimientos \$156.00

II.- Por la celebración de matrimonios \$1,012.00

III.- Por la autorización para que los jueces del Registro Civil celebren matrimonios fuera de la circunscripción territorial que les corresponda, independientemente de la cuota que señala la fracción anterior \$2,086.00

IV.- Por otros servicios \$1,324.00

ARTICULO 235.- ...

I.- ...

a). Por el refrendo \$132
;Error!No se encuentra el origen de la referencia..00

b). Por el trámite de alta \$290.00

;Error!No se encuentra el origen de la referencia.II.- Por reposición de placas, derivada de pérdida \$474.00

II.-Bis. Por reposición de placas, derivada de mutilación o deterioro, por cada una \$179.00

III.- Por la expedición del permiso de carga ocasional, hasta por siete días, para que un vehículo de uso particular se destine temporalmente a fines de carga particular. \$42.00

IV.- Por Expedición de permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación o calcomanía:

a). Hasta por treinta días	\$90.00
b). Hasta por sesenta días	\$178.00
V.- Por reposición o canje de tarjeta de circulación o calcomanía de refrendo para vigencia anual de placas	\$90.00
VI.- Por cambio de propietario, carrocería o motor incluyendo la expedición de nueva tarjeta de circulación	\$108.00
VII.- Por trámite de baja de vehículo	\$179.00
VIII.- Por certificado de no adeudos por infracciones	\$70.00
LX.- ...	
X.- Por cualquier otro permiso que conceda la autoridad no especificado en este artículo, que no exceda de 90 días	\$132.00
XI.- Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores	\$132.00
ARTICULO 236.- Por los servicios de control vehicular que se presten respecto a vehículos del servicio público, mercantil, privado y particular de transporte de pasajeros y de carga, así como lo relacionado al equipamiento auxiliar de transporte, excepto al servicio público de transporte individual de pasajeros, se pagarán las siguientes cuotas:	
I.- ...	
a). Concesión de Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros:	
1.- Por su otorgamiento, por cada vehículo que comprenda	\$8,456.00
2.- Por su prórroga, por cada vehículo que comprenda	\$6,576.00
3.- Por la vigencia anual, por cada vehículo	\$474.00
4.- Por reposición de título-concesión	\$1,624.00
b).	
1.- Por su otorgamiento, por rutas de penetración por cada empresa o asociación	\$4,942.00
Por cada vehículo excedente a los establecidos en la concesión	\$1,579.00

2.- Por la vigencia anual	\$95.00
3.- Por el establecimiento de base	\$213.00
4.- Por la realización de estudios técnicos para el establecimiento de bases para la prestación del servicio público colectivo metropolitano de pasajeros	\$342.00
c) Concesión de Servicio de Transporte de Carga Público:	
1.- Por su otorgamiento, por cada vehículo que comprenda	\$8,456.00
2.- Por su prórroga, por cada vehículo que comprenda	\$6,576.00
3.- Por reposición de título concesión	\$1,624.00
4.- Por el establecimiento de base o sitio de carga	\$213.00
5.- Por el establecimiento de estación de servicio ...	\$605.00
6.- Por el establecimiento de caseta	\$702.00
d). Permiso:	
1.-	
Transporte de carga mercantil:	
De valores	\$790.00
De mensajería	\$790.00
De sustancias tóxicas o peligrosas	\$1,073.00
Especializado	\$912.00
Transporte de carga privado:	
De una negociación o empresa	\$790.00
De valores	\$790.00
De mensajería	\$790.00
De sustancias tóxicas o peligrosas	\$1,073.00
Especializado	\$912.00
Transporte Privado Escolar	\$474.00
Transporte Privado de personal	\$474.00
Transporte de Pasajeros Especializado	\$790.00

Transporte de Pasajeros Mercantil \$6,576.00

Transporte de Turistas en Circuitos Específicos .. \$9,725.00

Transporte de Pasajeros en Bicicletas o Motocicletas Adaptadas \$315.00

2.- Por su otorgamiento, para el establecimiento y operación en equipamiento auxiliar de transporte, por cada espacio útil autorizado para un vehículo, por anualidad: \$536.00

3.- Por la vigencia anual, por cada vehículo \$282.00

3. Bis. Se deroga.

4.- Por reposición del Permiso \$1,059.00

5.- Por la realización de estudios técnicos para el establecimiento de bases y sitios para la prestación del servicio público de transporte individual y colectivo de pasajeros \$342.00

I Bis. Autorización y Registro:

1.- Por el servicio de Transporte de carga particular, por vehículo, por anualidad \$471.00

2.- Autorización especial para transporte de carga mercantil de mensajería en vehículos de más de 3.5 toneladas \$790.00

II.- Por el trámite de alta que comprende expedición inicial de placas, tarjeta de circulación y calcomanía, así como por su refrendo para la vigencia anual de las placas de matrícula:

a). Tratándose de vehículos de servicio público de transporte:

1.- Por el trámite de alta \$614.00

2.- Por el refrendo \$445.00

b). Tratándose de vehículos de servicio particular de transporte:

1.- Por el trámite de alta \$524.00

2.- Por el refrendo \$375.00

c). Tratándose de servicio de transporte de carga:

1.- Por el trámite de alta \$614.00

2.- Por el refrendo \$445.00

III. Por reposición de placas, por cada una:

a). Vehículos de servicio público de transporte \$435.00

b). Vehículos de servicio particular de transporte . \$361.00

c). Vehículos de servicio de transporte de carga . \$435.00

IV.- Por la expedición de permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación o calcomanía, hasta por sesenta días naturales \$359.00

V.- Por la expedición de permisos para circular con aditamentos a la carrocería 131.00

VI.- Por reposición o canje de tarjeta de circulación o \$90.00

VII.- Por cambio de carrocería, motor o domicilio, incluyendo la expedición de nueva tarjeta de circulación \$70.00

VIII.- Por sustitución de vehículos del servicio público de transporte de pasajeros o del servicio de transporte de carga, en todas sus modalidades, por vehículo \$132.00

IX.- Por la revista reglamentaria anual \$225.00

X.- Por duplicado de revista \$131.00

XI.- Por la expedición de calcomanía de revista .. \$90.00

XII.- Por la reposición de calcomanía de revista ... \$90.00

XIII.- Por el trámite de baja de vehículo \$269.00

XIV.- Por certificado de no adeudo de infracciones \$70.00

XV.- Se deroga.

XVI.- Se deroga.

XVII.- Por permiso para salir del Distrito Federal . \$70.00

XVII Bis.- Por la autorización de la bitácora de control y su revisión \$114.00

XVIII.- Por la autorización de cesión de derechos de concesión, por cada vehículo que comprenda ... \$4,697.00

XVIII Bis.- Por la autorización a centros de capacitación para impartir los cursos a transportistas de pasajeros y de carga \$2,282.00

XIX.- Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores \$132.00

ARTICULO 236 A.- Por los servicios de control vehicular que se presten respecto a vehículos de servicio público de transporte individual de pasajeros, se pagarán las cuotas siguientes:

I. Concesión de Servicio Público de Transporte Individual de Pasajeros:

a). Por su otorgamiento, por cada vehículo que comprenda \$8,456.00

b). Por su prórroga, por cada vehículo que comprenda \$474.00

c). Por reposición de título concesión \$1,624.00

II.- Permiso para el establecimiento de equipamiento auxiliar de transporte en sitios, bases y módulos de encierro \$605.00

III.- Por el trámite de alta que comprende expedición inicial de placas, tarjeta de circulación y calcomanía, así como por su refrendo para la vigencia anual de las placas de matrícula:

a). Por el trámite de alta \$614.00

b). Por el refrendo \$445.00

IV.- Por reposición de placas, por cada una \$444.00

V.- Por la expedición de permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación o calcomanía, hasta por sesenta días naturales \$359.00

VI.- Por la expedición de permisos para circular con aditamentos a la carrocería \$131.00

VII.- Por reposición o canje de tarjeta de circulación o calcomanía de refrendo para vigencia anual de placas \$90.00

VIII.- Por cambio de carrocería, motor o domicilio, incluyendo la expedición de nueva tarjeta de circulación \$70.00

IX.- Por sustitución de vehículos de servicio público de transporte individual de pasajeros, por vehículo \$132.00

X.- Por la revista reglamentaria anual \$225.00

XI.- Por duplicado de revista \$131.00

XII.- Por la expedición de calcomanía de revista .. \$90.00

XIII.- Por la reposición de calcomanía de revista \$90.00

XIV.- Por el trámite de baja de vehículo..... \$269.00

XV.- Por certificado de no adeudo de infracciones... \$70.00

XVI.- Por la autorización o revalidación de sitios o bases de taxis..... \$556.00

XVII.- Por la corrección de datos incorrectos en documentos expedidos por el Instituto del Taxi del Distrito Federal \$50.00

XVIII.- Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores \$132.00

ARTICULO 237.- ...

I.- Por el trámite de alta que comprende expedición inicial de placa y tarjeta de circulación..... \$524.00

I Bis.- Por refrendo para vigencia anual de placa ... \$186.00

II.- Por reposición de placa, derivada de pérdida ... \$453.00

II Bis.- Por reposición de placa, derivada de mutilación o deterioro..... \$179.00

III.- Por la expedición de permiso para circular sin placa o tarjeta de circulación \$179.00

IV.- Por reposición o canje de tarjeta de circulación . \$90.00

V.- Por cambio de propietario o domicilio, incluyendo la expedición de nueva tarjeta de circulación \$70.00

V Bis.- Por el trámite de baja \$148.00

VI.- Por certificado de no adeudo de infracciones .. \$70.00

VII.- Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores \$143.00

ARTICULO 238.- ...

I.- Por el trámite de alta que comprende expedición inicial de placa y tarjeta de circulación \$216.00

I Bis.- Por refrendo para vigencia anual de placa .. \$143.00

II.- Por reposición o canje de tarjeta de circulación . \$90.00

III.- Por cambio de propietario o domicilio, incluyendo la expedición de nueva tarjeta de circulación \$70.00

IV.- Por reposición de placa, derivada de pérdida . \$474.00

IV Bis.- Por reposición de placa, derivada de mutilación o deterioro \$179.00

V.- Por la expedición de permiso para circular sin placa o tarjeta de circulación \$90.00

V Bis.- Por el trámite de baja de vehículo \$148.00

VI.- Por certificado de no adeudo de infracciones . \$70.00

VII.- Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores \$70.00

ARTICULO 238 A.- Por los servicios de control vehicular que se presten respecto de bicicletas y motocicletas adaptadas, se pagarán las siguientes cuotas:

I. Se deroga.

II.- Por el trámite de alta que comprende expedición inicial de placa y tarjeta de circulación \$469.00

III.- Por el refrendo para la vigencia anual de placas. \$56.00

IV. Se deroga.

V.- Por reposición o canje de tarjeta de circulación \$151.00

VI.- Por reposición de placa, derivada de pérdida . \$474.00

VI Bis.- Por reposición de placa, derivada de mutilación o deterioro \$179.00

VII.- Por cambio de propietario o domicilio, incluyendo la expedición de nueva tarjeta de circulación \$151.00

VIII.- Por la expedición de permiso para circular sin placa o tarjeta de circulación \$169.00

IX.- Por el trámite de baja \$92.00

X.- Por certificado de no adeudo de infracciones .. \$70.00

XI.- Por la autorización de cesión de derechos de concesión, por cada vehículo que comprenda \$671.00

XII.- Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores \$122.00

ARTICULO 239.- Los derechos por refrendo para vigencia de placas y, en su caso, de tarjeta de circulación de vehículos de uso particular, del servicio público, mercantil, privado y particular de transporte de pasajeros, excepto los vehículos del servicio público de transporte individual de pasajeros, de remolques, motocicletas y motonetas, deberán pagarse conjuntamente en los mismos plazos establecidos en este ordenamiento, así como en la Ley del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos, en las formas oficiales aprobadas.

ARTICULO 240.- ...

a). Por la expedición \$722.00

b). Por el refrendo \$560.00

ARTICULO 241.- ...

I.- Licencias tipo "A", por cada año de vigencia \$156.00

II.- Licencias tipo "B", por cada año de vigencia . \$243.00

III.- Licencias tipo "C", por cada año de vigencia . \$329.00

III Bis.- Licencias tipo "D", por cada año de vigencia \$156.00

IV.- Por reposición de las licencias a que se refieren las fracciones anteriores por término que no exceda a la fecha de vencimiento señalada en la original \$156.00

V.- Permiso individual para aprendizaje de manejo, por 30 días \$132.00

VI.- Por expedición o reposición de permiso para conducir \$156.00

VII.- Por certificación de expedición de licencia .. \$70.00

VIII.- Por expedición de antecedente de licencia o permiso \$70.00

VIII Bis.- Por certificado de no adeudo de infracciones \$70.00

VIII Bis 1.- Por curso de capacitación y expedición de constancia para renovar licencia tipo B o C \$57.00

VIII Bis 2.- Por curso de capacitación y expedición de constancia para obtener por primera vez licencia tipo B o C \$114.00

IX.- Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores \$156.00

ARTICULO 242.- Por el servicio de grúa que se preste como consecuencia de la comisión de infracciones al Reglamento de Tránsito del Distrito Federal o a solicitud de los conductores de vehículos, los propietarios de los mismos pagarán las siguientes cuotas:

I.- Cuando se preste el servicio con vehículos cuya capacidad de arrastre sea de hasta 3.5 toneladas \$337.00

II.- Cuando se preste el servicio con vehículos cuya capacidad de arrastre sea mayor a 3.5 toneladas ... \$673.00

Por el servicio de retiro de candado inmovilizador que se utiliza en los casos a que se refiere el artículo 63 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, los propietarios de los vehículos pagarán una cuota de\$120.00.

...

ARTICULO 243.- Por el servicio de almacenaje de cualquier tipo de vehículo, se pagará por cada día un derecho de \$30.00 en tanto los propietarios no los retiren.

...

ARTICULO 244.- Por los servicios de alineamiento de inmuebles sobre la vía pública, se pagará el derecho de alineamiento de inmuebles conforme a una cuota de \$15.00 por cada metro de frente del inmueble.

ARTICULO 245.- Por los servicios de señalamiento de número oficial de inmuebles se pagará el derecho por número oficial conforme a una cuota de\$90.00.

...

ARTICULO 246.- ...

I.- Por certificación de zonificación para uso específico, certificación de zonificación para usos del suelo permitidos y certificación de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, por cada una \$495.00

II.- Expedición o prórroga de la licencia de uso de suelo\$1,644.00

III.- Por el estudio y dictamen técnico de densidad, por unidad de incremento \$9,866.00

IV.- ...

a). En los proyectos de vivienda que tengan más de 10,000 metros cuadrados de construcción \$1,303.00

b). En los proyecto que incluyan oficinas, comercios, industrias, servicios o equipamientos, por más de 5,000 metros cuadrados de construcción \$2,603.00

...

ARTICULO 247.- Por el otorgamiento de concesiones para el uso o goce de inmuebles del dominio público del Distrito Federal, se pagará anualmente, por cada uno, el derecho de concesión de inmuebles conforme a una cuota de \$564.00.

...

ARTICULO 248.- ...

I.- Cuando los bienes ocupen hasta tres metros cuadrados de superficie y hasta tres metros de altura, por día ... \$4.00.

II.- Por cada metro o fracción que exceda de la superficie o de la altura mencionada, por día \$2.00

...

ARTICULO 249.- ...

I.- ...

a). Hasta 80 palabras \$17.00

b). Hasta 120 palabras \$27.00

c). Hasta 160 palabras \$34.00

d). Hasta 200 palabras \$43.00

e). Por mayor número, además de la cuota anterior por cada palabra .. \$00.15

II.- ...

a). Por plana entera \$842.00

b). Por media plana \$453.00

c). Por un cuarto de plana..... \$282.00

ARTICULO 251.- Las personas físicas que utilicen los servicios médicos que presta el Distrito Federal pagarán derechos, los que tendrán el carácter de cuotas de recuperación del costo de los servicios y en ningún caso excederán del 70% de dicho costo conforme al Tabulador de Cobro de Derechos que la Secretaría publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

...

Sección Décima Cuarta

De los derechos de registro de modificaciones a los programas parciales o delegacionales de desarrollo urbano

ARTICULO 253.- Por la inscripción de las modificaciones a los programas parciales o delegacionales de desarrollo urbano, efectuadas a solicitud de los propietarios de los predios afectados por dichos programas, se cubrirán los derechos de inscripción ante el Registro de los Planes y

Programas de Desarrollo Urbano, conforme a una cuota del 4 al millar que se aplicará únicamente sobre el valor de la superficie del inmueble cuyo uso haya sido modificado.

...

ARTICULO 254.- *Por los servicios de recolección y recepción de residuos sólidos que generen los establecimientos mercantiles, industriales y similares, así como dependencias y entidades federales, que preste el Gobierno del Distrito Federal, se pagarán los derechos correspondientes conforme a las siguientes cuotas:*

I.- Por el servicio de recolección, por cada 10 kilogramos o fracción \$6.00

II.- Por el servicio de recepción en estaciones de transferencia, por cada 10 kilogramos o fracción ... \$2.00

II Bis.- Por el servicio de recepción de residuos de la construcción en estaciones de transferencia, por cada 10 Kilogramos o fracción \$6.00

III.- Por el servicio de recepción en sitios de disposición final, por cada 10 kilogramos o fracción \$1.00

IV.- Por el servicio de recepción de residuos de la construcción en sitios de disposición final, por cada 10 kilogramos o fracción \$1.00

V.- Por el servicio de recepción de residuos sólidos no peligrosos de manejo especial en sitios de disposición final por cada 10 kilogramos o fracción \$11.00

...

ARTICULO 255.- *Por el otorgamiento de la autorización para prestar servicios de seguridad privada en el Distrito Federal, se pagarán las siguientes cuotas, con duración por dos años:*

I.- Seguridad y protección de personal \$4,134.00

II.- Protección y vigilancia de lugares y establecimientos \$4,134.00

III.- Custodia de bienes o valores, incluyendo su traslado \$4,134.00

IV.- Por la revalidación de cada autorización ..\$4,134.00

ARTICULO 255 A.- *Por la expedición de la cédula de registro y la consulta de antecedentes no penales del personal operativo, se pagarán derechos a razón de \$83.00 por cada elemento de seguridad con que cuente la empresa prestadora del servicio.*

El pago por expedición de la cédula de registro, será por única vez, y tendrá validez siempre que el personal operativo se encuentre activo en la empresa donde preste sus servicios, y ésta tenga vigente la autorización del permiso que le ha sido otorgado como empresa que presta servicios de seguridad privada.

ARTICULO 256.- ...

I.- ...

a). Heliográficas de plano \$145.00

b). De documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio \$8.00

I BIS.- ...

a). Copia simple o fotostática, por una sola cara \$1.00

b). Copia simple o fotostática en reducción o ampliación, por una sola cara \$1.00

II.- Por reposición de constancia o duplicado de la misma \$21.00

III.- Compulsa de documentos, por hoja \$4.00

III Bis.- Por la búsqueda de documento original en los archivos oficiales \$33.00

IV.- Legalización de firmas \$39.00

V.- Constancia de adeudos \$70.00

VI.- Informe de adeudos \$30.00

VI Bis. Por certificaciones de no adeudo de contribuciones \$35.00

VII.- Por certificaciones de pagos a partir del número de cuenta, placa o registro de contribuyente \$35.00

VII Bis. Por cualquier otra certificación o expedición de constancias distintas a las señaladas en las fracciones anteriores \$70.00

VIII.- ...

a). Por la autorización a personas morales cuyo objeto sea la realización de avalúos \$3,025.00

b). Por la revalidación anual de la autorización a que se refiere el inciso anterior \$1,512.00

- c). Por la autorización a corredores públicos ... \$1,877.00
- d). Por la revalidación anual de la autorización a corredores públicos \$939.00
- e). Por el registro como perito valuador para auxiliar en la práctica de avalúos \$1,512.00
- f). Por la revalidación anual del registro a que se refiere el inciso anterior \$907.00
- g). Por el examen en materia de valuación inmobiliaria \$755.00

Las certificaciones a que se refiere la fracción VI Bis de este artículo, se emitirán previo ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal y a petición del contribuyente.

...

ARTICULO 256 A.- ...

I.- Por revisión de datos catastrales cuando el inmueble no rebase los 1000 m² de terreno o de construcción, por cada número de cuenta predial \$228.00

II.- Por revisión de datos catastrales cuando el inmueble rebase los 1000 m² de terreno o de construcción, por cada número de cuenta predial \$456.00

III.- Por levantamiento topográfico de terreno o de construcción, cuando el inmueble no rebase los 1000 m², por cada número de cuenta predial o por predio fusionado \$685.00

IV.- Por levantamiento topográfico de terreno o de construcción, cuando el inmueble tenga entre 1000 m² y 5000 m², y uso diferente al pecuario, agrícola, forestal o de pastoreo controlado, por cada número de cuenta predial o por predio fusionado \$2,282.00

V.- Por levantamiento topográfico de terreno o de construcción, cuando el inmueble tenga entre 1000 m² y 5000 m², y uso pecuario, agrícola, forestal o de pastoreo controlado, por cada número de cuenta predial o por predio fusionado \$499.00

VI.- Por levantamiento topográfico de terreno o de construcción, cuando el inmueble rebase los 5000 m², y tenga un uso diferente al pecuario, agrícola, forestal o de pastoreo controlado, por cada uno de los conceptos \$0.40xm²

VII.- Por levantamiento topográfico de terreno o de construcción, cuando el inmueble rebase los 5000 m², y

tenga un uso pecuario, agrícola, forestal o de pastoreo controlado, por cada uno de los conceptos \$0.10xm²

ARTICULO 256 B.- ...

I.- Expedición de copias fotostáticas de planos catastrales y de fotografías aéreas:

a). De cartografía catastral escala 1:1,000 por cada una \$149.00

b). De cartografía básica y temática escala 1:10,000 por cada una \$121.00

c). De cartografía urbana e inmobiliaria escala 1:1,000 por cada una \$149.00

d). De planos catastrales correspondientes a un predio, con acotaciones a la escala que se requiera \$234.00

e). De cartografía de regiones catastrales escala 1:5,000 por cada una \$149.00

f). De cartografía delegacional escala 1:10,000 por cada una \$149.00

g). De cartografía de valores unitarios de suelo y corredores de valor escala 1:20,000 por cada una . \$149.00

h) Se deroga.

i). De fotografía aérea a escala 1:4,500 o 1:10,000, por cada una. \$25.00

II.- ...

a). Cartografía urbana digital a nivel manzana, formato de registro DXF o DGN, con cubrimiento por archivo de 2,915 m en X y por 2,766 m en Y \$395.00

b). Cartografía catastral a nivel predio con información inmobiliaria y urbana, en formato de registro DXF o DGN, con cubrimiento por archivo de 20" en longitud y 15" en latitud. \$494.00

c). Base de datos con información catastral física a nivel de predio, del área urbana del Distrito Federal, en formato ASCII \$18,110.00

d). Base de datos con información urbana a nivel manzana, del área urbana del Distrito Federal en formato ASCII \$5,433.00

e). Base de datos gráfica de cartografía catastral escala 1:1000, a nivel de predio, del área urbana del Distrito Federal, en formato DXF o DGN, con cubrimiento por

archivo de 20" en longitud y 15" en latitud .. \$200,000.00

f). Base de datos gráfica de cartografía catastral escala 1:10,000, a nivel de manzana, del área urbana del Distrito Federal, en formato DXF o DGN, con cubrimiento por archivo de 2915 m en X y 2766 m en Y \$100,000.00

ARTICULO 257.- Por el estacionamiento de vehículos en la vía pública se pagará el derecho de estacionamiento conforme a una cuota de \$1.00 por nueve minutos.

...

ARTICULO 261. Están obligados al pago de los derechos establecidos en esta Sección, los locatarios de los mercados públicos del Distrito Federal, por el uso o aprovechamiento de los locales que al efecto les sean asignados por la autoridad competente, así como por las demás instalaciones inherentes, a razón de \$8.00 por metro cuadrado, mismos que se causarán mensualmente y se pagarán por periodos semestrales, dentro del mes siguiente al semestre de que se trate.

ARTICULO 262.- ...

a). Filmaciones con fines comerciales, por día .. \$3,946.00

b). Tomas fotográficas con fines comerciales, por día \$1,972.00

...

Sección Tercera

Del derecho por el uso de los Centros de Transferencia Modal

ARTICULO 263.- Los concesionarios, permisionarios y otros prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, cualquiera que sea el tipo de su unidad, que hagan uso de los bienes muebles e inmuebles por los que el Gobierno del Distrito Federal preste el servicio de Centros de Transferencia Modal, estarán obligados a pagar derechos por periodos mensuales conforme a la cuota mensual de\$90.00.

Los derechos a que se refiere el presente artículo, se pagarán por anticipado dentro de los primeros diez días naturales del mes de que se trate.

I. Se deroga.

II. Se deroga.

III. Se deroga.

IV. Se deroga.

ARTICULO 264.- ...

Cuando la descarga sea menor al porciento del volumen de agua extraída señalado en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán optar por determinar, declarar y pagar este derecho, aplicando el 75% de la cuota mencionada, al volumen de agua efectivamente descargada en la red de drenaje. Para este propósito, los contribuyentes deberán, previamente, instalar dispositivos permanentes de medición continua en las descargas a la red de drenaje del agua que provenga de fuentes diversas a la red de suministro del Distrito Federal, quedando bajo su responsabilidad la instalación y el costo de las adaptaciones y medidores que se requieran para dicha instalación, así como su operación y mantenimiento. Asimismo, para llevar a cabo la autodeterminación, se deberá obtener, durante el mes de enero de cada año, la aprobación de los dispositivos permanentes de medición, por parte de la Comisión de Aguas del Distrito Federal.

...

CAPITULO XI

De las Reducciones

ARTICULO 265 A.- Las personas físicas propietarias o poseedoras de viviendas de interés social o vivienda popular, adquiridas con créditos otorgados dentro de los programas de vivienda oficiales, tendrán derecho a una reducción en el pago del Impuesto Predial, de tal manera que sólo paguen la cuota bimestral mínima correspondiente a ese impuesto.

Para lo anterior, se deberá acreditar que las viviendas se adquirieron con créditos otorgados dentro de los programas de vivienda oficiales, desarrollados por el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores; Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano; Fondo Nacional de Habitaciones Populares; Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular; Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda Popular; Programa de Vivienda Casa Propia; Fideicomiso Programa Casa Propia; Programa Emergente de Viviendas Fase II; Programa de Renovación Habitacional Popular; Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal; Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal; Instituto de Vivienda del Distrito Federal, y los organismos u órganos que los hayan sustituido o los sustituyan.

Asimismo, también se deberá acreditar que el contribuyente es propietario o poseedor del inmueble en que habite, por el que se le haya otorgado el crédito para su adquisición.

ARTICULO 265 B.- Los poseedores de inmuebles que se encuentren previstos en los programas de regularización territorial del Distrito Federal, tendrán derecho a una reducción equivalente al 100%, respecto de las contribuciones a que se refieren los artículos 148, 156, 206, 208, 244, 245, 256, fracciones I, I Bis, II, III y III Bis, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, de la Sección Quinta del Título Tercero del Libro Primero de este Código.

La reducción a que se refiere este artículo, con excepción de las contribuciones que se contemplan en los artículos 148, 156 y 206 de ese Código, también se le otorgará a las personas que hayan regularizado su propiedad dentro de los programas de regularización territorial del Distrito Federal, y tengan la necesidad de llevar a cabo una rectificación de la escritura pública correspondiente.

La reducción por concepto del Impuesto Predial, se dejará de aplicar, cuando el inmueble de que se trate sea regularizado en cuanto a la titularidad de su propiedad.

Para la obtención de la reducción contenida en este artículo, los contribuyentes deberán acreditar su calidad correspondiente por medio de la documentación oficial respectiva.

ARTICULO 265 C.- Los propietarios de vivienda cuya construcción se encuentre irregular, tendrán derecho a una reducción equivalente al 75% por concepto de los derechos correspondientes a las licencias relativas a las construcciones, ampliaciones o modificaciones que se regularicen, y al 100%, por concepto de Derechos por la Autorización para Usar las Redes de Agua y Drenaje.

Para la obtención de la reducción contenida en este artículo, los contribuyentes deberán cumplir con lo siguiente:

I. Acreditar la presentación de su valor catastral y pago del Impuesto Predial, de los últimos cinco años;

II. Que sean inmuebles ubicados dentro del área urbana del Distrito Federal destinados a vivienda en su totalidad o en forma preponderante, cuando la superficie destinada a vivienda no sea inferior al 80% de la superficie total, siempre que el número de viviendas construidas en un mismo inmueble no exceda de 40, ya sea en forma horizontal o vertical, y

III. En el caso de construcciones de vivienda plurifamiliar que tengan más de dos niveles, además de cumplir con lo

dispuesto en las fracciones I y II de este artículo, deberán presentar dictamen de seguridad estructural suscrito por un Director Responsable de Obra o por un Corresponsable en Seguridad Estructural, según corresponda de conformidad con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, acompañando dos juegos de los planos arquitectónicos (plantas, corte y fachada).

ARTICULO 265 D.- Los propietarios o adquirentes de los inmuebles que se encuentren catalogados o declarados como monumentos históricos o artísticos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por el Instituto Nacional de Bellas Artes, y que los sometan a una restauración o remodelación, tendrán derecho a una reducción equivalente al 100%, respecto de las contribuciones a que se refieren los artículos 148, 156, 204 B, 206, 208 y 246, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, de la Sección Quinta del Título Tercero del Libro Primero de este Código, con excepción de los Derechos del Archivo General de Notarías.

Para la obtención de la reducción contenida en este artículo, los contribuyentes deberán presentar el Certificado Provisional de Restauración o, en su caso, la prórroga del referido Certificado, emitidos previamente por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y acreditar que el monto de la inversión es superior a \$300,000.00.

La reducción por concepto del Impuesto Predial, procederá sólo por el plazo que dure la remodelación o restauración del inmueble correspondiente.

Las reducciones que se otorguen con base en este precepto, no excederán la tercera parte de la inversión realizada, y tendrán efectos provisionales hasta en tanto el contribuyente exhiba el Certificado Definitivo de Restauración, con el que se acredite el término de la restauración o remodelación respectiva.

ARTICULO 265 E.- Los propietarios o adquirentes de inmuebles que se encuentren catalogados o declarados como monumentos históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que los habiten, tendrán derecho a una reducción equivalente al 50%, respecto del Impuesto Predial, de tal manera que el contribuyente sólo pague la cuota bimestral mínima que corresponda a ese impuesto.

Para lo anterior, el contribuyente deberá presentar lo siguiente:

I. El certificado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el que se establezca que el inmueble está declarado o catalogado como monumento histórico, así como copia del mismo para su cotejo;

II. Un comprobante a satisfacción de la autoridad, que acredite que el inmueble es habitado por su propietario o adquirente, y

III. La declaración fiscal que corresponda.

ARTICULO 265 F.- Las personas que dentro de los perímetros "A" y "B" del Centro Histórico, tengan por objeto desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios de servicios o comerciales, o la reparación y rehabilitación de inmuebles para desarrollos inmobiliarios de servicios o comerciales, tendrán derecho a una reducción equivalente al 80%, respecto de las contribuciones a que se refieren los artículos 204, 204 B, 206, 207 A, 208, 244, 245 y 246, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, de la Sección Quinta del Título Tercero del Libro Primero de este Código, con excepción de los Derechos del Archivo General de Notarías.

Por lo que se refiere a los Derechos por los Servicios de Construcción y Operación Hidráulica, la reducción se aplicará únicamente por lo que hace a la instalación.

Para la obtención de la reducción contenida en este artículo, los contribuyentes deberán presentar el Certificado que emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el que conste el nombre de la persona que desarrolla el proyecto.

La reducción a que se refiere este precepto, tendrá efectos provisionales, hasta en tanto el contribuyente exhiba la Constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la que se acredite que la construcción se realizó conforme a lo inicialmente manifestado.

ARTICULO 265 G.- Las personas físicas o morales que realicen actividades empresariales de reciclaje, que coadyuven a combatir el deterioro ecológico, tendrán derecho a una reducción equivalente al 50%, respecto del Impuesto sobre Nóminas.

Para la obtención de la reducción a que se refiere este artículo, los contribuyentes deberán presentar una constancia expedida por la Secretaría del Medio Ambiente, con la que se demuestre que el solicitante lleva a cabo actividades de reciclaje, las cuales coadyuvan a combatir el deterioro ecológico.

ARTICULO 265 H.- Las empresas o instituciones que apoyen programas de mejoramiento de condiciones ambientales, tendrán derecho a una reducción equivalente al 50%, respecto del Impuesto sobre Nóminas.

Las empresas o instituciones a que se refiere este artículo, deberán acreditar que ejecutan programas para el mejoramiento de las condiciones ambientales, con una

constancia expedida por la Secretaría del Medio Ambiente, en la que se precise el tipo de programas que realizan y los beneficios que representan para mejorar el medio ambiente, así como la tecnología que aplican para fomentar la preservación, restablecimiento y mejoramiento ambiental del Distrito Federal.

ARTICULO 265 I.- Las empresas que acrediten que iniciaron operaciones empresariales, tendrán derecho a una reducción equivalente al 50%, respecto del Impuesto sobre Nóminas.

Para lo anterior, se deberá presentar una constancia de la Secretaría de Desarrollo Económico en la que se manifieste la creación de empleos productivos y su número.

La reducción a que se refiere este artículo, se aplicará sólo durante el primer ejercicio de actividades de la empresa, durante el cual deberán de llevar un registro especial y por separado en el que se consigne el monto de las erogaciones respecto de las cuales no se pagará Impuestos sobre Nóminas y los conceptos por los que se efectuaron tales erogaciones.

ARTICULO 265 J.- Las empresas que establezcan relaciones laborales con personas con discapacidad, tendrán derecho a una reducción equivalente al 75%, respecto del Impuesto sobre Nóminas.

Las empresas que contraten a personas con discapacidad, para obtener la reducción, deberán acompañar a la primera declaración para pagar el Impuesto sobre Nóminas, que se cause con motivo de la contratación de las personas discapacitadas, lo siguiente:

I. Una manifestación del contribuyente en el sentido de que tiene establecida una relación laboral con personas con discapacidad, expresando el nombre de cada una de ellas y las condiciones de dicha relación, y

II. Certificado que acredite una incapacidad parcial permanente, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conforme a sus respectivas leyes, o del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, tratándose de incapacidades congénitas o de nacimiento.

La reducción a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se podrá incrementar a un 100%, en el caso de que la empresa, además de acreditar la contratación de personas con discapacidad, demuestre con la documentación correspondiente, que ha llevado a cabo adaptaciones, eliminación de barreras físicas o rediseño de sus áreas de trabajo.

ARTICULO 265 K.- Las personas físicas que participen en programas oficiales de beneficio social que requieran

de la autorización para usar las redes de agua y drenaje, tendrán derecho de una reducción equivalente al 95%, respecto de los Derechos por la Autorización para Usar las Redes de Agua y Drenaje.

Las personas físicas para obtener la reducción a que se refiere este artículo, deberán formar parte de los Programas Oficiales de Beneficio Social que al efecto desarrollen las Delegaciones del Distrito Federal.

ARTICULO 265 L.- Los jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez, así como las viudas y huérfanos pensionados, tendrán derecho a una reducción del Impuesto Predial, de tal manera que sólo se pague la cuota mínima que corresponda a ese impuesto.

También serán sujetos de la reducción, las mujeres abandonadas, divorciadas o madres solteras que tengan uno o mas hijos.

Los contribuyentes mencionados en los párrafos anteriores también gozarán de una reducción equivalente al 50% de la cuota bimestral, por concepto de los Derechos por el Suministro de Agua que determine la Tesorería o la Comisión de Aguas del Distrito Federal, correspondiente a la toma de uso doméstico, sin que en ningún caso el monto a pagar sea inferior a la cuota bimestral mínima que corresponda a esos derechos.

Para que los contribuyentes obtengan las reducciones a que se refiere este artículo, según el caso, deberán:

I. Acreditar que cuentan con una pensión o jubilación del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, de Ferrocarriles Nacionales de México, de la Asociación Nacional de Actores, del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., de Nacional Financiera, S.N.C., de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal y de la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal;

II. Ser propietario del inmueble en que habiten, respecto del cual se aplicará única y exclusivamente la reducción;

III. Que el valor catastral del inmueble, de uso habitacional, no exceda de la cantidad de \$90,000.00, y

IV. Acreditar el divorcio o la existencia de los hijos, mediante las actas de divorcio y de nacimiento de los hijos, siempre que éstos sean menores de 18 años. El abandono deberá probarse en términos de la legislación aplicable.

ARTICULO 265 M.- Las personas de la tercera edad sin ingresos fijos y escasos recursos, tendrán derecho a una reducción del Impuesto Predial, equivalente a la diferencia que resulte entre la cuota a pagar y la cuota bimestral mínima que corresponda a ese impuesto, de tal manera que en ningún caso el monto a pagar sea inferior a la cuota bimestral mínima.

Dichos contribuyentes también gozarán de la reducción equivalente al 50% de la cuota bimestral por concepto de los Derechos por el Suministro de Agua, que determine la Tesorería o la Comisión de Aguas del Distrito Federal, correspondiente a la toma de uso doméstico, sin que en ningún caso el monto a pagar sea inferior la cuota bimestral mínima que corresponda a esos derechos.

Los contribuyentes para obtener las reducciones a que se refiere este artículo, deberán:

I. Presentar credencial expedida por el Instituto Nacional de la Senectud, con la que se acredite que se trata de una persona de la tercera edad;

II. Ser propietario del inmueble en que habite, respecto del cual se aplicará única y exclusivamente la reducción;

III. Que el inmueble respecto del cual se solicita la reducción se ubica dentro de las colonias catastrales 0, 1, 2, 3 y 8, a que se refiere el artículo 196 del Código Financiero del Distrito Federal, y

IV. Que el valor catastral del inmueble, de uso habitacional, no exceda de la cantidad de \$90,000.00.

ARTICULO 265 N.- Las organizaciones que apoyen a sectores de la población en condiciones de rezago social y de extrema pobreza, legalmente constituidas, tendrán derecho a una reducción equivalente al 100%, respecto de las contribuciones a que se refieren los artículos 148, 156, 163, 169, 178, 204 B y 206, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, de la Sección Quinta del Título Tercero del Libro Primero de este Código, con excepción de los Derechos del Archivo General de Notarías.

Las organizaciones a que se refiere este artículo, para la obtención de la reducción deberán acreditar que son donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 265 O.- Las Instituciones de Asistencia Privada, legalmente constituidas, tendrán derecho a una reducción equivalente al 100%, respecto de las contribuciones a que se refieren los artículos 148, 156, 163, 169, 178, 196, 204 B y 206, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, de la Sección Quinta del

Título Tercero del Libro Primero de este Código, con excepción de los Derechos del Archivo General de Notarías.

La reducción por concepto del Impuesto Predial, sólo operará respecto de los inmuebles que se destinen en su totalidad o parcialmente al cumplimiento del objetivo de la institución de asistencia privada, y en este último caso, procederá sólo respecto de la parte que se destine a dicho objeto.

Asimismo, la reducción por concepto de Derechos por el Suministro de Agua, operará sólo en el caso que se acredite que la institución de que se trate, se encuentra seriamente afectada en su economía, supervivencia y realización de sus objetivos.

Las instituciones de asistencia privada para obtener la reducción a que se refiere este artículo, deberán presentar una constancia expedida por la Junta de Asistencia Privada para el Distrito Federal, en la que se certifique que toda la información proporcionada por las instituciones es fidedigna, y que realiza las actividades por las cuales fue creada.

ARTICULO 265 P.- *Las personas que lleven a cabo programas para el desarrollo familiar, tendrán derecho a una reducción equivalente al 100%, respecto de las contribuciones a que se refieren los artículos 148, 163, 169, 178 y 232 de este Código.*

La reducción por concepto de Derechos del Registro Civil, se aplicará únicamente para los beneficiarios de los citados programas.

Para obtener la reducción contenida en este artículo, los contribuyentes deberán acreditar que realizan sin ningún fin lucrativo, programas para el desarrollo familiar, acreditando dicha situación con una constancia expedida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, en la que se precise el tipo de programas que realizan y los beneficios que representan para la población de la Ciudad de México.

ARTICULO 265 Q.- *Las personas que lleven a cabo sin ningún fin lucrativo, programas para el desarrollo cultural, tendrán derecho a una reducción equivalente al 100%, respecto de los Impuestos sobre Espectáculos Públicos y sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos.*

Los contribuyentes a que se refiere este artículo, deberán acreditar que realizan programas culturales, con una constancia expedida por el Instituto de Cultura de la Ciudad de México, en la que se precise el tipo de programas que realizan y los beneficios que representan para la población del Distrito Federal.

La reducción por concepto de las contribuciones mencionadas en el primer párrafo, sólo operará respecto de los espectáculos y eventos que se lleven a cabo para allegarse de fondos que les permita solventar los gastos derivados de los programas para el desarrollo cultural.

ARTICULO 265 R.- *Las personas que lleven a cabo sin ningún fin lucrativo, programas para el desarrollo del deporte, tendrán derecho a una reducción equivalente al 100%, respecto de los Impuestos sobre Espectáculos Públicos y sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos.*

Los contribuyentes para obtener la reducción, deberán acreditar que realizan programas para el desarrollo del deporte, con una constancia expedida por el Instituto del Deporte del Distrito Federal, en la que se precise el tipo de programas que realizan y los beneficios que representan para la población del Distrito Federal.

La reducción por concepto de las contribuciones mencionadas en el primer párrafo, sólo operará respecto de los espectáculos y eventos que se lleven a cabo para allegarse de fondos que les permita solventar los gastos derivados de los programas para el desarrollo cultural.

ARTICULO 265 S.- *Las entidades públicas y promotores privados que construyan espacios comerciales tales como plazas, bazares, corredores y mercados, o rehabiliten y adapten inmuebles para este fin en el Distrito Federal, cuyos locales sean enajenados a las personas físicas que en la actualidad ejerzan la actividad comercial en la vía pública de la Ciudad de México, tendrán derecho a una reducción equivalente al 50%, respecto de las contribuciones a que se refieren los artículos 156, 204 B, 206, 208 y 246, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, de la Sección Quinta del Título Tercero del Libro Primero de este Código, con excepción de los Derechos del Archivo General de Notarías.*

Los contribuyentes a que se refiere este artículo, para obtener la reducción, deberán presentar una constancia expedida por la Secretaría de Desarrollo Económico, con la que se acredite la participación en el Programa de Mejoramiento del Comercio Popular, así como la constancia expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la que se apruebe el proyecto de construcción del espacio comercial, y acreditar que los predios donde se pretende realizar el proyecto, se encuentran regularizados en cuanto a la propiedad de los mismos.

ARTICULO 265 T.- *Los comerciantes en vía pública que adquieran un local de los espacios comerciales contruidos por las entidades públicas o promotores privados, y los comerciantes originalmente establecidos y*

cuyo predio donde se encontraba su comercio haya sido objeto de una expropiación y que adquieran un local, tendrán derecho a una reducción equivalente al 50%, respecto del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y Derechos de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad o del Comercio.

Los contribuyentes para obtener la reducción, deberán acreditar mediante constancia expedida por la Secretaría de Desarrollo Económico, que son comerciantes en vía pública o, en su caso, que el lugar donde se encontraba su comercio fue objeto de una expropiación, y que el local fue construido dentro del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular.

ARTICULO 265 U.- *Las personas físicas o morales que inviertan de su propio patrimonio, para realizar obras para el Distrito Federal, de infraestructura hidráulica, instalaciones sanitarias, alumbrado público, arterias principales de tránsito, incluyendo puentes vehiculares, distribuidores viales, vías secundarias, calles colectoras, calles locales, museos, bibliotecas, casas de cultura, parques, plazas, explanadas o jardines con superficies que abarquen de 250M2. hasta 50,000M2., módulos deportivos, centros deportivos, canchas a cubierto y módulos de vigilancia, o cualquier otra obra de interés social, tendrán derecho a una reducción equivalente al 100%, respecto de las contribuciones establecidas en el Capítulo IX en sus Secciones Tercera, Cuarta, Octava y Décima Tercera, del Título Tercero del Libro Primero de este Código.*

Se podrá reducir en un 20% la cantidad a pagar por concepto del Impuesto Predial e Impuesto sobre Nóminas, por el periodo de un año, a aquellas personas que otorguen donaciones en dinero para la realización de obras públicas.

No procederán los beneficios a que se refiere este artículo, tratándose de bienes sujetos a concesión o permiso.

Para ser sujetos del beneficio que prevé este artículo, se deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Donar en favor del Gobierno del Distrito Federal la obra a realizarse, renunciando a ejercer derecho alguno sobre la misma;

II. Celebrar el convenio de donación correspondiente ante autoridad competente, por el contribuyente o por su representante legal;

III. La donación que se realice, será independientemente a la que, en su caso, se encuentre obligado en términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y

IV. La donación que se realice no dará derecho a devolución de bienes.

Asimismo, las personas físicas o morales que aporten recursos de su patrimonio para la realización de las obras a que se refiere este artículo o cualesquiera otras obras sociales en el Distrito Federal, deberán realizar la aportación por conducto de la Secretaría, la cual les entregará el comprobante correspondiente. Estos recursos se destinarán a las citadas obras, mismas que se especificarán en los convenios respectivos, en los cuales también se incluirán, en su caso, las aportaciones a que se comprometa el Gobierno del Distrito Federal.

ARTICULO 265 V.- *Los organismos descentralizados, fideicomisos públicos, promotores públicos, sociales y privados, que desarrollen proyectos relacionados con vivienda de interés social o vivienda popular, tendrán derecho a una reducción equivalente al 100% y 80%, respectivamente, respecto de las contribuciones a que se refieren los artículos 156, 204, 204 B, 206, 207 A, 208, 244, 245 y 253, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, de la Sección Quinta del Título Tercero del Libro Primero de este Código, con excepción de los Derechos del Archivo General de Notarías.*

Por lo que se refiere a los Derechos por los Servicios de Construcción y Operación Hidráulica, contenidos en el artículo 204 de este Código, la reducción se aplicará únicamente por lo que hace a la instalación.

Para obtener las reducciones a que refiere este artículo, los contribuyentes deberán presentar la Constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la que se indique su calidad de promotor de las referidas viviendas.

Las reducciones contenidas en este precepto, tendrán efectos provisionales, hasta en tanto el contribuyente exhiba la Constancia emitida por la citada Secretaría, con la que se acredite que los proyectos de construcción de vivienda de interés social y vivienda popular, se realizaron conforme a lo inicialmente manifestado.

ARTICULO 265 W.- *Las personas que adquieran o regularicen la adquisición de una vivienda de interés social o vivienda popular, tendrán derecho a una reducción equivalente al 100% y 80%, respectivamente, respecto del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y Derechos del Registro Público de la Propiedad o del Comercio.*

Para que los contribuyentes obtengan las reducciones contenidas en este artículo, deberán acreditar que el valor de su vivienda no excede de 15 ó 25 veces el salario mínimo elevado al año, según corresponda.

ARTICULO 265 X.- *Los concesionarios y permisionarios del servicio público, mercantil, privado y particular de transporte de pasajeros y de carga, así como del servicio*

público de transporte individual de pasajeros, tendrán derecho a una reducción equivalente al 20%, respecto de los derechos por los servicios de verificación obligatoria y por la revista reglamentaria anual, contemplados en los artículos 203, 236 y 236 A de este Código.

Las personas a que se refiere este artículo, para obtener la reducción deberán efectuar el pago de los citados derechos en una sola exhibición.

ARTICULO 265 Y.- *Las reducciones contenidas en este Código, se harán efectivas en las Administraciones Tributarias o, en su caso, ante la Comisión de Aguas del Distrito Federal, y se aplicarán siempre que las contribuciones respectivas aún no hayan sido pagadas y no procederá la devolución respecto de las cantidades que se hayan pagado.*

ARTICULO 267 A.- *Los comerciantes ambulantes con puestos semifijos ubicados a más de 200 metros de los mercados establecidos, que pueden ocupar una superficie de hasta dos metros cuadrados, así como los comerciantes en las modalidades de tianguis, mercados sobre ruedas, concentraciones y bazares, que pueden ocupar una superficie máxima de seis metros cuadrados, siempre que cuenten con el permiso vigente expedido por las delegaciones para llevar a cabo actividades mercantiles de cualquier tipo, o concesión otorgada por autoridad competente, pagarán aprovechamientos por el uso o explotación de las vías y áreas públicas de conformidad con las siguientes cuotas diarias por metro cuadrado y para cada zona:*

Grupo 1:

- a). Zona A \$6.00
- b). Zona B \$4.00
- c). Zona C \$3.00

Grupo 2:

- a). Zona A \$2.50
- b). Zona B \$2.00
- c). Zona C \$1.50

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, cada grupo comprende los siguientes giros comerciales:

Grupo 1:

*Alimentos y bebidas preparados.
Artículos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y muebles.*

Accesorios para automóviles.

Discos y cassetes de audio y video.

Joyería y relojería.

Ropa y calzado.

Artículos de ferretería y tlapalería.

Aceites, lubricantes y auditivos para vehículos automotores.

Accesorios de vestir, perfumes, artículos de bisutería, cosméticos y similares.

Telas y mercería.

Accesorios para el hogar.

Juguetes.

Dulces y refrescos.

Artículos deportivos.

Productos naturistas.

Artículos esotéricos y religiosos.

Alimentos naturales.

Abarrotes.

Artículos de papelería y escritorio.

Artesanías.

Instrumentos musicales.

Alimento y accesorios para animales.

Plantas de ornato y accesorios.

Grupo 2:

Se integra por los giros señalados anteriormente, cuya comercialización producen un rendimiento equivalente a un salario mínimo diario o menor en el Distrito Federal.

Los ciegos no pagarán los aprovechamientos a que se refieren los párrafos anteriores, siempre que personalmente usen o exploten las vías y áreas públicas.

Tratándose de restaurantes, restaurantes-bares o cafeterías que extiendan la prestación de sus servicios a la vía

pública, en los términos de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, se pagarán las siguientes cuotas mensuales por metro cuadrado y para cada zona:

I. Restaurantes-bares:

- a). Zona A \$175.00*
- b). Zona B \$150.00*
- c). Zona C \$125.00*

II. Restaurantes:

- a). Zona A \$150.00*
- b). Zona B \$125.00*
- c). Zona C \$100.00*

III. Cafeterías:

- a). Zona A \$125.00*
- b). Zona B \$100.00*
- c). Zona C \$75.00*

Cuando la superficie ocupada por los establecimientos mercantiles a que se refiere el párrafo anterior, exceda de 20 metros cuadrados y hasta 40 metros cuadrados, las cuotas por metro cuadrado que se establecen en la tarifa, se incrementarán con el factor de 1.25. La cuota que resulte se aplicará a la totalidad de la superficie ocupada en la vía pública.

En los casos en que la superficie ocupada en la vía pública exceda de 40 metros cuadrados, las cuotas por metro cuadrado señaladas en la tarifa, se incrementarán con el factor de 1.50. La superficie ocupada no podrá exceder de 60 metros cuadrados, salvo que se trate de establecimientos mercantiles que extiendan la prestación de sus servicios en vías cerradas al tránsito vehicular, en cuyo caso la extensión máxima permitida será de 100 metros cuadrados.

Las cuotas de los puestos fijos que se encuentren autorizados en la zona de mercados, y que cumplan la normatividad vigente de conformidad con el Reglamento de Mercados, no podrán ser superiores a \$38.20 por día, ni inferiores a \$12.75 por día de ocupación, dependiendo de la ubicación del área ocupada para esas actividades.

Las personas obligadas al pago de las cuotas a que se refiere el presente artículo, deberán cubrirlas a su elección, por meses anticipados, o en forma trimestral.

ARTICULO 295.- ...

I. Los provenientes de cuotas de seguridad social destinadas a las Cajas de Previsión de la Policía Preventiva y de los Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal.

II.- a III.

...

ARTICULO 296.- ...

I.- ...

II.- Las sociedades nacionales de crédito, instituciones de crédito y los particulares legalmente autorizados, concentrarán los fondos al día hábil siguiente de recibidos.

...

ARTICULO 297.- *El servicio de concentración de fondos, podrá efectuarse por conducto de sociedades nacionales de crédito e instituciones de crédito que autorice la Secretaría.*

ARTICULO 298.- ...

La recolección de fondos, podrá prestarse por las sociedades nacionales de crédito, las instituciones de crédito o los particulares que autorice la Secretaría.

ARTICULO 308.- ...

Los bienes y valores que se encuentren a disposición de la autoridad investigadora del Ministerio Público del Distrito Federal o de las judiciales del Distrito Federal, conforme al artículo 41 del Código Penal para el Distrito Federal, y que no hubieren sido recogidos por quien tenga derecho o interés jurídico en ellos, se enajenarán en subasta o licitación pública, o mediante adjudicación directa cuando se trate de bienes perecederos o que su mantenimiento sea costoso. El procedimiento administrativo de enajenación, estará a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, según corresponda, con la participación en las licitaciones de la Secretaría y la Oficialía Mayor del Distrito Federal.

...

ARTICULO 310.- *Los bienes a que se refiere este Capítulo una vez que se verifique la documentación justificatoria que se acompañe a los mismos, y en caso de no haber*

impedimento legal alguno, podrán ser rematados en subasta pública, conforme a lo previsto en el Capítulo V del Título Segundo, del Libro Primero, de este Código, enajenados fuera de remate o adjudicados en forma definitiva al Distrito Federal conforme a las reglas de carácter general que dicte la Secretaría. El producto del remate quedará en depósito en la Secretaría a efecto de ser aplicado presupuestalmente en los programas autorizados, o bien, para proceder de acuerdo con las instrucciones de las autoridades judiciales o disposiciones legales aplicables. En tratándose de adjudicaciones directas, subastas o licitaciones públicas, instrumentadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, o el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quedará en depósito ante la Secretaría el diez por ciento del producto que se obtenga en cada evento, por un plazo de seis meses a efecto de facilitar y cumplir con las indemnizaciones que en derecho procedan; quedando bajo la guardia y custodia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el noventa por ciento restante, según corresponda, para ser aplicado a las indemnizaciones cuando se rebase el diez por ciento y para el mejoramiento de la procuración de justicia en el caso de los bienes que hubiesen estado a disposición de la autoridad investigadora, o para el mejoramiento de la administración de justicia en el caso de los bienes que hubiesen estado a disposición de las autoridades judiciales, de conformidad con el artículo 41 del Código Penal para el Distrito Federal, y con los lineamientos expedidos para el efecto por las autoridades competentes.

ARTICULO 321.- ...

Los fondos presupuestales o recursos provenientes del Gobierno del Distrito Federal, y en su caso los rendimientos obtenidos, que al término del ejercicio conserven los órganos a que se refiere el Artículo 385 de este Código, deberán destinarse, previa aprobación de sus órganos de gobierno, a programas prioritarios, o bien, para los fines que correspondan de acuerdo a su origen. Asimismo, se informará a la Secretaría dentro del mes de enero, el monto y destino que respecto de dichos recursos se haya determinado.

Las coordinadoras de sector deberán vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, respecto de sus entidades coordinadas.

ARTICULO 335.- *La devolución de las cantidades percibidas indebidamente por el Distrito Federal y las que procedan de conformidad con lo previsto en este Código, se efectuarán por conducto de la Secretaría, mediante cheque o por otros medios de pago. Las Instituciones de crédito autorizadas podrán llevar a cabo dicha devolución mediante autorización expresa y por*

escrito de la Secretaría, a través de la expedición de cheques de caja. Para tal efecto, las autoridades fiscales competentes dictarán de oficio o a petición de parte, las resoluciones que procedan.

ARTICULO 344.- ...

I. Salvo disposición expresa, la forma de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a favor de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, será:

a). Mediante fianza otorgada por Compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, o

b). Mediante depósito de dinero.

II.- a VII.

ARTICULO 378.-...

I.- a V. ...

VI. Los montos de endeudamiento propuestos al Congreso de la Unión;

VII. Los montos de los recursos públicos que correspondan a los órganos autónomos, y

VIII. En general, toda la información programática-presupuestal que se considere útil para mostrar la proposición en forma clara y completa.

Sección Tercera

De los proyectos de los órganos autónomos,

ARTICULO 385.- *Para la elaboración de su presupuesto de egresos, gozarán de autonomía los siguientes órganos:*

I.- La Asamblea,

II.- El Tribunal, y

III.- Las Autoridades Electorales.

IV.- La Comisión;

V.- El Tribunal Contenciosos, y

VI.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.

ARTICULO 385 A.- *Se deroga.*

ARTICULO 386.- *Los órganos a que se refiere el artículo 385 elaborarán anualmente sus respectivos proyectos de*

presupuesto de egresos atendiendo a las previsiones del ingreso que la Secretaría les comunique y los remitirán al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que los incorpore en artículos específicos dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

El Jefe de Gobierno podrá emitir opinión respecto de los proyectos de presupuesto de estos órganos, la cual remitirá a la Asamblea, en documento distinto al proyecto de Presupuesto de Egresos para su consideración.

ARTICULO 391.- ...

I.- a III. ...

IV. La Jefatura del Gobierno del Distrito Federal;

V. El Tribunal Contencioso;

VI. Las Autoridades Electorales;

VII. Las Dependencias y Organos Desconcentrados, y

VIII. Las Entidades.

IX.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.

...

ARTICULO 392.- El gasto público del Distrito Federal que ejerzan los órganos locales autónomos, las dependencias, órganos desconcentrados y entidades a que se refiere el artículo anterior, se ajustará al monto autorizado para los programas, capítulos, conceptos y, en su caso, partidas presupuestales, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto.

Para la ejecución del gasto público, los órganos autónomos, las dependencias, órganos desconcentrados y entidades antes mencionados, deberán ajustarse a las previsiones de éste Código y, salvo los órganos señalados en el artículo 385, a las reglas de carácter general que al efecto expida la Secretaría.

ARTICULO 393 C.- Quienes efectúen gasto público, con cargo al Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, estarán obligados a proporcionar a la Secretaría la información que les solicite, con excepción de los órganos señalados en el artículo 385 de este Código, quienes sólo enviarán la información correspondiente para la integración de los informes trimestrales de avance programático-presupuestal y para el cierre de la Cuenta Pública.

ARTICULO 393 D.- Las dependencias y órganos desconcentrados, así como los órganos señalados en el

artículo 385 de este Código, informarán a la Secretaría a más tardar el día 15 de febrero de cada año, el monto y características de su pasivo circulante al fin del año anterior.

Sección Tercera

Del ejercicio presupuestal de los órganos político-administrativos

ARTICULO 415 A.- En la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos, el Jefe de Gobierno, deberá proponer a la Asamblea Legislativa asignaciones presupuestales para que las Delegaciones cumplan con el ejercicio de las actividades a su cargo, considerando los siguientes criterios:

I. Población;

II. Marginación;

III. Infraestructura, y

IV. Equipamiento urbano.

Las Delegaciones informarán al Jefe de Gobierno del ejercicio de sus asignaciones presupuestarias para los efectos de la Cuenta Pública, de conformidad con lo que establece el Estatuto y este Código.

Las Delegaciones ejercerán con autonomía de gestión sus presupuestos, observando los acuerdos administrativos de carácter general de la Administración Pública Central, así como lo que se regule en materia de coordinación con las Delegaciones.

Las transferencias presupuestarias que no afecten programas prioritarios, serán decididas por el Jefe Delegacional, informando del ejercicio de esta atribución al Jefe de Gobierno de manera trimestral por conducto de la Secretaría.

ARTICULO 415 B.- Los Jefes Delegacionales de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, propondrán al Jefe de Gobierno los proyectos de Programas Operativos Anuales y de Presupuesto de la Delegación, sujetándose a las estimaciones de ingresos para el Distrito Federal.

Sección Cuarta

Del ejercicio presupuestal de los órganos autónomos,

ARTICULO 416.- Los órganos a los que se refiere el artículo 385 de este Código, manejarán, administrarán y ejercerán de manera autónoma su presupuesto, debiendo sujetarse a sus propias leyes, así como a las normas que al respecto emitan en congruencia con lo previsto en este Código.

ARTICULO 417.- El ejercicio presupuestal de los órganos a que se refiere el artículo anterior, será responsabilidad

exclusiva de las unidades administrativas y de los servidores públicos que señalen sus propias normas de organización interna.

ARTICULO 417 A.- Los órganos a los que se refiere el artículo 385 de este Código, en el ejercicio de su gasto, podrán efectuar las adecuaciones necesarias para el mejor cumplimiento de sus programas, previa autorización de su órgano competente, sin exceder sus presupuestos autorizados.

Sección Quinta

Del gasto público por servicios personales

ARTICULO 422.- ...

Las dependencias y órganos desconcentrados, por conducto de su titular, podrán otorgar donativos para beneficio social, siempre que cuenten con suficiencia presupuestal y la previa autorización de la Secretaría, que emita a través del área competente.

ARTICULO 428.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá modificar el contenido orgánico y financiero de los programas de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, incluidas en el Presupuesto de Egresos, cuando por razones de interés social, económico o seguridad pública lo considere necesario, de lo cual se dará cuenta en su oportunidad a la Asamblea.

ARTICULO 435.- ...

La Secretaría, a fin de uniformar los reportes y la información que corresponda, propondrá a los órganos a los que se refiere el artículo 385 de este Código, los catálogos de cuentas que deberán utilizar. Los catálogos de las entidades, serán autorizados expresamente por la Secretaría.

ARTICULO 437.- Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, suministrarán a la Secretaría, con la periodicidad que ésta lo determine, la información presupuestal, contable, financiera y de otra índole que requiera. A su vez, la Secretaría proporcionará a la Asamblea, los informes relacionados con esta materia, determinados en la Constitución, el Estatuto y en este Código.

ARTICULO 438.- La Secretaría girará las instrucciones sobre la forma y términos en que las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, deben llevar sus registros auxiliares y, en su caso, rendirles sus informes y cuentas para fines contables y de consolidación. Asimismo, examinará periódicamente el funcionamiento del sistema y los procedimientos de contabilidad y podrá autorizar su

modificación o simplificación. La propia Secretaría sugerirá a los órganos a los que se refiere el artículo 385 de este Código, la forma y términos en que deberán llevar sus propios registros auxiliares y contabilidad.

ARTICULO 439.- ...

Las áreas competentes de los órganos considerados con autonomía para elaborar su presupuesto, según el artículo 385 de este Código, remitirán oportunamente los estados financieros e información a que se refiere el párrafo anterior al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que éste ordene su incorporación, en capítulo por separado, a los informes trimestrales.

ARTICULO 454.- En el caso de los órganos autónomos considerados en el artículo 385 de este Código, cuando se presente alguna de las situaciones enunciadas en el artículo anterior, la Secretaría les sugerirá los ajustes correspondientes.

ARTICULO 467.- ...

I.- a II. ...

III. El registro contable de los subsidios y aportaciones deberá efectuarse al expedirse el recibo de retiro de fondos correspondientes, de tal forma que permita identificar el destino y beneficiario de los mismos;

IV. La contabilización de los pagos correspondientes al pasivo circulante por operaciones de ejercicios anteriores se ajustará a las instrucciones que dicte la Secretaría, y

V. Las disponibilidades de financiamiento titulado de ejercicios fiscales anteriores, no implicarán nuevo registro de ingresos para el año en que se eroguen.

ARTICULO 472.- ...

I.- ...

a). Estado del ejercicio del presupuesto, previamente conciliado con el área respectiva de la Secretaría;

b). a c). ...

II.- a VI. ...

ARTICULO 481.- ...

Las áreas competentes de los órganos a los que se refiere el artículo 385 de este Código, remitirán oportunamente los estados financieros e información a que se refiere el párrafo anterior al Jefe de Gobierno del Distrito Federal,

para que éste ordene su incorporación a la Cuenta Pública del Distrito Federal, en capítulo por separado.

ARTICULO 483.- ...

Las áreas competentes de los órganos a los que se refiere el artículo 385 de este Código, remitirán oportunamente los estados financieros e información a que se refiere el párrafo anterior al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que éste ordene su incorporación a la Cuenta Pública del Distrito Federal, en capítulo por separado.

ARTICULO 485.- ...

I.- a IV. ...

La información a que se refiere este artículo, deberá estar suscrita por el titular de la entidad y los de sus órganos encargados del manejo y ejercicio de sus recursos, así como contar con la aprobación de la respectiva dependencia coordinadora de sector, por cuyo conducto se hará llegar a la Secretaría, sin perjuicio de que en caso de incumplimiento la solicite directamente a las entidades coordinadas.

ARTICULO 485 A.- Los titulares de las entidades, así como los de sus órganos encargados del manejo y ejercicio de sus recursos, serán directamente responsables de la información presupuestal, financiera, programática y contable proporcionada a la Secretaría para la integración de la Cuenta Pública.

ARTICULO 502.- Las infracciones relacionadas con los padrones de contribuyentes, darán lugar a la imposición de una multa de \$192.00 a \$335.00, en los siguientes casos:

I.- a II. ...

ARTICULO 503.- Cuando los contribuyentes de los impuestos sobre espectáculos públicos y loterías, rifas, sorteos y concursos, omitan presentar las licencias o permisos a que se refieren los artículos 167, fracción II y 175, fracción VII, de este Código, según el caso, se les impondrá una multa de \$479.00 a \$958.00.

...

ARTICULO 504.- ...

I. Por no presentar el aviso de no causación del impuesto sobre adquisición de inmuebles a que se refiere el artículo 161 de este Código, multa de \$1,438.00 a \$3,647.00;

II. Por no realizar las manifestaciones o presentar los documentos a que se refieren los artículos 167, fracción III

y 175, fracción VIII, de este Código, o hacerlo extemporáneamente, multa de \$1,438.00 a \$3,647.00.

III. Por no presentar el aviso a las autoridades competentes, sobre las descomposturas del medidor, en los términos del artículo 200, fracción III, de este Código, tratándose de tomas de uso no doméstico, multa de \$274.00 a \$479.00; en el caso de tomas de uso doméstico, la multa será en cantidad de \$137.00 a \$240.00;

IV.-.....

V. Por no presentar aviso de cambio de domicilio, una multa de \$192.00 a \$335.00;

VI. Por no presentar los contratos de arrendamiento a que se refiere el párrafo quinto de la fracción II del artículo 149 o hacerlo extemporáneamente, multa de \$685.00 a \$1,597.00 por cada contrato no presentado o presentado extemporáneamente, tratándose de inmuebles de uso habitacional. Tratándose de inmuebles de uso no habitacional, la multa será de \$1,826.00 a \$3,195.00 por cada contrato no presentado o presentado extemporáneamente;

VII. Por no señalar en las declaraciones y avisos que se presenten ante la autoridad fiscal, la clave a que se refiere el artículo 63, fracción I, inciso a), párrafo segundo, de este Código, señalarla con errores o por no utilizar el código de barras, multa de \$171.00 a \$342.00;

VIII. Por no presentar el aviso de domicilio para oír y recibir notificaciones en el caso de inmuebles sin construcción o desocupados, a que se refiere el inciso b) de la fracción I del artículo 63, multa de \$719.00 a \$1,766.00;

IX. Por no poner nombre o domicilio, o señalarlos equivocadamente en las declaraciones y avisos que se presenten ante la autoridad fiscal, multa de \$342.00 a \$571.00;

X. Por cada dato no asentado o asentado incorrectamente, en las declaraciones y avisos fiscales, multa de \$57.00 a \$114.00, por cada dato; y

XI. Omitir la presentación de anexos en las declaraciones y avisos fiscales, multa de \$57.00 a \$114.00, por cada anexo.

ARTICULO 505.- ...

I. ...

a). La mayor que resulte entre \$192.00 y el 8% de la contribución que debió declararse tratándose de contribuciones relacionadas con inmuebles de uso habitacional.

b). La mayor que resulte entre \$381.00 y el 10% de la contribución que debió declararse, en los casos distintos de los previstos en el inciso anterior.

II. Por no presentar las declaraciones que tengan un carácter diverso a las de la fracción anterior, la mayor que resulte entre \$288.00 y el 8% de la contribución que debió declararse.

...

ARTICULO 505 A.- Por no cumplir los requerimientos a que se refiere la fracción III del artículo 81 de este Código, se aplicará una sanción de \$192.00 por cada requerimiento.

...

ARTICULO 509.- ...

I. De \$3,947.00 a \$7,896.00, por no llevar algún libro o registro especial, que establezcan las disposiciones fiscales;

II. De \$948.00 a \$2,131.00, por no hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas; hacerlos incompletos o inexactos; o hacerlos fuera del plazo respectivo;

III. De \$4,736.00 a \$12,632.00, por no conservar la contabilidad a disposición de la autoridad por el plazo que establezcan las disposiciones fiscales;

IV. De \$1,894.00 a \$3,947.00, por microfilmear o grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, documentación o información para efectos fiscales sin cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones relativas, y

V. De \$7,896.00 a \$39,474.00, por no dictaminar el cumplimiento de las obligaciones fiscales o no presentar el dictamen conforme lo establecen las disposiciones fiscales, habiendo formulado el aviso respectivo, en su caso.

ARTICULO 510.- Cuando los notarios, corredores públicos y demás personas que por disposición legal tengan fe pública, así como los jueces omitan el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas a su cargo por los artículos 38 y 161, último párrafo de este Código, se les impondrá una multa de \$2,159.00 a \$3,838.00.

ARTICULO 511.- A los fedatarios que no incluyan en el documento en que conste alguna adquisición, la cláusula

especial a que se refiere el artículo 161 de este Código, se les impondrá una multa de \$2,159.00 a \$3,838.00.

ARTICULO 512.- En el caso de que los peritos autorizados para practicar avalúos y las personas morales a que se alude en el artículo 35 de este Código, no se ajusten a los procedimientos y lineamientos técnicos y a los manuales de valuación emitidos por la autoridad fiscal, se les impondrá una multa de \$7,896.00 a \$39,474.00.

ARTICULO 513.- ...

I.- ...

DIAMETRO DE LA INSTALACION EXPRESADA EN MILIMETROS	MULTA	
	DE	A
HASTA 13	\$2,303.00	\$4,607.00
HASTA 19	2,750.00	5,502.00
HASTA 26	3,437.00	6,862.00
HASTA 32	4,573.00	9,130.00
HASTA 39	5,947.00	11,882.00
HASTA 51	7,307.00	14,614.00
HASTA 64	8,683.00	17,366.00
DE 64 EN ADELANTE	8,492.00	22,658.00

DIAMETRO DE LA INSTALACION EXPRESADA EN CENTIMETROS	MULTA	
	DE	A
HASTA 150	\$1,985.00	\$3,971.00
HASTA 200	2,077.00	4,153.00
HASTA 250	2,349.00	4,699.00
HASTA 300	2,647.00	5,294.00
HASTA 380	3,206.00	6,412.00
HASTA 450	3,881.00	7,761.00
DE 610 EN ADELANTE	10,317.00	20,634.00

II. Por comercializar el agua suministrada por el Distrito Federal a través de tomas particulares conectadas a la red pública si en la misma existe aparato medidor, de \$3,437.00 a \$6,862.00; si no existe o tratándose de tomas de uso no doméstico, la comercialización se hace sin contar con autorización, la multa será de \$6,862.00 a \$13,719.00;

III. Por emplear mecanismos para succionar agua de las tuberías de distribución, de \$53,625.00 a \$107,238.00,

sin perjuicio de pago de la reparación del desperfecto causado, que tendrá el carácter de crédito fiscal;

IV.- ...

a). Tratándose de tomas de uso doméstico o de cualquier toma de agua cuyo diámetro de entrada no sea mayor de 19 milímetros, de \$564.00 a \$2,067.00.

b). Tratándose de tomas de agua de uso no doméstico, de \$2,255.00 a \$14,091.00.

...

V. Por no presentar los avisos a que se refiere el artículo 200, fracción VI, de este Código, la multa será de \$926.00 a \$1,855.00 cuando se trate de tomas con diámetro de entrada de 19 milímetros o inferiores y de \$1,855.00 a \$3,708.00 para diámetros superiores;

VI. Por el segundo aviso de descompostura de su medidor, que motive la práctica por las autoridades fiscales de una segunda visita, siempre que en la primera y segunda visita se verifique que el aparato medidor funciona correctamente, la multa será de \$342.00;

VII. Por derramar azolve a las coladeras, pozos, lumbreras y demás accesorios de la red de drenaje en la vía pública sin la autorización correspondiente, la multa será de \$13,152.00 a \$18,790.00;

VIII. A los usuarios que practiquen, encubran o consientan que se lleven a cabo instalaciones o modificaciones de tomas tipo cuello de garza para el abastecimiento de agua potable o agua residual tratada, sin la autorización respectiva de la autoridad responsable de la operación hidráulica, se le impondrá una multa de \$22,820.00 a \$45,640.00, y

IX. Por llevar a cabo la interconexión entre la toma de agua potable y la de agua residual tratada, se sancionará con una multa de \$46,998.00 a \$93,986.00, sin perjuicio de la aplicación de sanciones previstas por la Ley de Salud para el Distrito Federal.

ARTICULO 513 A.- *Cuando se deje sin efectos una notificación practicada ilegalmente, se impondrá al notificador o actuario que la hubiere practicado, una multa de diez veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.*

ARTICULO 514.- *A quien cometa las infracciones que a continuación se señalan, relacionadas con las facultades de comprobación, se le impondrá una multa de \$1,919.00 a \$4,315.00.*

I.- a IV. ...

ARTICULO 518 A.- *Cuando dentro de la averiguación previa, se paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios, o se garanticen a satisfacción de la autoridad fiscal, se podrá otorgar el desistimiento por parte de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal.*

ARTICULO 524.- *Para los efectos de este Título y a falta de disposición expresa en este Código, se aplicará supletoriamente el Código Penal para el Distrito Federal.*

ARTICULO 525.- ...

I.- a III. ...

IV. Ordene o practique visitas domiciliarias, requerimientos de pagos o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente, así como que intimide con amenazas o engaños al visitado para obtener beneficios personales.

V. Asesore y aconseje a los contribuyentes, con el propósito de que éstos omitan el pago de las contribuciones a su cargo;

VI. Colabore en la alteración o inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad o en los documentos que se expidan, y

VII. Sea cómplice en cualquier forma no prevista, en la comisión de infracciones fiscales.

ARTICULO 531 A.- *Se impondrá de dos a nueve años de prisión:*

I.- a II. ...

III. Al que altere en su valor, en el año de emisión, en el resello, leyenda, tipo, a las calcomanías, permiso, autorizaciones, formas valoradas o numeradas, placas o tarjetones emitidos conforme a este Código, y

IV.-

ARTICULO 531 B.- *Se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión:*

I.- a IV. ...

ARTICULO 531 C.- *A quienes en forma concertada preparen, inicien o ejecuten actividades contrarias a los servicios de tesorería a que se refiere este Código, que produzcan un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del*

Distrito Federal, se les impondrá sanción de dos a nueve años de prisión.

ARTICULO 533.- ...

I.- ...

II. Multa que no exceda de \$1,409.00.

...

ARTICULO 539.- ...

La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales, también podrá acreditarse con la constancia de inscripción en el registro de representantes legales que para tal efecto lleven, en su caso, cada una de las autoridades fiscales a que se refiere este Código.

...

ARTICULO 540.- *En los plazos fijados en días, solo se computarán los hábiles. En los no fijados por días sino por periodos, o bien, en aquéllos en que señalen una fecha determinada para la extinción del término, se computarán también los inhábiles, pero si el último día no están abiertas al público en general las oficinas receptoras, concluirá al día siguiente hábil. Asimismo, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, cuando sea viernes el último día del plazo en que se deban presentar declaraciones. Los plazos principiarán a correr al día siguiente al de la fecha en que surta efectos la notificación, así como cuando se realicen los hechos o las circunstancias que las disposiciones legales o los actos administrativos prevean.*

...

ARTICULO 543.- ...

Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones que contendrán un resumen de las resoluciones por notificar, dichas publicaciones deberán efectuarse por dos días consecutivos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en uno de los periódicos de mayor circulación.

ARTICULO 550.- ...

I.- a IV. ...

V. Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo quede demostrado que no existe el acto o resolución recurrida.

Transitorios del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito

Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 1998.

ARTICULO SEXTO.- *A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los propietarios o poseedores de inmuebles sin construcción o desocupados, contarán con un plazo de 30 días hábiles, para presentar el aviso a que se refiere el artículo 63, fracción I, inciso b) de este Código.*

ARTICULO SEGUNDO.- *Para los efectos de emisión de valores unitarios del suelo, construcciones adheridas a él e instalaciones especiales a que se refiere el artículo 151 del Código Financiero, se presentan a continuación las siguientes tablas cuya aplicación se hará conforme a las definiciones y normas que se indican:*

DEFINICIONES

I. REGION: *Es una circunscripción convencional del territorio del Distrito Federal determinada con fines de control catastral de los inmuebles, representada con los tres primeros dígitos del número de cuenta catastral asignado por la autoridad fiscal.*

II. MANZANA: *Es una parte de una región que regularmente está delimitada por tres o más calles o límites semejantes, representada por los tres siguientes dígitos del mencionado número de cuenta, la que tiene otros dos que representan el lote, que es el número asignado a cada uno de los inmuebles que integran en conjunto una manzana, y tres dígitos más en el caso de condominios, para identificar a cada una de las localidades de un condominio construido en un lote.*

III. COLONIA CATASTRAL: *Es una zona de territorio continuo del Distrito Federal, que comprende grupos de manzanas o lotes, la cual tiene asignado un valor unitario de suelo, expresado en pesos por metro cuadrado, en atención a la homogeneidad observable en cuanto a características y valor comercial. Existen dos tipos de colonia catastral: Área de valor y corredor de valor.*

a). Colonia Catastral tipo área de valor: *Grupo de manzanas con características similares en infraestructura, equipamiento urbano, tipo de inmuebles y dinámica inmobiliaria.*

Cada área está identificada con la letra A, seguida de seis dígitos, correspondiendo los dos primeros a la delegación respectiva, los tres siguientes a un número progresivo y el último a un dígito clasificador de la colonia catastral.

Dicha clasificación es la siguiente:

0: *Colonia catastral que corresponde a áreas periféricas de valor bajo con desarrollo incipiente, con usos del suelo*

que están iniciando su incorporación al área urbana y con equipamientos y servicios dispersos.

1: Colonia catastral que corresponde a áreas periféricas o intermedias de valor bajo, en proceso de transición o cierta consolidación, con usos del suelo eminentemente habitacionales y con equipamientos y servicios semidispersos y de pequeña escala.

2: Colonia catastral que corresponde a áreas intermedias de valor medio bajo, en proceso de transición o consolidación, con usos del suelo eminentemente habitacionales y/o incipiente mezcla de usos y con equipamientos y servicios semidispersos y de regular escala.

3: Colonia catastral que corresponde a áreas intermedias de valor medio con cierto proceso de transición o en consolidación, con usos del suelo eminentemente habitacionales y/o mezcla de usos y con equipamientos y servicios semiconcentrados y de regular escala.

4: Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, equipamiento urbano en escala significativa en la zona o zonas cercanas, con usos de suelo habitacional y/o mixtos y nivel socioeconómico de medio a medio alto.

5: Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, equipamiento urbano en escala significativa en la zona o zonas cercanas, usos de suelo habitacionales y/o mixtos y nivel socioeconómico de medio alto a alto.

6: Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas con servicios completos, equipamiento urbano en escala significativa en la zona o zonas cercanas, usos de suelo habitacional y/o mixtos y nivel socioeconómico de alto a muy alto.

7: Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, equipamiento urbano de pequeña escala significativa, usos de suelo preponderantemente comercial y de servicios y nivel socioeconómico de medio bajo a alto.

8: Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas con servicios completos, equipamiento urbano de diversas escalas y con usos de suelo eminentemente industrial.

9: Colonia catastral que corresponde a áreas ubicadas en el suelo de conservación, con usos agrícola, forestal, pecuario, de reserva ecológica y/o explotación minera entre otros, con nulos o escasos servicios y equipamiento urbano distante.

b). Colonia catastral tipo corredor de valor: Conjunto de inmuebles que por las características de uso al que se destinan, principalmente no habitacional, (tales como comercial, industrial, servicios, oficinas, entre otros, y/o mixtos –incluyendo habitacional–), y cuyo frente o frentes colindan con una vialidad pública del Distrito Federal, independientemente de su acceso o entrada principal, se ha convertido en un corredor de valor con mayor actividad económica y mayor valor comercial del suelo respecto del predominante de la zona. El valor por metro cuadrado de suelo del corredor de valor se encuentra contenido en el presente Código Financiero.

Cada corredor está identificado con la letra C, seguida de dos dígitos, que corresponden a la delegación, y una literal progresiva.

IV. TIPO: Corresponde a la clasificación de las construcciones, considerando el uso al que se les dedica y el rango de niveles de la construcción, de acuerdo con lo siguiente:

a). **Uso:** Corresponde al aprovechamiento genérico que tiene el inmueble y se clasifica en:

a). 1.- Construcciones que cuentan con cubiertas o techos (completos o semicompletos).

H: Habitación. L: Hoteles. D: Deportes. C: Comercio. O: Oficinas. S: Salud. Q: Cultura. A: Abasto. I: Industria. K: Comunicaciones.

(H) Habitación.- Se refiere a las edificaciones en donde residen individual o colectivamente las personas o familias y comprende todo tipo de vivienda a la que se incluyen los cuartos de servicio, patios, andadores, estacionamientos, cocheras, jaulas de tendido y elementos asociados a ésta. También se incluyen orfanatorios, asilos, casas cuna y similares.

(L) Hoteles.- Se refiere a las edificaciones destinadas a prestar servicio de alojamiento temporal, comprendiendo hoteles, moteles, casas de huéspedes, albergues y similares.

(D) Deportes.- Se refiere a aquellas edificaciones e instalaciones en donde se practican ejercicios de acondicionamiento físico y/o se realicen y se presenten todo tipo de espectáculos deportivos, tales como: centros deportivos, clubes, pistas, canchas, gimnasios, balnearios, albercas públicas y privadas, academias de aeróbics y artes marciales, estadios, autódromos, plazas taurinas, arenas de box y luchas, velódromos, campos de tiro, centros de equitación y lienzos charros, así como instalaciones similares.

(C) Comercio.- Se refiere a las edificaciones destinadas a la compra-venta o intercambio de artículos de consumo y

servicios, tales como: tiendas, panaderías, farmacias, boticas, droguerías, tiendas de auto servicio, tiendas departamentales, centros comerciales, venta de materiales de construcción y electricidad, ferreterías, madererías, vidrierías, venta de materiales y pinturas, renta y venta de artículos, maquinaria, refacciones, llantas, salas de belleza, peluquerías, tintorerías, sastrerías, baños, instalaciones destinadas a la higiene física de las personas, sanitarios públicos, saunas y similares, laboratorios fotográficos, servicios de limpieza y mantenimiento de edificios, servicios de alquiler y en general todo tipo de comercios. También incluye a las edificaciones destinadas al consumo de alimentos y bebidas, entre otros: restaurantes, cafeterías, fondas, cantinas, bares, cervecerías, pulquerías, videobares y centros nocturnos, entre otros.

(O) Oficinas.- Se refiere a aquellas edificaciones destinadas al desarrollo empresarial, público o privado, tales como: oficinas empresariales, corporativas, de profesionistas, sucursales de banco, casas de cambio, oficinas de gobierno, representaciones exclusivas para ese uso y sus accesorios, edificios de uso mixto que incluyen vivienda, instalaciones destinadas a la seguridad del orden público y privado, agencias funerarias, de inhumaciones, cementerios, mausoleos y similares, así como despachos médicos de diagnóstico.

(S) Salud.- Se refiere a aquellas edificaciones destinadas a la atención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por enfermedades o accidentes, tales como: unidades médicas, clínicas, hospitales, sanatorios, maternidades, laboratorios clínicos y radiológicos, consultorios, centros de tratamiento de enfermedades crónicas y similares.

(Q) Cultura.- Se refiere a las edificaciones o instalaciones destinadas al desarrollo de actividades culturales, tales como: salas de lectura, hemerotecas y archivos, galerías de arte, museos, centros de exposición, planetarios, observatorios, teatros, auditorios, cines, salas de conciertos, cinetecas, centros de convenciones, casas de cultura, academias de danza, música, pintura y similares. Edificaciones destinadas a la enseñanza básica, media, superior, especial, de investigación, guarderías, jardines de niños, escuelas primarias, secundarias en general, escuelas técnicas y de capacitación, preparatorias, institutos técnicos, vocacionales, politécnicos, tecnológicos, universidades, escuelas normales, centros de estudios de posgrado, centros y laboratorios de investigación, institutos de estudios contables, de cómputo y similares. Así como, las edificaciones destinadas a las actividades de culto religioso, comprende templos, capillas, iglesias, sinagogas, mezquitas y similares.

(A) Abasto.- Se refiere a las edificaciones e instalaciones públicas y privadas destinadas al almacenamiento, venta y

distribución de diversos productos, tales como: centros de acopio y transferencia de productos perecederos y no perecederos, bodegas, silos, tolvas, almacén de granos, de huevo, de lácteos, de abarrotes, centrales y módulos de abasto, rastros, frigoríficos, obradores, mercados, tianguis e instalaciones similares.

(I) Industria.- Se refiere a cualquier instalación o edificación destinada a ser fábrica o taller, relacionada con la industria extractiva, manufacturera y de transformación, de ensamble, de bebidas, de alimentos, agrícola, pecuaria, forestal, textil, del calzado, siderúrgica, metalmecánica, automotriz, química, televisiva, cinematográfica, electrónica y similares. También incluye las instalaciones para el almacenamiento de maquinaria, materias primas y productos procesados, así como aquellas destinadas al alojamiento de equipos e instalaciones relacionadas con los sistemas de agua potable, drenaje, energía eléctrica, servicios de limpia, disposición de desechos sólidos y similares. Comprende también a aquellas destinadas al almacenamiento o suministro de combustible para vehículos o para uso doméstico e industrial, tales como: gasolineras e inmuebles de depósito y venta de gas líquido y combustibles. Asimismo, se incluyen las edificaciones e instalaciones destinadas a prestar servicios de reparación y conservación de bienes muebles y herramientas, tales como: talleres de reparación, lubricación, alineación y balanceo de vehículos, maquinaria, lavadoras, refrigeradores, bicicletas, de equipo eléctrico, vulcanizadoras, carpinterías, talleres de reparación de muebles y similares.

(K) Comunicaciones.- Se refiere a las edificaciones o instalaciones destinadas a transmitir o difundir información, hacia o entre las personas, incluye las edificaciones o instalaciones destinadas al traslado de personas y bienes, así como a los espacios reservados para el resguardo y servicio de vehículos y similares, tales como: correos, telégrafos, teléfonos, estaciones de radio, televisión, y similares, terminales de autobuses urbanos, taxis, peseros, terminales y estaciones de autobuses foráneos y de carga, estacionamientos cubiertos, ya sean públicos o privados, encierros e instalaciones de mantenimiento de vehículos, terminales aéreas, helipuertos, estaciones de ferrocarril, embarcaderos, muelles y demás edificios destinados a la actividad del transporte.

a). 2.- Construcciones que no poseen cubiertas o techos, en uso no habitacional. PE: Estacionamientos, patios y plazuelas. PC: Canchas deportivas. J: Jardines.(PE) (PC) (J) Se refieren a construcciones habilitadas directamente sobre el terreno y que conforman pavimentos o áreas verdes para los usos señalados.

b). Rango de Niveles: Corresponde al número de plantas cubiertas y descubiertas, a partir del nivel utilizable, de la construcción, conforme a la siguiente clasificación:

CLAVE	DESCRIPCION
01	Superficies construidas descubiertas.
02	De 1 a 2 niveles o bien, si no existe una clara distinción de ellos y la construcción tenga una altura hasta de 6.00 metros.
05	De 3 a 5 niveles o bien, si no existe una clara distinción de ellos y la construcción tenga una altura de 6.01 a 15.00 metros.
10	De 6 a 10 niveles.
15	De 11 a 15 niveles.
20	De 16 a 20 niveles.
99	De 21 a más niveles.
RU Rango Unico	Se aplica a edificaciones sin una clara distinción de niveles tales como naves industriales, bodegas galerones, centros comerciales, restaurantes y estructuras semejantes que excedan una altura de 15.00 metros.

V. CLASE: Es el grupo al que pertenece una construcción de acuerdo con las características propias de sus espacios, servicios, estructura e instalaciones básicas, así como de los acabados típicos que le corresponden, la cual tiene asignado un valor unitario de construcción. Se divide en Habitacional y No Habitacional.

a). HABITACIONAL

1. *Precaria.* Cuartos de usos múltiples (dormitorio, comedor y preparación de alimentos); servicios mínimos incompletos (letrinas o sanitarios en la mayoría de los casos fuera del cuerpo principal de la construcción); procedimientos informales de construcción; muros desplantados directamente sobre el suelo, habilitados con mampostería (tabiques y piedra de desecho) sin refuerzos horizontales y verticales; con techos predominantemente de láminas metálicas, cartón, asbesto o similares apoyados en viguetería (madera y/o fierro); pisos habilitados con pedaceras de mamposterías (tabiques y piedras), o firmes de mezcla pobre en cemento-arena y/o concreto simple; muros aparentes o aplanados escasos con mezcla o yeso; herrería y cancelería de fierro, perfiles sencillos de desecho; vidriería incompleta; instalaciones básicas incompletas y/o visibles (eléctrica e hidráulica).

2. *Económica.* Espacios con algunas diferenciaciones por uso (sala-comedor, recámara(s) y cocineta o cocina); servicios mínimos completos (generalmente un baño); con procedimientos formales de construcción o de autoconstrucción; estructura a base de muros de carga de espesor propios de esta clase, con refuerzos horizontales y verticales de concreto armado y/o marcos rígidos de concreto armado, acero, o mixtas; techos y/o entrepisos de concreto armado, maderas, terrados, bóvedas y similares, con claros cortos no mayores de 3.5 mts.; pisos habilitados con firmes de mezclas de cemento-arena y/o concreto simple, con acabados escobillados o en cemento pulido, o en su caso para recibir a otros materiales: losetas vinílicas delgadas (hasta 3 mm.), mosaicos de pasta

coloreada y/o losetas de cerámica de pequeñas dimensiones (generalmente 20 x 20 cm.), alfombras pequeñas y delgadas de pelo ralo; muros refractarios o con acabados aparentes o aplanados de mezcla y/o de yeso, lisos, generalmente con pintura; herrería y cancelería de fierro y/o aluminio de perfiles sencillos; vidrios pequeños y delgados, instalaciones básicas completas visibles u ocultas (hidráulica, sanitaria, eléctrica y gas).

3. *Media.* Espacios diferenciados por su uso (sala, comedor, recámara(s), cocina); servicios completos (generalmente baño y medio baño, cuarto de servicio); con procedimientos formales de construcción; estructura a base de muros de carga de espesor propio de esta clase, con refuerzos horizontales y verticales de concreto armado, y/o marcos rígidos de concreto armado, acero, o mixtas; techos y/o entrepisos de concreto armado, maderas, terrados, bóvedas y similares, con claros cortos no mayores de 4.00 mts.; pisos habilitados con firmes de mezclas de cemento-arena y/o concreto simple, con acabados tales como: losetas vinílicas de más de 3 mm. De espesor, mosaicos de pasta coloreados y/o con dibujos, losetas de granito y losetas cerámicas (generalmente de 30x30 cm.), alfombras de tránsito intenso, duelas de pino; muros refractarios o con acabados aparentes barnizados, y/o con aplanados de mezcla o de yeso, lisos o con pasta hecha en obra (tirol planchado o rústico), pintura, tapices vinílicos, lambrines a mediana altura de madera de pino (duelas machihembradas y/o triplay ranurado), azulejos lisos o marmoleados; herrería y cancelería de fierro y/o aluminio en perfiles tubulares y/o madera de pino vidrios medio dobles y traslúcidos o con dibujo principalmente en baños, instalaciones básicas completas ocultas (hidráulica, sanitaria, eléctrica y gas).

4. *Buena.* Espacios totalmente diferenciados por usos e inclusión de áreas complementarias (estudio, despacho, sala de t.v.); servicios completos (dos o más baños, cuarto de servicio y/o cuarto de lavado y/o planchado); con

procedimientos constructivos formales; estructura a base de muros de carga de espesor propio de esta clase, con refuerzos horizontales y verticales de concreto armado, y/o marcos rígidos de concreto armado, acero o mixtas; techos y/o entrepisos de concreto armado, maderas, terrados, bóvedas y similares, con claros cortos mayores de 4.00 mts.; pisos con recubrimientos de primera calidad: terrazos, mármol y losetas cerámicas de 30x30 cms. o mayores, alfombras gruesas de pelo alto; duelas machihembradas, parquet de maderas tropicales, caoba, cedro, encino; muros con acabados tales como: aplanados de mezcla y/o de yeso, lisos o rústicos y/o con esgrafiados de pastas pigmentadas (de marca), pinturas de alta calidad, tapices vinílicos y/o tela, lambrines a media altura de maderas tropicales, caoba, cedro, encino, azulejos biselados, mármoles, y elementos decorativos; herrería y/o cancelería de fierro forjado, perfiles tubulares de grueso calibre, aluminio adonizado, calibres gruesos, y/o maderas finas con tratamiento para intemperie; vidrios especiales y/o cristales diversos, espejos, domos, vitrales, emplomados, acrílicos; instalaciones completas y algunas especiales (tinta de hidromasaje, intercomunicación).

5. Muy buena. Espacios totalmente diferenciados y especializados por uso, presentando múltiples áreas complementarias (biblioteca, estudio, despacho, desayunador, terrazas, sala de juegos, gimnasio, alberca, vestidores, lavandería, planchado, cuarto de máquinas, cuartos de servicio, etc.); con procedimientos constructivos especializados; estructura a base de muros de carga de espesor propio de esta clase, con refuerzos horizontales y verticales de concreto armado, y/o marcos rígidos de concreto armado, acero, o mixtas; techos y/o entrepisos de concreto armado, metálicos, maderas, terrados, bóvedas y similares; con algunos entre pisos a doble altura o más, claros cortos mayores a 4.00 mts., sótanos; pisos con recubrimientos de lujo tales como: placas de mármol, y/o cerámicas de grandes dimensiones (con entrecalles o biseladas), adoquines, canteras, alfombras y/o tapetes gruesos anudados o de pelo alto; duelas machihembradas y parquet de maderas: tropicales, caoba, cedro, encino; muros con acabados tales como: aplanados con mezcla y/o yeso, lisos o rústicos y/o con esgrafiados de pastas pigmentadas (de marca), en su caso pinturas de alta calidad, tapices de tela o seda, lambrines de piso a techo de maderas tropicales, caoba, cedro, encino; herrería y/o cancelería de fierro forjado, perfiles tubulares de grueso calibre, aluminio adonizado, calibres gruesos, y/o maderas finas con tratamiento para intemperie; vidrios especiales y/o cristales diversos, espejos, domos, vitrales, emplomados, acrílicos; profusión de instalaciones básicas y complementarias tales como tinas de hidromasaje, sonido ambiental, aire acondicionado o lavado, intercomunicación, seguridad.

b). USO NO HABITACIONAL.

1. Precaria. Cuartos de usos múltiples o espacios sin diferenciación por uso; servicios mínimos incompletos (sanitarios o de aseo); no existen procedimientos formales de construcción; muros desplantados directamente en el suelo habilitados con mamposterías (tabiques y piedra de deshecho) sin refuerzos horizontales y verticales; con techos predominantemente de láminas de secciones pequeñas metálicas, cartón, asbesto o similares; pisos de tierra, y/o habilitados con pedacerías de mamposterías (tabiques y piedras), o firmes de mezcla pobre en cemento-arena y/o concreto simple; muros aparentes o aplanados escasos con mezcla o yeso; herrería y cancelería de fierro perfiles sencillos; vidrios pequeños y delgados; instalaciones básicas incompletas y/o visibles (eléctrica e hidráulica).

Incluye los usos no habitacionales que pudieran ubicarse en una edificación con uso habitacional de clase precaria, tales como tiendas, talleres y otros servicios básicos.

No incluye industrias, bodegas, mercados, centros comerciales y similares.

2. Económica. Espacios con algunas diferenciaciones por uso (áreas de servicio, oficinas, bodegas, etc.); servicios mínimos completos (sanitarios, de aseo); con procedimientos formales de construcción o de autoconstrucción; estructura a base de muros de carga de espesor propio de esta clase, con refuerzos horizontales y verticales de concreto armado y/o marcos rígidos de concreto armado, acero o mixtas; techos de láminas de secciones pequeñas metálicas, asbesto y similares, de concreto armado, prefabricados, maderas, terrados, bóvedas y similares, con entrepisos de concreto armado, prefabricados, maderas, terrados, bóvedas y similares; pisos de materiales compactados, y/o habilitados con firmes de mezcla de cemento-arena y/o concreto simple, con acabados escobillados o en cemento pulido, o en su caso para recibir a otros materiales: losetas vinílicas delgadas (hasta 3 mm.), mosaicos de pasta coloreados y/o losetas de cerámica de pequeñas dimensiones (generalmente de 20 x 20 cm.), alfombras pequeñas y delgadas de pelo ralo; muros refractarios o con acabados aparentes o aplanados de mezcla y/o de yeso, lisos, generalmente con pintura; herrería y/o cancelería de fierro o aluminio, en perfiles sencillos y/o madera de pino de espesores delgados; vidrios pequeños y delgados; instalaciones básicas completas visibles u ocultas (hidráulica, sanitaria, eléctrica y gas).

Incluye los usos no habitacionales que pudieran ubicarse en una edificación con uso habitacional de clase económica tales como tiendas, talleres, locales comerciales y otros servicios.

3. Media. Espacios diferenciados por su uso; servicios completos; con procedimientos formales de construcción;

con estructura de acero o prefabricados con alturas de entrepiso o techos mayores a 3 mts. y/o estructura a base de muros de carga de espesor propios de esta clase con refuerzos horizontales y verticales de concreto armado, y/o marcos rígidos de concreto armado, con alturas de entrepisos o techos de 2.30 mts. o más; con techos de láminas de secciones regulares metálicas, asbestos y similares, de concreto armado, prefabricados, maderas, terrados, bóvedas y similares; con entrepisos de concreto armado, prefabricados, maderas, terrados, bóvedas o similares; pisos habilitados con firmes de mezclas de cemento-arena y/o concreto simple con acabados tales como: cemento pulido o escobillado, losetas vinílicas de más de 3 mm. de espesor, mosaicos de pasta, coloreados y/o con dibujos, losetas de granito, de terrazo, y/o cerámicas (generalmente de 30x30 cms.), alfombras de tránsito intenso, duelas de pino; muros refractarios o con acabados aparentes barnizados y/o con aplanados de mezcla o de yeso, lisos o con pasta hecha en obra (tirol planchado o rústico), pintura, tapices vinílicos, lambrines a mediana altura de madera de pino (duelas machihembradas y/o triplay ranurado); azulejos lisos o marmoleados; herrería y cancelería de fierro y/o aluminio en perfiles tubulares y/o madera de pino de espesores regulares; con vidrios medios dobles y translúcidos; servicios e instalaciones completas y algunas especiales para el uso establecido.

4. Buena. Espacios totalmente diferenciados y adecuados a su uso e inclusión de usos no indispensables para el tipo de construcción; servicios completos; con procedimientos constructivos formales; con estructura de acero o prefabricados con alturas de entrepiso o techos mayores a 3 mts. y/o estructura a base de muros de carga de espesor propio de esta clase, o mayores, con refuerzos horizontales y verticales de concreto armado, y/o marcos rígidos de concreto armado, con alturas de entrepisos o techos de 2.30 mts. o más, con techos de láminas estructurales de secciones regulares o grandes, metálicas, asbestos y similares, de concreto armado, prefabricados maderas, terrados, bóvedas y similares; con entrepisos de concreto armado, prefabricados metálicos, maderas, terrados, bóvedas o similares; pisos habilitados con firmes de mezclas de cemento-arena y/o concreto armado y/o con recubrimientos de primera calidad, terrazos, mármoles y/o losetas cerámicas antiderrapantes de 30x30 cms. o mayores, alfombras gruesas de pelo alto; duelas machihembradas, parquet: de maderas tropicales, caoba, cedro, encino; muros con acabados tales como: aplanados de mezcla y/o de yeso lisos o rústicos y/o con esgrafiados de pastas pigmentadas (de marca), pinturas de alta calidad, tapices vinílicos y/o tela, lambrines a media altura de maderas tropicales, caoba, cedro, encino, azulejos biselados, mármoles, y algunos elementos decorativos; herrería y/o cancelería de fierro forjado, perfiles tabulares de grueso calibre, aluminio adonizado, calibres gruesos, y/o maderas finas con tratamiento para intemperie; vidrios especiales y/o cristales diversos, espejos, domos, vitrales,

emplomados, acrílicos; instalaciones completas y especiales para el uso establecido.

5. Muy buena. Espacios amplios totalmente diferenciados y especializados a su uso e inclusión de usos no indispensables para el tipo de construcción; con procedimientos constructivos especializados; con estructura de acero o prefabricados con alturas de entrepiso o techos mayores a 3 mts. y/o estructura a base de muros de carga de espesor propio de esta clase con refuerzos horizontales y verticales de concreto armado, y/o marcos rígidos de concreto armado, con alturas de entrepisos o techos de 2.30 mts. o más, con techos de láminas estructurales reforzadas de secciones especiales metálicas, asbestos y similares, de concreto armado, prefabricados, maderas, terrados, bóvedas y similares; con entrepisos de concreto armado prefabricados, maderas, terrados, bóvedas o similares, sótanos; pisos habilitados de concreto armado y/o recubrimientos de lujo tales como: placas de mármol, y/o cerámicas de grandes dimensiones (con entrecalles y biseladas), adoquines, canteras, alfombras y tapetes gruesos anudados o de pelo alto; duelas machihembradas y parquet: de maderas tropicales, caoba, cedro, encino; muros con acabados tales como: aplanados de mezcla y/o con yeso, lisos o rústicos y/o con esgrafiados de pastas pigmentadas (de marca), en su caso pinturas de alta calidad, tapices de tela o seda, lambrines de piso a techo de maderas tropicales, caoba, cedro, encino; herrería y cancelería de fierro forjado, perfiles tubulares de grueso calibre, aluminio adonizado, calibres gruesos, y/o maderas finas con tratamiento para intemperie; vidrios especiales y/o cristales diversos, espejos, domos, vitrales, emplomados, acrílicos; profusión de instalaciones básicas, complementarias y especiales (inteligente).

NORMAS DE APLICACION

1. Para la aplicación de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo a un inmueble específico, se determinará primero la Delegación a que corresponda. Según su ubicación se constatará si se encuentra comprendido dentro de la Tabla de Colonia Catastral de tipo Corredor, de ser este el caso le corresponderá al inmueble el valor unitario por metro cuadrado respectivo. En caso contrario se determinará la región con los tres primeros dígitos del número de cuenta catastral y su Manzana con los tres siguientes dígitos del mismo número de cuenta, a los cuales deberá corresponder una Colonia Catastral de tipo Area con un valor unitario por metro cuadrado. El valor unitario que haya correspondido se multiplicará por el número de metros cuadrados de terreno, con lo que se obtendrá el valor total del suelo del inmueble.

2. Para la aplicación de la Tabla de Valores Unitarios de las construcciones, la edificación se colocará en el Tipo y

Clase que le correspondan para multiplicar después el valor asignado por el número de metros cuadrados construidos, con lo que se obtendrá el valor total de la edificación.

En el caso de que la edificación tenga diversos Tipos y Clases, en los inmuebles de uso habitacional se considerará el tipo de construcción que predomine en el mismo.

Para los inmuebles de uso diferente al habitacional (mixtos) con usos diversos, se considerará cada tipo y clase que le corresponda, sumando los valores catastrales para obtener el valor total de la construcción.

Al resultado obtenido se le aplicará una reducción según el número de años transcurridos desde que se terminó la construcción o desde la última remodelación integral que modifique la estructura del inmueble para conservarlo en buen estado, en razón de 1% por cada año transcurrido, sin que en ningún caso se descuente más del 40%.

3. Cuando el inmueble sea de uso distinto al habitacional y cuente con instalaciones especiales, elementos accesorios y obras complementarias el valor resultante de aplicar lo señalado en el numeral 2, se incrementará en 8%.

Instalaciones especiales, aquellas que se consideran indispensables o necesarias para el funcionamiento operacional del inmueble de acuerdo a su uso específico: Tales como, elevadores, escaleras electromecánicas, equipos de calefacción o aire lavado, sistema hidroneumático, antenas parabólicas, equipos contra incendio.

Elementos Accesorios son aquellos que se consideran necesarios para el funcionamiento de un inmueble de uso especializado, que en sí se conviertan en elementos característicos del bien analizado, como: caldera de un hotel y baños públicos, espuela de ferrocarril en industrias, pantalla en un cinematógrafo, planta de emergencia en un hospital, butacas en una sala de espectáculos, entre otros.

Obras complementarias son aquellas que proporcionan amenidades o beneficios al inmueble, como son: bardas, celosías, andadores, marquesinas, cisternas, equipos de bombeo, gas estacionario, entre otros.

4. El valor del suelo del inmueble, de sus construcciones y de sus instalaciones especiales, según sea el caso, se sumarán para obtener el valor catastral del inmueble.

La autoridad fiscal, mediante reglas de carácter general dará a conocer lo relativo a lo dispuesto en este artículo, en lenguaje llano y mediante folletos ejemplificativos.

5. Para los inmuebles que se encuentren bajo el régimen de propiedad en condominio con anuncios de propaganda, se asignará una nueva cuenta condominal con terminación

999 (ejemplo: 001-001-01-999), específicamente para el anuncio o anuncios de propaganda, a fin de no afectar las cuentas individuales propias del condominio; esta cuenta llevará a su vez la leyenda "Inmueble con Anuncios de Propaganda", en la cual se determinará el total de las contraprestaciones por dicho uso o goce temporal.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 2000.

ARTICULO SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida observancia y aplicación.

ARTICULO TERCERO.- Para efectos del artículo 267 A de este Código, las zonas permitidas a ocupar por los establecimientos mercantiles, serán las determinadas por las Reglas de Carácter General que señalan las cuotas aplicables para el comercio en la vía pública, y determinan las zonas y giros comerciales, así como la superficie máxima permitida a ocupar por los establecimientos mercantiles, a que se refiere el artículo 267 A del Código Financiero del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de enero de 1999, modificadas por Acuerdo publicado en el mismo Organó de Difusión el 18 de marzo de 1999, hasta en tanto se establezcan las nuevas.

ARTICULO CUARTO.- En tanto los órganos a los que se refiere el artículo 385 de este Código emiten sus disposiciones presupuestarias a que se refiere el artículo 416 de este Código, se seguirán aplicando las disposiciones, normas generales y demás criterios emitidos por la Secretaría de Finanzas, para los órganos autónomos.

Las disposiciones presupuestarias, deberán emitirse en un término de tres meses a partir de la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

ARTICULO QUINTO.- Para el ejercicio de recursos de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales a que se refieren los artículos 415 A y 415 B será aplicable a partir del 1º de octubre del año 2000 y hasta el término de dicho ejercicio lo señalado para las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en tanto no se emitan las disposiciones normativas al respecto.

Para efectos del párrafo anterior, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales remitirán oportunamente sus proyectos de presupuesto de egresos para el año 2001 al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

ARTICULO SEXTO.- A partir de la fecha en que entre en vigor el presente Decreto, quedan sin efecto las

disposiciones, resoluciones, consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general que contravengan lo establecido en este Decreto.

Por la Comisión de Hacienda, firman: Diputado Francisco Chiguil Figueroa; diputado Miguel Angel Peláez Gerardo; diputado Miguel Bortolini Castillo; diputado Ernesto Chávez Contreras; diputado Ricardo Javier Martínez Atala; diputado Roberto Rico Ramírez.

Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, firman: diputado Ricardo Javier Martínez Atala; diputado Miguel Angel Peláez Gerardo; diputado Francisco Chiguil Figueroa; diputado Francisco Martínez Rojo; diputado Juan González Romero; diputado Roberto Rico Ramírez; diputada Ana Luisa Cárdenas Pérez; diputado Miguel Bortolini Castillo; diputado José Narro Céspedes, con reservas.

LA C. PRESIDENTA.- Para fundamentar el dictamen por las comisiones unidas, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Chiguil Figueroa.

EL C. DIPUTADO FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA.- Con su permiso, señora Presidenta.

Hoy presentamos a este pleno el dictamen de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal. Con estas modificaciones cerramos un ciclo de reformas a éste fundamental instrumento para la vida de nuestra ciudad; en él hemos plasmado una nueva concepción que rompe con los modelos tradicionales de enfrentar el problema de la recaudación de recursos públicos y se inscribe un nuevo concepto de política económica distinta al vigente por espacio de muchos años.

Recogemos en este dictamen la originaria preocupación de los constituyentes de 1917, cuando trataron de darle a las normas jurídicas la fundamentación y la orientación social tan necesarias después de haber experimentado décadas de tiranía y desigualdad social.

Hoy que en nuestro país también hemos transitado por años de alta concentración del ingreso, incremento en los niveles de pobreza y agudización de la impunidad de los poderosos y que en nuestra ciudad esto se ha traducido en deterioro de la calidad de vida, rezagos en infraestructura y servicios básicos y problemas urbanos y ambientales, es necesario recuperar los fundamentos básicos que nos unen y que permiten la convivencia social.

Es por ello que como ha sido la preocupación de esta legislatura, así como del gobierno democrático de la ciudad, se han dictado leyes de hondo alcance social y se ha orientado la política fiscal de ingresos y egresos con una clara tendencia a favorecer a los más necesitados.

Con esto se da un trato desigual a los desiguales, en beneficio de los más desprotegidos que es el espíritu social que introdujeron los constituyentes al redactar nuestra Carta Magna; esto ha quedado plasmado hoy en el Código Financiero al insertar en su articulado diversos beneficios que se otorgaban vía subsidios para pensionados, jubilados, viudas y huérfanos, personas de la tercera edad sin ingresos fijos y escasos recursos, discapacitados, para sectores de la población en condiciones de rezago social y de extrema pobreza.

Se considera también a las mujeres abandonadas, madres solteras sin ingresos fijos y de escasos recursos, así como el apoyo a programas de mejoramiento de condiciones ambientales, programas para el desarrollo familiar, cultura y del deporte a programas especiales.

De igual forma se establecen en forma permanente apoyos a vivienda de interés social y popular, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4º constitucional que ordena que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa y que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar tal objetivo y recoge los conceptos de vivienda de interés social y de interés popular contemplados en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Asimismo se recogen los beneficios que año con año se han otorgado a las instituciones de asistencia privada y se integran al Código Financiero del Distrito Federal, de tal manera que se logre más eficacia y rapidez en la ayuda que se otorga a las instituciones que se dedican a cumplir con la protección y amparo a la indigencia y de auxilio al prójimo.

Como un beneficio adicional y que rompe con los esquemas fiscales tradicionales, se consideró adecuado evitar que el fisco se convierta en un ente opresor de la sociedad o de los más débiles, lo que generalmente puede caer en adeudos, razón por la que se otorga a la Secretaría de Finanzas o a la Procuraduría Fiscal la facultad de reducir el monto de créditos fiscales en forma individual y a petición por escrito de los contribuyentes cuando el adeudo sea exorbitante, ruinoso y confiscatorio, cuando el crédito fiscal derive por causas no imputables al contribuyente; cuando el contribuyente realice actividades de beneficio social o cuando se haya presentado dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales.

Estos cambios constituyen un avance sin precedentes, con lo cual esta Asamblea rubrica la orientación social que durante estos dos últimos años se ha dado a la política fiscal.

En materia de contribuciones se continua con la política diferenciada para beneficiar a los sectores populares y medios, no así a los que pueden contribuir con más recursos

en razón de haberse beneficiado mayormente de la infraestructura y servicios de la ciudad.

Ha sido compromiso de la fracción mayoritaria y del gobierno democrático de la ciudad, no afectar con más impuestos y con incrementos mayores a la inflación, a los trabajadores y sectores populares de esta ciudad.

Hoy podemos decir con satisfacción que hemos cumplido con el compromiso que establecimos con nuestros electores y que hoy ratificamos.

En adición a lo establecido en el dictamen de este Código Financiero propondremos una modificación a la Ley de Ingresos, a efecto de reducir el 50% del incremento en el pago del impuesto predial a un millón 200,000 contribuyentes, 80% de las familias capitalinas, ratificando así el compromiso con los sectores medios y populares.

Nunca dijimos que a los sectores pudientes, y que son pocos, muy pocos, los íbamos a proteger con menores impuestos, para eso está la política económica que impulsa la Federación: Los Fobaproas y los Ipabs, los rescates carreteros y bancarios. No, nuestro compromiso fue con los sectores realmente necesitados a los cuales no se les incrementó en los últimos dos años el predial y el agua ni la tarifa del Metro y trolebuses, a cuyos miembros de la tercera edad otorgamos beneficios adicionales y esto sin embargo no obstruyó el cumplimiento de los programas sociales con los que también nos comprometimos.

Por otra parte, están en el dictamen precisiones que han solicitado diversos sectores productivos de la sociedad en materia de impuestos y derechos; tal es el caso del impuesto sobre nóminas donde se señalaban qué elementos no forman parte de la base gravable en el caso del impuesto sobre nóminas, pues con ello se dará mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y a la vez se evitará el temor y la zozobra que infunden las leyes fiscales al permitir a los particulares el goce de los productos de su trabajo.

Del mismo modo, se establece una cuota mensual por los derechos de uso de los centros de transferencias modal, en vez de la cuota diaria, en beneficio de los transportistas y se establecen cuotas por el uso de vías y áreas públicas, para dar seguridad jurídica a los comerciantes ambulantes.

Asimismo, se considera apropiado cambiar la fecha de inicio en el cobro de la tenencia de enero a febrero, para brindar un plazo más cómodo a los contribuyentes de este impuesto.

Pero además, en este dictamen que hoy presentamos se establecen disposiciones que dan mayor certeza jurídica y amplían los derechos a los contribuyentes.

La aplicación de la afirmativa ficta para mayores casos previstos.

La autocorrección del contribuyente una vez iniciada la visita domiciliaria.

La entrega de la carta de derechos y deberes del contribuyente.

La obligación de la autoridad fiscal al concluir la visita domiciliaria y en caso de haber cumplido con sus obligaciones fiscales, para comunicar por escrito a éste el resultado de la misma.

Una mayor claridad al delimitar el ejercicio de las facultades de comprobación, entre otras, son modificaciones substanciales que otorgan más precisión y coherencia al texto vigente.

Con el objeto de enfrentar a la delincuencia, que merma los recursos públicos, consideramos procedente, como se establece en el dictamen, que se aumente la penalidad de los delitos que conforme al Código Financiero del Distrito Federal se consideran como graves, para evitar que se obtenga la libertad bajo fianza.

En este sentido somos consecuentes con las reformas que hemos hecho en este mismo instrumento jurídico, porque consideramos necesario proteger a la Hacienda Pública dado que ahí está el dinero de los ciudadanos y unos cuantos malhechores no pueden atentar contra los intereses de la mayoría ni quedar impunes en sus actos deleznales.

Respecto a las modificaciones que se proponen en el renglón de presupuesto y cuenta pública y órganos autónomos, hemos estado de acuerdo, como se señala en el dictamen, en que sobre la materia se consideran las nuevas disposiciones que implican mejores técnicas que se quieren poner en marcha dentro de la complejidad programática presupuestal para una evolución gradual pero firme de los cambios presupuestarios que son necesarios.

No obstante, se consideró necesario modificar la propuesta enviada por la Jefa de Gobierno a fin de que se considere a las autoridades electorales y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos de las leyes que lo rigen, con la autonomía suficiente para el manejo y elaboración de su Presupuesto de Egresos como en la administración y ejercicio de sus recursos.

Es necesario, sin embargo, señalar disposiciones para que estos órganos no se extralimiten en sus tabuladores y se haga efectiva la rendición de cuentas ante esta soberanía, por lo que propondremos ajustes en lo particular a lo que establece el dictamen al respecto.

Por lo que hace a la facultad del titular del Ejecutivo para modificar el contenido orgánico y financiero de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de nuestra ciudad, ha sido un compromiso de la fracción mayoritaria llevar a cabo las modificaciones necesarias a la iniciativa enviada a efecto de que esta facultad no incluya la de transferir recursos destinados a programas prioritarios hacia los no prioritarios, ni disminuir los montos asignados a aquéllos, excepto en situaciones de emergencia; asimismo para que en caso de que no se cumpla con los requisitos antes señalados la modificación tenga que ser aprobada por la Asamblea y para que cuando el ajuste supere el 10% asignado a las unidades ejecutoras de gasto se informe a la Asamblea de los cambios realizados.

Hoy proponemos la modificación del artículo 428 para que quede como sigue: El Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá modificar el contenido orgánico y financiero de los programas, de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades incluidas en el Presupuesto de Egresos cuando por razones de interés social, económico, seguridad pública, lo considere necesario.

Estas modificaciones no podrán transferir recursos destinados a programas prioritarios hacia programas no prioritarios.

Disminuir el monto consignado en el decreto del Presupuesto de Egresos para la atención de programas prioritarios, salvo que se hayan concluido las metas.

Sólo podrá exceptuarse de lo anterior, cuando existan situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales, plagas, epidemias o cuando se trate de alguna situación de emergencia que afecte total o parcialmente el territorio del Distrito Federal.

Cualquier modificación que no cumpla los requisitos antes señalados, requerirá la aprobación previa, en su caso de la Asamblea o cuando ésta se encuentre en receso por la Comisión de Gobierno, la que deberá resolver durante los 15 días hábiles siguientes a presentación de la misma, pasados los cuales, si no se objeta, se considerará aprobada.

Cuando el ajuste supere el 10% del presupuesto anual asignado a cada unidad ejecutora de gasto, el titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal deberá informar en un capítulo especial del Informe de Avance Trimestral la conciliación de las modificaciones realizadas.

Así proponemos que quede la redacción de este artículo 428 y solicito a la Presidencia para que quede incluido en la votación que se va hacer general del dictamen.

Debemos decir que hemos hecho todo el esfuerzo posible para que este dictamen sea aprobado por todas las fracciones

parlamentarias y que más de 30 modificaciones se hicieron con la concurrencia de los puntos de vista de cada una de ellas.

No hemos estado cerrados como ocurría en otras Legislaturas a sopesar los argumentos y a modificar lo necesario, aún cuando se tocaran partes fundamentales de la propuesta de gobierno. En esto también hay una diferencia sustancial respecto al pasado.

Le hemos reintegrado respeto y consideración a esta soberanía popular, aún cuando y se nos diere sistemáticamente todo crédito y hemos estado receptivos a las demandas ciudadanas, como a las propuestas de todas las fracciones parlamentarias.

Por ello, pensamos que este dictamen debe ser aprobado, porque recoge substanciales avances para mejorar la relación del gobierno con los gobernados, porque tiene un fundamento social innegable y porque sus disposiciones fueron consensadas en forma abierta, plural y democrática.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión el dictamen en lo general. Se abre el registro de oradores.

¿Oradores en contra?

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

El diputado José Narro, el diputado Manuel Minjares, el diputado Luis Miguel Ortiz Haro, el diputado Ricardo Martínez Atala y la diputada Ana Luisa Cárdenas.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra para razonar su voto, hasta por 20 minutos, el diputado José Narro Céspedes.

EL C. DIPUTADO JOSE NARRO CESPEDES.- Con su permiso, Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados: Entendemos que la ley es un cuerpo de disposiciones de carácter general que norman las relaciones entre los integrantes de una sociedad, que la ley tiene por objeto el establecer derechos y obligaciones.

Hoy en la materia que nos ocupa, que es la del Código Financiero, en nuestro carácter de legisladores es de suma importancia tener plena conciencia de los principios antes señalados.

Es así que en nuestro carácter de legisladores sostenemos la convicción de que las reformas al Código Financiero deben de tener como fin el de preservar los derechos de los

contribuyentes y determinar de manera clara las atribuciones que en materia fiscal tienen las autoridades competentes; además de que por sus características dicho ordenamiento contiene las obligaciones que en materia de gasto deben observar las distintas unidades que componen la Administración Pública del Distrito Federal.

Queremos dejar asentado que desde un principio manifestamos nuestro desacuerdo con los incrementos a las tarifas y cuotas que para las diversas contribuciones el ejecutivo local propuso para el año 2000, ya que en su mayoría las consideramos lesivas para los contribuyentes de la ciudad de México.

Creemos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de nuestra Constitución Política, que los gravámenes deben cumplir con el principio de equidad que significa gravamen, igual a personas en igual situación y gravamen adecuado a personas en situación diferente. Además de que deben de ser proporcionables, nivelando el sacrificio del contribuyente, mediante una tarifa progresiva que se traduce en una presión fiscal mayor para los sujetos que obtienen ingresos mayores.

Por ello, como fracción parlamentaria, propugnamos para que en un acto de justicia para con aquellos grupos de menos recursos, se establezcan descuentos y subsidios que eviten una excesiva carga tributaria para dichos grupos.

El artículo 31 de la Constitución señala: Son obligaciones de los mexicanos, en su fracción IV, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal, o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Los impuestos deben de estar establecidos en las leyes, es decir, por medio de disposiciones de carácter general abstracto, impersonales y emanadas del poder legislativo.

La Suprema Corte de Justicia señala: El principio de legalidad se encuentra establecido en el artículo 31 Constitucional, fracción IV. El impuesto, de acuerdo a la Constitución, será proporcional y equitativo entendiéndose esto que el impuesto debe de ser justo. Los impuestos deben de apegarse a los principios de generalidad y de uniformidad, es decir, que todos los que tienen una capacidad contributiva paguen un impuesto y que éste represente el mínimo sacrificio.

El principio de generalidad no significa que todos deban de pagar impuestos, sino que todos los que tienen capacidad contributiva paguen algún impuesto; el principio de uniformidad significa que los impuestos que integre un sistema impositivo deben gravar en tal forma que representen para todos los que deben contribuir a los gastos públicos igual y sacrificio mínimo.

Esto nos hace pensar, que la equidad exige que se respete el principio de igualdad. No estamos de acuerdo con la tesis que ha manejado ante diferentes fracciones parlamentarias los miembros del cuerpo financiero y económico del Gobierno del Distrito Federal en donde plantean un trato igual para desiguales, porque eso no se nos hace equitativo que habla de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de igualdad.

Dice la tesis jurisprudencial en el apéndice del tomo 76 página 794: Por eso hemos estado luchando para que los grupos de menores recursos paguen de forma diferencial y para que el impuesto sea progresivo, como dice la Constitución y guarde el término de equidad que signifique igualdad para los iguales, el que paguen igual los iguales pero que paguen desigual los que son desiguales.

Por eso vemos como una cuestión positiva el que aunque en el Código Financiero se señala el incremento a los impuestos, a las tasas y a las tarifas, es el 14.1%, a partir del no incremento al servicio colectivo del metro, a partir de los descuentos del 50% para las personas de la tercera edad, los que tienen problemas de discapacidad, en donde también a partir de los criterios que se establecieron para el pago del predial y del agua potable, en donde cerca del 80% de los contribuyentes del predial van a pagar un incremento únicamente del 7%, nuestra fracción parlamentaria calcula que el incremento neto de tarifas y de cuotas, es de alrededor del 10%, y por eso hemos decidido votar a favor de esta propuesta de Código Financiero.

También hemos decidido votar a favor porque inicialmente el Jefe de Gobierno conservaba y daba opinión sobre los presupuestos que emitían los órganos autónomos, esto ya se retiró. Hay un planteamiento para que se retire y para que el presupuesto de los órganos autónomos llegue a este órgano legislativo para que aquí se decida y se vote a partir de los argumentos y del sustento que presenten acompañando el planteamiento y la propuesta que hagan llegar de presupuesto.

También han aceptado incorporar en el artículo 495, la capacidad de la Secretaría de Finanzas de complementar los pliegos de observaciones, sobre todo para los cobros resarcitorios al erario que determine la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Asamblea Legislativa, facultad expresa ahora en la ley para la Secretaría de Finanzas, situación que no se presentaba anteriormente y que el año pasado ocasionó el problema con 3 expedientes.

Conjuntamente con esto, creemos que hemos avanzado también en darle una mayor transparencia y claridad al uso de los recursos públicos en el momento en que se modifica el artículo 428, donde señala prácticamente que los recursos de los programas prioritarios son inamovibles, únicamente después de que se cumplan las metas esos recursos se pueden transferir.

Creemos que es un avance. No en el marco de lo que muchos esperábamos y deseamos, pero sentimos que el planteamiento que queda plasmado en el Código Financiero de la Ciudad de México está por encima en materia de claridad y de transparencia de lo que se está reconociendo y planteando y proponiendo en lo que son los instrumentos federales, tanto del Código Financiero federal, como en la propia Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, a nivel federal.

Por eso, aunque nosotros planteábamos que era necesario que el gasto de inversión y el gasto social no se viera disminuido, ni de ahí se tomaran recursos para pasarlos a gasto corriente y esto no se vio plasmado en este artículo 428, en términos generales reconocemos que se ha hecho un esfuerzo importante y que es aceptable lo que se ha planteado, prácticamente consensado por el conjunto de las fracciones parlamentarias.

Unicamente mantenemos nuestra reserva en sentido negativo en el artículo 50 B, donde prácticamente vemos repetidas ahora el anatocismo cuando se cobra actualizaciones sobre actualizaciones.

Por lo antes expuesto y toda vez que fueron recogidas las inquietudes manifestadas por nuestra fracción, con relación a evitar excesivas cargas tributarias para la población de menores recursos, votaremos en lo general a favor del dictamen, y en lo particular nos reservamos los artículos 50 B, 386, y proponemos una adición al artículo 495 del Código Financiero, con el fin fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad.

En este sentido, nuestra fracción parlamentaria en lo general apoya y vota a favor, votará a favor del Código Financiero.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra, hasta por 20 minutos, para razonar su voto, el diputado José Manuel Minjares Jiménez.

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ.- Gracias, señora Presidenta.

Honorable Asamblea:

Quiero iniciar esta exposición, en la cual vengo a razonar el voto del Partido Acción Nacional, de los diputados del Partido Acción Nacional con respecto al dictamen que se nos presenta sobre reformas al Código Financiero del Distrito Federal, con un reconocimiento a la apertura, a la disposición de aceptar la mayor parte de las propuestas que nuestra bancada hizo respecto al proyecto que envió a esta Asamblea la titular de la Jefatura de Gobierno.

Siendo así, después de largas discusiones, recesos, momentos inclusive tensos en algunas ocasiones, hemos logrado algunos avances al respecto de este ordenamiento jurídico. En primer lugar, logramos eliminar la tentativa del gobierno, de incluir el concepto de actividades institucionales dentro del artículo 21, con el objeto de evaluarlos como una meta y así legalizar los informes de avance programático presupuestal que erróneamente, sin ningún fundamento legal han presentado durante este año como una meta actividades institucionales. Las metas se consiguen y las actividades se realizan, y esas no se podían cuantificar.

Asimismo, en forma unánime de los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, logramos detener la tentativa del Gobierno del Distrito Federal de fincar una responsabilidad solidaria sobre los créditos fiscales a los contadores públicos, respecto de los servicios contratados por sus respectivos clientes.

Un concepto de avanzada en estas reformas que hoy vamos a votar es la referente al artículo 62, la inclusión de la afirmativa ficta sobre las resoluciones y peticiones que hagan los contribuyentes a las autoridades fiscales, en el plazo que la jurisprudencia al respecto ha emitido, de hasta 4 meses.

Pocos Estados de la República contienen este tipo de reformas y este tipo de situaciones, una afirmativa ficta y sobre todo en materia fiscal, que es lo más difícil de lograr; a nivel federal nunca se ha podido incluir este tipo de beneficios.

Se ha eliminado también la pretensión de la Jefa de Gobierno de imponer una obligación al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para que en cualquier litigio correspondiente a la materia de arrendamiento fuera en esos mismos momentos informada la Tesorería para revisar los cálculos y la situación jurídica del arrendador, en materia del impuesto predial con base rentas que nosotros hemos combatido.

La Jefa de Gobierno pretendía que el tribunal fuera una especie de corre, ve y dile sobre cualquier materia, cualquier litigio en materia de arrendamiento y esto ha sido detenido por los diputados que integramos los diferentes grupos parlamentarios en esta Asamblea.

Reconocemos también la apertura para evitar la tentativa del Gobierno del Distrito Federal para que un contribuyente garantizara doblemente un crédito fiscal.

El artículo 344 pretendía que además de una fianza emitida por una institución acreditada también se hiciera el correspondiente depósito en efectivo del crédito fiscal. Se ha eliminado esto, decía "fianza y depósito", ahora es "fianza o depósito".

Finalmente, dos artículos que tienen que ver con la discrecionalidad de la autoridad, uno en materia fiscal y el otro en materia presupuestaria.

El artículo 94-B del Código Financiero proponía una facultad discrecional al Secretario de Finanzas y al Procurador Fiscal del Distrito Federal para reducir los créditos fiscales mediante petición de los contribuyentes.

Ahora, no será discrecional, ahora se incluye la obligación de que cumpliendo con alguno de los 6 requisitos mencionados en ese artículo, el Procurador Fiscal o el Secretario de Finanzas deberán reducir el crédito fiscal cuando medie petición del contribuyente.

Por último, el artículo fundamental en materia de administración presupuestal del Distrito Federal. El artículo 428. Quiero hacer mención que cuando este artículo fue incorporado al Código financiero en el año de 1995 fue combatido muy decididamente por varios representantes de la oposición en aquél tiempo, obviamente el diputado, el hoy diputado federal Fauzi Hamdan Amad, la representante Gabriela Gutiérrez Arce, ambos miembros del Partido Acción Nacional y en forma también particular, la hoy diputada federal Dolores Padierna, del Partido de la Revolución Democrática, nunca estuvimos de acuerdo en este tipo de artículos que prácticamente convertía todo el presupuesto del Gobierno del Distrito Federal en un cheque en blanco o en una partida secreta.

En esta legislatura, en la discusión de los presupuestos de 1998 y 1999 también insistimos en la modificación de dicho artículo. Después de dos años vemos un notorio y fundamental avance para lograr un gobierno que pueda cuando menos en los hechos y en la fundamentación legal asumirse como transparente.

Con esta modificación combatida, solicitada, promovida desde hace 4 años por el Partido Acción Nacional, hemos puesto fin a la discrecionalidad total del Ejecutivo local en materia presupuestal. Hacemos un reconocimiento a los diputados integrantes del grupo mayoritario por aceptar la idea general de la propuesta presentada por nuestro partido.

Este punto fundamental que constituye un triunfo histórico de Acción Nacional, nos obliga, tal como lo dijimos en la sesión de comisiones unidas el lunes pasado, a decidir nuestro voto en favor del dictamen que se nos presenta de reformas al Código Financiero del Distrito Federal.

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra, para razonar su voto, el diputado Luis Miguel Ortiz Haro.

EL C. DIPUTADO LUIS MIGUEL ORTIZ HARO AMIEVA.- Con su permiso, Presidenta.

Señoras y señores diputados: Los diputados del grupo parlamentario del PRI, por mi conducto, queremos razonar por qué votaremos en contra de este código, cuál es la postura, por qué esta postura, después de ríspidas pero muy poco productivas reuniones de trabajo en comisiones para discutir este dictamen, o lo que quede de él, porque con la cantidad de modificaciones que escuchamos aquí al Presidente de la Comisión de Hacienda que le está haciendo en este momento ya no sabemos exactamente cuál es.

El Código Financiero es un instrumento muy importante para los ciudadanos, en él los ciudadanos pueden encontrar cuál es el costo de los trámites que hacen con el Gobierno de la Ciudad, de todos los trámites: el pago de las cuotas de agua, el pago del impuesto predial, el pago de todos los servicios, contribuciones, impuestos, productos, aprovechamientos.

Es, en consecuencia, un documento que marca cuáles serán esos costos que habrán de pagar los ciudadanos, y para nosotros es inaceptable que en ese documento se incrementen los costos de los impuestos, derechos, contribuciones en general del Gobierno de la Ciudad en un 40% por encima de la inflación proyectada para el año 2000; la inflación proyectada para el año 2000 es apenas de casi 10% y no podemos en consecuencia aceptar que se cargue a las espaldas de los contribuyentes el incremento, que llaman pomposamente ajuste, de 14.1%.

En segundo lugar, nos parece necesario destacar que en este dictamen a discusión, votado en comisiones, se están disfrazando acuerdos que existen en la ciudad desde hace mucho tiempo, de facilidades y beneficios, trasladándolos a un capítulo particular que se llama reducciones y que no son más que acuerdos que han estado vigentes desde hace algún tiempo y que hoy se traducen ahí y se pretenden vender como beneficios de este dictamen; no son nuevos, ya existían hace otros años, desde hace varios años, y por cierto la mayor parte de éstos, la mayor parte de éstos los inició las administraciones priistas y solamente el PRD les ha dado continuidad.

Pero también hay otras cosas que orientan esta postura. Con desfachatez y muy poco cuidado los compañeros que hacen el dictamen y las comisiones que los votan, insertan conceptos que suenan elegantes y entonces parece adecuado ponerlos en el código y pretender convertirse en constituyentes. Porque después de una discusión, en la que finalmente los compañeros del PRD aunque eliminan el concepto, sostienen que existe, plantean que están promoviendo el derecho fiscal social. Y naturalmente aquí está el engaño, porque tratan de hacer creer que con la incorporación al código de todos estos beneficios que ya existían, pueden ahora decir pomposamente: se da apoyo a personas de la tercera edad, pensionados, viudas, huérfanos, jubilados, sectores en rezago social y en extrema

pobreza, mujeres abandonadas, madres solteras, en fin y, bueno, suena bonito.

Pero lo cierto es que todos ustedes, los diputados del PRD por hacer la tarea que les encomendaron, tienen que incrementar a los contribuyentes un 14.1%, que va incluso más allá de lo que ustedes mismos tienen proyectado como inflación esperada para el año entrante. No pudieron corregir la plana y las repercusiones las verán el año que entra.

Tampoco deja de inquietar esta actitud de la mayoría que mantiene la intención de que el Jefe de Gobierno pueda opinar sobre los presupuestos de los órganos autónomos. Hay que reconocer que fueron razonables una buena parte de las propuestas que presentó la mayoría en términos del manejo del presupuesto de los órganos autónomos; pero mantener este concepto en el código, que permite al Jefe de Gobierno emitir una opinión sobre los órganos autónomos, nos parece absolutamente inapropiado.

Cuestionamos varias veces el hecho de que si esta opinión no tiene validez alguna, entonces para qué incluirla, cuál es el sentido de mantenerla al ser órganos autónomos. Entonces, la opinión de referencia, la opinión que emite el Jefe de Gobierno resulta sólo un elemento de intimidación y presión a los órganos autónomos, lo cual violenta su autonomía.

Pero más allá que eso, como está redactado, el Jefe de Gobierno también puede opinar y enviar esa opinión sobre el presupuesto de la Asamblea o sobre el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, esa es la división de órganos de gobierno que nos proponen.

Hablaba yo de las ríspidas discusiones, que en realidad a veces incluso entre ríspidas y graciosas, ya que al hacer nosotros este cuestionamiento insistente, sobre esta rara disposición del Jefe de Gobierno de opinar sin que tenga valor legal la opinión, el Presidente en turno de las Comisiones Unidas, ataviado siempre de colores oscuros, después de un muy sesudo análisis nos dijo: "Mire usted diputado, esa redacción la propuse yo y es que el gobierno debe tener el derecho de "pataleo". "Perdonen", dijo, "si use la palabra correcta, pero no adecuada". Y así, como dijera también en esa misma memorable sesión una diputada compañera suya, así, diciendo: "la neta de las netas", este diputado de golpe y porrazo se convirtió en constituyente del "pataleo", del derecho legítimo del Jefe de Gobierno de patear.

También resulta difícil explicarse que existen diversas disposiciones en el código que dan facultades a las autoridades fiscales para hostigar a los contribuyentes, cuando se plantea en la exposición de motivos y en la argumentación que acaba de hacer aquí el Presidente de la Comisión de Hacienda, que uno de los objetos centrales del código es combatir la corrupción, y extraña entonces que se

les den mayores facultades a las autoridades fiscales para hostigar contribuyentes.

Por ejemplo, se autoriza a las autoridades fiscales a auditar a un contribuyente dos veces en un año por el mismo impuesto; si normalmente tarda 6 meses la resolución, hacerlo 2 veces en un año implica de veras ganas de jorobar. No existe otra explicación.

Por ejemplo plantear y defender a capa y espada que los créditos fiscales se actualicen conforme al índice nacional de precios al consumidor, es decir, quien no puede pagar una contribución y al no poderla pagar, se le van a cobrar recargos y se le van a cobrar multas, además se le va a actualizar el valor del adeudo para garantizar que no puedan pagar; no tendría otro objeto; lo único que van a garantizar es que esos contribuyentes no puedan pagar nunca.

Las discusiones de este paquete financiero para el año 2000, creo yo que merecen alguna reflexiones.

Miren, se han dado a conocer en estas reuniones como el partido que aplica su mayoría sin razón, mecánica, ordenada por el diputado Juanito González, actúan como una mayoría solo supeditada a los mandamientos del ejecutivo, pero eso sí, hay que reconocerles que sin que la condición de género les haya afectado mínimamente, es decir, a ustedes les da igual Jefa o Jefe de Gobierno, lo importante es complacerlo o complacerla, que más da, si son 10 ó son 14, nadie lo va a notar, ya se fueron de vacaciones casi todos, a fin de cuentas a ustedes no les importa, porque creo que ahora sí ya se dieron cuenta que ya se van, ya se van y la condición de representantes populares, va a quedar en una anécdota. No les importan las formas ni mucho menos el punto; hacen reuniones de trabajo, sin invitación, luego presentan acuerdos que solo ustedes firman, que solo ustedes conocen.

El propósito medular de estas reuniones con los funcionarios, es precisamente tener intercambio de ideas de información, aclarar dudas, hacer comentarios y no sirvieron para nada; ustedes no permitieron que sirvieran para nada.

Por otro lado, este dictamen contradice el propósito fundamental expresado por ustedes en la original exposición de motivos, de un aparente justicia fiscal, pues hace más rígido el pago de las contribuciones, aumenta la penalidad de los delitos fiscales, lo cual está demostrado que no combate la corrupción y amenaza con la actualización mensual de adeudos que ya comenté, todo argumentando que las arcas de la hacienda Ppblica, no se vean mermadas por la pérdida del valor real de la moneda.

Las arcas de la hacienda pública del Distrito Federal se han visto mermadas por la ineficiencia de este gobierno para recaudar y para incrementar la base de contribuyentes; pero al tiempo que endurecen las obligaciones de los ciudadanos,

cierran toda la posibilidad, la más mínima para que la sociedad exija el cumplimiento de las obligaciones del gobierno.

En esta reflexión, me parece que el motivo de sus prisas no tendría mas que algunos significados: o el reflejo del desgano por lo que no han podido hacer o el producto del desencanto al ver que no pudieron cumplir lo que prometieron. Es la certeza de que no serán y no son favorecidos por la simpatía popular; es darse cuenta de que no se gobierna sólo con demagogia, que se requiere dialogo, que se requiere acciones administrativas eficaces y eficientes y que ninguna de las 2 han sido las características de ustedes. El asunto del presupuesto del Instituto Electoral, merece una mención especial.

La iniciativa de la Jefa de Gobierno asignó una cantidad ridícula para el órgano electoral. El Secretario de Finanzas, aquí mismo, dijo que se debía a que no habían recibido el proyecto en tiempo; aquí demostramos que eso era falso, y entonces surgió otro embrión de jurista, apareció el Subsecretario de Egresos y explicó en comisiones unidas, que para ellos, para el gobierno, la autonomía de los órganos electorales no era tal. Esto es, si es autónomo, pero no tanto. Como dijera por ahí: autónomo sí, pero autónomo, autónomo, autónomo, eso ya no, que le pueden meter la mano.

Ese mismo personaje es el que envió un oficio a la Asamblea diciendo que el proyecto del Instituto Electoral lo habían recibido fuera de tiempo y que por eso no estaba incluido en la propuesta. Para proteger su mentira intentó hacer jurisprudencia. Justificaciones y más justificaciones sin entrarle nunca al fondo de la discusión.

Y qué decir del asunto del endeudamiento que ha sido un tema en el que verdaderamente algunos diputados se regodearon. Miren, en una entrevista radiofónica, el célebre jurista Hidalgo Ponce expresó y cito textualmente:

“Es que cualquiera con un dedo de frente sabe que los recursos de un crédito se aplican hasta el último, porque al principio hay que aplicar los recursos fiscales que no generan interés, y hasta el último, ya que gastaste, consumiste todo, aplicas los recursos que te generan intereses para evitar que estos repercutan posteriormente”.

O sea, este muchacho cree que el endeudamiento se maneja igual que como manejan sus organizaciones de vivienda, o sea primero se gastan los dineros de los socios y al final los créditos nada más para ustedes y nunca los pagan. Bueno, así no se puede gobernar. El dinero del endeudamiento tiene que tener fines específicos, no es para cuando se me acabe el otro. Este muchacho cree que es una tarjeta de Suburbia lo que le estaban dando.

Por eso y por muchas otras razones, como dice la canción, votaremos en contra de este dictamen, principalmente -

insisto- porque aprobarlo en los términos presentados aquí representa cargarle 40% arriba de la estimación de inflación para el año 2000 a los contribuyentes; que para los ciudadanos sí implica una carga adicional muy importante que no tienen por qué cubrir, porque es un costo que se pretende trasladar a los contribuyentes sólo como producto de la ineficiencia en la recaudación de parte del Gobierno de la Ciudad.

En cuanto al artículo 428 que se ha planteado aquí por el diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, modificar, nosotros planteamos cuáles son nuestras observaciones y que pedimos se incluyan en la propuesta.

La redacción del primer párrafo dice: “El Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá modificar el contenido orgánico y financiero de los programas de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades incluidas en el presupuesto de egresos”.

Nos parece que debe incluirse: “los órganos político administrativos”, porque la redacción como está en la propuesta que hizo aquí el diputado Chiguil, excluye a las delegaciones de este supuesto y nos parece que es muy grave sacar 9 mil y pico de millones de pesos que están destinados a las delegaciones de este supuesto.

Sigue el artículo diciendo, en el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto párrafo, “sólo podrán exceptuarse de lo anterior cuando existan situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales”.

Nuestra propuesta es que diga: “sólo podrán exceptuarse de lo anterior cuando por declaratoria pública existan situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales, etcétera”.

Y también la parte que señala estas modificaciones no podrán: “uno, transferir recursos destinados a programas prioritarios hacia programas no prioritarios; dos, disminuir el monto consignado en el decreto de presupuesto de egresos para la atención de programas prioritarios, salvo que se hayan concluido las metas”; proponer un tercer inciso que diga: “los programas no prioritarios podrán ser modificados siempre que esos recursos sean destinados a programas prioritarios”. Aquí está el centro de nuestra discusión en este artículo.

Aquí han planteado, tanto el representante del PRD como del PAN, que por fin se le quita la discrecionalidad al gobierno. Revisen bien la norma que existía en 95. Efectivamente el artículo 428 estaba redactado como venía originalmente en este dictamen, pero también efectivamente existían disposiciones en el presupuesto de egresos que señalaban expresamente la calidad de prioritarios a ciertos programas, que discutiremos cuando lleguemos al

presupuesto de egresos, que señalaban que esos programas no podían ser modificados en su estructura programática, en su contenido orgánico y financiero, pero también que la modificación en los programas no prioritarios sólo podía ser si se destinaban los recursos a los programas prioritarios.

De modo que no están ustedes proponiendo ninguna avanzada, lo que nosotros les estamos proponiendo es que lleguen a las condiciones que tenía un presupuesto transparente, un presupuesto ordenado como lo sabe manejar mi partido.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra, para razonar su voto, hasta por 20 minutos, el diputado Ricardo Martínez Atala.

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA (Desde su curul).- Declino, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra, hasta por 20 minutos, para razonar su voto, la diputada Ana Luisa Cárdenas Pérez.

LA C. DIPUTADA ANA LUISA CARDENAS PEREZ.- Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras diputadas y diputados:

El proceso de análisis, discusión y dictamen sobre las reformas al Código Financiero, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el año 2000 hoy concluye con la presentación ante este pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de los respectivos proyectos de dictamen.

Frente a la realidad en nuestra entidad, con atribuciones delimitadas por nuestra Constitución Política, los órganos de gobierno locales dependemos en buena parte de la correlación de fuerzas y los esfuerzos de concertación que se desarrollen en el Congreso de la Unión para poder integrar y aprobar el paquete económico presupuestal del sector público local para el año 2000.

En cambio, en el Distrito Federal tal decisión es resultado de una situación política nacional que afecta de manera directa y unilateralmente la situación política local, aspecto que no se puede justificar desde ninguna lógica; sin embargo, la mayoría legislativa que existe en la Asamblea desde 1997, ha asumido con responsabilidad y con un claro sentido social el compromiso adquirido frente a los electores, preservando frente a los elementos desfavorables y de bloqueo político que han intentado la primera minoría del Congreso, la esencia del proyecto de cambio democrático con sentido social para nuestra ciudad capital.

Efectivamente el gobierno local y la mayoría parlamentaria han establecido una estrategia económica alternativa para el Distrito Federal con el objetivo de crear mecanismos y medios necesarios para modificar la situación de regresión económica y social que la ciudad experimentó desde que se implantó el proyecto neoliberal en nuestro país.

No es gratuito que los diputados locales del PRI desde el inicio del gobierno democrático hayan establecido como estrategia política el intento cotidiano y sistemático por crear un clima de ingobernabilidad, de crítica sistemática en contra de todas y cada una de las acciones públicas, con el fin evidente de recuperar la ciudad que perdieron a manos del voto ciudadano.

Pero contrario a lo que este partido ha tratado de difundir, el gobierno democrático y la mayoría perredista en la Asamblea han ejercido con gran responsabilidad y con sentido social sus respectivas funciones en lo que va de este gobierno y de la Legislatura.

No ha habido ingobernabilidad ni falta de dirección en las decisiones fundamentales, lo que ha permitido que la transición democrática en nuestro país y en nuestra capital no tuviera tintes dramáticos para sus habitantes.

Hoy el PRI intenta difundir un discurso que carece de bases, porque cuando gobernó la ciudad su actuación frente al gobierno central y delegacional provocó deterioro social, urbano y ecológico que hemos tenido que revertir en este breve tiempo.

No podemos aceptar las críticas priistas porque ellos crearon los problemas que enfrentamos, frente a los otros partidos minoritarios queremos señalar que en su afán por ganar las preferencias ciudadanas han tratado de sumarse a las críticas ligeras hacia el gobierno perredista, sin considerar la importancia histórica de aislar a los grupos corporativos y clientelares de origen priista, para que nunca bajo ninguna circunstancia tales sectores recuperen la ciudad para su propio beneficio y provecho, lo que sin duda representaría la derrota política más importante de los partidos y proyectos democráticos que existen en el país y la ciudad.

Quisiera señalar que los cambios efectuados al artículo 428 del Código Financiero fue resultado de la reflexión colectiva que se efectuó en comisiones unidas, reflexión en la que por cierto estuvo ausente la fracción del PAN, a pesar de que los diputados de este partido manifestaron su interés por encontrar una propuesta de consenso, finalmente se ausentaron.

Por ello, queremos dejar en claro que la reforma del mencionado artículo es un logro de las comisiones unidas y no de una fracción parlamentaria en lo particular.

Por otro lado, la división de poderes que debe existir entre órganos de gobierno local, nos llevó a establecer una serie de condiciones para que el Ejecutivo Local sólo bajo circunstancias particulares pudiera modificar la orientación del gasto, dejando a salvo los programas prioritarios, lo que sin duda marca un cambio en el ejercicio republicano del ejercicio del poder en nuestra ciudad.

Para nosotros los diputados locales del PRD es fundamental que el paquete económico financiero para el año 2000 mantenga como uno de sus ejes fundamentales la existencia de mecanismos que garanticen la obtención de los recursos suficientes para garantizar los servicios fundamentales que requiere el funcionamiento de la ciudad, lo que incluye la continuación de programas de carácter metropolitano, sin embargo los recursos que se pretenden obtener no significa tratar de manera igual a los desiguales, sino al contrario, crear los instrumentos fiscales que permitan que los sectores menos favorecidos y que han venido creciendo a partir de la implementación del modelo neoliberal cuenten con instrumentos que no afecten sus exiguas economías familiares, eso evidentemente nos distingue como gobierno de otros, que proceden de partidos que tratan de manera igual a los desiguales, que al cabo del tiempo favorecen la ampliación de la brecha entre ricos y pobres en este país, aunque también se busca ampliar la base de contribuyentes con el fin de mejorar y eficientar los mecanismos recaudatorios locales, sin olvidar que se ha presentado una drástica caída en el coeficiente efectivo de la distribución de las participaciones federales que les corresponden al Distrito Federal, lo que sin duda requiere modificarse con el fin de no seguir ampliando el modelo inequitativo que se ha implementado desde el ámbito federal.

En cuanto al monto del endeudamiento aprobado por el Congreso de la Unión de 6,000 millones de pesos, 3,000 millones de pesos menos a lo solicitado por el gobierno local, es claro que tal reducción afectará a los programas, proyectos y metas planteados por el Ejecutivo Local.

El Presupuesto de Egresos para el año 2000 tuvo que ser modificado con el fin de ajustarlo para compensar la reducción en el monto de la deuda neta autorizada por el Congreso de la Unión.

Asimismo se realizaron una serie de adecuaciones con el fin de garantizar la viabilidad financiera de los órganos autónomos existentes.

Se definen los programas prioritarios, así como una serie de directrices fundamentales para el ejercicio presupuestal, pero lo más importante es que este presupuesto tiene un claro sentido social, que busca continuar con las obras y acciones que garanticen el funcionamiento de la infraestructura pública urbana.

Incorporamos una serie de condicionantes para que frente a contingencias exógenas el gobierno local tenga posibilidades de actuar con flexibilidad y efectividad, evitando caer en el uso discrecional de esta atribución. Tales condiciones deberían de ser impulsadas en los congresos de muchos Estados, incluso sería conveniente que tales limitaciones fuesen señaladas para el ejercicio del presupuesto federal, donde el Presidente de la República sigue teniendo la facultad de adecuación sin que medien condiciones o criterios específicos, tal como se demostró cuando el precio del petróleo se ubicó por debajo de la proyección realizada por las autoridades federales.

Por otro lado, compañeras y compañeros, los recursos asignados mediante el fondo de fortalecimiento a la infraestructura educativa y productiva de las entidades federativas por un monto superior a 740 millones de pesos permitirá restituir parcialmente los fondos que cayeron a partir de la aprobación de un monto de endeudamiento menor al solicitado, sin olvidar que tales recursos son resultado de la propuesta opositora que derrotó a la propuesta del gobierno que establecía un monto ridículo de 50 millones de pesos.

El Presupuesto de Egresos para el año 2000 mantiene y fortalece los criterios de racionalidad y ajuste del gasto corriente; capacitación de servidores públicos; intensifica los programas de vivienda; apoyo financiero a los servicios públicos de transporte; se continúa con la política de conservación y mantenimiento de la infraestructura urbana; establece una política de gasto congruente con la necesidad de mantener la prestación de servicios de seguridad pública; procuración e impartición de justicia; construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa y de salud; de urbanización y atención a los grupos marginados.

Frente a las críticas sin fundamentos y con claras intenciones políticas, no cedimos; frente a los argumentos serios, técnicos y objetivos que buscan mejorar y eficientar la captación y utilización de los recursos, tuvimos la sensibilidad necesaria para incorporar tales observaciones y propuestas.

Convoco a todos los compañeros a votar a favor del paquete financiero.

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ (Desde su curul).- Señora Presidenta, solicito la palabra.

LA C. PRESIDENTA.- Diputada, ¿con qué objeto?

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Para razonar mi voto.

LA C. PRESIDENTA.- Se le concede el uso de la palabra, hasta por 20 minutos, a la diputada Raquel Sevilla, para razonar su voto.

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Con su permiso, señora Presidenta.

Es verdaderamente vergonzoso el hecho de que se apruebe un Código Financiero como el que se está planteando, es una ofensa con costo a la ciudadanía.

Quizá por caballerosidad el diputado Luis Miguel Ortiz Haro no manejó el nombre de la diputada que dijo "la neta de las netas", pero yo sí, digo, fue la diputada Ana Luisa Cárdenas. Una de las sugerencias que se le hizo a la compañera... pensé que nada más yo utilizaba esas palabras, pero no; cuando se le hicieron sugerencias de que no se sintieran voceros de la democracia y que la mayoría aplastante no cayera en irracionalidad ni en intolerancia, la diputada... yo le hacía una pregunta a la diputada, que ahora mismo se la vuelvo a hacer, y le pedí al diputado Francisco Chiguil que no la contestara por ella, sino que ella fuera quien la contestara. Yo creo que el ábaco no se lo debieron haber regalado al diputado Octavio West, se lo debieron haber regalado a la diputada Ana Luisa Cárdenas, porque no supo sumar de qué mes a qué mes se tiene que considerar la inflación. Es decir, están incrementando y elevando los costos considerando diciembre, cuando históricamente el formato es sumar de noviembre a noviembre.

Utilizan términos como proyecto neoliberal y yo me quedo preguntándome, me pregunto a mí misma si realmente conocen la palabra "neoliberal", como si también conocieran la palabra "democracia"; eso no lo entiendo.

Ese 7% bondadoso del Código Financiero y de la Ley de Ingresos, a pesar de que el diputado Chiguil estuvo haciéndoles la tarea y les pasó sus cuadernitos y a usted le consta, diputado, porque yo estuve con usted un día antes hasta las 11:30 de la noche no lo entendieron y siguen sin entenderlo también.

Hablan del buen gobierno y del gobierno democrático. Dicen que tomaron en cuenta las razones objetivas, las razones propias de quienes tenían el acierto. Lo cierto es que las comisiones unidas no aprobaron absolutamente nada, fueron 9 diputados del PRD quienes aprobaron y todos los argumentos que vertieron los demás grupos simple y llanamente no fueron escuchados, porque a la diputada Ana Luisa Cárdenas no le "daba la gana"; así lo manifestó, que no estaba en disposición de escuchar los argumentos de nadie.

Dice que es economista y no supo contestarme el día de ayer cómo se sacaba una media; dice que es economista. Yo puedo sacar la media que tengo en la pierna, pero la compañera no supo sacar una media para calcular un impuesto.

Hablan de montos, de endeudamiento. Se les hizo la sugerencia que no cayeran en el ridículo de hace dos años y de hace un año, de alce la mano, alce la tras. Por ahí están todos los asesores del Gobierno del Distrito Federal

pasándoles tarjetitas, pero además bastante mal hechas, porque ni siquiera tampoco pudieron calcular y eso que llevaban calculadora, a menos que no hayan sido de una buena marca o ni siquiera hayan sabido usar. No supieron calcular realmente cuál era el costo beneficio de esa diferencial de impuestos.

Yo no sé hasta dónde llega el cinismo y no sé si el cinismo se pueda medir o no. De repente aquí hay acusaciones, que si los Ipabs, si los Fobaproas, que si los Paolis, no lo sé. Pero en este recinto también hay cinismos; cinismos que asumen su falta de incapacidad, cinismos que se llaman Ana Luisa Cárdenas, cinismos que se llaman Juanito, con todo respeto, porque les tuvieron línea, yo estaba junto a usted, compañero, cuando le decían: en este vamos a favor, a favor y en este vamos en contra, en contra; o sea, que siguieron jugando la cuestión de la repetición. Yo sí digo los cinismos con nombre y apellido; hay que ser congruente en eso.

No sé si la compañera Ana Luisa Cárdenas se siente tan mal porque su incapacidad la delata o se siente tan mal porque estaba rodeada de hombres ahí que no le podían contestar, pero yo sí le podía contestar, por eso estoy en esta tribuna diciéndole lo que le tenía que decir el día de ayer.

Hablan de que les dejaron mal la ciudad, y si ustedes hablan de que les dejaron mal la ciudad, yo pienso cómo la van a dejar ustedes.

Fíjense, sumar el cinismo; la intolerancia, la antidemocracia, la incapacidad, son muchos factores, demasiados, a ver si esos si los pueden sumar, para que les salgan bien las cuentas; el neofascismo. Hay tantas cosas que tenemos que sumarles con costo a la ciudadanía; la incapacidad; la habilidad de mentir, esa es otra suma también.

Se espantan y se curan en salud. Si también van a negociar a lo oscuro, porque tienen información muy fresca de la Secretaría Hacienda. También saben lo que quiere el Procurador Fiscal; no se llamen engaño y no engañen a la sociedad tampoco.

Yo ayer hacía referencia que de repente se me imaginaba que estábamos en la época de la Segunda Guerra Mundial; generan problemas para después llegar como los salvadores de la población; generan pobreza para después llegar a repartir mendrugos de pan.

Esto es muy grave. Decían que el PRI había lapidado los principios en 70 años. Fíjense el PRI lapidó los principios en 70 años; pero estos compañeros en menos de 3 años acabaron con la lápida y la volvieron a hacer, la duplicaron, saben multiplicar los errores.

Compañero Chiguil, le sugeriría que por cuestión de género mandara a una persona mucho más inteligente; es

verdaderamente desesperante, inclusive para usted, que la compañera venga aquí a hacer el ridículo y a ponerlos en ridículo.

Entonces la nueva suma va a ser la siguiente, se las repito para que se la graben, porque creo que si todos nos vamos: incapacidad, fíjense cuántos van a sumar; incapacidad, para que se saquen 10; incapacidad, intolerancia, desconocimiento, antidemocracia, neofascismo, burla a la sociedad, falta de habilidades, falta de conocimiento, exceso de cinismo y las netas del planeta, suman 10, o sea que en el próximo examen del ejercicio electoral quedarán absolutamente reprobados; ni siquiera pudieron hacer una buena redacción del artículo 428.

Ayer flagrantemente violaron el artículo 486, 492, 493, 495 del Código Financiero. Eso les pasa por pararse de sus lugares, eso les pasa por andar jugando "alce la mano, alce la tras" compañeros; estamos discutiendo sobre los recursos de la ciudad más grande del mundo, que obviamente a ustedes se les hace un moustro porque nunca han tenido nada y el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver.

No es que la falla esté en el ábaco, es que ni siquiera saben usar el ábaco, ni siquiera lo saben usar.

Hay cuadros; debo de reconocer, hay compañeros del PRD que han sido sensibles; el diputado Chiguil es una gente sensible, es una gente que entiende; hay compañeros que son absolutamente sensibles, cuando menos es el más inteligente, eso ni dudarlo y de las compañeras; hay varias que son inteligentes, lástima que no estén dentro de las comisiones financieras; hay varias, no están en las comisiones financieras.

Mandaron a la más brillante, pero no precisamente brilló por la inteligencia ni por el maquillaje, tiene un colorcito bastante charoleado no, vean el de ella y vean el mío, ésta es la brillantez que tiene.

Diputada, ha de ser sumamente desagradable hablar de un tema del que se desconoce; ha de ser muy triste hacer el ridículo como lo hizo usted ayer. Yo lo he hecho, pero lo he asumido y hay de ridículos a ridículos; hay ridículos con inteligencia; eso no lo pueden negar; pero hacer ridículo y no asumir ese ridículo y aparte sumar la no inteligencia, la no habilidad y la ignorancia, eso es un exceso.

Debería de revisar todos y cada uno de los términos que usted utiliza, y le sugeriría una tarea, a ver si esa la puede hacer, escriba diez mil veces en su cuaderno de tarea, yo se lo pido por favor, así como un motivo de fin de año, así regáleselo a la ciudadanía: "Debo ser una mujer que entienda el proceso democrático" Y para entender el proceso democrático también tiene que aprender a entender el

sistema nacional democrático, y para eso tiene que aprenderse el artículo 25 y 26 de la Constitución Política Nacional, porque no se lo sabe. Si me permite ser su maestra, con mucho gusto le estoy dando las claves.

Ayer hablábamos de las clases más necesitadas. Fíjense que les dimos un factor, con el que podían multiplicar y no lo hicieron; les dijimos que la Delegación Gustavo A. Madero y la Delegación Iztapalapa tenía el 35.1% de pobres. Ni con eso pudieron multiplicar. No se sigan sintiendo los redentores de este país.

Por su falta de capacidad, por su inconsistencia y por su incongruencia, por supuesto que mi voto, digo, me gustaría votar a favor, porque debo reconocer a usted diputado Minjares, y perdón que le haga, digo me gustaría votar a favor, pero no puedo, me entienden, por congruencia política no puedo. Porque un artículo no salva tanta ignorancia, no puedo votar a favor. Créamelo.

Para saber de números hay que empezar por el uno, y después del uno; bueno, ayer hubo tanto ridículo que leían los millones de pesos en cientos de miles, con eso les digo todo. Más de tres veces, y hay una versión estenográfica que no me deja mentir.

Y también con todo respeto le quiero decir a los compañeros de Acción Nacional, porque eso lo hablamos previamente diputado Minjares, usted y una servidora, que el 428 era necesario abrirlo, que el 428 era necesario amarrarlo, la verdad, usted es un caballero; usted no se compare con los demás, usted es aparte.

Nosotros, creo que habíamos hablado perfectamente bien y eso no es un logro exclusivo de Acción Nacional, perdóneme, sobre el 428. Digo, hay Paolis en todos lados, no, no es cierto, mentira.

Pero no vengán a hacer más el ridículo, compañeros; no vengán a hacer más el ridículo de un tema que no manejan, o cuando menos prepárense bien, súbanse bien, de verdad. Ya les dije un factor, ahorita que entremos a la Ley de Ingresos vamos a jugar al acertijo, 35.1 de pobres los tiene Gustavo A. Madero y lo tiene Iztapalapa. Los demás números sáquenlos ustedes, ahí hay una calculadora, tienen asesores. No me vayan a salir después con que tienen que revisar el clasificador por objeto del gasto, como ayer lo dijo también otro diputado del PRD.

No engañen a la ciudadanía; no hay tal beneficio del 7% diferenciado. No, eso se acabó. La gente quizá no entiende los números, pero no es tonta. Los tontos son ustedes que creen que van a volver a ganar esta ciudad.

Mí mejor deseo de año nuevo es que la democracia gane, pero no en manos del PRD.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Antes de proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general, se pregunta a los ciudadanos diputados si habrán de reservarse algún artículo para ser discutido en lo particular.

Esta Presidencia informa que el diputado Francisco Chiguil se ha reservado el artículo 428.

EL C. DIPUTADO RODOLFO PICHARDO MENDOZA (Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputado Pichardo, ¿con qué objeto?

EL C. DIPUTADO RODOLFO PICHARDO MENDOZA (Desde su curul).- Para reservarme el artículo 265-V.

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Juan González.

EL C. DIPUTADO JUAN GONZALEZ ROMERO (Desde su curul).- Para reservar la adición a un artículo transitorio nuevo, entre el Séptimo y el Octavo.

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Elvira Albarrán.

LA C. DIPUTADA ELVIRA ALBARRAN RODRIGUEZ (Desde su curul).- Para reservarme el artículo 263.

LA C. PRESIDENTA.- Diputado José Narro.

EL C. DIPUTADO JOSE NARRO CESPEDES (Desde su curul).- Para reservarme el artículo 50-B, el artículo 386 y el artículo 495 del Código Financiero.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Algún otro ciudadano diputado desea reservar algún otro artículo? Diputado Martínez Atala.

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA (Desde su curul).- Para la reserva del artículo 428.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Es la reserva ya hecha por el diputado Chiguil?

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA (Desde su curul).- Sí, el artículo 109, artículo 265-Y, artículo 321, el Título de la Sección Tercera, el 385, 385-A, 391, 392, 393-D, 418, 435, 437, 438, 439, 454, 455, 481 y 483. Esas son las reservas que hago.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor diputado. ¿No hay otro ciudadano diputado o diputada que se quiera reservar algún otro artículo?

En consecuencia, proceda la secretaría a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados en lo particular.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados en lo particular.

Se solicita a los ciudadanos diputados, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión “en pro” o “en contra”.

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones. Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Manuel Minjares, en pro.

Armando Salinas Torre, en pro.

Ortiz Haro, en contra.

Hiroishi Suzuki, en pro.

Islas León, en pro.

Jesús Galván, en pro.

Hernández Labastida, en pro.

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Manuel Aguilera, en contra.

Levín Coppel, en contra.

De Garay, en contra.

Luna Parra, en contra.

Alejandro Vázquez, en contra.

West, en contra.

Jesús Toledano, en contra.

Hidalgo, a favor.

Eliab Mendoza, a favor.

Cárdenas Pérez, en pro.

Ricardo Martínez, en pro.

Roberto Rico, en pro.

Francisco Chiguil, en pro.

Márquez Franco, en pro.

Ricardo Molina, a favor.

Ernesto Chávez, a favor.

Miguel Angel Peláez, a favor.

José Luis Benítez, en contra.

Castellanos Cortés, en contra.

Martínez Parra, a favor.

Batres, en el mismo sentido que los compañeros del PAN.

René Arce, a favor.

Alfredo Hernández, a favor.

Francisco Ortiz, a favor.

David Sánchez, porque va a beneficiar a los grupos vulnerables de esta ciudad, a favor.

Ignacio Ruiz, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

Virginia Jaramillo Flores, en pro.

Miguel Bortolini, a favor.

Hipólito Bravo López, en pro.

Juan González, a favor.

Daniel Martínez Enríquez, a favor.

Pichardo Mendoza, a favor.

Alejandro Rojas, a favor.

Rodríguez Ruiz, en pro.

Narro Céspedes José, a favor.

García Rocha Martha, a favor.

Vicente Cuéllar, a favor.

Antonio Padierna, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Serna Alvarado, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Angeles Correa, a favor.

Rafael López de la Cerda, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Sevilla Díaz, en contra.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, a favor.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente:

47 votos a favor; 11 votos en contra; 0 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentan las Comisiones Unidas, de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal para el año 2000 en lo general y los artículos no reservados en lo particular.

Para su discusión en lo particular ha sido reservados los siguientes artículos:

428, 265-D, Fracción V, propuesta de transitorio, adición; artículo 50-B; artículo 386; artículo 495; artículo 428; 109; 263; 265; 321; 385; 385-A; 391; 392; 393; 418; 435; 437; 438; 439; 454; 455; 481 y 483.

En consecuencia y para referirse a los artículos reservados se le concede el uso de la palabra al diputado

Rodolfo Pichardo Mendoza, para referirse al artículo 265, fracción V.

EL C. DIPUTADO RODOLFO PICHARDO MENDOZA.-
Con su permiso, señora Presidenta.

Hace un rato escuchamos en esta tribuna el hecho de que los acuerdos de estímulos fiscales y facilidades administrativas para la vivienda se venían publicando desde hace varias administraciones y que esto no era una gran aportación o no era una aportación novedosa al incorporarlos al Código Financiero para el Distrito Federal.

Quiero decir que difiero de esta apreciación, coincido totalmente en que este gran avance que se dio para la publicación de los acuerdos de estímulos fiscales y facilidades administrativas para la vivienda fue un acierto, un acierto contundente y que éste ha tenido varias variantes, de acuerdo a quien ha estado al frente de la administración.

Lo que me parece es el gran avance y aportación al integrarlo al Código Financiero, es:

Uno, que acaba con la discrecionalidad con la que se aplicaban estos estímulos y facilidades administrativas, que eran una facultad de quienes estaban al frente de las dependencias y de la Procuraduría Fiscal, su aplicación y otorgación a familias de escasos recursos económicos. Hoy, al regularlo a través del Código Financiero, se acaba esa discrecionalidad y permite que sin tener que estar dependiendo del estado de ánimo de un funcionario o de una autoridad este beneficio llegue directamente a las familias que lo necesitan.

Dos, el hecho de que para que la aplicación de estos acuerdos de facilidades o estos estímulos fiscales lleguen a promotores sociales y privados autorizándose con la comprobación de una constancia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, reduce gigantescamente el peregrinar que tienen que hacer los solicitantes, las familias de escasos recursos económicos para lograr obtener estos subsidios, estas reducciones fiscales. Estas reducciones fiscales que hoy se incluyen en el Código Financiero tenían que llevarse por lo menos de 3 a 6 meses para ser sujetos de este beneficio, hecho por el cual muchas adquisiciones de suelo para vivienda, muchas edificaciones fueron paradas y no en esta administración, sino en las diferentes administraciones.

Y tercero, creo que realmente la incorporación de estos acuerdos sí garantizan el estímulo a la producción de vivienda de interés social y popular, y quiero decirles que este fue un planteamiento de muchos sectores el que se pudieran incorporar estos acuerdos al Código Financiero; no es una propuesta nueva, es una propuesta que se ha venido trabajando desde hace muchos años y que creo

que varios diputados aquí han sido y han hecho aportaciones importantes para que realmente se garantice que estos beneficios lleguen a las familias de escasos recursos económicos.

Creo que si esto no existiera realmente sería muy difícil que familias de escasos recursos económicos pudieran acceder a créditos de vivienda de interés social y popular, y el ejemplo es muy rápido, el FOVI, hoy el costo de un crédito para una vivienda de interés social está por arriba de los 141 mil pesos por vivienda, donde la gente tiene que pagar por lo menos 14 mil pesos de enganche más los costos de escrituración y permisos y licencias, con lo cual tiene que haber una aportación que va de los 25 mil a los 30 mil pesos, lo cual es dramáticamente difícil, imposible para las familias, que está comprobado con estadísticas del Gobierno Federal y las diferentes administraciones donde el PRI estuvo al frente: El 70% de la población que busca este beneficio tiene un ingreso inferior a los 3 salarios mínimos, cuando el FOVI hoy está en 4.1 y 4.5 el requisito para acceder a estos créditos. Creo que sí ayuda realmente, creo que sí es un beneficio a quienes hoy requieren de acceder a una vivienda de interés social, a un crédito de vivienda de interés social y esto ayuda a modificar el concepto de la vivienda como una mercancía para convertirlo realmente en una vivienda que beneficie a las familias de escasos recursos económicos.

Es en ese sentido que buscando aportar no algo nuevo, sino algo que ya está en los acuerdos de facilidades que se publican anualmente y que hoy entran a este código como reducciones, yo quisiera aportar una parte que se quedó fuera y que tiene que ver con la producción también de vivienda de interés social y que tiene que ver con el esfuerzo que se hizo por administraciones pasadas y que hoy se continúa en la expropiación de suelo para vivienda de interés social, en donde no existe quien acredite la propiedad.

Es en ese sentido y quisiera proponer la modificación y adiciones al artículo 265-V de este código que dice lo siguiente: "Los organismos descentralizados, fideicomisos públicos, promotores públicos, sociales y privados que desarrollen proyectos relacionados con la vivienda de interés social o vivienda popular, tendrán derecho a una reducción equivalente al 100% y 80% respectivamente, respecto a las contribuciones a las que se refieren los artículos 156, 204, 204-B, 206, 207-A, 208, 244, 245 y 253; así como los derechos establecidos en el Capítulo IX de la Sección Quinta, del Título II, del Libro I de este código, con excepción de los derechos del Archivo General de Notarías.

Por lo que se refiere a los derechos por los servicios de constitución y operación hidráulica contenidos en el Artículo 204 de este Código, la reducción se aplicará únicamente por lo que se hace a la instalación.

Para obtener las reducciones a que se refiere este artículo, los contribuyentes deberán presentar la constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la que se indique su calidad de promotor de las referidas viviendas.

Las reducciones contenidas en este precepto, tendrán efectos provisionales hasta en tanto el contribuyente exhiba la constancia emitida por la citada secretaría, con la que se acredite que los proyectos de construcción de vivienda de interés social y vivienda popular se realizaron conforme a lo inicialmente manifestado.

La propuesta es que este artículo quede como sigue:

Artículo 265-V.- "Los organismos descentralizados, fideicomisos públicos, promotores públicos, sociales y privados que desarrollen proyectos relacionados con la vivienda de interés social o vivienda popular, tendrán derecho a una reducción equivalente al 100% y 80% respectivamente, respecto a las contribuciones a que se refieren los artículos 156, 204, 204-B, 206, 207, 207-A, 208, 244, 245 y 253, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, de la Sección Quinta del Título III del Libro I de este código, con excepción de los derechos del Archivo General de Notarías.

Por lo que se refiere a los derechos por los servicios de construcción y operación hidráulica contenidos en el artículo 204 de este código, la reducción se aplicará únicamente por lo que se hace a la instalación.

Para obtener las reducciones a que se refiere el párrafo primero de este artículo, los contribuyentes deberán presentar la constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la que se indique su calidad de promotor de las referidas viviendas.

Los organismos y fideicomisos públicos de vivienda del Distrito Federal, tendrán derecho a una reducción equivalente al 100% por concepto de impuesto predial respecto de los inmuebles que hayan sido sujetos de una expropiación, para destinarse a la realización de proyectos de vivienda de interés social o vivienda popular.

La reducción a que se refiere el párrafo anterior sólo se aplicará a los adeudos anteriores a la expropiación, cuando no sea posible deducir el impuesto predial del pago indemnizatorio, por no existir un reclamante que acredite fehacientemente su derecho de propiedad.

Al obtener la reducción por concepto de impuesto predial, los organismos y fideicomisos públicos de vivienda del Distrito Federal, deberán acreditar esta circunstancia conforme a las disposiciones administrativas que se emitan al respecto.

Las reducciones contenidas en este precepto, con excepción de la reducción del impuesto predial, tendrán efectos provisionales hasta en tanto el contribuyente exhiba la constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la que se acredite que los proyectos de construcción de vivienda de interés social y vivienda popular, se realizaron conforme a lo inicialmente manifestado.

Esa es la propuesta que pongo a su consideración y esperamos que consecuentemente con los decretos o los acuerdos publicados con administraciones anteriores, hoy que se integran al código las votemos en favor.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE RENE BALDOMERO RODRIGUEZ RUIZ.- Está discusión la propuesta de modificación al artículo 265V que fue reservado por el diputado Rodolfo Pichardo. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra?

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de la propuesta presentada al artículo 265V que fue reservado por el diputado Rodolfo Pichardo Mendoza.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de la propuesta presentada al artículo 265-V reservados por el diputado Rodolfo Pichardo Mendoza.

Se solicita a los ciudadanos diputados, en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea. La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda:

(Votación nominal)

Hiroishi Suzuki, en pro.

Islas León, en pro.

Jesús Galván, en pro.

Hernández Labastida Miguel, en pro.

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Manuel Aguilera, en contra.
Levín Coppel, en contra.
De Garay, en contra.
Rivera Domínguez, en contra.
Ortiz Haro, en contra.
Luna Parra, en contra también.
Alejandro Vázquez, en contra.
Jesús Toledano, en contra.
Martínez Parra, a favor.
Javier Hidalgo, en pro.
Cárdenas Pérez, a favor.
Eliab Mendoza, a favor.
Ricardo Martínez, en pro.
Roberto Rico, a favor.
Francisco Chiguil, en pro.
Ricardo Molina, a favor.
Ernesto Chávez, a favor.
José Luis Benítez, en contra.
Castellanos Cortés, en contra.
René Arce, a favor.
García Rocha, a favor.
Alfredo Hernández, a favor.
Francisco Ortiz, a favor.
David Sánchez, a favor.
Miguel Bortolini, a favor.
Ignacio Ruiz, a favor.
Batres, a favor.
Virginia Jaramillo, en pro.

Miguel Angel Peláez, a favor.
Márquez Franco, en pro.
Hipólito Bravo, en pro.
Juan González, a favor.
Martínez Enríquez, a favor.
Pichardo Mendoza, a favor.
Alejandro Rojas, a favor.
Narro Céspedes José, a favor.
Vicente Cuéllar, a favor.
Antonio Padierna, a favor.
Guillermo Hernández, a favor.
Albarrán Rodríguez, a favor.
Serna Alvarado, a favor.
Verónica Moreno, a favor.
Soto Camacho, a favor.
Martínez Rojo, a favor.
Angeles Correa, a favor.
Sevilla Díaz, abstención.
Rigoberto Nieto, a favor.
Sara Murúa, en pro.
Rafael López de la Cerda, a favor.
LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?
Manuel Minjares, en pro.
LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?
Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva:
Tello Mondragón Yolanda, a favor.
Rodríguez Ruiz, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 46 votos a favor, 10 votos en contra, 1 abstención.

EL C. PRESIDENTE.- Por lo tanto, se aprueba la propuesta de modificación al Artículo 265 V, que fue reservado por el diputado Rodolfo Pichardo Mendoza.

Para hacer una propuesta de adición de Transitorio, tiene la palabra el diputado Juan González Romero.

EL C. DIPUTADO JUAN GONZALEZ ROMERO.- Con su permiso, diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, señor diputado.

EL C. DIPUTADO JUAN GONZALEZ ROMERO.- He solicitado esta reserva para incluir a nombre propio y de la diputada Lucero Márquez Franco, un artículo Transitorio nuevo en el Código Financiero, entre el Quinto y Sexto, que establece el dictamen, con el objeto de que esta honorable Asamblea Legislativa dé atención oportuna a uno de los problemas que aquejan a los habitantes de la Ciudad de México, y me refiero particularmente al problema de suministro de agua por tandeo, entre otras palabras también como conocido como suministro irregular, que como es sabido afecta a un gran número de contribuyentes por derechos por suministro de agua, al cobrarles en la mayoría de los casos como si tuvieran un servicio en óptimas condiciones, siendo que no es así.

En este sentido, someto a consideración del pleno la inclusión de un artículo Transitorio para quedar como sigue: "A los contribuyentes de derecho por suministro de agua en sistema medido de uso doméstico o mixto que reciban el servicio por tandeo, se les aplicará por toma la cuota fija que corresponda conforme a lo establecido en la tarifa del artículo 196, fracción II de este código, en tanto se regularice el suministro.

Asimismo, a estos contribuyentes ubicados en las colonias catastrales 0, 1, 2, 3 y 8, para efecto de la conexión a las redes de agua y drenaje, o su regularización, se les aplicará un descuento del 95% sobre el pago que tengan que efectuar por los derechos establecidos en la fracción I, numeral 1 del artículo 204 B, de este código".

La autoridad fiscal determinará y publicará las zonas en que se aplicarán dichas medidas antes de finalizar el primer bimestre del año 2000, de acuerdo al dictamen técnico que realizarán la Secretaría de Obras y los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales correspondientes, para efecto de este artículo Transitorio.

Hago entrega de la propuesta por escrito, diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la propuesta de adición de un artículo Transitorio reservado por el diputado Juan González Romero. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra?

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de la propuesta presentada como un artículo Transitorio por el diputado Juan González Romero.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de la propuesta de adición de un artículo Transitorio reservado por el diputado Juan González Romero.

Se solicita a los ciudadanos diputados, en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Manuel Minjares, abstención.

Hiroishi Suzuki, abstención.

Islas León, abstención.

Hernández Labastida Miguel, abstención.

Pablo Jaime Jiménez, abstención.

Manuel Aguilera, en pro.

Levín Coppel, en pro.

De Garay, a favor.

Luna Parra, a favor.

Alejandro Vázquez, a favor.

West, a favor.

Ortiz Haro, a favor.

Jesús Toledano, a favor.

Martínez Parra, en pro.

Cárdenas Pérez, en pro.
Eliab Mendoza, a favor.
Ricardo Martínez, en pro.
Roberto Rico, a favor.
Francisco Chiguil, en pro.
Ricardo Molina, a favor.
Miguel Angel Peláez, a favor.
José Luis Benítez, en pro.
Sara Castellanos, a favor.
René Arce, a favor.
Batres, a favor.
García Rocha, a favor.
Alfredo Hernández, a favor.
David Sánchez, a favor.
Miguel Bortolini, a favor.
Ignacio Ruiz, a favor.
Márquez Franco, en pro.
Virginia Jaramillo Flores, en pro.
Bravo López, en pro.
Juan González, a favor.
Martínez Enríquez, a favor.
Pichardo Mendoza, a favor.
Hidalgo Ponce, a favor.
Ernesto Chávez, a favor.
Narro Céspedes José, a favor.
Vicente Cuéllar, a favor.
Antonio Padierna, a favor.
Guillermo Hernández, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Javier Serna, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Angeles Correa, a favor.

Rafael López de la Cerda, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Ortiz Ayala, a favor.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

Rodríguez Ruiz, a favor.

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 49 votos a favor, 0 votos en contra 5 abstenciones.

EL C. PRESIDENTE.- Por lo tanto se aprueba la propuesta de adición de Transitorio formulada por el diputado Juan González Romero.

Para referirse a los artículos que se ha reservado, que son el 50-B, el 386 y 498, se concede el uso de la tribuna al diputado José Narro Céspedes.

EL C. DIPUTADO JOSE NARRO CESPEDES.- Con su permiso, Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

Inicialmente queremos empezar nuestra intervención retirando nuestra reserva sobre el artículo 50-B e iniciando los planteamientos sobre el artículo 386.

Respecto al artículo 386 se propone suprimir el último párrafo, en razón de que se considera que la opinión del Ejecutivo sobre los proyectos de presupuesto presentados por los órganos autónomos violenta la autonomía de los mismos,

además de que la autorización presupuestaria es facultad de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de acuerdo al artículo 122 de la propia Constitución y de que el propio código ya establece las normas a que deberán sujetarse los citados proyectos.

El artículo dice: "386. Los órganos a que se refiere el artículo 385 elaborarán anualmente sus respectivos proyectos de Presupuesto de Egresos, atendiendo a las previsiones del ingreso que la Secretaría les comunique y los remitirán al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que los incorpore en artículos específicos dentro del proyecto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

El Jefe de Gobierno podrá emitir opinión respecto de los proyectos de presupuesto de estos órganos, la cual remitirá a la Asamblea en documento distinto al proyecto de Presupuesto de Egresos para su consideración.

Estamos proponiendo quitar este último párrafo que plantea que el Jefe de Gobierno podrá emitir su opinión sobre los proyectos de presupuesto que hagan los órganos autónomos.

Sobre el artículo 495, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 495 con el objeto de dar facultades a la Secretaría de finanzas respecto de las irregularidades detectadas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Artículo 495, dice: "La Secretaría cuando descubra irregularidades por actos u omisiones de servidores públicos en el manejo, aplicación y administración de fondos, valores y recursos económicos en general, de propiedad o al cuidado del Distrito Federal, así como en las actividades de programación y presupuestación que se traduzcan en daños o perjuicios a la Hacienda Pública del propio Distrito Federal o al patrimonio de las entidades, fincará responsabilidades resarcitorias, las cuales tendrán por objeto reparar, indemnizar o resarcir dichos daños o perjuicios".

Planteamos que debe decir: "Artículo 495. La Secretaría cuando descubre irregularidades por actos u omisiones de servidores públicos en el manejo, aplicación y administración de fondos, valores y recursos económicos en general, de propiedad o al cuidado del Distrito Federal así como en las actividades de programación y presupuestación que se traduzcan en daños o perjuicios a la hacienda pública del propio Distrito Federal o al patrimonio de las entidades, fincará responsabilidades resarcitorias, las cuales tendrán por objeto reparar, indemnizar o resarcir daños o perjuicios. Planteamos que debe decir: "Artículo 495.- La Secretaría cuando descubre irregularidades por actos u omisiones de servidores públicos en el manejo, aplicación y administración de fondos, valores y recursos económicos en general, de propiedad o al cuidado del Distrito Federal así como en las

actividades de programación y presupuestación que se traduzcan en daños y perjuicios a la hacienda pública del propio Distrito Federal o al patrimonio de las entidades, fincará responsabilidades resarcitorias, las cuales tendrán por objeto reparar, indemnizar o resarcir daños o perjuicios."

Asimismo fincará responsabilidades resarcitorias en aquellos casos en que la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emita pliegos de observaciones que no hayan sido solventados".

Prácticamente lo que estamos planteando en este artículo 495 es dejar explícita la facultad de la Secretaría de Finanzas de fincar responsabilidades en el marco de lo resuelto por la Contaduría Mayor de Hacienda que se exprese en los pliegos de observaciones. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA, SARA LYGEIA MURUA HERNANDEZ.- Están a discusión las propuestas de modificación a los artículos reservados por el diputado José Narro Céspedes. Se abre el registro de oradores.

¿Oradores en contra?

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos que fueron reservados por el diputado José Narro Céspedes.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos reservados por el diputado José Narro Céspedes.

Se solicita a los ciudadanos diputados, en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Manuel Minjares, en pro de las propuestas presentadas por el diputado Narro.

Hernández Labastida Miguel, en pro.

Hiroishi Suzuki, en pro.

Islas León, en pro.

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Manuel Aguilera, en contra.

Luna Parra, en contra.

Alejandro Vázquez, en contra.

Jesús Toledano, en contra.

Martínez Parra, a favor.

Hidalgo Ponce, también a favor.

Cárdenas Pérez, en pro.

Ricardo Martínez, en pro.

Francisco Chiguil, en pro.

Roberto Rico, en pro.

Ernesto Chávez, a favor.

Miguel Angel Peláez, a favor.

José Luis Benítez, en contra.

Castellanos Cortés, en contra.

René Arce, a favor.

Batres, a favor.

García Rocha, a favor.

Alfredo Hernández, a favor.

Ortiz Ayala, a favor.

David Sánchez, a favor.

Miguel Bortolini, a favor.

Ignacio Ruiz, a favor.

Eliab Mendoza, a favor.

Márquez Franco, en pro.

Virginia Jaramillo, en pro.

Hipólito Bravo, en pro.

Juan González, a favor.

Martínez Enríquez, a favor.

Pichardo Mendoza, a favor.

Alejandro Rojas, a favor.

Narro Céspedes José, a favor.

Ricardo Molina, a favor.

René Rodríguez, por supuesto que a favor.

Vicente Cuéllar, a favor.

Antonio Padierna, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Serna Alvarado, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Angeles Correa, a favor.

Rafael López de la Cerda, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva:

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 45 votos a favor, 6 votos en contra, 0 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- Por lo tanto se aprueba la propuesta de modificación a los artículos reservados por el diputado José Narro Céspedes.

En consecuencia y para referirse al artículo 263, se concede el uso de la palabra a la diputada Elvira Albarrán Rodríguez.

LA C. DIPUTADA ELVIRA ALBARRAN RODRIGUEZ.-
Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados: Debo decir que hubo un gran avance en la presentación del artículo 263 de este Código Financiero con respecto al Código de 1999, al sustituir el concepto de cobro diario por uso de paraderos por el de tarifa mensual, en donde el pago será de 90 pesos por mes, esto permitirá recuperar ingresos perdidos en este año. Este cobro si bien no representa el costo real, sí se aproxima al costo de mantenimiento de estos bienes que incluyen equipamientos para el transportista y usuario tales como caseta de control de accesos y salidas, caseta de despacho de rutas, bahías, casetas de intendencia y mantenimiento, unidad integradora de basura, sanitarios, acceso a paraderos, andadores, andenes, pasos peatonales, cobertizos, barandales, casetas de servicio de seguridad, alumbrado, señalizaciones, balizamiento, hidrantes, tintores y áreas de absorción.

La adición que propongo permitirá tener mayor control de los ingresos y también un mayor control sobre los concesionarios que hacen uso de los Centros de Transferencia Modal.

Por lo tanto, en virtud de que el artículo 263 del dictamen final del Código Financiero del Distrito Federal establece: "Los concesionarios, permisionarios y otros prestadores del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, cualquiera que sea el tipo de unidad, que hagan uso de los bienes, muebles e inmuebles por los que el Gobierno del Distrito Federal preste el servicio de Centros de Transferencia Modal, estarán obligados a pagar derechos por periodos mensuales conforme a la cuota mensual de 90 pesos. Los derechos a que se refiere el presente artículo se pagarán por anticipado, dentro de los primeros 10 días naturales del mes de que se trate"

Se propone la adición de un tercer párrafo para establecer la funcionalidad del pago anteriormente descrito, para quedar como sigue: "Toda unidad deberá aportar en la parte superior derecha del parabrisas, copia del recibo que amparará el pago ante Tesorería de los derechos anteriormente descritos por cada mes"

Es todo, señora Presidenta.

Gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de modificación al artículo reservado por la diputada Elvira Albarrán Rodríguez. Se abre el registro de oradores.

¿Oradores en contra?

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de la propuesta presentada al artículo que fue reservado por la diputada Elvira Albarrán Rodríguez.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de la propuesta presentada al artículo reservado por la diputada Elvira Albarrán.

Se solicita a los ciudadanos diputados, en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Manuel Minjares, en pro de las propuestas presentadas por la diputada Albarrán.

Armando Salinas Torre, en pro.

Hiroishi Suzuki, en pro.

Islas León, en pro.

Jesús Galván, en pro.

Hernández Labastida Miguel, en pro.

Margarita Saldaña, en pro.

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Alejandro Vázquez, en contra.

Jesús Toledano, en contra.

Martínez Parra, a favor.

Cárdenas Pérez, en pro.

Hidalgo Ponce, a favor.

Márquez Franco, en pro.

Ricardo Martínez, en pro.

Roberto Rico, en pro.

Ricardo Molina, a favor.

Ernesto Chávez, a favor.

Miguel Angel Peláez, a favor.

José Luis Benítez, en contra.

Castellanos Cortés, en contra.

Martí Batres, en el mismo sentido que el diputado Chiguil.

García Rocha Martha, en el mismo sentido que el diputado Chiguil.

Alfredo Hernández, en el mismo sentido que la diputada Martha García Rocha.

Ortiz Ayala, en pro de la propuesta de la diputada Albarrán.

David Sánchez, a favor.

Miguel Bortolini, a favor.

Ignacio Ruiz, a favor.

Eliab Mendoza, a favor.

Francisco Chiguil, en el mismo sentido que el diputado Batres, a favor.

Virginia Jaramillo, en pro.

Hipólito Bravo, en pro.

Juan González, a favor.

Martínez Enríquez, a favor.

Alejandro Rojas, a favor.

Narro Céspedes José, a favor.

René Rodríguez, en pro.

Antonio Padierna, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Vicente Cuéllar, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Angeles Correa, a favor.

Rafael López de la Cerda, a favor.

Javier Serna, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Pichardo Mendoza, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva:

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 47 votos a favor, 4 votos en contra, 0 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- Por lo tanto, se aprueba la propuesta de modificación al artículo 263 reservado por la diputada Elvira Albarrán Rodríguez.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Javier Martínez Atala para argumentar sobre los artículos reservados.

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA.- Las modificaciones que proponemos, son para modificar a partir del artículo 385 dejando la definición de "los órganos autónomos" solamente a la Asamblea, el Tribunal, el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Distrito Federal, por lo que se modificarán de la siguiente manera, los siguientes artículos: Artículo 321, el primer párrafo dice: "Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que por cualquier motivo..." y continua la redacción del párrafo. Se propone que diga: "Las dependencias, órganos

desconcentrados, entidades y el Tribunal Contencioso que por cualquier motivo..." y la redacción continúa inalterable.

Se propone la modificación del Título de la Sección Tercera: "De los proyectos de los órganos autónomos", para que diga: "de los proyectos de los órganos autónomos, de la Comisión y del Tribunal Contencioso".

El artículo 385 quedaría su redacción en los siguiente incisos. El primer párrafo, sin cambio y los incisos quedarían así: La Asamblea, el Tribunal, el Instituto Electoral del Distrito Federal, el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Digo inciso I) La Asamblea; inciso II) El Tribunal; inciso III) El Instituto Electoral del Distrito Federal; inciso IV) El Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Se añade un artículo 385 cuyo texto sería el siguiente: La comisión elaborará anualmente su proyecto de presupuesto de egresos atendiendo a las previsiones en el incremento nominal de ingresos fiscales que la Secretaría le comunique, para lo cual la propia Secretaría le prestará el apoyo y colaboración que en su caso solicite.

Una vez elaborado el proyecto de presupuesto de egresos por la comisión, ésta lo remitirá a la Secretaría para que lo incorpore al proyecto respectivo en el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

La Comisión integrará su proyecto en los siguientes elementos:

- 1.- Descripción de los programas que sean base del proyecto señalado, objetivos, metas y prioridades.
- 2.- Explicación, justificación de sus principales programas.
- 3.- Estimación de gastos del ejercicio fiscal para el que se propone.
- 4.- Estimación de gastos del ejercicio fiscal en curso.
- 5.- En general toda la información programática presupuestal que se considere útil para mostrar la proposición en forma clara y completa.

Se adiciona un artículo 385 B, que dice: "El Tribunal Contencioso elaborará anualmente su proyecto de presupuesto de egresos, atendiendo a los criterios presupuestales de las previsiones de ingresos que les comunique la Secretaría, con base en sus programas anuales".

"El proyecto de presupuesto deberá prever el pago de impuestos, derechos y cualquier otra contribución, ya sea de carácter federal o local, que por disposición legal esté obligado a enterar".

"El proyecto correspondiente se enviará al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal".

Del artículo 391, se suprime el numeral 9: "La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal".

Del artículo 392, en el primer párrafo, dice: "El gasto público del Distrito Federal que ejerzan los órganos autónomos, las dependencias, órganos desconcentrados y entidades", y continúa el resto del artículo.

Para decir: "El gasto público del Distrito Federal que ejerzan los órganos autónomos, la comisión, el Tribunal Contencioso, las dependencias, órganos desconcentrados y entidades a las que se refiere el artículo anterior", y continúa sin modificación el párrafo.

El párrafo segundo dice: "La ejecución del gasto público de los órganos autónomos, las dependencias," y continúa el texto, para tener la siguiente modificación: "La ejecución del gasto público, los órganos autónomos, la comisión, el Tribunal, las dependencias, etcétera".

El artículo 393 Des, dice actualmente: "Las dependencias y órganos desconcentrados, así como los órganos señalados en el artículo 385 de este código". Para decir: "Las dependencias y órganos desconcentrados, así como los órganos a que se refiere el artículo 385 de este código".

La Sección Tercera deberá recorrer su numeración para llamarse Sección Cuarta. La Sección Cuarta cambiará su numeración para llamarse Sección Quinta.

Artículo 418, se suprime el texto actual y se sustituye por el siguiente: "Los órganos a que se refiere el artículo 385 de este código y la comisión, aplicarán lo dispuesto en este código para el ejercicio de sus recursos en todo aquello que no se oponga a las normas que rijan su organización y funcionamiento". Se propone adicionar artículo 418 Bis. "El ejercicio presupuestal del Tribunal Contencioso será responsabilidad de sus unidades administrativas competentes y de los servidores públicos que señalen sus propias normas de organización interna".

Se propone la inclusión de un artículo 418 Ter, para que diga: "Para la ejecución de los recursos públicos autorizados y asignados, el órgano a que se refiere el artículo anterior deberá observar las disposiciones contenidas en la sección primera, Capítulo II, del presente Título III del Libro Tercero de este código, y observar las reglas de carácter general que al efecto expida la Secretaría en todo aquello que no se oponga a las normas que rijan su organización y funcionamiento".

La Sección Quinta cambia de título para ser Sección Sexta. Cambia de numeración, se recorre, para ser Sección Sexta.

El artículo 435, en su segundo párrafo, dice: "La Secretaría a fin de informar los reportes y la información que corresponda, propondrá a los órganos, a los que se refiere el artículo 385 de este código, los catálogos de cuentas que deberán utilizar las entidades, serán autorizados expresamente por la Secretaría".

Debe decir: "La Secretaría, a fin de uniformar los reportes y la información que corresponda, propondrá a los órganos a los que se refiere el artículo 385 de este código y a la comisión, los catálogos de cuentas que deberá utilizar; los catálogos del Tribunal Contencioso y de las entidades serán autorizados expresamente por la Secretaría".

Artículo 437, en el primer párrafo dice: "Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades suministrarán a la Secretaría". Y debe decir: "La Comisión, el Tribunal Contencioso, las dependencias, los órganos desconcentrados y entidades suministrarán a la Secretaría", sin modificarse el resto del artículo.

Artículo 438, en el primer párrafo dice: "La Secretaría girará las instrucciones sobre la forma y términos en que las dependencias y órganos desconcentrados y entidades deberán llevar sus registros auxiliares y en su caso rendirles sus informes y cuentas para fines contables y de consolidación, asimismo examinará periódicamente el funcionamiento del sistema y los procedimientos de contabilidad y podrá autorizar su modificación o simplificación; la propia Secretaría sugerirá a los órganos a los que se refiere el artículo 385 de este código, la forma y los términos en que deberá llevar a cabo sus propios registros auxiliares y contables".

Deberá decir: "La Secretaría girará las instrucciones sobre la forma y términos en que el Tribunal Contencioso, las dependencias, órganos desconcentrados y entidades deberán llevar sus registros auxiliares y en su caso rendirles sus informes y cuentas para fines contables y de consolidación; asimismo, examinará periódicamente el funcionamiento del sistema y los procedimientos de contabilidad y podrá autorizar su modificación o simplificación; la propia Secretaría sugerirá a los órganos a los que se refiere el artículo 385 de este código y a la comisión, la forma y términos en que se deberán llevar sus propios registros auxiliares y contabilidad".

Artículo 439, en el primer párrafo dice: "Los estados financieros y demás información financiera, presupuestal y contable que emanen de los registros de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades..." y continúa el texto del artículo, para modificarse en esta parte como sigue: "Los estados financieros y demás información financiera, presupuestal y contable que emanen de los registros del Tribunal Contencioso, de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades...", y continúa el texto sin modificación.

Artículo 454.- "En caso de los órganos autónomos considerados en el artículo 385 de este código cuando se presente...", etcétera, continúa el texto del artículo, para modificarse en esta parte: "En el caso de los órganos autónomos considerados en el artículo 385 de este código y la comisión cuando se presente...", continúa el texto sin modificación.

Artículo 465 dice: "Las entidades deberán solicitar autorización". Y debe de decir: "El Tribunal Contencioso y las entidades deberán solicitar autorización...", sin modificarse el resto del texto.

Artículo 485, en el primer párrafo inicia diciendo: "Las dependencias coordinadores...". Se propone que inicie diciendo: "El Tribunal Contencioso y las dependencias coordinadoras...". Artículo 481 en su primer párrafo.

Artículo 483 en su primer párrafo: "Con base en los estados financieros y demás información financiera, presupuestal y contable que emane de los registros de las dependencias...", para que diga: "Con base en los estados financieros y demás información financiera y presupuestal y contable que emane de los registros del Tribunal Contencioso y de las dependencias...", sin modificarse el resto del primer párrafo. En el segundo párrafo se propone la siguiente modificación: "Las áreas competentes de los artículos a los que se refiere el artículo 385 de este código...", para que diga: "Las áreas competentes de los órganos a los que se refiere el artículo 385 de este código y la comisión...", sin quedar en modificación el resto del artículo.

Se propone la siguiente redacción al artículo 428:

"Artículo 428. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá modificar el contenido orgánico y financiero de los programas de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos por demarcación territorial y entidades incluidas en el Presupuesto de Egresos cuando por razones de interés social, económico o seguridad pública lo consideren necesario, estas modificaciones no podrán transferir recursos destinados a programas prioritarios hacia programas no prioritarios.

Dos. Disminuir el monto consignado en el decreto de Presupuesto de Egresos para la atención de programas prioritarios, salvo que se hayan concluido las metas.

Sólo podrán exceptuarse de lo anterior cuando existan situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales, plagas y epidemias o cuando se trate de alguna situación de emergencia que afecte total o parcialmente el territorio del Distrito Federal.

Cualquier modificación que no cumpla con los requisitos antes señalados requerirá aprobación previa en su caso, de

la Asamblea o cuando se encuentre en receso por la Comisión de Gobierno, la que deberá resolver durante los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la misma, pasados los cuales si no se objeta se considerará aprobada. Cuando el ajuste supere el 10% del presupuesto anual asignado a cada dependencia, órgano desconcentrado, órgano político administrativo por demarcación territorial y entidad, el titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal deberá informar en un capítulo especial del informe de avance trimestral, la conciliación de las modificaciones realizadas”.

“Artículo 255-A. Se propone por la expedición de la cédula de registro y la consulta de antecedentes no penales, el personal operativo pagará derechos a razón de 83 pesos por cada elemento de seguridad con que cuente la empresa prestadora de servicios.

“El pago por expedición de la cédula de registro será por única vez y tendrá validez siempre que el personal operativo se encuentre en activo en la empresa donde se preste sus servicios y ésta tenga vigente la autorización del permiso que le ha sido otorgado como empresa que presta servicios de seguridad privada”.

Debe decir. “Por la consulta de antecedentes no penales del personal directivo, administrativo y operativo se pagarán derechos a razón de 83 pesos por cada elemento de seguridad con que cuente la empresa prestadora de servicios. El pago por la consulta será por única vez y tendrá validez siempre que el personal se encuentre en activo en la empresa donde preste sus servicios y ésta tenga vigente la autorización del permiso que le ha sido otorgado, como empresa que presta servicios de seguridad privada”.

Artículo 265-Y. Dice: “Las reducciones contenidas en este capítulo se harán efectivas en administraciones tributarias o en su caso ante la Comisión de Aguas del Distrito Federal y se aplicará sobre las contribuciones, en su caso, sobre el crédito fiscal actualizado, las reducciones, también comprenderá los accesorios de las contribuciones en el mismo porcentaje”.

Debe decir. “Las reducciones contenidas en este capítulo se harán efectivas en las administraciones tributarias o en su caso ante la Comisión de Aguas del Distrito Federal y se aplicarán sobre las contribuciones, en su caso sobre el crédito fiscal actualizado, siempre que las contribuciones respectivas aún no hayan sido pagadas y no procederá devolución respecto a las cantidades que se hayan pagado. Las reducciones también comprenderán los accesorios de las contribuciones en el mismo porcentaje”.

Artículo 109, fracción IX. Actualmente dice: “El patrimonio de familia en los términos que establezca el Código Civil

desde su inscripción en el Registro Público correspondiente”.

Se propone el texto. “El patrimonio de familia desde su inscripción en el registro público correspondiente que para efecto de lo dispuesto en este artículo se constituye con los bienes que contempla el artículo 723 del Código Civil cuyo valor no exceda de 40 veces el salario mínimo elevado a un año”.

Esas son las propuestas, que hago entrega a la Presidencia para su votación.

LA C. PRESIDENTA.- Están a discusión las propuestas de modificación a los artículos reservados por el diputado Ricardo Martínez Atala. Se abre el registro de oradores.

Oradores en contra.

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

Se le concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos al diputado Luis Miguel Ortiz Haro.

EL C. DIPUTADO LUIS MIGUEL ORTIZ HARO AMIEVA.- Gracias, Presidenta.

Nosotros quisiéramos plantear aquí dos asuntos: Uno, de esta lectura que ha hecho aquí el Presidente de la Comisión de Presupuesto nosotros entendemos que hay una serie de precisiones a un paquete de artículos que tienen que ver con el ejercicio presupuestal, el diseño de los proyectos de presupuesto y los informes que sobre el ejercicio del mismo deben presentar los órganos autónomos. Sin embargo, el hecho de ser presentado el paquete como ha sido presentado aquí en una primera lectura hace muy difícil el que podamos votar, incluso razonar el voto en un sentido o en otro.

Debo decir que en esta parte, en una muy buena parte de los artículos a los que hizo referencia aquí el Presidente de la Comisión de Presupuesto, durante las reuniones de comisiones unidas los diputados de mi grupo parlamentario coincidimos en muchas de las propuestas que se hicieron porque daban certeza de la autonomía de los órganos, como el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura; pero nos parece que las propuestas que aquí se presentaron de parte del Presidente de la Comisión de Presupuesto tendrían por objeto ser más preciso en estas reglas para los órganos autónomos. Sin embargo, nosotros necesitamos explicar aquí que es imposible que habiéndolos conocido por primera vez ahora que fueron leídos aquí en la tribuna nosotros podamos tener un juicio claro respecto del sentido de nuestro voto.

Lamentamos que eso sea así, porque posiblemente haya diputados en la mayoría que evidentemente sin conocer lo que sucedió en el trabajo de comisiones menosprecien a quienes representamos aquí el 24% de los votos de 1997 y hayan decidido simplemente no darnos a conocer estas propuestas de modificación que me parece eventualmente hubiéramos podido apoyar, y entonces se utilice una actitud que no refleja, que ni siquiera se compadece con el propio discurso, este discurso de apertura, este discurso de buscar y construir consensos, acuerdos resulta que se ve absolutamente empañado con actitudes como estas que estoy seguro no tienen nada que ver con los miembros del PRD que integran las Comisiones Unidas de Presupuesto y Hacienda, con quienes pudimos revisar en días pasados muchos de los artículos que aquí se acaban de proponer sus modificaciones y que coincidimos con esas modificaciones.

Sin embargo, hoy se decidió que no teníamos por qué conocer estas últimas modificaciones, con expresiones que no vale la pena comentar aquí cuando pedimos una explicación de por qué no se nos había al menos dado a conocer este documento 10 minutos antes y, bueno, con respuestas, insisto, que no vale la pena comentar aquí, pero que sólo reflejan que no existe consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace en una buena parte de los diputados del PRD y particularmente el que tiene la responsabilidad o tendría la responsabilidad de coordinar a ese grupo parlamentario.

De modo que nosotros, los diputados del grupo parlamentario del PRI nos tendremos que abstener en un paquete de artículos, que en muchos casos me parece que podríamos haber encontrado, como lo hicimos en comisiones rápidamente, coincidencias entre la propuesta de ustedes y el planteamiento nuestro.

Pero en ese mismo paquete el Presidente de la Comisión Presupuesto presentó aquí el artículo 428. Debo decir, primero retomando una de las propuestas que nosotros hicimos al razonar nuestro voto en lo general sobre este dictamen, que tiene que ver con incluir el concepto órganos políticos administrativos por demarcación territorial, que evidentemente es muy importante pues representa más de 9,000 millones de pesos en la asignación presupuestal y que sería muy grave que se hubiera quedado fuera.

Nosotros queremos también proponer y lo voy a entregar por escrito a la Mesa Directiva, que este artículo 428 se le adicione en el párrafo segundo una fracción III que diga: "Los programas no prioritarios podrán ser modificados siempre que esos recursos sean destinados a programas prioritarios"

En el párrafo tercero, donde dice: "Sólo podrá exceptuarse de lo anterior cuando existan situaciones de emergencia

provocadas por desastres naturales", etcétera, que se incluya la siguiente redacción: "Sólo podrá exceptuarse de lo anterior cuando por declaratoria pública fundada y motivada existan situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales", etcétera. En ambos casos la intención de nuestra propuesta es darle certidumbre al artículo que está presentándose aquí y explico por qué proponemos adicionar una fracción III que dice: "Los programas no prioritarios podrán ser modificados siempre que esos recursos sean destinados a programas prioritarios"

Lamento no poder coincidir con lo que comentó aquí el representante del PAN que razonó el voto de su grupo parlamentario, al plantear que por fin se acababa la discrecionalidad en el uso del presupuesto.

Lo que el dictamen del decreto de presupuesto señala como programas prioritarios, es una discusión, insisto, que habremos de tener más adelante, refleja poco más en términos de asignación presupuestal de 25,000 millones de pesos. Esto quiere decir que están quedando algo así como un poco más de 30,000 millones de pesos que no tienen la calidad de programas prioritarios y que en consecuencia no estarían en el supuesto que pretende regular este artículo; bueno, no se pueda hablar de un límite real a la discrecionalidad del gobierno en un presupuesto que vamos a ver más adelante en el dictamen, ni siquiera tiene metas, ni siquiera compromete en que va a utilizar el dinero, si además de eso se decide con la redacción actual y la propuesta por el diputado Martínez Atala del artículo 428 se decide que solamente en el caso de los programas prioritarios no se podrá modificar su contenido y se dejan los no prioritarios en un estado de absoluta discrecionalidad.

Bueno, no es un asunto menor, si estamos hablando de poco más de 30 mil millones de pesos; no es un asunto menor, si además en esos no prioritarios, en esos que no están catalogados como prioritarios, están los programas más importantes de la ciudad.

No es un asunto menor, si la mayor parte del dinero que se está atando con este artículo como prioritarios, es dinero que vamos a demostrar en la discusión del presupuesto, solamente tiene fines electorales, solamente tienen fines de proselitismo; no es un asunto menor que se deje lo que se entiende como el resto de los programas en la propuesta de dictamen de presupuesto, es decir, esos 30 mil millones de pesos, que se pueden mover sin prácticamente, ninguna limitación.

Si por el otro lado estamos hablando de que eso implica que pueden decidir otra vez parar obras hidráulicas, parar construcción de plantas potabilizadoras, parar mantenimiento del sistema de transporte colectivo. Afectar programas que son fundamentales para la operación de la ciudad.

Lo menos que nos parece, que conviene en términos de la ciudad, no del planteamiento de ningún grupo parlamentario, en términos de la ciudad lo menos que conviene es garantizar que las modificaciones que se hagan a programas no incluidos en los prioritarios, a programas no prioritarios, se dé en el caso de que se requieran recursos para los programas prioritarios, no parece haber una línea clara de razonamiento distinta, no entendemos por qué razón no se quiere aceptar esta situación.

Debo decirles que nosotros insistimos en comisiones unidas, desde la discusión del Código Financiero y después en la discusión del presupuesto de egresos, el grupo parlamentario del PRI está de acuerdo, en que el Gobierno de la Ciudad, independientemente del partido que esté en el gobierno, requiere flexibilidad en el manejo del presupuesto, eso es algo en lo que hemos estado de acuerdo siempre. Entendemos que un paquete de 59 mil millones de pesos, como el que estamos aquí discutiendo, no se puede tener una rigidez tal que diga que lo que se dijo en el programa operativo anual preparado muchas veces en agosto del 99, no se pueda modificar ni se pueda cambiar durante el transcurso del 2000.

Entendemos que hay factores económicos, sociales, de desastres naturales, de condiciones macroeconómicas, factores externos que afectan el desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad y que requiere flexibilidad. Lo entendemos. Nosotros, por ejemplo, nunca nos preocupamos por el asunto de si el 4% o el 10%; no nos preocupa esa parte, entendemos que se requiere flexibilidad, gobierne quien gobierne; sería absolutamente irresponsable diseñar la norma pensando por un lado sólo en beneficiar a quien gobierna o pensando el otro lado sólo como ponerle trabas a quien gobierna.

Finalmente quien gobierna, independientemente del partido al que pertenece, tiene una responsabilidad con todos los ciudadanos y nosotros entendemos que eso requiere flexibilidad, bueno sí, pero un asunto es tener flexibilidad y el otro asunto es decir, "a ver solamente los que son programas prioritarios", pero además cuando hay que discutir cuáles son los programas prioritarios, no aceptan ningún cambio.

No aceptan incluir programas fundamentales para el funcionamiento de la ciudad como programas prioritarios, y no aceptan quitarle la calidad de programas prioritarios a programas que en el mejor de los casos permiten la suspicacia respecto del uso de los recursos.

Bueno, son asuntos evidentemente vinculados. Nosotros lo que estamos planteando en tal caso es, está bien. Esa flexibilidad evidentemente se tiene que dar para atender asuntos prioritarios de la ciudad, no para atender caprichos de funcionarios y estoy seguro que nadie de ustedes está

suponiendo que esta flexibilidad tenga que ver con atender caprichos de funcionarios.

Bueno, si así es, si estamos de acuerdo en eso, nosotros lo que le estamos planteando es correcto: de los programas que no están en la calidad de prioritarios se pueden hacer las modificaciones siempre que sea para destinarla a programas prioritarios.

Bueno, nos parece que es un asunto de veras conveniente para la ciudad; es un asunto conveniente para la transparencia del manejo presupuestal y en consecuencia nosotros la sometemos a este pleno, junto con la modificación propuesta por el diputado Martínez Atala, de incluir "órganos políticos administrativos" por "demarcación territorial", y la entrego por escrito a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Asamblea.

Gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA
(Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Sí, señor diputado, ¿con qué objeto?

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA
(Desde su curul).- Disculpe diputada, pero me han hecho algunas observaciones y yo quiero hacer una breve corrección.

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputado, tiene usted el uso de la palabra para hacer las precisiones pertinentes.

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA.- Disculpen. La reserva tiene un error, voy a corregirla.

En el artículo 109, la reserva dice: "se constituye de los bienes que contempla el artículo 273 del Código Civil, cuyo valor no exceda de 40 veces el salario mínimo". Se propone que diga así: "Se constituye de los bienes que contempla el Código Civil, cuyo valor no exceda de 40 veces el salario mínimo elevados, sin"....o sea se elimina de la reserva la referencia al artículo correspondiente.

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos que fueron reservados por el diputado Ricardo Martínez Atala.

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ
(Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Con qué objeto, diputado?

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ (Desde su curul).- Señora Presidenta, nada más para solicitar a usted instruya a la secretaría que se lea la propuesta nuevamente, referente al artículo 109.

LA C. PRESIDENTA.- Sí, como no, señor diputado.

Proceda la secretaría a leer la propuesta del artículo 109.

LA C. SECRETARIA.- Debe decir: "El patrimonio de familia, desde su inscripción en el Registro Público correspondiente, que para efectos de lo dispuesto en este artículo, se constituye de los bienes que contempla el Código Civil, cuyo valor no exceda de 40 veces el salario mínimo elevado al año".

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA (Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Sí, señor diputado.

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA (Desde su curul).- Le pido un favor, ¿quiere usted dar lectura al texto original y después a la reserva?

LA C. PRESIDENTA.- Se instruye a la secretaría para que dé lectura al texto original y posteriormente a la reserva.

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA (Desde su curul).- Pido la palabra para resolver.

LA C. PRESIDENTA.- Señor diputado Ricardo Martínez Atala, tiene usted el uso de la palabra para volver a hacer la precisión pertinente.

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA.- Gracias. El artículo original dice, diputados, el artículo original dice: "El patrimonio de familia en los términos que establezca el Código Civil, desde su inscripción en el Registro Público correspondiente". Eso dice el artículo original.

La reserva añadía a lo anterior: "cuyo valor no exceda de 40 veces el salario mínimo". Propongo en este momento que se retire la reserva que he presentado, al retirar la reserva queda el texto que viene en el dictamen.

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos que fueron reservados por el diputado Ricardo Martínez Atala.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos reservados por el diputado Ricardo Javier Martínez Atala.

Se solicita a los ciudadanos diputados, en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones. Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Manuel Minjares, en pro de las propuestas presentadas por el diputado Martínez Atala.

Hiroishi Suzuki, en pro.

Islas León, en pro.

Jesús Galván, en pro de las propuestas presentadas.

Hernández Labastida Miguel, en pro.

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Ortiz Haro, abstención.

Alejandro Vázquez, abstención.

Manuel Aguilera, abstención.

Margarita Saldaña, en pro.

Luna Parra, abstención.

West, abstención.

Jesús Toledano, abstención.

Javier Hidalgo, a favor.

David Sánchez, a favor.

Ricardo Martínez, en pro.

Francisco Chiguil, en pro.

Miguel Ángel Peláez, a favor.

Márquez Franco, en pro.

Roberto Rico, en pro.

Eliab Mendoza, a favor.

Ricardo Molina, a favor.

Ernesto Chávez, a favor.

José Luis Benítez, en contra.

Castellanos Cortés, en contra.

Martínez Parra, a favor.

Virginia Jaramillo Flores, en pro.

Martí Batres, en idéntico sentido al de mi amigo Javier Hidalgo.

René Arce, a favor.

Alfredo Hernández, a favor.

García Rocha, a favor.

Miguel Bortolini, a favor.

Ignacio Ruiz, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

Hipólito Bravo, en pro.

Juan González, a favor.

Pichardo Mendoza, a favor.

Alejandro Rojas, a favor.

Rodríguez Ruiz, en pro.

Narro Céspedes José, a favor.

Daniel Martínez, a favor.

Vicente Cuéllar, a favor.

Antonio Padierna, a favor.

Francisco Ortiz, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Angeles Correa, a favor.

Rafael López de la Cerda, a favor.

Javier Serna, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Sevilla Díaz, abstención.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente:

46 votos a favor; 2 votos en contra; 7 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- Por lo tanto se aprueba la propuesta de modificación a los artículos reservados por el diputado Ricardo Martínez Atala.

En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentan las Comisiones Unidas...

¿Con qué objeto, señor diputado?

EL C. DIPUTADO LUIS MIGUEL ORTIZ HARO (Desde su curul).- Oiga, yo le pido que sea usted tan gentil de someter a votación la propuesta que presenté.

LA C. PRESIDENTA.- Como no, señor diputado.

Le recuerdo que en términos del artículo 102 del Reglamento de la Asamblea, en el momento que corresponde se solicitó a los diputados que hicieran saber a esta Presidencia los artículos que se reservarían, situación que usted no hizo. No obstante, con fundamento en el artículo 36, Fracción II de la Ley Orgánica, le solicito a la secretaría recoja la votación nominal de la propuesta que hizo el diputado Luis Miguel Ortiz Haro.

EL C. DIPUTADO LUIS MIGUEL ORTIZ HARO (Desde su curul). Mire Presidenta, le agradezco que haga lo que tiene que hacer, que es someterlo a votación, no me está usted concediendo nada, porque el artículo estaba reservado, hice una propuesta sobre un artículo reservado.

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la secretaría a recoger la votación del artículo reservado por el diputado Luis Miguel Ortiz Haro.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de la propuesta presentada al artículo reservado por el diputado Luis Miguel Ortiz Haro.

Se solicita a los ciudadanos diputados, en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión “en pro” o “en contra”.

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Manuel Minjares, en contra.

Hiroishi Suzuki, en contra.

Islas León, en contra.

Hernández Labastida Miguel, en contra.

Pablo Jaime Jiménez, en contra.

Luna Parra, a favor, para evitar la discrecionalidad del gasto del Gobierno de la Ciudad.

Ortiz Haro, a favor de la ciudad.

Alejandro Vázquez, en pro.

Manuel Aguilera, en pro.

Margarita Saldaña, en contra.

West, a favor.

Jesús Toledano, a favor.

Javier Hidalgo, por supuesto que en contra.

Jesús Galván, abstención.

Ricardo Martínez, en contra.

Roberto Rico, en contra.

Francisco Chiguil, en contra.

Miguel Angel Peláez, en contra.

Ricardo Molina, totalmente en contra.

Eliab Mendoza, en contra.

Ernesto Chávez, en el mismo sentido que el diputado Molina.

Márquez Franco, en contra.

José Luis Benitez, abstención.

Castellanos Cortés, abstención.

Martínez Parra, a favor.

Martí Batres, en contra del artículo que generosamente puso a votación la señora Presidenta.

René Arce, en contra.

Alfredo Hernández, en contra.

García Rocha, en contra.

David Sánchez, en contra.

Miguel Bortolini, en contra.

Ignacio Ruiz, en contra.

Virginia Jaramillo Flores, en contra.

Hipólito Bravo, en el mismo sentido que el diputado Vicente Cuéllar.

Juan González, en contra.

Pichardo Mendoza, en contra.

Rodríguez Ruiz René, en recontra.

Narro Céspedes José, en contra.

Antonio Padierna, en contra.

Martínez Enríquez, en contra.

Alejandro Rojas, en contra.

Vicente Cuéllar, en contra.

Guillermo Hernández, en contra.

Albarrán Rodríguez, en el mismo sentido que el diputado Ricardo Molina.

Rigoberto Nieto, en contra.

Verónica Moreno, en contra.

Soto Camacho, en contra.

Martínez Rojo, en contra.

Angeles Correa, en contra.

Rafael López de la Cerda, en contra.

Javier Serna, en contra.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Francisco Ortiz, completamente en contra.

Sevilla Díaz, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva:

Tello Mondragón Yolanda, en contra.

Sara Murúa, en contra.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 8 votos a favor, 44 votos en contra, 3 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- Por lo tanto se desecha la propuesta presentada.

En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de reformas y adiciones al Código Financiero para el año 2000, en lo general y en lo particular, con las propuestas aprobadas.

Remítase a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal para los efectos constitucionales conducentes.

El siguiente punto del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal del año 2000.

Esta Presidencia informa que ha recibido un oficio de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública solicitando se le dispense el trámite a que se refiere el artículo 38, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Sírvase la secretaría dar lectura a la solicitud de referencia.

LA C. SECRETARIA.- *Diputado René Baldomero Rodríguez Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presente.*

Estimado diputado:

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública solicitamos al pleno, a través de usted, la dispensa de lo establecido en el primer párrafo del artículo 38, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea del Distrito Federal, a fin de que se incorpore para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación en el orden del día del 30 de diciembre el dictamen de la iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio del año 2000.

Atentamente, por la Comisión de Hacienda: Diputado Francisco Chiguil Figueroa, Presidente; diputado Miguel Angel Peláez Gerardo, Vicepresidente; diputado Miguel Bortolini Castillo, Secretario.

Cumplida su instrucción, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, proceda la secretaría a preguntar al pleno de la Asamblea en votación económica si se dispensa al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública el trámite a que se refiere el artículo 38, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta al pleno si se dispensa el trámite a que se refiere el artículo 38, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al dictamen de referencia.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Se dispensa el trámite.

LA C. PRESIDENTA.- Consulte la secretaría en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se somete a discusión de inmediato.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura y se somete a discusión de inmediato.

Los que estén porque se dispense la lectura, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Dispensada la lectura, señora Presidenta.

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal se turnó para su estudio; análisis, discusión y dictaminación correspondientes, la iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal 2000, presentada por la C. Rosario Robles Berlanga, Jefa de Gobierno del Distrito Federal.

Estas Comisiones Unidas, en uso de las facultades conferidas por los artículos: 122 Apartado C, Base Primera, Fracción V, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracciones II y IX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción III; 46, fracción II, 50 y 57 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 18, 19, 67 y 68 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, procedieron al estudio de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2000 a fin de elaborar el Dictamen correspondiente, tomando en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En cumplimiento del artículo 122, apartado C Base Primera, fracción V, inciso b), y Base Segunda, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 8, fracción II, 42 fracciones II y IX, 46 fracción III y 67 fracciones I y XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el pasado 30 de noviembre de 1999 la Jefa de Gobierno sometió a consideración de esta H. Asamblea Legislativa la Iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito 2000.

2.- Por acuerdo del Pleno de la H. Asamblea Legislativa se remitió a estas Comisiones Unidas la citada Iniciativa de Ley el pasado 2 de diciembre de 1999.

3.- La Jefa de Gobierno plantea, en la exposición de motivos de la Iniciativa en cuestión los siguientes objetivos de la Ley de Ingresos para el 2000:

Diseñar una estrategia financiera que permita obtener los recursos suficientes para garantizar la prestación de los servicios públicos que demanda la ciudadanía a través del mantenimiento y creación de obras públicas.

A través de la Iniciativa, como instrumento normativo, se pretende obtener recursos por un total de 62 mil 006 millones de pesos, cifra que representa un incremento nominal de 33 por ciento con respecto a lo previsto para 1999, de los cuales 27 mil 869 millones de pesos (44%) se obtendrán por ingresos propios; 18 mil 084.9 millones de pesos (29%) por participaciones federales; 6 mil 451.5 millones de pesos (7%) por ingresos de organismos y empresas controladas presupuestalmente; 600 millones (1%) por concepto de ADEFAS; 4 mil 252 millones de pesos (4%) por transferencias federales y 9 mil millones de pesos (15%) por financiamiento neto.

4.- En cumplimiento con lo establecido en el artículo 67 fracción XII segundo párrafo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, con fecha 7 de diciembre de 1999, se citó a comparecer ante el Pleno de esta H. Asamblea Legislativa al C. Secretario de Finanzas del Distrito Federal, Lic. Armando López Fernández, a fin de que explicara los motivos, lineamientos y objetivos de la Iniciativa en comentario.

5.- con fecha 15 de diciembre de 1999, mediante acuerdo signado por los integrantes de las Comisiones Unidas y de conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, debido a la importancia del tema, se citó a reunión de trabajo al C. Lic. Manuel Anguiano Cabrera, Tesorero del Distrito Federal para informar sobre la Iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal del 2000.

6.- En tal virtud, las Comisiones Unidas que suscriben se reunieron para analizar, discutir y aprobar en su caso, el presente Dictamen el 29 de diciembre de 1999, el cual se somete a consideración del Pleno de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Estas Comisiones dictaminadoras consideran que la propuesta de iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2000, cumple con lo dispuesto en el artículo 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al proponer incrementos diferenciados en las principales contribuciones de la ciudad, con lo que se beneficia principalmente a aquellos sectores más desprotegidos y carentes de recursos económicos.

SEGUNDO.- Estas dictaminadoras consideran oportuno realizar el ajuste tarifario de 14.1 por ciento, conforme lo establece el Código Financiero del Distrito Federal en su artículo 31, dado que la propuesta del ejecutivo local es considerada justa y equitativa hacia los contribuyentes y

está acorde con las principales necesidades en materia de obras y servicios públicos que requiere la ciudad en beneficio de todos los habitantes, y en virtud de que en años anteriores los recursos públicos han sufrido un deterioro, lo que limita la capacidad de respuesta del Gobierno en obra pública.

TERCERO.- *Estas Comisiones manifiestan su acuerdo en no sacrificar la economía de los contribuyentes con menos recursos económicos, por lo que en materia de Impuesto predial los contribuyentes ubicados en los rangos A, B, C y D, sólo pagarán el 97.1 por ciento de la tarifa de 1999, con ello se beneficia a un millón 200 mil contribuyentes aproximadamente.*

CUARTO.- *En respuesta a los reclamos y denuncias de los habitantes por los excesivos incrementos provocados en el cobro de derechos por el suministro de agua, al pasar del esquema de pago de cuota fija al de servicio medido en los años de 1998 y 1999, estas comisiones consideran conveniente modificar el artículo 5° de la presente Iniciativa de Ley, al considerar que los contribuyentes deben pagar cuotas justas y acordes con sus posibilidades económicas y lograr que los contribuyentes paguen según su consumo, sin que ello signifique dañar las finanzas públicas. Por lo que se propone que el pago bimestral por el servicio de suministro de agua se realice a través de la modalidad cuotas fijas máximas, de acuerdo a los siguientes montos: 31.76 pesos para los que se encuentren en la colonia catastral 0, 47.70 pesos para los contribuyentes que se encuentren en la colonia catastral 1 y 95.40 pesos para los de las colonias catastrales 2, 3 y 8.*

QUINTO.- *Bajo la idea de conservar la política de que pague más quien más consuma, estas comisiones consideran favorable las medidas y beneficios fiscales que se otorgan en materia de suministro de agua; por lo que consideran positivo que los consumidores que no rebasen un consumo de 30 metros cúbicos bimestrales paguen el 97.1 por ciento de la tarifa del año de 1999, con lo cual se beneficia a 722 mil familias.*

SEXTO.- *Estas Comisiones expresan su acuerdo con la iniciativa en comento al considerar la necesidad de redistribuir la carga tributaria entre un mayor número de contribuyentes y establecer un esquema de beneficios para los consumidores de agua de uso mixto.*

SEPTIMO.- *Las circunstancias económicas han afectado a los contribuyentes en los últimos años, mermando la capacidad de pago de los mismos, especialmente a los de escasos recursos económicos, por lo que estas comisiones consideran necesario apoyar a los contribuyentes de las colonias catastrales 0, 1, 2, 3 y 8, que tiene adeudos correspondientes a años anteriores a 1999 por derechos*

por el suministro de agua, para ello se establece un esquema de cuota máxima diferenciada, según la colonia catastral en que se encuentre el contribuyente, ello sin duda facilitará el cumplimiento de las obligaciones fiscales, impactando de manera positiva en la recaudación. De ahí que estas dictaminadoras consideran necesario adicionar un nuevo artículo, el cual será el 8°, con lo que se recorre la numeración del articulado.

OCTAVO.- *Las condiciones de pobreza y marginalidad en que se encuentran un sector importante de los habitantes de la ciudad, y con el propósito de crear un ambiente equitativo y justo para todos los contribuyentes, estas Comisiones Unidas consideran oportuno el que se busque primordialmente obtener mayores recursos, a través de la ampliación y actualización de los diferentes padrones de contribuyentes.*

NOVENO.- *La disminución drástica y progresiva del coeficiente efectivo de distribución de las Participaciones Federales ha provocado que los recursos que obtiene el Distrito Federal vía Participaciones registren un crecimiento real muy por debajo del crecimiento medio nacional, situación que ha motivado que los habitantes de la Ciudad de México carguen con la responsabilidad derivada de la injusta distribución de sus contribuciones, por lo que estas Comisiones Unidas consideramos conveniente que se continúe promoviendo la modificación del actual esquema de distribución de los ingresos participables, lo anterior con el propósito de que se logre un ambiente más justo y equitativo entre las distintas entidades federativas.*

DECIMO.- *Estas comisiones están en favor de la solicitud realizada por el Gobierno del Distrito Federal al Congreso de la Unión de 9 mil millones de pesos, como monto máximo de financiamiento durante el 2000, en virtud de la necesidad de recursos que permitan brindar mayores y mejores servicios a los habitantes de la Ciudad de México. Sin embargo, tal como lo indica el artículo 73 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones dictaminan que el financiamiento neto del Gobierno del Distrito Federal será aquel que apruebe el Congreso de la Unión.*

Por las razones antes expuestas, estas Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública estiman la procedencia de la iniciativa de Ley propuesta y en consecuencia:

RESUELVEN

ÚNICO.- *Es de aprobarse la Iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal 2000 presentada por la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, con las reformas propuestas por las comisiones, quedando en los siguientes términos:*

**LEY DE INGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2000**

ARTÍCULO 1o.- En el ejercicio fiscal 2000 el Distrito Federal percibirá los ingresos provenientes de la recaudación por los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:

	MILES DE PESOS
I. IMPUESTOS:	11,637,430.9
1. Predial.	5,172,333.2
2. Sobre Adquisición de Inmuebles.	847,103.2
3. Sobre Espectáculos Públicos.	60,065.2
4. Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos.	111,690.0
5. Sobre Nóminas.	5,137,493.2
6. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.	204,837.5
7. Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados.	28,057.6
8. Por la Prestación de Servicios de Hospedaje.	75,851.0
II. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	67,054.1
III. DERECHOS:	4,796,775.9
1. Por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua.	2,564,963.0
2. Por la Prestación de Servicios del Registro Público de la Propiedad o del Comercio y del Archivo General de Notarías	459,396.9
3. Por los Servicios de Control Vehicular.	829,335.3
4. Por el Estacionamiento de Vehículos en la Vía Pública.	29,687.6
5. Por el Uso o Aprovechamiento de Inmuebles.	28,094.3
6. Por Cuotas de Recuperación por Servicios Médicos.	66,159.2
7. Por la Prestación de Servicios del Registro Civil.	79,782.1
8. Por los Servicios de Construcción y Operación Hidráulica y por la autorización para usar las redes de agua y drenaje	92,211.5
9. Por Servicios de Expedición de Licencias.	132,890.5
10. Por los Servicios de Alineamiento y Señalamiento de Número Oficial y de Expedición de Constancias de Zonificación y de Uso de Inmuebles.	40,334.5
11. Por Descarga a la Red de Drenaje.	215,129.4

12. Derechos por los Servicios de Recolección y Recepción de Residuos Sólidos.	6,167.5
13. Derechos por el Uso de Centros de Transferencia Modal	17,091.0
14. Otros Derechos.	235,533.1

VI CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES PRECEDENTES:

1.0

V. ACCESORIOS DE LAS CONTRIBUCIONES:

721,046.8

VI. PRODUCTOS:

6,193,699.2

1. Por la Prestación de Servicios que Corresponden a Funciones de Derecho Privado.	5,180,489.0
a) Policía Auxiliar.	3,579,853.2
b) Policía Bancaria e Industrial.	1,598,500.0
c) Otros.	2,135.8
2. Por el Uso, Aprovechamiento o Enajenación de Bienes Del Dominio Privado.	1,013,210.1
a) Tierras y Construcciones.	40,916.3
b) Enajenación de Muebles e Inmuebles.	42,566.7
c) Intereses de Valores, Créditos y Bonos.	644,000.0
d) Programa del Uso Eficiente del Agua.	1.0
e) Planta de Asfalto.	93,046.4
F) Productos Que se Destinen a la Unidad Generadora de los Mismos.	1.0
g) Venta de Hologramas de la Verificación	117,568.3
h) Otros	75,110.4

VII. APROVECHAMIENTOS:

970,407.7

1. Multas de Tránsito.	39,084.3
2. Otras Multas Administrativas, así como las Impuestas por Autoridades Judiciales y Reparación del Daño Denunciado Por los Ofendidos.	225,548.1
3. Recuperación de Impuestos Federales.	545,078.0
4. Reposición de Gastos que Tengan por Objeto Mantener el Orden y la Seguridad en la Presentación de Espectáculos Públicos.	1,428.9
5. Aportaciones en efectivo por fraccionamiento de terrenos, Por la construcción de conjuntos habitacionales, así como Por quienes construyen obras nuevas para la dotación General de la infraestructura, equipo y servicios urbanos.	12.2

6. Venta de Bases para Licitaciones Públicas. 15,449.5
7. Por el Uso de Vías y Áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales. 16,274.6
8. Aprovechamientos que se destinen a la unidad generadora De los mismos. 1.0
9. Otros no especificados. 127,531.1

VIII. PARTICIPACIONES POR ACTOS DE COORDINACIÓN FISCAL CON LA FEDERACIÓN: 3,483,215.5

1. Por la Participación de la Recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 2,589,105.6
2. Por la Participación de la Recaudación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 819,042.9
3. Por Incentivos de Fiscalización y Gestión de Cobro. 60,663.3
4. Por Multas Administrativas Impuestas por Autoridades Federales no Fiscales. 14,403.7

IX. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES: 18,084,873.5

1. Por el Fondo General de Participaciones. 16,067,375.4
2. Por el Fondo de Fomento Municipal. 1,497,273.9
3. Participaciones en Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios. 520,260.1

X ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS); 600,000

XI. OTROS INGRESOS: 6,451,495.4

1. Ingresos Propios de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal. 4,252,895.4
2. Transferencias del Gobierno Federal. 2,198,600.0
2. A Fondos de Aportaciones Federales. 2,173,600.0
 - a) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 1,174,800.0
 - b) Fondo de Aportaciones Múltiples 627,200.0
 - c) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal 371,600.0

2. B Otras Transferencias. 25,000.0

TOTAL 53,006,000.0

ARTÍCULO 2°.- El monto del endeudamiento neto que la Jefa de Gobierno del Distrito Federal podrá ejercer durante el ejercicio, fiscal, corresponde a lo determinado por el Congreso de la Unión para el financiamiento en la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2000, por la cantidad de 6,000 millones de pesos.

ARTÍCULO 3°.- En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos al 2.0 % mensual sobre los saldos insolutos, durante el año de 1999. Esta tasa se reducirá, en su caso, a la que resulte mayor entre:

a) Aplicar el factor de 1.5 al promedio mensual de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos y de dividir entre doce el resultado de dicha multiplicación. A la tasa anterior se le restará el incremento porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos, y

b) Sumar 8 puntos porcentuales al promedio mensual de la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos y de dividir entre doce el resultado de dicha suma. A la tasa anterior se le restará el incremento porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos.

La reducción a que se refiere el primer párrafo del presente artículo también será aplicable a los intereses a cargo del fisco a que se refiere el artículo 57 del Código Financiero del Distrito Federal.

La Secretaría de Finanzas realizará los cálculos a que se refiere este artículo y publicará la tasa de recargos vigente para cada mes en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

ARTÍCULO 4°.- Los propietarios o poseedores de inmuebles de uso habitacional en el Distrito Federal, cuyo valor catastral al primero de enero del año 2000 se ubique dentro de los rangos A, B, C, D de la tarifa del impuesto predial, prevista en el artículo 152 del Código Financiero del Distrito Federal, y que se encuentren inscritos en el padrón catastral, pagarán el 97.1 % de la tarifa correspondiente al año de 1999, hasta en tanto no varíen las características catastrales de los mismos, o bien, que se otorgue su uso o goce temporal.

ARTÍCULO 5°.- Los usuarios de los servicios de agua de uso doméstico cuyos inmuebles queden comprendidos en las colonias catastrales 0, 1, 2, 3 y 8 que durante los años 1998 y 1999 se encontraban pagando el derecho por el suministro de agua a través de cuota fija y que hayan pasado a servicio medido, así como los que pasen durante el 2000 a consumo medido, pagarán una cuota máxima diferenciada que corresponda a su colonia catastral, de conformidad con la siguiente tabla:

Colonia Catastral	Cuota Máxima por Bimestre
0	\$31.76
1	\$47.70
2, 3 y 8	\$95.40

La cuota mínima a pagar será la que marque el medidor.

ARTICULO 6°.- Los usuarios del servicio de agua de uso doméstico con servicio medido, inscritos en el padrón, que durante el año 2000, su consumo bimestral no exceda de 30 metros cúbicos pagarán el 97.10 % de la tarifa correspondiente al año 1999, prevista en el artículo 196, fracción I, inciso a), del Código Financiero del Distrito Federal, por concepto de Derechos de Suministro de Agua.

CONSUMO EN M³		TARIFA	
LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	CUOTA MÍNIMA	CUOTA ADICIONAL POR METRO CÚBICO EXCEDENTE DEL
00.0	10.0	\$11.50	\$0.00
10.1	20.0	\$11.50	\$1.36
20.1	30.0	\$25.60	\$1.58

Artículo 7°.- A los usuarios de servicio de uso mixto de servicio medido que su inmueble tenga una vivienda y un local con giro comercial determinado por la Comisión de Aguas del Distrito Federal, como seco o semihúmedo, se les aplicará la tarifa doméstica a los primeros 70 m³ y a cada metro cúbico adicional se le aplicará la tarifa no doméstica.

ARTICULO 8°.- Los contribuyentes por derechos por suministro de agua en sistema medido en uso doméstico y mixto, de las colonias catastrales 0, 1, 2, 3 y 8, podrán regularizar sus adeudos de 1995 a 1999 de acuerdo a la cuota máxima diferenciada por bimestre que le corresponda según la tabla del artículo 5°, exentándose los recargos y sanciones. Para lo cual los usuarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. El contribuyente deberá acudir ante la autoridad fiscal dentro del plazo establecido en el siguiente inciso para solicitar la regularización de su situación fiscal.

2. El pago se tendrá que realizar a más tardar al término del segundo bimestre del año 2000.

3. El pago deberá cubrir el monto total de los adeudos en una sola exhibición.

4. Los usuarios deberán demostrar estar al corriente en el pago de la citada contribución durante el año 2000.

5. Los beneficiarios del presente artículo que no tengan medidor instalado deberán de hacerlo previo a la regularización de sus adeudos.

ARTICULO 9°.- Los ingresos que se recauden por los diversos conceptos que establece esta Ley se concentrarán sin excepción en la Tesorería del Distrito Federal salvo lo previsto en el Código Financiero del Distrito Federal y deberán reflejarse, cualquiera que sea su forma o naturaleza, tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta Pública del Distrito Federal.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil.

ARTICULO SEGUNDO.- Túrnese a la C. Jefa de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión.

Por la Comisión de Hacienda, firman: Diputado Francisco Chiguil Figueroa; diputado Miguel Angel Peláez Gerardo; diputado Miguel Bortolini Castillo; diputado Ernesto Chávez Contreras; diputado Ricardo Javier Martínez Atala; diputado Roberto Rico Ramírez.

Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, firman: Diputado Ricardo Javier Martínez Atala; diputado Miguel Angel Peláez Gerardo; diputado Francisco Chiguil Figueroa; diputado Francisco Martínez Rojo; diputado Juan González Romero; diputado Roberto Rico Ramírez; diputada Ana Luisa Cárdenas Pérez; diputado Miguel Bortolini Castillo.

LA C. PRESIDENTA.- Para fundamentar el dictamen por las Comisiones Unidas, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Chiguil Figueroa.

EL C. DIPUTADO FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA.- Con su permiso, diputada Presidenta.

Ciudadanos y ciudadanas diputadas: La Ley de Ingresos del Distrito Federal para el año 2000 cumple con todos los requisitos legales, sociales y políticos para ser aprobados. No obstante, los alegatos interesados de algún partido en esta Asamblea, tanto la iniciativa enviada por la Jefa de

Gobierno, como el dictamen que hoy se discute, contienen el fiel reflejo de una política fiscal que orienta los recursos públicos de la ciudad en beneficio de las mayorías y que recauda lo justo atendiendo a las distintas capacidades de los sectores que conforman la sociedad capitalina.

Por ellos, se atacan las bases de esa política fiscal, porque representa una nueva forma de entender y llevar a cabo una política económica, en cuyo centro se pone el bienestar social y no el beneficio de las cuentas macroeconómicas, ni los intereses de unos cuantos.

Por ello, se sostienen en el error aquellos que tuvieron en su manos por más de 70 años los destinos de esta ciudad y la convirtieron en botín de los poderosos, de los malos funcionarios y de la impunidad. Se mercantilizó la función pública y se convirtieron las arcas de la ciudad en nave para traficar influencias y trocar impuestos en oro y salarios en bonos y prebendas.

Hoy, no lo toleran el tránsito a la democracia, ni la transparencia porque es veneno para su forma de pensar y actuar. No están de acuerdo con una política fiscal diferenciada porque merma el botín que todavía anhelan. Difieren de las políticas de consenso, porque ello los compromete a actuar con justicia y honradez.

Mientras en otros lados compiten para dar mayores privilegios a los privilegiados de siempre, aquí se oponen a las medidas de justicia y equidad distributiva en beneficio de los contribuyentes del predial y el agua.

Mientras aprueban miles de millones de dólares para apoyar a los grandes banqueros y concesionarios carreteros, aquí regatean recursos a la ciudad bajo el argumento de disponibilidades que ellos abultan.

Mientras continúan manteniendo los aumentos a la luz, al teléfono, a las gasolinas, se ufanan en tergiversar el nulo incremento a las tarifas del transporte público capitalino, convirtiéndose en caricaturescos defensores de la eficiencia, cuando lo que ellos hicieron fue nadar en la abundancia de la discrecionalidad, la complicidad, y eso sí, mucha ineficiencia; unos, porque se beneficiaron con los cargos públicos en los principales puestos de responsabilidad; otros, porque hicieron negocios familiares con los contratos públicos; todos ellos porque les asusta el rompimiento de los esquemas, impunidad y privilegios, prefieren inventar el deterioro de los ingresos propios, anudar falsos cabos para concluir que no se utilizan bien los recursos de financiamiento o denostar contra programas de beneficio social, pensando que como ellos lo hicieron, estos programas van a sufragar campañas políticas.

Su respuesta de hoy es de miedo, es el tipo de temor que experimentan los que ven perdido para siempre el paraíso

de la impunidad; no obstante, que la ciudad sigue castigada por la Federación, en primer lugar, al ver disminuido sus montos de participaciones federales.

En segundo lugar, al no ser tomada en cuenta en los fondos de aportaciones para el combate a la pobreza, ni en los de apoyos a los municipios.

En tercer lugar, porque los montos de deuda no fueron aprobados en la cantidad necesaria.

El dictamen que hoy se presenta contiene una estimación realista y prudente sobre los recursos con los que se contará para hacer frente a la demanda de servicios y el rezago de obras.

Ello, sin embargo, no debe hacernos cejar en nuestra demanda; la disminución drástica y progresiva del coeficiente efectivo de distribución de las participaciones federales ha provocado que los recursos que obtiene el Distrito Federal vía participaciones, registren un crecimiento real muy por debajo del crecimiento medio nacional, situación que ha motivado que los habitantes de la ciudad de México carguen con la responsabilidad derivada de la injusta distribución de sus contribuciones, por lo que seguiremos promoviendo la modificación del actual esquema de distribución de los ingresos participables. Lo anterior con el propósito de que se logre un ambiente más justo y equitativo entre las distintas entidades federativas.

Este año nuevamente el Congreso de la Unión negó la autorización del techo de endeudamiento al Gobierno del Distrito Federal, reduciendo esta vez la tercera parte del endeudamiento solicitado. Cabe destacar que estos recursos, son limitados para abatir el rezago de los servicios sociales dejados por las administraciones pasadas.

Por lo cual, la fracción parlamentaria del PRD afirma una vez más, su posición de que los recursos que se reciban vía financiamiento, sean asignados en proyectos de alto impacto social, como son el transporte público, drenaje, agua potable, preservación y mejoramiento del medio ambiente, infraestructura urbana, así como los programas de seguridad y justicia social que sin duda ayudarán a elevar la calidad de vida y los servicios de los ciudadanos del Distrito Federal.

Por otro lado, la inclusión de un artículo transitorio en el Código Financiero, beneficiará a los contribuyentes de derecho por suministro de agua del sistema medido de uso doméstico mixto, que reciben el servicio por tandeo y que estén ubicados en las colonias catastrales 01, 2, 3 y 8, dado que se les aplicará por la toma de cuota fija que corresponda conforme a lo establecido al artículo 126 del

mismo Código Financiero hasta en tanto se regulariza el suministro.

Además, para efectos de la conexión de las redes de agua y drenaje o su regularización se les aplicará un descuento de 95% sobre el pago a efectuar. Adicionado a estos beneficios, las facultades otorgadas a la Secretaría de Finanzas y a la Procuraduría Fiscal, les permite impulsar programas para abatir los adeudos rezagados en materia de pago de derechos por suministros de agua, en sistema medido en uso doméstico y mixto, para las colonias catastrales 01, 2, 3 y 8 mismas que podrán regularizar sus adeudos de 1995 a 1999 de acuerdo a la cuota máxima diferenciada por bimestre que le corresponda según la tabla del artículo 5.

Esto quiere decir que sí es posible la aplicación de una política fiscal diferente a la instrumentada por los gobiernos anteriores. La política de ingresos complementada por el primer Gobierno de la Ciudad de México elegido democráticamente, ratifica una vez más el compromiso con la ciudadanía y recauda lo justo atendiendo a las diferentes capacidades de ingreso de los sectores de la población capitalina, bajo el concepto de que paga más, quien más tiene, utilizando el ingreso público como instrumento de redistribución del ingreso social que se traduce en un beneficio principalmente de la población marginada del Distrito Federal, por lo cual esta Ley de Ingresos cumple con el marco legal, social y político.

En consecuencia, la fracción parlamentaria votará a favor de este dictamen.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión el dictamen en lo general. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra?

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

Se le concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos al diputado José Narro Céspedes; posteriormente al diputado Alejandro Vázquez Enríquez y al diputado Miguel Angel Peláez Gerardo y a la diputada Raquel Sevilla Díaz.

EL C. DIPUTADO JOSE NARRO CESPEDES.- Con su permiso, Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, señor diputado.

EL C. DIPUTADO JOSE NARRO CESPEDES.- Compañeras y compañeros diputados:

Nuestra fracción reconoce las enormes necesidades financieras que padece la ciudad; necesidades que

desafortunadamente no pueden ser cubiertas con los ingresos propios, es decir a partir únicamente de la recaudación de las contribuciones locales, las cuales no obstante representan más del 60% del total de los ingresos ordinarios del Distrito Federal.

En tal razón, existe la necesidad al no existir otro tipo de fuentes de financiamiento de recurrir al endeudamiento, toda vez que corresponde a la Federación la potestad de imponer tributos al ingreso y al consumo.

Sin embargo, el Distrito Federal, a diferencia de las demás entidades que integran el Pacto Federal, está imposibilitado para contraer deuda pública para financiar su gasto, ya que en un acto que consideramos de arrogancia, el Poder Legislativo Federal se reservó esta facultad.

Hemos visto cómo el uso indiscriminado de esta facultad incidió en que en este año se hubiesen retrasado obras de beneficio para importantes núcleos de población, no sólo del Distrito Federal, sino también de importantes municipios del Estado de México.

Así también hemos sido testigos de cómo el Distrito Federal dejó de percibir significativos montos de recursos en virtud de haber sido excluido de dos importantes fondos de participación contemplados en el Sistema de Coordinación Fiscal.

Lo anterior ha significado que ante la falta de recursos, muchas de las demandas de servicios que reclama la ciudad no han sido posible cubrir.

No dejamos de reconocer que parte del rezago es atribuible a deficiencias mostradas por los encargados de la administración pública capitalina también. Comprendemos, pero no avalamos que ante la ausencia de fuentes alternativas de financiamiento el Gobierno de la Ciudad optará por el expediente fácil de elevar la carga tributaria, olvidando que los impuestos deben de cumplir con principios de equidad y de proporcionalidad.

Al respecto, creemos que el incremento de la recaudación debe ser en base fundamentalmente de ampliar el número de contribuyentes antes de elevar las cuotas y tarifas, por lo que conminamos a las autoridades del gobierno para que se aboquen a la tarea de diseñar y elaborar programas que permitan identificar a aquellos núcleos de población que aún no han sido registrados o empadronados en la base tributaria, a efecto de que estos compensen el ingreso con los beneficios que por ayudas y subsidios se otorguen a los ya inscritos.

Nuestra posición, respecto al alza de los impuestos, es la misma que externamos en nuestra anterior intervención, cuando compareció ante esta tribuna el propio Secretario de Finanzas.

En lo concerniente a las reformas al Código Financiero, no estamos de acuerdo en el incremento del 14.1% a cuotas y tarifas.

Estamos claros que en agua potable fundamentalmente el criterio que prevaleció fue la cuota, la tarifa única para todos aquellos que se hubieran recontratado y que cuenten ahora con medidor desde los años de 98 y 99 y también para el 2000.

Estamos claros que esta es una forma de apoyar a estos sectores y también de que se regularicen. Un importante sector de la base tributaria en el pago del agua que no lo ha hecho hasta el momento, y que esta alternativa puede permitir que puedan pagar y puedan actualizarse hasta las fechas actuales. Hay adeudos desde el año del 95, hay más de 2 mil millones de pesos que adeudan únicamente las dependencias del Ejecutivo Federal que están instaladas sus oficinas aquí en la Ciudad de México y que no han aportado esa cantidad que significaría importantes recursos para impulsar las obras que tanto se necesitan.

Estamos claros también que hay un manejo progresivo y proporcional para el cobro y para la implementación de los impuestos del predial, siendo estos dos, el del agua y el predial los principales contribuciones para la Ciudad de México.

Pero al mismo tiempo estamos en desacuerdo que los derechos y los aprovechamientos, los impuestos y los productos se hayan incrementado en un 14.1%.

No podemos estar de acuerdo con un incremento de esta magnitud, cuando la inflación para el año que entra se calcula que va a ser del 10.4%.

Incrementar la carga y el peso de la crisis sobre los habitantes de la ciudad que se han visto afectados por los escasos recursos que se le dedican a la Ciudad de México por parte del Gobierno Federal, a partir de trampas y de mecanismos de exclusión y se han estado votando en la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión, que mantienen afuera de los apoyos necesarios a la Ciudad de México, tanto del Fondo de Combate a la Pobreza, como del Ramo 33, sobre todo del Fondo de Fortalecimiento Municipal y que antes también tenía y se denominaba y del Distrito Federal.

Que ahora este año mínimamente iba a aportarle a la Ciudad de México una cantidad de 1,400 millones de pesos y únicamente a través del Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas que se creó, únicamente se le están entregando 740 millones de pesos, cerca del 50% de lo que le correspondería a la Ciudad de México.

No podemos también estar en acuerdo sobre la actual fórmula para distribuir las participaciones a las entidades federativas como parte del ramo 28, en donde es totalmente inequitativo

e injusto para los habitantes de la Ciudad de México, que aportan una parte muy importante del Producto Interno Bruto nacional, que aportan una parte muy importante a los ingresos de la Federación y que se ve poco retribuido el esfuerzo que hacen los capitalinos, al devolverse una cantidad mínima de los recursos que se aportan para el desarrollo del país.

No podemos estar de acuerdo en que sean castigadas las entidades como es la Ciudad de México, el Distrito Federal, y que por otro lado se dediquen enormes cantidades de recursos para solapar la impunidad y la corrupción que se encuentra atrás del IPAB y de la Banca Nacional.

Ante esto hemos estado planteando permanentemente un trato más justo por parte de la Federación al Distrito Federal y estamos planteando también que se reintegren los derechos políticos a los habitantes y a los órganos de Gobierno de la Ciudad de México para hacerlos órganos de poder, poderes públicos, como debería ser el Poder Legislativo, y que actualmente únicamente es un órgano de gobierno; para que este órgano legislativo, convertido en Poder Legislativo, tenga la facultad de poder decidir el monto de endeudamiento para esta ciudad, para poder impulsar el desarrollo.

Pero también necesitamos que se cambien las fórmulas y que el Distrito Federal esté plenamente integrado también en los fondos que se distribuyen en el resto de las entidades y de las cuales injustamente es excluido, son excluidos los habitantes de la Ciudad de México.

Si bien el importe total reflejado en la iniciativa de Ley de Ingresos en el año 2000 para algunos es sumamente elevado, creemos que en nuestra calidad de fiscalizadores del gasto debemos enfocar nuestras observaciones no sólo a cómo se ejercen los dineros públicos sino también a la correcta forma de recaudarlos, es decir que debemos cuidar también que no existan fugas de recursos provenientes del cobro de impuestos, por lo cual insistimos en que deben de modernizarse y eficientarse los sistemas administrativos de la Tesorería y enfrentar una lucha frontal en contra de prácticas de la corrupción.

Finalmente y toda vez que de alguna manera a partir de un artículo transitorio en esta ley se trata de evitar una excesiva carga tributaria en contra de los contribuyentes de menores recursos, sobre todo para el impuesto predial, merced al que el mismo establece reducción y subsidios a dichos contribuyentes, la fracción del Partido del Trabajo votará en lo general a favor de esta ley.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Se le concede el uso de la palabra, para razonar su voto, al diputado Alejandro Vázquez Enriquez, hasta por 20 minutos.

ELC. DIPUTADO ALEJANDRO VAZQUEZ ENRIQUEZ.-
Gracias, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Permítame un segundo.

Le solicitamos al público asistente, sobre todo a quienes se encuentran en los pasillos laterales y a los diputados asistentes, nos hagan favor de poner atención al orador.

Adelante, señor diputado.

ELC. DIPUTADO ALEJANDRO VAZQUEZ ENRIQUEZ.-
Señoras y señores diputados:

La fracción parlamentaria del PRI rechaza el proyecto de dictamen de la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2000.

Me voy a permitir mencionar y explicar 10 razones que nos llevaron a esta conclusión.

Primero. Que no cumple con el objetivo, como señala la propia iniciativa, de obtener recursos para garantizar la prestación de los servicios públicos, sino para otras actividades no complementadas por esta ley.

Segundo. Que no fortalece la autonomía financiera de esta entidad, sino la hace depender cada día más del gobierno federal.

Tercero. Que no depende fundamentalmente de los ingresos ordinarios, sino de los extraordinarios.

Cuarto. Que bajo el falso nombre de ajuste tarifario aumenta arbitrariamente los impuestos en 14.1%, porcentaje considerablemente superior al del salario mínimo, al de la inflación esperada para el año 2000 e incluso al de la inflación que se registrará este año que será de alrededor del 13%.

Quinto. Que no descansa en la actualización y ampliación del padrón de contribuyentes, sino sólo en las buenas intenciones reiteradas por tercer año consecutivo, de actualizarlo y ampliarlo.

Sexto.- Que no obliga a todos los contribuyentes por igual, sino sólo a los comprendidos en ciertos rangos.

Séptimo. Que descuida los ingresos del sector paraestatal.

Octavo. Que compromete seriamente el equilibrio y la salud de las finanzas públicas.

Noveno. Que altera el propósito de la reforma política del 96, que fue convertir a una dependencia del Ejecutivo Federal en un gobierno autónomo electo por los ciudadanos, y

Décimo. Que confirma una vez más que la incongruencia del régimen perredista al decir una cosa y hacer otra, o sea, al decir que quiere convertir al Distrito Federal en el Estado 32 y en realidad lo que está haciendo es depender financieramente más de la Federación, sin autonomía financiera, señores diputados, todos lo sabemos, no puede haber autonomía política.

Pero vayamos un poco más a fondo. El objetivo fundamental de la Ley de Ingresos es definir para qué se quieren estos y de dónde deben obtenerse. La iniciativa señala que se quieren para garantizar la prestación de los servicios públicos, sin embargo, los antecedentes demuestran otra cosa.

Los ingresos se han utilizado para atesorarlos en los bancos, no para garantizar la prestación de los servicios públicos, para aumentar la burocracia, no para garantizar la prestación de los servicios públicos, para alcanzar fines no contemplados en la ley y no para garantizar la prestación de los servicios públicos.

En 1998 los egresos, los ingresos no utilizados en la prestación de estos servicios públicos, ni en obras para garantizar dicha prestación ascendieron a la importante suma de 4 mil 200 millones de pesos. A septiembre de 1999 esta suma era de mil 875 millones.

Si en los dos años anteriores los ingresos no se utilizaron para la prestación de servicios públicos, no hay ninguna razón que permita suponer que serán utilizados para ese fin en los últimos meses de esta administración.

¿Quieren pruebas? La propia iniciativa nos las aporta. Fijense bien. En el capítulo de productos de la iniciativa de la Ley de Ingresos se prevén ingresos por 644 millones de pesos por concepto de intereses de valores, créditos y bonos. Si se toma en cuenta el descenso de las tasas de interés que habrá de registrarse el año que entra, se calcula entonces que tendrá que haber una disponibilidad de alrededor de 5 mil millones de pesos en promedio en las arcas del Distrito Federal.

Es imposible que los recursos que se utilizan para generar intereses sirvan al mismo tiempo para garantizar la prestación de los servicios públicos; en cambio son recursos que podrán ser desviados para apoyar las campañas electorales de sus candidatos y de las denominadas o denominados grupos o brigadas del Sol. Por eso nuestro partido rechaza la iniciativa, así como el dictamen que la aprueba.

Los ingresos propios constituyen la base de unas finanzas sanas, pero la iniciativa da más peso a los ingresos procedentes de la federación y de la deuda que a los ingresos propios. En 1998 los ingresos propios representaron 53%

del total y la iniciativa prevé 51% para el año que entra. En términos reales los ingresos propios han caído más de 7 puntos porcentuales respecto a los del año de 1997, y al cierre del año serán 9.2% inferiores en términos reales del año de 1997.

Si esto es lamentable respecto del sector central, alcanza dimensiones alarmantes respecto del sector paraestatal pues éste hoy aporta sólo el 73% de la proporción en que lo hacía en el año de 1997.

La estrategia financiera de mi partido está orientada a equilibrar las finanzas públicas y fortalecer la autonomía del Distrito Federal a través del incremento de los ingresos propios. Consecuentemente, mi partido no puede respaldar la iniciativa del PRD.

Unas finanzas sanas descansan fundamentalmente en los ingresos ordinarios y en caso necesario en los extraordinarios. Sin embargo, la iniciativa hace depender las finanzas públicas de los ingresos extraordinarios, principalmente de los derivados de la deuda, a tal grado que éstos representan 15% del total. La deuda se ha solicitado a fin de que los recursos respectivos, según el dictamen, permitan brindar mayores y mejores servicios a los habitantes.

¿Es esto de esperarse? ¿Es esto posible?

En este caso, como en el anterior, la realidad es muy distinta. En el año de 1998 la administración obtuvo más de 7,286 millones de pesos de deuda que no invirtió en proyectos productivos que generaran su propia fuente de repago como lo exigió nuestro partido; consecuentemente, no sirvieron para dar mayores y mejores servicios a los habitantes, sino al revés, menores y peores servicios.

En 1999 el Congreso de la Unión autorizó al gobierno un endeudamiento por 1,700 millones de pesos. Tampoco esta deuda se reflejó en mayores y mejores servicios a los habitantes de la ciudad, salvo en el pequeño tramo de la Línea B del Metro que a duras penas se alcanzó a inaugurarse hace algunos cuantos días; a pesar de que la obra todavía no está concluida.

Ahora la iniciativa hace referencia a ingresos de deuda por la cantidad de 6,000 millones de pesos para el año 2000; el Congreso de la Unión lo autorizó. Pero por primera vez en la historia le impuso una condición al Gobierno del Distrito Federal para su ejercicio. Así respondió el Congreso a la desconfianza de la ciudadanía por el inadecuado y dudoso manejo de la deuda que se ha hecho durante estos dos últimos años; a pesar de ello, este tipo de ingresos no se ha destinado a hacer obra.

Si antes, en que se tuvo esta libertad no se hizo, menos ahora, con los candados que le fueron impuestos al gobierno.

Lo cierto es que este gobierno contratará una deuda por 15,000 millones de pesos, la más alta de cualquiera otra administración. Ahí está este récord y el gobierno se verá obligado a pagar los intereses de los créditos solicitados.

En 1997 dichos intereses representaron 5% de los ingresos propios. Al final de la administración aumentará a 18% sin provecho, ni resultado alguno.

Mi partido está de acuerdo con la deuda, siempre y cuando se respete el principio constitucional de que los ingresos por este concepto se destinen a la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos.

Pasando al tema del aumento irracional de las contribuciones, el régimen perredista nuevamente olvidó lo que fueron; primero, ofrecimientos de campaña y después compromisos de gobierno, en el sentido de no aumentar las contribuciones por encima del aumento del salario mínimo.

La iniciativa repite el mismo estribillo de los dos años anteriores, de que dichas contribuciones no aumentarán, sino que solamente se ajustarán, se actualizarán.

En realidad en 98 la famosa actualización fue del 17.7%, en 99 el aumento fue de alrededor del 7%, ahora será del 14.1%; siempre por encima de la inflación esperada, ya no digamos del salario mínimo.

Estos desmesurados aumentos constituyen una confiscación de los recursos de la ciudadanía. Esto ha traído como consecuencia el empobrecimiento de grandes sectores de la población, a los que se les ha restado capacidad de consumo; tal es la política real del perredismo, primero fabrica pobres, luego utiliza los fondos públicos para darles una limosna.

Pero este atentado contra los principios del buen gobierno ni siquiera han servido para aumentar las finanzas públicas sino al revés. ¿Quieren pruebas? Bien. Desde hace una década la base gravable ha venido creciendo espontáneamente a un ritmo del 3% anual.

Señores diputados, a pesar de los irracionales impuestos decretados en los últimos años, del incremento del padrón de contribuyentes que este año fue de 2.2% y del aumento del número de pagos respecto del año anterior, que fue de 4.4%, la propia administración perredista reconoce que los ingresos tributarios disminuyeron 2.2% en relación con los programados.

Pero además las insensateces, las cargas desproporcionadas en materia fiscal por parte de los perredistas, han disminuido la productividad de la ciudad. Su participación en el Producto Interno Bruto nacional ha bajado en 2 años del 25% al 23%. La fracción parlamentaria del PRI está de acuerdo con el

aumento de las contribuciones, pero no debe ir más allá de la capacidad de pago de los contribuyentes. Ya lo hemos dicho otras veces y no tenemos ningún inconveniente en repetirlo: lo que deben aumentarse son los contribuyentes no las contribuciones; la eficacia recaudatoria no las cargas fiscales, y la transparencia en los subsidios no la ilegalidad en la recaudación.

Vayamos a lo primero: Al iniciarse la administración el perredismo ofreció que haría una reforma a fondo del impuesto predial; nunca lo hizo ni lo hará, pero la iniciativa repite la misma letanía: que buscará obtener mayores recursos a través de la ampliación y actualización de los diferentes padrones contribuyentes. ¿Cuál ampliación? ¿Cuál actualización? No hay ninguna señores diputados.

Si la administración no hizo la tarea durante los dos años anteriores pregunto: ¿por qué es de esperarse que la haga en los últimos meses que le quedan? Además la ley debe basarse en hechos no en promesas. Esta es una razón más para que no podamos los priístas aprobar esta iniciativa.

Por último, esta es una iniciativa ilegal, porque obliga únicamente a los contribuyentes incluidos en ciertos rangos a que paguen las contribuciones, excluyendo arbitrariamente a otros, a los que exime de ciertos pagos.

¿No es esto una forma de favorecer a los grupos de militantes perredistas con quienes tienen compromisos políticos? ¿No es acaso una forma de agredir a aquellos grupos sociales que no son simpatizantes del perredismo? No señores diputados, la ley debe obligar en forma general a todos los contribuyentes, no solamente a algunos.

Este tipo de medidas populistas y lesivas para las finanzas públicas, han reducido en forma sistemática el coeficiente tributario de 60.5% en 97 a 55.7% este año, calculándolo hasta el mes de septiembre.

La pérdida de ingresos por este concepto a precios constantes, alcanzó la suma de 1,740 millones de pesos al noveno mes de este año, equivalente a 33% menos de los ingresos obtenidos en el año de 97.

Si no se quiere favorecer a contribuyentes de escasos recursos o si se quiere hacerlo, apruébese entonces subsidios transparentes y otórguese por la vía del gasto a quienes lo necesiten.

Mi partido está de acuerdo con esta medida, pero no se violenta el espíritu de la ley. Todos nosotros protestamos cumplir con la ley, luego entonces, cumplamos con ella y hagámosla cumplir.

No siendo así, rechazamos la iniciativa, así como el dictamen que la aprueba. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Se le concede el uso de la palabra para razonar su voto al diputado Miguel Angel Peláez Gerardo, hasta por 20 minutos.

EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL PELAEZ GERARDO.- Con su permiso, Presidenta.

El dictamen de la iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el año 2000, tiene como meta principal garantizar la funcionalidad del gobierno local, para lo cual se requiere contar con recursos suficientes que le permitan al Gobierno del Distrito Federal atender en forma eficaz y eficiente las necesidades de servicios públicos que demandan los habitantes de la Ciudad de México, los cuales son cada día mayores.

Algunos compañeros diputados han cuestionado el ajuste del 14.1% a los impuestos y tarifas, considerado en la iniciativa a discusión, por lo que me gustaría comentar lo siguiente.

El artículo 31 de nuestra Constitución, en su fracción IV, establece que "son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".

Todos sabemos que actualmente las necesidades de los capitalinos son múltiples, y que los recursos con que se cuentan son insuficientes para su adecuada atención.

Bajo este contexto, los ingresos del Gobierno del Distrito Federal en los últimos años se han visto disminuidos en términos reales, como se describe en la exposición de motivos, en donde se establece que de 1995 a 1998 los ingresos han tenido un rezago de cerca del 12%, sin considerar la inflación que se prevé para 1999, la cual se ubicará en alrededor del 13%.

Esto tiene su explicación en los altos niveles inflacionarios que se presentaron durante la crisis que dio inicio en diciembre del 94, lo cual ha hecho que disminuyan los ingresos de los capitalinos y ha significado que las familias y las pequeñas y medianas empresas no contribuyan con los ingresos suficientes para los gastos de la ciudad.

Adicionalmente a esto, desde 1991 el Distrito Federal ha recibido cada vez menos recursos federales en términos reales, debido básicamente a que entró en vigor un criterio redistributivo en lugar del resarcitorio que se venía utilizando para la distribución de los fondos de las participaciones federales.

La participación del Distrito Federal en este fondo ha descendido de manera constante, de 17.4% que se tenía en

91, a 12.2% que se tuvo en 98, y para el presente año se espera que este porcentaje sea tan solo de 11%.

Si a lo anterior le agregamos los recursos que dejó de percibir el Distrito Federal en el año del 99, al ser excluido del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, nos encontramos con que la única forma no de aumentar los ingresos, sino de mantener un nivel similar al que se tenía en años anteriores en términos reales, es a través del ajuste que se propone a los impuestos y tarifas.

Desde nuestro punto de vista, este ajuste no es excesivo, ya que el mecanismo para su determinación está contemplado en el Código Financiero en su artículo 31, y este es un artículo que no es nuevo. Es cierto no se ha presentado la circunstancia que obligue a su aplicación estricta, pero de algún modo se estableció este mecanismo considerando un criterio que ya he comentado: garantizar el nivel de los ingresos con que se contó el año anterior.

Precisamente con base en esto, el Ejecutivo decidió calcular la actualización de los impuestos y tarifas para el año 2000. Este mismo artículo considera como factor de ajuste la inflación pasada y no la esperada, esto por una razón muy sencilla, la inflación pasada ya la sabemos y la esperada no. Se puede argumentar que en los últimos años los pronósticos se han acercado a la realidad, pero para nadie es desconocido que los pronósticos sufren ajustes durante el año y que normalmente estos no se cumplen, principalmente los oficiales.

Si a esto le agregamos que el 2000 es un año electoral y que los inversionistas van a mostrar cautela, nada nos garantiza que se cumpla con la meta inflacionaria del Gobierno del Distrito Federal.

Por otra parte, me gustaría comentar que los representantes priístas que hace 5 años en este mismo recinto discutieron y aprobaron la iniciativa de reformas al Código Financiero del Distrito Federal para 1995, no mostraron la misma actitud que están adoptando ahora estos compañeros. Para ese año el impuesto predial no se ajustó, se incrementó 17% en promedio, y el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos aumentó en 22% para automóviles de 4 cilindros, y 20% para los de 6 y 8 cilindros.

En esa ocasión no les importó que la inflación esperada para el siguiente año era de entre 4 y 5%; tampoco se puede considerar como ajuste ya que la inflación de 1994 fue de tan sólo 7.05%.

Estos sí fueron incrementos y los representantes priístas en esa ocasión no dijeron que eso significaba una verdadera carga excesiva para los contribuyentes; tampoco exigieron que los incrementos se ajustaran a la inflación proyectada para el 95, como ahora lo hacen. Esto demuestra una vez

más la incongruencia y demagogia que acostumbran estos compañeros en su actuar y que estos diputados lo único que pretenden es desprestigiar al gobierno democrático del PRD en esta capital, a través de calumnias y mentiras.

También quisiera recordarle a los compañeros diputados del PRI que para 96 aparte del ajuste del 15% a los impuestos y tarifas, se incrementó la tarifa del transporte en 150%, al pasar de 40 centavos a un peso. En esta ocasión no lo consideraron una carga excesiva para los capitalinos.

A los funcionarios y representantes de este partido no les importó el deterioro en los ingresos de los habitantes, producto de la crisis provocada por quien prometió bienestar para las familias mexicanas y decidieron incrementar las tarifas del Metro, tren ligero y trolebús.

En esa ocasión los representantes del tricolor, como lo han hecho en el Congreso de la Unión y en los Congresos de los Estados, cumplieron fielmente con la función de sumisión que han tenido al Ejecutivo, que es de su mismo partido y con su voto avalaron incrementos que lastimaban la economía familiar de millones de capitalinos.

Por otra parte, quisiera preguntarle a los diputados del Partido Revolucionario Institucional si no fuera carga excesiva para los contribuyentes el aumento del IVA de 10 a 15%, en donde uno de sus destacados compañeros de partido gozó de este golpe a los bolsillos de los mexicanos, como lo pudimos apreciar a través de la famosa "Roque-señal".

También quisiera preguntarles si los altos precios de la gasolina, que encarecen los bienes y servicios que demandamos a diario, no han representado una carga excesiva; si la deuda adquirida por el Fobaproa, la cual requerirá 60 mil millones de pesos para el próximo año, que es exactamente con lo que contará el gobierno capitalino para el año 2000, para prestar y ampliar los servicios, no es una carga excesiva para los contribuyentes. Claro que es una carga excesiva, ya que con los impuestos de millones de mexicanos se pagarán los adeudos de los banqueros y empresarios de este país, esto a costa de los beneficios implica que se dejarán de prestar servicios y apoyos por el mismo monto a millones de mexicanos.

Desde nuestro punto de vista, el Ejecutivo ha hecho y plantea hacer lo que está en sus manos para aumentar los ingresos del Distrito Federal, a través de la actualización y ampliación de los padrones de contribuyentes, desalentando la evasión fiscal, buscando la consolidación del sistema cartográfico del Distrito Federal para instrumentar el programa de actualización de valores catastrales, lo que permitirá calcular el impuesto predial sobre el valor fiscal real y, lo más importante, ha utilizado los recursos públicos de una manera racional, responsable y en beneficio de los contribuyentes, evitando los gastos suntuosos que se han

dado en las administraciones anteriores, como son los altos aguinaldos, bonos y gastos de viajes y comidas.

A través de la Ley de Ingresos se pretende obtener recursos hasta por un total de 59 mil 6 millones de pesos, lo que representa un incremento del 33% con respecto al cierre previsto para 1999, recursos que se orientarán fundamentalmente a satisfacer las necesidades primordiales de los habitantes de esta gran ciudad.

Entre los beneficios destacan los siguientes:

- Se proponen incrementos diferenciados en las principales contribuciones de la ciudad, lo que conlleva a beneficiar principalmente a aquellos sectores más desprotegidos y carentes de recursos económicos.

Con esta ley se beneficia a más de 1 millón 200 mil contribuyentes, ya que se otorga una reducción sobre el pago del impuesto predial a contribuyentes ubicados en los rangos A, B, C y D, quienes sólo pagarán el 91.06% de la tarifa de 1999, esto con la finalidad de no afectar la economía de los mismos y que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, debido al cobro excesivo de derechos por el uso y suministro de agua que al pasar del esquema de pago de cuota fija al de servicio medido durante los años de 98 y 99 se convirtió en un problema grave en algunas zonas de la ciudad, principalmente en las que se encuentran en las colonias catastrales, 0, 1, 2, 3 y 8.

La ley en discusión propone otorgar beneficios para que los contribuyentes paguen cuotas en la medidas de sus posibilidades y según su consumo, sin que ello vaya en detrimento de las finanzas de la ciudad, es por ello que se propone que el pago bimestral por el servicio de suministro del vital líquido se realice a través de la modalidad de cuotas fijas máximas.

- La Ley de Ingresos resalta los principios constitucionales de justicia, equidad y proporcionalidad de las contribuciones, consagrados en el artículo 31, fracción IV, toda vez que la ley al establecer que aquellos usuarios que no rebasen el consumo de 30 metros cúbicos de agua por bimestre se verán beneficiados con una reducción en el pago del mismo.

- Debido a los problemas económicos que han impactado fuertemente a nuestra ciudad y especialmente a los contribuyentes de escasos recursos, dañando con ello la capacidad de pago de sus obligaciones fiscales, la presente ley pretende apoyar a los contribuyentes de las colonias catastrales, 0, 1, 2, 3 y 8 que por estas razones tienen adeudos en el pago de los derechos por el suministro de agua.

Asimismo, con la finalidad de facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus contribuciones, la ley incorpora a su

texto una cuota máxima diferenciada, según la colonia catastral en la que se encuentren ubicados.

Es por esto, entre otros beneficios, que el Partido de la Revolución Democrática aquí en la Asamblea, la fracción de mi partido va a votar a favor del dictamen que presentan hoy las Comisiones Unidas, de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Con qué objeto, señor diputado?

EL C. DIPUTADO ALEJANDRO VAZQUEZ ENRIQUEZ (Desde su curul).- Para alusiones de partido.

LA C. PRESIDENTA.- Se concede el uso de la palabra, para alusiones de partido al diputado Alejandro Vázquez Enríquez.

EL C. DIPUTADO ALEJANDRO VAZQUEZ ENRIQUEZ.- Con su permiso, señora Presidenta.

Mire usted, el diputado que me antecedió en el uso de la palabra demuestra un conocimiento muy irregular y muy deficiente sobre las finanzas y los problemas nacionales relacionados con la Administración Pública.

Le debo recordar, en primer lugar, que aquí estamos en este momento discutiendo las finanzas y la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el año 2000.

Lo que yo traté de explicar en mi intervención anterior es muy sencillo y me voy a permitir hacerle algunos señalamientos y tratar de explicarle cuál es la verdadera situación de las finanzas públicas en el Distrito Federal, y para ser más preciso, en qué estado van ustedes a dejar las finanzas públicas en el Distrito Federal cuando termine este período de 3 años a finales del año 2000.

El punto fundamental es que los ingresos propios que están constituidos fundamentalmente por los impuestos, por los productos, por las contribuciones, etcétera, han venido disminuyendo claramente durante estos 2 años de administración perredista y por lo que se plantea en la iniciativa de ley para el año 2000 se confirma esta tendencia. Aquí tengo algunas estadísticas que nos permiten comprobar esto. Los ingresos propios han disminuido su participación a finales de 97 al año 2000 o por lo menos con lo que se programa al año 2000, del 28.2%, al 21.7%, ahí hay un debilitamiento de las finanzas públicas en el Distrito Federal. Este debilitamiento de las finanzas públicas ha venido a ser sustituido por dos fuentes alternativas: una de ellas es una mayor dependencia con el Gobierno Federal a través de las transferencias y participaciones que éste hace al Distrito Federal, independientemente de que es efectivamente cierto

que el coeficiente de distribución ha disminuido, en la práctica se ha recibido una mayor cantidad de estos recursos provenientes del sector público, del sector federal; y además se ha aumentado la participación de la deuda en los ingresos totales del Distrito Federal. Esto quiere decir que se disminuyen los ingresos propios en forma relativa y aumentan las participaciones y transferencias del Gobierno Federal, a la vez que aumenta la deuda, las finanzas públicas en el Distrito Federal son más débiles, eso no lo puede negar nadie.

Ustedes parecen hacer finanzas públicas de una manera muy sencilla: en primer lugar tratan de ubicar el mayor nivel, el mayor por ciento llamándole un ajuste posible; lo han encontrado al aplicar o al tratar de aplicar lo que está en el Código Financiero y una vez que encuentran esa mayor tasa de ajuste la aplican directamente; luego, sus conciencias entran en crisis y entonces sienten que tienen que redistribuir el ingreso y a partir de ese factor de ajuste empiezan a hacer arbitrariamente, sin ninguna base técnica, una serie de distribuciones, una serie de cambios fundamentalmente en el predial y en el agua, asumiendo que haciendo estas distribuciones están ustedes contribuyendo a una mejor distribución del ingreso. Eso en principio podría ser cierto, pero en un sentido estricto no lo es; no lo es.

LA C. PRESIDENTA.- Señor diputado, se le recuerda que se venció su tiempo.

EL C. DIPUTADO ALEJANDRO VAZQUEZ ENRIQUEZ.- Estoy por terminar, señora Presidenta.

No lo es. Y deben ustedes entender que la distribución del ingreso, a la que no se opone el PRI, a la que no nos oponemos en el sentido de ayudar a los más necesitados, no se hace...

LA C. PRESIDENTA.- Señor diputado, se le recuerda, se le venció su tiempo.

EL C. DIPUTADO ALEJANDRO VAZQUEZ ENRIQUEZ.- Concluyo, señora Presidenta.

No se hace simplemente porque a algún diputado se le ocurrió determinar una determinada proporción para aplicársela a determinado sector de la población.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Se le concede el uso de la palabra a la diputada Raquel Sevilla, hasta por 20 minutos, para razonar su voto.

Se solicita al público asistente en los pasillos y galerías, haga favor de guardar silencio y escuchar a la oradora.

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Con su permiso, señora Presidenta.

Este dictamen que se pone a consideración no cuenta en esencia con aportaciones que benefician a la población capitalina. Lo menos que se le puede decir de la Ley de Ingresos para el año 2000 es que, que aprobará la mayoría, que tiene una tendencia alcista de las contribuciones que pagan los ciudadanos, y no se puede entender de otra forma la pretensión de incrementar diversos impuestos por encima de la inflación y de la alza a los salarios mínimos, además de la poca consideración que se tiene a los bolsillos de los ciudadanos.

Este dictamen corrobora por enésima ocasión la falta de congruencia del PRD que durante la campaña electoral de 1997 vendió la idea de que no subirían impuestos y también de que se eliminaría el cobro de la verificación vehicular, entre otras cosas. Es decir, esto sí es pura demagogia.

No se puede estar en contra de medidas que repercutan en beneficio de la población, pero es evidente que la hoy Ley de Ingresos que se pretende y se discute, esconde muchas cuestiones que van en detrimento de la economía familiar de los capitalinos.

Por ejemplo, se anuncia con bombo y platillo que la tarifa del Metro se mantiene en 1.50, pero no se le dice a la gente las enormes cantidades de dinero que vía subsidio se le destinarán y se le han destinado a este medio de transporte, como tampoco se ha manejado los miles de millones de pesos que se perdieron en esta paraestatal por no haber sido respetados los espacios...

LA C. PRESIDENTA.- Se solicita al público asistente guarde orden y silencio para escuchar a la oradora. Solicitamos respeto a la oradora.

LA C. DIPUTADA MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Vuelvo a repetir, señora Presidenta.

Se anuncia con bombo y platillo que la tarifa del Metro se mantiene en 1.50, pero no se le dice a la gente las enormes cantidades de dinero que vía subsidio se le destinarán a este medio transporte. Esta es una medida que se manejaba en 1929 en un marco económico keinesiano, aquellos que leyeron alguna vez a Lord Keynes.

No ha entendido el PRD que la tendencia internacional es el adelgazamiento del Estado y no a la inversa, no un Estado obeso.

Por otra parte, jamás se aclaró el destino final que tuvo el recurso que fue invertido en la Banca Comercial y que generó por lo menos por intereses, alrededor de 6,000 millones de pesos, violando el artículo 73 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es evidente que si el Gobierno de la Ciudad fuera congruente y honesto aplicaría estos 6,000 millones al gasto público sin

necesidad de incrementar los impuestos; lo grave es que este dinero generado por intereses bancarios no tiene ninguna forma de ser fiscalizado; por lo que no es difícil prever su utilización en actividades electorales en el año 2000.

Ya que se meten al discurso del ámbito federal, habría que recordarles que no se vio a ninguno de sus diputados federales defender a los Estados pobres que aparentemente ganaron, como es el caso de Tlaxcala, como es el Estado de Baja California Sur, como es el Estado de Zacatecas, porque es obvio y evidente que el manejo que ustedes quieren tener en la base a la Ley de Ingresos es eminentemente electoral.

El discurso de la mayoría para justificar la propuesta del gobierno en materia de ingresos, simplemente no tiene un sustento sólido. Señalan de forma amañada los rubros en los que se incrementan las tarifas o en los que no se cobra algún servicio público. Por ejemplo, el alumbrado público, efectivamente esta medida es vista con buenos ojos por parte de la población que no tiene que pagar por este servicio; pero lo que no se menciona es la cantidad de usuarios de zonas residenciales, de un alto nivel económico, que también se beneficiarán con esta medida; es lo mismo que pasa con el Barzón. Hablan de aquella gente, inclusive traen a la gente a caballo, la Jefa de Gobierno sale a recibirlos, los saluda, les da el besito, las buenas noches y todo, pero no dice la cantidad de gente que sí tenía recursos y que abusó también y que fue con cargo al IPAB que tanto ataca el PRD.

Cualquier ciudadano entiende que el pago de impuestos debe de ser destinado por el gobierno para la introducción, mantenimiento y conservación de los servicios públicos. Pero lo que vemos en toda la ciudad, son unos muy deficientes servicios: colonias enteras sin drenaje, sin agua potable, sin alumbrado público, sin pavimento, etcétera. Habrá que decirle a estos ciudadanos que ellos también tendrán que pagar por una y por otra vía los incrementos que se sugieren en esta Ley de Ingresos.

La política del chantaje y del regateo que lleva a cabo el gobierno local con su contraparte federal, simplemente demuestra la desesperación de esta administración por no saber cómo ejercer adecuada y legalmente el recurso generado con las contribuciones de los ciudadanos.

Es incongruente que se pretenda aumentar los impuestos cuando ha quedado demostrado que en primer lugar el gobierno tiene alrededor de 6,000 millones de pesos generados por intereses bancarios.

En segundo lugar, cuando es manifiesta la incapacidad para gastar dichos recursos.

Esto último se dio en este año, en que no supieron cómo aplicar los 1700 millones que adquirieron por la vía de la deuda pública. Ahora habrá que esperar a ver los resultados que entregaron a

la ciudad con la contratación de 6 mil millones de deudas que fueron autorizados por el Congreso de la Unión.

Básicamente una de las razones o primordialmente por las que el Distrito Federal ha visto disminuir sus ingresos propios y por concepto de participación, es el vinculado a la migración poblacional.

Esto es, migran por mejoría socioeconómica y por los aumentos en la renta de la vivienda y por los cambios en los usos del suelo, esto último se plantea en el programa general de desarrollo urbano, y lo antes expuesto ha obligado al nuevo gobierno, como así le llama al gobierno democrático que a veces me parece que seguimos en la dinámica de aprender a jugar a las tablas de Iván Pávlov, los reflejos condicionados, les tocan las campanas y jadean.

Todas las veces que suben dicen: "y es que el nuevo gobierno y es que el gobierno democrático y el nuevo gobierno" y el gobierno democrático no sabe nada. Lo antes expuesto a obligado a este nuevo gobierno democrático a elevar, a aumentar o mejor dicho a actualizar las cuotas del impuesto predial y con ello garantizar la suficiencia de los recursos propios. Sin embargo, no promueve que la población nativa de la capital, siga radicando en la ciudad que los vio nacer, al no fomentar el empleo y los mejores salarios y sobre todo estímulos para quienes menos tienen. Por ello, habría que proponer, un descuento hasta del 40% en impuesto predial, para aquellas personas que paguen en los 3 primeros meses del año. Eso sí lo hace un gobierno democrático. Los beneficiados serían pensionados, jubilados, viudos, discapacitados, personas de la tercera edad, madres solteras, personas mayores que se identifiquen con la credencial de la senectud y algunos sectores jubilados, incluyendo a los del ISSSTE. Este descuento del 40% se aplicará a todas las personas que acrediten estas condiciones y sobre todo que comprueben su residencia en el Distrito Federal, más allá de que reciben hasta 3 salarios mínimos al mes y el valor catastral de la propiedad no deberá exceder del millón de pesos o ser propiedad de interés social. Para muestra basta un botón: esto se está realizando en los municipios como Naucalpan, donde realmente hicieron una aplicación democrática de lo que es una ley de ingresos que beneficie a la población y no el aborto y el insulto a la sociedad que ustedes vienen a plantear de que paguen menos los que menos tienen y más los que más tienen.

Me parece que nuevamente les volvió a fallar la tabla matemática; me parece que ni siquiera fueron capaces otra vez de sacar ya no la media del porcentaje que paguen los más pobres, sino la media intensión que verdaderamente esos pobres sean beneficiados.

Ayer, una servidora, y está la versión estenográfica, en Comisiones Unidas hice un planteamiento de que se sacara un análisis serio sobre el 35.1% de la población que vive

marginalmente y principalmente en la delegación Gustavo A. Madero y la delegación Iztapalapa; ayer rechazó esta propuesta la mayoría perredista y hoy con el mayor de los cinismos va y se presenta con una propuesta que ni siquiera habían pensado a una conferencia de prensa.

Afortunadamente también había medios ayer, afortunadamente existe una versión estenográfica. Compañeros otro de los buenos deseos de año nuevo es que no sean plagarios de las ideas de los demás. Que dejen de ser soberbios y que asuman su falta de capacidad y de conocimiento en materia de ingresos.

Si tienen voluntad, si verdaderamente quieren esta ciudad, asuman con responsabilidad que si el gobierno democrático no quiere aplicar una política económica electoral, pues tendrán que asumir como lo hicieron en Acción Nacional en el municipio de Naucalpan, un descuento a los 3 primeros meses del 40%, vamos a ver que tan democráticos son y si realmente quieren que los que menos tienen paguen menos.

LA C. PRESIDENTA.- Antes de proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general, se pregunta a los ciudadanos diputados si habrán de reservarse algún artículo para ser discutido en lo particular.

Diputado Miguel Angel Peláez y diputado Juan González. Si son tan amables de darles el micrófono, diputado Miguel Angel Peláez.

EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL PELAEZ GERARDO (Desde su curul).- La fracción XI del artículo 1º y el artículo 4º.

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Juan González.

EL C. DIPUTADO JUAN GONZALEZ ROMERO (Desde su curul).- El artículo 8º.

LA C. PRESIDENTA.- Se pregunta si algún otro ciudadano diputado o diputada quisiera reservarse algún otro artículo. En consecuencia, proceda la secretaría a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados en lo particular.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados en lo particular.

Se solicita a los ciudadanos diputados, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Manuel Minjares, abstención.

Pablo Jaime Jiménez, abstención.

Hernández Labastida Miguel, abstención.

Margarita Saldaña, abstención.

Manuel Aguilera, en contra.

Levín Coppel, en contra.

Rivera Domínguez, en contra.

De Garay, en contra.

Luna Parra, en contra.

Alejandro Vázquez, en contra.

Martínez Parra, a favor.

Cárdenas Pérez, en pro.

Ricardo Martínez, en pro.

Virginia Jaramillo Flores, en pro.

Francisco Chiguil, en pro.

Juan González, a favor.

Ricardo Molina, a favor.

Ernesto Chávez, a favor.

Miguel Angel Peláez, a favor.

José Luis Benitez, en contra.

Castellanos Cortés, en contra.

García Rocha, a favor.

René Arce, a favor.

Alfredo Hernández, a favor.

Francisco Ortiz, a favor.

David Sánchez, a favor.

Eliab Mendoza, a favor.

Ignacio Ruiz, a favor.

Márquez Franco, en pro.

Hipólito Bravo, en pro.

Pichardo Mendoza, a favor.

Armando Salinas Torre, abstención.

Daniel Martínez, a favor.

Roberto Rico, a favor.

Martí Batres, a favor.

Antonio Padierna, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Javier Serna, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Octavio West, en contra.

Soto Camacho, a favor.

Angeles Correa, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Rafael López de la Cerda, a favor.

Sevilla Díaz, en contra.

Javier Hidalgo, a favor.

Alejandro Rojas, a favor.

Miguel Bortolini, a favor.

Jesús Toledano, en contra.

Vicente Cuéllar, a favor.

Ortiz Haro, en contra.

Hiroishi Suzuki, abstención.

Jesús Galván, abstención.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto? Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 38 votos a favor, 12 votos en contra, 7 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2000 en lo general y los artículos no reservados en lo particular.

Para su discusión en lo particular han sido reservados los siguientes artículos: artículo 1º fracción XI, artículo 4º, artículo 8.

En consecuencia y para referirse a los artículos 1º fracción XI y artículo 4º, tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Angel Peláez Gerardo.

EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL PELAEZ GERARDO.- Con su permiso, diputada Presidenta.

Modificaciones que vamos a proponer en relación a la fracción XI del artículo 1º.

En el numeral 2 dice: "Transferencias del gobierno federal 2 mil 198 millones 600 mil". Debe decir: "Transferencias del gobierno federal 2 mil 939 millones 300 mil".

Y en el numeral 2, inciso b), otras transferencias, dice: "2-B otras transferencias, 25 millones, total 53 mil 6 millones". Debe decir: "2-B otras transferencias, 765 millones 700 mil, a) convenio con SAGARH 25 millones, programa de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas 740 millones 700 mil, total 53 mil 746 millones 700 mil pesos", ello como resultado de las medidas adoptadas por el Congreso de la Unión, en torno a la creación de un nuevo fondo denominado programa de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas y el acuerdo con la SAGARH.

En relación al artículo 4º dice: "Los propietarios o poseedores de inmuebles de uso habitacional en el Distrito

Federal cuyo valor catastral al 1° de enero del año 2000 se ubique dentro de los rangos A, B, C y D, de la tarifa del impuesto predial prevista en el artículo 152 del Código Financiero del Distrito Federal y se encuentren inscritos en el padrón catastral, pagarán el 97.1% de la tarifa correspondiente al año 1999, hasta en tanto no varíen las características catastrales de los mismos o bien que se otorgue su uso o goce temporal”.

Debe decir: “Artículo 4°. Los propietarios o poseedores de inmuebles de uso habitacional en el Distrito Federal cuyo valor catastral al primero de enero del año 2000 se ubique dentro de los rangos A, B, C y D, de la tarifa del impuesto predial prevista en el artículo 152 del Código Financiero del Distrito Federal y se encuentren inscritos en el padrón catastral, pagarán el 91.06% de la tarifa correspondiente al año 1999, hasta en tanto no varíen las características catastrales de los mismos o bien que se otorgue su uso o goce temporal”.

Esas son las propuestas, Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Están a discusión las propuestas de modificación a los artículos reservados por el diputado Miguel Angel Peláez Gerardo.

Se abre el registro de oradores.

¿Oradores en contra?

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos que fueron reservados por el diputado Miguel Angel Peláez Gerardo.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos reservados por el diputado Miguel Angel Peláez Gerardo.

Se solicita a los ciudadanos diputados, en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión “en pro” o “en contra”.

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer al anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Manuel Minjares, abstención.

Margarita Saldaña, abstención.

Jesús Galván, abstención.

Hernández Labastida Miguel, abstención.

Hiroishi Suzuki, abstención.

Pablo Jaime Jiménez, abstención.

Manuel Aguilera, a favor.

Levin Coppel, a favor.

Rivera Domínguez, a favor.

De Garay, a favor.

Luna Parra, también a favor.

Alejandro Vázquez, a favor.

Ortiz Haro, a favor.

Toledano, a favor.

Martínez Parra, a favor.

Cárdenas Pérez, en pro.

David Sánchez, a favor.

Ricardo Martínez, a favor.

Juan González, a favor.

Ricardo Molina, a favor.

Ernesto Chávez, a favor.

Francisco Chiguil, en pro.

Roberto Rico, en pro.

Antonio Padierna, a favor.

Virginia Jaramillo Flores, en pro.

García Rocha, a favor.

Martí Batres, igual que Javier Hidalgo.

Alfredo Hernández, claro que igual que Hidalgo.

Ortiz Ayala, a favor.

Eliab Mendoza, a favor.

Miguel Bortolini, a favor.

Ignacio Ruiz, a favor.

Márquez Franco, en pro.

Hipólito Bravo, a favor.

A favor, Martínez Enríquez.

Pichardo Mendoza, a favor.

José Narro Céspedes, a favor.

Alejandro Rojas, a favor.

Miguel Angel Peláez, a favor.

Vicente Cuéllar Suaste, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Javier Serna, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Angeles Correa, a favor.

Sevilla Díaz, en pro.

Rafael López de la Cerda, a favor.

Javier Hidalgo, igual que Martí Batres y Alfredo Hernández, es decir, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

René Arce, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva:

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 48 votos a favor, 0 votos en contra, 6 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- Por lo tanto se aprueba la propuesta de modificación a los artículos reservados por el diputado Miguel Angel Peláez.

En consecuencia y para referirse al artículo 8º, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan González Romero.

EL C. DIPUTADO JUAN GONZALEZ ROMERO.- Con su permiso, Presidenta.

He solicitado la reserva del artículo 8º del dictamen de la iniciativa de Ley de Ingresos para el año 2000 con el objeto de que el mismo en su aplicación realmente beneficie aún más a los contribuyentes a los cuales está dirigido.

El artículo en comento establece varios requisitos a cumplir por parte de los contribuyentes que desean regularizar su situación fiscal por los derechos por suministro de agua atrasados.

La importancia de precisar claramente el alcance de los requisitos garantiza que el presente artículo sea realmente aplicable y mejor aún, efectivamente beneficie y resuelva un problema que se ha venido arrastrando desde 1996.

En consecuencia, esta Asamblea Legislativa tiene hoy la oportunidad de establecer en la Ley de Ingresos un artículo específico para solucionar los atrasos de miles de contribuyentes y por lo tanto responder a los intereses de los ciudadanos que representamos.

Suprimiendo el requisito 4, recorriendo el 5 en su lugar y modificando su redacción, la modificación al artículo 8º que someto a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa queda de la siguiente manera:

“Los contribuyentes por derechos por suministro de agua en sistema medido en uso doméstico y mixto de las colonias catastrales 0, 1, 2, 3 y 8 podrán regularizar sus adeudos de 1995 a 1999 de acuerdo a la cuota máxima diferenciada por bimestre que le corresponda según la tabla del artículo 5º de esta Ley de Ingresos, exentándose los recargos y las sanciones, para lo cual los usuarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1.- El contribuyente deberá acudir ante la autoridad fiscal dentro del plazo establecido en el siguiente inciso para solicitar la regularización de su situación fiscal.

2.- El pago se tendrá que realizar a más tardar al término del segundo bimestre del año 2000.

3.- El pago deberá cubrir el monto total de los adeudos en una sola exhibición; y

4.- Los beneficiarios del presente artículo que no tengan medidor instalado deberán solicitar su instalación previo a la regularización de sus adeudos”.

Entrego esta reserva por escrito.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de modificación al artículo 8º reservado por el diputado Juan González Romero. Se abre el registro de oradores.

Oradores en contra.

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de la propuesta presentada al artículo 8º que fue reservado por el diputado Juan González Romero.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos reservados por el diputado Juan González Romero.

Se solicita a los ciudadanos diputados, en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión “en pro” o “en contra”.

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Manuel Minjares, las propuestas de la diputada Lucero Márquez en voz del diputado Juan González Romero, abstención.

Jesús Galván, abstención.

Hernández Labastida Miguel, abstención.

Hiroishi Suzuki, abstención.

Pablo Jaime Jiménez, abstención.

Margarita Saldaña, abstención.

Manuel Aguilera, en pro.

Rivera Domínguez, a favor.

De Garay, a favor.

Luna Parra, a favor.

Alejandro Vázquez, en pro.

Ortiz Haro, a favor.

Jesús Toledano, en pro.

Martínez Parra, a favor.

Cárdenas Pérez, en pro.

David Sánchez, a favor.

Juan González, a favor.

Ricardo Martínez, en pro.

Ricardo Molina, a favor.

Ernesto Chávez, a favor.

Miguel Ángel Peláez, a favor.

René Arce, a favor.

Virginia Jaramillo, en pro.

Antonio Padierna, a favor.

García Rocha, a favor.

Roberto Rico, a favor.

Francisco Chiguil, a favor.

Martí Batres, a favor.

Sevilla Díaz, en pro.

Ortiz Ayala, a favor.

Alfredo Hernández a favor.

Eliab Mendoza, a favor.

Miguel Bortolini, a favor.

Ignacio Ruiz, en pro.

Márquez Franco, en pro.

Hipólito Bravo, en el mismo sentido que mi amigo Ernesto Chávez.

Daniel Martínez, a favor.

Pichardo Mendoza, en el mismo sentido del diputado Juan González.

Alejandro Rojas, a favor.

José Narro Céspedes, a favor de la propuesta del diputado Juan González.

Vicente Cuéllar, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Javier Serna, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Angeles Correa, a favor.

Rafael López de la Cerda, a favor.

Javier Hidalgo, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Armando Salinas Torre, abstención.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente:

47 votos a favor, 0 votos en contra y 7 abstenciones

LA C. PRESIDENTA.- Por lo tanto se aprueba la propuesta de modificación al artículo 8 reservado por el diputado Juan González Romero.

En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto de ley de ingresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal del año 2000 en lo general y en lo particular, con las propuestas aprobadas.

Remítase a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, para los efectos constitucionales conducentes.

El Siguiente punto del orden del día, es la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2000.

Esta Presidencia informa que ha recibido un oficio de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, solicitando se les dispense el trámite a que se refiere el artículo 38 fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sírvase la secretaría dar lectura a la solicitud de referencia.

LA C. SECRETARIA.- *Diputado René Baldomero Rodríguez, Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Primera Legislatura. Presente.*

A través de este medio, por acuerdo de los miembros de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública, en sus sesión conjunta de fecha 29 de diciembre de 1999 y debido al plazo con que debe repartirse todo dictamen para su aprobación en el pleno, como lo establece en el artículo 38 fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea, nos permitimos solicitarle someta a la consideración del pleno, una dispensa en el cumplimiento de dicho plazo, a fin de estar en posibilidades de discutir y en su caso, aprobar el dictamen de proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal del 2000 aprobado en el seno de estas comisiones el 29 de diciembre de año en curso.

Atentamente; diputado Ricardo Martínez Atala, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; Francisco Chiguil Figueroa, Presidente de la Comisión de Hacienda;

Miguel Angel Peláez Gerardo, Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; Miguel Bortolini Castillo, Secretario de la Comisión de Hacienda.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, proceda la secretaría a preguntar al pleno de la Asamblea en votación económica si se dispensa al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública, el trámite a que se refiere el artículo 38 fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta al pleno si se dispensa el trámite a que se refiere el artículo 38 fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al dictamen de referencia.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Se dispensa el trámite.

LA C. PRESIDENTA.- Consulte la secretaria en votación económica, si se dispensa la lectura del mismo y se somete a discusión de inmediato.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura y se somete a discusión de inmediato.

Los que estén porque se dispense la lectura, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Dispensada la lectura señora Presidenta.

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 122, Apartado C, Base Primera, Fracción V, Inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 50 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 18, 22, y 23 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en forma conjunta,

someten a la consideración, y en su caso, aprobación por esta Honorable Asamblea, el siguiente Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2000, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 67, fracción XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Jefa de Gobierno turnó el día 30 de noviembre de 1999 a ésta H. Asamblea Legislativa, para su análisis y en su caso aprobación, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2000

Con fecha de 1º de diciembre próximo pasado, y con fundamento en el Artículo 50 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 67 primer párrafo del Reglamento para su Gobierno Interior, fue turnado a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2000 para, que en forma conjunta, procedieran a su análisis y dictamen.

Se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en forma conjunta, con el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, el día 17 de diciembre de 1999, para obtener información adicional sobre el proyecto, asimismo, éstas Comisiones sostuvieron una sesión permanente, del día 22 al 29 de diciembre de 1999, con el objeto de analizar, discutir y dictaminar al respecto.

De la revisión de la exposición de motivos del Proyecto se identificaron las líneas generales sobre las cuales se basa el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2000 que presenta el Ejecutivo a ésta H. Asamblea, mismas que se reseñan a continuación:

El Proyecto de Presupuesto de Egresos establece como propósito dar continuidad a los objetivos del Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 1998-2000 al avanzar hacia lo siguiente: Impulsar el proyecto de una ciudad democrática, segura y justa, socialmente incluyente, sustentable y con un gobierno responsable y eficiente, mantener y ampliar la capacidad para atender las demandas expresadas por la ciudadanía en materia de seguridad pública, desarrollo social, infraestructura urbana, servicios públicos y fomento de un desarrollo económico sustentable.

Dicho proyecto define los criterios de gasto a los que el Gobierno del Distrito Federal deberá sujetarse para la ejecución de sus programas. Además, toma en cuenta las

previsiones de ingreso estimados para el año 2000, así como el monto de endeudamiento neto solicitado al Honorable Congreso de la Unión.

Se menciona en el Proyecto que en el entorno macroeconómico nacional se espera un crecimiento de la economía, principalmente por el favorable comportamiento que durante el año mostraron las actividades relacionadas con los sectores financiero y exportador que han sido los que han registrado un mayor dinamismo en los últimos años. Así, se espera que para el cierre de 1999, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional registre un crecimiento de 3.4%. Este resultado, debe valorarse tomando en consideración el retroceso que sufrió el desarrollo de la economía nacional a partir de la crisis de 1994, que originó una disminución de 7.0% del PIB en 1995, lo cual implica que el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto entre 1994 y 1999 ha sido del 2.4%.

Se destaca que el avance macroeconómico no se ha traducido en una mejoría de las condiciones de vida de la mayoría de la población, lo cual se observa en los niveles de empleo y salario alcanzados durante los últimos años. De acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de los 39.5 millones de personas que en 1998 buscaron empleo, 38.6 millones lo encontraron, pero, de esta cantidad, 26.5 millones se colocaron en actividades informales, tales como ambulante, servicio doméstico y producción artesanal. Esto significa que de cada 10 personas empleadas en 1998, siete lo estaban en el sector informal. Asimismo, se señala que aunque existen pocos estudios respecto a este ámbito, los disponibles indican que los trabajadores que lo conforman carecen de prestaciones sociales y, en ocasiones, sólo reciben una retribución en especie.

Se menciona en el Proyecto que en cuanto al sector formal, en los últimos años se ha observado un decremento de las remuneraciones reales; el Salario Promedio de Cotización, por ejemplo, registró una caída acumulada entre 1994 y 1998 de 25.1%, mientras que el Salario Mínimo General, en el mismo período, registró una pérdida de 20.0%. La reducción de las percepciones reales de los trabajadores, así como el incremento del empleo informal en los últimos años, denota la existencia de una distribución inequitativa del ingreso.

De igual manera, en el Proyecto se destaca que la evolución macroeconómica nacional se ha traducido, en el Distrito Federal, en un crecimiento más alto que en el resto de las entidades federativas, en virtud de que en esta capital se concentra la mayor parte de las actividades industriales, financieras y de servicios del país. Este incremento, debe también matizarse, pues está inscrito en el contexto de estancamiento en que entró la economía nacional en 1994. Así, se estima que para 1999 la participación del Distrito Federal en el PIB nacional será de 24.7%, lo cual implica un crecimiento real en la

generación de valor agregado de 4.9%. No obstante, el crecimiento promedio anual del PIB del Distrito Federal entre 1994 y 1999 fue de 4.3%.

En el Proyecto también se subraya que la evolución de las variables económicas del Distrito Federal está condicionada por el desarrollo macroeconómico nacional, puesto que el Gobierno de la Ciudad no cuenta con instrumentos de política económica propios, que le permitan contrarrestar completamente los efectos del comportamiento de la economía nacional. Por ello, a través de sus políticas de ingreso y gasto públicos, el Gobierno del Distrito Federal sólo puede contribuir a atemperar una parte de estos efectos.

En este contexto, el Gobierno de la Ciudad, al igual que en los dos ejercicios anteriores, durante el año 2000 proseguirá con el otorgamiento de subsidios y apoyos fiscales a los sectores menos favorecidos de la sociedad, a las pequeñas empresas, a jubilados, pensionados, discapacitados y personas de la tercera edad; la prestación de servicios de asistencia social a la población de escasos recursos mediante cuotas accesibles; el manejo de una política tributaria que, al no crear nuevos gravámenes y únicamente actualizar las cuotas y tarifas de las contribuciones, coadyuva a mantener el poder adquisitivo de los contribuyentes. Estas medidas, aunque han implicado un sacrificio de los recursos que podrían obtenerse si se incrementaran las tarifas y cuotas en un porcentaje mayor al de la inflación, han permitido fortalecer la recaudación de recursos propios, al ampliarse el padrón de contribuyentes e incidiendo favorablemente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

En este marco, para el año 2000 se espera que los ingresos propios asciendan a 32,122.5 millones de pesos, el 51.8% de los ingresos netos totales a obtener (62,006.0 millones de pesos).

En el Proyecto, igualmente se señala que por concepto de Participaciones en Ingresos Federales, se estima una obtención de recursos por 18,084.9 millones de pesos. Los ingresos que recibe el Distrito Federal en este rubro han experimentado una caída constante en los últimos años, con motivo de la continua reducción del coeficiente efectivo de participación del Distrito Federal en el Fondo General de Participaciones, a partir de las modificaciones al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que adoptó un esquema redistributivo en lugar del resarcitorio que tuvo hasta 1990, esquema que ha resultado desfavorable a la Ciudad de México, pues, mientras año con año incrementa su contribución al Producto Interno Bruto Nacional, su participación en los ingresos federales disminuye. El Gobierno de la Ciudad seguirá trabajando en las propuestas conducentes a modificar el esquema de distribución de Participaciones en Ingresos Federales, con

el objeto de obtener una retribución acorde a la participación de la entidad en la producción del país.

Del Proyecto se deriva que durante el año 2000 se prevé la obtención de 2,198.6 millones de pesos por concepto de Transferencias del Gobierno Federal, como resultado de la participación de la Ciudad de México en sólo tres de los cinco Fondos de Aportaciones Federales, puesto que no recibe recursos del Fondo para la Infraestructura Social y se le excluyó en 1999 del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios. Este hecho implicará para el año 2000 una pérdida de más de mil millones de pesos, por lo que el Gobierno del Distrito Federal promoverá ante las instancias correspondientes la inclusión de la entidad federativa en los fondos mencionados.

El Gobierno de la ciudad formuló una solicitud de autorización al H. Congreso de la Unión, a través del Ejecutivo Federal, para contratar recursos crediticios por 9,000.0 millones de pesos, con el propósito de proseguir con los grandes proyectos de infraestructura hidráulica, social y urbana; de transporte y de mejoramiento del medio ambiente, necesarios para garantizar la viabilidad de la Ciudad de México. Los proyectos de infraestructura hidráulica y transporte, fueron concebidos por administraciones anteriores bajo una perspectiva metropolitana, por lo cual, benefician también a la población del Estado de México, pero son sufragadas únicamente con recursos del Distrito Federal.

El Gobierno de la ciudad, teniendo en cuenta esta situación se propone dar continuidad a los proyectos estratégicos, como la conclusión de la Línea "B" Metropolitana del Metro, la construcción de megaplantas de tratamiento de aguas residuales, la continuación de los Proyectos de Reforestación del Valle de México y de las Sierras de Santa Catarina y de Guadalupe.

En materia de egresos, el Gobierno del Distrito Federal continuará con su política de orientación social del gasto público, con el propósito de atemperar los efectos de la difícil situación económica que ha enfrentado la población de la entidad desde 1994, la cual se ha traducido en mayores demandas de servicios, sobre todo en materia de seguridad pública y procuración de justicia, salud, servicios asistenciales y transporte.

En este contexto, el gobierno de la ciudad destinará al gasto programable el 90.7% del gasto neto total que asciende a un monto de 62,006.0 millones de pesos, es decir casi 91 centavos de cada peso que se erogue se destinará a la atención de los requerimientos de servicios básicos de la población durante el año 2000.

Se destaca en el Proyecto, que la creciente demanda de la ciudadanía para obtener más y mejores servicios públicos,

aunada al cambio en el marco jurídico-político del gobierno de la ciudad, al dejar de ser una dependencia del Gobierno Federal, se ha traducido en una readecuación de la estructura administrativa del Gobierno del Distrito Federal, de manera que éste cuente con instancias propias, capaces de responder con oportunidad y eficiencia a las necesidades de la población. En este marco, se inscribe la creación, del Sistema de Salud del Distrito Federal y el fortalecimiento de las dependencias encargadas del Desarrollo Social, sobre todo para asistir a los sectores más desprotegidos de la población, como son los discapacitados y los niños en situación de calle, así como para impulsar el desarrollo integral de la mujer.

El gobierno de la ciudad, en congruencia con el Programa General de Desarrollo y de conformidad con su capacidad financiera, se compromete con la ciudadanía a continuar y ampliar los servicios públicos que proporciona y el mejoramiento en la calidad de los mismos, y reitera sujetar su política de gasto a criterios de racionalidad, disciplina y austeridad en su ejercicio, así como instrumentar medidas de control y ajuste presupuestal para mantener el equilibrio presupuestal de las finanzas públicas.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos contempla los siguientes objetivos:

- Dar continuidad al proceso de reformas al marco jurídico del Distrito Federal, de tal manera que se cuente con un marco normativo amplio y congruente, que permita fortalecer su autonomía y avanzar en la democratización de la ciudad, mediante la incorporación activa de la sociedad en la propuesta de mecanismos para la toma de decisiones y en la vigilancia del cumplimiento de sus demandas.*

- Avanzar en la integración eficiente de las acciones policiacas de seguridad pública, brindar mayores atribuciones y sistematizar la acción del Ministerio Público, para mejorar la procuración de justicia; e impulsar la profesionalización de los cuerpos de seguridad y justicia, mediante la instrumentación de programas de capacitación.*

- Coadyuvar a la elevación de los niveles de vida de la ciudadanía, mediante la ampliación de oportunidades, particularmente entre los núcleos de población de bajos niveles de ingreso, facilitándoles el acceso a una vivienda digna; mejorar sus niveles nutricionales, a través de la operación permanente de programas de abasto y del otorgamiento de desayunos escolares; impulsar los servicios de salud, mediante la aplicación de medidas de prevención y ampliando la oferta de estos servicios; canalizar recursos suficientes al Programa integral de Mantenimiento de Escuelas; e instrumentar programas sociales que permitan la protección y asistencia de grupos vulnerables.*

· *Impulsar el desarrollo de aquellas actividades que permitan una mayor generación de empleos, privilegiando los apoyos a la micro y pequeñas empresas; llevar a cabo acciones de fomento, promoción y aprovechamiento para la producción agroindustrial; y fomentar la conversión tecnológica en las empresas altamente contaminantes.*

· *Mantener la capacidad de respuesta de este Gobierno para atender y proporcionar los servicios públicos básicos que requiere la población, en materia de agua potable, drenaje, alumbrado público, transporte, y operación de la red vial y de semaforización, así como de mantenimiento de la infraestructura urbana y de servicios existentes.*

· *Impulsar programas de ahorro en el uso de los servicios básicos de energía eléctrica, fotocopiado, teléfono, entre otros, que emplean las dependencias, órganos desconcentrados y entidades en sus procesos operativos, así como de insumos para la operación: combustibles, papelería, mobiliario y equipo de cómputo.*

· *Continuar con el proceso de reestructuración administrativa, con la finalidad de que la ciudadanía cuente con instituciones que posean capacidad técnica y operativa para atender sus demandas y requerimientos de servicios, en los diversos ámbitos de gobierno.*

Para el logro de los grandes objetivos, el Gobierno del Distrito Federal se planteó las siguientes estrategias generales de acción:

· *Fortalecer el proceso de autonomía de la Ciudad de México mediante la propuesta de iniciativa de ordenamientos legales, para atender las demandas expresadas por la ciudadanía en distintos foros.*

· *Orientar la política de gasto público de manera congruente con la disponibilidad de recursos, para mantener la prestación de servicios de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, construcción y mantenimiento de infraestructura educativa y de salud, de urbanización y atención a grupos marginados.*

· *Mantener una política de racionalidad y ajuste presupuestal del gasto corriente en las distintas áreas de la Administración Pública del Distrito Federal.*

· *Privilegiar la conservación y mantenimiento de la infraestructura urbana que debido al uso intensivo a que está sujeta, así lo requiera.*

· *Proseguir con la construcción de obras de infraestructura que muestren un elevado nivel de avance, como la continuación de la Línea "B" Metropolitana del Metro Buenavista-Ciudad Azteca; el Programa de forestación y reforestación de las Sierras de Guadalupe*

y Santa Catarina; el equipamiento del Museo Ecológico, los trabajos de revestimiento del Drenaje Profundo, acciones que en conjunto fortalecerán la infraestructura existente.

· *Continuar con la política de apoyo financiero dirigido a los organismos que prestan el servicio de transporte a fin de garantizar su adecuado funcionamiento.*

· *Intensificar los programas de vivienda que permitan generar una oferta habitacional en sus distintas modalidades, con la participación de los sectores público privado y social al verse rebasada la capacidad institucional.*

· *Continuar con el proceso de descentralización del gasto a las Delegaciones, a efecto de que en el año 2000 éstas puedan actuar conforme a las reformas realizadas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.*

· *Fomentar la capacitación de los servidores públicos para el mejor desempeño de las actividades que tienen encomendadas y permitir la incorporación activa de la sociedad en la toma de decisiones y en la vigilancia y cumplimiento de sus demandas.*

En el Proyecto, el Gobierno del Distrito Federal asume el compromiso de mantener el mejoramiento en la prestación de servicios básicos, de fomento y desarrollo de la infraestructura urbana y el combate a la inseguridad pública, las cuales constituyen las principales demandas de la población, mismas que en el marco de planeación fueron previstas en el Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal, 1998-2000.

En materia salarial, el Gobierno del Distrito Federal se propone continuar promoviendo una política de carácter independiente y autónoma que permita la restauración progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores de la Administración Pública del Distrito Federal, y con ello, apoyar la economía familiar y mantener remuneraciones acordes con las funciones y responsabilidades.

El Gobierno del Distrito Federal propone un Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2000 de 62,006.0 millones de pesos, 35.5% superior respecto al presupuesto autorizado para 1999.

El gasto programable suma 56,248.5 millones de pesos, de los cuales el 68.8% se destina a gasto corriente y 31.2% a gasto de capital.

En cuanto al gasto no programable, asciende a 5,757.5 millones de pesos, cantidad que representa el 9.2% del gasto neto total. Del total de recursos asignados a este rubro, 5,357.5 millones de pesos se destinarán al pago de

los intereses de la deuda y 400.0 millones de pesos al renglón de ADEFAS.

La participación del gasto corriente en la estructura programable cobra particular importancia, debido básicamente al incremento salarial que se otorga a los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal y al impacto en el alza de los precios de los bienes y servicios que demandan las dependencias, órganos desconcentrados y entidades para atender sus necesidades de operación. Asimismo, del gasto corriente sobresale la participación del capítulo de servicios personales, debido a las retribuciones que se tienen que realizar a los trabajadores de base, confianza y honorarios que prestan sus servicios en el gobierno de la ciudad, lo que implicará erogar recursos por 22,016.2 millones de pesos (incluye a las policías complementarias). El crecimiento se explica en parte por la política del actual gobierno en materia salarial, de coadyuvar a mantener el poder adquisitivo de sus trabajadores.

Con respecto a las transferencias corrientes directas, registran un crecimiento nominal del 282.4%, debido a los recursos que se destinan a financiar el presupuesto de los Poderes Legislativo y Judicial del Distrito Federal, Comisión de Derechos Humanos, Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En menor cuantía inciden los subsidios que con cargo al Presupuesto de Egresos otorga el Jefe de Gobierno a los grupos vulnerables, como son las viudas, pensionados y huérfanos.

El gasto de capital se orientará a cubrir los gastos relacionados con la obra pública y con la adquisición de bienes muebles, y se propone continuar con la ejecución de las siguientes acciones:

- Ejecutar el Programa de Saneamiento de la Cuenca del Lerma y del Valle de México, en sus dos vertientes: a) Agua Potable, con los proyectos de Temascaltepec, Cutzamala, Acuaférico y Macrocircuito; y b) Obras de Drenaje y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
- Continuar con los programas de forestación y reforestación en el Distrito Federal, así como equipar el Museo Ecológico y atender el Vivero de San Luis Tlaxialtemalco.
- Rehabilitar y fiabilizar carros de rodadura neumática, a efecto de alargar la vida útil del parque vehicular del Metro.
- Concluir la adquisición de carros para la Línea "A"
- Rehabilitar la plataforma de sustentación de la vía y corrección de la geometría en el tramo superficial de la Línea "2".

• Promover proyectos productivos para el desarrollo de la microindustria.

• Adquirir equipo de transporte terrestre y aéreo para fortalecer los servicios de seguridad pública y continuar con el Programa de Semaforización.

• Conservar y mantener la infraestructura de agua potable y drenaje.

• Repavimentar vialidades primarias y secundarias, y construir el puente vehicular ubicado en la intersección de la Calzada de las Armas y Radial Aquiles Serdán.

• Ampliar, conservar y equipar la infraestructura correspondiente a los niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria).

• Reestructurar y remodelar el Centro de Desarrollo Integral Iztapalapa y el Mercado de Jamaica.

• Ampliar y rehabilitar diversos Centros de Readaptación Social.

• Continuar las obras para el acondicionamiento y rescate del Ex-Lago de Texcoco, así como la construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente IV Etapa.

• Continuar con la excavación y revestimiento del Drenaje Profundo.

• Continuar con la construcción de la Línea "B" Metropolitana del Metro, en su tramo Villa de Aragón a Ciudad Azteca.

• Continuar con la integración y actualización de la base de datos para el cobro de boletas por derecho de suministro de agua, en base a consumo medido.

• Ampliar y remodelar parte de la infraestructura hospitalaria existente.

• Adquirir refacciones y equipos electromecánicos para efectuar las acciones de mantenimiento del Metro.

Las erogaciones previstas en el presupuesto del año 2000 para las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Distrito Federal importan la cantidad de 31,558.2 millones de pesos, para las delegaciones 9,806.2 millones de pesos y para la administración paraestatal 12,178.1 millones (cifra que incluye 6,247.8 millones de pesos de aportaciones y transferencias del sector central). Asimismo, se asignan recursos para ésta H. Asamblea Legislativa por 540 millones, a su Contaduría Mayor

de Hacienda 120.2 millones, al Tribunal Superior de Justicia 1,975.6 millones, al Consejo de la Judicatura 75.3 millones, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo 64.8 millones, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 107.4 millones, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 77.7 millones, al Instituto Electoral 356.3 millones y 43.2 millones para el Tribunal Electoral.

Del monto total de los recursos asignados a la administración paraestatal, 11,523.6 millones de pesos corresponden al gasto programable y 654.5 millones de pesos al pago del costo financiero de la deuda.

Para financiar el Presupuesto de Egresos correspondiente al año 2000 se obtendrán ingresos por 53,006.0 millones de pesos, de los cuales 46,951.1 millones de pesos corresponden al Sector Central y 6,054.9 millones de pesos al Sector Paraestatal. Asimismo, se solicitó al H. Congreso de la Unión la aprobación de un endeudamiento neto de 9,000 millones de pesos.

Respecto del gasto programable y de acuerdo con los objetivos estratégicos definidos en el Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal los recursos se orientarán básicamente hacia aquellos que concentran las prioridades ciudadanas.

Del gasto neto total previsto para el año 2000, el 84% lo absorberán de manera conjunta cuatro de los seis objetivos estratégicos (una Infraestructura y Servicios Urbanos de Calidad, una Ciudad Segura y con Justicia, un Gobierno Responsable y Eficiente, y una Sociedad Incluyente y Solidaria).

De cada peso que gastará el Gobierno del Distrito Federal, 84 centavos se aplicarán en aspectos relacionados con el bienestar de la población, tales como seguridad pública, salud y educación; obras de urbanización, de vivienda y ecológicas; y atención a grupos marginados.

Los objetivos estratégicos tendrán los siguientes contenidos programáticos y presupuestales.

Para el objetivo una Infraestructura y Servicios Urbanos de Calidad el Gobierno de la Ciudad se propone erogar el 29.1% del gasto total, principalmente en obras relacionadas con la ampliación y conservación de la infraestructura vial primaria y secundaria, la ejecución de obras hidráulicas, la continuación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Lerma y del Valle de México la continuación de las obras de la Línea "B" Metropolitana del Metro; la continuación del revestimiento del Acueducto Perimetral y la excavación y revestimiento del drenaje profundo; la construcción de colectores del sistema de

drenaje y líneas de conducción de agua potable; y la modernización del sistema de transferencia de residuos sólidos.

Con esta finalidad, para éste objetivo se asigna un gasto de 18,053.2 millones de pesos, que significan el 29.1% del gasto total. El presupuesto asignado para el año 2000 a este grupo homogéneo de acciones programáticas refleja un incremento de 23.4% en términos reales con respecto a lo presupuestado en 1999.

Para el objetivo una Ciudad Segura y con Justicia el Gobierno de Ciudad asume el compromiso de aplicar los recursos en la profesionalización de los cuerpos de seguridad y justicia; el mejoramiento de los sueldos y salarios del personal operativo encargado de proporcionar los servicios de procuración de justicia y seguridad pública; la adquisición de equipo y armamento de seguridad pública; la construcción, ampliación y conservación de la infraestructura penitenciaria de la Ciudad de México; la desarticulación de organizaciones criminales; y la construcción de juzgados y salas en materias civil y penal para mejorar los servicios de impartición de justicia. Por ello, para este objetivo estratégico programático se propone un presupuesto de 16,559.9 millones de pesos, que significan el 26.7% del presupuesto total. El presupuesto asignado para el año 2000 a este grupo homogéneo de acciones programáticas refleja un incremento de 27.7% en términos reales con respecto a lo presupuestado en 1999.

Para el objetivo un Gobierno Responsable y Eficiente se asignan 9,782.5 millones de pesos mismos que participan con el 15.8% del presupuesto total, a efecto de actualizar el Sistema Cartográfico Catastral, lo que permitirá detectar predios que no estén incorporados al padrón de contribuyentes del impuesto predial; instrumentar un proceso de modernización tecnológica que permita mejorar la calidad de los servicios básicos en materia de registro civil, registro público de la propiedad y de localización telefónica que demanda la población; adquirir el vestuario que se proporciona al personal sindicalizado de acuerdo a las condiciones generales de trabajo; fortalecer los programas de simplificación administrativa para agilizar los trámites que los ciudadanos realizan y continuar con el proceso de reformas a las leyes, reglamentos, adecuaciones o emisión de procedimientos administrativos con el propósito de mejorar el servicio que prestan las autoridades gubernamentales. El presupuesto asignado para el año 2000 a este grupo homogéneo de acciones programáticas refleja un incremento de 14.7% en términos reales con respecto a lo presupuestado en 1999.

Para el objetivo una Sociedad Incluyente y Solidaria los recursos se orientarán fundamentalmente al mantenimiento

y conservación de la infraestructura básica escolar (preescolar, primaria y secundaria); a la conservación y mantenimiento de la infraestructura de salud; a mantener la cobertura de los servicios de vacunación en niños menores de cinco años; a brindar atención a infantes en situación de calle, en centros de asistencia social; a realizar acciones de asesoría jurídica y de canalización a albergues específicos a menores y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar; a distribuir raciones alimenticias y despensas a la población infantil que asiste a escuelas públicas; a fomentar las actividades culturales, recreativas y deportivas; a reubicar a las familias que viven en zonas de alto riesgo; y a otorgar créditos y subsidios a personas de escasos recursos para que tengan acceso a los programas de adquisición de vivienda. Para el logro de este objetivo se asignó un presupuesto que asciende a 7,705.6 millones de pesos, que significan el 12.4% del presupuesto total. El presupuesto asignado para el año 2000 a este grupo homogéneo de acciones programáticas refleja un incremento de 24.3% en términos reales con respecto a lo presupuestado en 1999.

Para el objetivo una Sociedad Democrática y Participativa se destinarán 1,606.6 millones de pesos, que significan el 2.3% del presupuesto total. El presupuesto asignado para el año 2000 a este objetivo programático refleja un incremento de 38.4% en términos reales con respecto a lo presupuestado en 1999.

Para el objetivo un Camino de Desarrollo Sustentable se asignan 2,540.7 millones de pesos que representan el 4.1% del presupuesto total. El presupuesto asignado para el año 2000 a este objetivo programático refleja un incremento de 16.0% en términos reales con respecto a lo presupuestado en 1999.

En razón de lo contenido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, los integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Comisión de Hacienda, consideramos que se requiere que el Distrito Federal funcione de forma segura productiva, con servicios, empleo, satisfactores para los habitantes y con un desarrollo urbano armónico, sano y democrático. Consideramos asimismo, que el presupuesto de egresos es un instrumento que coadyuvará a dar respuesta a las principales demandas ciudadanas.

Para contribuir a lo anterior, y durante la sesión permanente que se llevó a cabo, se acordó incorporar las siguientes:

Modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos propuestas por las Comisiones dictaminadoras

PRIMERA.- Con la intención de hacer congruente el Proyecto de Presupuesto del Distrito Federal para el año

2000 con lo dispuesto en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2000, y en la propia Ley de Ingresos del Distrito Federal para el año 2000, las Comisiones dictaminadoras proponen aplicar ajustes con el fin de observar lo establecido en la autorización del techo de endeudamiento del Distrito Federal.

En el Artículo 2-A de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2000, aprobada por el H. Congreso de la Unión, se establece que se autoriza al Distrito Federal a contratar y ejercer crédito, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 6 mil millones de pesos para el financiamiento de obras y proyectos de Inversiones contemplados en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal del año 2000. Asimismo, se fijan las siguientes condiciones para ejercer dicho endeudamiento:

- Los proyectos y programas que se realicen se apegarán a las estipulaciones constitucionales y legales aplicables.

- El endeudamiento deberá contratarse, preponderantemente, a través de la Banca de desarrollo, preferentemente por conducto de BANOBRAS.

- El monto del desembolso de los recursos crediticios y el ritmo al que procedan, deberán conllevar una correspondencia directa con ministraciones de recursos que vayan presentando tales obras, de manera que el ejercicio y aplicación de los recursos crediticios, deberán darse a paso y medida en que proceda el pago de las citadas ministraciones. En todo caso, el desembolso de recursos crediticios deberá destinarse directamente al pago de aquellas obras y proyectos que ya hubiesen sido adjudicados bajo la normatividad correspondiente.

- El Gobierno del Distrito Federal, informará trimestralmente al Congreso sobre el estado de la deuda pública de la Entidad y el ejercicio del monto autorizado.

- La Contaduría Mayor de Hacienda o en su caso la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, en coordinación con la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizará las auditorías a los contratos y operaciones.

En función de lo anterior se propone ajustar el Proyecto de Presupuesto de Egresos presentado a esta H. Asamblea Legislativa con el fin de hacerlo congruente con el techo de endeudamiento autorizado y las condiciones para contratar deuda. Para ello se observó el marco jurídico que define los programas y proyectos que son sujetos de ser financiados con crédito:

- En el artículo 73 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que ningún

empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos.

· El artículo 4º fracción IV de la Ley General de Deuda Pública dispone que corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la SHyCP, cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades o empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos para su pago o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público.

· Finalmente en el artículo 275 del Código Financiero del Distrito Federal se dispone que los montos de endeudamiento aprobados por el H. Congreso de la Unión, serán la base para la contratación de los créditos necesarios para el financiamiento de los programas y proyectos, contemplados en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que tengan como objetivo la realización de inversiones públicas o actividades productivas que generen

los recursos suficientes para el pago del crédito o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público

SEGUNDA.- *Con el fin de dotar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al Instituto Electoral del Distrito Federal y al Tribunal Electoral del Distrito Federal de la suficiencia presupuestal que les permita alcanzar de manera adecuada las metas programáticas fijadas para el año 2000, se propone realizar ajustes a las asignaciones originalmente contenidas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos presentado ante esta H. Asamblea Legislativa.*

De esta forma, a partir de la Primera y Segunda modificaciones propuestas, las asignaciones presupuestales a los programas y a las unidades ejecutoras de gasto se verían ajustadas de la manera que se presenta a continuación. Con ello se propone realizar los cambios conducentes a los Artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 15 de la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal del Año 2000 presentada a esta H. Asamblea Legislativa.

Ajustes por programas:

	Programas	Proyecto original	Ajuste por techo de endeudamiento aprobado	Proyecto con ajuste por nuevo techo de endeudamiento	Ajuste por presupuesto de órganos autónomos	Proyecto dictaminado en Comisiones
1	Legislación del Distrito Federal	540,000,000.00	0.00	540,000,000.00	27,000,000.00	513,000,000.00
2	Fiscalización de la Hacienda Pública	120,169,600.00	0.00	120,169,600.00	6,000,000.00	114,169,600.00
3	Participación Ciudadana	90,431,455.44	0.00	90,431,455.44	3,000,000.00	87,431,455.44
4	Administración Electoral en el Distrito Federal	399,645,326.05	0.00	399,645,326.05	-966,815,480.57	1,366,460,806.62
5	Poder Judicial	2,028,615,389.73	0.00	2,028,615,389.73	870,612,694.00	1,158,002,695.73
6	Impartición de Justicia Laboral	106,616,817.35	0.00	106,616,817.35	7,000,000.00	99,616,817.35
7	Impartición de Justicia Administrativa	64,772,873.27	0.00	64,772,873.27	5,000,000.00	59,772,873.27
9	Procuración de Justicia Social y Laboral	86,796,504.35	0.00	86,796,504.35	3,500,000.00	83,296,504.35
11	Derechos Humanos	77,671,486.27	0.00	77,671,486.27	-18,980,356.73	96,651,843.00
12	Seguridad Pública	9,674,325,338.76	162,932,000.00	9,511,393,338.76		9,511,393,338.76
13	Protección Civil	442,157,003.05	100,000,000.00	342,157,003.05	2,000,000.00	340,157,003.05

	Programas	Proyecto original	Ajuste por techo de endeudamiento aprobado	Proyecto con ajuste por nuevo techo de endeudamiento	Ajuste por presupuesto de órganos autónomos	Proyecto dictaminado en Comisiones
15	Prevención del Delito	9,595,420.70	0.00	9,595,420.70	2,000,000.00	7,595,420.70
16	Readaptación Social	1,387,373,556.92	145,000,000.00	1,242,373,556.92		1,242,373,556.92
17	Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo	466,971,601.76	0.00	466,971,601.76	3,000,000.00	463,971,601.76
19	Coordinación Metropolitana	14,138,958.31	0.00	14,138,958.31		14,138,958.31
20	Administración Central	4,504,636,402.06	11,000,000.00	4,493,636,402.06	31,000,000.00	4,462,636,402.06
21	Administración Paraestatal	1,681,933,564.12	14,628,765.09	1,667,304,799.03		1,667,304,799.03
25	Infraestructura para la Educación Preescolar	125,461,877.00	22,778,057.29	102,683,819.71		102,683,819.71
26	Infraestructura para la Educación Primaria	228,578,062.93	26,999,999.96	201,578,062.97		201,578,062.97
27	Infraestructura para la Educación Secundaria	175,579,358.80	17,205,658.34	158,373,700.46		158,373,700.46
29	Capacitación a Servidores Públicos	131,759,075.15	0.00	131,759,075.15	50,000.00	131,709,075.15
32	Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura	79,848,348.11	10,000,000.01	69,848,348.10		69,848,348.10
33	Desarrollo del Deporte	434,999,642.10	0.00	434,999,642.10		434,999,642.10
34	Infraestructura para el Deporte	152,502,846.77	5,000,000.00	147,502,846.77		147,502,846.77
38	Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica	340,987,043.02	55,000,000.01	285,987,043.01		285,987,043.01
43	Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario	227,345,004.97	18,536,000.00	208,809,004.97		208,809,004.97
44	Protección Social	696,189,941.73	0.00	696,189,941.73		696,189,941.73
46	Infraestructura Social	229,875,762.92	6,200,000.01	223,675,762.91		223,675,762.91
48	Seguridad e Higiene en el Trabajo	12,304,381.89	0.00	12,304,381.89	2,000,000.00	10,304,381.89
49	Conducción de la Política y Fomento al Empleo	20,911,769.17	0.00	20,911,769.17	3,633,143.30	17,278,625.87
51	Infraestructura para el Abasto y Comercio	65,321,633.93	9,012,278.50	56,309,355.43		56,309,355.43
53	Promoción y Fomento Industrial	37,019,965.56	17,500,000.00	19,519,965.56		19,519,965.56
56	Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria	179,397,765.98	1,000,000.00	178,397,765.98		178,397,765.98
58	Infraestructura Urbana	3,057,634,702.11	337,666,707.64	2,719,967,994.47		2,719,967,994.47

	Programas	Proyecto original	Ajuste por techo de endeudamiento aprobado	Proyecto con ajuste por nuevo techo de endeudamiento	Ajuste por presupuesto de órganos autónomos	Proyecto dictaminado en Comisiones
59	Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda	807,952,140.12	4,999,999.99	802,952,140.13		802,952,140.13
60	Suministro de Agua Potable	1,227,070,957.29	490,000.00	1,226,580,957.29		1,226,580,957.29
61	Construcción y Adecuación para Agua potable	1,588,030,703.25	286,895,000.04	1,301,135,703.21		1,301,135,703.21
62	Infraestructura para el Drenaje Negras y Tratamiento de Aguas	1,922,988,809.74	303,104,999.97	1,619,883,809.77		1,619,883,809.77
63	Regulación de los Asentamientos Humanos	217,697,415.92	0.00	217,697,415.92	20,000,000.00	197,697,415.92
64	Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos	713,851,663.45	105,727,298.21	608,124,365.24		608,124,365.24
67	Control de Residuos Sólidos	1,928,512,237.04	75,000,000.03	1,853,512,237.01		1,853,512,237.01
68	Infraestructura Ecológica	123,336,758.48	10,000,000.00	113,336,758.48		113,336,758.48
69	Preservación y Restauración de Ecosistemas	913,834,707.68	7,920,000.00	905,914,707.68		905,914,707.68
72	Servicio de Transportación y de Estacionamientos	1,992,400,323.55	17,469,979.78	1,974,930,343.77		1,974,930,343.77
73	Infraestructura para el Transporte Urbano	5,020,301,597.62	145,433,255.13	3,874,868,342.49		3,874,868,342.49
74	Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura Productiva	117,528,002.53	82,500,000.00	35,028,002.53		35,028,002.53
	Suma	44,465,073,796.95	3,000,000,000.00	41,465,073,796.95	0.00	41,465,073,796.95

Ajustes por unidades ejecutoras de gasto:

Unidades ejecutoras de gasto	Proyecto original	Ajuste por techo de endeudamiento aprobado	Proyecto con ajuste por nuevo techo de endeudamiento	Ajuste por presupuesto de órganos autónomos	Proyecto dictaminado en Comisiones
Secretaría de Gobierno	1,919,317,244.42	145,000,000.00	1,774,317,244.42	70,183,143.30	1,704,134,101.12
Consejería Jurídica y de Servicios Legales	170,797,401.76	11,000,000.00	159,797,401.76		159,797,401.76
Secretaría de Desarrollo Económico	286,495,817.15	50,000,000.00	236,495,817.15		236,495,817.15
Secretaría de Obras y Servicios	8,361,380,223.34	1,332,161,000.00	7,029,219,223.34		7,029,219,223.34
Secretaría de Desarrollo Social	980,027,278.64	18,536,000.00	961,491,278.64		961,491,278.64
Secretaría de Salud	2,459,756,334.46	50,000,000.00	2,409,756,334.46		2,409,756,334.46
Secretaría de Seguridad Pública	10,185,122,950.30	162,932,000.00	10,022,190,950.30		10,022,190,950.30

Unidades ejecutoras de gasto	Proyecto original	Ajuste por techo de endeudamiento aprobado	Proyecto con ajuste por nuevo techo de endeudamiento	Ajuste por presupuesto de órganos autónomos	Proyecto dictaminado en Comisiones
<i>Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal</i>	3,259,341,435.48	60,000,000.00	3,199,341,435.48		3,199,341,435.48
<i>Delegación Álvaro Obregón</i>	655,292,064.53	29,378,774.71	625,913,289.82		625,913,289.82
<i>Delegación Azcapotzalco</i>	522,951,636.28	20,265,864.81	502,685,771.47		502,685,771.47
<i>Delegación Benito Juárez</i>	525,692,834.50	19,247,052.06	506,445,782.44		506,445,782.44
<i>Delegación Coyoacán</i>	609,518,244.41	25,108,757.00	584,409,487.41		584,409,487.41
<i>Delegación Cuajimalpa de Morelos</i>	294,139,353.86	11,085,406.23	283,053,947.63		283,053,947.63
<i>Delegación Cuauhtémoc</i>	1,069,109,583.94	33,326,064.21	1,035,783,519.73		1,035,783,519.73
<i>Delegación Gustavo A. Madero</i>	1,101,343,687.64	50,187,422.30	1,051,156,265.34		1,051,156,265.34
<i>Delegación Iztacalco</i>	471,477,806.01	19,299,851.84	452,177,954.17		452,177,954.17
<i>Delegación Iztapalapa</i>	1,122,062,947.36	62,405,632.20	1,059,657,315.16		1,059,657,315.16
<i>Delegación Magdalena Contreras</i>	314,138,326.00	11,533,703.33	302,604,622.67		302,604,622.67
<i>Delegación Miguel Hidalgo</i>	695,251,126.86	20,230,323.05	675,020,803.81		675,020,803.81
<i>Delegación Milpa Alta</i>	279,930,756.17	9,290,216.74	270,640,539.43		270,640,539.43
<i>Delegación Tláhuac</i>	365,325,695.05	13,726,311.38	351,599,383.67		351,599,383.67
<i>Delegación Tlalpan</i>	631,885,597.62	31,901,619.39	599,983,978.23		599,983,978.23
<i>Delegación Venustiano Carranza</i>	727,668,844.18	25,867,236.88	701,801,607.30		701,801,607.30
<i>Delegación Xochimilco</i>	420,434,874.83	17,145,763.87	403,289,110.96		403,289,110.96
<i>Consejo de Incautación de</i>	498,171,412.65	266,620,000.00	764,791,412.65		764,791,412.65
<i>Sistema de Transporte Colectivo Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100</i>	4,905,408,969.06	649,341,000.00	4,256,067,969.06		4,256,067,969.06
<i>Servicio de Transportes Eléctricos</i>	1,087,455,971.28	229,000,000.00	858,455,971.28		858,455,971.28
<i>Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal</i>	85,028,002.53	50,000,000.00	35,028,002.53		35,028,002.53
<i>Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal</i>	383,462,557.81	100,000,000.00	283,462,557.81		283,462,557.81
<i>Instituto del Registro Público de la Propiedad y el Comercio</i>	77,342,999.54	8,650,000.00	68,692,999.54		68,692,999.54
<i>Asamblea Legislativa del Distrito Federal</i>	540,000,000.00	0.00	540,000,000.00	27,000,000.00	513,000,000.00
<i>Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal</i>	120,169,600.00	0.00	120,169,600.00	6,000,000.00	114,169,600.00

Unidades ejecutoras de gasto	Proyecto original	Ajuste por techo de endeudamiento aprobado	Proyecto con ajuste por nuevo techo de endeudamiento	Ajuste por presupuesto de órganos autónomos	Proyecto dictaminado en Comisiones
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal	1,975,554,700	0.00	1,975,554,700	825,554,700.00	1,150,000,000.00
Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal	75,343,000.00	0.00	75,343,000.00	45,057,994.00	30,285,006.00
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal	64,802,598.27	0.00	64,802,598.27	5,000,000.00	59,802,598.27
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal	107,350,077.89	0.00	107,350,077.89	7,000,000.00	100,350,077.89
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal	77,671,486.27	0.00	77,671,486.27	-18,980,356.73	96,651,843.00
Instituto Electoral del Distrito Federal	356,341,979.14	0.00	356,341,979.14	-910,017,023.86	1,266,359,003.00
Tribunal Electoral del Distrito Federal	43,201,543.29	0.00	43,201,543.29	-56,798,456.71	100,000,000.00
Suma	47,825,766,962.52	3,000,000,000.00	44,825,766,962.52	0.00	44,825,766,962.52

TERCERA.- Con la finalidad de que los recursos presupuestados en los programas 44 Protección Social y 08 Administración de Justicia y Persecución del Delito, se canalicen para lograr el mayor impacto posible para la población con discapacidad; se propone incluir los siguientes ajustes al interior de los mismos, así como etiquetar algunos recursos del programa 08.

1) Programa 44 "Protección Social" : se propone adicionar los recursos del programa 44 Protección Social, Actividad Institucional 28 Realizar acciones de apoyo a personas con discapacidad, que asciende a 2 millones 940 mil 778.25 pesos, a la Actividad Institucional 07 Brindar atención a personas discapacitadas del mismo programa 44 y cuya asignación presupuestal asciende a 587 mil 817.41 pesos. Por lo tanto el monto total del programa 44, actividad institucional 07 para el ejercicio fiscal del año 2000 ascendería a 3 millones 528 mil 595.66 pesos, mismos que serían ejercidos por las unidades responsables correspondientes.

2) Programa 08 "Administración de Justicia y persecución del delito": se propone trasladar 26 millones 442 mil 073.44 pesos del programa 08 Administración de Justicia y persecución del delito, Actividad Institucional 13 Brindar albergue a menores y discapacitados, cuyo presupuesto asciende a 86 millones 641 mil 029 pesos, a la actividad institucional 11 del mismo programa 08. Con lo anterior el monto total de la actividad institucional 11 ascendería a 124 millones 610 mil 016 pesos. En congruencia con lo anterior, el monto restante de la disminución a la actividad

institucional 13, asciende a 60 millones 198 mil 955.56 pesos, mismos que se distribuirán con las siguientes orientaciones:

- 3 millones 435 mil 399.91 pesos al Programa 33 Desarrollo del Deporte, actividad institucional 05 Atender a equipos representativos de deportistas discapacitados.

- 20 millones de pesos a los proyectos de adecuaciones para personas con discapacidad que utilicen el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

- 10 millones de pesos al mantenimiento del Sistema Integra.

- 10 millones de pesos para el mantenimiento a escuelas de educación especial.

- 10 millones de pesos al fideicomiso de apoyo a proyectos productivos.

- 3 millones de pesos para otorgar becas menores a personas con discapacidad.

- 3 millones 763 mil 555.65 pesos para la creación del Banco de Ortesis y Prótesis.

CUARTA.- Se agrega una fracción cuarta al Artículo 2 de la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal del Año 2000 presentada a esta H. Asamblea Legislativa, y se

recorre la numeración en lo conducente, con el fin de incluir la definición de los Organos Autónomos.

QUINTA.- Se modifica la redacción del Artículo 23 de la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal del Año 2000 presentada a esta H. Asamblea Legislativa, para esclarecer la referencia al tipo de órganos que gozarán de autonomía en el ejercicio de sus presupuestos.

SEXTA.- Con la finalidad de perfeccionar las facultades otorgadas al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para modificar el contenido orgánico y financiero los programas, se reformula la redacción del Artículo 30 de la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal del Año 2000 presentada a esta H. Asamblea Legislativa.

SEPTIMA.- Con la intención de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal conozca el desglose de las asignaciones presupuestales aprobadas se incorpora un Artículo Quinto transitorio para que la Jefa de Gobierno del Distrito Federal remita las modificaciones a las metas por programa y a los capítulos de gasto correspondientes.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en forma conjunta y en atención a lo dispuesto por los artículos 50 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Artículos 18, 22, y 23 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal han elaborado el presente dictamen con proyecto de Decreto, en virtud de lo cual se permiten someter a la consideración del Pleno de ésta H. Asamblea, para su discusión y aprobación, el siguiente:

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2000

TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El ejercicio presupuestal y el control de las erogaciones del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el año 2000 se sujetarán a las disposiciones de este Decreto, del Código Financiero del Distrito Federal y a las demás aplicables en la materia.

Artículo 2.- Para efectos del presente Decreto, se entenderá por:

I. Asamblea: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

II. Dependencias: Las unidades administrativas que integran la Administración Pública Centralizada;

III. Órganos Desconcentrados: Las delegaciones y los que con este carácter se establezcan conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y su Reglamento, los cuales integran la Administración Pública Desconcentrada;

IV. Órganos Autónomos: Los Órganos Autónomos a los que se refiere el artículo 385 del Código.

V. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, los cuales conforman la Administración Pública Paraestatal;

VI. Secretaría: La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal;

VII. Oficialía: La Oficialía Mayor del Distrito Federal;

VIII. Contraloría: La Contraloría General del Distrito Federal;

IX. Código: El Código Financiero del Distrito Federal, y

X. Decreto: El Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2000.

Artículo 3.- La Secretaría, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el Código, tiene encomendado el manejo, control y evaluación del ejercicio presupuestal del presente Decreto; para este propósito, podrá interpretar sus disposiciones para efectos administrativos, adoptará las medidas conducentes para su correcta aplicación y establecerá y efectuará en su caso, las recomendaciones pertinentes para homogeneizar, racionalizar y ejercer un mejor control del gasto público en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y demás unidades ejecutoras del gasto.

CAPÍTULO II DE LAS EROGACIONES

Artículo 4.- Las erogaciones previstas en este Presupuesto para las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Distrito Federal, importarán la cantidad de 29,658,404,040.58 pesos y se distribuirán de la siguiente manera:

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 377,874,818.15
Secretaría de Gobierno 1,704,134,101.12

<i>Consejería Jurídica y de Servicios Legales</i>	159,797,401.76
<i>Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda</i>	217,104,349.20
<i>Secretaría de Desarrollo Económico</i>	236,495,817.15
<i>Secretaría del Medio Ambiente</i>	774,739,445.38
<i>Secretaría de Obras y Servicios</i>	7,029,219,223.34
<i>Secretaría de Desarrollo Social</i>	961,491,278.64
<i>Secretaría de Salud</i>	2,409,756,334.46
<i>Secretaría de Finanzas</i>	1,374,419,930.00
<i>Secretaría de Transportes y Vialidad</i>	367,624,624.44
<i>Secretaría de Seguridad Pública</i>	10,022,190,950.30
<i>Secretaría de Turismo</i>	94,505,918.67
<i>Oficialía Mayor</i>	634,057,124.04
<i>Contraloría General</i>	95,651,288.45
<i>Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal</i>	3,199,341,435.48
Suma:	29,658,404,040.58

Artículo 5.- Las erogaciones previstas en este Presupuesto para las Delegaciones suman 9,406,223,379.24 pesos y se distribuirán de la siguiente manera:

<i>Delegación Álvaro Obregón</i>	625,913,289.82
<i>Delegación Azcapotzalco</i>	502,685,771.47
<i>Delegación Benito Juárez</i>	506,445,782.44
<i>Delegación Coyoacán</i>	584,409,487.41
<i>Delegación Cuajimalpa de Morelos</i>	283,053,947.63
<i>Delegación Cuauhtémoc</i>	1,035,783,519.73
<i>Delegación Gustavo A. Madero</i>	1,051,156,265.34
<i>Delegación Iztacalco</i>	452,177,954.17
<i>Delegación Iztapalapa</i>	1,059,657,315.16
<i>Delegación Magdalena Contreras</i>	302,604,622.67
<i>Delegación Miguel Hidalgo</i>	675,020,803.81
<i>Delegación Milpa Alta</i>	270,640,539.43
<i>Delegación Tláhuac</i>	351,599,383.67
<i>Delegación Tlalpan</i>	599,983,978.23
<i>Delegación Venustiano Carranza</i>	701,801,607.30
<i>Delegación Xochimilco</i>	403,289,110.96
Suma:	9,406,223,379.24

Artículo 6.- Las erogaciones programables previstas para las entidades, cuyos programas están incluidos en este Presupuesto ascienden a 10,753,218,650.02 pesos y se distribuirán de la siguiente manera:

Transportes	5,879,315,352.99
<i>Consejo de Incautación de Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100</i>	764,791,412.65
<i>Sistema de Transporte Colectivo</i>	4,256,067,969.06
<i>Servicio de Transportes Eléctricos</i>	858,455,971.28
Vivienda	814,428,384.92
<i>Instituto de Vivienda de la Ciudad de México</i>	630,683,659.02
<i>Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo</i>	

<i>Social y Urbano</i>	96,997,555.00
<i>Fideicomiso Programa Casa Propia</i>	63,145,357.00
<i>Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular II</i>	23,601,813.90
Salud y Asistencia Social	1,954,423,476.84
<i>Servicios de Salud Pública del Distrito Federal</i>	1,210,928,100.00
<i>Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal</i>	674,644,400.00
<i>Fideicomiso de los Institutos para los Niños de la Calle y las Adicciones</i>	68,850,976.84
Otras Entidades	2,105,051,435.27
<i>Procuraduría Social del Distrito Federal</i>	65,845,800.08
<i>Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal</i>	462,811,114.00
<i>Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal</i>	508,500,119.00
<i>Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.</i>	126,100,000.00
<i>Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.</i>	520,471,884.00
<i>Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal</i>	35,028,002.53
<i>Fideicomiso de Estudios Estratégicos Sobre la Ciudad de México</i>	14,138,958.31
<i>Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica del Distrito Federal</i>	20,000,000.00
<i>Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal</i>	283,462,557.81
<i>Instituto del Registro Público de la Propiedad y el Comercio</i>	68,692,999.54
Suma:	10,753,218,650.02

Artículo 7.- Las erogaciones previstas para la Asamblea, importan la cantidad de 513,000,000.00 pesos.

Las erogaciones previstas para la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, son del orden de 114,169,600.00 pesos.

Artículo 8.- Las erogaciones previstas para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ascienden a 1,150,000,000.00 pesos.

Las erogaciones previstas para el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, suman 30,285,006.00 pesos.

Artículo 9.- Las erogaciones para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, son de 59,802,598.27 pesos.

Artículo 10.- Las erogaciones para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, importan la cantidad de 100,350,077.89 pesos.

Artículo 11.- Las erogaciones para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ascienden a 96,651,843.00 pesos.

Artículo 12.- Las erogaciones previstas para el Instituto Electoral del Distrito Federal, ascienden a 1,266,359,003.00 pesos.

Las erogaciones para el Tribunal Electoral del Distrito Federal, importan la cantidad de 100,000,000.00 pesos.

Artículo 13.- Las erogaciones previstas en el Presupuesto para el pago del costo financiero de la deuda del Sector Central, importan la cantidad de 4,703,005,700.00 pesos.

El costo financiero de la deuda correspondiente a las entidades paraestatales comprendidas en el Artículo 6 de este Decreto asciende a 654,530,102.00 pesos.

Las erogaciones para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) del Distrito Federal importan la cantidad de 400,000,000.00 de pesos.

Artículo 14.- La administración, control, asignación y en su caso, ejercicio de los recursos asignados para el pago del costo financiero de la deuda y del pago de ADEFAS del Sector Central a que se refiere el presente Decreto, se encomienda a la Secretaría.

Artículo 15.- De acuerdo con los objetivos estratégicos del Gobierno del Distrito Federal, las asignaciones para cada uno de los programas, son las siguientes:

01 Legislación del Distrito Federal	513,000,000.00
02 Fiscalización de la Hacienda Pública	14,169,600.00
03 Participación Ciudadana	87,431,455.44
04 Administración Electoral en el Distrito Federal	1,366,460,806.62
05 Poder Judicial	1,158,002,695.73
06 Impartición de Justicia Laboral	99,616,817.35
07 Impartición de Justicia Administrativa	59,772,873.27
08 Administración de Justicia y Persecución del Delito	2,987,820,338.48
09 Procuración de Justicia Social y Laboral	83,296,504.35
10 Procuración de Justicia Fiscal	42,311,153.89
11 Derechos Humanos	96,651,843.00
12 Seguridad Pública	9,511,393,338.76
13 Protección Civil	340,157,003.05
14 Formación y Profesionalización Policial	94,031,764.90
15 Prevención del Delito	7,595,420.70
16 Readaptación Social	1,242,373,556.92
17 Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo	463,971,601.76

18 Conducción de la Política Financiera	1,631,048,233.73
19 Coordinación Metropolitana	14,138,958.31
20 Administración Central	4,462,636,402.06
21 Administración Paraestatal	1,667,304,799.03
22 Control de la Gestión Gubernamental	104,287,431.57
23 Modernización de la Administración Pública	115,609,624.45
24 Comunicación Social	282,209,621.96
25 Infraestructura para la Educación Preescolar	102,683,819.71
26 Infraestructura para la Educación Primaria	201,578,062.97
27 Infraestructura para la Educación Secundaria	158,373,700.46
28 Becas e Intercambio Educativo	137,326,739.60
29 Capacitación a Servidores Públicos	131,709,075.15
30 Apoyo y Fomento a la Investigación Científica, y Desarrollo Tecnológico	2,288,113.16
31 Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento	647,286,664.98
32 Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura	69,848,348.10
33 Desarrollo del Deporte	434,999,642.10
34 Infraestructura para el Deporte	147,502,846.77
35 Atención Preventiva, Curativa y Hospitalización	2,466,935,317.24
36 Atención de Urgencias, Emergencias y Desastres	417,501,181.81
37 Planificación Familiar y Orientación para la Salud	109,180,102.33
38 Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica	285,987,043.01
39 Regulación y Control Sanitario	74,795,951.50
40 Pensiones, Jubilaciones y Ayudas	564,680,927.00
41 Otras Prestaciones	299,367,286.00
42 Atención y Mejoramiento Nutricional	314,341,050.01
43 Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario	208,809,004.97
44 Protección Social	696,189,941.73
45 Protección y Asistencia a la Población en Desamparo	36,600,180.34
46 Infraestructura Social	223,675,762.91
47 Capacitación para el Trabajo	207,801,593.36
48 Seguridad e Higiene en el Trabajo	10,304,381.89
49 Conducción de la Política y Fomento al Empleo	17,278,625.87
50 Fomento y Regulación del Comercio	39,560,768.03
51 Infraestructura para el Abasto y Comercio	56,309,355.43
52 Arrendamiento y Comercialización de Inmuebles	142,383,344.00

53 Promoción y Fomento Industrial	19,519,965.56
54 Producción de Papel, Impresos y Publicaciones	84,101,481.00
55 Producción de Material Asfáltico	203,915,147.90
56 Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria	178,397,765.98
57 Promoción y Fomento de la Actividad Turística	82,624,910.18
58 Infraestructura Urbana	2,719,967,994.47
59 Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda	802,952,140.13
60 Suministro de Agua Potable	1,226,580,957.29
61 Construcción y Adecuación para Agua potable	1,301,135,703.21
62 Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras	1,619,883,809.77
63 Regulación de los Asentamientos Humanos	197,697,415.92
64 Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos	608,124,365.24
65 Regulación y Prevención de la Contaminación del Aire	136,563,222.39
66 Regulación y Prevención de la Contaminación del Agua	247,051,039.67
67 Control de Residuos Sólidos	1,853,512,237.01
68 Infraestructura Ecológica	113,336,758.48
69 Preservación y Restauración de Ecosistemas	905,914,707.68
70 Fomento de la Producción Forestal	36,602,202.71
71 Regulación del Transporte Urbano	275,165,008.86
72 Servicio de Transportación y de Estacionamientos	1,974,930,343.77
73 Infraestructura para el Transporte Urbano	3,874,868,342.49
74 Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura Productiva	35,028,002.53
75 Ejecución y Control del Crédito Público	5,357,535,802.00
76 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	400,000,000.00
Suma	59,006,000,000.00

Artículo 16.- De acuerdo con las necesidades planteadas por la población de la Ciudad de México, se establecen para su atención los siguientes programas prioritarios:

- 08 Administración de Justicia y Persecución del Delito
- 12 Seguridad Pública
- 16 Readaptación Social
- 25 Infraestructura para la Educación Preescolar
- 26 Infraestructura para la Educación Primaria
- 27 Infraestructura para la Educación Secundaria
- 35 Atención Preventiva, Curativa y Hospitalización
- 38 Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica
- 42 Atención y Mejoramiento Nutricional

- 43 Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario
- 45 Protección y Asistencia a la Población en Desamparo
- 53 Promoción y Fomento Industrial
- 58 Infraestructura Urbana
- 59 Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda
- 61 Construcción y Adecuación para Agua Potable
- 67 Control de Residuos Sólidos
- 69 Preservación y Restauración de Ecosistemas

La Secretaría previo acuerdo con el Titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, podrá determinar la eliminación de conceptos de gasto y la liberación de recursos asignados a los programas no prioritarios, con objeto de fomentar el ahorro presupuestal o de canalizar los recursos a los programas prioritarios.

TÍTULO SEGUNDO DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 17.- Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como los demás órganos que ejerzan recursos aprobados en este presupuesto, serán directamente responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en este Decreto y demás disposiciones de carácter general que al efecto dicte la Secretaría.

Artículo 18.- Queda prohibido a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a los demás órganos que ejerzan recursos previstos en este presupuesto, contraer compromisos que rebasen el monto de sus presupuestos autorizados o acordar erogaciones que impidan el cumplimiento de sus actividades institucionales y metas aprobadas. Asimismo, no podrán contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos de subsecuentes ejercicios fiscales, celebrar contratos, otorgar concesiones, permisos, licencias y autorizaciones o realizar cualquier otro acto de naturaleza análoga, que impliquen la posibilidad de algún gasto contingente o adquirir obligaciones futuras, si para ello, no cuentan con la previa autorización de la Secretaría, en los términos establecidos en el Código.

Artículo 19.- La Contraloría en el ámbito de su competencia, verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de la Administración Pública del Distrito Federal, que comprende el presente Decreto, en relación con los objetivos, estrategias y prioridades del Gobierno del

Distrito Federal, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas.

CAPÍTULO II DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Y DE LA APLICACIÓN DE LAS EROGACIONES ADICIONALES

Artículo 20.- *En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, se sujetarán estrictamente a sus calendarios de gasto, los cuales se elaborarán según lo dispuesto en el Código. La Secretaría les comunicará la autorización de dichos calendarios, a más tardar, a los 20 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de este Decreto.*

Artículo 21.- *Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir oportunamente sus respectivos adeudos, en los términos de la ley de la materia.*

Artículo 22.- *Las adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, sólo podrán ser autorizadas por la Secretaría; en consecuencia, las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, y los demás que las leyes establezcan, deberán llevar a cabo el registro y control de su ejercicio presupuestario, sujetando sus compromisos de pago a los calendarios aprobados.*

Artículo 23.- *Los órganos autónomos y los demás que las leyes establezcan, ejercerán su presupuesto con la autonomía que sus ordenamientos les confieren para lo cual se establecerán previamente calendarios de ministraciones, mismos que estarán en función de la capacidad financiera del Distrito Federal. Los órganos internos de administración respectivos serán los responsables de recibir y manejar los fondos.*

Artículo 24.- *La Secretaría autorizará a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, las ministraciones de fondos de acuerdo con los programas, actividades institucionales y metas correspondientes y en función de sus disponibilidades conforme al calendario financiero aprobado; podrá reservarse dicha autorización, cuando:*

I. No envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos;

II. Del análisis del ejercicio de sus presupuestos y del desarrollo de sus programas, resulte que no cumplen con

las actividades institucionales y metas de los programas aprobados o se detecten desviaciones en su ejecución o en la aplicación de los recursos asignados;

III. En el manejo de sus disponibilidades financieras, no cumplan con los lineamientos que emita la Secretaría;

IV. En el caso de transferencias y aportaciones autorizadas, no remitan los informes programáticos presupuestales en los términos y plazos establecidos, lo que motivará la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por los mismos conceptos se hubiesen autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado, y

V. En general no ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 25.- *La Secretaría, en representación del Gobierno del Distrito Federal, con la participación que corresponda a las dependencias coordinadoras de sector, podrán suscribir convenios o bases de desempeño con las entidades, órganos administrativos desconcentrados y con las Delegaciones.*

Dichos convenios tendrán por objeto establecer compromisos de resultados y medidas presupuestarias, que promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público o, en su caso, cuando se requiera establecer acciones de fortalecimiento o saneamiento financiero.

Los requisitos que se deberán observar para este efecto, son:

I. Presupuesto con base en las categorías y elementos de la estructura programática;

II. Calendario de actividades institucionales trimestral y anual, y

III. Analítico de servicios personales calendarizado.

Artículo 26.- *Los convenios o bases de desempeño a que se refieren los anteriores preceptos deberán contener:*

I. En el caso de las entidades:

a. Programa de Mediano Plazo con proyecciones multianuales financieras y de inversión;

b. Programa Anual de Trabajo;

c. Compromisos de balance de operación;

d. Flujos de ingresos y egresos, y

e. Medidas correctivas para mejorar el desempeño de la gestión.

2. En caso de los órganos administrativos desconcentrados, de las dependencias y Delegaciones:

- a. Programa Anual de Trabajo;
- b. Estimaciones de costos de operación, de mantenimiento y conservación, y de inversión, y
- c. Medidas correctivas para mejorar el desempeño de la gestión.

En ambos casos, en los convenios o bases de desempeño que se suscriban deberán incluirse las disposiciones presupuestarias de racionalidad, austeridad, disciplina y control aplicables.

Artículo 27.- El Titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, cuando se presente una disminución de los ingresos previstos en el Artículo 1º de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal del año 2000.

Los ajustes y reducciones que efectúe el Titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva y sin afectar las actividades institucionales y metas sustantivas del gasto social y de los principales proyectos de inversión, optando preferentemente por aquellos de menor impacto social. De lo anterior, se dará cuenta a la Asamblea en los informes trimestrales.

Artículo 28.- El Titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría, podrá asignar los recursos que se obtengan en exceso de los previstos en el Artículo 1º de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal del año 2000, a los programas prioritarios que contempla este Decreto y para apoyar los programas que contribuyan al desarrollo y modernización de la infraestructura social, mantenimiento de los servicios públicos, así como otras actividades que resulten necesarias.

De los movimientos que se efectúen en los términos de este Artículo, el Titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal informará a la Asamblea en el curso de los informes trimestrales que establece el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y al rendir la Cuenta Pública, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando afecte la Deuda Pública.

Los ingresos adicionales provenientes de la enajenación de bienes del patrimonio inmobiliario del Distrito Federal se destinarán de acuerdo con lo previsto en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, y en lo no

previsto por este ordenamiento, preferentemente al Programa 59 "Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda" mediante ampliaciones líquidas presupuestales, a fin de otorgar subsidios para la adquisición de suelo destinado a vivienda de interés social; dichos subsidios se ejercerán por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Artículo 29.- Las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser enteradas a la Tesorería del Distrito Federal, salvo los casos que expresamente determine el Código y las Leyes, y hasta por los montos que establezca la Secretaría, en función de las necesidades de los servicios a los que estén destinados y conforme a sus presupuestos autorizados. El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será causa de responsabilidad en los términos de la legislación que resulte aplicable.

Artículo 30.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá modificar el contenido orgánico y financiero de los programas de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades incluidas en el Presupuesto de Egresos, cuando por razones de interés social, económico o seguridad pública lo considere necesario.

Estas modificaciones no podrán:

I. Transferir recursos destinados a programas prioritarios hacia programas no prioritarios.

II. Disminuir el monto consignado en el Decreto de Presupuesto de Egresos para la atención de programas prioritarios, salvo que se hayan concluido las metas.

Sólo podrá exceptuarse de lo anterior cuando existan situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales, plagas, epidemias o cuando se trate alguna situación de emergencia que afecte total o parcialmente el territorio del Distrito Federal.

Cualquier modificación que no cumpla los requisitos antes señalados requerirá aprobación previa de la Asamblea o, cuando ésta se encuentre en receso, por la Comisión de Gobierno, la que deberá resolver durante los quince días hábiles siguientes a presentación de la misma, pasados los cuales se considerará aprobada.

Cuando el ajuste supere el 10% del presupuesto anual asignado a cada unidad ejecutora de gasto, el Titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal deberá informar en un capítulo especial del Informe de Avance Trimestral, la conciliación de las modificaciones realizadas.

TÍTULO TERCERO
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y
AUSTERIDAD

Artículo 31.- Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, así como los demás órganos que ejerzan cursos aprobados en este presupuesto, no podrán realizar erogaciones que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre del año 2000. El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será causa de responsabilidad en los términos de la legislación que resulte aplicable.

Artículo 32.- Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, deberán reducirse al mínimo indispensable, sujetando su uso a los criterios de racionalidad, disciplina y austeridad, y efectuándolos solamente cuando se cuente con suficiencia presupuestal y la autorización expresa de los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades:

I. Alimentación de personas.- Los gastos que realicen los servidores públicos por este concepto, se sujetarán única y exclusivamente a cubrir necesidades del servicio, apegándose a la normatividad expedida por la Secretaría y la Oficialía.

II. Servicio telefónico, energía eléctrica, agua potable, combustibles e inventarios.- Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades establecerán programas para fomentar el ahorro por concepto de energía eléctrica, agua potable, teléfono, combustibles e inventarios, mismos que deberán someter a la autorización de los titulares y órganos de gobierno, respectivamente, a más tardar el 31 de marzo del año 2000.

III. Arrendamientos.- Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades optimizarán la ocupación de los espacios físicos y el uso del mobiliario y equipo. Realizarán análisis de costos para determinar cuando resulte preferible adquirirlos. En estos casos solicitarán a la Oficialía la emisión del dictamen de procedencia, remitiéndole los análisis de las alternativas y costos;

IV. Asesorías, Estudios e Investigaciones.- Los gastos con cargo a este concepto deberán autorizarse atendiendo a los lineamientos y a las disposiciones que al efecto dicten la Oficialía y la Secretaría.

Los servicios profesionales que se contraten deberán ser indispensables para el cumplimiento de los programas autorizados.

Las contrataciones se llevarán a cabo en los términos de lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y demás disposiciones aplicables en la materia;

V. Publicidad, Propaganda, Publicaciones Oficiales, y en general los relacionados con actividades de comunicación social.- Los contratos y convenios con los que las dependencias y órganos desconcentrados, formalicen erogaciones con cargo al Presupuesto, por los conceptos a los que se refiere esta fracción deberán ser autorizados por la Oficialía y la Dirección General de Comunicación Social; y los que efectúen las entidades se autorizarán además por su órgano de gobierno, con base en los lineamientos que se establezcan;

VI. Viáticos y Pasajes.- Las dependencias y órganos desconcentrados, solicitarán la autorización del Titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cuando se trate de pasajes y viáticos internacionales y de su propio titular para los pasajes y viáticos nacionales. En el caso de las entidades los pasajes y viáticos internacionales los autorizará su órgano de gobierno y el titular correspondiente estará facultado para autorizar los nacionales, y

VII. Gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, gastos de representación y gastos para investigaciones oficiales.- Se realizarán con autorización expresa del titular de la dependencia, órgano desconcentrado o entidad que corresponda y en estricto apego a la normatividad aplicable. En el caso de adquisiciones ornamentales de cualquier naturaleza, será responsabilidad del titular de la dependencia, órgano desconcentrado o entidad que corresponda, vigilar que los montos de la adquisición no sean superiores a los precios unitarios existentes en el mercado para los productos adquiridos.

Artículo 33.- Considerando que son artículos restringidos, los titulares de las dependencias y órganos desconcentrados sólo con autorización de la Oficialía podrán efectuar adquisiciones de:

I. Mobiliario, equipo de administración, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones y vehículos terrestres;

II. Vehículos aéreos, únicamente en aquellos casos que resulten necesarios para salvaguardar la seguridad pública, la procuración de justicia y los servicios de salud, y

III. Bienes inmuebles para oficinas públicas o la celebración de nuevos arrendamientos, en los casos que sean indispensables para la operación de las dependencias y órganos desconcentrados.

Tratándose de entidades, se requerirá de la autorización específica y previa de su órgano de gobierno, la cual deberá sujetarse a la normatividad vigente.

Artículo 34.- Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y de la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia; así como de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos reales de pago, con estricto apego a las demás disposiciones de este Decreto, del Código y las que resulten aplicables en la materia.

CAPÍTULO II DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Artículo 35.- Las remuneraciones que correspondan a los servidores públicos de mandos superiores por concepto de sueldos, compensaciones y prestaciones, no podrán ser distintas a las establecidas en este Decreto, agregando el incremento porcentual que se otorgue a los trabajadores del Distrito Federal.

TABULADOR DE SUELDOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL AÑO 2000

Puesto	Percepción mensual	
Titular de la Jefatura de Gobierno	\$70,000	
	Mínimo	Máximo
Secretario o puestos homólogos	\$68,600	\$69,700
Subsecretario, Delegado o puestos homólogos	\$44,500	\$66,000
Director General o puestos homólogos	\$42,630	\$63,945

Artículo 36.- Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, sólo podrán crear nuevas plazas o en su caso categorías, así como conversiones de plazas y renivelaciones de puestos, cuando realicen adecuaciones con movimientos de plazas a costos compensados, que no incrementen el presupuesto regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, y cuenten previamente con la autorización de la Secretaría y de la Oficialía, la cual se otorgará siempre que:

I. Las plazas se cubran con recursos del capítulo de servicios personales o de la partida 3806 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos de mandos medios y superiores";

II. Las economías o ahorros del presupuesto de servicios personales no se apliquen a la creación de nuevas plazas, y

No serán aplicables las disposiciones anteriores para las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que presten los servicios de salud, seguridad pública y servicios de emergencia.

En el caso de las entidades, las plazas de nueva creación serán autorizadas, además por su órgano de gobierno.

La designación o contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores surtirá efectos a partir de la fecha en que se reciban las autorizaciones correspondientes, sin que pueda dárseles efectos retroactivos.

Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades no podrán modificar sus estructuras orgánicas y ocupacionales aprobadas en el ejercicio de 1999, debiendo ser éstas acordes con las normas vigentes, por lo que sólo podrán hacer adecuaciones con la autorización del Titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, previo dictamen de la Oficialía y la validación de la suficiencia presupuestal por parte de la Secretaría; tratándose de las entidades además se requerirá la autorización de su órgano de gobierno, de conformidad con las normas y reglas vigentes en la materia.

Artículo 37.- Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, para el ejercicio de sus asignaciones por concepto de servicios personales, deberán:

I. En las acciones de descentralización, dar prioridad a los trasposos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos, entre sus unidades responsables y programas, sin que ello implique la creación de nuevas plazas;

II. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas, conforme a las normas y lineamientos vigentes y en el caso de las entidades por los acuerdos que expida el órgano de gobierno respectivo, conforme a los lineamientos que se emitan;

Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, las compensaciones por el riesgo en el desarrollo de sus actividades, así como otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezcan la Oficialía y la Secretaría, y en su caso el órgano de gobierno respectivo. Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las entidades que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas.

III. Abstenerse de cubrir remuneraciones por concepto de honorarios y salarios al personal eventual que rebase los montos autorizados por la Oficialía, o bien, que en cualquier forma supongan el incremento del número de los contratos relativos celebrados en el ejercicio de 1999.

Por lo que se refiere a los contratos por honorarios que se tengan celebrados hasta el 31 de diciembre de 1999 las dependencias y órganos desconcentrados deberán obtener, en el transcurso de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la autorización de la Oficialía para la renovación de los mismos, la cual sólo se otorgará cuando dicha contratación se considere indispensable y cuente con la suficiencia presupuestal. Para estos efectos no podrán hacerse transferencias de otros capítulos de gasto;

IV. Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que dichas contrataciones se encuentren previstas en el presupuesto correspondiente a servicios personales de la propia dependencia y órgano desconcentrado y se cuente con la autorización previa y expresa de la Oficialía;

V. No se otorgarán remuneraciones adicionales a miembros de órganos de gobierno o de vigilancia de las entidades;

VI. Sujetarse a los lineamientos que expidan la Oficialía y la Secretaría para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de las comisiones oficiales, y

VII. Abstenerse de realizar traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las asignaciones para el capítulo de servicios personales, excepto los casos que autorice la Secretaría, de conformidad con la normatividad aplicable.

CAPÍTULO III DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Artículo 38.- *En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para el año 2000:*

I. Se otorgará prioridad a las erogaciones por concepto de gastos de mantenimiento de los proyectos y obras concluidos, así como a la terminación de los proyectos y obras vinculadas a la prestación de servicios públicos que se encuentren en proceso;

Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, sólo podrán iniciar proyectos cuando tengan garantizada la disponibilidad de recursos financieros para su terminación, puesta en operación y mantenimiento y en ningún caso cuando existan otros proyectos similares que puedan ser concluidos con los recursos disponibles;

II. Se aprovechará al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada para abatir costos. En igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad,

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con la inversión en bienes muebles;

III. Se dará preferencia a la adquisición de productos y a la utilización de tecnologías nacionales, con uso intensivo de mano de obra;

IV. Se estimularán los proyectos de coinversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales colindantes al Distrito Federal, para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y estimulen la generación del empleo, y

V. Los proyectos de inversión de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que sean financiados con créditos, deberán sujetarse a los términos y condiciones que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a sus atribuciones.

CAPÍTULO IV DE LOS SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES

Artículo 39.- *Las erogaciones por concepto de transferencias del Gobierno Federal y los subsidios y aportaciones con cargo a este Presupuesto, se sujetarán a lo establecido en el Código, apegándose a los siguientes criterios:*

I. Los subsidios se orientarán a las actividades que conlleven a un mayor beneficio social entre los grupos de menores ingresos;

II. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes y servicios;

III. Las aportaciones destinadas a cubrir desequilibrios financieros de operación, se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;

IV. Las transferencias y aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, destinadas al apoyo de las entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, se orientarán selectivamente hacia las actividades prioritarias, así como a fortalecer el cambio estructural, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos para la producción y a generar empleo permanente y productivo;

V. Las entidades beneficiarias de transferencias y aportaciones deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, mayor autosuficiencia financiera y la disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales;

VI. Sólo se otorgarán transferencias y aportaciones cuando se precisen claramente los programas, destino, objetivos, beneficiarios, temporalidad y condiciones de las mismas;

VII. En caso de que los ingresos propios de las entidades rebasen la estimación original anual, se cancelen actividades institucionales y metas o se generen economías, la Secretaría podrá reducir el monto de subsidios y aportaciones originalmente previstos, y

VIII. La ministración de los subsidios y aportaciones del Gobierno del Distrito Federal destinada al apoyo de las entidades, se hará como complemento a sus ingresos propios y conforme al calendario financiero mensual autorizado por la Secretaría, deduciendo las disponibilidades financieras mensuales de las entidades.

Artículo 40.- Para la autorización de transferencias o aportaciones a las entidades con cargo al presente Presupuesto corresponderá a la Secretaría verificar previamente:

I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados de acuerdo a la liquidez de la entidad beneficiaria, así como a la aplicación de dichos recursos;

II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase, y

III. Que el avance físico-financiero de sus programas y proyectos sea acorde con el ritmo de ejecución programado.

La Secretaría suspenderá la ministración de fondos cuando las entidades beneficiarias no remitan la información en la forma y términos que ésta determine.

Artículo 41.- La disposición oportuna de recursos que contempla este Presupuesto provenientes de transferencias del Gobierno Federal, está en función del calendario de ministraciones que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 42.- El Titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal informará trimestralmente a la Asamblea sobre las transferencias recibidas del Gobierno Federal, así como su aplicación durante el ejercicio presupuestal.

CAPÍTULO V

DE LAS ADQUISICIONES Y LAS OBRAS PÚBLICAS

Artículo 43.- Para la contratación de arrendamientos financieros de bienes muebles e inmuebles, las dependencias, órganos desconcentrados y entidades observarán que las condiciones de pago ofrezcan ventajas en relación con otros medios de financiamiento y el monto esté contemplado dentro del endeudamiento neto autorizado en el presente ejercicio fiscal.

En estas contrataciones las dependencias y órganos desconcentrados requerirán de la autorización de la Secretaría. En el caso de las entidades deberán contar además con la aprobación de su órgano de gobierno.

Artículo 44.- Para los efectos referidos en el artículo 24 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres contratistas que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que podrán realizar las dependencias, órganos desconcentrados y entidades durante el año 2000, serán los siguientes:

Inversión total autorizada (Miles de pesos)		Monto máximo total de cada obra que las dependencias y entidades podrán adjudicar directamente	Monto máximo total de cada obra que las dependencias y entidades podrán adjudicar mediante invitación a cuando menos tres contratistas	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que las dependencias y entidades podrán adjudicar directamente	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres contratistas
Mayor de	Hasta	(Miles de Pesos)	(Miles de pesos)	(Miles de pesos)	(Miles de pesos) Dependencias
	00	00	340	2,915	
		45	370	25	140

<i>Inversión total autorizada (Miles de pesos)</i>		<i>Monto máximo total de cada obra que las dependencias y entidades podrán adjudicar directamente (Miles de Pesos)</i>	<i>Monto máximo total de cada obra que las dependencias y entidades podrán adjudicar mediante invitación a cuando menos tres contratistas (Miles de pesos)</i>	<i>Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que las dependencias y entidades podrán adjudicar directamente (Miles de pesos)</i>	<i>Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres contratistas (Miles de pesos)</i>
<i>Mayor de</i>	<i>Hasta</i>				<i>Dependencias y Entidades</i>
	5,000	60	450	35	200
5,000	10,000	70	565	40	255
10,000	15,000	90	680	45	340
15,000	30,000	105	850	50	420
30,000	50,000	130	995	60	490
50,000	100,000	150	1,190	65	610
100,000	150,000	170	1,370	70	740
150,000	250,000	200	1,590	80	890
250,000	350,000	215	1,810	90	1,060
350,000	450,000	240	2,150	100	1,280
450,000	600,000	270	2,390	105	1,500
600,000	750,000	290	2,630	110	1,760
750,000	1,000,0			115	2,090
1,000,0					

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades se abstendrán de convocar, formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con saldo disponible dentro de su presupuesto aprobado para hacer frente a dichos compromisos.

Artículo 45.- Para los efectos del Artículo 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios de cualquier naturaleza, que podrán realizar las dependencias, órganos desconcentrados y entidades durante el año 2000, serán los siguientes:

<i>Volumen anual de Adquisición Presupuestados (Miles de pesos)</i>		<i>Monto máximo total de cada operación que las dependencias y entidades podrán adjudicar directamente (Miles de pesos)</i>	<i>Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores (Miles de pesos)</i>
<i>Mayor de</i>	<i>Hasta</i>		<i>Dependencias y Entidades</i>
	5,000	30	140
5,000	10,000	35	200
10,000	15,000	40	255
15,000	30,000	45	340
30,000	50,000	50	420
50,000	100,000	60	490
100,000	150,000	65	610
150,000	250,000	70	740
250,000	350,000	80	890
350,000	450,000	90	1,060
450,000	600,000	100	1,280
600,000	750,000	105	1,500
750,000	1,000,000	110	1,760
1,000,000		115	2,090

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades se abstendrán de convocar, formalizar o modificar contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no cuenten con saldo disponible dentro de su presupuesto aprobado para hacer frente a dichos compromisos.

Artículo 46.- *Las entidades de la Administración Pública del Distrito Federal estarán obligadas a celebrar los contratos necesarios, a fin de asegurar adecuadamente sus bienes patrimoniales conforme a los lineamientos que para tal efecto expida la Oficialía.*

Las dependencias y órganos desconcentrados informarán a la Oficialía y a la Secretaría el inventario de bienes patrimoniales a fin de que sean considerados en el programa de aseguramiento conforme a los lineamientos aplicables.

TÍTULO CUARTO DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN

CAPÍTULO I DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN

Artículo 47.- *La Secretaría determinará los procedimientos a los que las dependencias, órganos desconcentrados y entidades deberán ajustarse para la correcta ejecución del Presupuesto, y dictará las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.*

Asimismo, podrá requerir de ellas la información que resulte necesaria para la elaboración de los informes trimestrales que deben rendirse a la Asamblea y para la integración de la Cuenta Pública del Distrito Federal, así como la relativa a la Deuda Pública para rendir los informes correspondientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En caso de detectar irregularidades y desviaciones, la Secretaría las hará del conocimiento de la Contraloría, independientemente de fincar las responsabilidades resarcitorias que procedan.

Artículo 48.- *La Contraloría en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la ley, comprobará el cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, de las obligaciones derivadas de este Decreto. Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a*

cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- *El presente Decreto entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 2000.*

ARTÍCULO SEGUNDO.- *Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida observancia y aplicación.*

ARTÍCULO TERCERO.- *Las Delegaciones ejercerán los recursos asignados en el presente Decreto, conforme a las disposiciones previstas en el mismo, y las aplicables del Código Financiero del Distrito Federal vigente en el año 2000, así como las normas y lineamientos que en materia de procesos de programación-presupuestación, ejercicio, control, contabilidad y evaluación del gasto público se emitan durante el ejercicio presupuestal del año 2000.*

Las nuevas atribuciones que en materia presupuestaria fueron otorgadas a las Delegaciones, según Decreto de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal publicado el 14 de octubre de 1999, se iniciarán con la instrumentación de las normas y políticas a que deberán apegarse a partir del ejercicio presupuestal del año 2001, para tal efecto los jefes Delegacionales deberán presentar oportunamente los proyectos de programas operativos anuales y de presupuesto de la Delegación, al Titular de la Jefatura de Gobierno.

ARTÍCULO CUARTO.- *Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2000, las menciones de órganos desconcentrados en el presente Decreto se entenderán referidas también a las Delegaciones.*

ARTÍCULO QUINTO.- *La Jefa de Gobierno del Distrito Federal remitirá a la Asamblea, en un plazo no mayor de 45 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las modificaciones a las metas por programa y a los capítulos de gasto correspondientes, en virtud de la asignaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos para el año 2000.*

Por la Comisión de Hacienda, firman: Diputado Francisco Chiguil Figueroa; diputado Miguel Angel Peláez Gerardo; diputado Miguel Bortolini Castillo; diputado Ricardo Javier Martínez Atala; diputada Raquel María del Carmen Sevilla Díaz; diputado Roberto Rico Ramírez; diputado Ernesto Chávez Contreras.

Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, firman: Diputado Ricardo Javier Martínez Atala; Diputada Raquel María del Carmen Sevilla Díaz; diputado Miguel

Angel Peláez gerardo; diputado Miguel Bortolini Castillo; diputado Juan González Romero; diputado Francisco Martínez Rojo; diputado Francisco Chiguil Figueroa; diputada Ana Luisa Cárdenas Pérez; diputado Roberto Rico Ramírez; diputado Luis Miguel Ortiz Haro Amieva, abstención.

LA C. PRESIDENTA.- Para fundamentar el dictamen por las Comisiones Unidas, se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Martínez Atala.

EL C. DIPUTADO RICARDO MARTINEZ ATALA.- Con su permiso señora Presidenta. Lo hemos señalado en multitud de ocasiones que el Presupuesto de Egresos, es particularmente la expresión más acabada de un proyecto de gobierno.

Para el año 2000 hemos preparado, hemos preparado los asambleístas, el gobierno de la ciudad, desde la iniciativa original, un proyecto de presupuesto que permitirá que en esta ciudad se sigan mejorando las condiciones urbanas de la misma; que mejore, como ha mejorado hasta el día de hoy, la seguridad pública; que mejoren los servicios de salud; que mejore la infraestructura urbana; que mejore la relación entre el gobierno y los ciudadanos.

El proyecto de Presupuesto que nos fue remitido, ha sido transformado en las Comisiones Unidas de Presupuesto, Cuenta Pública y Hacienda, y haremos aún reservas para mejorar el proyecto original.

Yo creo, señores diputados, que esta ciudad merece un presupuesto como el que hoy presentamos a su consideración, yo creo en eso; en que la ciudad va a continuar mejorando; va a seguir siendo la ciudad más barata, con los mejores servicios, con las mejores condiciones que el resto de las ciudades del país, gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos que contribuyen gracias al esfuerzo de un gobierno que se ha preocupado por abatir los índices de inseguridad, por mejorar las condiciones de empleo, por lograr que la ciudad sea mejor y que no se ha preocupado por aumentar los sueldos de sus funcionarios; que no se ha preocupado por darles bonos extraordinarios a sus funcionarios; que no se ha preocupado por regalar aguinaldos ofensivos a sus funcionarios, porque en esta ciudad todos los que formamos parte de este austero gobierno, nos hemos preocupado porque el dinero de la ciudad se invierta en la ciudad y no en el beneficio personal de quienes la gobiernan.

Por eso yo creo que el presupuesto que presentamos hoy al debate deber ser aprobado por todos los diputados.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión el dictamen en lo general. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra?

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto? ¿Desea razonar su voto, señor diputado?

Se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel Minjares, para razonar su voto, posteriormente al diputado Luis Miguel Ortiz Haro y a la diputada Raquel Sevilla y al diputado Narro.

Se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel Minjares Jiménez, para razonar su voto, hasta por 20 minutos.

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ.- Gracias, señora Presidenta.
Honorable Asamblea:

Vengo a esta tribuna a razonar el voto del grupo parlamentario de Acción Nacional en contra de este dictamen que se nos presenta debido a que contiene algunas situaciones poco claras, que no concuerdan con lo que vino a decir en esta tribuna el diputado Ricardo Martínez Atala y que por supuesto no benefician, tal como se dice, a los contribuyentes y a los habitantes de esta Ciudad de México.

En primer lugar, se hacen ajustes en virtud de la reducción del techo de endeudamiento solicitado a la Cámara de Diputados. Esta solicitud, como bien se dice en el dictamen, fue de 9 mil millones de pesos y quedó en 6 mil millones de pesos.

Después de una larga campaña, larga y costosa campaña en los medios de comunicación, desplegados en periódicos, anuncios en radio y en televisión, donde la Jefa de Gobierno nos decía a los ciudadanos que ella ya había cumplido, ya había ido a la Cámara de Diputados y ya había demostrado suficientemente que los 9 mil millones de pesos solicitados estaban plenamente justificados y que ahora correspondía a los diputados la responsabilidad de no truncar el desarrollo de la capital mediante una reducción al techo de endeudamiento solicitado.

Bueno, si se gastaron tanto dinero en esto, aquí la pregunta es: ¿Por qué primero aceptan, junto con el PAN, o de acuerdo con los diputados de Acción Nacional, que el techo de endeudamiento quede en 7 mil millones, para después en el pleno de la Cámara de Diputados retiren su compromiso con el PAN y se sumen a la mayoría priísta en esa Cámara y acepten 6 mil millones de pesos? Tanto decimos que estaban plenamente justificados, para decimos después que con 6 mil se las arreglan.

Entonces, esto nos quiere o nos demuestra que esa solicitud posiblemente iba inflada, como cuando vende uno un coche, pido 20 para que me den 19 ó 19 y medio, y eso no se vale, no se vale porque inclusive dentro de los ajustes que se nos están presentando, en virtud del techo de endeudamiento, se incluyen partidas que no estaban contempladas en un documento que se nos entregó en una

reunión que tuvimos los diputados locales de Acción Nacional, diputados federales de nuestro partido y la dirigencia regional, en la Secretaría de Finanzas, esto fue del conocimiento de todos los medios, se nos entregó un documento de seis páginas - al rato les pasamos una copia a los medios de comunicación - donde se nos detallaba rubro por rubro en qué se iba a utilizar los 9 mil millones de pesos.

A partir de aquí y de la amplia explicación que nos dieron el Secretario de Finanzas, el Secretario de Medio Ambiente, el Secretario de Transporte y el Secretario de Obras, alrededor de seis horas estuvimos, cinco horas estuvimos en la Secretaría de Finanzas, determinamos, con base en esta información, que de los 9 mil millones solicitados únicamente 5,500, en términos globales, cumplían con las disposiciones que marca el artículo 73 constitucional. El acuerdo con el PAN en la Cámara de Diputados fue a estos 5,500 agregar una cantidad similar a la que se hubiera recibido en caso de que el Distrito Federal hubiera entrado en el fondo 4 del ramo 33, que se refiere al fondo del fortalecimiento municipal.

Esto es lo que se nos dio en la Secretaría de Finanzas, pero ahora si revisamos la página 10 del dictamen, sin explicación alguna al respecto, se hacen ajustes a partidas que sí cumplen con lo dispuesto en el artículo 73 Constitucional y voy a mencionar algunas, como ejemplo. Se le hace una reducción de 55 millones de pesos al programa número 38, construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención médica; se le hace una reducción de aproximadamente 287 millones de pesos al programa 61, construcción y adecuación para el agua potable; se le hace una reducción de 303 millones de pesos al programa 62, infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras; este programa le llevó al Secretario de Obras exponerlo hora y media, le dedicó a su exposición, y ustedes le están quitando 303 millones de pesos.

Y el Programa 73, Infraestructura para el transporte urbano, se le está disminuyendo por la vía del desendeudamiento o por el ajuste por el techo de endeudamiento, 1,145 millones. Todos estos programas que a nuestro juicio cumplen con las disposiciones constitucionales al respecto representan, el 60% de los 3,000 millones que se reducen por el ajuste al endeudamiento aprobado, 60% que sí cumple con lo establecido en la Constitución.

Hay otros programas que se ven afectados aunque no cumplan con los requisitos constitucionales, pero llama la atención que se prefiere tocar y disminuir 163 millones de pesos, alrededor de 173 millones de pesos en seguridad pública, programa número 12.

En los programas 25, 26 y 27 que se refieren a infraestructura para educación, diputado Nieto que se está durmiendo, fíjese,

la educación que a usted tanto le importa, le están quitando 67 millones de pesos, a ver qué dice usted al respecto. Y así podríamos seguir dando más ejemplos y a todo esto se le hace una reducción importante y casualmente no se toca un sólo centavo del programa comunicación social. Obviamente en época electoral hay que informarle a la gente lo que está haciendo o lo que dice que hace este democrático y revolucionario gobierno.

En la comparecencia que tuvo ante esta Asamblea el Secretario de Finanzas, a pregunta expresa de un diputado de Acción Nacional, decía que las partidas de comunicación social se tuvieron que incrementar en 1998, 3 veces más de lo autorizado por la Asamblea y en 1999 alrededor de 5 veces más lo autorizado por esta Asamblea, debido a que la ciudadanía demandaba al gobierno que le informara lo que estaba haciendo y si eso fue cierto seguramente le estaba demandando que le informara porque no veía ninguna acción de gobierno, pues aquí lo que le tenemos que contestar al gobierno es: "mientras se haga obra pública, mientras se presten los servicios, mientras se nota el cambio que tanto pregonó el señor Cuauhtémoc Cárdenas en campaña y en el ejercicio de sus funciones, la ciudadanía se da cuenta automáticamente".

Ustedes señores diputados de la mayoría saben, al igual que nosotros, que en muchos gobiernos, sobre todo municipales, pero también en gobiernos de los estados, existen algunos medios de comunicación, no todos, afortunadamente, interesados en desprestigiar a los gobiernos surgidos de nuestros partidos respectivos, la Revolución Democrática y Acción Nacional.

Yo les quiero poner el ejemplo de un caso que tengo muy en la mente, el Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, a partir de que ganaron por una diferencia de 370 votos en 1994 no hubo una sola nota en el diario más influyente de esa ciudad que no hablara mal de la administración panista, 3 años de continuos ataques a la administración panista de ese ayuntamiento. 370 votos en 1994, que se traducen en 9,500 votos de diferencia favorables en 1997. ¿Qué pasó? ¿Necesitó la población que estuviera informada? No, simple y sencillamente vio la acción de gobierno, no tuvieron que venir a decir o explicar lo que ahora que dicen que hay que saber porque no se ve nada. Entonces, si se hacen las cosas no necesitan estar gastando en este tipo de campañas, no se toca un solo peso de comunicación social.

Pero por otro lado, hay algunos ajustes inexplicables dentro de lo que se nos está proponiendo. La página 11 del dictamen nos habla de un ajuste que dice "por techo de endeudamiento aprobado", se supone que los ajustes eran una disminución; no. En lo que se refiere al Consejo de Incautación dentro de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 se está pasando de un presupuesto de 498 millones a 765 millones; por la vía del endeudamiento,

del ajuste al techo de endeudamiento se le incrementan 267 millones de pesos más.

¿Qué está pasando aquí? En primera dos cosas, en esta información que nos dio la Secretaría de Finanzas no se menciona en ningún momento el Consejo de Incautación de la Ruta 100. Entonces creo y estoy empezando a sospechar que lo que dijo hace unos días por ahí de Navidad el diputado Luis Miguel Ortiz Haro pues tiene mucho de razón, parece ser que la Secretaría de Finanzas le mintió al Congreso, le mintió a la Asamblea Legislativa, le mintió a los diputados de Acción Nacional que fuimos a escuchar sus planteamientos. No se menciona, repito, en ningún momento el Consejo de Incautación de la Ruta 100 y ahora se le incrementa 267 millones, y habría que recordar que esta empresa se encuentra en liquidación, entonces cuál es la razón de darle 267 millones de pesos adicionales; bueno, hace ratito me comentaron es para comprar algunos autobuses; bueno, entonces nunca vamos a terminar con la liquidación. Repetimos el problema o el error del Gobierno Federal que tiene una cantidad de años interminable liquidando Luz y Fuerza del Centro; no sé si esa es la intención del gobierno democrático de la ciudad de darle oxígeno eternamente, si es que conservan el poder por supuesto, a Ruta 100. Algún asunto ahí importante tendrán que deberían de explicarnos ampliamente.

Por otro lado y refiriéndome también a este ajuste y donde comentaba yo la reunión del 6 de diciembre, muy preocupado recuerdo yo al Secretario de Obras y Servicios, el ingeniero César Buenrostro, por el destino que pudiera tener la disminución. La verdad es que los secretarios que asistieron son los que menos problemas tenían, prácticamente todos los proyectos que nos presentaron cumplen con las disposiciones constitucionales y particularmente la Secretaría de Obras y Servicios era la que más cumplía con las disposiciones constitucionales.

Siendo así, cuál es entonces la razón porque se le disminuye 1,332 millones de pesos su presupuesto. A nuestro juicio, eran proyectos totalmente viables y no hay explicación alguna. Primero tocamos las obras y luego la comunicación social, o más bien nunca la comunicación social, eso es importante, ya nada más falta que lo metan en el artículo 16 de los prioritarios.

También, particularmente preocupado el ingeniero Joel Ortega respecto de los proyectos del Sistema de Transporte Colectivo y el Servicio de Transportes Eléctricos, tampoco tenía mayor problema, también cumple con las disposiciones constitucionales.

¿Por qué al Metro se le disminuye un 37% de lo que solicitó? No lo sabemos.

Por qué al Sistema de Transportes Eléctricos que tiene una urgencia muy grande, y nos lo explicó, no nada más el

Secretario de Transporte, sino el Director de la empresa, que es urgente comprar trolebuses y cada trolebús cuesta, nos decía, alrededor de 20,000 dólares; una cantidad importante. Si existe esa necesidad ¿por qué entonces se le disminuye un 65% de lo que nos presentó en el proyecto de endeudamiento, cuál es la razón? Primero, le damos en la torre al transporte, antes que a la comunicación social.

Adicionalmente, señores diputados, y antes de que se me acabe el tiempo, tampoco estamos de acuerdo en que a las delegaciones se les disminuya una cantidad considerable de recursos por la vía del endeudamiento.

Aquí de entrada les podría decir que efectivamente estaban contemplados 2,000 millones de pesos, según esto con endeudamiento para lo que ejecutaran las delegaciones. Sin embargo, si de por si comparado con un 35% en incremento global en el presupuesto a las delegaciones nada más les tocaba en promedio un aumento de 21%, ahora ese incremento se ve reducido alrededor de un 17% ¿Por qué? Porque el Congreso de la Unión, con el voto favorable del PRD no autorizó todo el techo de endeudamiento. Y se repite: primero tocamos a las delegaciones, primero le quitamos el dinero ahí donde se generan los problemas, antes que tocar un centavo de Comunicación Social.

Por el otro lado, se sigue dando pie por la vía del capítulo segundo a la contratación de nuevas plazas, de nuevos empleados, cuando ya tienen demasiados. El señor Oscar Espinosa dejó una nómina excesiva, por supuesto, pero una nómina de 212,000 empleados.

El año pasado en la exposición de motivos del Presupuesto de Egresos el señor Cárdenas nos informó que ya iba en 275,000. Curiosamente en este año ya no se nos dice cuántos empleados tiene el gobierno; seguramente ya superaron con mucho esa cifra de 275,000 empleados y todavía se les hace poco y en el capítulo segundo, que va de los artículos 35 al 37, se sigue abriendo la puerta para contratar más personal, casualmente en este año electoral, quién sabe para qué; no sé si serán las brigadas del sol a las que se refiere el diputado Ortiz Haro.

Señoras y señores legisladores: Estas razones obligan al Partido Acción Nacional, -hubiéramos querido hacer otra cosa, si ya nos habíamos puesto de acuerdo en Código Financiero, pudimos haber llegado a acuerdos-, pero definitivamente no podemos estar en favor de estas modificaciones.

Vamos a hacer un último intento, vamos a reservarnos los artículos 15, que se refiere a los presupuestos por programas y el artículo 16, que se refiere a los programas prioritarios definidos por esta Asamblea para intentar hacer alguna corrección a este incongruente Presupuesto de Egresos que nada tiene que ver con lo que vino a exponer hace unos

momentos el diputado Ricardo Martínez Atala, a quien aludo para cederle el uso de la palabra.

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, por alusiones, el diputado Ricardo Martínez Atala.

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA.- Con su permiso, señora diputada.

Mire, vamos a iniciar la exposición de una manera muy breve y aprovechamos para responder varias cosas.

Primer punto. En la medida en que se están haciendo obras en esta ciudad, y estas obras como las del Metro proporcionan a posterioridad servicios permanentes, todo gasto de inversión presenta va a significar un incremento del gasto corriente en el futuro y en muchos casos aumento de personal.

Segundo punto.- En esta ciudad ha aumentado el número de servidores públicos en áreas tan importantes como seguridad pública, servicios médicos y otras. La ciudad efectivamente da mejores servicios y tiene más personal para dar estos servicios. Si se revisa con atención la página 11 de este proyecto de decreto, de este dictamen, nos vamos a encontrar que todas las modificaciones a la baja, están explicadas por el ajuste al techo de endeudamiento aprobado, lo cual se lo tenemos que agradecer a diputados federales, que no son de la fracción del PRD.

En cualquier caso, así se tuvo que modificar el presupuesto porque el original contemplaba 3 mil millones de pesos más; pero una cifra en verdad pequeña de este presupuesto que no es en términos relativos superior a lo que en gobiernos anteriores se gastaba por el mismo concepto en el mismo programa, que es la de comunicación social, es la que le preocupa al diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Es un problema de que no quiere el diputado que este gobierno gaste en comunicación social, dice: ¿por qué tienen que gastar en comunicación social, si allá en Córdoba, Veracruz, no gastamos en comunicación social?, ¿por qué en el Distrito Federal la ciudad más grande del país el Gobierno de la Ciudad de México, tiene que gastar en comunicación social?

No hay gobierno de una ciudad de este tamaño que no gaste en comunicación social y muchas gastan más, y lo único y lo que se interpretó como un incremento de más de 3 veces, no es otra cosa, mas que el presupuesto disperso del programa de comunicación social que se distribuía en varias dependencias, que se ajustó a una sola dependencia y en un solo sentido.

Lo que tenemos es un fantasma; estamos queriendo explicar los problemas del presupuesto con el fantasma de comunicación social. Concluyo diciendo que

efectivamente el dictamen presentado puede mejorarse. Vamos a reservarnos varios artículos para mejorar el dictamen, pero es una fobia a comunicación social, que no creo que logre explicar el voto en contra de ningún partido. Gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Minjares hasta por 5 minutos para rectificación de hechos.

EL C. DIPUTADO MANUEL MINJARES.- Gracias señora Presidenta. No me tomo los 5 minutos, es muy rápido. Nada más para dejar constancia.

Dice el diputado Martínez Atala que en la página 11, están ampliamente explicadas las partidas que se ajustan gracias a una reducción en el techo de endeudamiento solicitado que fue promovida por diputados que no son de su partido. Si esto fue así, entonces por qué votaron en favor de una Ley de Ingresos de la federación que incluía únicamente 6 mil millones de pesos; la votaron junto con el PRI, con el PT, con el Partido Verde, con los independientes, con el voto en contra del PAN que mantuvo su compromiso con el PRD.

Cuando el PRD vota con el PRI, no pasa nada; cuando Acción Nacional lo hace, es lo peor que le puede pasar al país.

En comunicación social, bueno, pues sigue diciéndose aquí que es muy necesario que esta ciudad se entere de lo que dice que hace el gobierno, repito: si de verdad hubiéramos hecho una política, se hubiera hecho una política por parte del Jefe de Gobierno que mucho prometió y que nada cumplió, no tendrían por qué gastarse estas cantidades.

Nada más como referencia, 1998, el presupuesto de 37 millones de pesos; en 1999, el presupuesto fue de 79 millones de pesos; para el año 2000 se pretenden 282 millones de pesos.

La explicación es que se estaba reorganizando la Dirección de Comunicación Social y bueno ya llevamos casi dos años de este gobierno y siguen en reestructuración; muy eficientes.

Pero por último, que lástima que el diputado Martínez Atala, que tenía un tiempo valioso, ojalá ahorita que lo estoy aludiendo tenga la oportunidad de explicarnos, por qué en esa misma página 11, que se refiere a la amplia explicación que se refirió o que dice usted que hay respecto a las modificaciones, por qué no nos dice nada de Ruta-100, que está en liquidación y que no venía en el presupuesto o en el proyecto de endeudamiento, que no se entregó a los diputados de Acción Nacional, la Secretaría de Finanzas, por qué no nos dice nada al respecto, y por qué

no se nos dice nada respecto de la disminución al presupuesto de las delegaciones.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Galván, hasta por 20 minutos. No, está el diputado Luis Miguel Ortiz Haro, la diputada Raquel Sevilla, el diputado Narro y el diputado Alejandro.

Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Ortiz Haro, para razonar su voto, hasta por 20 minutos.

EL C. DIPUTADO LUIS MIGUEL ORTIZ HARO AMIEVA.- Gracias Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- De nada, señor diputado, adelante.

EL C. DIPUTADO LUIS MIGUEL ORTIZ HARO AMIEVA.- Dijo aquí el diputado Martínez Atala que lo ha dicho muchas veces, así dijo: "El presupuesto es la expresión más acabada". Este dictamen que vamos, que estamos aquí analizando, es la expresión de cómo acabar con un presupuesto.

Porque el dictamen construido y presentado como fue presentado y votado en las Comisiones Unidas, le quita las características fundamentales de presupuesto a algo que se convierte sólo en una asignación de dineros por programas y por unidades ejecutoras de gasto, pero que no tiene ningún soporte, ni ningún compromiso de qué hacer con ese dinero y en consecuencia no hay manera de evaluar.

Pero para resolver eso, nos plantean que se adiciona un artículo que obliga a la Jefa de Gobierno, en 45 días a entregar las metas. Es decir, una vez que están aprobados los dineros y que no sabremos, nadie de los que aquí voten, incluso de quienes lo hagan a favor, para qué se utiliza ese dinero.

Este dictamen resulta inaceptable, entre otras cosas porque privilegia el gasto corriente sobre el gasto de capital, al colocar el primero en casi 69%; aumenta sin justificación el monto del gasto no programable, a pesar de que se redujo en 33.3% el monto del endeudamiento neto en este año y en consecuencia los intereses y el gasto de la deuda debiera reducirse.

Sin embargo, el gasto no programable crece, eso no tiene más que una explicación, es una bolsa de dinero, por cierto generosa, que se podrá utilizar como se quiera; es inaceptable porque deja indeterminada la estructura presupuestal en términos de la clasificación económica del gasto.

La iniciativa no precisa la forma en que se va a distribuir el gasto público corriente y gasto de capital ni al interior de estos por capítulos económicos. En consecuencia, ninguno de ustedes, señores diputados, saben lo que van a aprobar;

ninguno de ustedes sabe qué van a hacer con ese dinero; ninguno de ustedes sabe en qué se va a gastar ese dinero, y eso le quita la característica de presupuesto a lo que aquí estamos revisando.

De esta forma, no existe obligatoriedad alguna para el Gobierno de la Ciudad de dar cumplimiento a ninguna actividad, programa o meta que hubiera estado considerada en la iniciativa original, porque tampoco se han establecido nuevas, y esto lo hacen con el argumento de que se redujeron los ingresos, dicen en la discusión, en 3 mil millones de pesos; la realidad es que esa reducción es apenas un poco más a 2 mil millones de pesos, 2 mil millones de pesos en 59 mil millones de pesos que se están tomando como gasto total, bueno, esto es menos del 5% del ingreso previsto, y una reducción de menos del 5% en el ingreso les ocasiona una modificación en la asignación programática y de unidades ejecutoras de gasto del 65 al 70%.

¿Y qué pasa con esa reasignación? Simplemente se acabaron las metas, simplemente se acabó la forma de medir el cumplimiento de un presupuesto, simplemente se acabaron el presupuesto y proponen entregar una bolsa de 59 mil millones de pesos para que ciertas unidades ejecutoras de gasto, a través de ciertos programas, cuyas metas no están en ningún lado, los gasten como quieran y después le informen a la Asamblea cómo lo gastaron.

Es inaceptable porque el gobierno pretende disponer de más de 59 mil millones de pesos con toda discreción, porque no existe en ese ajuste de metas, no existe la posibilidad de discutir lo que ustedes están planteando y entonces dicen: "es que del endeudamiento 700 millones de pesos se le van a quitar a la DGCOH y se los vamos a pasar al Metro", bueno, y no existe ningún planteamiento de qué deja de hacer la DGCOH sin esos 700 millones y qué hace el Metro con esos 700 millones de pesos; bueno, pero hay que mantener la palabra del candidato, el candidato dijo que el Metro no se mueve y entonces, bueno, de endeudamiento están planteando subsidiar al Metro, están planteando metérselo adicional; ese dinero no se va a poder pagar, es una irresponsabilidad.

Plantean la reconcentración de recursos del gasto de las delegaciones hacia el sector central, lo que evidentemente va contra todo propósito de descentralización que tanto han comentado. Hoy en esta propuesta de presupuesto se le otorga a las delegaciones una proporción menor del gasto total de la que se otorgaba en 1995. No han avanzado nada en la desconcentración, están engañando o pretendiendo engañar a la gente.

Pero llegamos al asunto que a nosotros nos parece más delicado de esto. Además de que no existen metas, además de que no hay manera de cuantificar los compromisos que se están haciendo, resulta que deciden hacer una

clasificación de programas prioritarios que no responden de ninguna manera a las necesidades de la ciudad.

Por un lado ponen programas prioritarios, uno que se llama "promoción del desarrollo familiar y comunitario", que tiene como meta visitar más de un millón 800,000 viviendas para concientizar familias. Y bueno, eso es un engaño, eso es dinero para brigadas en la calle, no hay manera de medir lo que están proponiendo ahí, es dinero fresqucito para pagar activistas, para pagar chalanes que distribuyan la propaganda de su candidato.

Tienen otro que se llama: "promoción y fomento industrial", que es verdaderamente un parteaguas en la ciudad que esto sea prioritario. Yo caminaba en la calle y oía gritos: ¡oiga, haga prioritario fomento industrial! Es una vacilada esto, hombre, cuando tienen por el otro lado tres programas centrales, tres, que no son asunto menor, uno se llama: "abastecimiento de agua potable", el otro se llama "infraestructura para el drenaje y el tratamiento de aguas negras" y el otro se llama "infraestructura para el transporte urbano". Y nosotros proponemos que esos que son la columna vertebral de la operación de la ciudad se consideren prioritarios y entonces el diputado Martínez Atala, y leo la estenográfica del día de ayer, nos contesta:

"Mire, no veo la razón de fondo para lo que usted propone, el programa de suministro de agua potable tiene que ver con los programas de traer agua de fuera de la Ciudad de México", estoy leyendo, "Los cuales se enfrentan continuamente a contingencias de todos conocidas, como de carácter federal o relacionadas con decisiones fuera de esta entidad, de tal suerte que si se quedan catalogados como de carácter prioritario en el momento en que estos proyectos sean cancelados por razones ajenas, sus recursos, por lo que establecemos en el 428, no se podrán transferir en ningún sentido, simplemente se subejerarán y no creo que valga la pena subejerar estos recursos cuando la cancelación sea ajena a la de la ciudad".

La del transporte, y esto es una chulada, sigo leyendo, "una parte del transporte al que estamos haciendo referencia, que es la culminación de la Línea B, se realiza en el Estado de México, o sea, no se realiza en el Distrito Federal. Yo estoy de acuerdo", dice el diputado Martínez Atala, "Con que las acciones del transporte por lo menos parcialmente deben ser prioritarias pero solamente las de la Ciudad de México, las de transporte fuera de la Ciudad de México yo creo que las debemos hacer, estamos comprometidos con éstas pero no pueden ser prioritarias para el presupuesto de la ciudad, es una incongruencia", eso dice él, efectivamente lo es lo que dijo y él lo afirma ahí.

Y por último dice: "infraestructura de drenaje y tratamiento de aguas negras, yo siento", no sólo piensa, también siente, "Yo siento que es un proyecto que está que ha sido ya muy

avanzado en la Ciudad de México, que no necesita entrar a los prioritarios, simplemente porque es un proyecto ampliamente ya desarrollado, la base fundamental de ese proyecto, del gran proyecto de drenaje profundo y de toda la red de drenaje yo creo que ya ha dejado de ser una parte de las prioridades, sigue siendo caro, pero lo hace".

Pasamos a la votación y votan en contra de que sean programas prioritarios. "Abastecer de agua potable a los ciudadanos del Distrito Federal", ese programa implica la operación de tanques, de líneas, de válvulas, de mantenimiento, de construcción de red secundaria, primaria de agua. Eso ustedes dicen que no es prioritario y pues claro, ya no nos extraña que digan que a las zonas catastrales, cero menos 15, menos 20 menos 44 no les van a cobrar más que la cuota fija, pues si no se van a preocupar por llevarles el agua, qué más da que les cobren la cuota fija o no, si no están planteando como prioritario abastecer de agua potable a los ciudadanos del Distrito Federal.

Bueno, cómo entender que la ciudad se siga inundando, que siga habiendo demandas de muchas zonas de la ciudad por red de drenaje, cuando el diputado Martínez Atala siente que esto ya está acabado, que ya es un proyecto que es caro pero se sigue haciendo por costumbre porque prioritario ya ni es; o sea, es como la inercia que seguramente les dejó Espinosa nos va a decir.

Y en el caso del transporte, resulta que no es prioritario arreglar, darle mantenimiento a la vía de la Línea 2, no es prioritario arreglar los carros, no es prioritario comprar más carros, al fin que le pueden seguir quitando carros a las líneas existentes para que funcione la Línea B, aunque los tiempos entre convoyes se vuelva más largo y quien lo pague es la gente, y por eso, por un muy mal mantenimiento el Metro cada vez transporta a menos gente, ah, pero mantienen un Metro de 1.50, un Metro que no usa ya casi nadie, la mayor parte del gasto de transporte de un ciudadano lo hace en microbuses y en taxis, a esos ya les subieron la tarifa; cada vez se transporta menos la gente en el Metro, pero no les importa; bueno, el transporte público que presta el Gobierno de la Ciudad tiene que ser un transporte barato, no importa que sea malo, no importa que sea inseguro, no importa que no tenga mantenimiento, eso lo vemos después, ahorita lo que importa es vender 1.50.

Bueno, no puede ser que se plantee seriamente que no es un programa prioritario la infraestructura del transporte urbano, no puede ser que se plantee que no son estos programas prioritarios. Nos parece que ese es un asunto verdaderamente grave. Pero es más grave cuando la petición de endeudamiento de los 9 mil millones de pesos, el documento que envía la Jefa de Gobierno a la Cámara de Diputados, que no es el mismo que envía aquí, y cuando va a la Cámara de Diputados a explicar su petición el fundamento central para pedir ese dinero es continuar con las grandes

obras que requiere la ciudad, fundamentalmente hidráulicas y de infraestructura de transportes; pero llegados a la Asamblea resulta que esos no son prioritarios, y la razón es muy simple, eh, échénle números y lo verán; esos 3 programas con todo y las reducciones que le hicieron y que señaló aquí el diputado Minjares, inexplicables de 5 mil y pico millones que tenía planteado de infraestructura para el transporte urbano a 3 mil y pico de millones, cuando no se están proponiendo más que 4 kilómetros de Metro, no están proponiendo más, o sea, no saben hacer más que eso, este año no hicieron más que 2 y medio, o sea, no dan para más y tienen el dinero para hacerlo, deciden recortarlo a 3 mil y pico; ah, bueno, pero si todavía lo recortado, sumo esos 3 programas, que éstos si fueron recortados, pero hay programas como unas cosas hermosas que tienen aquí que se llama "promoción del desarrollo familiar y comunitario, que tiene promover el bienestar y la participación comunitaria, familiar de 1 millón 908 mil personas", éstos quién sabe qué, eso no se toca, eh. 22 mil eventos culturales, artísticos, recreativos, culturales, recreativos, culturales, artísticos, culturales, cívicos, de todos llamados, incluidos unos eventos de 507 mil pesos cada uno, que solamente se explican si el Gobierno de la Ciudad pretende financiarle una parte de su matrimonio al diputado Arne y ese puede ser uno de los eventos y en cuyo caso además yo estaría de acuerdo, en el resto no se entiende para qué quieren ese dinero, éstos no se tocan, eh, ahí no se redujo un peso, eh; éstos no están en la página 11 y 12 que mencionó aquí el diputado Martínez Atala, éstos no están, éstos no se tocan, esa es lanita fresca para pagar achichincles en la calle en favor de Andrés Manuel. Eso no se toca, no se les ocurra a los diputados de las oposiciones plantear que eso se va a tocar.

Pero todavía si sumamos esos 3 programas, con todos esos recortes, son poco más de 6 mil millones de pesos. Bueno, naturalmente la Jefa de Gobierno les dijo; a ver, si sus 428, sus tal y cual, pero están ustedes locos si creen que van a meter 6 mil millones de pesos más ahí para que no los pueda mover como se le dé la gana, y entonces sí, claro, está bien, o sea, como quien dice cada quien se queda con su golpe, le dejo en los prioritarios nada más lo que le interesan, que son los electorales y lo demás lo dejamos en los no prioritarios, total, los movemos como queramos, al fin que el diputado Minjares ya dijo que va a votar a favor. Bueno, y así lo hacen; así lo hacen. No estoy en ninguna medida exagerando.

Pero lo último que si no puedo evitar es, plantean permanentemente, durante toda la discusión de este paquete, que ustedes diseñan políticas para los más pobres, porque ustedes están comprometidos con los más pobres. Eso es una mentira; eso es una mentira, y les voy a dar dos datos. El primero. El día de anteayer diputados del PRD, aliados con diputados del PAN decidieron que los Estados más ricos del país son los que merecen tener mayores recursos federales del Fondo de Aportaciones. Porque si ustedes

me plantean que aquí hay más pobres que en Oaxaca, si ustedes me plantean que aquí hay mayor pobreza que en Oaxaca, bueno, verdaderamente ya llegamos a un nivel en el que no se puede discutir. Y resulta que a Oaxaca la redujeron de 254 millones que tenía la propuesta del PRI a 68 millones; le quitaron el 75% a Oaxaca. Al Estado de México también, naturalmente, ah, pero a los Estados que gobierna el PAN o el PRD en esta nueva alianza que de pronto les da asquito y entonces Minjares viene dice: En esta parte ya no estamos de acuerdo y Martínez Atala dice: Ustedes aún votan con el PRI, pero al fin de cuentas ya se entendieron, se agarraron ahí sus manos y todo. Resulta que nada solamente le redujeron los recursos a los Estados más pobres y solamente se los aumentaron a los más ricos; así entienden ustedes la distribución de los recursos.

Pero no solamente eso, resulta que han estado cacareando durante todo el día su preocupación por los jubilados, su preocupación por los pensionados y decidieron el día de anteayer votar en contra de que se aportara dinero del fondo para apoyo a pensiones, a pensionados del ISSSTE y de PEMEX, que no son un número menor, que son tan ciudadanos, como aquellos a los que les dispusieron el fondo que sí se aprobó; bueno, no puede tener mas que una visión: Siguen ustedes pensando, seguramente, como nos lo dijeron en aquella discusión de que los mercados la arman la tos, es que los locatarios son priistas. Entonces, ahora los jubilados del ISSSTE todos son priistas.

Por favor, no es posible que ustedes sean tan inconsecuentes entre lo que plantean y entre lo que hacen. No pueden ...

LA C. PRESIDENTA.- Señor diputado, se le recuerda que se le venció su tiempo.

EL C. DIPUTADO LUIS MIGUEL ORTIZ HARO.- No pueden ustedes estar manteniendo una postura que solamente engaña.

Finalmente, los electores serán quienes juzguen el uso de estos recursos. Pero queda claro..

LA C. PRESIDENTA.- Señor diputado, se le venció su tiempo.

EL C. DIPUTADO LUIS MIGUEL ORTIZ HARO.- A ver, Presidenta, pida usted que no profieran ese tipo de cosas tan desagradables aquí.

LA C. PRESIDENTA.- Le ruego continúe.

EL C. DIPUTADO LUIS MIGUEL ORTIZ HARO.- De modo que sí, espero les haya quedado claro, no solamente vamos a votar en contra, sino que ustedes están

cometiendo una gravísima irresponsabilidad al no saber lo que van a aprobar.

Gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Se concede el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, para alusiones, al diputado Ricardo Martínez Atala.

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA.- Cuántos cientos de miles de millones le repartieron a los banqueros, diputado, y me viene usted a reclamar de que a la Ciudad de México con sus propios recursos no le puedan devolver 700 millones de pesos, carambas; esto no tiene ninguna relación con la verdad.

El problema es que a nosotros nos llegó a esta Asamblea un presupuesto debidamente integrado, con metas y objetivos absolutamente cuadrado. Resulta que en la Cámara de Diputados le quitan 3,000 millones y esos 3,000 millones abarcaban una serie de programas y abarcaban una serie de dependencias: todo eso se tuvo que corregir y ahora ya no hay metas; pues no, diputado, ya no hay metas, cómo quiere que haya metas si ya se recortaron esos 3,000 millones y después nosotros aquí hacemos otras modificaciones. Es como pensar, es que la hierba ya creció, diputado, las cosas cambiaron, no pueden estar las cosas inamovibles; es como pensar que las cosas no cambian de un día para otro.

Si usted no sabe, en los periódicos salió que la Ley de Ingresos del Gobierno Federal recortó 3 mil millones al techo de endeudamiento propuesto y desde luego afectó esa serie de programas y no afectó al 44% del presupuesto en la página 11 que yo le señalé hace rato, ahí viene estrictamente qué fue lo que afectó.

Pero además de todas estas cuestiones, efectivamente la Jefa de Gobierno no presentó lo mismo a la Asamblea que a la Cámara de Diputados; a nosotros no nos tiene que pedir la solicitud de endeudamiento, es un documento distinto y lo que tenía de distinto es que fue presentado exclusivamente en términos programáticos a la Cámara de Diputados y aquí fue presentado.

Sí, diputado, aquí fue presentado en términos administrativos, pero en el tomo 2 y en el tomo 3 viene el desglose, se le hace una lectura simple y si no lo saben leer, yo los asesoro y les digo cómo se lee y cómo cuadran las cifras; esto se explicó, en su tiempo lo hemos explicado 4 veces.

Yo en cambio yo sí tengo que reconocer la congruencia del PRI: lleva más de 2 años refiriéndose al presupuesto, haciendo cuentas que terminan en puros cuentos. Llevamos 2 años en que cada vez que hablamos del presupuesto, nos vienen a quererlo descalificar con mentiras y eso no lo podemos aceptar. Gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Ortiz Haro, por alusiones hasta por 5 minutos.

EL C. DIPUTADO LUIS MIGUEL ORTIZ HARO.- Con su permiso señora Presidenta.

Estaba atento a escuchar al diputado para ver, pero digo la verdad es que no hay forma, digo no se ayuda, y viene y hace unos estertores; yo tengo ahí si quiere, algún Peptobismol, alguna cosa si le cayó mal algo, pero viene aquí y ¡mmgggg! No tiene porqué hacer eso. Mire, yo solamente le quiero sugerir a usted que haga caso a su coordinador.

Hoy leí en un diario capitalino que su coordinador dijo: "Entre mis propósitos de año nuevo, está a destinar más tiempo a actividades artísticas", o sea que ustedes creen que el circo que han hecho aquí ya los hizo artistas, ya lo piensan como profesión o sea que se pueden seguir así como profesión.

Luego dice: "que entre todos estos propósitos", quién sabe cuáles son los demás "el más importante que tengo, es el de reforzar mis estudios". Súmese usted a ese propósito; usted también refuércelo; si le podemos ofrecer una beca al diputado Batres para que acabe la prepa, porque no podemos conseguir dos. No se preocupe, refuerce sus estudios y entonces podremos discutir.

Ese me parece el punto central. No hay ninguna respuesta a por qué ustedes deciden que el abastecimiento de agua potable, el sistema de drenaje y el sistema de transporte urbano, no es un programa prioritario, ni tampoco pueden explicarle a la gente para qué van a aprobar esos 59 mil millones de pesos. No pueden decirle a la gente para que están aprobando ese dinero; no pueden decirle a la gente con qué responsabilidad le están dando al gobierno, ¿para hacer qué? no tienen idea.

Súmense, yo les ofrezco, no llego a 37, pero si juntamos algunas bequitas y sigan estudiando, refuércense.

LA C. PRESIDENTA.- Se concede el uso de la palabra por alusiones al diputado Francisco Chiguil, hasta por 5 minutos.

EL C. DIPUTADO FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA.- Con su permiso diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, señor diputado.

EL C. DIPUTADO FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA.- Yo creo que el ábaco que les dieron tampoco lo han sabido utilizar correctamente.

Nosotros efectivamente vamos a aprobar un Presupuesto diferente, y se lo voy a demostrar al diputado que me antecedió en la palabra.

El gasto que está destinado a delegaciones es de 9 mil 906 millones, que nunca en la historia de esta ciudad se habían destinado tantos recursos a delegaciones, y representa un 23% del presupuesto total y esto es un avance importante en materia de descentralización del recurso hacia las delegaciones.

En ninguna administración priísta se habían destinado siquiera el 16% de estos recursos, y les voy a poner otro ejemplo, porque sus datos son incorrectos. En Gustavo A. Madero, para este año, se van a ejercer mil 246 millones, que representan un 39% del presupuesto asignado en este año; y en Iztapalapa se va a asignar un presupuesto de mil 377 millones, que representa el 53 por ciento de incremento con respecto al presupuesto de 1999.

Y si esto no es un avance, dado que el gasto per cápita era menor que el conjunto de todas las delegaciones, pues sencillamente las aseveraciones de este diputado afirman que van a votar en contra porque no saben lo que van a votar; porque no tienen idea de estas cifras; porque sus cálculos son incorrectos y nosotros quisiéramos aquí enfatizar, preferimos el subejercicio a poder asignar los bonos exorbitantes que en administraciones pasadas se asignaron los funcionarios, y nosotros aquí enfatizamos: no estamos de acuerdo en la forma que el mismo Gobierno Federal ha utilizado para asignar pensiones exorbitantes a sus funcionarios públicos, y esto es la manera en que ellos ejercen su presupuesto y es contra lo que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo.

No estamos de acuerdo en que se utilice el presupuesto para poder pagar copias de más de mil 500 pesos; no estamos de acuerdo en que el presupuesto se utilice para incrementar la riqueza familiar y que se utilice la función pública para poder incrementar la ganancia personal.

Yo creo que esa es la gran diferencia que tenemos con respecto a las administraciones anteriores. Por eso hoy estamos destinando más del 44% del gasto a los programas prioritarios, cosa que tampoco en ninguna administración priísta se pudo asignar; a lo más que llegaron fue al 30% y nosotros estamos asignando el 44% de este recurso.

Y si están en contra de este presupuesto, es porque no saben que la seguridad pública, por ejemplo, tiene incrementos de cerca del 50% y esto es un avance también que pretende resolver el problema de la inseguridad en la ciudad, y como estos tenemos muchos ejemplos, pero no lo van a entender ni con las mejores computadoras, porque no las saben utilizar. Si no saben utilizar el ábaco, difícilmente podrán utilizar los grandes adelantos que existen en la informática.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor diputado.

Se le concede el uso de la palabra, por 5 minutos, al diputado Ricardo Martínez Atala, por alusiones.

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA.- Yo no sé por qué el diputado del PRI se empeña en elevar el debate de esta discusión, cambiar la perspectiva, iniciar con insultos. Vamos a discutir el problema de fondo.

El problema de fondo es este: Mire, hace más de 10 años en este país, hace 12 años en este país, hubo el fraude electoral más grande la historia de este país y después de ese fraude electoral, por el cual se hizo Presidente un extraño personaje que ahora se encuentra en Dublín, durante años - ahorita en Acapulco, dicen, regreso un ratito, y su hermano en Almoloya - durante años, durante años y años, elección tras elección vimos los fondos de solidaridad, los fondos del Pronasol, los fondos de Progresá tratando de comprar la conciencia y el voto de los ciudadanos de este país.

En Guerrero, René Juárez no es gobernador digno de este país, llegó a ser gobernador comprando en las comunidades pobres el voto de los guerrerenses, cuando todos sabemos en este país que la elección la ganó Felix Salgado Macedonio, y esos fondos, esos fondos que utilizaron para comprar los votos de los guerrerenses durante la última elección eran fondos federales y fondos estatales.

Con qué autoridad viene el diputado ahora a decir: "es que a lo mejor ustedes piensan utilizar este presupuesto para gastar el dinero en brigadas del sol" y no sé qué tantos cuentos. El burro viene a hablarnos de orejas.

Que no nos vengán con esos cuentos y si van a votar en contra que voten, pero que no lo enmascaren en un discurso vil, porque en este país quien durante años ha utilizado los fondos federales para financiar las campañas electorales de todos sus candidatos, desde el nivel municipal hasta el nivel de la Presidencia de la República, se llama Partido Revolucionario Institucional, esa es la historia del PRI y esa es la historia del fraude electoral moderno en este país, y no nos vengán a engañar.

Los mexicanos, los mexicanos no queremos más fraude electoral, los mexicanos no queremos que se utilicen los fondos públicos con estos fines, el PRD no lo va a hacer, no tiene por qué hacerlo, pero en cualquier caso, cualquier reclamo de esa naturaleza se lo podríamos aceptar a cualquier organización política o ciudadana que durante años su trayectoria lo hubiera marcado como de lucha por la democracia y no por el antígono de la antidemocracia, que es el PRI.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Se concede el uso de la palabra, para razonar su voto, a la diputada Raquel Sevilla, hasta por 20 minutos.

Se solicita al público asistente guarde orden y silencio para escuchar a la oradora.

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Con su permiso, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Me permite, señora diputada?

Se solicita al público asistente guardar orden y abstenerse de hacer cualquier manifestación, guardar silencio y escuchar a la oradora.

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Si es escandaloso el reclamo histórico que hace el PRD de los 34,000 millones de pesos al IPAB, es mucho más escandaloso que a la Ciudad de México le cueste 36,000 millones de pesos pagarle a un gobierno tan holgazán y tan ineficiente como el que tenemos en el Distrito Federal, eso sí es un verdadero escándalo, para empezar.

En diferentes ocasiones se ha manifestado que el presupuesto es el instrumento mediante el cual el gobierno le tiene que servir a la ciudadanía y nuevamente se cometen gravísimos errores, empezando por el ámbito de competencia, es decir, otra vez la Jefa de Gobierno viene a manipular las propuestas tanto de la Asamblea como del Poder Judicial; están violando categóricamente el artículo 388 del Código Financiero, están violando el artículo 394, ya que no contienen objetivos y metas también del Código Financiero.

Me parece que el único que más o menos entendió cuál era el motivo de realizar un presupuesto, sigo insistiendo, es el diputado Chiguil, él entendió que la mayor concentración de pobres efectivamente está en Iztapalapa y en Gustavo A. Madero, y viene y nos dice que en este año hay mil y tantos millones de pesos para cada una de las delegaciones, claro, hay que sumar las inflaciones de los años anteriores y eso obviamente nos da el resultado, pero yo sí quisiera rebatirle al diputado Chiguil, que el peor presupuesto administrado históricamente desde 1988 en esta ciudad es éste, el del gobierno cardenista, donde hay una reducción sustantiva de un 34.6% en las metas. Efectivamente, como otros diputados mencionaron, no supieron más que hacer dos kilómetros y medio de Metro, por ejemplo; violaron también el artículo 396 del Código Financiero para la elaboración de los calendarios a los que se refiere el proyecto de presupuesto.

Ustedes dicen que el gobierno democrático no está ocupado en los bonos discrecionales otorgados a funcionarios públicos, sin embargo hay discrecionalidad, toda vez que se le entregó un 23% de subsidio en los programas

vivienderos, por ejemplo del diputado Javier Hidalgo. Ahora entiendo porqué de repente hay dueños que son beneficiarios por ejemplo en la Calle de Tuxpan, que son del PRD, ¿quieren nombres? Javier Hidalgo.

El propio diputado Ricardo Martínez Atala ayer reconoció que no había POAS; hay una versión estenográfica de la reunión que se tuvo ayer en Comisiones Unidas y preparó un texto mal hecho donde estaba emplazando a la Jefa de Gobierno a darle 45 días más para la elaboración de los programas operativos anuales...

LA C. PRESIDENTA.- ¿Con qué objeto, señor diputado?

EL C. DIPUTADO FERNANDO DE GARAY Y ARENAS (Desde su curul).- Si pudiéramos verificar el quórum.

LA C. PRESIDENTA.- Señor diputado, le recuerdo que no estamos en el supuesto de una votación, estamos escuchando a la oradora.

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Señora Presidenta, le recuerdo que se está votando y estoy dando ...

LA C. PRESIDENTA.- Está usted razonando el voto.

EL C. DIPUTADO FERNANDO DE GARAY Y ARENAS (Desde su curul).- Finalmente va a terminar en una votación, le ruego que no le haga caso al asesor y pida el quórum, por favor.

LA C. PRESIDENTA.- Le recuerdo que es en el momento de la votación en el que se verifica el quórum. Quisiera que continuáramos escuchando a la oradora.

Señora diputada, si es tan amable de continuar.

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- No sé si alguien trae alguna Ley Orgánica para que la señora Presidenta le dé lectura a la Ley y al Reglamento, para que se verifique el quórum.

EL C. DIPUTADO FERNANDO DE GARAY Y ARENAS (Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Perdón, señor diputado?

EL C. DIPUTADO FERNANDO DE GARAY Y ARENAS (Desde su curul).- Dé lectura, por favor.

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la secretaría a leer el artículo 113 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.

LA C. SECRETARIA.- Artículo 113.- Al momento de cerrarse un debate y antes de proceder a recoger la

votación, el Presidente ordenará a la secretaría y a la Oficialía Mayor que hagan el anuncio correspondiente a fin de que todos los diputados presentes en el recinto pasen de inmediato a ocupar sus asientos en el salón de sesiones y puedan emitir su voto.

En el caso de que no exista quórum al momento de iniciar una votación, el Presidente podrá suspender la sesión y tomar las medidas que sean necesarias para cumplir dicho requisito. Si aún no se logra el quórum deberá clausurar la sesión y citar para la próxima.

En caso de que algún diputado objetara la existencia de quórum necesario dentro de algunos de los supuestos requeridos en el presente reglamento, podrán solicitar al Presidente que constate él mismo, quien ordenará a la secretaría pasar lista para verificar el número de diputados presentes. De no existir el quórum, el Presidente levantará la sesión.

EL C. DIPUTADO FERNANDO DE GARAY Y ARENAS.- Justamente es lo que estamos solicitando.

EL C. DIPUTADO RENE ARCE ISLAS (Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Sí, señor diputado, ¿con qué objeto?

EL C. DIPUTADO RENE ARCE ISLAS.- Señora Presidenta, creo que está muy claro al respecto de que solamente en caso de que haya un procedimiento de votación; estamos escuchando a la señorita oradora y entonces es criterio en todo caso de usted, señora Presidenta, si lo quiere hacer, pero es muy claro el reglamento, solamente cuando hay un procedimiento de votación y me parece que no estamos en ese caso, estamos escuchando en este caso a una oradora.

LA C. PRESIDENTA.- Favor de continuar la oradora con su razonamiento de voto.

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Yo le sugeriría a la señora Presidenta que lea el último párrafo otra vez del artículo 113.

LA C. PRESIDENTA.- Señora diputada, se le ruega continuar con su intervención.

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Bueno, ya hablamos de las violaciones, ya hablamos de los escándalos, por ejemplo en el caso del diputado Javier Hidalgo; ya hablamos que el propio diputado Ricardo Martínez Atala reconoció que no estaban elaborados los POAS y que había invitado a la Jefa de Gobierno a que en un plazo no mayor de 45 días los tuviera listos. Lo preocupante es que en esos 45 días no se puede paralizar a esta ciudad.

Las quejas históricas que presenta el Partido de la Revolución Democrática de repente me hacen recordar no que estamos en México, sino que estamos en Israel frente al muro de las lamentaciones.

EL C. DIPUTADO FERNANDO DE GARAY Y ARENAS (Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Sí, señor diputado, ¿con qué objeto?

EL C. DIPUTADO FERNANDO DE GARAY Y ARENAS (Desde su curul).- Es una moción de orden, y no sé con qué intención se resiste usted a pasar el quórum; yo creo que debe pasar lista y esta en el último párrafo que acaba de leer la señora secretaria del propio artículo 113, y si se refiere usted al 106 tendrá una subrayada en ese sentido. Yo le ruego que pase lista para verificar el quórum de la Asamblea.

LA C. PRESIDENTA.- Señor diputado, primero le solicito respeto a esta Presidencia, no es ninguna necesidad, simplemente estamos cumpliendo con el reglamento. Yo le ruego a la oradora que continúe, por favor.

EL C. DIPUTADO FERNANDO DE GARAY Y ARENAS (Desde su curul).- No hay ninguna falta de respeto, estamos simplemente señalando lo que estipula el ordenamiento legal aplicable, y solicitando insistentemente que se aplique, nada más.

LA C. PRESIDENTA.- Para eso se leyó el artículo 113, señor diputado. Yo le solicito a la oradora continúe con su intervención.

EL C. DIPUTADO FERNANDO DE GARAY Y ARENAS (Desde su curul).- Señora Presidenta, el párrafo que se leyó exactamente indica que debe de verificarse el quórum.

LA C. PRESIDENTA.- Así es, pero habla claramente de la votación, señor diputado. Entonces yo le agradecería...

EL C. DIPUTADO FERNANDO DE GARAY Y ARENAS (Desde su curul).- Si quiere usted, se lo leo.

LA C. PRESIDENTA.- No. Le pido primero respeto a esta Presidencia.

EL C. DIPUTADO FERNANDO DE GARAY Y ARENAS (Desde su curul).- Todo el respeto tiene.

LA C. PRESIDENTA.- Y en segundo lugar, yo le pediría nuevamente entonces a la Secretaría que volviera a leer el mismo artículo que ya leyó.

EL C. DIPUTADO FERNANDO DE GARAY Y ARENAS (Desde su curul).- Por favor, y si lee además el 106.

LA C. PRESIDENTA.- Si me hace favor de escucharme, señor diputado, le estamos dando una instrucción a la secretaria para que lea el artículo en cuestión.

EL C. DIPUTADO FERNANDO DE GARAY Y ARENAS(Desde su curul).- Si me permite hablar, sería importante leer el 106 y el 113.

LA C. PRESIDENTA.- Se instruye a la secretaria para que lea el artículo 106 y el artículo 113.

LA C. SECRETARIA.- Artículo 106.- “En cualquier estado del debate un diputado podrá pedir la observancia del reglamento formulando una moción de orden. Al efecto, deberá citar el precepto o preceptos reglamentarios cuya aplicación reclama. Escuchada la moción, el Presidente resolverá lo conducente”

LA C. PRESIDENTA.- Señora secretaria, podría leer el artículo 113, nuevamente.

LA C. SECRETARIA.- Artículo 113.- “Al momento de cerrarse un debate y antes de proceder a recoger la votación, el Presidente ordenará a la secretaria y a la Oficialía Mayor que hagan el anuncio correspondiente a fin de que todos los diputados presentes en el recinto pasen de inmediato a ocupar sus asientos en el salón de sesiones y puedan emitir su voto.

“En el caso de que no exista quórum al momento de iniciar una votación, el Presidente podrá suspender la sesión y tomar las medidas que sean necesarias para cumplir dicho requisito. Si aún así no se logra el quórum, deberá clausurar la sesión y citar para la próxima.

“En caso de que algún diputado objetara la existencia de quórum necesario dentro de alguno de los supuestos requeridos en el presente reglamento, podrá solicitar al Presidente que constate el mismo, quien ordenará a la secretaria pasar lista para verificar el número de diputados presentes. De no existir el quórum, el Presidente levantará la sesión”.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señora secretaria.

Una vez más se pide a la oradora que continúe con su intervención. Una vez más esta Presidencia hace una moción para que la señora oradora, la señora diputada continúe con su intervención.

EL C. DIPUTADO RODOLFO PICHARDO MENDOZA (Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Perdón, el señor diputado Pichardo y luego el diputado Bortolini. ¿Con qué objeto?

EL C. DIPUTADO RODOLFO PICHARDO MENDOZA (Desde su curul).- A efecto de que si la oradora está en la idea de que nos encontremos en los supuestos anteriores, de que

llevemos a cabo la votación y se verifique el quórum, pues si está dispuesta a declinar el continuar tomando la tribuna y en ese sentido iniciamos el proceso de votación y entonces sí que se haga la verificación del quórum correspondiente y podamos avanzar. Que sea también sensible para poder trabajar en este órgano legislativo.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor diputado.

Diputado Bortolini ¿con qué objeto?

EL C. DIPUTADO MIGUEL BORTOLINI CASTILLO(Desde su curul).- Señora Presidenta, yo sugeriría con todo respeto que hiciera uso de las facultades que a la Presidencia le concede el artículo 106 y en este momento usted podría hacer uso de sus facultades y solicitar a la oradora que continúe, haciendo uso de sus facultades.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor diputado.

Una vez más se ha hecho y lo volvemos a hacer, volvemos a solicitarle a la oradora continúe.

Ahora, en ánimo de destrabar, al igual que hace rato y teniendo en cuenta que los diputados nos están pidiendo violar el reglamento, pero con el ánimo de pasar y continuar con esta sesión, que es la sesión del presupuesto, le solicitamos a la secretaria, si es que la oradora no quiere continuar, se le hace otra vez la moción: Señora diputada, ¿quisiera usted continuar?

EL C. DIPUTADO FERNANDO DE GARAY Y ARENAS (Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Perdón, le estoy preguntando a la oradora ¿me permite? Permítame un segundo.

Señora diputada, ¿quisiera continuar?

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Sí, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, señora diputada.

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Yo pudiese entender desde un punto de vista sensible al diputado Pichardo que es una de las personas también inteligentes de esta honorable Asamblea.

EL C. DIPUTADO FERNANDO DE GARAY Y ARENAS (Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Señor diputado, ¿con qué objeto?

EL C. DIPUTADO FERNANDO DE GARAY Y ARENAS (Desde su curul).- Señora Presidenta, es una moción de orden. Si usted no la quiere acatar únicamente lo digo para

que quede registrado en el Diario de los Debates que hay, a mi juicio, un incumplimiento del 106 y del 113 y del 35 de la Ley y que eso es sumamente grave para la Presidencia de una Mesa Directiva.

Gracias, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- De nada, señor diputado.

Señora diputada puede continuar con su intervención, por favor.

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Gracias señora Presidenta.

Me refería al diputado Pichardo que es una persona a la que le tengo afecto y mucho respeto. Creo que por sensibilidad a lo mejor declinaría, pero fíjense que no puedo, por una sola razón: por congruencia política. No puedo, porque no se puede seguir permitiendo un juego de tantas medias verdades y de tantas grandes mentiras por parte del PRD.

Que pena que ayer usted no haya estado en la reunión de las Comisiones Unidas, cuando menos para escuchar todas las propuestas que se le hicieron en tiempo y forma al diputado Martínez Atala y que él consideró y en este momento ahorita vienen y cambian todo el contexto.

Me parece que entre las preguntas que debemos hacer es reservar el artículo 13 sobre el costo financiero de las deudas correspondientes a las entidades paraestatales comprendidas en el artículo 6 del decreto inicial que envió la Jefa de Gobierno, toda vez que hubo una reducción de 3 mil millones de pesos sobre la deuda y en el dictamen y proyecto de decreto de presupuesto están dejando exactamente la misma cantidad, me refiero al artículo 13, donde existen 654'530,102 pesos; es un artículo que es importante reservarse. Obviamente el artículo 15 también y el artículo 16.

Aquí se han hecho una serie de alusiones a la administración de Oscar Espinosa Villarreal y precisamente yo creo que muchos de nosotros tenemos la voluntad de que no se repita ese esquema.

Refiriéndonos precisamente al marco de transporte y aquí no quisiera que se tomara como una alusión de tipo personal, me parece que las mañan más grandes que se dieron en este rubro fue durante la gestión del licenciado Manuel Camacho que aprendió muy bien Joel Ortega. No queremos que se repita otra vez los esquemas del Grupo Havre, porque para allá van las licitaciones por ejemplo con grupos como Mercedes Benz y eso se lo podemos preguntar al propio ingeniero Joel Ortega.

Se habla de las escandalosas y muy escandalosas pensiones como la de Gurriá y a lo mejor como la del Presidente y toda la gente del ISSSTE, pero también tenemos que hablar de los escandalosos contratos que por cierto aquí hay una copia de ellos, con los que se benefició el ingeniero Cárdenas durante los años 80, que además existen copias como es el caso de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

El PRD dice que la oposición hace cuentos, porque no sabe hacer cuentas; yo diría que es a la inversa. El PRD acusa que vio al PRI comprar con los fondos de solidaridad, con los fondos de Pronasol las conciencias de los guerrenceros, cuando menos los vio; vio comprar, porque además los compraron a muchos de ustedes, con todo respeto se los digo. Les llegaron al precio a muchos. Si no, cómo podemos entender que hayan crecido tantas organizaciones políticas como la Nueva Tenochtitlan, por ejemplo, que le costó 750 millones de pesos al gobierno anterior. Eso también es una compra.

Lo peor que le puede suceder a una ciudad es tener gente que se crea redentora de la democracia, que se sienta administradora cuando siempre ha vivido en una pobreza extrema o que dicen que ha vivido en una pobreza extrema, porque yo no creo en los pobres que traen reloj Longinnes y Bulova como muchos de los diputados del PRD; yo no creo en los pobres que dicen que van a defender a los pobres y traen camionetas Windstar, y que se les olvida, como hace días les decía, que habían comido tacos en la esquina y ahora se dicen: vamos al restaurante Heritage, no. Esos pobres con barriga llena no sirven y dan vergüenza.

Decía el diputado Chiguil que ellos estaban en contra del enriquecimiento de las familias. Yo diría que todo gobierno democrático tiene que ir en función de que cada familia tenga lo suficiente para vivir.

A mí me gustaría que, en varios párrafos de la versión estenográfica de la reunión que se tuvo ayer en comisiones unidas, el diputado Martínez Atala, más que como diputado, como caballero y como hombre, no quedara como el pinocho del año, ya se va a acabar, que por primera vez dijera la verdad.

Ayer sostuvo que no había programas operativos anuales. Por ese mismo motivo no se puede aprobar este aborto de presupuesto, porque yo no le puedo llamar de otra manera. No se puede aprobar algo que está hecho con los pies, y vienen aquí a curarse en salud y a rasgarse las vestiduras, no son judíos; se siente, pero no lo son. Pueden que sean en el sentido de que son miserables, pero no son judíos.

Se vienen a rasgar aquí las vestiduras a decir que es un presupuesto generoso para las clases más necesitadas, y por otro lado el diputado Martínez Atala admitió categóricamente que tenía que revisar el clasificador por

objeto del gasto, cuando esa es una cuestión de la competencia del Ejecutivo y no del Legislativo.

Admitió que estaba haciendo una doble tarea, pero además muy mal hecha, aunque chiflen compañeros, no importa, todavía no se me agota el tiempo, fíjense que faltan 8 minutos. Y les duele, les duele profundamente, absolutamente les duele, por eso se los digo, para que les duela más, me gusta poner el dedo en la llaga. Ha de ser bastante doloroso ser tan holgazanes y tan improductivos y estar aquí viniendo a aplaudir y que les paguen por venir a aplaudir, algo que ni ustedes entienden.

Señora Presidenta, le pido por favor...

LA C. PRESIDENTA.- Sí, permítame señora diputada.

Le solicito al público asistente, tanto en galerías como en las gradas de acá arriba, y a los diputados y a quienes están acá abajo, guarden silencio por favor y pongan atención a la oradora.

No vamos a permitir ninguna manifestación. Por favor escuchemos a la oradora.

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Señora Presidenta, le quiero hacer una solicitud: si de parte de los compañeros que están en las gradas se sienten tan lastimados por escuchar las verdades, le voy a tener que solicitar que aplique el reglamento y los desaloje de las galerías. Yo se lo pido por favor.

LA C. PRESIDENTA.- Yo le pediría señora diputada que continúe por favor.

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Bueno, pues estábamos hablando que el peor de los casos que le puede suceder a una ciudad es tener una tan pésima y absoluta ignorancia de administración.

Pueden estar ahorita charlando, pueden estar tomando café, pueden estar perdiendo el tiempo, pueden hacer lo que quieran, siempre lo han hecho. Pero como la sociedad ya no les cree, como ese anochecer tan largo de que hablaban, ese sol se eclipsó, eso es algo que les duele mucho. Saben que no van a poder recuperar la ciudad.

Yo quiero, en el ánimo de que después no vaya a haber acusaciones, porque son de los que avientan la piedra y esconden la mano, yo quiero reservarme el artículo 13, el artículo 15, el artículo 16, con el ánimo de que podamos sacar un presupuesto digno para esta ciudad, de lo contrario tendremos que venir aquí a argumentar que si no hay programas operativos anuales en las unidades ejecutoras de gasto calendarizados, esta Asamblea tiene la facultad de

veto con el Jefe de Gobierno y se tendrá que solicitar, en un punto de acuerdo, que se aplique el ejercicio anterior más el factor de inflación, para los que quieran seguir chiflando eh, porque esta Asamblea tiene ésta facultad y se requiere una tercera parte para hacerlo.

Por último, sería importante sugerirle al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se incluyera el programa 60 y 61, 62, que los pusieron como no prioritarios, que los pusieran como un programa prioritario.

Y una pregunta de reflexión para la Jefa de Gobierno. Las cuestiones del Desarrollo Integral de la Familia generalmente como era Jefe de Gobierno y no Jefa de Gobierno, las atendía la esposa del Jefe de Gobierno. En este caso a mí me gustaría preguntarle a la Jefa de Gobierno: ¿Quién va a atender las cuestiones del DIF, su actual esposo o el anterior? Esa es una pregunta que me gustaría que me contestara. Se va a ver lindísimo de mandil, repartiendo desayunos y no vendiéndolos, como en su tiempo lo hizo la UPNT.

LA C. PRESIDENTA.- Se concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos, para razonar su voto, al diputado José Narro Céspedes.

EL C. DIPUTADO JOSE NARRO CESPEDES.- Con su permiso, Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados:

Queremos inicialmente aclarar una situación: en la Ley de Ingresos a nivel federal el Partido del Trabajo sostuvo propuestas, como fue también la cuestión del techo de endeudamiento para el Distrito Federal y al momento de la votación aparte de nosotros, una parte importante de la fracción del PAN también votó a favor de la Ley de Ingresos, eso también habría que señalarlo y, bueno, nosotros teníamos algunos elementos que nos hacían dudar de la propuesta final del paquete social, entre otros el apoyo diferenciado a los Estados, donde algunos Estados, el 45% de ese fondo se repartió en 5 Estados, que son los más industrializados del país pero, bueno, este es tema del Congreso Federal.

Nosotros ahí expresábamos de alguna forma nuestra desacuerdo y habíamos incorporado el criterio de índice de marginalidad para que se repartiera el fondo y resultaran favorecidos estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, los Estados más pobres del país, eran otros criterios de distribución del fondo, lamentablemente pues se tuvo que construir un planteamiento de consenso y esta propuesta no fue aprobada al final.

Pero, bueno, como ya lo mencionamos en nuestra intervención acerca de la Ley de Ingresos, creemos que si bien los recursos que se recaudarán para el año 2000 son

insuficientes, es aún más grande la carencia de servicios e infraestructura que la ciudad demanda, por lo que este Presupuesto de Egresos, que si bien es mayor al operado durante el presente año, deberá destinarse en gran medida a superar los rezagos en la prestación de servicios de infraestructura que debieron suspenderse.

Conviene recordar que si en su momento el anterior Jefe de Gobierno, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, creyó que podía superar rezagos, vicios y burocratismo, se encontró con obstáculos difíciles de superar.

Vemos que hacen falta escuelas, clínicas hospitalarias, servicios, infraestructura hidráulica, mantenimiento a las vías de comunicación, un adecuado sistema de transporte público, mantenimiento a la cinta asfáltica, servicios, es por eso que afirmamos que los recursos son escasos, vivienda, ante todo este cúmulo de carencias ha sido menester que se prioricen las necesidades, es por esto que en esta misma soberanía se han propuesto determinados programas prioritarios de los cuales adquieren singular relieve los relativos a la dotación de infraestructura hidráulica, de transporte, programas de atención social a grupos marginados, así como aquellos destinados a la educación y a la salud.

No obstante lo anterior, observamos que el proyecto del dictamen que considera recortes al presupuesto original del Ejecutivo por 3,000 millones de pesos, derivado de la autorización del Congreso de la Unión, que nos autorizaron únicamente 6,000 millones, lo que significó una cifra total del 4.8% menor a la que inicialmente se había planteado del total de recursos para la ciudad, que esto hubiese significado recortes, que es algo que nos preocupa para la mayoría de los programas prioritarios, se plantean programas prioritarios y esos programas prioritarios también son sujetos a los recortes; también son sujetos a los recortes la mayoría o la totalidad prácticamente, con excepción del Instituto Electoral del Distrito Federal, de los organismos autónomos y no vemos un criterio de racionalidad, un criterio con argumentos que de alguna forma le dé soporte, cuáles fueron los elementos de sustento para a unos programas quitarles una cantidad y a otros programas quitarles otra cantidad y afectar a los mismos programas prioritarios que se plantean que son prioritarios y que de entrada debería de pensarse que deberían ser intocados o deberían ser menos afectados que el resto, es algo que nos preocupa.

Al respecto nosotros manifestamos también nuestra inconformidad y solicitamos sean respetados los montos originales para los programas prioritarios, que es algo que hemos estado sosteniendo desde que se empezó a discutir esto del paquete financiero y del Presupuesto de Egresos. Creemos que al ser éste el único paquete financiero que aprobamos en el ejercicio de nuestras funciones, no podemos dejar la huella infame de desproteger a la

ciudadanía al no otorgar un presupuesto que si bien no es el más adecuado o el que nuestros habitantes demandan, es al menos el que garantizaría mínimamente se cubran las necesidades.

Ante las carencias y en cierta medida las ineficiencias, deben establecerse procedimientos que impidan que el Ejecutivo pueda modificar arbitrariamente los montos de los recursos asignados a estos programas, por lo que vemos con agrado que se hayan acotado a través del artículo 30 del decreto, las facultades de la Jefa de Gobierno para modificar el contenido presupuestal de los programas, no en el nivel que hubiéramos deseado pero creemos que es importante esta modificación al artículo 30.

Asimismo, debemos de tomar la palabra a la Jefa de Gobierno acerca de la comparecencia de los funcionarios del gobierno para que cada trimestre, ella planteó aquí que ella proponía que la Jefa de Gobierno pudiera comparecer ante esta soberanía cada trimestre.

Nosotros ante esto planteamos, que cada trimestre, ante el informe programático-presupuestal trimestral que se tiene que entregar a esta soberanía, que cada trimestre comparezca el Secretario de Finanzas, no nada más manden el informe programático-presupuestal, sino también comparezca para explicar el contenido de ese informe que debe de rendir ante esta soberanía.

Es momento de proponer que se realicen reformas a las normas correspondientes a fin de que los informes programáticos-presupuestales contengan mayor información, que ésta sea analítica, que explique detalladamente el uso de los recursos y en su caso exponga las causa del incumplimiento de metas y de los correspondientes subejercicios.

Por otro lado estamos convencidos de que a través de nuestro órgano de fiscalización, haciendo uso de nuestras facultades ahondemos en la revisión de la Cuenta Pública dando esto como resultado, al presentar a la ciudadanía cuentas claras del ejercicio presupuestal y hacemos las siguientes propuestas, y la primera es reservarnos el artículo 16 del decreto de presupuesto para buscar la incorporación como programas prioritarios, lo de tres programas importantes para nosotros; el número 49 que es la conducción de la política y fomento al empleo que creemos que es muy importante la cuestión de buscar mecanismos para fomentar el empleo en la ciudad; 65, la regulación y la prevención de la contaminación del aire que en los dos últimos años anteriores ha estado considerado como programa prioritario y que ha permitido esto, que la Ciudad de México tenga las menores incidencias en estos últimos dos años de problemas ambientales que nos lleven a crisis y a la operación de la fase II de este programa de suspensión vehicular.

Entonces, creemos que es importante continuar, que continúe como programa prioritario la regulación de la prevención de la contaminación del aire, que es el programa 65. Igualmente planteamos que el programa 66 que es la regulación y prevención de la contaminación del agua deben de mantenerse como programas prioritarios, dado que en los dos últimos años se han planteado, se han acordado y esto de alguna forma ha significado un apoyo importante y logros importantes en esta materia en beneficio del conjunto de la ciudadanía.

Entonces hacemos el señalamiento de que no vemos elementos para la reasignación y la reducción de recursos en algunos programas que están como prioritarios, no vemos la justificación, y también hacemos la propuesta y nos reservamos el artículo 16 para verlo en lo particular del decreto del Presupuesto de Egresos, y también nos reservamos el artículo 7 del Presupuesto de Egresos sobre todo en lo referente a la Contaduría Mayor de Hacienda.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Se concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos, para razonar su voto, al diputado Jesús Galván.

EL C. DIPUTADO JESUS GALVAN MUÑOZ.- Con su permiso, señora Presidenta.

Los recursos, sobre todo los públicos son siempre escasos si lo comparamos con lo que hay que hacer. Aún en los países más desarrollados rara vez se encuentra una ciudad, un Estado o una provincia que tenga superávit.

Elaborar un presupuesto es jerarquizar las necesidades y decidir en qué rubros se van a gastar los recursos de que se dispone. El gobierno tiene que preguntarse qué es más importante para la gestión de la comunidad y dar prioridad a la atención de aquellos asuntos que son fundamentales para la mencionada gestión del bien de la comunidad.

Lamentablemente, en muchos casos es muy diferente o son muy diferentes los intereses de quienes constituyen el gobierno.

El presupuesto que hoy se discute tiene la característica de destinar, por una parte, recursos muy cuantiosos a la recreación, el esparcimiento y los eventos, en tanto que se pretende financiar con deuda prácticamente la totalidad de la obra.

Por otra parte, el presupuesto que hoy se nos presenta parece estar inflado artificialmente, ya que en rubros en los que con la información que se nos proporciona es posible llegar a conclusiones, nos encontramos que los incrementos son desmedidos y que no se justifican desde ningún punto de vista. Ejemplos concretos de esto son los siguientes.

El programa 31, denominado atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento, y el 33, desarrollo del deporte, incluyen multitud de eventos que pueden ser manipulados con fines políticos, pero que independientemente de que lo sean o no, no son de importancia fundamental para la sustentabilidad de esta ciudad; sin embargo, el monto destinado a ambos supera los 1,080 millones de pesos, que habría que contrastar con los 735 que le fueron asignados en 1999.

Ni qué decir de lo que ya se ha comentado por varios diputados, de los 282 millones de pesos destinados al programa 24, comunicación social, rubro que en el presupuesto de 99 tenía solamente 79.3 millones.

De paso, valdría la pena contrastar esta propuesta con lo que se lee en el artículo 32 del proyecto de presupuesto que hoy se discute. Dice el artículo 32.- "Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, deberán reducirse al mínimo indispensable, sujetando su uso a los criterios de racionalidad, disciplina y austeridad y efectuándolos solamente cuando se cuente con suficiencia presupuestal y la autorización expresa de los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades"

En su fracción V se lee lo siguiente: "Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general los relacionados con actividades de comunicación social. Los contratos y convenios con los que las dependencias y órganos desconcentrados formalicen erogaciones con cargo al presupuesto, por los conceptos a los que se refiere esta fracción, deberán ser autorizados por la Oficialía y la Dirección General de Comunicación Social y los que efectúen las entidades se autorizarán además por su órgano de gobierno, con base en los lineamientos que se establezcan"

Por lo que dice este artículo, parecería que se piensa restringir los gastos de comunicación social. Pero cuando se atiende al monto del presupuesto, pareciera más bien que se está hablando de dos presupuestos bastante distintos.

El Programa 47 que se denomina "Capacitación para el Trabajo".

En 1999 se proponía becar a 45,600 trabajadores desempleados, con poco más de 661,000 pesos, lo cual resultaba también un poco ridículo, porque se asignaba 15 pesos por beca a cada trabajador desempleado.

Ahora, se propone que sean 207.8 millones para solamente 21,000 trabajadores desempleados. La beca por trabajador asciende a 9,554 pesos. Y desde luego reitero simplemente la sospecha que ya se ha presentado aquí por varios diputados, de que con este ejército de 21,000 personas, se constituyan Brigadas del Sol y esto desde luego no deja de originar preocupación.

Hay, por otro lado, partes del presupuesto que lamentablemente no pueden analizarse. Por ejemplo, en el Programa 12 denominado "Seguridad Pública", se establece en la actividad 03 planear, dirigir, coordinar y controlar la operación del Sistema Integral de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

En esta actividad, este año se planea gastar 83.6 millones, en tanto que el año pasado se planeaba que se gastarían 67 millones; pero difícilmente puede determinarse si el monto de la propuesta es o no excesivo, ya que para ello se requeriría información adicional, de la que no se dispone.

Pero, por otra parte, cuando se analizan las cifras que sí son mensurables, que se proporcionan en el presupuesto para este año, se encuentra que se piensa incurrir en costos mensuradamente altos, tales como la correspondiente a la actividad 13 "brindarle albergue a menores y discapacitados del Programa 08, Administración de Justicia y Persecución del Delito".

En esta actividad, se contempla favorecer a 742 personas, con un presupuesto de 86 millones 641 mil 029 pesos; esto significa que dar albergue, solamente albergue, a menores y discapacitados, va a costarle a la Procuraduría 9,730 pesos con 057 centavos mensuales por persona; cantidad con la que podría no solamente recibir albergue, sino vivir razonablemente una familia entera ¿Dónde quedaron entonces los criterios de racionalidad disciplina y austeridad?

La actividad 22. Informar a la ciudadanía y orientar judicialmente; es semejante. Se planeaba atender a 88,309 personas con un presupuesto de 90 millones 777 mil pesos; esto es, 813.6 pesos por persona, como si a cada persona que se le informara y se le orientara, le dedicaran una gran cantidad de horas de trabajo.

La Actividad 24. Atender a las necesidades de los detenidos. Se planea que sean 53,875 personas, 72 millones 914 mil pesos, esto significa que cada detenido costará a la ciudad 1353 pesos con 40 centavos.

Si se considera que el promedio de detención fuera de 3 días, esto significaría que se gastarían 451 pesos diarios, cantidad que a nosotros nos parece muy alta, a menos que con el precedente que hay, ya se quiera arraigar a varios de los detenidos en hoteles.

En el proyecto de presupuesto presentado el año pasado, se estimaba que el número de detenidos ascendería a 61,451 personas, es decir, 7,576 más que los esperados para el 2000 y la partida para su atención era de 48 millones 509 mil pesos dando un costo per cápita de 789 personas.

La actividad 09. Intervenir en juicios civiles. A la que en 1999 se le asignaban 27 millones para 11,463 juicios. Para

este año, se tendrá un presupuesto de 65 millones, destinados solamente a 1206 juicios, y entonces el costo por juicio se elevará nada menos que desde 2,355 pesos a 53,980 pesos, simplemente del 99 al 2000.

La actividad 14. Tramitar peritajes. Este es otro botón de muestra. En 1999 se proponía un presupuesto de 21.9 millones para 249,828 lo que lo cual arrojaba un costo por dictamen de 87.66 pesos. Para este año para el 2000, el costo por dictamen se eleva a 533 pesos; repito de 87 pesos que costaba el dictamen en el año pasado, es decir, en 1999, ahora va a costarle a la ciudad 533 pesos, es decir, 6 veces más de un año a otro, con un presupuesto así de 131 millones y una meta física de 245,643.

Programa 16. Readaptación social. En el cual se destinan más presupuesto que a la actividad 05. Efectuar eventos culturales, deportivos y recreativos en los centros de reclusión.

La 03. Realizar cursos de capacitación para el trabajo a la población interna, 2.2 millones de pesos o bien también más que a la 04. Impartir educación a internos 3 millones.

Hay actividades poco transparentes, por ejemplo la 01. Realizar acciones de concertación y participación ciudadana, que representa el 90% del Presupuesto al Programa 03 participación ciudadana y cuyo monto es de 82 millones de pesos.

El número de acciones que se pretende realizar en el año es de 26,142 el costo de cada una de ellas, sería algo así como 3,546 pesos.

El programa 36.- Atención de Urgencias, Emergencias y Desastres. Tiene un incremento con respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos del año pasado de casi un 35%. Finalmente, en cuanto a la estructura del presupuesto, nos encontramos con varios datos que son dignos de mencionarse. Primero, la tendencia a que los ingresos propios representen cada vez una parte menor con relación al gasto corriente. En tanto que en 1995 la relación ingresos propios a gasto corriente, era de .88 en este año próximo será de solo .83.

Segundo, la relación gasto corriente a gasto de capital, también es menos favorable en el 2000, de lo que fue en 1995, 2.21 del 2000 contra 2.11 en 1995.

Tercero, la relación de deuda a presupuesto total, se ha ido incrementando de 2 mil 465.3 en 1995, cuya razón era de .12, a 28 mil 66 millones en el año 2000, cuya razón al presupuesto es de .47. Es decir, en el año 2000, la deuda acumulada representara el 47% del presupuesto y se acercará peligrosamente a los límites en los que la misma se volverá impagable.

Como puede verse, la estructura de las finanzas públicas del Distrito Federal es peor con el gobierno perredista que con su antecesor.

Por lo anterior, es decir por lo que a nuestro juicio hay una jerarquización inadecuada que no responde a la gestión del bien de esta comunidad de esta Ciudad de México, porque en muchos casos los presupuestos de diversas partidas, como las que he puesto aquí como muestra, son inflados, y finalmente porque la estructura de las finanzas públicas de este gobierno es peor con el actual; nosotros, como ya fue anunciado por el diputado Minjares, vamos a votar en contra del Proyecto de Presupuesto presentado por la Jefa de Gobierno.

LA C. PRESIDENTA.- Se concede el uso de la palabra para razonar su voto, hasta por 20 minutos, al diputado Alfredo Hernández Raigosa.

EL C. DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA.- Con su permiso, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, señor diputado.

EL C. DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA.- Compañeras y compañeros:

Yo obviamente que estoy de acuerdo con el Presupuesto en términos generales, pero sí me parece importante hacer una reflexión.

Yo hoy me siento halagado porque para Iztapalapa se destina un presupuesto que comparativamente es histórico, en relación a otros años cuando se han dotado presupuestos que prácticamente eran dádivas o migajas para nuestra delegación, y que hoy el incremento ha sido importante, va a ser muy útil, pero también le falta.

Pero lo que más me llamó la atención es que nosotros en la Asamblea Legislativa, hace ya algún tiempo, hicimos una ley que reconocía, dignificaba y honraba a unos hombres que ayer en la mañana los veíamos intentando apagar un incendio de una fábrica, en días pasados los veíamos en el Periférico intentando retirar un auto accidentado, tratar de rescatar a algunos lesionados; los vemos en las comunidades apagando flamazos de tanques de gas, retirando enjambres de abejas, es decir hombres que otorgan su vida cotidianamente en beneficio de los habitantes de la capital. En esta ciudad donde existen 230 mil empresas, donde el 57% corresponde al sector comercio, el 33% a servicios y el 10% a la industria, es decir unos 130 mil establecimientos comerciales, 75 mil 900 establecimientos de servicios y 23 mil empresas industriales.

En el área metropolitana, donde hay una gran diversidad de riesgos tanto naturales como provocados por el hombre, dentro de una planeación urbana que no está edificada para

los elementos mínimos de protección civil, en una ciudad que requiere la profesionalización y especialización de los servicios en atención de incendios y emergencias, a pesar de que todo esto se ubica en la capital de la República, el Heroico Cuerpo de Bomberos fue creado hace 112 años y tiene un rezago histórico en sus condiciones materiales, en sus condiciones de trabajo, en sus condiciones diarias de labor, de más de 20 años.

Ciudades semejantes en su problemática a la de México cuentan con un número de más de 200 estaciones de bomberos, es el caso de Los Angeles, California; más de 100 estaciones en Nueva York y Londres, Inglaterra; más de 80 en Tokio, Nagoya, Japón; la Ciudad de México, con un número de habitantes mayor o igual y con una extensión territorial superior a cualquiera de ellas, tan sólo cuenta con 10 estaciones de bomberos y no más de 1,500 efectivos.

Los bomberos tienen un déficit en equipamiento, tiene un déficit en su equipo de penetración, sin embargo tienen que cubrir funciones como el control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios que por cualquier motivo se susciten en el Distrito Federal; desarrollar todo tipo de labores de prevención a través de dictámenes para establecimientos, como lo contempla la ley; coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas forestales así determinadas por los programas de desarrollo urbano del Distrito Federal; control y extinción de fugas de gas y derrames de gasolina y cualquier tipo de sustancia peligrosa que ponga en riesgo la integridad de las personas.

Tienen que atender explosiones, tienen que atender derrames de sustancias peligrosas, realizar labores de salvamento y rescate de personas atrapadas, retiro de cables de alta tensión caídos, así como atención de posibles cortos circuitos derivados de ello, seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situación de riesgo o interfieran la labor del Cuerpo de Bomberos; realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los peligros de la abeja africana, así como el retiro de enjambres; captura de animales que representen riesgo para la ciudadanía; retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro la vida de la ciudadanía; atención a colisiones de vehículos cuando sea eminente la explosión o derrame de combustibles o sustancias volátiles o tóxicas; auxiliar en el rescate o exhumación de cadáveres, cuando así lo solicite el Ministerio Público o la autoridad judicial; atender las demandas de emergencias cotidianas o derivadas de un desastre donde se necesite su intervención al ponerse en riesgo vidas humanas y sus bienes materiales; adquirir, arrendar y enajenar muebles e inmuebles necesarios para la prestación de sus servicios, de acuerdo con sus programas de operación debidamente aprobado, de conformidad con la legislación aplicable; establecer instalaciones para el mantenimiento y reparación del equipo que se utiliza en la prestación de sus servicios, así como la adquisición de refacciones; suscribir convenios de

cooperación con organismos públicos y privados, a efecto de generar o adquirir tecnología moderna para aplicarlos al servicio y para capacitar al personal; cubrir los gastos de administración, operación y mantenimiento que genere su funcionamiento; crear, organizar y coordinar la Academia de Bomberos del Distrito Federal; coadyuvar con los demás organismos públicos y privados encargados de la protección civil y la seguridad pública de la ciudad; establecer los requisitos mínimos de seguridad para los establecimientos mercantiles, industriales y empresas de la venta, almacenamiento o transporte de sustancias inflamables o peligrosas; realizar inspecciones y otorgar el dictamen de prevención de incendios de los establecimientos mercantiles, industriales y empresas clasificadas conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de las empresas dedicadas al transporte de sustancias peligrosas; crear, organizar y coordinar el cuerpo de bomberos voluntarios del Distrito Federal como orientadores y promotores de la cultura de la prevención, tanto para personas mayores de 16 años, como para niños y jóvenes.

Para todo esto el Heroico Cuerpo de Bomberos requiere de un presupuesto de 561 millones de pesos, la propuesta que llegó en el presupuesto es de 383 millones; juzguen ustedes si es justa esta cantidad para el Heroico Cuerpo de Bomberos. Sin embargo todavía aún así se les hizo una reducción de 6 millones de pesos.

Por lo tanto yo quiero exhortar a mis compañeros de bancada y a las demás fracciones parlamentarias a que en un acto solidario, que en un acto de reconocimiento de la labor que hace cotidianamente el Heroico Cuerpo de Bomberos y debido particularmente a sus condiciones de vida, a sus condiciones materiales de trabajo, a las condiciones en las que vive su familia, a las condiciones en que quedan cuando sufren un accidente o una mutilación por una explosión, los exhorto a que le podamos incrementar mínimamente los 100 millones de pesos que le fueron recortados. Por eso les pido a mis compañeros de bancada que hagan la reserva en ese caso y que podamos aprobar el que se incremente a 383 millones el presupuesto del Heroico Cuerpo de Bomberos, porque sería indigno que de donde propusimos su descentralización, donde propusimos que hubiera un presupuesto autónomo para este Heroico Cuerpo, hoy no les demos la oportunidad de una mejor operación en la Ciudad de México para atender todo esto que acabo de señalar.

Por ello los exhorto a mis compañeros, también diputados del PAN a que apoyen, a que sean 383 millones de pesos para el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Por su atención, gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Se concede el uso de la palabra para razonar su voto, hasta por 20 minutos, al diputado Alejandro Rojas Díaz Durán.

Se solicita orden en la sala y silencio para escuchar al orador.

EL C. DIPUTADO ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN.-
Con su venia, diputada Presidenta.

Considerando que es necesario crear las condiciones de equidad y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos que maneja el Gobierno de la Ciudad de México durante todo tiempo y momento, pero fundamentalmente cuando se está inmerso en un proceso electoral y considerando que es facultad de este órgano legislativo el fiscalizar la estricta aplicación y su observancia de los recursos autorizados a través del Presupuesto de Egresos aprobado por el mismo y que la facultad que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno y la Ley Orgánica de esta Asamblea, de vigilar que los recursos que provienen del pueblo no sean utilizados en rubros diferentes a aquellos para los que fueron destinados y que es necesario crear una comisión especial que vigile que los servidores públicos que infrinjan los ordenamientos legales en materia de gasto sean sancionados en los términos de los ordenamientos correspondientes y que es necesario que esta honorable Asamblea dé certeza a la ciudadanía del cumplimiento de un estado de derecho y democrático, con el fin de garantizarle un proceso electoral transparente y apegado a la ley.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 17, fracción VI y 54 de la Ley Orgánica de esta soberanía y de los artículos 114 y 15 del Reglamento para el gobierno interior de la misma, se propone a este pleno el siguiente acuerdo para la constitución de una Comisión Especial de fiscalización de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos en el proceso electoral del año 2000.

Primero. El pleno de la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal acuerda la constitución de la Comisión Especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos del Distrito Federal en el proceso electoral del año 2000.

Segundo.- La Comisión Especial deberá instalarse dentro de los 5 días naturales siguientes a la aprobación del presente acuerdo y durará en funciones hasta el 30 de agosto del año 2000.

Tercero.- La Comisión Especial estará integrada en forma paritaria por los diputados designados: Por el Partido de la Revolución Democrática, que en este caso ha sido designado el diputado René Arce; por el Partido Revolucionario Institucional ha sido el diputado Luis Miguel Ortiz Haro; por el Partido Acción Nacional el diputado Jesús Galván; por el Partido del Trabajo el

diputado José Narro Céspedes, y por el Partido Verde Ecologista de México el diputado José Luis Benítez, diputado Alejandro Rojas Díaz Duran.

Cuarto.- La Comisión sesionará por lo menos 2 veces al mes durante su periodo de vigencia.

Quinta.- La Comisión elaborará su plan de trabajo dentro de los 30 días naturales siguientes al de su instalación y será aprobado por mayoría de voto de sus integrantes, incluyendo en dicho plan las actividades que llevará a cabo con el fin de cumplir con su objetivo.

Sexto.- La Comisión tendrá facultades para vigilar que el ejercicio del gasto público y programático se haga en cumplimiento de la ley y que por ningún motivo dicho ejercicio sea encaminado a fines proselitistas en beneficio de algún candidato o partido político.

Séptimo.- La Comisión tendrá todas las atribuciones para presentar las denuncias que procedan ante la autoridad competente para el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar.

Octavo.- La Comisión tendrá facultades para recibir quejas y denuncias relacionadas con su objeto, turnarlas a la instancia legal competente para su trámite y resolución, haciendo el seguimiento correspondiente.

Noveno.- La Comisión contará con los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir con su objeto, los cuales serán asignados por la Oficialía Mayor a más tardar 15 días después de que le sean requeridos por la Comisión, de conformidad con su plan de trabajo.

Décimo.- La Comisión rendirá un informe mensual detallado sobre el trabajo realizado al pleno de la honorable Asamblea Legislativa si se encuentra en periodo de sesiones o en su caso a la Comisión de Gobierno.

Undécimo.- La Comisión remitirá a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una copia del informe final con el objeto de que lo tome en cuenta en el cumplimiento de sus atribuciones.

Duodécimo.- La Comisión regirá sus actividades, declaraciones y toma de decisiones por consenso de todos sus miembros.

Este acuerdo lo han firmado los Coordinadores Parlamentarios del Partido Acción Nacional, diputado Miguel Hernández Labastida; por el Coordinador de la Fracción del Partido Revolucionario Institucional, diputado Manuel Aguilera Gómez; por el diputado José Narro Céspedes, Coordinador de la Fracción del Partido

del Trabajo; la diputada Sara Castellanos, por el Partido Verde Ecologista de México, diputado Alejandro Rojas Díaz Duran, así como por el diputado Rodolfo Pichardo, del Partido de la Revolución Democrática.

Por lo tanto solicito a la Presidencia que en la votación correspondiente al Presupuesto en lo general de Egresos se vote también en un mismo acto la instalación e integración de esta Comisión Especial en beneficio de la ciudad y en beneficio del pueblo de México. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia, con fundamento en el artículo 64 y 107, fracción II del reglamento, informa que una vez agotado el punto que se está discutiendo, esto es el presupuesto del año 2000, someterá a consideración del pleno el punto de acuerdo presentado por el diputado Alejandro Rojas Díaz Durán.

Antes de proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general, se pregunta a los ciudadanos diputados si habrán de reservarse algún artículo para ser discutido en lo particular.

Diputado Minjares, ¿qué artículo?

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ (Desde su curul).- Artículo 15.

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Narro.

EL C. DIPUTADO JOSE NARRO CESPEDES (Desde su curul).- Artículo 16.

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Martínez Atala.

EL C. DIPUTADOR RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA (Desde su curul).- 4, 5, 6, 15, 16, 23, 30 y se propone la adición de un artículo 30-bis.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Algún otro diputado? Verónica Moreno.

LA C. DIPUTADA VERONICA DOLORES MORENO RAMIREZ (Desde su curul).- Artículo 35.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Algún otro diputado desea reservarse algún artículo?

En consecuencia, proceda la secretaría a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados en lo particular.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados en lo particular.

Se solicita a los ciudadanos diputados, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Manuel Minjares, en contra.

Armando Salina Torre, en contra.

Jesús Galván, en contra.

Hernández Labastida Miguel, en contra.

Margarita Saldaña, en contra.

Pablo Jaime Jiménez, en contra.

Manuel Aguilera, en contra.

Jesús Toledano, en contra.

Levín Coppel, en contra.

Ortiz Haro, en contra.

West, en contra.

Luna Parra, en contra.

De Garay, en contra.

Martínez Parra, a favor.

Cárdenas Pérez, en pro.

David Sánchez, a favor.

Ricardo Martínez, en pro.

Eliab Mendoza, a favor.

Ricardo Molina, a favor.

Ernesto Chávez, a favor.

Francisco Chiguil, en pro.

Martí Batres, a favor.

René Arce, a favor.

Alfredo Hernández, a favor.

Ortiz Ayala, a favor.

Roberto Rico, a favor.

Virginia Jaramillo Flores, en pro.

Márquez Franco, en pro.

Ignacio Ruiz, a favor.

Hipólito Bravo, en pro.

Juan González, a favor.

Miguel Bortolini, a favor.

Esteban Daniel Martínez, a favor.

Pichardo Mendoza, a favor.

Alejandro Rojas, a favor.

Rodríguez Ruiz, en pro.

Narro Céspedes José, a favor.

Miguel Angel Peláez, a favor.

Javier Hidalgo, a favor.

García Rocha, a favor.

Antonio Padierna, a favor.

Angeles Correa, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Vicente Cuéllar, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Rafael López de la Cerda, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Javier Serna, a favor.

Sevilla Díaz, en contra.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Rivera Domínguez, en contra.

Alejandro Vázquez, en contra.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto? Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva:

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta el resultado de la votación es el siguiente: 40 votos a favor, 16 votos en contra, 0 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal del año 2000 en lo general y los artículos no reservados en lo particular.

Para su discusión en lo particular han sido reservados los siguientes artículos: 15, 16, 35, 4, 5, 6, 15, 16, 23, 30 y 30bis. En consecuencia, y para referirse al artículo 15 se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Minjares Jiménez.

EL C. DIPUTADO MANUEL MINJARES JIMENEZ.- Gracias señora Presidenta.

Haciendo eco y compartiendo la preocupación de nuestro compañero el diputado Alfredo Hernández Raigosa que, hablando respecto del problema presupuestal que tienen los Bomberos, la congruencia que debemos de guardar los diputados de esta Asamblea, que en forma unánime, los diputados de los 5 grupos parlamentarios representados en este órgano legislativo, desde la misma exposición de motivos de esa ley, compartíamos la preocupación sobre la falta de recursos, la falta de atención por parte de las autoridades, en ese tiempo la Secretaría de Seguridad Pública y conscientes de que nunca serán suficientes los recursos que se le asigne a este Heroico Cuerpo, venimos a hacer una propuesta para modificar el artículo 15 del decreto de Presupuesto de Egresos que se refiere a los programas para

poder retribuir los 100 millones que el decreto que preparó o que prepararon las Comisiones Unidas de Presupuesto y Hacienda, les ha eliminado.

Entonces, compartiendo la preocupación del diputado Hernández Raigosa, proponemos incrementar los 100 millones para el Heroico Cuerpo de Bomberos, pero obviamente tenemos que tomar el dinero, quitarlo de algún lugar. Partiendo del hecho de que para 1999 el presupuesto de comunicación social fue de 79 millones y también viéndonos consecuentes, prudentes, magnánimos, considerando que el año 2000 es año electoral, y que el gobierno necesita, como nos dicen: difundir sus acciones, pues lo menos que pudiéramos hacer es doblarle el presupuesto que decían el de este año, entonces de 79 podemos ponerlo en 160 millones para incorporarlos al programa 13 y los otros 22 millones restantes pudiésemos incluirlos en el programa 26 que además es prioritario y aquí también para el diputado Nieto que muy consciente de la preocupación y las necesidades de infraestructura, para la educación primaria podemos elevar este presupuesto que se le ha asignado originalmente de 201 millones de pesos, lo podemos dejar en 223,787

Señora Presidenta, entrego a usted por escrito la propuesta e insisto y reitero, esto en atención a la preocupación vertida por el diputado Alfredo Hernández Raigosa, que compartimos todos los diputados de la Asamblea Legislativa al votar en esa ocasión en favor de la Ley de Bomberos, y conscientes de la necesidad de que en el año 2000, año electoral, podemos doblar el presupuesto de Comunicación Social para dejarlo en 160 millones.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de modificación al artículo 15 reservado por el diputado Manuel Minjares Jiménez.

Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra? ¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

--Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de la propuesta presentada al artículo 15 que fue reservado por el diputado Manuel Minjares.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas al artículo reservado por el diputado Manuel Minjares Jiménez.

Se solicita a los ciudadanos diputados en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Manuel Minjares, en pro.

Armando Salinas Torre, en pro.

Jesús Galván, en pro.

Hernández Labastida Miguel, en pro.

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Manuel Aguilera, en pro.

Ortíz Haro, a favor.

Jesús Toledano, en pro.

De Garay, en pro.

Luna Parra, en pro.

Rivera Domínguez, en pro.

Levín Coppel, en pro.

Alejandro Vázquez, en pro.

Martínez Parra, en contra.

Cárdenas Pérez, a favor.

Ricardo Martínez, en contra.

Eliab Mendoza, en contra.

Ricardo Molina, a favor.

Ernesto Chávez, en contra.

Miguel Peláez, en contra.

Hipólito Bravo, en contra.

Javier Hidalgo, por supuesto que en contra.

Angeles Correa, en contra.

García Rocha, en contra.

Batres, en contra.

René Arce, en contra.

Alfredo Hernández, a favor.

Ortíz Ayala, en contra.

Roberto Rico, en contra.

David Sánchez, en contra.

Virginia Jaramillo Flores, en contra.

Márquez Franco, en contra.

Ignacio Ruiz, en contra.

Juan González, en contra.

Miguel Bortolini, en contra.

Daniel Martínez, en contra.

Pichardo Mendoza, en contra.

Alejandro Rojas, a favor.

Rodríguez Ruiz, en pro.

Narro Céspedes José, a favor.

Francisco Chiguil, en contra.

Antonio Padierna, en contra.

Guillermo Hernández, a favor.

Albarrán Rodríguez, en contra.

Cuéllar, en contra.

Rigoberto Nieto, en contra.

Verónica Moreno, en contra.

Martínez Rojo, en contra.

Soto Camacho, en contra.

Javier Serna, a favor.

Rafael López de la Cerda, en contra.

Sevilla Díaz, a favor.

West, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto? Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, en contra.

Sara Murúa, en contra.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 23 votos a favor, 32 votos en contra, 0 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- Por lo tanto se desecha la propuesta presentada por el diputado Manuel Minjares Jiménez.

Para referirse al artículo 16, se concede el uso de la palabra al diputado José Narro Céspedes.

EL C. DIPUTADO JOSE NARRO CESPEDES.- Después de la revisión y el análisis del dictamen del Presupuesto de Egresos para el año 2000, la fracción del Partido del Trabajo propone que los programas abajo mencionados por la importancia que representan se deben de considerar como prioritarios:

49.- Conducción de la Política y Fomento al Empleo. Este programa fue propuesto también por la fracción parlamentaria del Partido y fue aceptado en el decreto de Presupuesto de Egresos para el año 99, lo anterior debido a que con este programa se brinda protección al empleo en el sector productivo, se realizan proyectos, programas y convenios encaminados a generar empleo en los diversos sectores productivos.

65.- Regulación y Prevención de la Contaminación del Aire. Este programa está encaminado a prevenir y controlar la contaminación del aire y mantener y restituir la calidad del mismo. En el presupuesto del año anterior estaba considerado como prioritario, consideramos que debe mantenerse como tal, dada la importancia de su objetivo.

66.- Regulación y Prevención de la Contaminación del Agua. Este programa está enfocado a prevenir y controlar la contaminación del agua y restituir la calidad de la misma. También en el presupuesto anterior estaba considerado como prioritario. No consideramos adecuado que éste programa deje de considerarse prioritario por la importancia que tiene este vital líquido.

También incluimos una propuesta, que es la del 62.- Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras.

Vamos a dejarle las propuestas a la Presidenta de la Mesa.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de modificación al artículo 16, reservada por el diputado José Narro Céspedes. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra? ¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de la propuesta...

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ (Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Con qué objeto, señor diputado?

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ (Desde su curul).- Nada más, para efectos de clarificar la votación, ¿cuáles son los programas que se están tratando de incluir en el artículo 16?, si me lo pudiera decir.

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la secretaría a dar lectura a la propuesta presentada por el diputado José Narro Céspedes.

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ (Desde su curul).- Nada más con que nos diga el número de los programas.

LA C. PRESIDENTA.- Ah, los programas. Proceda la secretaría a leer exclusivamente los programas a los que se refiere la propuesta del diputado Narro.

LA C. SECRETARIA.- El 49, conducción de la política y fomento al empleo; 65, regulación y prevención de la contaminación del aire; 66, regulación y prevención de la contaminación del agua.

LA C. PRESIDENTA.- Sí, señor diputado.

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ (Desde su curul).- ¿Esos tres únicamente?

LA C. PRESIDENTA.- Hay una segunda hoja, señora diputada.

LA C. SECRETARIA.- 62, infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras. Son cuatro programas, 49, 65, 66 y 62.

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ (Desde su curul).- Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas al artículo 16 que fue reservado por el diputado José Narro Céspedes.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas de los artículos reservados por el diputado José Narro Céspedes.

Se solicita a los ciudadanos diputados, en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión en pro o en contra.

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Manuel Minjares, en pro.

Hernández Labastida Miguel, en pro.

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Margarita Saldaña, en pro.

Manuel Aguilera, en pro.

Jesús Toledano, en pro.

Levin Coppel, en pro.

Rivera Domínguez, en pro.

Alejandro Vázquez, en pro.

De Garay, a favor.

West, a favor.

Ortiz Haro a favor..

Luna Parra, a favor.

Francisco Chiguil, en contra.

Martínez Parra, en contra.

Cárdenas Pérez, en contra.

Ricardo Martínez, en contra.

Armando Salinas Torre, en pro.

Ricardo Molina, en contra.

Eliab Mendoza, en contra.

Miguel Angel Peláez, en contra.

Angeles Correa, en contra.

René Arce, en contra.

García Rocha, en contra.

Alfredo Hernández, en contra.

Roberto Rico, en contra.

David Sánchez, en contra.

Virginia Jaramillo, en contra.

Márquez Franco, en contra.

Ignacio Ruiz, en contra.

Juan González, en contra.

Hipólito Bravo, en el mismo sentido que la diputada Jaramillo.

Ernesto Chávez, abstención.

Miguel Bortolini, en contra.

Pichardo Mendoza, abstención.

Alejandro Rojas, a favor.

Rodríguez Ruiz, en pro.

José Narro Céspedes, a favor.

Javier Hidalgo, a favor.

Antonio Padierna, en contra.

Ortiz Ayala, en contra.

Guillermo Hernández, en contra.

Albarrán Rodríguez, en contra.

Rigoberto Nieto, en contra.

Vicente Cuéllar, en contra.

Verónica Moreno, en contra.

Martínez Rojo, en contra.

Soto Camacho, en contra.

Javier Serna, a favor.

Sevilla Díaz, a favor.

Rafael López de la Cerda, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Martí Batres, abstención.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Daniel Martínez, abstención.

Jesús Galván, en pro.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva:

Tello Mondragón Yolanda, en contra.

Sara Murúa, en contra.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 22 votos a favor, 30 votos en contra, 4 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- Por lo tanto se desecha la propuesta presentada por el diputado José Narro Céspedes sobre el artículo 16.

Para referirse al artículo 35, se concede el uso de la palabra a la diputada Verónica Moreno.

LA C. DIPUTADA VERONICA DOLORES MORENO RAMIREZ.- Con su permiso, señora Presidenta.

El siguiente artículo tiene el propósito de que seamos congruentes específicamente en el ejercicio y la transparencia de los recursos, a partir del ejercicio democrático que ha tenido este gobierno.

En tal sentido el artículo 35 dice lo siguiente: "Las remuneraciones que correspondan a los servidores públicos de mandos superiores por concepto de sueldos, compensaciones y prestaciones no podrán ser distintas a las establecidas en el decreto, agregando el incremento porcentual que se otorgue a los trabajadores del Distrito Federal".

Estamos proponiendo en este momento que se elimine lo relativo al "agregado al incremento porcentual que se otorgue a los trabajadores del Distrito Federal" y por consiguiente que solamente quedara, debe decir el artículo en los siguientes términos:

"Las remuneraciones que correspondan a los servidores públicos de mandos superiores por concepto de sueldos, compensaciones y prestaciones no podrán ser distintas a las establecidas en este decreto.

Tabulador de sueldos del Gobierno del Distrito Federal para el año 2000:

Titular de la Jefatura de Gobierno: 70,000.

Secretario o puestos homólogos: un mínimo de 68,600 y un máximo de 69,700.

Subsecretarios, delegado o puestos homólogos: 44,500 como mínimo, como máximo 66,000.

Director General o puestos homólogos: con un mínimo de 42,630 y con un máximo de 63,945".

Entrego a la Presidencia la propuesta. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de modificación al artículo 35 reservado por la diputada Verónica Moreno. Se abre el registro de oradores.

Oradores en contra.

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos que fueron reservados por la diputada Verónica Moreno.

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ (Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Sí, señor diputado, ¿con qué objeto?

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ.- Es que si habla usted un poquito más despacio, así no despierta a los diputados que a esta hora de la madrugada ya se están durmiendo.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor diputado.

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas al artículo que fue reservado por la diputada Verónica Moreno.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos reservados por la diputada Verónica Moreno.

Se solicita a los ciudadanos diputados, en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión “en pro” o “en contra”.

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Manuel Minjares, en pro de la propuesta presentada por la diputada Verónica Moreno.

Jesús Galván, en pro.

Hernández Labastida Miguel, en pro

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Margarita Saldaña, en pro.

Manuel Aguilera, en pro.

Jesús Toledano, en pro.

Levín Coppel, en pro.

Ortiz Haro, a favor.

Alejandro Vázquez, en pro.

De Garay, a favor.

Luna Parra, a favor.

Martínez Parra, en pro.

Cárdenas Pérez, en pro.

Francisco Chiguil, en pro.

Ernesto Chávez, a favor.

Eliab Mendoza, a favor.

Miguel Angel Peláez, a favor.

Miguel Bortolini, a favor.

Martí Batres, a favor.

René Arce, a favor.

García Rocha, a favor.

Alfredo Hernández, a favor.

Ortiz Ayala, a favor.

Rafael López de la Cerda, a favor.

Roberto Rico, a favor.

David Sánchez, a favor.

Márquez Franco, en pro.

Virginia Jaramillo Flores, en pro.

Ignacio Ruiz, en pro.

Juan González, a favor.

Martínez Enríquez, a favor.

Hipólito Bravo, en el mismo sentido que la diputada Verónica Moreno.

Pichardo Mendoza, a favor.

Ricardo Martínez, en pro.

Armando Salinas, en pro.

Alejandro Rojas, a favor.

Javier Hidalgo, a favor de la propuesta la diputada Verónica Moreno.

Antonio Padierna, a favor.

Angeles Correa, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

Ricardo Molina, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Vicente Cuéllar, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Martínez Rojo, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Javier Serna, a favor.

Sevilla Díaz, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Narro Céspedes José, a favor.

Rodríguez Ruiz, en pro.

Rivera Domínguez, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente:

55 Votos a favor, 0 Votos en contra y 0 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- Por lo tanto, se aprueba la propuesta de modificación al Artículo 35 reservado por la diputada Verónica Moreno.

En consecuencia y para referirse a los artículos 4, 5, 6, 15, 16, 23, 30 y 30-bis, se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Martínez Atala.

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA.- Número 1.- Se propone que se haga un traspaso del techo de endeudamiento entre la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica y el Sistema de Transporte Colectivo Metro por 350 millones de pesos.

Número dos.- Un traspaso de 90 millones de pesos de la Dirección General de Administración de Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor a la Dirección General de Promoción e Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Número 3, Un traspaso de 50 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas a la Dirección General de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Número 4. Se incorporan transparencias federales adicionales a la Ley de Ingresos por 740 millones de pesos que se distribuyen de la siguiente manera: 490.7 millones de pesos a delegaciones a proyectos de infraestructura urbana; 200 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social para la construcción de una nueva preparatoria en el Distrito Federal, y 50 millones de pesos al Heroico Cuerpo de Bomberos, para ampliación de instalaciones.

Número 5, Traspaso de la Secretaría de Obras de 70.1 millones de pesos hacia la Dirección de Empleos y Capacitación para resarcir ajuste anterior que se hizo en el proyecto de dictamen y de 10 millones para canalizarlo a las delegaciones para proyectos de infraestructura urbana y se propone la inclusión en los rubros con acuerdo con el diputado José Narro Céspedes del Partido del Trabajo, se propone la inclusión como programas prioritarios número 49, 65 y 66.

Con base en estos considerandos, el texto de los nuevos artículos sería el siguiente, esta lectura es larga.

Artículo 4. El nuevo texto del artículo 4 sería: Las erogaciones previstas en este presupuesto para las dependencias que integran la Administración Pública centralizada del Distrito Federal, incorporarán la cantidad de 29,498'404,044.58 pesos y se distribuirán de la siguiente manera:

Jefatura de Gobierno, 377'874,818.15 pesos.

Secretaría de Gobierno, 1,774'317,244.42 pesos.

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 159'797,401.76 pesos.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 217'104,349.20 pesos.

Secretaría de Desarrollo Económico, 376'495,817.15 pesos.

Secretaría de Medio Ambiente, 774'739,445.38 pesos.

Secretaría de Obras y Servicios, 6,599'036,080.04 pesos.

Secretaría de Desarrollo Social, 1,161'491,278.64 pesos.

Secretaría de Salud, 2,409'756,334.46 pesos.

Secretaría de Finanzas, 1,324'419,930 pesos.

Secretaría de Transporte y Vialidad, 367'624,624.44 pesos.

Secretaría de Seguridad Pública, 10,022'190,950.30 pesos.

Secretaría de Turismo, 94'505,918.67 pesos.

Oficialía Mayor, 544'057,124.04 pesos.

Contraloría General, 95'651,288.45 pesos.

Procuración General de Justicia del Distrito Federal, 3,199'341,435.48 pesos.

La suma es de 29,498'404,040.58 pesos.

Artículo 5.- Quedaría de la siguiente manera: "Las erogaciones previstas en este presupuesto para las delegaciones, suman 9 mil 906 millones 923 mil 379.24 pesos y de distribuirán de la siguiente manera:

Delegación Alvaro Obregón, 629 millones 163 mil 97.10 pesos.

Delegación Azcapotzalco, 482 millones 18 mil 654.37 pesos.

Delegación Benito Juárez, 485 millones 624 mil 78.74 pesos.

Delegación Coyoacán, 588 millones 698 mil 467.08 pesos.

Delegación Cuajimalpa de Morelos, 271 millones 416 mil 639.77 pesos.

Delegación Cuauhtémoc, 993 millones 198 mil 946.04 pesos.

Delegación Gustavo A. Madero, mil 246 millones 738 mil 494.19 pesos.

Delegación Iztacalco, 495 millones 797 mil 387.07 pesos.

Delegación Iztapalapa, mil 377 millones 604 mil 585.16 pesos.

Delegación Magdalena Contreras, 290 millones 163 mil 520.25 pesos.

Delegación Miguel Hidalgo, 647 millones 268 mil 409.01 pesos.

Delegación Milpa Alta, 308 millones, 944 mil 748.67 pesos.

Delegación Tláhuac, 391 millones 508 mil 63.14 pesos.

Delegación Tlalpan, 575 millones 316 mil 601.83 pesos.

Delegación Venustiano Carranza, 672 millones 948 mil 162.84 pesos.

Delegación Xochimilco, 450 millones 513 mil 524.18 pesos.

Y la suma es de 9 mil 906 millones 923 mil 379.24 pesos.

Artículo 6, debe decir: "Las erogaciones programables previstas para las entidades cuyos programas están incluidos en este presupuesto, ascienden a 11 mil 153 millones 218 mil 650.02 pesos, y se distribuirán de la siguiente manera":

Transportes, 6 mil 229 millones 315 mil 352.99 pesos.

Autotransporte Urbano de Pasajeros Ruta-100, 764 millones 791 mil 412.65 pesos.

Sistema de Transporte Colectivo Metro, 4 mil 606 millones 67 mil 969.06 pesos.

Servicio de Transportes Eléctricos, 858 millones 455 mil 971.28 pesos.

Vivienda, 814 millones 428 mil 384.92 pesos.

Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 630 millones 683 mil 659.02 pesos; Fideicomiso Casa Propia, 63 millones 145 mil 357 pesos; Fideicomiso de Recuperación Crediticia de Vivienda, 23 millones 601 mil 813.90 pesos; Fideicomiso de Vivienda de Desarrollo Social Urbano, 96 millones 997 mil 555 pesos.

Al Sector Salud y Asistencia Social son 1,954 millones 923 mil 476.84 pesos; Fideicomiso de Institutos de Niños de la Calle y las Adicciones, 68 millones 850 mil 976.84 pesos; Servicios de Salud Pública para el Distrito Federal, 1,210 millones 928 mil 100 pesos; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 674 millones 644 mil 400 pesos; otras entidades, 2,155 millones, 51 mil 435.27 pesos.

Estas son Procuraduría Social del Distrito Federal, 65 millones 845 mil 808 pesos; Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal, 35 millones 28 mil 2.53 pesos; Corporación Mexicana de Impresión, 126 millones 100 mil pesos; Caja de Previsión de Trabajadores a Lista de Raya, 508 millones 500 mil 119 pesos; Caja de Previsión de la Policía Preventiva, 462 millones 811 mil 114 pesos; Servicios Metropolitanos S.A. de C.V., 520 millones 471 mil 884 pesos; Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal, 20 millones de pesos; Fideicomiso de Estudios Estratégicos de la Ciudad de México, 14 millones 138 mil 958.31 pesos; Instituto del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, 68 millones 692 mil 999.54 pesos; Heroico Cuerpo de Bomberos, 333 millones 462 mil 557.81 pesos, suma 11 mil 153 millones 218 mil 650.02 pesos.

Artículo 15. De acuerdo con los objetivos estratégicos del Gobierno del Distrito Federal las asignaciones para cada uno de estos programas son los siguientes:

Legislación del Distrito Federal, 513 millones de pesos.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Con qué objeto, señor diputado?

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ (Desde su curul).- Hacerle una sugerencia al diputado que

está en el uso de la palabra. Si son 76 programas los que integran el artículo 15, yo no sé si nada más pudiera leer los que cambian la cifra y así nos ahorramos un tiempo valiosísimo, señor diputado. Yo creo que no tiene caso estar repitiendo la gran mayoría de los programas que conservan exactamente la misma cantidad que está en el dictamen.

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA.- Señor diputado, en este momento no le pudiera yo decir cuáles son los programas que cambian.

LA C. PRESIDENTA.- Se ruega al orador continuar.

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA.- Programa 2. Fiscalización de la Hacienda Pública, 114 millones 179 mil....

LA C. PRESIDENTA. Me permite, señor diputado, por favor. Se ruega a los diputados que se encuentran en el pasillo del centro nos hagan favor de ocupar su lugar y escuchar al orador con atención, por favor.

Adelante, señor diputado.

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA.- Participación ciudadana, 90 millones 431,455.44 pesos. Administración electoral del Distrito Federal, 1,366 millones 460,806.62 pesos. Poder Judicial, 1,158 millones, 2,695.73 pesos. Impartición de Justicia Laboral, 99 millones 616,817.35 pesos. Impartición de Justicia Administrativa, 59 millones, 762,873.27 pesos. Administración de justicia y persecución del delito, 2,987 millones, 820,338.48 pesos. Administración de justicia social y laboral, 86 millones 796,504.35 pesos. Procuración de Justicia Fiscal, 42 millones 311,153.89 pesos. Derechos Humanos, 96 millones 651,843 pesos. Seguridad Pública, 9,511 millones, 393,338.76 pesos. Protección Civil, 392 millones 157,003.05 pesos. Formación y Profesionalización Policial, 94 millones, 31,764.09 pesos. Prevención del Delito, 9 millones 595,420.70 pesos. Readaptación Social, 1,242 millones, 373,556.72 pesos.

Solicito a la Presidencia que permita que el diputado Miguel Angel Peláez me auxilie en la lectura del resto de la propuesta.

LA C. PRESIDENTA.- Se le autoriza al diputado Miguel Angel Peláez terminar con la lectura.

EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL PELAEZ GERARDO.- Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo, 466 millones 931,601.76 pesos. Conducción de la Política Financiera, 1,581 millones 48,233.73 pesos. Coordinación Metropolitana, 14 millones 138,958.31 pesos. Administración Central, 4,403 millones, 636,402.06 pesos. Administración Paraestatal, 1,667 millones 304,799.03 pesos. Control de la Gestión Gubernamental: 104,287,431.57 pesos. Modernización de la Administración Pública: 115,609,624.45 pesos.

LA C. PRESIDENTA.- Se autoriza al diputado Miguel Angel Peláez a que lo releve en la lectura el diputado Roberto Rico.

EL C. DIPUTADO ROBERTO RICO RAMIREZ.- Comunicación Social: 282,209,621.96 pesos.

Infraestructura para la Educación Preescolar: 132,683,819.71 pesos.

Infraestructura para la Educación Primaria: 281,578,062.97 pesos.

Infraestructura para la Educación Secundaria: 198,373,700.46 pesos.

Becas e Intercambio Educativo: 137,326,739.60 pesos.

Capacitación a Servidores Públicos: 131,759,075.15 pesos.

Apoyo y Fomento a la Investigación Científica: 2,288,113.16 pesos.

Atención y Apoyo a la Cultura y Recreación y Esparcimiento: 647,286,664.98 pesos.

Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura: 69,848,348.10 pesos.

Desarrollo del Deporte: 434,999,642.10 pesos. Infraestructura para el Deporte: 147,502,846.77 pesos.

Atención Preventiva, Curativa y Hospitalización: 2,000,466,975.317 pesos.

Atención de Urgencias y Emergencias y Desastres: 417,501,161.81 pesos.

Planificación Familiar y Orientación para la Salud: 109,180,102.33 pesos.

Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica: 2,987,043.01 pesos.

Regulación y Control Sanitario: 74,795,951.50 pesos.

Pensiones, Jubilaciones y Ayudas 564 millones 680 mil 927 pesos; otras prestaciones 299 millones 367 mil 286 pesos. Atención y Mejoramiento Nutricional 314 millones 341 mil 050.01 pesos; Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario 208 millones 809 mil 4.97 pesos; Protección Social 696 millones 189 mil 941.73 pesos. Protección y Asistencia a la Población en Desamparo 36 millones 600 mil 180.34 pesos; Infraestructura Social 423 millones 675 mil 762.91 pesos; Capacitación para el Trabajo 207 millones 801 mil 593.36 pesos; Seguridad e Higiene en el Trabajo 12 millones 304 mil 381.89 pesos;

Conducción de la Política y Fomento al Empleo 20 millones 911 mil 769.1 pesos.

EL C. DIPUTADO RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA.- Continuo, Fomento y Regulación del Comercio 39 millones 560, 768.03 pesos.

Infraestructura para el Abasto Comercio 56 millones 309 mil 355.43 pesos.

Arrendamiento y Comercialización de Inmuebles 142 millones 383 mil 344 pesos; Promoción y Fomento Industrial 19 millones 519 mil 965.56 pesos; Producción de Papel, Impresos y Publicaciones 84 millones 101 mil 481.0 pesos; Producción de Materia Asfáltico 203 millones 915 mil 147.90 pesos; Producción y Fomento de la Actividad Agrícola 228 millones 397 mil 765.98 pesos; Promoción y Fomento de la Actividad Turística 82 millones 624 mil 910.18 pesos; Infraestructura Urbana 2 mil 990 millones 484 mil 851.17 pesos; Construcción y Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda 802 millones 952 mil 140.13 pesos; Suministro de Agua Potable 1 mil 226 millones 580 mil 957.26 pesos; Construcción y Adecuación para el Agua Potable 1 mil 051 millones 135 mil 703.21 pesos; Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Agua 1 mil 519 millones 883 mil 809.77 pesos; Regulación de los Asentamientos Humanos 217 millones 697 mil 415.92 pesos; Construcción y Mantenimiento de Edificios 608 millones 124 mil 365.24 pesos; Regulación y Prevención de la Contaminación del Aire 135 millones 563 mil 222.39 pesos; Regulación y Prevención de la Contaminación del Agua 247 millones 051 mil 039.67 pesos.

Control de Residuos Sólidos, 1,853'512,237.01 pesos.

Infraestructura Ecológica, 113'336,758.48 pesos.

Preservación y Restauración de Ecosistemas, 905'914,707.68 pesos.

Fomento a la Producción Forestal, 36'602,202.71 pesos.

Regulación del Transporte Urbano, 275'165,008.86 pesos.

Servicios de Transportación y Estacionamientos, 1,974'930,343.77 pesos.

Infraestructura para el Transporte Urbano, 4,224'868,342.49 pesos.

Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura Productiva, 125'028,002.53 pesos.

Ejecución y Control del Crédito Público, 5,357'535,802 pesos.

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, 400 millones. Suma 59,746'700 mil pesos.

Artículo 16. Se agregan al artículo 16 los siguientes programas: Conducción de la Política y Fomento al Empleo. Regulación y Prevención de la Contaminación del aire. Regulación y Prevención de la Contaminación del Agua.

Artículo 23.- Dice en el inicio: Los órganos autónomos y las demás que las leyes establezcan, ejercerán su presupuesto con la autonomía que sus ordenamientos les confieren, para los cuales establecerán previamente calendarios de ministraciones, mismos que estarán en función de la capacidad financiera en el Distrito Federal. Los órganos internos de administración respectivo serán los responsables de recibir y manejar los fondos. Debe decir:

“La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, los órganos autónomos y los demás que las leyes establezcan, ejercerán su presupuesto con la autonomía que sus ordenamientos les confieren para lo cual se establecerán previamente calendarios de ministraciones mismos que estarán en función de la capacidad financiera del Distrito Federal. Los órganos internos de administración respectivos, serán los responsables de recibir los manejos de fondo”.

No daré lectura al artículo 30 que se propone, porque es el mismo texto que se propuso en el 428 que hemos votado con antelación para el Código Financiero.

Se propone artículo 30 bis, cuyo contenido es el siguiente: El Tribunal y las autoridades electorales que por algún motivo no cumplan las metas financieras programadas en su presupuesto de egresos, deberán informar a la Asamblea los conducente y en su caso, deberán enterar a la Secretaría de los recursos no utilizados.

Hago entrega de las reservas hechas por un servidor.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de modificación a los artículos reservados por el diputado Ricardo Martínez Atala. Se abre el registro de oradores.

Oradores en contra.

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

Diputada. Se le concede el uso de la palabra, hasta por 20 minutos, a la diputada Raquel Sevilla para razonar su voto. Se ruega orden en la sala, por favor.

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Con su permiso señora Presidenta.

A mi solamente me gustaría saber, ya que tiene tanta precisión con pesos y centavos el diputado Martínez Atala,

y más que saber, yo le exigiría que explique cual es la nueva estructura del gasto programable distribuido en gasto corriente y capital y en cada uno de los capítulos económicos que los conforman.

Le agradecería que tuviera la misma precisión en pesos y centavos para lo que es servicios materiales y suministros, servicios generales, inversión física, obra pública, bienes muebles e inmuebles y bueno para qué le digo lo demás, si él supone que conoce el clasificador por objeto del gasto, porque si tiene tanta precisión por programas y unidades de infraestructura de gasto, debería de conocer igualmente la distribución económica del gasto.

LA C. PRESIDENTA.- Perdón, señora diputada, si nos disculpa un minuto. Gracias, señora diputada, adelante.

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Le hice varias preguntas al diputado Martínez Atala. Todos estamos cansados, pero si ya lo oímos más de 20 minutos y muchas veces, por qué no me van a oír a mí una vez más.

Me parece que sigue confundiendo el diputado Martínez Atala las facultades de este órgano legislativo con el ejecutivo. Por eso es que yo le exijo en este preciso momento que me dé con precisión en pesos y centavos todos y cada uno de los capítulos, toda vez que tiene tan clara la estructura económica del gasto. Ahí podemos evidenciarlo, que más del 63% del Presupuesto que se pretende aprobar ahora está sirviendo para mantener a 275 mil bola de holgazanes que conforma el Gobierno del Distrito Federal.

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos que fueron reservados por el diputado Ricardo Martínez Atala.

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ (Desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Con qué objeto, señor diputado?

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ (Desde su curul).- Señora Presidenta, dado que en un solo acto vamos a votar 7 artículos, le solicitaría atentamente que cuando se diera el resultado de la votación, dieran el resultado de artículo por artículo.

LA C. PRESIDENTA.- Se instruye a la secretaría para que al final de la votación se dé el resultado artículo por artículo.

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos que fueron reservados por el diputado Ricardo Martínez Atala.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal de las propuestas presentadas a los artículos reservados por el diputado Ricardo Martínez Atala.

Se solicita a los ciudadanos diputados, en los términos del artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Manuel Minjares, en pro de las reformas propuestas a los artículos 6, 23, 30 y 30 Bis. En contra de los artículos 4, 15 y 16.

Armando Salinas Torre, en pro de los artículos 6, 23, 30 y 30 Bis. En contra de los artículos 4, 15 y 16.

Hernández Labastida Miguel, en pro de los Artículos 6, 23, 30 y 30 Bis, y en contra de los artículos 4, 15 y 16.

Pablo Jaime Jiménez, en el mismo sentido que el diputado Minjares.

Margarita Saldaña, en el mismo sentido que el diputado Minjares.

Manuel Aguilera, en contra de todos.

Luna Parra, en contra de un dictamen hechizo a la mera hora.

Jesús Toledano, en el mismo sentido que el diputado Manuel Aguilera.

Levin Coppel, en contra.

Rivera Domínguez, en contra.

Alejandro Vázquez, en contra de todos.

De Garay, en contra

West, en contra.

Ortíz Haro, en contra.

Martínez Parra, a favor de todas las propuestas.

David Sánchez Camacho, a favor de todas las propuestas.

Márquez Franco, en pro de las propuestas.

Eliab Mendoza, a favor.

Ricardo Martínez, en pro de todas las propuestas hechas por un servidor.

Ricardo Molina, a favor de las propuestas hechas por el diputado Martínez Atala.

Ernesto Chávez, a favor.

Miguel Ángel Peláez, a favor.

Miguel Bortolini, a favor.

Javier Hidalgo, a favor de todo.

Francisco Chiguil, en pro.

René Arce, a favor de todas las propuestas de modificaciones hechas por el diputado Martínez.

Batres, a favor de todas las propuestas que detalladamente ha expresado el diputado Ricardo Martínez, muy bien leídas y bien trabajadas.

García Rocha, en el mismo sentido que el diputado Ricardo Martínez.

Alfredo Hernández, a favor.

Roberto Rico, en pro de todas las propuestas hechas por el diputado Martínez Atala.

Ortiz Ayala, en favor de las propuestas.

Rafael López de la Cerda, en favor de las propuestas.

Cárdenas Pérez, a favor de todos.

Virginia Jaramillo, en pro de todas las propuestas.

Ignacio Ruiz, en favor de las propuestas.

Hipólito Bravo, en pro de las propuestas hechas.

Juan González, a favor de todas las propuestas.

A favor de las propuestas presentadas, Esteban Daniel Martínez.

Pichardo Mendoza, a favor de las propuestas presentadas.

Alejandro Rojas, a favor de todas las propuestas, particularmente del artículo 16 y los programas 49, 65 y 66.

A favor de todas las propuestas, pero en especial del artículo 16, programa 49, 65 y 66, hechas por nuestro grupo parlamentario. José Narro Céspedes.

René Rodríguez, a favor de todas las propuestas y muy en singular por lo que ya había reiterado nuestra fracción parlamentaria respecto del artículo 16.

Vicente Cuéllar, a favor.

Antonio Padierna, a favor de las propuestas presentadas.

Guillermo Hernández, a favor de las propuestas presentadas.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor de las propuestas.

Javier Serna, en pro.

Soto Camacho, a favor.

Sevilla Díaz, en contra.

Angeles Correa, en el mismo sentido que el diputado Ricardo Martínez.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto? ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Jesús Galván, en pro del 6, 23, 30 y 30 bis; en contra del 4, 15 y 16.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor de todas las propuestas hechas por el diputado Ricardo Martínez Atala.

Sara Murúa, en el mismo sentido que la diputada Yolanda Tello.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente:

Para los artículos 6, 23, 30, 30-Bis, son 45 votos a favor; 10 en contra; 0 abstenciones.

Para el artículo 4, 15 y 16, 39 votos a favor; 16 en contra; 0 abstenciones.

Cumplida su instrucción, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Por lo tanto se aprueba la propuesta de modificación a los artículos reservados por el diputado Ricardo Martínez Atala.

En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentan las Comisiones Unidas, de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2000, en lo general y en lo particular, con las propuestas aprobadas.

Remítase a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal para los efectos constitucionales conducentes.

Tal y como en su momento resolvió esta Presidencia, se va a proceder a desahogar la propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado Alejandro Rojas Díaz Durán.

En los términos del artículo 115, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, consulte la secretaría en votación económica, si la propuesta a que se ha dado lectura se considera de urgente y obvia resolución.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la Asamblea si la propuesta presentada se considera de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, favor de ponerse de pie.

Se considera de urgente y obvia resolución, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta. Se abre el registro de oradores.

¿Oradores en contra?

¿Algún ciudadano diputado o diputada desea razonar su voto?

Se le concede el uso de la palabra, hasta por 20 minutos para razonar su voto, al diputado René Arce Islas.

En los términos del artículo 115 son 10 minutos, disculpe usted.

EL C. DIPUTADO RENE ARCE ISLAS.- Menos tiempo, señora Presidenta.

Buenos días, compañeros diputados.

Lo que hoy vamos a aprobar seguramente por consenso es algo muy importante, porque ha sido una demanda desde

hace muchos años por parte de los partidos de oposición el que los recursos que se aprueban para el gasto público realmente se dediquen a eso y no sean utilizados de manera incorrecta para otro tipo de eventos, y me parece que las desconfianzas que aquí se han planteado acerca de que algunos de los recursos pudieran ser utilizados para apoyar la campaña electoral del partido que hoy está en el gobierno, es producto precisamente de esa desconfianza que se ha generado entre la clase política y de la sociedad hacia los partidos y hacia los diferentes gobiernos, porque ha sido una práctica el que por muchos años en los tiempos del monopartidismo esto se venía realizando.

Para nadie es desconocido que el propio Presidente de la República reconoció que en su campaña había existido un proceso inequitativo y que había algunas irregularidades.

No tenemos porqué dejar de señalar que ha sido documentado como gobernadores, presidentes municipales y una serie de funcionarios han utilizado los recursos que fueron aprobados para un objetivo, para un fin para apoyar procesos electorales y es algo que no podemos seguir permitiendo, porque de lo contrario seguirá avanzando la desconfianza entre nosotros y un asunto tan importante como es decidir los dineros de la población, que fue el origen precisamente de los parlamentos; el parlamento surgió precisamente por la necesidad que había de cuidar que los recursos emanados de los impuestos tuvieran un destino adecuado, ese es el origen del parlamento: cuidar los recursos.

Y aquí en esta sociedad mexicana necesitamos que los parlamentos efectivamente hagan eso: cuiden el recurso que aprueban.

Por eso para nosotros es de congruencia que si hemos exigido a nivel federal la conformación de comisiones especiales que han vigilado las elecciones en Nayarit, que han vigilado las elecciones en Coahuila, que han vigilado las elecciones en muchos lugares de la República, aquí siendo nosotros mayoría sería totalmente incongruente que rechazáramos una propuesta como la que ha hecho el compañero Alejandro Rojas Díaz Durán y que ha sido apoyada por los coordinadores.

Nosotros creemos que en este asunto del presupuesto, tarde que temprano los partidos políticos, con una visión de Estado, se sentarán a discutir realmente el objetivo fundamental de lo que es un presupuesto y empezarán a dejar de lado una serie de posiciones a veces populistas, retrógradas, conservadoras que impiden muchas veces elaborar presupuestos de acuerdo a las verdaderas necesidades del desarrollo de una nación.

Hay quienes cuando somos oposición nos negamos a que se incrementen los impuestos, pero sí queremos que haya

mucho gasto público. Hay quienes cuando son gobierno quieren que se incrementen los impuestos para poder hacer gasto público, pero cambian su posición cuando son oposición, y esto es porque al presupuesto le damos regularmente siempre connotaciones de orden político y no nos hemos dado cuenta que uno de los problemas fundamentales de este país es que no cuenta con los recursos suficientes para desarrollar una verdadera planta productiva, para generar condiciones de inversión, para lograr mandar más recursos ahí donde más se necesitan, y esto ha sido porque existe desconfianza en la clase política mexicana, porque a todo le vemos posibilidades de un mal uso y de un mal manejo de los recursos.

No es gratis, han sido muchos años en lo que esto se ha convertido prácticamente en un problema simple y sencillamente de orden político electoral. Por eso tenemos que ir generando bases y condiciones de confianza, y me parece que formar comisiones especiales de parlamentarios que con toda la disposición, buena fe y, sobre todo rigurosidad en la vigilancia podamos ir logrando que los gobiernos sepan que los parlamentos no vamos a seguir permitiendo que los recursos públicos sean utilizados y dedicados para cuestiones que no cumplan con su objetivo.

Por eso nos sumamos a la propuesta del compañero Alejandro Rojas Díaz Durán; esperamos que así se empiece a hacer en el Congreso de la Unión, que así se empiece a hacer en los Congresos locales y que cada vez más el parlamento juegue ese papel que le corresponde de ser un vigilante permanente de los recursos del pueblo.

Por eso también me parece que a la iniciativa, habría que decirlo, si el compañero Alejandro Rojas Díaz Durán ha sido quien la ha impulsado y ha cabildeado con los diferentes coordinadores, debería de ser el compañero Alejandro quien encabezara esta comisión, que fuera él el que particularmente promoviera que estuviéramos permanentemente revisando cómo se ejerce este gasto que acabamos de probar.

Me parece, compañeros, que eso sienta bases para la confianza, ojalá y así veamos esta propuesta y la veamos como el inicio de que en esta ciudad nunca más se vuelvan a utilizar los recursos para lo que no han sido destinados.

Muchas gracias y nos sumamos a esta propuesta.

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra para razonar su voto, hasta por 10 minutos, el diputado José Narro Céspedes.

EL C. DIPUTADO JOSE NARRO CESPEDES.- Con su permiso, compañera diputada Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados: Nuestra fracción parlamentaria ha realizado diferentes gestiones para lograr

importantes modificaciones al paquete financiero propuesto por el Ejecutivo local. A este respecto, hemos luchado por una transparente utilización de los recursos públicos, bajo la luz del combate a la corrupción nacida del clientelismo y del corporativismo.

Nuestra preocupación ha sido siempre la de establecer gravámenes responsables que beneficien a los más necesitados y que prevean los derechos de los contribuyentes de nuestra capital.

Por ello, hemos caminado, junto con otras fracciones de esta soberanía, para aprobar acciones en materia fiscal que aliente el progreso y el desarrollo. Pero también se trate de quien se trate, hemos combatido a quienes pretenden lesionar la economía de los ciudadanos del Distrito Federal con el desvío de recursos para beneficiar imágenes personales, de partido o de carácter electoral.

Bajo esta orientación, consideramos necesario un presupuesto con fuerte gasto social para aminorar la carga negativa de las finanzas públicas o de los bolsillos de millones de ciudadanos que día con día ven muertas las esperanzas de recuperar el poder adquisitivo. Pero ese gasto social reclama la vigilante atención de esta soberanía para que no sean utilizados en forma electoral por ningún partido político.

Desde esta tribuna reiteramos la convicción de una mayor participación ciudadana en las actividades cotidianas de nuestra ciudad, en todas y en cada una de las acciones que realicemos, incluso las electorales.

Reiteramos también la histórica lucha contra la corrupción de los gobiernos corporativos y clientelares que mutilan la fuerza de acción del ciudadano libre y solidario, del hombre y la mujer dignos y autónomos, de la razón, de nuestras instituciones renovadas y democráticas, vigilantes del patrimonio de la ciudad y sus habitantes.

Recordemos que la presencia de la oposición en los órganos legislativos no ha sido nunca una graciosa concesión de los gobiernos priistas, sino del empuje de una sociedad que reclama para sí las riendas de su futuro.

Por ello, debemos hacer realidad la rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos, de los gobiernos y sus instituciones. La rendición de cuentas del uso de los recursos públicos es una prioridad nacional y local para la democratización de nuestro país y de nuestra ciudad.

Esta convicción nos lleva a reconocer que aún es vigente la lucha por la equidad en la participación electoral contra toda expresión de fuerza, de gobierno en los comicios electorales; a denunciar con la razón de la historia el uso corporativo y clientelar de los recursos para beneficiar a un grupo, a un partido, a un hombre, a una idea, sea del color que sea.

Nuestra reflexión nos ha enseñado que el fin no justifica los medios. La fuerza del estado que apoya a un partido político corrompen a la sociedad; así lo demuestran 70 años de la historia contemporánea de este país.

La ética de la Administración Pública tiene como principio máximo de estricto apego legal del uso de los recursos públicos, en función del respeto nuestra ley suprema y de las que de ella emanan; base para la convivencia responsable de los poderes locales de nuestra ciudad que hacen posible la recaudación y el gasto propuesto por el Ejecutivo y aprobado por esta Asamblea Legislativa integrada por la representación mayoritaria de la voluntad ciudadana.

Así nuestra opinión sobre el punto de acuerdo propuesto en voz de nuestro compañero Alejandro Rojas Díaz Durán, es que debemos partir de un principio ético y de transparencia en el uso de los recursos públicos y convocamos al resto de los Congresos Locales a que sigan ejemplos similares para que realmente garanticemos que en ningún Estado se siga soportando a los mapaches que roban la voluntad ciudadana y que secuestran el futuro de nuestra sociedad.

Por eso, hacerlo así, apoyar esta propuesta, significa hacer del conocimiento de los ciudadanos no sólo la voluntad de hacer transparente el gasto, no sólo la autenticidad para la propuesta de egresos para el año 2000, sino hacer en los hechos un verdadero gasto social, despejando toda duda del uso patrimonial, del poder gubernamental.

Acabar con la intervención del partido de estado en los procesos electorales, no tiene como objetivo la sustitución de éste. Acabemos con las campañas de partido de estado, nuestra meta es crear un estado democrático, donde cabida la voluntad ciudadana nutridas de la riqueza de las corrientes pensamientos existentes en nuestra Nación.

Por lo anterior, nuestro voto como fracción y como grupo representado ante esta Asamblea Legislativa es a favor de la propuesta de nuestro compañero Alejandro Rojas Díaz Durán, es a favor de esta propuesta que se expresa a favor de los ciudadanos y a favor de la democracia que tanto anhelamos y que tanto apoyamos.

Por eso, queremos plantearles también aquí a ustedes y darles a conocer cuál sería la propuesta de composición de esta comisión.

Por parte del PRD está firmando el coordinador parlamentario, pero se propone que la integren el diputado René Arce Islas y el diputado Alfredo Hernández Raigosa.

Por parte del Partido Revolucionario Institucional se propone que lo integren el diputado Luis Miguel Ortiz Haro y lo integre el diputado Alfonso Rivera. Por su parte del Partido Acción Nacional, se propone que lo integre la

diputada Irma Islas y el diputado Jesús Galván. Por parte del partido Verde Ecologista de México, se propone que lo integren el diputado José Luis Benítez y por parte del Partido del Trabajo, un servidor.

Se propone como Presidente de esta comisión a nuestro compañero el diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán, retomando la propuesta que también ha hecho nuestro compañero el diputado René Arce Islas. Este es el planteamiento, muchas gracias compañeros.

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la secretaría a preguntar a la Asamblea en votación económica, si es de aprobarse o desecharse la propuesta a discusión.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse o desecharse la propuesta de referencia, los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de pie.

Los que estén por la negativa, favor de ponerse de pie.

Aprobada la propuesta señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Se acuerda a la constitución de una Comisión Especial para vigilar que el ejercicio presupuestal del año 2000 del Distrito Federal, no se desvíe para fines electorales. Hágase del conocimiento a las autoridades correspondientes.

Ciudadanas y ciudadanos diputados: Con fundamento a los artículos 62 y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, se va a proceder a la designación de los integrantes de la diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Primera Legislatura.

Proceda la secretaría a dar lectura al acuerdo de la Comisión de Gobierno, suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios, mediante el cual se llevará a cabo la elección de los integrantes de la diputación permanente, que funcionará durante el primer periodo de receso del tercer año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Primera Legislatura.

LA C. SECRETARIA.- ACUERDO

Primero.- Los coordinadores de los grupos parlamentarios han informado que los integrantes de la diputación permanente y sus respectivos suplentes son:

Por el PRD

*Propietario, diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce.
Suplente, diputado René Arce Islas.*

Diputada Ana Lusa Cárdenas Pérez. Suplente, diputada Verónica Moreno Ramírez.

Diputada Virginia Jaramillo Flores, diputada Lucero del Pilar Márquez Franco.

Diputado Francisco Chiguil Figueroa, diputado Antonio Padierna Luna.

Diputado Miguel Bortolini Castillo, diputada Elvira Albarrán Rodríguez.

Diputado Ricardo Molina Teodoro, diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez.

Diputado Ricardo Javier Martínez Atala, diputado Alfredo Hernández Raigosa.

Por el PRI: Propietarios, diputado Luis Miguel Ortiz Haro Amieva; suplente diputado Oscar Levín Coppel; diputado Alfonso Rivera Domínguez, diputado Fernando de Garay y Arenas.

Por el PAN: Propietarios diputado Fernando Pérez Noriega; suplente diputada Margarita Saldaña Hernández, diputada Irma Islas León, diputado Pablo Jaime Jiménez Barranco.

Por el Partido Verde Ecologista de México: Propietario diputada Sara Isabel Castellanos Cortés; suplente, diputado José Luis Benítez Gil.

Por el PT: Propietario diputado René Rodríguez Ruiz; suplente diputado José Narro Céspedes.

Los suplentes ejercerán funciones en la diputación permanente sólo en ausencia de los propietarios.

Segundo.- La sesión en la que se elegirán a la Mesa Directiva de la diputación permanente será presidida por la Mesa Directiva que coordinó los trabajos durante el mes de diciembre del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio de esta legislatura y se desarrollará de la siguiente manera:

1.- Se pasará lista de asistencia de los diputados integrantes de la Diputación Permanente.

2.- Comprobando el quórum necesario, el Presidente invitará a los diputados a que elijan la Mesa Directiva, por cédula, escrutinio secreto y por mayoría de votos.

3.- Dado a conocer el resultado del escrutinio por uno de los secretarios, los integrantes de la Mesa Directiva pasarán a ocupar el asiento que les corresponda y el Presidente electo dirá en voz alta: "La Diputación

Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Primera Legislatura, se declara legalmente instalada".

4.- Se levantará la sesión de instalación.

Tercero.- La Diputación Permanente sesionará en el Salón "Heberto Castillo" del recinto legislativo, preferentemente los días jueves de cada semana, del receso, a las 12:00 horas.

Cuarto.- Cuando menos una hora antes de cada sesión de la Diputación Permanente tendrá que reunirse la Comisión de Gobierno para acordar el orden del día de los asuntos a tratar en las sesiones.

Nos informan que hay una corrección por el PT, el diputado suplente es el diputado Alejandro Rojas Díaz Durán, en lugar del diputado José Narro Céspedes.

Salón de sesiones de la Comisión de Gobierno, a los 30 días del mes de diciembre de 1999.

Firman: Diputado Martí Batres Guadarrama; diputado Manuel Aguilera Gómez; diputado Miguel Hernández Labastida; diputada Sara Isabel Castellanos Cortés; diputado José Narro Céspedes; diputado René Arce Islas; diputada Elva Martha García Rocha; diputada Yolanda Tello Mondragón; diputado Alfredo Hernández Raigosa; diputado Francisco Ortiz Ayala.

Cumplida su instrucción, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Toda vez que el acuerdo a que se ha dado lectura se encuentra suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios, proceda la secretaría a recoger la votación económica del acuerdo de la Comisión de Gobierno.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación económica del acuerdo de la Comisión de Gobierno.

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de pie.

Los que estén por la negativa, favor de ponerse de pie.

Aprobado el acuerdo de la Comisión de Gobierno.

LA C. PRESIDENTA.- Por lo tanto, se declara que la Diputación Permanente que funcionará durante el primer periodo de receso del tercer año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Primera Legislatura, quedará integrada por los siguientes diputados:

Propietario, por el PRD, diputado Javier Hidalgo Ponce; suplente, René Arce Islas.

Ana Luisa Cárdenas Pérez; suplente Verónica Moreno Ramírez.

Virginia Jaramillo Flores; suplente Lucerito del Pilar Márquez Franco.

Francisco Chiguil Figueroa; suplente Antonio Padierna Luna.

Miguel Bortolini Castillo; suplente Elvira Albarrán Rodríguez.

Ricardo Molina Teodoro; Esteban Daniel Martínez Enríquez.

Ricardo Martínez Atala; Alfredo Hernández Raigosa.

Por el PRI, diputado Luis Miguel Ortíz Haro Amieva; suplente diputado Oscar Guillermo Levín Coppel.

Diputado José Alfonso Rivera Domínguez; suplente diputado Fernando de Garay y Arenas.

Por el PAN, diputado Fernando Pérez Noriega; suplente Margarita Saldaña Hernández.

Irma Islas León; suplente Pablo Jaime Jiménez Barranco.

Por el Partido Verde Ecologista, diputada Sara Isabel Castellanos; suplente José Luis Benítez Gil.

Por el PT, diputado René Rodríguez Ruiz; suplente Alejandro Rojas Díaz Durán.

Cítese a los ciudadanos electos a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 64 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el día lunes 3 de enero del año 2000, a las 12:00 horas, en el salón "Heberto Castillo" de este recinto legislativo.

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Ciencia, Tecnología e Informática, con proyecto de decreto de Ley del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.

En virtud de que dicho dictamen ha sido repartido a las ciudadanas y ciudadanos diputado, en los términos del artículo 38, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consulte la secretaría en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se somete a discusión de inmediato.

LA C. SECRETARÍA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura y se somete a discusión de inmediato.

Los que estén porque se dispense la lectura, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Dispensada la lectura, señora Presidenta.

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACION PUBLICA LOCAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMATICA

Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal:

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, acordó enviar a las Comisiones de Ciencia, Tecnología e Informática y Administración Pública Local, para su análisis y dictamen, la Iniciativa de Ley que crea el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, que fue presentada por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al Pleno de la Asamblea Legislativa, el día 30 de diciembre de 1998.

En virtud de lo anterior las comisiones unidas de Ciencia, Tecnología e Informática y Administración Pública Local, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso g, j, I., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 42 fracciones XI, XIV, XVI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Con fundamento en el artículo 28 fracción XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Con fundamento en el artículo 10, fracción I, 17, fracción IV, 45, 48 fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y 88 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y en los artículos 18, 22, 23, y 28, 66 fracción I, 67, 68 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se procedió al análisis de la iniciativa mencionada con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. La diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó el 30 de diciembre de 1998, al Pleno de esta H. Asamblea Legislativa, la Iniciativa de decreto de Ley que crea el INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL DISTRITO FEDERAL.

2. El Presidente de la Mesa Directiva ordenó turnar a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y a la de Ciencia, Tecnología e Informática la iniciativa de referencia para la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Durante este lapso de tiempo, la Iniciativa de Ley del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal ha

sido presentada y discutida en diversos foros en los que han participado diferentes miembros de la comunidad científica y tecnológica, también se sometió a la consideración de universidades, investigadores, sector privado y sector público local y federal; que con sus comentarios y observaciones han enriquecido la propuesta inicial dando como resultado importantes modificaciones al contenido de la misma.

4. En reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Ciencia Tecnología e Informática se acordó formar una subcomisión con integrantes de ambas comisiones, a fin de elaborar un proyecto de dictamen mismo que se presentó para su aprobación ante dichas comisiones unidas el día 28 de diciembre de 1999.

5. En reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Ciencia, Tecnología e Informática el día 28 de diciembre de 1999, se analizó y discutió el presente dictamen, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. La exposición de motivos de la Iniciativa que se analiza, merece las siguientes observaciones:

1°. La exposición de motivos de la iniciativa expresa con claridad y precisión las razones que dan origen a la importancia que la ciencia y tecnología tiene en la vida de los habitantes no solo del Distrito Federal sino de todo el mundo.

2°. El valor de la ciencia como fuente de productividad y por lo mismo su interés en el desarrollo económico y planeación del Distrito Federal.

3°. Indica la necesidad de que el Gobierno diseñe las estrategias y políticas a seguir en la investigación y desarrollo en ciencia y tecnología para la solución de los problemas que enfrenta el Distrito Federal,

4°. Informa sobre la inversión del PIB en Ciencia y Tecnología en la que se advierte que en México se invierte menos del 1% muy por debajo de la inversión realizada por Argentina, Chile y Brasil, y a diferencia de los países europeos y de los Estados Unidos, cuya inversión es superior al 2%, al tiempo que la recomendación de la UNESCO es que los países en vías de desarrollo inviertan en Ciencia y Tecnología al menos el 1.3 % del PIB.

5°. Es baja la participación del sector privado en Ciencia y Tecnología, a diferencia de los países altamente desarrollados, en que el porcentaje es superior al 80%. Es igualmente indicativa la relación entre investigadores y población que, de conformidad con los datos

proporcionados por el CONACYT, da cuatro investigadores por cada 10,000 habitantes de la población económicamente activa. La misma institución menciona que los rubros a que se destinan los recursos son: 40% a programas de becas-crédito; 26% para apoyo a la ciencia; 20% al Sistema Nacional de Investigadores; 2% a la modernización tecnológica; y el 2% al Sistema de Investigaciones Regionales.

6°. Se hace evidente que el Gobierno Federal no ha encontrado los medios para invertir mínimamente el porcentaje del PIB recomendado por la UNESCO; y por lo mismo justifica que esta Asamblea Legislativa establezca los instrumentos necesarios para impulsar la Ciencia y la Tecnología en función de la resolución de los problemas que enfrenta la Ciudad de México.

7°. Se debe agregar el hecho de que, si bien el CONACYT cuenta con nueve delegaciones regionales en el país, además de la Metropolitana, dedicadas a contribuir al desarrollo científico y tecnológico en la región, en lo que respecta a la Delegación Metropolitana que comprende el Distrito Federal, Estado de México y Morelos; se ha excluido al Distrito Federal de la inversión para el desarrollo de la investigación en ciencia y tecnología, con el argumento de que en éste se encuentran la mayor parte de las universidades y centros de investigación científica y tecnológica, sin considerar que aunque esto es cierto, también es cierto el hecho de que las investigaciones que se realizan no se enfocan a resolver la problemática específica que presenta el Distrito Federal.

8°. Las cifras expuestas, así como los argumentos, pero sobre todo la experiencia diaria de los habitantes del Distrito Federal no dejan lugar a dudas, ni siquiera para preguntarse si es necesario un Instituto que tenga por objeto la coordinación y unificación de la investigación para la solución de los problemas que día a día enfrentan el Gobierno de la Ciudad y sus habitantes, lo anterior haría considerar la creación del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal como una prioridad que requiere ser implementada y que no puede soslayarse con el argumento de que hay una delegación regional del CONACYT que comprende a la Ciudad de México. Más aún: no se da información sobre los proyectos de investigación para la solución de los problemas que enfrenta el Distrito Federal y que a cada momento aumentan, poniendo en peligro la salud de los habitantes de la Ciudad, así como el desarrollo ordenado y sustentable de la misma, Si al Gobierno Federal no le ha sido posible solucionar tan apremiantes problemas, corresponde ahora a los órganos de gobierno del Distrito Federal, como a sus habitantes, el compromiso para ello.

SEGUNDO. La Iniciativa de creación de un Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, como una

entidad de la administración pública del Distrito Federal, cuya naturaleza jurídica propuesta es la de un organismo descentralizado, requirió del análisis normativo de las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, a efecto de determinar si cumple con los principios jurídicos contenidos en las mismas; las disposiciones analizadas son las siguientes:

FACULTADES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. El artículo 122 Constitucional establece los principios que determinan la distribución de competencia entre los poderes de la unión y las autoridades locales del Distrito Federal; por lo que en el inciso c, de la Base Primera, fracción V, inciso g, atribuye expresamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, facultades para legislar en materia de administración pública local.

En correspondencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal decretado por el H. Congreso de la Unión contiene las disposiciones que determinan toda actividad en materia de administración pública local en el Distrito Federal.

El artículo 2 del Estatuto de Gobierno establece que el Distrito Federal es una entidad federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio para el desarrollo de sus propias actividades y funciones.

El artículo 42 del mismo ordenamiento, en su fracción XI faculta a la Asamblea Legislativa para legislar en materia de administración pública; y en relación con las facultades para legislar en materia de planeación y desarrollo (fracción XIV), y las facultades para legislar en materia de fomento económico y protección al empleo (fracción XVI).

El mismo Estatuto de Gobierno, en el primer párrafo del artículo 87, determina que la administración pública será centralizada o paraestatal, y en su artículo 97 establece que la administración pública paraestatal se integrará entre otras entidades de los organismos descentralizados.

Por lo anterior, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está facultada para legislar sobre la creación del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal que se propone.

NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL DISTRITO FEDERAL. La iniciativa propone que la naturaleza jurídica del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal sea de un organismo

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que en este sentido goce de la autonomía que le permita desarrollar sus actividades.

Con relación a la naturaleza y normatividad de los organismos descentralizados, se analizaron los siguientes preceptos:

El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en su artículo 52, determina que el órgano de gobierno local y la administración pública local recaerán en una sola persona denominada Jefe de Gobierno del Distrito Federal. En correspondencia el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal establece que corresponde al Jefe de Gobierno ser el titular de la administración Pública del Distrito Federal, y el ejercicio de las facultades atribuidas por la mencionada Ley. En el mismo sentido, el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal otorga a los organismos descentralizados autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objetivo y programas.

CREACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. El artículo 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal determina que los organismos descentralizados podrán ser creados por decreto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal o por ley de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, agregando que el mismo procedimiento se seguirá para su fusión, extinción y liquidación; en el mismo sentido el contenido del artículo 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. El mismo precepto determina que esta se propondrá al Jefe de Gobierno por conducto de la Secretaría de Finanzas, la que deberá oír a la Coordinadora del Sector correspondiente, si deja de cumplir su objeto, o fin, o no corresponde al interés público.

A lo anterior debe agregarse que el artículo 100 del mencionado Estatuto de Gobierno establece que el instrumento legal utilizado para crear un organismo descentralizado debe precisar con claridad: 1) El objeto; 2) Fuente de recursos para integrar su patrimonio; 3) Integración del órgano de gobierno; 4) Bases de incorporación de personal especializado y su permanente capacitación; 5) Las nuevas tecnologías para su mayor eficacia.

OBJETO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. La iniciativa que se dictamina, propone en su artículo segundo que el instituto «tiene el objeto de asesorar y auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la fijación, instrumentación y evaluación de la política de ciencia y tecnología»; lo cual está en plena concordancia con los principios contenidos en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, como con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

Así en el artículo 99 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal determina los objetivos que pueden tener los organismos descentralizados y son: 1) Realizar las actividades calificadas como prioritarias por las leyes; -conforme al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública se consideran como actividades prioritarias: las relativas al desarrollo económico y empleo, y deberán sujetarse a las modalidades que dicte el interés público, el uso en beneficio general de los recursos, procurando la conservación de los mismos y del medio ambiente, conforme a los principios contenidos en los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2) La generación de bienes y prestación de servicios públicos o privados necesarios para el funcionamiento de la ciudad; 3) Auxiliar al Jefe de Gobierno en el ejercicio de facultades tecnológicas o técnicas.

ESTRUCTURA DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. La estructura de todo organismo descentralizado deberá contener un órgano de Gobierno, un Director General, un Secretario Técnico, un órgano de Vigilancia.

Conforme con el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el gobierno de los organismos descentralizados estará a cargo de la Administración, órgano colegiado, debiendo ser la mayoría de sus integrantes servidores públicos, los cuales no tendrán restricción alguna en cuanto a su voto. Así el artículo 50 del mismo ordenamiento determina que el órgano de gobierno se integrará por no menos de cinco y no más de quince miembros propietarios y sus suplentes, los cuales no podrán ejercer sus atribuciones por representantes. El mismo precepto establece que el órgano de gobierno de los organismos descentralizados será presidido por el titular de la Secretaría del Sector correspondiente.

De conformidad con el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal el decreto de creación determinará la periodicidad de sus sesiones que deberán ser por lo menos cuatro veces al año; el mismo precepto determina que para la validez de sus sesiones se requiere la asistencia de al menos la mitad más uno de sus miembros, debiendo ser la mayoría representantes de la administración pública del Distrito Federal.

FACULTADES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, El artículo 67 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal determina que corresponde a los órganos de gobierno de las entidades paraestatales: 1) Controlar la forma de consecución de los objetivos; 2) El control de la conducción de las estrategias básicas; 3) La atención de los informes relativos a control de auditoría que les sean turnados.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal determina en su artículo 70 las atribuciones indelegables de los órganos de gobierno.

Con relación a los titulares de las entidades paraestatales rigen las siguientes disposiciones:

El artículo 103 del Estatuto de Gobierno establece que los titulares de la administración pública paraestatal deberán: 1) Reunir los requisitos establecidos en las leyes; 2) Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio; 3) Conocimientos y experiencia en la materia de la entidad a dirigir; o, conocimientos de alto nivel y experiencia en materia administrativa.

PERSONAS NO LEGITIMADAS PARA PERTENECER A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. Es importante señalar que personas no están legitimadas para ser integrantes del órgano de gobierno de los organismos descentralizados de conformidad con el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que se modificó la iniciativa en la parte conducente.

FACULTADES INDELEGABLES. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal establece en el artículo 70, las facultades indelegables de los órganos de gobierno de las entidades paraestatales, por lo que resulta innecesaria su transcripción al texto de la iniciativa.

Sobre la base de los principios legales anteriores se considera que la iniciativa en lo general está en concordancia con los mismos, con las modificaciones realizadas en las partes que no correspondían.

TERCERO. Contenido de la Iniciativa de Ley que crea el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.

La Iniciativa de Ley que Crea el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal fue modificada tomando en consideración las opiniones de expertos en la materia, especialmente en la integración de la Junta de Gobierno, aumentando un Consejo Operativo integrado por representantes de los institutos y centros de investigación, como por representantes del sector privado, con la pretensión de lograr una vinculación real con la academia y la empresa; sin que sus atribuciones interfieran con las de la Junta de Gobierno cuya función principal será aprobar el proyecto de presupuesto de la entidad, como de los planes que lo integran. Igualmente no interferirá con las facultades del Director General, cuya función principal será la de ser el representante legal de la entidad, así como la formulación del proyecto de presupuesto y de los programas de la entidad; a diferencia el Consejo Operativo que tendrá como principales atribuciones las relativas a la propuesta de proyectos y programas de investigación.

CUARTO. Se considera actividad prioritaria la creación del Instituto de Ciencia y Tecnología, que tenga por objeto ser asesor del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y órgano de consulta obligatoria para los integrantes de la Administración Pública del Distrito Federal, así como fomentar y coordinar la investigación y la inversión en ciencia y tecnología sobre los problemas que plantea la Ciudad de México.

QUINTO. Estructura de la ley.

El capítulo primero fija la naturaleza jurídica, el objeto y las atribuciones del Instituto de Ciencia y Tecnología como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es asesorar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de ciencia y tecnología; entre sus principales atribuciones destacan la de ser órgano de consulta obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. Así como el promover la coordinación entre los centros de investigación sitos en la Ciudad de México con la finalidad de fomentar áreas comunes de investigación sobre los problemas del Distrito Federal.

El capítulo segundo, contiene las disposiciones relativas al órgano de gobierno del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, en el que siguiendo los principios de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal con siete integrantes, siendo cuatro integrantes permanentes y tres integrantes temporales, siendo sus principales facultades la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos de la entidad, como de los programas que lo integran.

El Capítulo Tercero comprende lo relativo a las sesiones de la Junta de Gobierno que de conformidad con la ley de la materia no pueden ser menor de cuatro veces al año.

El Capítulo Cuarto contiene las disposiciones relativas al Director General del Instituto y dado que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, establece en dos preceptos las facultades de éstos, en la iniciativa sólo se dispone que es el representante general del Instituto. Se atribuye la formulación de los planes y programas del Instituto que deberá someter a la aprobación de la Junta de Gobierno., en los cuales deberá dar cuenta de las opiniones del Consejo Operativo en forma expresa.

En el Capítulo Quinto se establecen las disposiciones que regulan al Consejo Operativo, órgano que se integrará de expertos en ciencia y tecnología como de representantes del sector privado, siendo sus principales atribuciones, la vinculación con el sector académico y científico, como con el sector privado; así como la de formular proposiciones a la Junta de Gobierno como al

Director General sobre instrumentos, mecanismos y eventos que permitan al Instituto cumplir con su objeto.

En el Capítulo Sexto se determina cómo se integra el patrimonio del Instituto de Ciencia y Tecnología, de los bienes que le asigne el Jefe de Gobierno como de los demás que adquiera por cualquier otro título legal, en este punto es importante señalar que en el artículo segundo transitorio se dispone que le Jefe de Gobierno deberá integrar una comisión dentro el mes siguiente a la publicación de la presente ley en la Gaceta del Distrito Federal para que formule los planes y programas del Instituto que iniciará sus operaciones en enero del año 2001.

El Capítulo Séptimo determina que las relaciones entre el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal se regularán por el apartado B de la Ley artículo 123 Constitucional.

Por lo antes expuesto, las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e informática y Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, ha estudiado y dictaminado la iniciativa de conformidad con lo dispuesto con los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V. Incisos g), j) y l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 42 fracciones XI, XIV Y XVI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, artículo 10 fracción I, 17 fracción IV, 45 I 48 fracción I, 84 fracción I, 85 I 86 I 88 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y en los artículos 18, 22 I 23 f 28, 66 fracción I, 67 y 68 del Reglamento por el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a consideración del pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal el siguiente dictamen con proyecto de LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL DISTRITO FEDERAL.

DICTAMEN

ÚNICO. Es de aprobarse la Iniciativa de Ley del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, presentada por la diputada Margarita Saldaña Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con las reformas y adiciones propuestas para quedar como sigue:

LEY DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL DISTRITO FEDERAL

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1.- Se crea el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Artículo 2.- El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal tiene el objeto de asesorar y auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la fijación, instrumentación y evaluación de la política de ciencia y tecnología. Así como ser medio de vinculación con los centros e institutos de investigación públicos y privados.

Artículo 3.- El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal tiene las siguientes atribuciones:

I.- Ser asesor del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y de la Secretaría de Desarrollo Social en la planeación, programación, coordinación, orientación, sistematización, promoción y dirección de las actividades relacionadas con la ciencia y tecnología;

II.- Ser organismo de consulta obligatoria para todas las dependencias y entidades de la administración pública del Distrito Federal en todo lo concerniente a ciencia y tecnología.

III.- Celebrar convenios de asesoría para proporcionarla a los organismos públicos, así como a los particulares.

IV.- Formular los programas de investigación científica, tecnológica y aplicada, relacionados con el desarrollo económico y social del Distrito Federal, procurando la participación de la comunidad científica, de los organismos públicos, de las Instituciones de educación superior y de los usuarios de la investigación;

V.- Promover la más amplia relación, vinculación y coordinación entre los centros de investigación y de enseñanza superior radicados en el Distrito Federal, y el Gobierno del Distrito Federal y los usuarios de la investigación; para fomentar áreas comunes de investigación, programas interdisciplinarios respecto de investigaciones relacionadas con los problemas que enfrenta el Distrito Federal, eliminar duplicaciones en programas, proyectos y presupuestos y ayudar a la formación y capacitación de investigadores;

VI.- Fomentar y fortalecer la investigación básica, tecnológica, y aplicada que se necesiten para la solución de los problemas del Distrito Federal, promoviendo la concertación entre el sector privado, el sector público, universidades, centros de investigación y usuarios de los resultados de la misma;

VII.- Promover el financiamiento adicional a las instituciones académicas y centros de investigación, para el fomento y realización de investigaciones sobre el Distrito Federal conforme a programas y proyectos específicos;

VIII.- Asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en la celebración de convenios de ciencia y tecnología, y darle seguimiento;

IX.- Formular un programa de becas para estudios sobre el Distrito Federal;

X.- Celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de sus fines, con organismos nacionales o internacionales;

XI.- Dar seguimiento al personal del Instituto, en los trabajos de investigación relacionados con el Distrito Federal que se realizan en el extranjero;

XII.- Fomentar el intercambio de docentes, investigadores y técnicos con instituciones extranjeras.

XIII.- Promover cursos de capacitación, especialización y actualización en ciencia y tecnología entre la comunidad científica e interesados;

XIV.- Asesorar a las autoridades competentes en materia de normas técnicas de los bienes que se produzcan en el Distrito Federal o deban ingresar en su territorio;

XV.- Promover las publicaciones científicas, la difusión de las investigaciones sobre el Distrito Federal, así como informar periódicamente de los avances en ciencia y tecnología, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social;

XVI.- Proporcionar asesoría en materia de intercambio académico, de investigadores, programas de becas, sistemas de información y documentación, y servicios de apoyo a la investigación;

XVII.- Para cumplir con la función de fomento, deberá proponer el esquema de estímulos aplicables a quienes realicen actividades científicas y tecnológicas, de acuerdo a un régimen de prioridades que también deberá establecer, así como de la calificación de los solicitantes tomando en consideración los elementos de juicio previamente determinados;

XVIII.- Proponer formas de reconocimiento para las personas e instituciones que se distingan en Ciencia y Tecnología;

XIX.- Las demás que le atribuyan los ordenamientos legales.

Capítulo II

De la Junta de Gobierno

Artículo 4.- El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal será regido por una Junta de Gobierno, la que establecerá los órganos internos necesarios para la consecución de los fines del Instituto.

La Junta de Gobierno se integrará de 7 miembros, cuatro permanentes y tres temporales.

La Junta de Gobierno podrá delegar facultades en uno de los miembros permanentes.

Artículo 5.- Los miembros permanentes de la Junta de Gobierno son el Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, quien será el Presidente de la misma, el Secretario de Finanzas, el Secretario de Desarrollo Económico y el Secretario del Medio Ambiente.

Los miembros permanentes sólo podrán hacerse representar por un Subsecretario.

Artículo 6.- Los miembros temporales lo serán por periodos bianuales irrevocables, y serán uno de los rectores de las instituciones de educación superior sitas en el Distrito Federal, un representante de alguna de las cámaras de la industria o comercio de la Ciudad de México y un representante de uno de los centros de investigación sitos en el Distrito Federal.

Los miembros temporales podrán hacerse representar por la persona de mayor jerarquía del organismo de que se trate.

Capítulo III

De las sesiones de la Junta de Gobierno

Artículo 7.- Para la validez de las sesiones de la Junta de Gobierno se requiere la asistencia mínima de cuatro miembros, tres de los cuales deben ser permanentes.

Los acuerdos de la Junta requieren de la presencia mínima de cuatro de sus miembros.

Todos los miembros tendrán derecho a voz y voto.

El presidente de la Junta tendrá voto de calidad.

Artículo 8.- La Junta de Gobierno se reunirá trimestralmente en sesión ordinaria. El Presidente de la Junta podrá convocar a sesiones extraordinarias.

Capítulo IV

Del Director General

Artículo 9.- El Instituto de Ciencia y Tecnología contará con un Director General, que será designado y en su caso removido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo 10.- Son facultades del Director General:

I. Actuar como representante legal del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal;

II. Coordinar el consejo operativo;

III. Considerar las opiniones del consejo operativo en la formulación de los programas y el proyecto del presupuesto de la entidad; y

IV. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el Estatuto Orgánico de la Entidad.

Artículo 11.- El Director se auxiliará de un Secretario General, quien lo suplirá en sus ausencias.

El Secretario General será designado por la Junta de Gobierno, a propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Capítulo V

Del consejo Operativo.

Artículo 12.- El Instituto de Ciencia y Tecnología contará con un Consejo Operativo que se integrará: de los tres integrantes temporales de la Junta de Gobierno, de siete ciudadanos, hombres y mujeres que gocen de reconocido prestigio dentro del medio científico y tecnológico. Los integrantes del Consejo Operativo serán representantes de los institutos y centros de investigación, universidades, representantes del sector privado, que realicen sus actividades en el Distrito Federal.

El cargo de miembro del Consejo tendrá carácter honorario.

Cada año deberá ser sustituido el miembro de mayor antigüedad de dicho consejo, procurando que el que lo sustituya sea un representante del mismo sector.

Los miembros del Consejo serán nombrados por el Jefe de Gobierno, con aprobación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Artículo 13.- Las facultades del Consejo Operativo son:

I. Proponer a la Junta de Gobierno los proyectos y programas de investigación relacionados con la problemática del Distrito Federal.

II. Proponer a la Junta de Gobierno y al Director General, los programas, e instrumentos, para la captación de recursos.

III. Proponer a la Junta de Gobierno y al Director General los programas de eventos relacionados con la ciencia y tecnología que pudiesen realizarse en la Ciudad de México.

IV. Proponer a la Junta de Gobierno y al Director General los criterios de valoración de los proyectos y programas de investigación.

V. Emitir su opinión sobre los proyectos de investigación que pretendan financiamiento por el Gobierno del Distrito Federal.

VI. La vinculación con los institutos y centros de investigación, como con el sector privado.

Capítulo VI **Del Patrimonio del Instituto**

Artículo 14.- *El patrimonio del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal se integra con:*

I.- La partida presupuestal que le asigne el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través del presupuesto de egresos.

II.- Los bienes muebles e inmuebles que le asigne el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

III.- Los bienes que adquiera por cualquier otro título legal.

IV.- Los ingresos por los servicios que preste conforme a su objeto.

Artículo 15.- *La asignación de fondos por parte del Gobierno del Distrito Federal para proyectos, estudios, investigaciones, otorgamiento de becas, y cualquier asignación económica que proporcione, se sujetará a los convenios que celebre, conforme a los siguientes principios:*

I.- El Instituto de Ciencia y Tecnología vigilará la aplicación y aprovechamiento de los fondos que proporcione;

II.- Los beneficiarios rendirán al Instituto informes periódicos convenidos sobre el desarrollo y resultado de sus trabajos;

III.- Los derechos de propiedad industrial respecto de los resultados obtenidos por los beneficiarios del apoyo económico del Instituto, se regularán específicamente en los convenios que se hubiesen celebrado, en los que se protegerá los intereses de la Nación, los del Distrito Federal, del Instituto y de los investigadores.

Capítulo VII **De la Relación Laboral del Instituto con sus Trabajadores**

Artículo 16.- *Las relaciones de trabajo entre el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y sus trabajadores se regirán por la Ley Reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 Constitucional.*

Capítulo VIII **Del Comisario y el Contralor**

Artículo 17.- *El Comisario y el Contralor del Instituto serán designados por la contraloría general del Distrito Federal.*

TRANSITORIOS

PRIMERO. *Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con las siguientes condiciones:*

1. El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal iniciará su operación el 2 de enero del año 2001, para lo cual las autoridades competentes deberán realizar todos los actos y trámites necesarios para su debida integración y funcionamiento.

2. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberá incluir en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el año 2001 la partida que corresponda al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.

3.- Para su mayor difusión la presente Ley se publicará además en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. *Las disposiciones de la presente ley no afectarán los proyectos de investigación sobre el Distrito Federal que se estén realizando, como los que con posterioridad reciban fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.*

TERCERO. *Los convenios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal con anterioridad al inicio de actividades del Instituto de Ciencia y Tecnología se regirán por sus estipulaciones.*

Por las comisiones unidas de Administración Pública Local y de Ciencia, Tecnología e Informática, firman: Diputado Fernando Pérez Noriega; diputada Margarita Saldaña Hernández; diputado Juan González Romero; diputada Ana Luisa Cárdenas Pérez; diputado Jesús Eduardo Toledano Landero, abstención; diputada María de los Angeles Correa de Lucio; diputado Roberto Rico Ramírez; diputado Francisco Chiguil Figueroa; diputado Guillermo Hernández Reyes; diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce; diputado José Luis Benítez Gil; diputada Lucerito del Pilar Márquez Franco; diputado Ricardo Molina Teodoro; diputada María del Pilar Hiroishi Suzuki; diputada Sara Murúa Hernández; Diputado Armando Salinas Torre.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, proceda la secretaría a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un sólo acto.

LA C. SECRETARIA.- Se a va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un sólo acto.

Se solicita a los ciudadanos diputados, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión “en pro” o “en contra”.

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones. Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Jesús Galván, en pro.

Armando Salinas Torre, en pro.

Margarita Saldaña, en pro.

Hernández Labastida Miguel, en pro.

Pablo Jaime Jiménez, en pro.

Manuel Minjares, en pro.

Manuel Aguilera, en pro.

West, a favor.

Levín Coppel, en pro.

Alejandro Vázquez, en pro.

De Garay, en pro.

Rivera Domínguez, en pro.

Jesús Toledano, en pro.

Luna y Parra, en pro.

Martínez Parra, en pro.

Cárdenas Pérez, en pro.

Márquez Franco, en pro.

Elíab Mendoza, a favor.

Francisco Chiguil, en pro.

Ricardo Molina, a favor.

Ricardo Martínez, en pro.

Ernesto Chávez, a favor.

Peláez, en pro.

Miguel Bortolini, a favor.

Roberto Rico, a favor.

Batres, a favor del dictamen con proyecto de Ley del Instituto de Ciencia y Tecnología, presentado por la diputada Margarita Saldaña.

Antonio Padierna, a favor.

Alfredo Hernández, a favor.

Rafael López de la Cerda, a favor.

García Rocha, a favor.

Ortiz Ayala, a favor.

David Sánchez, a favor.

Ignacio Ruiz, a favor.

Hipólito Bravo, abstención.

Juan González, a favor.

Martínez Enríquez, a favor.

Aunque no se haya fundamentado ni permitido reservas, Pichardo Mendoza, a favor.

José Narro Céspedes, a favor.

René Rodríguez, en pro.

Guillermo Hernández, a favor.

Vicente Cuéllar, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Javier Serna, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Sevilla Díaz, en pro.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Alejandro Rojas, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA. Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente:

48 votos a favor; 0 votos en contra; 1 abstención.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia se aprueba el dictamen que presentan las Comisiones Unidas, de Administración Pública Local y de Ciencia, Tecnología e Informática con proyecto de decreto de ley del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal en lo general y en lo particular, con las propuestas aprobadas.

Remítase a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal para los efectos constitucionales conducentes.

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Gobierno para ratificar el nombramiento del ciudadano Juan Nicasio Guerra Ochoa, como Delegado Político del Distrito Federal en Milpa Alta.

De conformidad con lo establecido por el artículo Segundo Transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1999.

Para normar el desarrollo de esta sesión proceda la secretaria a dar lectura al artículo Segundo Transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1999.

LA C. SECRETARIA.- Segundo. La elección indirecta de los titulares de la delegación de los titulares del Distrito Federal previstas en el artículo Décimo Cuarto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de diciembre de 1997 se realizará a partir de la entrada en vigor del presente decreto, mediante la aprobación por el voto de la mayoría absoluta de los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aplicándose en lo demás lo dispuesto por lo dicho en el artículo transitorio.

Cumplida su instrucción, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, proceda la secretaria a dar lectura al acuerdo de la Comisión de Gobierno.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a dar lectura al acuerdo de la Comisión de Gobierno.

ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO POR EL CUAL SE APRUEBA EN FORMA PROVISIONAL, LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL C. JUAN NICASIO GUERRA OCHOA, COMO DELEGADO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA

CONSIDERANDO

I. Que el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos Décimo Transitorio del Decreto de adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, en relación con el Décimo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley de Expropiación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1997; 67 fracción V y 105 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha sometido a la consideración de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, la propuesta de nombramiento del C. Juan Nicasio Guerra Ochoa, para ocupar el cargo de Delegado del Distrito Federal en Milpa Alta.

II. Que la Comisión de Gobierno, con fecha 23 de junio del actual acordó turnar a la Comisión de Administración Pública Local de esta Asamblea, en razón de su competencia, la propuesta respectiva a fin de que elabore el Dictamen para los efectos de aprobar, en su caso, provisionalmente el nombramiento del C. Juan Nicasio Guerra Ochoa como Delegado del Distrito Federal en Milpa Alta; llevándose a cabo el procedimiento contenido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de mayo de 1999, en lo que corresponda.

III. Que la propuesta recibida, se publicó el 24 de junio del actual, en tres diarios de circulación nacional, de conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gobierno,

a fin de que los interesados, dentro de los dos días siguientes a la publicación, aportaran a la Comisión de Administración Pública Local, elementos de juicio.

IV. Que con base en el acuerdo respectivo, la Comisión de Administración Pública Local emitió el 25 de junio de 1999 el Dictamen correspondiente, mismo que hizo llegar a esta Comisión de Gobierno para los efectos de aprobar provisionalmente la propuesta de nombramiento del C. Juan Nicasio Guerra Ochoa, como Delegado del Distrito Federal en Milpa Alta.

V. Que el artículo Tercero Transitorio del decreto de Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de fecha 24 de mayo de 1999, faculta a la Comisión de Gobierno para que, en los recesos de la Asamblea, apruebe las propuestas de nombramientos de Delegados del Distrito Federal y los someta ante el pleno en el siguiente Periodo de Sesiones Ordinarias, para su aprobación definitiva.

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Gobierno emiten el siguiente:

ACUERDO

Primero.- *Se aprueba en forma provisional, el nombramiento del C. Juan Nicasio Guerra Ochoa, para ocupar el cargo de Delegado del Distrito Federal en Milpa Alta.*

Segundo.- *Sométase el presente acuerdo al Pleno, durante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, para su aprobación definitiva.*

Tercero.- *Cítese para que rinda la protesta de Ley al C. Juan Nicasio Guerra Ochoa, ante esta Comisión de Gobierno, el día 30 de junio de 1999.*

Cuarto.- *Notifíquese el presente acuerdo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.*

Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión de Gobierno, a los 30 días del mes de junio de 1999.

Firman: Diputado Martí Batres Guadarrama; diputado Manuel Aguilera Gómez, abstención; diputado Miguel Hernández Labastida, abstención; diputada Sara Castellanos Cortés, en contra; diputado José Narro Céspedes; diputado René Arce Islas; diputada Elva Martha García Rocha; diputada Yolanda Tello Mondragón; diputado Alfredo Hernández Raigosa; diputado Francisco Ortiz Ayala.

Cumplida su instrucción, señor Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Está a discusión el acuerdo de la Comisión de Gobierno. Se abre el registro de oradores.

¿Oradores en contra?

¿Alguna ciudadana o ciudadano diputado desea razonar su voto?

Se le concede el uso de la palabra, hasta por 20 minutos, al diputado Armando Salinas Torre, para razonar su voto.

EL C. DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE.- Con su venia, diputada Presidenta.

Lamentamos mucho, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que a esta hora y a este día estemos sometiendo a consideración del pleno un dictamen para ratificar el nombramiento provisional de quien ejerce la función de gobierno en una demarcación política del Distrito Federal.

Lo lamentamos doblemente, primero por la falta de respeto a la persona designada, quien tiene muchas horas escuchando los temas internos de la Asamblea, y que seguramente ha de haber perdido el vuelo para poder ir a su tierra con sus seres queridos a pasar el año nuevo.

Lamentamos mucho también de que recaiga en una persona que para muchos de los diputados, si no es que para todos los integrantes del Partido Acción Nacional, a quien le reconocemos una lucha social congruente, valiente en distintas etapas, lugares y circunstancias en las que ha logrado y ha dado testimonio de la misma.

También lamentamos mucho, lamento mucho que recaiga en la persona de Juan Nicasio Guerra, una incongruencia de quien entonces lo envió como una propuesta para ser delegado político en una demarcación, que recaiga en una persona que no solamente ha dado testimonio, sino ha contribuido en algunos puntos a la construcción, a la reflexión y al referente de los grandes temas de este país; que recaiga en una persona que haya sido dos veces, en distintas delegaciones, subdelegado jurídico y de gobierno y a quien yo creo que lo caracteriza la franqueza, la apertura en los asuntos por los que cree y en el ánimo de construir respetando los argumentos del otro.

Insisto en calificar de lamentable, donde en la Comisión de Administración Pública Local ante su comparecencia Acción Nacional reiteradamente le dijo que era víctima de la incongruencia del entonces Jefe de Gobierno y ya por muchos años, más de una década, candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Miren, en este caso con mucho respeto le dijimos a Juan Guerra que, desgraciadamente, no cumplía con todos los requisitos para ser delegado, pero no porque fueran los formales, los que están en la ley, a los que estamos nosotros los diputados, los representantes populares, este órgano

de gobierno obligados a vigilar, sino que era víctima de las propias declaraciones que se hicieron, hoy creo que lo compartiría él y muchos más, de manera irresponsable por quien era candidato a Jefe de Gobierno que iba ofreciendo un paraíso por doquier en busca de un voto y que dijo que los delegados iban a ser personas de esos lugares, de esas demarcaciones, reconocidos por la ciudadanía, donde no solamente se les pudiera no objetar sino apoyar por el solo liderazgo que sería una persona en este caso de Milpa Alta.

Esta condición, si bien es cierto que no legal, si para quienes estamos buscando que se haya respetado la voluntad del pueblo, que por esto también votó el electorado del Distrito Federal, por esta expectativa que hoy, insisto, podemos decir que de manera irresponsable el señor Cárdenas Solórzano insistía, recae, desgraciadamente, lamentablemente, hace víctima, a quien yo puedo decir y con gran gusto, de mi amigo Juan Nicasio Guerra.

Creo que, desgraciadamente, la incongruencia, la irresponsabilidad de ofrecer más que lo que la propia ley requería y por respeto al electorado y con el ánimo de no repetir ante esta tribuna lo que ya fue no debatido sino discutido, ni discutido, simplemente comentado y enriquecido con el propio candidato a delegado, con los demás grupos parlamentarios representados en esta Asamblea en la Comisión de Administración Pública Local, también lamentablemente no podemos avalar el nombramiento de Delegado en Milpa Alta de Juan Nicasio Guerra.

Digo lamentablemente porque creemos no solamente reúne los requisitos formales, si que si estos no fuesen, estaríamos señalando puntualmente lo que a nuestro juicio no se reúne, pero sí donde la ética, donde la ética política, donde la congruencia, donde a quienes representamos nos obliga a decir que si votaron por una expectativa, se le habrá olvidado a quien la prometió, se le habrá olvidado a un partido político o a un grupo parlamentario en esta Asamblea. que fue quien ganó las elecciones; pero para algo también estamos todos los diputados de esta Asamblea, para recordar que ahí hay una promesa incumplida y que hoy tenemos que hacer un referente a ella.

Si bien es cierto que no podemos avalarlo, tampoco podemos estar en contra de alguien que seguramente hará un esfuerzo por tratar de llevar bienestar y solucionar los grandes problemas de esa demarcación.

En tal sentido, los diputados del grupo parlamentario del Acción Nacional, como lo hicieron en la Comisión de Administración Pública, como lo hizo el coordinador del grupo en la Comisión de Gobierno, lo seguirán haciendo en este pleno. Lamentablemente, nos tendremos que abstener.

LA C. PRESIDENTA.- En tal virtud, proceda la secretaría recoger la votación nominal del Acuerdo por el que se ratifica

el nombramiento del ciudadano Juan Nicasio Guerra Ochoa como Delegado Político del Distrito Federal en Milpa Alta.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la votación nominal del acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Juan Nicasio Guerra Ochoa como Delegado Político del Distrito Federal en Milpa Alta.

Se solicita a los ciudadanos diputados de conformidad con el artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se solicita a la Oficialía Mayor hacer el anuncio a que se refiere el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Armando Salinas Torre, abstención.

Jesús Galván, abstención.

Hernández Labastida Miguel, abstención.

Pablo Jaime Jiménez, abstención.

Ortiz Haro, a favor.

Levín Coppel, a favor.

De Garay, a favor.

Manuel Aguilera, en pro.

Luna Parra, a favor.

Rivera Domínguez, a favor.

Margarita Saldaña, abstención.

Jesús Toledano, a favor.

Martínez Parra, a favor.

Cárdenas Pérez, en pro.

Ricardo Martínez, en pro.

David Sánchez, a favor.

Roberto Rico, a favor.

Francisco Chiguil, en pro.

Ortiz Ayala, a favor.

Ricardo Molina, a favor.

Por su historia, por su congruencia, Ernesto Chávez a favor.

Peláez, a favor.

Márquez Franco, en pro.

Bortolini, a favor.

Alfredo Hernández, a favor.

Javier Hidalgo, por su historia, por su congruencia y por Sinaloa, a favor.

René Arce, aunque sea de Sinaloa, a favor.

Batres, a favor.

García Rocha, a favor.

Rafael López de la Cerda, a favor.

Virginia Jaramillo, en pro.

Ignacio Ruiz, a favor.

Eliab Mendoza, a favor.

Juan González, a favor.

A favor, Esteban Daniel Martínez.

Pichardo Mendoza, en el mismo sentido que el diputado Ernesto Chávez.

René Rodríguez, en pro.

Narro Céspedes José, a favor.

Alejandro Rojas, a favor.

Vicente Cuéllar, a favor.

Antonio Padierna, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

Albarrán Rodríguez, en pro.

Rigoberto Nieto, a favor.

Verónica Moreno, a favor.

Javier Serna, en pro.

Soto Camacho, a favor.

Angeles Correa, a favor.

Sevilla Díaz, en pro.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano de emitir su voto?

Hipólito Bravo, en pro.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva:

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta el resultado de la votación es el siguiente, 47 votos a favor, 0 votos en contra, 5 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se ratifica el nombramiento del ciudadano Juan Nicasio Guerra Ochoa como titular de la Demarcación Territorial de Milpa Alta en el Distrito Federal, propuesto por la ciudadana Jefa de Gobierno del Distrito Federal.

Notifíquese a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal y a las autoridades correspondientes. Cítese al ciudadano electo a efecto de que rinda su protesta de ley ante el pleno de esta Asamblea.

El siguiente punto de del orden del día, es la discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Gobierno para ratificar el nombramiento del ciudadano Víctor Manuel Quintana Silveyra como delegado político del Distrito Federal en Gustavo A. Madero, de conformidad con lo establecido por el artículo Segundo Transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1999.

Para normar el desarrollo de esta sesión, proceda la secretaría a dar lectura al artículo Segundo Transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas

disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1999.

LA C. SECRETARIA.- Segundo.- La elección indirecta de los titulares de las delegaciones del Distrito Federal, previstas en el artículo Décimo Cuarto Transitorio por el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 4 de diciembre de 1997, se realizará a partir de la entrada en vigor del presente decreto, mediante la aprobación por el voto de la mayoría absoluta de los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aplicándose en lo demás lo dispuesto por dicho artículo transitorio.

Cumplida su instrucción, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, proceda la secretaria a dar lectura al acuerdo de la Comisión de Gobierno.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a dar lectura al acuerdo de la Comisión de Gobierno.

**ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO POR
EL CUAL SE APRUEBA EN FORMA PROVISIONAL,
LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL C.
VICTOR MANUEL QUINTANA SILVEYRA, COMO
DELEGADO DEL DISTRITO FEDERAL EN
GUSTAVO A. MADERO**

CONSIDERANDO

I. Que el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos Décimo Transitorio del Decreto de adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, en relación con el Décimo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley de Expropiación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1997; 67 fracción V y 105 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha sometido, con fecha 26 de agosto de 1999, a la consideración de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, la propuesta de nombramiento del C. Víctor Manuel Quintana Silveyra, para ocupar el cargo de Delegado del Distrito Federal en Gustavo A. Madero.

II. Que la Comisión de Gobierno, con fecha 26 de agosto del actual acordó turnar a la Comisión de Administración Pública Local de esta Asamblea, en razón de su competencia, la propuesta respectiva a fin de que elabore el Dictamen para los efectos de aprobar, en su caso, provisionalmente el nombramiento del C. Víctor Manuel Quintana Silveyra como Delegado del Distrito Federal en Gustavo A. Madero; llevándose a cabo el procedimiento contenido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de mayo de 1999, en lo que corresponda.

III. Que la propuesta recibida, se publicó el 27 de agosto del actual, en los diarios "El Universal", "El Financiero" y "El Economista", de conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gobierno, a fin de que los interesados, dentro de los dos días siguientes a la publicación, aportaran a la Comisión de Administración Pública Local, elementos de juicio.

IV. Que con fecha 3 de septiembre de 1999, el Presidente de la Comisión de Administración Pública Local, devolvió "para los efectos legales que correspondan", el expediente original que le fue turnado, por considerar que "esta fuera del plazo legal para emitir el dictamen correspondiente".

V. Que el 7 de septiembre de 1999, la Comisión de Gobierno acordó reponer el procedimiento de ratificación del C. Víctor Manuel Quintana Silveyra, como Delegado del Distrito Federal en Gustavo A. Madero y citar a los integrantes de la Comisión de Administración Pública Local para el 8 de septiembre de 1999, para que dictamen la propuesta.

VI. Que el 8 de septiembre de 1999 la Comisión de Administración Pública Local emitió el dictamen, mismo que hizo llegar a esta Comisión, donde se propone al pleno de la Comisión de Gobierno la aprobación provisional del C. Víctor Manuel Quintana Silveyra, para ocupar el cargo de Delegado del Distrito Federal en Gustavo A. Madero

VII. Que el artículo Tercero Transitorio del decreto de Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de fecha 24 de mayo de 1999, faculta a la Comisión de Gobierno para que, en los recesos de la Asamblea, apruebe las propuestas de nombramientos de Delegados del Distrito Federal y los someta ante el pleno en el siguiente Periodo de Sesiones Ordinarias, para su aprobación definitiva.

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Gobierno emiten el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se aprueba en forma provisional, el nombramiento del C. Víctor Manuel Quintana Silveyra,

para ocupar el cargo de Delegado del Distrito Federal en Gustavo A. Madero.

Segundo.- *Sométase el presente acuerdo al Pleno, durante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, para su aprobación definitiva.*

Tercero.- *Cítese para que rinda la protesta de Ley al C. Víctor Manuel Quintana Silveyra, ante esta Comisión de Gobierno, el día 14 de septiembre de 1999.*

Cuarto.- *Notifíquese el presente acuerdo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.*

Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión de Gobierno, a los 14 días del mes de septiembre de 1999.

Firman: Diputado Martí Batres Guadarrama; diputado Manuel Aguilera Gómez, abstención; diputado Miguel Hernández Labastida, contra el procedimiento; diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, abstención; diputado José Narro Céspedes; diputado René Arce Islas; diputada Elva Martha García Rocha; diputada Yolanda Tello Mondragón; diputado Alfredo Hernández Raigosa; diputado Francisco Ortiz Ayala.

Cumplida su instrucción señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión el acuerdo de la Comisión de Gobierno. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra? ¿Alguna ciudadana o ciudadano diputado desea razonar su voto?

Se le concede el uso de la palabra al diputado Armando Salinas Torre, hasta por 20 minutos, para razonar su voto. Asimismo, se le concede el uso de la palabra inmediatamente después del diputado Salinas, a la diputada Raquel Sevilla.

EL C. DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE.- Con su venia, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, señor diputado.

EL C. DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE.- Igualmente lamentamos que a esta hora se haya tenido durante muchas más al señor delegado por ratificarse, esperando y oyendo asuntos que competen exclusivamente a la Asamblea Legislativa.

Pero bueno, si estos dictámenes tienen meses firmados, si no se requiere de una mayoría calificada, si simple y sencillamente con la pura bancada del PRD esto pudiese haber sido eventualmente un trámite, alguien tendría que

darle una explicación al señor Víctor Manuel Quintana y al señor Juan Nicasio Guerra, del por qué hasta esta hora y el día de hoy estamos tratando este asunto.

En este caso concreto, quisiéramos distraer su atención para comentar el por qué del sentido del voto del Partido Acción Nacional.

El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece en su artículo 105: "A cargo de cada delegación habrá un Delegado. Para ser Delegado se requiere:

"Fracción III.- Ser originario del Distrito Federal o vecino de él, con residencia efectiva no menor de dos años al día del nombramiento".

En el artículo 5° del mismo ordenamiento se establecen distintas calidades jurídicas a quienes se encuentran en esta ciudad, dice y cito: "Son habitantes del Distrito Federal las personas que residan en su territorio. Son vecinos del Distrito Federal los habitantes que residan en él por más de seis meses".

"La calidad de vecino se pierde por dejar de residir en el Distrito Federal por más de seis meses, excepto con motivo del desempeño de cargos públicos, de representación popular o comisiones del servicio que les encomiende la Federación o el Distrito Federal, fuera de su territorio". Hasta aquí la cita.

El citado ordenamiento jurídico no hace referencia a quien tenga su domicilio, sino que establece que la vecindad se adquiere por quien resida en el Distrito Federal. La residencia no la define a partir del domicilio. Si así lo hubiera querido decir, entonces habría dicho que la vecindad se adquiere por quien establezca su domicilio en el Distrito Federal. Sin embargo, este ordenamiento jurídico prefirió el término residencia.

Hay quienes han pretendido hacer interpretación del término de residencia a partir del domicilio, de conformidad con el Código Civil, el cual establece que y cito: "El domicilio de la persona física es el lugar donde reside habitualmente; a falta de este lugar, del centro principal de sus negocios, en ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan y en su defecto el lugar donde se encuentre". Hasta aquí la cita.

No obstante ello, parece que tales personas se encuentran más calificadas, por ejemplo, de quien fuera Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Rafael Rojina Villegas, quien realiza una distinción entre domicilio y residencia.

Dice el citado jurista, cito: "El concepto de residencia es fundamental en el derecho, conviene diferenciarlo del de domicilio, porque éste en sí no constituye residencia y la

ley no la toma en cuenta para atribuirle los efectos jurídicos inherentes a la misma.

“Se entiende por domicilio la estancia temporal de una persona en un cierto lugar, sin el propósito de radicarse en él». Hasta aquí la cita del maestro Rojina.

El Código Civil establece lo que se considera como domicilio para efectos del cumplimiento de obligaciones de carácter puramente civil, como a su vez el Código Fiscal de la Federación establece su domicilio fiscal para el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, de tal forma que es posible tener tantos domicilios como los que se señalen para el cumplimiento de distintos tipos de obligaciones, tan es así que el simple domicilio para recibir correspondencia o notificaciones, con el ánimo del cumplimiento a una obligación.

La interpretación del Código Civil no puede estar por encima del Estatuto de Gobierno, toda vez que en la jerarquía jurídica de los ordenamientos para el Distrito Federal el Estatuto de Gobierno se encuentra por encima del Código Civil.

Reforzando los argumentos anteriores, a efecto de establecer la clara diferencia entre lo que es domicilio y la residencia, el Tribunal Federal Electoral, en el juicio de revisión constitucional electoral, que aparece en la revista de Justicia Electoral, suplemento 1999 especial, número 2, página 91, que en su tesis establece lo siguiente, y cito: “Vecindad y residencia elementos que deben acreditarse para tener por cumplidos los requisitos de elegibilidad. La vecindad y la residencia no se prueban sólo con la existencia de domicilio, ya que también se deben acreditar el tiempo y la efectividad de las mismas, toda vez que el concepto de vecindad implica elementos de fijeza y permanencia, que consisten en tener casa, familia e intereses en una comunidad social determinada; es decir, para estimar que se han acreditado jurídicamente los requisitos de vecindad y residencia, exigidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no basta con tener inmuebles en propiedad en un lugar específico sino habilitarlos de manera interrumpida y permanente”. Hasta aquí la cita.

Por lo que para demostrar la residencia se deben acreditar el tiempo y la efectividad de las mismas, toda vez que el concepto de vecindad implica elementos de fijeza y permanencia, que consisten en tener casa, familia e intereses en una comunidad social determinada.

El señor Víctor Manuel Quintana Silveira, nombrado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal como titular de la demarcación territorial en Gustavo A. Madero, y aprobado temporalmente por la Comisión de Gobierno, es originario del Estado de Chihuahua, por tanto debe cumplir con el requisito de la vecindad, con residencia efectiva no menor a

dos años el día del nombramiento, establecida por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, como se ha hecho mención en esta intervención.

El oficio JUDJCYJR120/99, signado por el Jefe de la Unidad Departamental de Juzgados Cívicos y Juntas de Reclutamiento de la Subdelegación Jurídica y de Gobierno de la Delegación Benito Juárez, el pasado 25 de agosto, con el cual se pretendió acreditar la residencia, únicamente se hizo constar únicamente el domicilio del señor Víctor Manuel Quintana Silveira.

Esto motivó que en una reunión de la Comisión de Administración Pública Local, por unanimidad de los que estuvimos ahí, decíamos que hablaba de cuál era su domicilio, pero no decía si era su residencia. En tal virtud, por acuerdo de todos los integrantes de esa comisión, se dijo se devolviera a la Jefa de Gobierno para que cumpliera a la brevedad con ese requisito formal que detecta el Estatuto.

Como consecuencia y respuesta de él, mediante oficio JUDJCYJR132/99, signado por el mismo funcionario público de la Delegación Benito Juárez, por un lado hace constar que el señor Víctor Manuel Quintana Silveira vivió de octubre de 1994 a septiembre de 1997 en la calle de Fragonar número 29, interior 208, colonia Insurgentes Mixcoac, cuando había dicho que nada más ese era su domicilio, lo corrigió, dijo que ahí había vivido en ese periodo y que esa era su residencia; y después dijo que posteriormente - dice el citado oficio - de octubre de 1997 a la fecha tiene su domicilio en la calle de Pitágoras.

En la primera parte del documento se señala que vivió en la Ciudad de México de octubre de 94 a septiembre del 97, y más adelante únicamente manifiesta que estableció un domicilio, pero en ningún momento hace referencia a la residencia efectiva ni al tiempo de la misma en el Distrito Federal.

Comprobar que se ha señalado un domicilio no quiere decir que se acredite la residencia, como es el caso en este momento del ciudadano Víctor Manuel Quintana Silveyra.

El Presidente de la Comisión de Administración Pública Local regresó a la Comisión de Gobierno el expediente relativo al nombramiento del delegado, toda vez que no se recibió la documentación necesaria para la correspondiente resolución del expediente, y en esto estuvimos de acuerdo todos los diputados.

En caso de retener este expediente se violará el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que establece en términos perentorios para que la Comisión de Administración Pública Local emitiera dictamen sobre la procedencia de ratificación del nombramiento propuesto por el Jefe de Gobierno, teniendo solamente dos días para llevar a cabo ese dictamen.

En todo caso lo que debió haber hecho la Comisión de Gobierno fue devolver el expediente del nombramiento al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, toda vez que no se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y que así lo había determinado ya el pleno de la Comisión de Administración Pública Local. Sin embargo ese dictamen, ese acuerdo que se había llegado en la Comisión de Administración Pública Local, no importó, la Comisión de Gobierno sin facultades, ni en la Ley Orgánica, ni en el Reglamento del Gobierno Interior de esta Asamblea detuvo arbitrariamente el citado expediente y posteriormente ordenó reponer el procedimiento, mediante el acuerdo de fecha 7 de septiembre de 1999, violando el procedimiento establecido en el mencionado artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional no sabe si Víctor Manuel Quintana Silveyra tiene residencia o no la tiene, lo que es cierto es que no lo acreditó el Jefe de Gobierno, lo que es cierto es que es un requisito formal que no acreditó, tan burdo para quienes tenemos que vigilar la legalidad de esta elección indirecta, como aquel que diga que es nacionalidad mexicana y no se exhiba su acta de nacimiento, ese requisito formal no lo pudo acreditar, y aquí quisiera yo hacer un último comentario.

Con esto queda claro el porqué el Partido Acción Nacional mantuvo una votación en contra en respeto a la legalidad y en fidelidad al derecho, tanto en la Comisión de Administración Pública Local, como en la Comisión de Gobierno, por lo que se refiere al procedimiento y a los requisitos formales, pero más que esto, conocemos al delegado por ratificarse en esta Asamblea, creemos que ha dado también testimonios de su convicción y su capacidad; ha tenido un tiempo a cargo y al frente de esta delegación, más allá de si su evaluación es buena o mala, nosotros quisiéramos que se hicieran las cosas respetando el derecho, que hubieran acreditado, así como acreditaron que era mexicano, que hubieran acreditado si tenía este requisito del Estatuto de Gobierno, es nuestra constitución local, es nuestra ley suprema en esta entidad y con ligereza se revisa un requisito ¿y si en este caso se avala, porqué no hacerlo en los demás?

Nosotros estamos convencidos de que si no es legal lo que se inicia, difícilmente podrá ser legal lo que se termina.

Acción Nacional sostendrá su voto en contra, única y exclusivamente por estas razones y reconociendo y deseando la mejor de las suertes, si ustedes deciden ratificar, al margen de esta violación legal, al próximo delegado ratificado en la Delegación Gustavo A. Madero.

LA C. PRESIDENTA.- Se le otorga el uso de la palabra a la diputada Raquel Sevilla, hasta por 20 minutos, para razonar su voto.

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Con su permiso, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Se le solicita al público asistente que se abstenga de hacer cualquier manifestación y pongamos atención a la oradora.

Adelante, señora diputada.

LA C. DIPUTADA RAQUEL MARIA DEL CARMEN SEVILLA DIAZ.- Gracias, señora Presidenta.

Yo no tengo ni el honor, ni el gusto de conocer al señor Víctor Manuel Quintana Silveyra, sin embargo más allá de la postura que mantiene en este caso el Partido Acción Nacional, en términos de legalidad, es importante destacar lo siguiente:

Históricamente esta delegación ha sufrido severos cambios permanentes de gobernantes. Es evidente que a lo mejor nuestros compañeros de Acción Nacional no han vivido en ese esquema, donde una delegación tan poblada y que requiere evidentemente de capacidades, se esté de manera constante cambiando, simplemente en 5 años hemos tenido 5 delegados diferentes.

Yo sí quiero hacer varios reconocimientos al trabajo de Víctor Manuel Quintana Silveyra, entre ellos, no ha sido ni fue tarea fácil tampoco el haber sacado el operativo Guadalupe como él lo hizo sin ningún problema. El hecho de no hacerse rehén de los grupos al interior del PRD también habla bien de él.

Pero yo le haría una sugerencia adicional, por supuesto que mi voto va a favor por muchas cosas: va a favor porque ha demostrado que tiene capacidad; el señor sabe que yo no lo conozco, nunca he hablado con él pero su trabajo se ha visto claro en la delegación, quizá no en otras pero en ésta sí. Así como usted hizo cambios en su gobierno a nivel central, yo le sugeriría que hiciera cambios a nivel subdelegaciones territoriales, para que no caiga en los supuestos que están perfectamente probados y que me daría mucha pena en este momento exhibir nombres, porque aquí están presentes las personas, de nepotismo, eso sería verdaderamente vergonzoso y me da mucha pena porque una de esas gentes fue compañera mía en el Consejo Ciudadano, eso no me limita a reconocer que es una mujer que tiene gran capacidad, pero que beneficia a su compañero y beneficia a la familia de su compañero con la gestión social. Quiero decirle, señor delegado, que en el caso del subdelegado de la zona 1 hoy a las 16:00 horas estaba yo recibiendo, por instrucciones no sé de quién, un aviso a través de un empleado que estaba cumplida mi gestión en un 90%. Eso a mí no me lo tiene que decir, en todo caso la gente que vive en Gustavo A. Madero se lo tendría que agradecer, no yo; yo legislo, no gobierno.

En el caso del subdelegado de la zona 3, si usted no lo sabe se lo hago ahorita manifiesto, hay un homicidio imprudencial que quedó impune de una persona que falleció por la falta de responsabilidad del señor Humberto Gutiérrez.

Yo sí le pediría en esta tribuna, que usted me otorgara una cita para poderle explicar perfectamente y con detalle todas estas situaciones que me parece que sí pueden poner en entredicho el trabajo que usted ha venido realizando, y así como ha mostrado voluntad política y de apertura para poder gobernar una delegación tan difícil, yo espero que también esta apertura se dé en aras de que cuando menos sea de los pocos perredistas con dignidad que puedan terminar lo que han autonombrado un buen gobierno.

Yo no sé, en este caso Acción Nacional habla de legalidad; legalidad es un término utilizable hoy por hoy en términos internacionales; pero les haría una pregunta a mis compañeros de Acción Nacional, con todo respeto: ¿Acaso no fue ilegal la actuación del diputado Paoli Bolio, no fue un atentado contra el país y contra la ciudad? Eso también es ilegal.

LA C. PRESIDENTA.- En tal virtud proceda la secretaría a recoger la votación nominal del acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Víctor Manuel Quintana Silveyra como titular de la demarcación territorial en Gustavo A. Madero.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal del acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Víctor Manuel Quintana Silveyra como Delegado Político del Distrito Federal en Gustavo A. Madero.

Se solicita a los ciudadanos diputados, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se solicita a la Oficialía Mayor hacer el anuncio a que se refiere el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Manuel Minjares, en contra.

Margarita Saldaña, en contra.

Hernández Labastida Miguel, en contra.

Pablo Jaime Jiménez, en contra.

Manuel Aguilera, en pro.

Levín Coppel, en pro.

Luna Parra, en pro.

De Garay, a favor.

Ortiz Haro, a favor.

Jesús Toledano, en pro.

Martínez Parra, a favor.

Cárdenas Pérez, en pro.

Eliab Mendoza, a favor.

Peláez, a favor.

Ricardo Molina, a favor.

Miguel Bortolini, a favor.

Alfredo Hernández, a favor.

Rafael López de la Cerda, a favor.

Javier Hidalgo, por su lucha, por aclarar la monstruosa corrupción en Conasupo, a favor.

Francisco Chiguil, en pro.

Angeles Correa, a favor.

Roberto Rico, en el mismo sentido que el diputado Javier Hidalgo.

Ernesto Chávez, en el mismo sentido que el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce.

René Arce, a favor.

Batres, a favor.

Antonio Padierna, a favor.

García Rocha, a favor.

Ortiz Ayala, a favor.

David Sánchez, a favor.

Márquez Franco, en pro.

Ignacio Ruiz, a favor.

Hipólito Bravo, en pro.

Juan González, a favor.

Esteban Daniel Martínez, a favor.

Pichardo Mendoza, a favor.

Alejandro Rojas, a favor.

Rodríguez Ruiz, en pro.

Narro Céspedes José, a favor.

Sevilla Díaz, a favor.

Vicente Cuéllar, a favor.

Virginia Jaramillo, en pro.

Guillermo Hernández, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Rigoberto Nieto, en el mismo sentido que el diputado Javier Hidalgo.

Verónica Moreno, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Serna Alvarado, a favor.

Armando Salinas Torre, en contra.

Rivera Domínguez, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Ricardo Martínez, en pro.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Sara Murúa, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente:

47 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se ratifica el nombramiento del ciudadano Víctor Manuel Quintana Silveyra como Titular de la Demarcación Territorial de Gustavo A. Madero en el Distrito Federal propuesto por la ciudadana Jefa de Gobierno del Distrito Federal.

Notifíquese a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal y a las autoridades correspondientes.

Cítese al ciudadano electo a efecto de que rinda su Protesta de Ley ante el pleno de esta Asamblea.

Para dar cumplimiento al artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Juan Nicasio Guerra Ochoa y Víctor Manuel Quintana Silveyra. Para acompañarlos al interior del salón de sesiones, se designa en comisión de cortesía a los siguientes diputados: Ricardo Martínez Atala, Armando Salinas Torre, Oscar Levín Coppel y José Narro Céspedes. Se solicita a la comisión, cumpla con su cometido.

(La comisión cumple su cometido)

LA C. PRESIDENTA.- Ciudadanos Juan Nicasio Guerra Ochoa y Víctor Manuel Quintana Silveyra: El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la sesión celebrada el día de hoy, ratificó en forma definitiva, sus nombramientos como delegados del Distrito Federal en Milpa Alta y Gustavo A. Madero respectivamente.

En tal virtud, solicitamos a ustedes rendir su protesta constitucional. Se ruega a todos los presentes ponerse de pie y al ciudadano Juan Nicasio Guerra Ochoa, pasar al frente de esta tribuna, para rendir su protesta constitucional.

EL C. JUAN NICASIO GUERRA OCHOA.- “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ello emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Delegado del Distrito Federal en Milpa Alta, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y del Distrito Federal y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande”.

LA C. PRESIDENTA.- Al ciudadano Víctor Manuel Quintana Silveyra, se le pide pasar al frente de esta tribuna, para rendir su protesta constitucional.

EL C. VÍCTOR MANUEL QUINTANA SILVEYRA.- “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno

del Distrito Federal y las leyes que de ello se emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Delegado del Distrito Federal en Gustavo A. Madero, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y del Distrito Federal y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande”.

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias señores delegados, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Víctor Manuel Quintana Silveyra. Se ruega a la comisión designada, acompañar a los ciudadanos a su salida del recinto, cuando deseen hacerlo.

El siguiente punto del orden del día, es la discusión y en su caso aprobación de los dictámenes que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para ratificar las propuestas de nombramientos de los ciudadanos licenciados Raúl Armida Reyes y Antonio Casas Cadena, como magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

De conformidad con lo establecido por los artículos 95 y 96 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Esta Presidencia informa que ha recibido un oficio de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, solicitando se le dispense el trámite a que se refiere el artículo 38, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Sírvase la secretaría dar lectura a la solicitud de referencia.

LA C. SECRETARIA.- Diputado René Baldomero Rodríguez Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Presente.

Por acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se ha determinado en sesión de trabajo del día 28 de diciembre del año en curso, solicitar a usted se otorgue dispensa al término a que se refiere el artículo 38, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la intención de estar en posibilidades de discutir y en su caso aprobar los dictámenes de designación hecha por la Jefa de Gobierno, a los ciudadanos Licenciados Antonio Casas Cadena y Raúl Armida Reyes, a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en la sesión del pleno del día 30 de diciembre del año en curso.

Atentamente, por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, diputado Antonio Padierna Luna, diputado Ricardo Molina Teodoro, diputada Angeles Correa de Lucio, diputada Yolanda Tello Mondragón, diputado Alfredo Hernández Raigosa.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, proceda la secretaría a preguntar al pleno de la Asamblea, en votación económica, si se dispensa al dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el trámite a que se refiere el artículo 38, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se dispensa al dictamen de la Comisión de Administración Pública Local, el trámite a que se refiere el artículo 38, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Los que estén porque se dispense el trámite, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Dispensada el trámite, señora Presidenta.

COMISION DE ADMINISTRACION Y PROCURACION DE JUSTICIA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de este órgano legislativo le fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la designación de la Jefa de Gobierno del Distrito Federal para ratificar la promoción del C. Magistrado RAUL ARMIDA REYES como Magistrado a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

De conformidad con el Artículo Decimotercero Transitorio del Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de agosto de 1996, y con fundamento en los artículos 46, fracción II; 47, 48, fracción I; 50; 95, 96 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión resulta competente para conocer del asunto que nos ocupa.

Por lo anterior, esta Comisión de Administración y Procuración de Justicia, somete al Pleno de esta Asamblea Legislativa el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 2 de diciembre de 1999, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en el Pleno la iniciativa de Reformas a la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, reformándose entre

otros preceptos de dicho ordenamiento el artículo 17, aumentándose a siete el número de Magistrados integrantes de la Sala Superior.

2.- La citada reforma fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de diciembre de 1999 y entró en vigor al día siguiente de su publicación en dicho órgano informativo de conformidad a lo establecido en el artículo primero transitorio del decreto respectivo. En consecuencia, al momento de que la Jefa de Gobierno del Distrito Federal envió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la designación de que se trata, para promover de Sala Ordinaria a Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal al Magistrado RAUL ARMIDA REYES, ya se encontraba vigente la reforma en cuestión.

3.- El Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal turnó a esta Comisión que dictamina, el asunto de que se trata, el día 16 de diciembre de 1999.

4.- En términos del inciso a) del artículo 96 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el día 17 de Diciembre de 1999, se publicó en los diarios "El Heraldo de México" y "Novedades", la propuesta de la ratificación de que se trata, a fin de que los interesados pudieran aportar a esta Comisión que dictamina elementos para decidir al respecto.

5.- En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso b) del artículo 96 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión citó al **C. Magistrado RAUL ARMIDA REYES** para comparecer ante la misma el día 21 de diciembre de 1999.

6.- El **C. Magistrado RAUL ARMIDA REYES**, compareció ante esta Comisión de Administración y Procuración de Justicia el día 21 de diciembre de 1999, exponiendo de manera general su trayectoria profesional en materia de administración y procuración de justicia, dando respuesta a los planteamientos formulados por los Diputados miembros de dicha Comisión.

7.- Los miembros de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se reunieron el día 28 de diciembre de 1999, para la discusión y aprobación del presente dictamen.

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Con base en una minuciosa revisión del expediente previamente turnado a los miembros de esta Comisión, la misma concluye que el **C. Magistrado RAUL ARMIDA REYES** cumple con los requisitos que para ser Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo del Distrito Federal establece el artículo 4 de la Ley de dicho Tribunal, acreditándose los mismos con los datos curriculares así como con documentación diversa.

De esta manera, se acredita la nacionalidad mexicana y la edad mínima establecida para el cargo, con la certificación del acta de nacimiento del propuesto; la antigüedad de la obtención de título profesional, con las copias certificadas del título profesional y de la cédula respectiva que lo autoriza para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho; la acreditación de la práctica profesional en materia administrativa y fiscal, del hecho mismo de desempeñarse actualmente como Magistrado adscrito a la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal con carácter de inamovible, entre otros cargos que ha desempeñado dentro del mismo Tribunal y, finalmente, consta la protesta suscrita por el **C. Magistrado RAUL ARMIDA REYES**, relativa a la ausencia de una condena por delito doloso que imponga más de un año de prisión. Esta Comisión que dictamina considera que fueron cumplidos todos los requisitos para la procedencia de la designación para promover de Sala Ordinaria a Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal con la ratificación respectiva por este órgano legislativo.

SEGUNDA: Es el caso que esta Comisión considera que el asunto que nos ocupa es acorde con el contenido de la Reforma a la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que este órgano legislativo aprobó el pasado 2 de diciembre del año en curso, toda vez que los efectos de los nombramientos de los Magistrados ratificados por esta Asamblea el 23 de marzo de 1999, se encuentran Sub Judice a la resolución del amparo 542/99 que se tramita ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, tal y como consta en la resolución de fecha siete de septiembre de 1999 emitida por el citado juzgador, en la que se otorgó la suspensión definitiva a los quejosos Horacio Castellanos Coutiño y Jaime Araiza Velázquez en cuanto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados que se traducen en la sustitución de los Magistrados designados por el Jefe de Gobierno en lugar de los peticionarios del amparo y por lo cual los amparistas continúan desempeñando sus funciones de Magistrados del citado Tribunal.

TERCERA: En la comparecencia del **C. Magistrado RAUL ARMIDA REYES**, le fueron planteadas por los miembros de la Comisión Dictaminadora, diversas cuestiones con relación a su experiencia profesional en materia de procuración y administración de justicia y a temas relacionados con la función de la misma, las cuales fueron respondidas a satisfacción de los miembros de dicha Comisión.

CUARTA: No fue presentado a la Comisión que dictamina elemento de juicio alguno con motivo de la publicación que

de la ratificación del C. Magistrado RAUL ARMIDA REYES se hiciera el día 17 de diciembre de 1999 en los diarios citados.

QUINTA: Los miembros de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se manifestaron en el sentido de que la documentación analizada, acredita la experiencia profesional que el cargo requiere para su eficaz desempeño, así como la capacidad necesaria en los asuntos que competen a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo que se pronuncian en el sentido de ratificar la designación para promover de Sala Ordinaria a Sala Superior al C. Magistrado RAUL ARMIDA REYES.

Por lo anterior, esta Comisión de Administración y Procuración de Justicia, somete a la consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el siguiente.

DICTAMEN

PRIMERO: Se ratifica la designación para promover de Sala Ordinaria a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal al C. Magistrado RAUL ARMIDA REYES.

SEGUNDO.- Notifíquese a la C. Jefa de Gobierno del Distrito Federal para los efectos legales a que haya lugar.

TERCERO.- Notifíquese al C. Magistrado RAUL ARMIDA REYES para su conocimiento.

Por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, firman: Diputado Antonio Padierna Luna; diputado Ricardo Molina Teodoro; diputada Yolanda Tello Mondragón; diputada María de los Angeles Correa de Lucio; diputado Alfredo Hernández Raigosa.

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión el dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra? ¿Alguna ciudadana o ciudadano diputado desea razonar su voto?

Adelante diputado Armando Salinas Torre. Señor diputado, tiene el uso de la palabra hasta por 20 minutos.

EL C. DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE.- Con su venia diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, señor diputado.

EL C. DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE.- Señores diputados:

Permitanme plantearles el escenario que padece el órgano jurisdiccional responsable de la resolución de los conflictos

entre ciudadanos y la administración pública del Distrito Federal.

Existen únicamente tres Magistrados de la Sala Superior con una situación laboral definida, en tanto que existen dos Magistrados que laboran gracias al mandamiento judicial federal del 7 de septiembre pasado, el Magistrado Castellanos Coutiño y el Magistrado Jaime Araiza, tal y como lo venían haciendo el pasado 23 de marzo, pueden seguirlo haciendo.

Por otro lado, existen dos Magistrados más, los licenciado Gloria Velia Valtierra y Carlos Franco Santibáñez, que fueron designados por esta Asamblea Legislativa, quienes ya tomaron posesión y les fueron entregados sus cargos, cuya situación jurídica laboral, al igual que la de los anteriores se encuentra *sub judice*, es decir pendiente de resolverse, hasta en tanto se emita el fallo en el fondo del juicio de amparo y aún después de emitirse, cualquiera que sea el sentido, cualquiera de las partes tendrá la oportunidad de interponer el recurso de revisión, es decir continuará la situación de incertidumbre.

Sin dejar de mencionar que durante un largo periodo ha existido la confrontación entre los integrantes de la Sala Superior y dos Magistrados se encontraban fungiendo como presidentes de la misma, es del dominio público las gravísimas situaciones de incertidumbre y confusión que existen en los trabajos del tribunal. Aquí déjenme decirles que es éste la institución que se ha dado el Distrito Federal para que sea el órgano que pueda definir los eventuales abusos o malos manejos de sus gobernantes y de sus funcionarios, de ese tamaño es la trascendencia.

Cuando fue aprobada la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso se manifestó la inconformidad de nuestra parte por el procedimiento que se seguía para su aprobación, así como los motivos que llevaron a la mayoría para aprobar dicha reforma. En su momento se manifestó que si la carga de trabajo era el argumento para ampliar el número de Magistrados de la Sala Superior, la misma ley prevenía el mecanismo de formar salas auxiliares con la finalidad de desahogar el rezago existente.

No obstante lo anterior, insisten en realizar las cosas sin el debido cuidado que requiere y demanda nuestra ciudadanía. Cuando se comete una ligera equivocación puede ser entendida ya sea por nuestra propia condición de seres humanos falibles o precisamente por la inexperiencia y mucha voluntad de la que tanto se ha presumido; sin embargo, cuando los errores se vuelven una constante en la actuación pública, es algo que no puede de ninguna manera dejar de denunciarse y de señalarse.

El artículo 3º de la Ley Orgánica establece en un primer enunciado, cito: "Los Magistrados serán designados a

propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, sujetos a la aprobación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal". Y en segundo enunciado señala, cito: "Podrán ser promovidos de las Salas Auxiliares a las Salas Ordinarias y de ésta a la Sala Superior".

De lo anterior se concluye que una cosa es la designación y otra cosa es la promoción. Se refuerza el anterior argumento cuando en el Segundo Artículo Transitorio se establece que, cito: "Lo dispuesto por el artículo 4º de este decreto, con relación al retiro forzoso por límite de edad será aplicable a los Magistrados que sean designados con posterioridad - y quiero repetir, que sean designados con posterioridad - a la entrada en vigor de este decreto".

El decreto entró en vigor el pasado 15 de diciembre, fecha en la que mediante escrito signado por la Jefa de Gobierno del Distrito Federal al licenciado Antonio Casas Cadena le comunica que ha decidido designarlo como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Asimismo, mediante escrito con el número de folio 3653, signado por el Secretario de Gobierno del Distrito Federal y dirigido al Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, para efectos de ratificación, la designación de los ciudadanos Raúl Armida Reyes y Antonio Casas Cadena como Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Los citados oficios son prueba plena, y aquí están, son parte del expediente enviado a la Asamblea Legislativa, de que se trata de una designación a favor de los Magistrados mencionados y toda vez que se realiza una vez entrado en vigor el decreto que reforma la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, es aplicable al licenciado Antonio Casas Cadena la reforma antes citada.

Aunado a lo anterior, consideramos un contrasentido que se designe como Magistrado de la Sala Superior a un Magistrado que tiene una edad de 73 años, cuando quien fundamentó, esto no estamos diciendo nosotros que estamos a favor o en contra, pero quien fundamentó en esta tribuna el dictamen de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo afirmó desde esta tribuna y cito: «Nosotros creemos que los 70 años pueden ser y es una edad considerable para el retiro de los magistrados y de esta manera promover y remover de una sala a otra y generar crear este servicio civil de carrera dentro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en los distintos ámbitos de la justicia en esta ciudad».

¿Cómo es posible que ahora se contradigan en los hechos los anteriores razonamientos? Es posible que no estén convencidos de los mismos, en esto estoy de acuerdo.

Consideramos que deben revisar con sumo cuidado que los documentos oficiales que hacen prueba plena, se trata de una designación.

Miren, la Jefa de Gobierno envía un comunicado a la Mesa Directiva de esta Asamblea y dice: "Por instrucciones de la Jefa de Gobierno, con fundamento en la fracción tal, tal y tal, para efectos de ratificación envió la designación de los ciudadanos, Raúl, Armida, Reyes y Antonio Casas Cadena como Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal".

Es cierto, estas personas son magistrados de una sala. Si lo que querían hacer era promoverlos, eso se llama promoverlo, no designarlo, pero si lo están designando ahorita y la entrada en vigor de la ley que ustedes aprobaron, compañeros de la mayoría, el pasado 15 de diciembre decía que no serían mayores de 70 años, bueno se tiene una incongruencia muy grande. Si la voluntad era promover y centrar los lineamientos y las bases de un servicio civil, pues eso no es lo que hizo el Gobierno del Distrito Federal, ni lo que van a hacer ustedes; ustedes van a aprobar la designación, déjenme decirles el otro oficio. El otro oficio es la notificación que le hace la Jefa de Gobierno, Rosario Robles Berlanga al licenciado Antonio Casas Cadena, que dice que con fundamento en lo dispuesto en los artículos determinados ha decidido designarlo como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Es decir, hay un problema importante en el tribunal que da mayor certeza y es la única defensa de los actos cotidianos, de la vida administrativa, de dónde pueden ser objeto de vejaciones los habitantes de esta ciudad, y si para ustedes esto no es un tema temprano, ni tardío por una sesión tan grande, los diputados de Acción Nacional con mucho respeto les decimos, es algo que se tiene que revisar con mucha puntualidad, había 5 integrantes de la Sala Superior que son Magistrados integrantes de esa Sala Superior, de un total de 14, se nombraron a dos en sustitución de 2, estos 2 magistrados, el Magistrado Castellanos Coutiño y el magistrado Jaime Araiza interpusieron Juicio de Amparo y les otorgaron la suspensión definitiva del acto para que pudieran seguir laborando como Magistrados, y a los otros dos que habíamos nombrado en sustitución, les dijeron que estaba sub judice, que por lo pronto no podían tomar posesión, no que el nombramiento no es válido, sino que no pueden tomar posesión.

¿Entonces qué hicieron ustedes compañeros de la mayoría?

Ampliaron la sala a 7, nada más que eso no es materia de un Juicio de Amparo, se supone que debe de resolver la justicia federal. Si estas 2 personas que nombraron después van a ocupar esas 2 plazas, pero no obstante ello, ahorita están queriendo nombrar otros 2, y donde el juicio de amparo determine, podemos llegar al absurdo de tener 9 magistrados

nombrados ratificados por la Asamblea y 7 plazas asignadas por la ley.

Insisto, más allá de que si la voluntad de estas nuevas propuestas eran solucionar ese, aunque ordinario cabría el calificativo de "mazacote jurídico", si ésa era la voluntad no se hizo, no se promovieron en términos de la ley, se designaron y si se designaron, como dijo aquí la Jefa de Gobierno, pues entonces está impedido por la propia ley porque tiene más de 73 años uno de ellos.

Compañeros de la mayoría, Acción Nacional no puede contribuir, ni avalar algo que no es previsible, sino que está previsto que tenga repercusiones, desgraciadamente lamentables y me atrevo a título personal decir, vengan a confundir aún todavía más la única institución en la que pueden confiar plenamente por los resultados que da, los habitantes del Distrito Federal.

En tal sentido, no podemos avalar, desgraciadamente, los nombramientos de juristas respetables pero que son una vez más víctimas de los procesos descuidados e irresponsables por parte de quienes proponen los nombramientos y de quienes están dispuestos a avalarlos. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- En tal virtud proceda la secretaría a recoger la votación nominal del dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia por el que se ratifica como Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal al ciudadano Raúl Armida Reyes.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Raúl Armida Reyes como Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Se solicita a los ciudadanos diputados, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se solicita a la Oficialía Mayor hacer el anuncio a que se refiere el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Armando Salinas Torre, en contra del procedimiento.

Pablo Jaime Jiménez, en contra.

Hernández Labastida Miguel, en contra.

Angeles Correa, a favor.

Manuel Aguilera, abstención.

Levin Coppel, abstención.

Luna Parra, abstención.

De Garay, abstención.

Rivera Domínguez, abstención.

Jesús Toledano, abstención.

Martínez Parra, a favor.

Ricardo Martínez, en pro.

Francisco Chiguil, en pro.

Ricardo Molina, a favor.

Ernesto Chávez, a favor.

Peláez, a favor.

Hidalgo, a favor.

Daniel Martínez, a favor.

Cárdenas Pérez, en pro.

René Arce, a favor.

Batres, a favor.

Roberto Rico, a favor.

García Rocha, a favor.

Antonio Padierna, a favor.

Eliab Mendoza, a favor.

Ortiz Ayala, a favor.

David Sánchez, a favor.

Márquez Franco, en pro.

Virginia Jaramillo, en pro.

Ignacio Ruiz, a favor.

Miguel Bortolini, a favor.

Juan González, a favor.

Sara Murúa, en pro.

Narro Céspedes José, a favor.

Alfredo Hernández, a favor.

Javier Serna, a favor.

Vicente Cuéllar, a favor.

Guillermo Hernández, a favor.

Albarrán Rodríguez, a favor.

Rigoberto Nieto, a favor.

Soto Camacho, a favor.

Rafael López de la Cerda, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Ortiz Haro, abstención.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Margarita Saldaña, en contra.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva:

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Rodríguez Ruiz, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 35 votos a favor, 4 votos en contra, 7 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se ratifica la designación para promover de Sala Ordinaria a Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal al ciudadano Magistrado Raúl Armida Reyes.

Notifíquese a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal y a las autoridades correspondientes.

Cítese al ciudadano electo, a efecto de que rinda su protesta de ley ante el pleno de esta Asamblea.

En consecuencia, proceda la secretaría a dar lectura al segundo dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia relativo al nombramiento del ciudadano Antonio Casas Cadena como Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

LA C. SECRETARIA.-

COMISION DE ADMINISTRACION Y PROCURACION DE JUSTICIA

Honorables Asamblea:

A la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de este órgano legislativo le fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la designación de la Jefa de Gobierno del Distrito Federal para ratificar la promoción del C. Magistrado ANTONIO CASAS CADENA como Magistrado a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

De conformidad con el Artículo Decimotercero Transitorio del Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de agosto de 1996, y con fundamento en los artículos 46, fracción II; 47, 48, fracción I; 50; 95, 96 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión resulta competente para conocer del asunto que nos ocupa.

Por lo anterior, esta Comisión de Administración y Procuración de Justicia, somete al Pleno de esta Asamblea Legislativa el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 2 de diciembre de 1999, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en el Pleno la iniciativa de Reformas a la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, reformándose entre otros preceptos de dicho ordenamiento el artículo 17, aumentándose a siete el número de Magistrados integrantes de la Sala Superior.

2.- La citada reforma fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de diciembre de 1999 y entró en vigor al día siguiente de su publicación en dicho órgano informativo de conformidad a lo establecido en el artículo primero transitorio del decreto respectivo. En

consecuencia, al momento de que la Jefa de Gobierno del Distrito Federal envió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la designación de que se trata, para promover de Sala Ordinaria a Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal al Magistrado ANTONIO CASAS CADENA, ya se encontraba vigente la reforma en cuestión.

3.- El Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal turnó a esta Comisión que dictamina, el asunto de que se trata, el día 16 de diciembre de 1999.

4.- En términos del inciso a) del artículo 96 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el día 17 de Diciembre de 1999, se publicó en los diarios "El Heraldo de México" y "Novedades", la propuesta de la ratificación de que se trata, a fin de que los interesados pudieran aportar a esta Comisión que dictamina elementos para decidir al respecto.

5.- En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso b) del artículo 96 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión citó al C. Magistrado ANTONIO CASAS CADENA para comparecer ante la misma el día 21 de diciembre de 1999.

6.- El C. Magistrado ANTONIO CASAS CADENA, compareció ante esta Comisión de Administración y Procuración de Justicia el día 21 de diciembre de 1999, exponiendo de manera general su trayectoria profesional en materia de administración y procuración de justicia, dando respuesta a los planteamientos formulados por los Diputados miembros de dicha Comisión.

7.- Los miembros de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se reunieron el día 28 de diciembre de 1999, para la discusión y aprobación del presente dictamen.

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Con base en una minuciosa revisión del expediente previamente turnado a los miembros de esta Comisión, la misma concluye que el C. Magistrado ANTONIO CASAS CADENA cumple con los requisitos que para ser Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establece el artículo 4 de la Ley de dicho Tribunal, acreditándose los mismos con los datos curriculares así como con documentación diversa.

De esta manera, se acredita la nacionalidad mexicana y la edad mínima establecida para el cargo, con la certificación del acta de nacimiento del propuesto; la antigüedad de la obtención de título profesional, con las

copias certificadas del título profesional y de la cédula respectiva que lo autoriza para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho; la acreditación de la práctica profesional en materia administrativa y fiscal, del hecho mismo de desempeñarse actualmente como Magistrado adscrito a la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal con carácter de inamovible, entre otros cargos que ha desempeñado dentro del mismo Tribunal y, finalmente, consta la protesta suscrita por el C. Magistrado ANTONIO CASAS CADENA, relativa a la ausencia de una condena por delito doloso que imponga más de un año de prisión. Esta Comisión que dictamina considera que fueron cumplidos todos los requisitos para la procedencia de la designación para promover de Sala Ordinaria a Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal con la ratificación respectiva por este órgano legislativo.

SEGUNDA: Es el caso que esta Comisión considera que el asunto que nos ocupa es acorde con el contenido de la Reforma a la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que este órgano legislativo aprobó el pasado 2 de diciembre del año en curso, toda vez que los efectos de los nombramientos de los Magistrados ratificados por esta Asamblea el 23 de marzo de 1999, se encuentran Sub Judice a la resolución del amparo 542/99 que se tramita ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, tal y como consta en la resolución de fecha siete de septiembre de 1999 emitida por el citado juzgador, en la que se otorgó la suspensión definitiva a los quejosos Horacio Castellanos Coutiño y Jaime Araiza Velázquez en cuanto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados que se traducen en la sustitución de los Magistrados designados por el Jefe de Gobierno en lugar de los peticionarios del amparo y por lo cual los amparistas continúan desempeñando sus funciones de Magistrados del citado Tribunal.

TERCERA: En la comparecencia del C. Magistrado ANTONIO CASAS CADENA, le fueron planteadas por los miembros de la Comisión Dictaminadora, diversas cuestiones con relación a su experiencia profesional en materia de procuración y administración de justicia y a temas relacionados con la función de la misma, las cuales fueron respondidas a satisfacción de los miembros de dicha Comisión.

CUARTA: No fue presentado a la Comisión que dictamina elemento de juicio alguno con motivo de la publicación que de la ratificación del C. Magistrado ANTONIO CASAS CADENA se hiciera el día 17 de diciembre de 1999 en los diarios citados.

QUINTA: Los miembros de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se manifestaron en el sentido de

que la documentación analizada, acredita la experiencia profesional que el cargo requiere para su eficaz desempeño, así como la capacidad necesaria en los asuntos que competen a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo que se pronuncian en el sentido de ratificar la designación para promover de Sala Ordinaria a Sala Superior al C. Magistrado ANTONIO CASAS CADENA.

Por lo anterior, esta Comisión de Administración y Procuración de Justicia, somete a la consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el siguiente.

DICTAMEN

PRIMERO: *Se ratifica la designación para promover de Sala Ordinaria a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal al C. Magistrado ANTONIO CASAS CADENA.*

SEGUNDO.- *Notifíquese a la C. Jefa de Gobierno del Distrito Federal para los efectos legales a que haya lugar.*

TERCERO.- *Notifíquese al C. Magistrado ANTONIO CASAS CADENA para su conocimiento.*

Por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, diputado Antonio Padierna Luna, Vicepresidente en funciones de Presidente; diputado Ricardo Molina Teodoro, integrante; diputada Yolanda Tello Mondragón, integrante; diputada María de los Angeles Correa de Lucio, integrante; diputado Alfredo Hernández Raigosa, integrante.

Cumplida su instrucción, señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión en dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Se abre el registro de oradores.

¿Oradores en contra?

¿Alguna ciudadana o ciudadano diputado desea razonar su voto?

En tal virtud, proceda la secretaría a recoger la votación nominal del dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia por el que se ratifica el nombramiento como Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal al ciudadano Antonio Casas Cadena.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Antonio

Casas Cadena como Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Se solicita a los ciudadanos diputados de conformidad con el artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior, que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro" o "en contra".

Se solicita a la Oficialía Mayor hacer el anuncio a que se refiere el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.

La de la voz recogerá la votación por la afirmativa, la negativa y abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Armando Salinas Torre: En contra.

Pablo Jaime Jiménez: En contra.

Jesús Galván: En contra.

Hernández Labastida Miguel: En contra.

Angeles Correa: A favor.

Margarita Saldaña: En contra.

Manuel Aguilera: Abstención.

Ortiz Haro: Abstención.

Levín Coppel: Abstención.

Luna Parra: Abstención.

De Garay: Abstención.

Rivera Domínguez: Abstención.

Jesús Toledano: Abstención.

Martínez Parra: En pro.

Ricardo Martínez: En pro.

Francisco Chiguil: En pro.

Ricardo Molina: A favor.

Ernesto Chávez: A favor.

Peláez: A favor.

Javier Hidalgo: A favor.

Martínez Enríquez: A favor.

René Arce: A favor.

García Rocha: A favor.

Roberto Rico: A favor.

Batres: A favor.

Antonio Padierna: A favor.

Eliab Mendoza: A favor.

Ortiz Ayala: A favor.

Cárdenas Pérez: En pro.

David Sánchez: A favor.

Márquez Franco: En pro.

Virginia Jaramillo: En pro.

Ignacio Ruiz: A favor.

Miguel Bortolini: A favor.

Juan González: A favor.

Sara Murúa: En pro.

José Narro Céspedes: A favor.

Alfredo Hernández: A favor.

Vicente Cuéllar: A favor.

Guillermo Hernández: A favor.

Albarrán Rodríguez: A favor.

Rigoberto Nieto: A favor.

Serna Alvarado: A favor.

Soto Camacho: A favor.

Rafael López de la Cerda: A favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Tello Mondragón Yolanda, a favor.

Rodríguez Ruiz René, a favor.

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 35 votos a favor, 5 votos en contra, 7 abstenciones.

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se ratifica la designación para promover de Sala Ordinaria a Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, al ciudadano Magistrado Antonio Casas Cadenas.

Notifíquese a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal y a las autoridades correspondientes. Cítese al ciudadano electo a efecto que rinda su protesta de ley ante el pleno de esta Asamblea.

Para dar cumplimiento a los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 99 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Raúl Armida Reyes y Antonio Casas Cadena. Para acompañarlos al interior del salón de sesiones, se designa en comisión a los siguientes diputados: Antonio Padierna, diputado Armando Salinas Torre, diputado Oscar Levín Coppel, diputado José Narro Céspedes. Se solicita a la comisión cumpla con su cometido.

(La comisión cumple su cometido)

EL C. PRESIDENTE.- Ciudadanos Raúl Armida Reyes y Antonio Casas Cadena. El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la sesión celebrada el día de hoy, ratificó en forma definitiva sus nombramientos como magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

En tal virtud, solicitamos a ustedes rendir su protesta en los términos del artículo 99 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

Se ruega a todos los presentes ponerse de pie, y al ciudadano Raúl Armida Reyes, pasar al frente de esta tribuna para rendir su protesta constitucional.

EL C. RAUL ARMIDA REYES: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal, y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande.

EL C. PRESIDENTE.- Ciudadano Antonio Casas Cadena, se le ruega pasar al frente de esta tribuna para rendir su protesta constitucional.

EL C. ANTONIO CASAS CADENA: Señor Presidente; honorable Soberanía: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal, y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias señores Magistrados Raúl Armida Reyes y Antonio Casas Cadena.

Se ruega a la comisión designada acompañar a los ciudadanos a su salida del recinto cuando así deseen hacerlo.

(La comisión cumple su cometido)

EL C. PRESIDENTE.- Compañeras y compañeros diputados:

Es para mí motivo de orgullo y constituye un gran honor dirigir el presente mensaje en este último día de sesiones y a unas cuantas horas de recibir el año 2000, en que de nosotros dependerá que el nuevo milenio en puerta, inicie y traiga consigo los vientos de cambio y transformación que los habitantes de esta ciudad exigen y merecen.

Es importante valorar que la responsabilidad que hoy ocupamos nos fue conferida por estos mismos habitantes que demandan la respuesta al apoyo que nos brindaron con su voto y confianza, a efecto de que desde este recinto olvidemos tendencias partidistas e intereses particulares en aras de brindarles iniciativas de verdadera utilidad y beneficio colectivo.

Nosotros inventamos una frase que tiene mucho valor y sentido y profundidad: "Para que tu voz sea ley". ¿Cuántas voces no han sido escuchadas? ¿Cuáles serán las voces que se escuchen en el milenio que está a punto de comenzar?

Compañeras y compañeros:

Tenemos ante nosotros la gran oportunidad de trascender ante los juzgadores más severos que no son otros, sino por los que gracias a ellos estamos aquí; que jamás se nos olviden.

Hoy se han aprobado acuerdos importantes y ha podido estructurarse e integrarse una comisión especial con el espíritu de pluralidad, pero sobre todo que tiende a rescatar el valor del cuerpo legislativo.

Hoy, por primera vez se ha integrado también la Diputación Permanente que asumirá funciones en el receso de nuestros plenos.

Hoy, también se ha puesto a prueba la integridad, la buena intención y los propósitos positivos de los legisladores de todas las fracciones y debemos felicitarlos por ello.

Dentro de unas horas iniciaremos un nuevo milenio, que traiga felicidad para todas y todos ustedes, que traiga felicidad sobre todo a quienes nos debemos: al pueblo de la Ciudad de México. ¡Muchas felicidades a todos!

Y no puedo despedir el año y esta sesión sin decirles también nuestro agradecimiento al cuerpo auxiliar de apoyo legislativo.

A las 06:20 horas

Hoy, 31 de diciembre de 1999, se declaran solemnemente clausurados los trabajos del primer periodo de sesiones ordinarias correspondientes al tercer año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Se levanta la sesión.

Directorio

**Diario de los Debates
Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
I Legislatura.**

**Alejandro Hernández Sánchez
Oficial Mayor
Venustiano Carranza No. 49.**

**Dirección General de Proceso Parlamentario.
Donceles y Allende 2o. Piso.**